

*Colección Tiempo Presente*

LA SOCIEDAD NEOLIBERAL

EN LOS TIEMPOS DEL BICENTENARIO

CHILE, 2010-2018 TOMO II



JUAN CARLOS GÓMEZ LEYTON



**CIPPSAL**

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN  
PROCESOS POLÍTICOS Y SOCIALES  
DE AMÉRICA LATINA





**LA SOCIEDAD NEOLIBERAL  
EN LOS TIEMPOS DEL  
BICENTENARIO:  
CHILE, 2010-2018  
TOMO II**

**JUAN CARLOS GÓMEZ LEYTON**



**CIPPSAL**  
CENTRO DE INVESTIGACIÓN  
EN PROCESOS POLÍTICOS Y  
SOCIALES DE AMÉRICA LATINA



**Juan Carlos Gómez Leyton**

**LA SOCIEDAD NEOLIBERAL  
EN LOS TIEMPOS DEL  
BICENTENARIO:  
CHILE, 2010-2018  
TOMO II**

**COLECCIÓN TIEMPO PRESENTE**

**LA SOCIEDAD NEOLIBERAL EN LOS TIEMPOS  
DEL BICENTENARIO: CHILE, 2010-2018 TOMO II**

**Juan Carlos Gómez Leyton**

Registro Propiedad Intelectual N° 2024-A-9335  
ISBN: 978-956-394-105-0

Producción General: Equipo Editorial  
Correctora de Edición: Zulema Escalante Lara

©Juan Carlos Gómez Leyton  
©CIPPSAL  
©Ediciones Escaparate

Email: [cippsal24@gmail.com](mailto:cippsal24@gmail.com)  
[edicionesescaparate1@gmail.com](mailto:edicionesescaparate1@gmail.com)  
[zulemaescalante@gmail.com](mailto:zulemaescalante@gmail.com)

Septiembre 2024  
IMPRESO EN CHILE/ Printed in Chile

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada y transmitida por cualquier medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin autorización previa del editor.

# INDICE

<b>PRESENTACIÓN</b>	13
---------------------	----

## **PRIMERA PARTE**

### **REFLEXIONES HISTÓRICAS Y POLÍTICAS EN TORNO AL BICENTENARIO NACIONAL**

El Orden Político posindependencia: la postergación de la democracia	31
La Revolución en la Historia. A 200 años de la Independencia Latinoamericana y a 50 años de la Revolución Cubana. Una reflexión histórica Política	53
Chile: una República con problemas pendientes. Re-pensar la República desde una perspectiva democrática revolucionaria	69

## **SEGUNDA PARTE**

### **LA SOCIEDAD NEOLIBERAL: UNA SOCIEDAD CORRUPTA**

Elementos teóricos para el análisis de la corrupción	89
Chile, una sociedad neoliberal corrupta	105

## **TERCERA PARTE**

### **LA DEMOCRACIA NEOLIBERAL: UNA DEMOCRACIA "SIN ELECTORES"**

El "Partido de las y los No Electores" en la Democracia Neoliberal, Chile 1990-2018	131
El "no votar" es otra forma política de participar	163
En Chile la Representación Política a nivel local ha desaparecido y la Democracia Electoral está en proceso de descomposición	167



## **CUARTA PARTE**

### **AGRIETANDO A LA DOMINACIÓN NEOLIBERAL**

Las "Grietas" de la Sociedad Neoliberal en los tiempos del bicentenario 185

#### **Las Grietas en el mercado de la Educación**

La Rebelión Social y Política Juvenil, Estudiantil y Ciudadana 197

Análisis político del movimiento estudiantil desde una perspectiva marxista 227

La educación universitaria en las sociedades neoliberales: ¿bien público o bien de consumo? 235

¿Los combates por la Historia o por las "horas de Historia"? 253

El "Olvido" Educativo:  
¿Muerte de la Historia o Revolución Social? 265

#### **Las Grietas al sistema previsional**

Poder del Capital, propiedad privada y cambio constitucional en la sociedad neoliberal 275

Trabajo v/s Capital: el conflicto social por el sistema de pensiones en la sociedad neoliberal 279

No más Administradoras de Fondos de Pensiones ni privadas ni estatales 293

## **QUINTA PARTE**

### **VIOLENCIA, MIEDO Y PROTESTA POLÍTICA**

#### **I.- VIOLENCIA Y MIEDO POLÍTICO**

Un fantasma recorre la sociedad neoliberal: el miedo político 299

Violencia y miedo político en la sociedad neoliberal	305
<b>II.- LA PROTESTA POLÍTICA Y SOCIAL</b>	
La cuestión mapuche: el “salvavidas” político de la oposición piñerista	317
El Estado y el neoextractivismo marítimo neoliberal destruyen la naturaleza y la vida humana en Chiloé	321
El movimiento social y político popular en una encrucijada	333
El “paro nacional”: una expresión del poder subversivo ciudadano	341
Sin destituir al “mal gobierno”, no habrá cambio político	345
¿Cómo ser políticamente consecuente en la sociedad neoliberal y no venderse en el intento?	349
El derecho a la vida, un derecho subordinado al derecho de propiedad privada	355
Los encapuchados, actores anticapitalistas de la posmodernidad neoliberal	359
Chile: la rebelión social en su laberinto Entrevista a Juan Carlos Gómez Leyton	363
<b>SEXTA PARTE</b>	
<b>MEMORIA HISTÓRICA EN LA SOCIEDAD NEOLIBERAL</b>	
La Democratización del derecho de propiedad, en Chile 1967-1973	377
Memoria Historia y Conflicto Político: El “Once” en la consciencia histórica nacional	383
Revolucionando a la democracia: el gobierno de la Unidad Popular ( 1970-1973)	391

Carlos Godoy Echegoyen: la lucha revolucionaria anticapitalista una sola e indivisible	411
El Poder Judicial y los Derechos Humanos en la "democracia protegida" 1990-2018	419
Andrés Aylwin Azócar (1925-2018) Su lucha por los Derechos Humanos y la Justicia	423
Patricio Aylwin Azócar (1918-2016) Un demócrata en la medida de lo posible	431
Carlos Altamirano Orrego (1922-2019) Un controvertido socialista del siglo XX chileno	435
De equivocaciones y responsabilidades políticas en torno al Golpe de Estado de 1973	439

## **SÉPTIMA PARTE LA ACADEMIA EN LOS TIEMPOS NEOLIBERALES**

CONICYT: el capitalismo académico y corrupción	445
Una reflexión política sobre las formas de contratación en las universidades del capitalismo académico neoliberal	451
Tomás Moulian E.: El último "rebelde con causa" de los años sesenta. Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades 2015	457

## **A MODO DE CONCLUSIÓN**

Estado, hegemonía y crisis política en la sociedad neoliberal en tiempos del Bicentenario, 2010-2018	477
--	-----

A la Memoria de  
**ADELA CORIA** (1958-2022)  
*"Formadora de formadores"*

A  
**Santiago Gómez Figueroa**  
*Mi nieto, un nuevo chileno,  
nacido en los tiempos neoliberales*



## PRESENTACIÓN

En mayo de 2023 la Editorial Escaparate y CIPPSAL hicieron un gran esfuerzo de realizar la segunda edición del libro de nuestra autoría; *Política, Democracia y Ciudadanía en una Sociedad Neoliberal, Chile 1990-2010*, editado por UARCIS y CLACSO en el año 2010; quebrando con ello la tradicional tendencia de las empresas editoriales nacionales, grandes, medianas o pequeñas, de no realizar segundas ediciones de libros de las ciencias sociales y humanidades. Independientemente, de que esos libros hayan tenido algún impacto en el medio académico o mercantil o del tiempo transcurrido desde su primera edición, incluso teniendo en cuenta lo difícil de ser encontrados en el mercado del “libro usado” a un precio razonable, etc. Las casas editoriales no están dispuestas a realizar segundas ediciones, ampliadas o actualizadas o corregidas, la aversión es total. Por lo general, optan por reimpressiones, con tirajes bastantes limitados. Esta política editorial impacta directamente sobre el precio de los libros en el mercado de los “libros viejos y usados”, los cuales son exorbitantes contribuyendo de manera sustantiva a las arcas de los mercaderes del libro (quienes tienden a comprar barato y vender caro) sin generar ningún beneficio para las y los autores. Por esa razón, la apuesta de la Editorial Escaparate y CIPPSAL fue arriesgada y, al cabo de un año, podemos decir que ha sido exitosa. Ese éxito, por cierto, no lo establecemos por haber aparecido en algún ranking de libros más vendidos, sino, esencialmente, por el alto interés que concitó en diversos públicos tanto nacionales como regionales (latinoamericanos) y de otras latitudes para leerlo y consultarlo. Al igual que la primera edición, de hace 14 años, el libro no pasa desapercibido, generando polémica o alguna opinión, ya sea, positiva o negativa, pero, lo cierto, es que no deja indiferente a nadie. Y, tal como dijo un lector, “hace pensar” y “cuestionar lo existente desde otra mirada crítica”. Ese es nuestro mayor logro.

En mayo de 2023 anunciábamos que la reedición constituía el Tomo I, de una trilogía destinada al análisis y descripción de la sociedad neoliberal chilena desde 1990-2023, y señalábamos que pronto vendría el Tomo II dedicado al periodo 2010-2018. El lector tiene, justamente, en sus manos, el Tomo II. Y, espero que más pronto que tarde, salga a circulación el Tomo III, dedicado a describir, estudiar y analizar, tal vez, uno de los periodos más álgidos, contradictorios y frustrantes de la historia política reciente nacional, el referido a la coyuntura crítica de 2019-2023. Dicha coyuntura que se abre con el denominado “estallido social”, para nosotros revuelta social, y que se cierra con el plebiscito de salida de diciembre de 2023. Éste clausura la historia o la retrotrae en un giro de 360° al mismo punto de partida, o sea, a los meses previos a octubre de 2019. De esa forma, la sociedad neoliberal chilena se mantiene con diversas grietas, manteniéndose en su tiempo histórico predilecto, el presente eterno.

El tomo II, de la trilogía, *La Sociedad Neoliberal en los Tiempos del Bicentenario, Chile 2010-2018*, mantiene la estructura y la fisonomía del Tomo I como también los objetivos centrales de nuestro programa de investigación y análisis de la formación social chilena en su fase neoliberal. Está organizado en seis apartados y una conclusión, destinados a dar cuenta de aspectos específicos de la sociedad neoliberal en el periodo que va entre 2010 y 2018. Ambas fechas de apertura y cierre se explican más adelante. La perspectiva analítica expuesta en los distintos apartados es, fundamentalmente, la politológica entrelazada con la histórica y la sociología en un análisis sincrónico y diacrónico del proceso político de la historia reciente de Chile de los últimos 50 años.

Aunque el periodo cronológico analizado se abre con el 2010, año del Bicentenario de la Independencia nacional, nuestro análisis e interpretaciones del proceso político y social se mueven a lo largo del pasado reciente nacional, o sea, hacia los años de la Unidad Popular (1970-1973), de la dictadura cívico-militar (1973-1990) y de la fase concertacionista de la democracia protegida (1990-2010); tres procesos que dan fisonomía al tiempo presente de la sociedad neoliberal.

Sin embargo, la fisonomía histórica de la sociedad chilena tiene una impronta que emerge y se constituye no sólo en su historia reciente sino también en el curso del largo plazo y hunde sus raíces tanto en los tres siglos coloniales como en las primeras décadas del siglo XIX. Son justamente, en las primeras décadas del siglo XIX, donde se moldea y se consolida el poder social, económico y, sobre todo, político de la clase dominante "nacional". La cual en 1810, hace 200 años, se apodera del poder político colonial con el objeto de construir una Nación, un Estado y un régimen político acorde a sus intereses sociales específicos, imponiendo su forma, estilo y concepción histórica al resto de los habitantes del territorio, sin respetar nada y a nadie.

En razón de lo anterior, la Primera Parte, está dedicada a analizar las raíces históricas y políticas del Estado, la Nación y el régimen político nacional establecido, luego de lograda la ruptura relativa con el orden colonial en 1810. El primer ensayo expone la forma cómo los sectores políticos que dirigieron el establecimiento del Estado-nación como del régimen político republicano postergaron la instalación de la democracia a través de la expropiación del principio, fundamental y central de la modernidad política, la soberanía popular, excluyendo de toda participación política a la mayoría de la ciudadanía nacional. El nuevo orden político fue excluyente, elitista y autoritario, tres rasgos que se van a mantener de distintas maneras a lo largo de los 200 años de vida, supuestamente, independiente del Estado nacional.

La postergación y expropiación de la soberanía la explicamos, principalmente, porque el proceso de emancipación colonial no fue una revolución social sino, básicamente, una limitada revolución política. Esta revolución parcial dejó intacta o con marginales cambios la estructura del poder social y económico colonial, reforzando o remozando la estructura del poder de las élites de poder, especialmente, de las oligarquías terratenientes, mercantiles y financieras en las diversas sociedades latinoamericanas.

El carácter de la revolución y la forma como ese proceso político se ha presentado en la historia de la sociedad



latinoamericana, lo analizamos en el segundo ensayo de esta primera parte. Destacando en él que la única revolución social acontecida en América Latina y el Caribe ha sido la Revolución cubana de 1959. En todos los demás países de la región la revolución ha tenido un carácter parcial, específicamente, político, tales como la Revolución mexicana de 1910; la Revolución de 1952 en Bolivia, la Revolución nicaragüense de 1979, para nombrar las “triumfantes”.

Cerramos, esta Primera Parte, con un ensayo escrito con motivo del Bicentenario nacional. En el hacemos una suerte de balance histórico, exponiendo los cuatro macro-problemas que arrastra la República y la sociedad nacional desde su constitución como Estado-Nación en el siglo XIX, los cuales, hasta ahora, 200 años más tarde, no han sido resueltos. Estos problemas de carácter social, económico, cultural y político permanecen y, al parecer, así continuarán por largo tiempo luego del fracasado primer proceso constitucional de 2022. Proceso que analizamos en el tomo III, pero estos macro-problemas los habíamos identificado y discutido tempranamente en el año 2004. Han pasado 24 años y ellos siguen siendo una marca indeleble en historia de la República

En la Segunda Parte, identificamos a la sociedad neoliberal como una sociedad corrupta. Este es un rasgo que la sociedad chilena comienza a desarrollar y adquirir desde los tiempos de la dictadura cívico-militar, siendo el propio dictador General Augusto Pinochet (1973-1990) la mayor expresión de un gobierno cleptocrático.

La sociedad chilena hasta la instalación del patrón de acumulación neoliberal no era una sociedad corrupta, lo cual no significa que la corrupción en distintas dimensiones de la sociedad no estuviera presente ni fuera practicada por las élites del poder o en el poder, pero no era lo habitual. Sin embargo, desde los años ochenta del siglo pasado, la corrupción pasó a ser una praxis constante y frecuente de parte de las élites del poder y en el poder vinculadas a la dictadura cívico-militar. Praxis que no se vio interrumpida con el cambio de régimen político en 1990. Durante el régimen democrático protegido y bajo los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia (CPD)

fueron develados y denunciados un conjunto de “escándalos de corrupción” que comprometían a las autoridades tanto del gobierno central, regional como comunal ya sean oficialistas (concertacionistas) u opositoras (derecha).

En los tiempos del Bicentenario los escándalos de corrupción se multiplican comprometiendo a toda la sociedad. La corrupción se constituye en el principal mecanismo de financiamiento de la política de todos los partidos del orden. Los empresarios, que eran considerados los principales artífices del “exitoso” modelo neoliberal nacional se ven envueltos en oscuros negocios y en una extensa red de corrupción política y económica. A tal punto que dos ellos Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Delano, los dueños de empresas PENTA son recluidos en prisión preventiva, por ser considerados “un peligro para la sociedad” por estar involucrados en una serie de actos corruptivos. Más tarde en 2016 es desaforado un reconocido parlamentario de la Unión Demócrata Independiente, UDI; el senador Jaime Orpis, condenado por fraude al fisco y cohecho a cinco años de presidio efectivo.

Los ejemplos y los casos de corrupción seguirán develándose durante los tiempos del Bicentenario como en la actualidad. Por esa razón, no dudamos en caracterizar a la sociedad neoliberal como una sociedad cleptocrática, Y, con el objeto de abordar teóricamente el rol político del fenómeno de la corrupción abrimos esta Segunda Parte con un ensayo teórico y analítico de los qué es y no es la corrupción.

La Tercera Parte lo dedicamos al análisis de la democracia neoliberal en los tiempos de Bicentenario. Nuestra principal tesis en esta sección es que la democracia protegida es una “democracia sin electores”. Esta tesis se sostiene en el constante vaciamiento y alejamiento de las ciudadanías neoliberales de los procesos electorales. Analizamos como consecuencia de ese vaciamiento la conformación del Partido de las y los No electores. Ratificando nuestra tesis expuesta en 1998 de que son éstos, las y los ciudadanos que “sin votar”, van a determinar o influir en los resultados electorales y en la conformación de la mayorías o minorías electorales del sistema político, siendo, al mismo tiempo

la expresión de la forma cómo se practica la política en una sociedad neoliberal.

Como hemos expuesto en el Tomo I, estas sociedades se caracterizan por su acentuado apoliticismo, despolitización y conservadurismo político de amplias masas ciudadanas. Estimamos, que la formación del Partido de las y los No electores, es la manifestación de esa forma de actuar. No obstante, la observación analítica de la abstención electoral (estadística) como de las y los ciudadanos abstencionistas (comportamiento) nos permite distinguir al interior de ese conglomerado tres grupos, a saber: los abstencionistas flexibles, que entran y salen de los procesos electorales; los abstencionistas subpolíticos, que son sectores políticos radicales que buscan, en su praxis social y política en los márgenes del sistema político establecido, construir otra forma de hacer política; y, por último, los ciudadanos “no políticos” este grupo renuncia voluntariamente a la política, a la democracia y a los procesos electorales, tienen una posición anti-política. Éste es el grupo más numeroso en relación a los otros dos, e incluso, en algunos momentos se sitúa inmediatamente después de las y los ciudadanos electores habituales.

Las y los “no electores” en los tiempos del Bicentenario, especialmente, desde el año 2012, año en que se estableció el voto voluntario y la inscripción automática en los registros electorales, es el sector político mayoritario y fundamental de la democracia protegida. Ellos son la expresión directa de la democracia protegida neoliberal, pero en un sentido negativo, profundizando la crisis política de este régimen político, donde las autoridades políticas, desde las y los presidentes, las y los parlamentarios, alcaldes y alcaldesas y concejales, entre otros y otras; son electos con menguadas y mezquinas votaciones. Aunque, la ficción aritmética establecida por el Servicio Electoral (SERVEL), dice lo contrario, entregando porcentajes de votación que ocultan la verdadera fuerza y apoyo electoral de los actores políticos. Las y los electos son legales, pero, con bajos niveles de legitimidad.

El régimen político entre 2010-2018, la democracia protegida, el cual era considerado por las ciencias sociales

institucionales como por actores políticos principales, es decir, por la clase política y los partidos del orden como una “ejemplar democracia” entró durante este periodo en una soterrada, oscura y prolongada crisis de legitimidad, credibilidad y confiabilidad.

No solo la democracia protegida comenzó, en los tiempos del Bicentenario, a experimentar una crisis que haría temblar toda la estructura política-institucional establecida por los gobiernos neoliberales pos-dictadura, sino, también a la dominación y hegemonía neoliberal. Esta comenzó a ser agrietada significativamente por la activa movilización social de las ciudadanías que impugnaban al neoliberalismo.

La forma como la movilización social fue agrietando la dominación y la hegemonía neoliberal la abordamos en la Cuarta Parte. Para tal efecto, nos concentramos en dos movimientos emblemáticos del largo ciclo de protestas iniciado en el año 2006. Por un lado, analizamos la lucha social de las y los estudiantes tanto secundarios como universitarios por modificar y transformar la educación de mercado. Es decir, poner fin a la educación como un bien de consumo y reestablecerla como un derecho social y humano.

La solución de mercado ofrecida tanto por el gobierno del derechista Sebastián Piñera (2010-2014) como por el gobierno de la socialista de Michelle Bachelet (2014-2018) no van a modificar ni transformar el mercado de la educación ni tampoco poner fin al lucro menos aún mejorar la calidad de la educación, todo lo contrario, consolidaron y potenciaron el mercado de la educación.

El ciclo de impugnación del neoliberalismo se incrementa en los tiempos del Bicentenario con el surgimiento en el año 2016 del **Movimiento NO + AFP**, movimiento social liderado por el sindicalista Luis Mesina que pone en cuestión el sistema previsión social establecido desde 1982 por la dictadura cívico-militar a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de la cotización individual que realizan las y los trabajadores en su fondo de pensiones para mantenerse una vez que se retiran o son retirados de la fuerza de trabajo activa. Luego de 35 años de funcionamiento el sistema, ideado y establecido por el exministro del Trabajo José Piñera Echeñique, no había generado los

beneficios previsionales prometidos al momento de establecerse. Las pensiones que pagaban las AFP a sus afiliados eran “pensiones de hambre”, que no permitían a los jubilados y pensionados vivir con dignidad. El Movimiento No + AFP logró movilizar a millones de ciudadanos, especialmente, adultos mayores demandando el fin del sistema. La marcha del 26 de marzo de 2016 convocada por el Movimiento sacó a la calle más 3 millones de ciudadanos en todo Chile, llegando solo en Santiago, la capital del país, a cerca de un 1 millón de personas que exigían al gobierno de la Presidenta Bachelet impulsar una profunda reforma al sistema previsional. La respuesta del gobierno socialista neoliberal fue ambigua y evasiva, a tal punto que transcurrido 8 años el sistema previsional en base a la cotización individual de las y los trabajadores sigue siendo uno de los pilares, fundamentales, que sostiene toda la arquitectura de la forma de acumulación neoliberal. Es más, el Movimiento No + AFP ha perdido relevancia o fuerza social frente al contra-movimiento organizado por las ciudadanías neoliberales articulado y conformado al interior de los procesos constituyentes (2022-2023) denominado “Con mi Plata NO”. Tal como exponemos en los tres ensayos en donde analizamos esta “grieta” la cuestión de la previsión social es la expresión directa de la lucha de clases entre el capital y el trabajo en tiempos del Bicentenario.

Una de las características centrales de las sociedades neoliberales lo constituye un binomio muy presente en la historia de la formación social chilena desde sus orígenes hasta la actualidad. Nos referimos al binomio violencia-miedo.

Como se sabe tanto la sociedad chilena colonial, nacional, oligárquica, nacional-desarrollista como la neoliberal fueron productos de violentos procesos políticos. Por esa razón, Chile siempre ha sido una tierra de guerra tal como fue sostenido tanto por historiadores como Álvaro Jara, Luis Vitale y Mario Góngora. La violencia guerrera tanto de las y los conquistadores (dominadores) como la de las y los conquistados (dominados) de los distintos periodos que hemos nombrado ha configurado a la sociedad respectiva.

La violencia entendida en su amplio espectro desde la física a la simbólica ha sido acompañada por el miedo de todos contra

todos. El miedo ha sido un factor político que gatilla reacciones violentas. Ambos factores los analizamos en la Quinta Parte para mostrar cómo ellos han configurado la actual sociedad neoliberal, nacida en la violencia y el miedo, de las clases capitalistas a la revolución social de los “de abajo”.

Uno de los factores sociales y políticos que activa la violencia como el miedo, en las sociedad capitalistas, es la protesta social y política y la acción colectiva de los sectores subalternos, especialmente, de los sectores populares. Todos los sectores sociales, unos más que otros, expresan esos miedos, pero estimamos que es la clase dominante la que expresa con mayor fuerza y de distintas formas el miedo, el terror o el temor que les genera la protesta social y política popular. Se trata de un miedo tanto a la “acción de la sociedad civil como al Estado” así lo manifestó en su momento el sociólogo Javier Martínez, en la década de los años ochenta del siglo XX. Pero, en una sociedad neoliberal, el miedo no solo se manifiesta por las ciudadanía hacia la sociedad civil o al Estado, sino, también, al Mercado.

Al analizar diversos momentos de la protesta política y social en los tiempos del Bicentenario es posible advertir cómo este binomio está presente tanto en la protesta de los pescadores de Chiloé, en el conflicto mapuche, en los encapuchados, en el asesinato de dos estudiantes porteños por un propietario temeroso y activo en defender la propiedad privada y en el temor de las y los ciudadanos al cambio político e histórico.

Así como la violencia y el miedo han configurado el comportamiento político, social y cultural tanto de los grupos dominantes como de los dominados en la sociedad chilena a lo largo de su historia, ambos permanecen, ya sea latentes como manifiestos, en la consciencia como en la memoria nacional. Este otro binomio, consciencia y memoria, tienen un rol esencial en la forma cómo las y los ciudadanos nacionales han concebido la violencia como el miedo en distintos momentos y etapas de la historia.

En la Sexta Parte nos adentramos en el complejo proceso de hacer presente la memoria histórica corta en los tiempos del Bicentenario. Abrimos el capítulo con el análisis del momento

político e histórico que inaugurará uno de los periodos más conflictivos de la historia nacional, en el cual la violencia y el miedo de las clases propietarias se hará presente con toda su fuerza histórica. Este periodo es el de mayor democratización de la sociedad chilena, al modificar el derecho de propiedad.

La conmemoración de los 50 años de la promulgación de la Ley 16.640 (1967) que posibilitó iniciar la Reforma Agraria, o sea, al proceso histórico, social, económico y cultural de transformación de la estructura agraria y la disolución del poder de la oligarquía terrateniente conformada en los siglos coloniales. Los “señores de la tierra” tuvieron miedo no solo a la acción de las y los campesinos e inquilinos sino, también, al Estado.

El proceso de reforma agraria fue conducido, primero, por el gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y luego, por el gobierno popular y revolucionario de Salvador Allende Gossens (1970-1973), entre ambos gobiernos expropiaron la gran propiedad agraria. Durante seis años, entre 1967-1973, la violencia política y el miedo recorrieron los campos. La cual continuó con la instalación de la dictadura cívico-militar en 1973. En esos seis años, la democracia liberal en Chile se profundizó al máximo.

La revolución social que impulsaba el gobierno de la Unidad Popular se verificaba en la transformación de la propiedad privada de los medios de producción y la construcción del Área Social de la Producción, revolucionando a la democracia como al capitalismo, provocando la violenta reacción del capital nacional como internacional en septiembre de 1973. Por esa razón, nos preguntamos en el ensayo “Memoria, historia y conflicto político”, cuál es el lugar de “El Once” en la consciencia histórica nacional. Tenemos la impresión de que la historia de la Unidad Popular recién comienza a ocupar un lugar en la memoria y en la consciencia nacional de la ciudadanía nacional. Lo predominante es la memoria de la dictadura cívico-militar y sus atrocidades.

El avance inexorable del tiempo va arrastrando a hombres y mujeres que en distintas maneras contribuyeron a construir el siglo XX chileno. En los tiempos del Bicentenario partieron tres que tuvieron complejos roles políticos e históricos. En esta sección

entregamos semblanzas de ellos, a saber: Patricio Aylwin Azócar, que fue un demócrata en la medida de lo posible. Utilizamos de manera irónica su famosa sentencia para referirse, durante su gobierno, el primero de la consolidación de la democracia protegida, que la *“justicia* (para los asesinados, torturados, exiliados y desaparecidos durante la dictadura) *sería en la medida de lo posible”*. Él fue uno de los principales opositores al Gobierno de Salvador Allende, su acción política, al mando de la Democracia Cristiana contribuyó decisivamente a forjar las condiciones generales para el Golpe Militar de las Fuerzas Armadas y de Orden en 1973; en otras, palabras fue un instigador de la violencia reaccionaria y antidemocrática. Si bien, durante la dictadura asumió una postura opositora a ella, aceptó la institucionalidad política y el modelo económico establecido por la dictadura y el capital neoliberal.

Otro político crítico de la forma como se construía el siglo XX chileno y que desde la década sesenta de ese siglo luchó por cambiar el rumbo e impulsar la revolución social no solo chilena sino continental fue el exSecretario General del Partido Socialista de Chile, Carlos Altamirano Orrego, quien falleció el año 2019. La semblanza que hacemos de él es la de un revolucionario, un socialista contradictorio que tuvo una importante figuración histórica y política en el periodo de la Unidad Popular. Señalado por todos como uno de los *“responsables”* del Golpe de Estado de 1973. Cuestión que, justamente, discutimos en un breve opúsculo sobre el tema.

El silencio historiográfico y político sobre el rol de la Justicia y su complicidad con los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar como de la ausencia de Justicia, Verdad y Reparación durante la vigencia de la democracia protegida es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos más oscuros del periodo. A pesar de los informes Rettig (1991) y de Valech (2011) que buscaron establecer una *“verdad oficial o Estatal”* acotada y consensuada sobre la violación sistemática a los derechos humanos, la justicia sigue siendo un tema pendiente en la sociedad chilena hasta el día de hoy. Por esa razón, escribimos dos artículos referidos al tema.

La lucha por la Justicia no solo se realiza en los Tribunales ni está a cargo de hombres probos como fue el caso de Don Andrés



Aylwin, sino también de revolucionarios que entregaron su vida en esa lucha como fue la entrega consecuente del joven socialista Carlos Godoy Echegoyen, muerto en la tortura por personal de Carabineros de Chile, en 1985. Por cierto, la consecuencia política es una de las virtudes más difíciles de sobrellevar en las sociedades neoliberales, en las cuales la renuncia a los principios revolucionarios es una constante, por tanto, el ejemplo de vida de Carlos Godoy traspasa el olvido y permanece vivo en la memoria de muchos y muchas actuales luchadores sociales por la justicia.

En el último apartado de este volumen, abordamos aspectos de la academia o del capitalismo académico, especialmente, a los procesos de selección y contratación en los tiempos neoliberales y del Bicentenario de académicos/as o de investigadores en las instituciones universitarias nacionales como de aquellas instituciones que entregan fondos (dinero) para la realización de investigaciones en los diversos campos de los saberes académicos y científicos. Estos procesos, en lo general, son pocos transparentes y con un conjunto de criterios que apuntan más bien a excluir que incluir, pues la mayoría de los concursos tienen como dicen en México, “retratos hablados”, es decir, la selección ya está realizada con anticipación, donde los concursos solo sirven para “legitimar” un proceso viciado desde su origen.

Cerramos este apartado dedicado a la academia neoliberal, al análisis del pensamiento y trayectoria de un intelectual y cientista social que se ubica en las antípodas, justamente, de ese tipo de academia, el sociólogo Tomás Moulian, quién recibió el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades en el año 2015.

El pensamiento político y el análisis crítico de Moulian, -el “último rebelde con causa” de la década de los años 60”- tanto de la historia nacional como de la sociedad actual, ha sido muy influyente tanto en el campo disciplinario (la sociología política como la historia) como en el ámbito político.

A modo de conclusión presentamos un ensayo intitulado ***Estado, Hegemonía y crisis política en una sociedad neoliberal en los tiempos del Bicentenario Chile 1990-2018*** en este planteamos varias hipótesis y reflexiones sobre el proceso político

y social que toma la formación socioeconómica chilena bajo la hegemonía neoliberal desde la instalación de la “democracia protegida” hasta el primer año del gobierno del segundo gobierno de Sebastián Piñera, y un año antes del inicio de la gran coyuntura crítica en octubre de 2019.

El ensayo establece una serie de relaciones entre la crisis política de la democracia protegida, el surgimiento del “partido de las y los No electores”, la extensa y prolífera corrupción política y económica con el conjunto de grietas que las distintas movilizaciones sociales comienzan desde el ciclo de impugnación neoliberal iniciado en el año 2006 y continuado durante los años de la década del Bicentenario, especialmente, en el año 2011, con la gran rebelión de los estudiantes universitarios, secundarios y ciudadanía subpolítica e incluso ciudadanía neoliberal tradicional.

La rebelión estudiantil y ciudadana administrada tanto por el primer gobierno del presidente S. Piñera (2010-2014) como el segundo gobierno de la presidenta M. Bachelet (2014-2018) provocó la primera gran grieta en el muro de la hegemonía neoliberal. La segunda grieta fue generada en el año 2017 por el movimiento social NO+ AFP que puso en jaque y amenazó al dominio del capital financiero al cuestionar radicalmente la forma como operaban las Administradoras de Fondos de Pensiones y demandó su fin.

Los logros políticos alcanzados por ambos movimientos fueron dispares y contradictorios. Ninguna de las dos grietas consiguió afectar las sólidas estructuras del patrón de acumulación como el funcionamiento de los mercados involucrados. Sin embargo, agrietó la hegemonía, es decir, el muro neoliberal se trizó. Los gobiernos tanto de la derecha como de la Nueva Mayoría, entre 2010-2018, en los tiempos del bicentenario, se apresuraron y esforzaron en reparar las fallas y recomponer el orden neoliberal.

Sin embargo, a lo largo del año 2017 se estaba gestando al interior de las profundas estructuras de dominación de la sociedad chilena un movimiento social y cultural que provocaría un terremoto tan intenso como el que abrió el año del bicentenario, en febrero de 2010, que se manifestó en mayo de 2018. Ese mes,

millones de mujeres protagonizaron la mayor rebelión contra el patriarcado acontecida en Chile. Estremeciendo todo.

Esta rebelión no fue en contra del orden neoliberal, sino contra la mayor y más larga dominación histórica: la masculina sobre las mujeres. La rebelión introdujo grandes tensiones y grietas en todo el orden social, político y cultural de la sociedad chilena estructurada, desde siglos, en el patriarcalismo, es decir, en la dominación masculina.

El mayo feminista transformó a Chile. En un cambio, tan importante como fue el político de 1810 que abrió la ruta para la emancipación colonial y la constitución del Estado-Nación, el mayo 2018 abrió la ruta para la emancipación de las mujeres y la configuración de una nueva forma estatal. La rebelión de la mujeres de 2018 fue la mayor grieta producida en la historia de Chile, en sus 200 años de su vida independiente, pues abrió una estructura de oportunidades políticas e históricas para modificar todo lo establecido en 500 años de historia de la formación social chilena. Los cambios introducidos por el movimiento de mujeres desde 2018 son más que notorios en diversos ámbitos de la vida cotidiana y de las relaciones entre hombres y mujeres. Si bien, en el presente volumen no abordamos de manera directa dicha grieta la mencionamos, fundamentalmente, porque las mujeres y los feminismos van a estar activamente presentes en la gran rebelión social popular y ciudadana en contra de la dominación neoliberal de octubre de 2019. Temática y problemática que será tratada y analizada en el Tomo III de esta trilogía.

Nadie, por cierto, escribe un libro en soledad. Ni tampoco con todo el sosiego y tranquilidad que las y los escritores y científicos sociales quisieran. No todos tienen la suerte de un Gabriel García Márquez, múltiples obligaciones nos impiden lograr quietud para hacerlo, solo el silencio escritural nocturno por algunas horas. Este libro es un libro noctámbulo, fue trabajado y ordenado durante largas jornadas nocturnas. Además, tiene el ritmo del Jazz de Coltrane y de Monk. Estuvo acompañado por la cotidianidad de la vida política y familiar. Sería largo enumerar y nombrar a todas y todos los que se vieron involucrados voluntariamente o no en el proceso de preparación. Pero siempre es justo nombrar a

aquellos que se destacaron. En primer lugar, a Zulema Escalante Lara, quien revisó y leyó el texto, mejorando de manera sustantiva la redacción atropellada de su autor; en segundo lugar, a Miguel Soto, de Escaparate, quien como ha sido costumbre desde hace ya siete años y cuatro libros editados, atendió con paciencia infinita los requerimientos del autor. Y, en tercer lugar, quisiera agradecer a las cientos de personas que, desde distintos lugares del país como de América Latina, han adquirido el primer tomo de esta trilogía, la mayoría de ellos asumieron lo que hemos sostenido en diversas oportunidades: estos libros no tienen “valor de cambio” (precio) sino, fundamentalmente, tienen un “valor de uso”. Son una “mercancía” subversiva.

Este libro es una invitación para todas y todos aquellos ciudadanos que hoy a meses de cerrada la coyuntura crítica de octubre 2019 - diciembre 2023, se preguntan el porqué la dominación neoliberal sigue vigente en Chile. Pienso que, en este Tomo, van a encontrar algunas pistas, hipótesis y antecedentes históricos, políticos y sociológicos que explican y responden, tal vez, a esa interrogante y, al mismo tiempo, ayudan a comprender el proceso acontecido no solo entre 2019-2023, sino, en los últimos 50 años. Por esa razón, consideramos que su lectura -complementaria, por cierto, con la del Tomo I- es central para dibujar o trazar los lineamientos políticos del presente. Consideramos que la lectura atenta y reflexiva de los tres tomos (el tercero por venir) nos proporcionan herramientas y materiales para comenzar a construir el proyecto político e histórico que nos permita salir de este agobiante y miserable presente.

En los tiempos en que trabajaba en la preparación de estos libros me llegó desde la Ciudad de Córdoba, en Argentina, una noticia que me dejó durante días sin ánimo, triste y sombrío, mi amiga, mi querida amiga, Adela Coria, había partido a las estrellas. A Adela, la había conocido en 1998, en casa de mi otra gran amiga y compañera de doctorado, también, cordobesa, Silvia Morón, en Ciudad de México. Fueron más de 20 años de una hermosa e intensa amistad. Todos los años viajaba a Córdoba a visitarla, mis pasaportes, registran más de 20 visitas a dicha ciudad, la última fue en 2018, estuvimos en su casa de Cabalango y compartimos un buen asado y mucha conversa, Adela era un ser luminoso,

irradiaba alegría, polémica y controversia, una de sus pasiones era la conversación, recuerdo una oportunidad que nos amanecimos en Buenos Aires, recorriendo diversos cafés, conversando sobre su otra gran pasión la educación. En esa materia, Adela, era una pasión total. En el año 2018 se preparaba para su retiro de la Universidad Nacional de Córdoba, allí había enseñado por tres décadas, era una gran educadora y “formadora de formadores”. Adela, además fue una extraordinaria mujer, de sólido pensamiento crítico, luchadora y comprometida con las luchas de su pueblo y su género. Dedico este trabajo, a su memoria.

**JUAN CARLOS GÓMEZ LEYTON**

Dr. en Ciencias Sociales y Políticas  
Director Académico CIPPSAL  
San Joaquín, Chile, mayo de 2024

**PRIMERA PARTE**

**REFLEXIONES HISTÓRICAS Y  
POLÍTICAS EN TORNO AL  
BICENTENARIO NACIONAL**



## **El Orden Político posindependencia: la postergación de la democracia**

*“Una concepción amplia de la revolución  
como desarrollo estratégico  
de largo alcance y de intensidad  
inusitada puede ser útil,  
porque es realista.  
Al mismo tiempo que atempera  
a los impacientes,  
curte a quienes buscan con pasión  
a la no muy fácil  
tarea de reconstruir  
la sociedad latinoamericana”.*

Orlando Fals Borda,  
Las revoluciones inconclusas en América Latina,  
1809-1968.

### **Presentación**

La lucha por la emancipación de los pueblos y sociedades coloniales hispánicas y caribeñas se abre en 1808 con la rebelión de los esclavos en Haití y se cierra con las independencias de los Virreinos del Perú y de México, ambos en 1821. Con la derrota del ejército imperial en la Batalla de Ayacucho en 1824, en la región sudamericana, se consolida el triunfo militar del Libertador Simón Bolívar en la Batalla de Pichincha (24 de mayo de 1822). Hay consenso entre los analistas que dicha batalla y triunfo militar jugó un rol fundamental para el proceso emancipador de América Andina, puesto que posibilitó consolidar las independencias de la Gran Colombia, Ecuador, Chile, Argentina e incluso, Paraguay y Uruguay a las orillas del Río de la Plata. Y, sobre todo, para la existencia de Bolivia.

Con posterioridad a los triunfos militares se puso en marcha otro proceso histórico-político tan relevante como trascendental



para las nuevas naciones que emergieron de la eclosión balcánica que provocó la emancipación colonial. Este se refiere a tres procesos concatenados e interrelacionados, a saber: uno, la configuración de la "nación"; dos, la conformación del Estado y tres, la constitución del régimen político que debía gobernar la revolución política que implicó el proceso emancipador. En este capítulo nos vamos a concentrar en el análisis de la conformación y establecimiento del orden político, o sea, del régimen político.

La emancipación colonial constituye la gran grieta abierta en la historia de las sociedades coloniales de América Latina y el Caribe es además la primera experiencia moderna que tanto las élites de poder como los pueblos van a experimentar a inicios del siglo XIX. Sin embargo, esa fue una experiencia trunca, marcada por la frustración política que se va a experimentar en la región y, sobre todo, va a hacer abortar el proyecto bolivariano de la unidad continental.

En este artículo realizaremos un breve análisis de esta cuestión partiendo de algunas preguntas previas como, por ejemplo: ¿la revolución de emancipación colonial fue una revolución moderna destinada a la instalación de la democracia liberal representativa u otro régimen político moderno? ¿qué tan modernos eran los sujetos políticos que impulsaron la emancipación?

Tengo la convicción que estas dos preguntas son centrales para explicarse el devenir histórico político de las formaciones sociales latinoamericanas posemanipación, así como los problemas que la región ha tenido para superar las distintas formas de dominación que han debido soportar los pueblos desde hace ya un poco más de 200 años.

### **La Lucha por la Independencia Colonial: ¿Una Revolución Moderna?**

La reflexión sobre la emancipación colonial de las sociedades de América Latina y el Caribe a inicios del siglo XIX nos remite a una problemática mayor de la historia social, política y cultural de la región: a la cuestión de la modernidad; a los puntos de arranque con los distintos procesos modernización, los cuales permitieron a las sociedades latinoamericanas abandonar el carácter colonial o tradicional e insertarse en la modernidad. Y, especialmente, a preguntarse cómo

fue la modernización política de la región, cómo se instalaron los regímenes políticos modernos: las democracias o los autoritarismos. Estos son regímenes políticos que pertenecen a la modernidad política que se comienza a desplegar en occidente desde el siglo XVIII-XIX en adelante y se vinculan contradictoriamente con el desarrollo del capitalismo industrial; con la formación de los estados-nacionales y con las configuraciones de regímenes políticos republicanos; con la constitución de la ciudadanía, de los actores sociales y políticos modernos; en síntesis, con la conformación del sujeto político moderno.

Cabe señalar que las nociones democracia y autoritarismo están dotadas de un vasto campo semántico, son usadas a menudo de manera indiscriminada y, por ende, caracterizadas por aquello que bien se podría definir como una sustancial ambigüedad. Fundamentalmente, porque tanto la democracia como el autoritarismo indican al mismo tiempo un **hecho** (los regímenes democráticos o autoritarios como realidades históricas), un **concepto** (como una nueva forma de expresión de poder entre las tipologías elaboradas por el pensamiento político moderno), y una **teoría** (elaborada por el pensamiento teórico y político moderno y contemporáneo) que busca encontrar elementos comunes a los diversos regímenes democráticos y autoritarios que se han instalado. Por ello, es posible remitirse a la teoría de la democracia como también a la teoría política del autoritarismo. Estas distintas acepciones de los términos intervienen y se mezclan a lo largo de un debate teórico, epistemológico, ideológico e inclusive metodológico, en el cual las mismas nociones asumen significados diversos dependiendo de la perspectiva analítica de quien las emplee. Esta situación es extensiva también para los otros conceptos políticos modernos que hemos señalado en líneas anteriores: modernidad, modernización, estado y ciudadanía.

La modernidad en América Latina y el Caribe desde el siglo XIX presentó tanto a los actores políticos y sociales con poder como a las y los ciudadanos comunes, dos opciones para llegar a la modernidad política: la republicana democrática o la republicana autoritaria. Esto fue el dilema histórico que los actores políticos estratégicos del proceso posemancipación debieron resolver. La opción política adoptada fue por una modernidad política mixta, es decir, aquella que combina institucionalmente formas y normas democráticas con praxis, formas y normas autoritarias.

Dicho lo anterior, vamos a sostener en este ensayo histórico-politológico que las élites en el poder y/o del poder en las sociedades latinoamericanas y caribeñas siguieron durante el siglo XIX el camino de la modernidad autoritaria. Lo cual ha postergado la instalación de la democracia plena en la región a lo largo de estos últimos 200 años. Y, muchas veces, la democracia instalada ha sido una democracia autoritaria y bastante restringida para los pueblos y las ciudadanías, fundamentalmente, porque la primera experiencia moderna que enfrentaron las y los sujetos “americanos” fueron las guerras de independencia, o sea, un tipo de revolución. Esta no logró ser una revolución integral que posibilitara transformar radical, drástica y profundamente las estructuras del poder social, económico y cultural de los grupos dominantes en el escenario poscolonial.

La Revolución de Independencia, o emancipación colonial no fue acompañada por la consiguiente modernización de la estructura social y económica. La emancipación fue un proceso eminentemente político sobre el cual es pertinente preguntarse lo siguiente: ¿fue una revolución política que dio lugar a un proceso de modernización de las estructuras de poder? ¿de las revoluciones emancipadoras emergieron regímenes políticos modernos en la región? Consideramos que la emancipación fue una poderosa y trascendental revolución política que permitió establecer un moderno régimen político: la república, aunque no fue democrática sino autoritaria.

Efectivamente, luego de la emancipación colonial en las diversas formaciones sociales latinoamericanas emergieron formas políticas modernas: un Estado-Nación moderno, un régimen político moderno, la república; una pequeña ciudadanía política moderna, organizaciones políticas, actores sociales y políticos modernos, ideologías, ideas, mecanismos de resolución de conflictos modernos, etcétera. De manera, que la revolución emancipadora permitió la instalación de la modernidad política en América Latina y el Caribe. Pero ésta tuvo un carácter restrictivo, localizado en una élite de poder, excluyendo de ella, por décadas, a las grandes masas populares, que fueron integradas lentamente, “gota a gota” y controladas en los diversos procesos de modernización. No obstante, esas integraciones fueron relevantes para que los pueblos pudieran ir adquiriendo conciencia política. Aunque, durante el siglo

XIX y, por cierto, también en el XX, esos procesos de integración no permitieron la instalación de la democracia.

El proceso de Independencia nacional ha tenido en la historiografía nacional y, por extensión, en nuestra toma de conciencia colectiva, un rol fundamental al moldear tanto esquemas históricos culturales como un determinado lenguaje que ha permitido la configuración de identidades nacionales y sujetos históricos que se reconocen en esta instancia histórica, más que en otras, de igual o mayor importancia o trascendencia. En efecto, los diversos sujetos históricos nacionales, ya sean de la élite dominante o de las clases dominadas (oligarquías, burguesías, capas medias, clases trabajadoras y campesinos), fundan su historia en 1808-1810, es decir, se fundan a sí mismos en la historia de tal acontecimiento. La Independencia, a diferencia del proceso de Conquista, no es un hecho traumático, dramático, sino todo lo contrario, es un hecho festivo, alegre, que invita a la celebración, a la fiesta. En donde lo anterior a 1808-1810 es ocultado y negado. Se busca así romper con el período colonial, es decir, se trata de negar el origen traumático, se quiere olvidar el nacimiento: 1492 para América en general, 1541 para Chile, en particular.

De modo que preguntarnos por el carácter del proceso de Independencia es interrogarnos por la revolución. A nuestro entender, las revoluciones son productos propios y únicos de la modernidad. La modernidad en cierta forma no se puede explicar sin la revolución. Es el pensamiento moderno quien piensa e incluso acuña el concepto de revolución. ¿No fue acaso Copérnico en usar por primera vez el término cuando publicó su obra "De la revolución de los cuerpos celestes"? ¿No es acaso la Revolución Francesa de 1789 la expresión más acabada de la modernidad política?

La Revolución se lleva a cabo para imponer a toda la sociedad la modernidad. Los sujetos modernos encontraron en la revolución, es decir, en el cambio social radical, el instrumento adecuado para realizar el proyecto moderno. Sin revolución no hay modernización y sin pensamiento moderno no es posible que se dé la revolución.

El sociólogo Barrington Moore, distingue tres grandes vías en el tránsito desde la sociedad tradicional a la sociedad moderna. La primera, pasa por las llamadas revoluciones burguesas,

designación necesaria para ciertos cambios violentos que tuvieron lugar en las sociedades inglesa, francesa y norteamericana, y que los historiadores asocian con la Revolución Puritana, la Revolución Francesa y la Guerra Civil Americana. Un rasgo clave de tales revoluciones, sostiene Moore, es el desarrollo de un grupo social con base económica independiente que ataca los obstáculos que se oponen al desarrollo de la versión democrática del capitalismo, obstáculos heredados del pasado. Esto significa la presencia de un sujeto histórico moderno, es decir, de una burguesía o clases ciudadanas mercantiles y artesanas capaces de levantar un proyecto político, económico y social moderno. La clave de esta vía es que a través de grandes revoluciones y guerras civiles se condujo a las sociedades tradicionales (feudales) hacia la combinación de capitalismo y democracia occidental, es decir, al mundo moderno. La segunda vía fue también capitalista, pero culminó durante el siglo XX, en el fascismo, como son los casos de Alemania y Japón. Esta vía es calificada por Moore como una forma capitalista y reaccionaria. Representa un tipo de revolución desde arriba. La tercera vía, es la que condujo al comunismo a Rusia y China. En donde el proceso revolucionario es gravitante en la destrucción del antiguo orden. En fin, en las tres vías hacia la modernidad, lo fundamental y gravitante es la revolución y, por ende, la presencia de un sujeto revolucionario que es esencialmente un sujeto moderno: la burguesía o el proletariado.

Teniendo en cuenta estas premisas, pensamos que en América la Revolución de Independencia fue un proceso inconcluso, inacabado y parcial. Lo sucedido entre 1808-1824 fue una inflexión política con la fuerza necesaria para abrir espacios para la constitución en un proceso de larga duración de los ingredientes propios de la modernidad: una burguesía industrial que se va constituyendo a lo largo del siglo XIX y XX; que va conformando, a su vez, un Estado Moderno, una burocracia estatal, organizaciones políticas modernas, partidos políticos, un sistema democrático liberal. Al mismo tiempo, el desarrollo del capitalismo va generando la conformación de un proletariado moderno, la clase obrera con sus propias organizaciones con una ideología política moderna, como es el pensamiento socialista marxista, capaz de postular la modernidad desde la perspectiva socialista y, por ende, disputarle la conducción de dicho proceso a la burguesía. Es decir, la Revolución

en América Latina y el Caribe ya sea la Burguesa o la Socialista, eran igualmente rutas conducentes a la modernidad, pero dicha problemática era propia del siglo XX y no del siglo XIX.

Postulamos que la Revolución de Independencia fue una "revolución política". Sin embargo, las guerras de liberación colonial no fueron una experiencia verdaderamente decisiva para los diversos grupos sociales que controlaban las fuentes del poder ni tampoco para los grupos que carecían de ellos. Los grupos estratégicos no fueron suficientemente revolucionarios ni estuvieron tan comprometidos como para cambiar profunda y radicalmente la sociedad, con el fin de crear una sociedad verdaderamente distinta. No me estoy refiriendo a los líderes de la revolución de independencia como, por ejemplo, Bolívar, Sucre, San Martín, Artigas, O'Higgins, Morelos o Hidalgo, todo ellos desplazados del poder, justamente, por los grupos de poder.

La vieja estructura de valores, culturales y el sentido ritual de la sociedad colonial no fueron seriamente conmovidos. Las ideologías y las metas de la violencia guerrera se quedaron cortas. No hubo un impacto coherente ni masivo sobre la gente. Por esa razón, las estructuras del pasado colonial se mantuvieron por largo tiempo hasta bien entrado el siglo XIX e, incluso, durante el siglo XX, bastante firmes, sobre todo en lo referente a las estructuras agrarias. En algún sentido las guerras de liberación colonial significaron una nueva ecuación en las estructuras del poder político en la región. Diríamos que aquí encontramos la verdadera novedad histórica: la readecuación entre las formas tradicionales coloniales modificadas relativamente por las Reformas borbónicas, con las formas republicanas o liberales de un sujeto político pre-republicano.

Así, como he sostenido, la revolución de independencia fue una revolución política, pero que en el periodo pos-emancipador se liberó de sus ropajes liberales anglosajones y se vistió con los ropajes del fisiocratismo francés, el cual influyó decisivamente para que las élites en el poder, encargadas de construir el régimen republicano, expropiaran los elementos centrales de la modernidad política, sus elementos liberales y democráticos, especialmente, el ejercicio de la soberanía popular.

Las revoluciones, no son simples cambios, no pueden ser identificadas con las transformaciones que operan en la forma de

gobierno de una sociedad determinada, ni con el ciclo ordenado y recurrente dentro del cual transcurren los asuntos humanos, debido a la inclinación de los seres humanos para ir de un extremo a otro. Las revoluciones modernas no tienen nada en común con la *mutatio rerum* de la historia romana, o con las luchas civiles que perturbaban la vida de las polis griegas, nos aclara, Arendt.

Las revoluciones modernas se distinguen de aquellos movimientos por una característica nueva, una problemática típicamente moderna: la cuestión social. El conflicto social, producto de los problemas sociales, generados por el desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas, comenzó a desempeñar un papel revolucionario solamente cuando, en la era Moderna, y no antes, los hombres empezaron a dudar de que la pobreza fuera inherente a la condición humana, cuando comenzaron a cuestionar seriamente la desigualdad social, la distinción entre 'ricos' y 'pobres'. De manera que, la revolución es fundamentalmente subversiva, busca trastocar y alterar profundamente el antiguo orden social.

El concepto moderno de Revolución supone la idea manifiesta de que el curso de la historia comienza de nuevo, que una historia totalmente nueva, una historia ignota, está a punto de desplegarse. De modo que, la revolución es un modo peculiar de experiencia vital, es la experiencia de sentirse libre. El ser humano, en su libertad desplegada al máximo de sus potencialidades, tiene la capacidad de comenzar algo nuevo durante el proceso revolucionario, es decir, de experimentar con la historia. Esto, a su vez, supone en el ser humano, en el sujeto revolucionario, una capacidad para la novedad y la aventura. Dos rasgos característicos, que, según Marshall Berman, posee el ser moderno. La modernidad es justamente dicha experiencia vital:

*"es encontrarse en un ambiente que promete aventuras, poder, alegría, desarrollo, transformación de uno mismo y del mundo y que, al mismo tiempo, amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que conocemos, todo lo que somos. Los ambientes y las experiencias modernas traspasan todas las fronteras de la geografía y de las etnias, de las clases y de las nacionalidades, de las religiones y las ideologías: en este sentido se puede decir que la modernidad une a toda la humanidad. Pero se trata de una unidad paradójica,*

*unidad de desunión: nos introduce a todos en un remolino y contradicción, de ambigüedad y de angustia perpetuas. Ser moderno es formar parte de un mundo en el que, como dijo Marx 'todo lo que es sólido se evapora en el aire'.*

En otras palabras, ser moderno supone ser revolucionario.

Estamos convencidos que el proceso histórico de 1808-1824 no tuvo dichas características, no fue una experiencia vital y transformadora para todos los hombres y mujeres de la época. Su principal consecuencia, por cierto, fue sacudirse el dominio de un imperio trasatlántico, más que promover una reconstrucción drástica de la sociedad. Fueron revoluciones modernas, pero truncas. No fueron revoluciones económicas ni sociales porque no modificaron las estructuras tradicionales del poder, manteniendo en muchos lugares del Continente la dominación de los grupos sociales que controlaban todo y que, en el período anterior, habían facilitado la explotación de los pueblos.

Dicho proceso, por lo tanto, no desembocó en la "gran transformación", en la consolidación y expansión de la sociedad moderna y/o del modo de producción capitalista. La sociedad siguió siendo señorial y hacendal. Es decir, no se produjo la instauración de la modernidad.

No obstante, tuvo la capacidad y la potencia política de abrir espacios para una modernización controlada desde arriba. Abrió paso a un modernismo parcial, frágil y centrado en un grupo pequeño de miembros de las élites dominantes. Con esto queremos señalar que los hombres del siglo XIX, con la total exclusión de las mujeres, especialmente, los miembros de la élite dominante, las denominadas aristocracias, oligarquías, no aprendieron a "anhelar el cambio: no sólo a estar abiertos a los cambios en su vida personal y social, sino a exigirlos políticamente, a buscarlos activamente y a provocarlos. No estuvieron dispuestos a no añorar nostálgicamente a las 'relaciones fijas y congeladas' de un pasado real o imaginario, sino a deleitarse con la movilidad, a esforzarse por la renovación, a buscar futuros desarrollos en sus condiciones de vida y en sus relaciones con sus semejantes". No lo hicieron, buscaron por todos los mecanismos posibles conservar todo lo anterior.



En toda América Latina y Caribe, el orden político que se estableció en los nuevos países fue de carácter conservador y autoritario. Pero, a pesar de su conservadurismo, ese orden político fue, en mi parecer, un orden político moderno. De ninguna manera fue la restauración en lo político de las formas de gobierno monárquicas, aunque, los presidencialismos fuertes, las emergencias de los caudillos y dictadores, se vistieron con los “oropeles” de la vieja monarquía. Pero, paradójicamente, en esa estructura de poder, la “modernidad política” democrática se abrió paso para estallar en múltiples movimientos democráticos hacia fines del siglo XIX.

### **El Nuevo Orden Político: no fue Liberal sino Fisiocrático**

Los elementos tanto institucionales como teóricos para el nuevo orden político asumidos por parte de la clase dominante fueron extraídos o tomados del pensamiento político del despotismo ilustrado y del reformismo borbón. En efecto, durante toda la segunda mitad del siglo XVIII va a surgir lo que el historiador argentino José Carlos Chiaramonte ha denominado la crítica ilustrada de la realidad de parte de las élites coloniales. Tal crítica permite que se constituyan ciertas formas de transición hacia el nuevo pensamiento moderno en el seno de la cultura política colonial. El pensamiento ilustrado de Manuel de Salas, de Anselmo de la Cruz entre otros en Chile, por ejemplo, no surge de la forma anti metropolitana y libre pensadora que adquirirá en vísperas de la Independencia. Existen pasos previos, representados por peninsulares o criollos generalmente fieles a las monarquías y a la Iglesia Católica.

Es a partir de ese pensamiento crítico, pero no subversivo, que la élite colonial, los criollos comienzan a repensar el sistema político. De allí entonces que sea posible sostener también que la Independencia, o mejor dicho el proceso emancipador, sea un quiebre, pero un quiebre únicamente en el ámbito político, aunque con un potencial dinamizador respecto a otras áreas.

Durante el siglo XVIII, los grupos ilustrados de las colonias españolas, algunos, por cierto, tomaron conciencia de sus intereses y de su autonomía. Se dieron cuenta que el sistema español era incapaz de satisfacerlos. Buscaron un nuevo sistema ideológico que se prestará para ello y encontraron en el republicanismo el esquema más adecuado para dicho objetivo.

El proceso tanto de construcción del Estado-Nación como del régimen político obligó a las élites de poder a trabajar con elementos propios de la modernidad política. Esos elementos los van a tomar principalmente del pensamiento político moderno en boga a comienzos del siglo XIX que provenía de Europa, especialmente de Francia o de Inglaterra, pero también de Estados Unidos de Norteamérica. Tradicionalmente, los historiadores latinoamericanos han señalado que son las ideas anglosajonas, el liberalismo, las que van a influir en los libertadores. Hay suficientes antecedentes que así lo prueban.

Sin embargo, nuestro punto al respecto es el siguiente: ello es efectivo para la primera generación de libertadores, pero de ninguna manera para la élite y hombres que se harán cargo de la construcción del Estado-Nación, del régimen político, así como de la reorganización de las sociedades emancipadas del poder colonial. Nuestra tesis al respecto es que los organizadores del Estado-Nación abrevaron de las ideas del pensamiento moderno ilustrado francés de la segunda mitad del siglo XVIII, específicamente, de la doctrina fisiocrática.

Al aceptar la modernidad fisiocrática, las élites de poder y en el poder optaron por una modernidad política, social y económica no liberal ni democrática sino eminentemente híbrida, mixta, aquella que postulaba la conformación de un régimen político centralizado, jerárquico y autoritario y un sistema económico librecambista, apoyado, no en la producción industrial, sino en la producción agraria y de materias primas (recursos naturales exportables). De manera que a pesar de elegir el sistema político más radical y novedoso de la época, el republicano, lo despojaron de todos sus elementos potencialmente democráticos.

La opción por la modernidad fisiocrática hizo que los nuevos países siguieran siendo "viejas colonias"; no se modificaron las condiciones sociales, económicas y laborales de las clases subalternas. Si bien, se abolió la esclavitud, las y los negros, así como los pueblos originarios, continuaron siendo explotados y marginados. Lo mismo que los mestizos y otros grupos socio raciales. La realidad se encubrió con una máscara de retórica liberal y pseudo democrática. Las instituciones republicanas, a la manera de fachada, ocultaban las estructuras coloniales. Esta opción se explica, principalmente, porque las élites del poder y en

el poder (las oligarquías terratenientes y mercantiles) evitaron que el quiebre político emancipador y el desorden social que había provocado (al liberar a los esclavos y a los campesinos de sus yugos opresores, por ejemplo) diera lugar o espacios de emancipación social y de luchas populares destinadas a instalar efectivamente la soberanía popular.

El poder socialmente constituido optó por la vía autoritaria hacia la modernidad, esencialmente, por el miedo atávico a las clases subordinadas. De esa manera, postergó la forma republicana democrática y sus libertades asociadas. Consideramos que esto fue así, fundamentalmente, porque el proceso construcción del orden político no estuvo bajo la dirección de los hombres que impulsaron las luchas independentistas, que eran, en nuestra opinión, hombres con mentalidad moderna y liberal. Estos fueron desplazados de los escenarios políticos posemancipación, por las élites de poder, en donde lo "moderno" fue entendido como una continuidad de la "modernización ilustrada borbónica". Por ello, la construcción del régimen político se realizó expropiando el poder soberano a los "nuevos" ciudadanos.

### **La expropiación política de la soberanía popular y ciudadana**

La modernidad capitalista supone la constitución, por un lado, de los hombres, en su condición de trabajadores, como sujetos libres para vender su fuerza de trabajo en el mercado laboral y, por otro, también en su calidad de ciudadanos, en su condición de sujetos políticos libres para participar en la democracia electoral. Esto implica, como es sabido, la desaparición de todo vínculo social de carácter dependiente, vasallaje, dominación o sometimiento político a un "señor". En la ruptura de esas formas de sometimiento de hombres y mujeres reside lo político, lo económico y lo socialmente moderno.

En estos hombres libres reside algo fundamental de la modernidad política, revolucionaria, democrática y de un poder ilimitado: el poder constituyente. Por tanto, sin sujetos libres dotados de poder constituyente no es posible la modernidad democrática. El liberalismo decimonónico, especialmente, tanto el anglosajón como el revolucionario francés que habían sustentado ideológicamente las revoluciones burguesas, tensionaban a las élites políticas y dominantes de los nuevos países latinoamericanos.

Pues seguir el pensamiento liberal, principalmente en lo referido a los derechos políticos ciudadanos implicaba otorgar "poder" a hombres que, hasta ese momento, carecían de él. El problema político central estaba en que las élites de poder no eran liberales sino esencialmente, fisiocráticas. Y, poseían un profundo miedo social a la manifestación política de los sectores subordinados, especialmente a las masas populares campesinas e indígenas. Lo anterior, las llevó a construir una "ciudadanía imaginaria" como señala el mexicano Fernando Escalante.

Ambos rasgos señalados se expresan de manera muy nítida en la contradicción política que manifiestan los constituyentes "emancipadores" al momento de elaborar las primeras constituciones políticas que buscan plasmar en normas y reglas el nuevo orden político. En ellas se establecían y se reconocían las más amplias libertades y derechos ciudadanos, pero simultáneamente, se dejaban pervivir instituciones que en la práctica anulaban completamente lo establecido en la Carta Magna. Por consiguiente, la mantención de los vínculos políticos, sociales, económicos y culturales de subordinación, dependencia y sometimiento impedía, obstaculizaba o simplemente, negaba la conformación del sujeto moderno. Pues, en la praxis cotidiana los mantenía en la subordinación, o sea, mantenía sujetos sin libertad. Como lo he señalado, los modernos, la existencia del "hombre libre" es y será la condición necesaria para el desarrollo de la modernidad democrática.

El ejercicio de la soberanía popular supone la existencia de un pueblo libre que posee la facultad para gobernarse a sí mismo. Este ejercicio soberano, paradójicamente, ha sido obstaculizado y enajenado en las sociedades latinoamericanas. La expropiación del poder soberano al pueblo no sólo obedece a las dificultades prácticas que implica su realización política e histórica, sino a que tanto las élites políticas dominantes como la clase política o dirigente han sido poseídas por una poderosa y permanente desconfianza política hacia el pueblo.

Esa desconfianza, cargada de miedo, tiene que ver con las capacidades y potencialidades del pueblo o de los sectores populares para el ejercicio de su poder soberano. Esa desconfianza recorrió a los constructores del orden político posemancipación. Ellos no creían en la bondad necesaria de la opinión de la mayoría

popular o ciudadana ni tampoco estaban muy convencidos de la capacidad del pueblo para ejercer su libertad y su poder soberano. Para ellos, en rigor, la soberanía popular sólo se justificaba cuando la opinión de la mayoría coincidía con el enigmático “bien público” sostenido por las élites dirigentes. Ahora bien, para que existiera esta coincidencia el pueblo, los sectores populares, debían educarse. El soberano debía educarse para que en cada caso distinguiera con precisión en qué radicaba el bien público. Volveré hacia el final a este punto.

Para las élites del poder la conformación de la democracia no fue algo prioritario ni necesario. Los hombres y mujeres no fueron libres porque la mayoría vivían en el “encierro” ya sea en las haciendas como en los “enclaves mineros”. Estos últimos concentraban grandes grupos de peones agrarios en tránsito en el proceso de proletarización o la mantención de las formas encubiertas de servidumbre o semiesclavitud (de mujeres, de niñas y niños) en los distintos espacios domésticos-serviles, mercantiles o productivos del orden político oligárquico durante el siglo XIX; además, la escasa presencia de los sectores proletarios en fábricas (casi inexistentes) y el escaso desarrollo de los espacios urbanos (ciudades modernas) constituyeron factores sociales y económicos que impidieron la configuración temprana del “sujeto político moderno” en las sociedades latinoamericanas.

Pero la ausencia del “hombre libre” se relaciona también con las resistencias de las élites dominantes a los postulados centrales de la modernidad política de orientación liberal. Estas élites se opusieron a tres fundamentos rectores y modulares de esa orientación: la libertad política (abogaron siempre por la libertad económica), la igualdad y el pleno derecho al sufragio.

Las clases dominantes se han resistido desde comienzo del siglo XIX hasta la actualidad a instalar y aceptar con toda su potencia democrática la libertad política y la igualdad social, económica y política que debe existir entre las y los ciudadanos libres para poder ejercer de manera plena la **soberanía popular**, centralmente, en lo que se refiere a la manifestación concreta del poder constituyente a través del **sufragio y la representación política** directa de las y los ciudadanos, especialmente, de las clases subordinadas y dominadas. La praxis política de estos tres

elementos dota a estos sectores de poder. Ahí está la clave del conflicto político que se va a desarrollar en el nuevo orden político pos-emancipador.

Los principios políticos centrales y básicos para el desarrollo de la democracia moderna, especialmente la liberal-representativa plena, en América Latina y el Caribe tanto durante el siglo XIX, el XX como en las pocas década del siglo XXI, fueron y han sido recortados, anulados, postergados y negados, de una u otra forma, bajo diferentes justificaciones y modalidades por las élites dominantes, porque han sido considerados un peligro para la existencia misma del orden social y económico tradicional, oligárquico, mesocrático o neoliberal. Frente a esa amenaza la actitud de los grupos dominantes ha sido la “expropiación del poder soberano popular y ciudadano”.

Esa expropiación se realizó a través de la instalación de los regímenes políticos autoritarios-electorales, que algunos cientistas políticos y no pocos sociólogos e historiadores han nombrado erróneamente como “democracias oligárquicas”. Estos regímenes políticos fueron sostenidos de 1830 a 1930, no por el pensamiento liberal sino por el fisiocratismo.<sup>1</sup> Una doctrina política que combinaba la libertad económica con el autoritarismo político.

Todos los regímenes de la modernización oligárquica autoritaria (dictaduras y caudillismos militares y civiles) se construyen sobre la base de la expropiación de la soberanía popular, ya sea de la electoral representativa como de su poder constitucional. La exclusión de los sectores populares y trabajadores será también la negación para reconocer la ciudadanía moderna a los “plebeyos”, los cuales serán excluidos por sus condiciones material (carentes de propiedad), educativa (no saber leer ni escribir) o de género (mujeres).

---

<sup>1</sup> Cabe advertir que Harold J. Laski, reconocido historiador del liberalismo europeo, considera que el fisiocratismo, doctrina económica y política cuyo origen se encuentra en Francia, contribuye a cimentar el camino al orden liberal por medio de la acción del “déspota ilustrado” y especialmente por quienes ejercen en la sociedad la “soberanía” y tienen el control de la “propiedad privada”. Según Laski, para los fisiócratas el propietario y los agricultores deben ser libres de la misma forma, como Adam Smith plantea que los comerciantes lo sean. Cfr. Harold J. Laski: *El liberalismo europeo*. FCE, Breviarios, 81, 1961, México, pp.158-162.

Como indicábamos, los constructores ilustrados del orden político no creían en la bondad necesaria de la opinión de la mayoría popular o ciudadana ni tampoco estaban muy convencidos de la capacidad del pueblo para ejercer su libertad y su poder soberano. Para ellos, en rigor, la soberanía popular, solo se justificaba cuando la opinión de la mayoría coincidía con el enigmático “bien público” sostenido por las élites dirigentes. Ahora bien, para que existiera esa coincidencia, el pueblo, los sectores populares, debían educarse. El soberano debía educarse para que, en cada caso, distinguiera con precisión en qué radicaba el “bien público”.

Por esa razón, todos los emancipadores ilustrados tenían fuertes intereses pedagógicos. El propio Libertador Simón Bolívar señalaba que toda la política española había sido contraria a la idea de educar al soberano popular. Tuvimos perniciosos maestros, decía el libertador, “por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza, y por el vicio se nos ha degradado más bien por la superstición. La esclavitud es hija de las tinieblas; un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción: la ambición, la intriga, abusan de la credulidad y la inexperiencia, de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil; adoptan como realidades las que son puras ilusiones; toman la licencia por libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia”.

Por su parte el mexicano Fray Servando Teresa de Mier, ardiente defensor de la independencia latinoamericana, en el congreso Constituyente de 1823 decía que el pueblo siempre es víctima de los “demagogos turbulentos”, que la “voluntad numérica” no puede orientar a la nación, “voluntad de hombres groseros e ignorantes, cual es la masa general de pueblo, incapaces de entrar en las discusiones de la política, de la economía y del derecho público”.

Pero si éste era el pueblo, si estaba en ayuno de luces, ¿quién debía, entonces, gobernar? La crítica de los ilustrados conducía siempre a la exaltación del despotismo y de las élites ilustradas. Dado que la idea de la República estaba metida en los huesos de los independentistas, se tendía a conciliar este elitismo con las instituciones republicanas, por lo que las minorías

ilustradas se concebían a sí mismas como integrantes de un congreso. Al pueblo se le ha de conducir, decía Mier, no obedecer. "Sus diputados, los representantes, no somos mandaderos que hemos venido aquí a tanta costa y de tan largas distancias para presentar el billete de nuestros amos...si los pueblos han escogido a hombres de estudio e integridad para enviarlos a deliberar en un Congreso general sobre sus más caros intereses, es para que acopiando luces en la reunión de tantos sabios, decidamos lo que mejor les convenga; no para que sigamos servilmente los cortos alcances de los provincianos circunscritos en sus territorios...somos sus árbitros y compromisarios...no sus mandaderos".

Se trataba de rescatar a ciertas personas e instituciones de los vaivenes de la elección, de la turbulencia popular, para garantizar un mínimo de madurez y de luces y hasta de continuidad. Partidarios en principio de la soberanía popular, los ilustrados independentistas y constructores del Estado-nación latinoamericano, al considerar que los pueblos estaban ausentes de la cosa pública, analfabetos, incluso al margen de la civilización occidental, aislados física y culturalmente, no podían ejercer el poder soberano. Por lo tanto, la concepción de soberanía que se va a imponer en toda América Latina y el Caribe será aquella que se apoya en la teoría política de la delegación del poder soberano en unos pocos: los representantes, diputados, senadores o magistrados de cualquier tipo, para que ellos deliberen y tomen decisiones por el pueblo.

La teoría de la soberanía popular y de la representación moderna nos señala que esta última se puede ejercer de dos formas: por delegación o por mandato. La primera supone que el pueblo, el soberano, elige representantes que toman decisiones por ellos, mientras que la segunda supone que el soberano elige representantes y estos deben obedecer a los mandatos que transmiten los representados. Como lo ha señalado desde la Selva de Lacandona, en Chiapas, el subcomandante insurgente Marcos se trata de "gobernar obedeciendo".

El ejercicio de la soberanía ya sea por delegación o por mandato, tiene directa relación con el tipo de democracia que se busca construir. La primera impulsa la democracia representativa y la segunda la democracia directa. Es la combinación de ambas



democracias lo que nos permite sostener que actualmente la revolución social bolivariana y boliviana están produciendo una nueva forma de ejercicio de la soberanía y la libertad.

En su libro "Marx y América Latina" el argentino José Aricó señala que la incompreensión de Marx con respecto a la gesta bolivariana se debe a que, por sus presupuestos teóricos, Marx no podía admitir que una sociedad civil se creara desde el Estado, sino que el estado tenía que surgir de la sociedad civil como su momento político, como violencia concentrada e instrumento de clase. Y, le parecía que los Estados nacionales latinoamericanos, por ser un intento de lo primero eran en buena medida teratológicos. Pero en verdad, los proyectos ilustrados de Estado-nación y de régimen son perfectamente explicables por las transformaciones que sufría la sociedad latinoamericana. Un Estado reflejo de una sociedad abstraída de la cosa pública no podía ser más que un gobierno despótico como había sido el español. Pero si de lo que se trataba no era "reflejar" la sociedad, sino de transformarla, tenía que ser también despótico, pero ilustrado. Por esa razón, se debía expropiar la libertad y la soberanía al pueblo. De esa forma, la democracia, se remitía a un futuro muy impreciso, y era esa posibilidad la que dotaba de legitimidad al tránsito ilustrado. La legitimidad derivaba no de las condiciones reales sino de un futuro aún no dado.

La otra forma de Estado que aparece después de la independencia, el caudillismo, poco o nada tiene que ver con la ilustración despótica europea y, en cambio, sí es oriunda y refleja la sociedad poscolonial. Domingo F. Sarmiento la describe admirablemente en Facundo. Los caudillos llaneros, estancieros, hacendados, luchan por la supremacía y gana el más hábil y que tiene más arrastre popular.

La seducción del poder, la admiración y el temor son los medios de los que se vale el caudillo para conseguir obediencia y, aunque gobierne en las ciudades, sus procedimientos los obtiene de la gran matriz político-cultural de América Latina y el Caribe: la hacienda. Por ejemplo, Juan Manuel de Rosas, cuyas estancias (haciendas) eran citadas como el modelo de la disciplina de los peones y la mansedumbre. Se preguntaba Domingo Sarmiento en su momento; "muéstrenme la razón por qué conciben de un

modo tan espantoso su manejo de una hacienda, sus prácticas y administración, con el gobierno, prácticas y administración de Rosas; hasta su respeto por la propiedad es efecto de que él es un gaucho gobernador propietario". Hasta aquí Sarmiento. La vinculación entre terratenientes y el poder político en América Latina y el Caribe durante el siglo XIX es una constante en toda la región.

En América Latina, frecuentemente durante el siglo XIX, el conflicto entre la ciudad y el campo lo es entre el grupo ilustrado y el hacendado o llaneros nativos, pero en ninguno de los casos se sostiene en una tradición y una práctica democrática efectivas. Después, ya a finales del siglo XIX, los dictadores como Juan Vicente Gómez o Porfirio Díaz aunarán las tácticas campiranas con las justificaciones ilustradas. El militar o el hacendado se ilustran. Pero en todos los casos hay un desprecio manifiesto o implícito hacia pueblo.

El periodista francés Maurice Joly en su libro escrito en 1864, *Diálogo en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu*, hace por boca del primero, un inventario de los defectos de la plebe. Ella es cobarde, inconstante, con gusto "innato" por la servidumbre, incapaz de concebir y respetar las condiciones de una vida libre, dejada a su arbitrio sólo será capaz de destruirse y no podrá administrar ni juzgar ni conducir la "cosa pública". Haciéndose eco del platonismo Joly afirma: "la soberanía popular engendra la demagogia, la demagogia da nacimiento a la anarquía, la anarquía conduce al despotismo, y el despotismo según vos, --se refiere a Montesquieu--, es la barbarie. Pues bien, ved cómo los pueblos retornan a la barbarie por el camino de la civilización".

Estas características del pueblo son las que convierten la soberanía popular en una entelequia o simplemente en un mito. En América Latina se abunda en ellas, a veces se acude a la "juventud" del pueblo. A 500 años después de la conquista o a 200 años de la gesta de independencia muchos aún creen todavía en la juventud del pueblo. Por ser joven, el pueblo es también demasiado impulsivo y pasional. Por ser demasiado joven, el pueblo no puede ejercer, entonces, la soberanía popular. Vale preguntarse:

*¿Quién sustituye al soberano popular?* Ya lo hemos mencionado, una persona, el dictador o, un grupo, la élite

oligárquica. Es sorprendente la confianza, en cambio, que se deposita en los gobiernos autoritarios. Laureano Ballenilla Lanz, el teórico de la dictadura de Juan Vicente Gómez sostenía que el "César democrático" es el instrumento necesario para consolidar la nacionalidad, él es el que produce la solidaridad mecánica a la solidaridad orgánica modificando el medio social por el desarrollo, por la multiplicación de carreteras y vías férreas, el saneamiento y la inmigración europea.

La tendencia general de los autoritarismos latinoamericanos ha sido la búsqueda frenética de la modernización. Muchos han considerado a la educación como el principal mecanismo modernizador, pero en los lugares donde los educadores no podían modernizar, la tarea se traspasaba al ejército. José Martí reconocía con tristeza que las doctrinas importadas por los universitarios latinoamericanos no habían tenido la eficacia política por no responder a las condiciones propias de nuestra América: "por esa conformidad con los elementos naturales desdeñados han subido los tiranos a América al poder, y han caído en cuánto les hicieron traición. Las repúblicas han purgado en las tiranías su incapacidad para conocer los elementos verdaderos de su país, derivar de ellos la forma de gobierno y gobernar con ellos." En alguna medida los tiranos estaban más apegados por las condiciones naturales que los intelectuales. Pero estas consideraciones no se refieren sólo al siglo XIX, sino también al siglo XX.

Los dictadores son hombres con carisma, capaces de conducir a los pueblos a la dominación o al sometimiento gracias a él. Eva Perón, Evita, dijo, por ejemplo, refiriéndose a Juan Domingo Perón, su marido: "los grandes hombres no nacen por docenas, ni dos en un siglo; nace uno cada varios siglos, y tenemos que agradecer a Dios que nos haya favorecido con el meteoro del genio entre nosotros", la doctrina de Perón, el justicialismo es una muestra de su genialidad, "¿cómo no va a ser maravillosa -dice Eva Duarte- si es nada menos que una idea de Dios realizada por un hombre? Porque Perón es el rostro de Dios en la oscuridad, sobre todo en la oscuridad de este momento que atraviesa la humanidad".

Los caudillos populares, el populismo latinoamericano, reemplazan la teoría de la soberanía popular, por una remozada

teoría del derecho divino del poder. O sea, los populismos son una negación de la soberanía popular.

Examinando con minuciosidad la historia de América Latina es difícil encontrar una tradición democrática en ella. Ya vimos cómo los ilustrados creían en las bondades de la oligarquía de las luces. Pero los revolucionarios del siglo XX no iban más lejos. Los marxistas latinoamericanos se embarcaron durante el siglo XX en una crítica de la democracia burguesa formal sin que ésta se hubiera desplegado en nuestras sociedades; no digamos todas sus posibilidades, sino, a veces ni siquiera sus instituciones más esenciales.

La democracia formal, con todos sus defectos, sigue siendo una aspiración revolucionaria en muchos países del continente. En realidad, los revolucionarios marxistas no se acaban de convencer de que la instauración de la democracia económica no implica la desaparición de la democracia política, de que no es una en vez de la otra.

En la élite revolucionaria latinoamericana también se desarrolló una fuerte desconfianza hacia el pueblo, o sea, hacia la doctrina de la soberanía popular. Esta desconfianza se manifestó en dos teorías políticas centrales de la izquierda. Por un lado, la teoría de la vanguardia revolucionaria, de los partidos comunistas y socialistas "tradicionales" y, por otro, la teoría del foquismo, impulsada por los movimientos revolucionarios de la década de los sesenta, la llamada nueva izquierda. Es la teoría de que las clases trabajadoras no llegan más que a la antesala de la revolución, cuando llegan. Y que es menester que un grupo de vanguardia, un partido, un núcleo de guerrilleros, o un "líder", les digan a dónde hay que ir. La imagen que presentan estas teorías es la de una sociedad inerte o sólo potencialmente revolucionaria que los guerrilleros, el partido o el líder incendian porque ellos son portadores de la chispa incandescente.

Ninguna revolución triunfante se cura de la desconfianza hacia el Pueblo. Nuevamente, la razón ideológica está en todo lo dicho. Es una incurable desconfianza hacia el pueblo que no puede dirigir ni siquiera sus propias revoluciones.

Hablemos un poco de dialéctica. La razón dialéctica de corte hegeliano, de inspiración hegeliana, no consiste únicamente

en una facultad que registra la realidad o que elabora sus materiales de acuerdo con ciertos principios eidéticos. Ésta es solo una de sus dimensiones; la otra diseña lo que todavía no es lo que debiera ser. La razón no sólo se cierne sobre el ser sino también sobre el no ser. El diálogo entre Maquiavelo y Montesquieu, entre lo que es la política y lo que debiera ser, es un diálogo de la razón consigo misma, en distintos estados o dimensiones, habida cuenta de que la dinámica de la realidad está constituida por un tránsito permanente de lo que es a lo que todavía no es. Y es en qué sentido la razón se ajusta a la realidad.

Es en esta dialéctica donde se encuentran las raíces tanto del pensamiento político latinoamericano como de su realidad histórica que emerge desde los primeros años de la posemancipación: el realismo político que trata de justificar la existencia de los gobiernos restringidos. Esa justificación se ofrece porque en el plano de lo que no es todavía, o de lo que debiera ser, se ha ido integrando la idea de la soberanía popular, no como una mera posibilidad sino como una ineludible necesidad. Ante ella, los teóricos hacen trampa, retuercen los argumentos, ocultan los datos, pero al hacerlo señalan la necesidad de la democracia y la libertad. Necesidad que se hace más perentoria en la medida en que se constata su carencia.

Por esa razón, la historia política de las sociedades de la región sigue inmersa, a 200 años de la gesta emancipadora, en una lucha directa y efectiva de los pueblos por su poder soberano. Solo recientemente, dos países luchan por mantener abierto el ejercicio de la soberanía popular directa. En el resto, la soberanía popular y ciudadana sigue expropiada por las élites de poder y en el poder.

**La Revolución en la Historia.  
A 200 años de la Independencia Latinoamericana  
y a 50 años de la Revolución Cubana.  
Una reflexión histórica Política.<sup>2</sup>**

*“La revolución la hacen los pueblos...”*

Salvador Allende

*“El cambio que impulsamos no es para mí,  
ni para llevármelo para mi casa,  
sino que pertenece y es para los pueblos de Bolivia”*

Evo Morales

(Discurso de Inauguración  
XXIII Asamblea General de CLACSO,  
Cochabamba, octubre de 2009)

**La Revolución en la Historia**

La historia política reciente de latinoamericana se presenta propicia para reflexionar sobre las posibilidades del “cambio revolucionario” en las sociedades de la región. Para hacerlo considero que existen dos rutas posibles; la primera, a través de la experiencia histórica y, la segunda, la teórica. En ambas, la tarea es compleja e involucra distintas dimensiones epistemológicas y políticas.

La ruta que voy a tomar para analizar la cuestión de la revolución en la historia latinoamericana será la primera. En esa dirección voy a transitar por el camino propuesto por Hugo Zemelman, ir desde la historia a la política. Esto significa, en primer lugar, dejar de concebir la historia como una serie de situaciones lineales

---

<sup>2</sup> El presente artículo recoge las reflexiones vertidas en el Seminario organizado por la Embajada de Cuba en Chile, A 50 años de la Revolución Cubana, octubre de 2008; y en el GT de CLACSO, El Bicentenario Latinoamericano: dos siglos de revoluciones a la luz del presente, en su reunión de trabajo en Asunción, Paraguay, en noviembre de 2008. Publicado en Beatriz Rajland y María Celia Cotarelo. *La Revolución en el Bicentenario. Reflexiones sobre la emancipación, clases y grupos subalternos*. CLACSO, Buenos Aires, 2009. Pp.39-56. Hay una versión publicada en la Revista de Historia y Ciencias Sociales, N°6, 2010.

que se suceden progresivamente en el tiempo y en el espacio con algunas interrupciones, para entenderla como un proceso complejo de construcción de voluntades sociales; como un horizonte abierto de posibilidades hacia el futuro. Y, en segundo lugar, realizar un esfuerzo por comprender a la política más allá del quehacer operativo que la confina a la esfera del poder, para aprehenderla como conciencia de la historicidad del momento, como construcción de proyectos resolutivos en el plano de las contradicciones inmediatas.

Este tipo de reflexión teórica y política exige un esfuerzo de apertura del razonamiento para captar la dinámica compleja y multidireccional del movimiento que constituye la realidad social e histórica. Para tal efecto, debemos organizar el conocimiento histórico a partir de las exigencias determinadas por los proyectos de construcción social en disputa o en conflicto. Ello da como resultado la subordinación del pensamiento teórico e ideológico al momento histórico que contiene esas potencialidades de futuros posibles, lo que nos lleva a la apropiación de la realidad a través del análisis de acciones y proyectos ubicados en el interior de un horizonte histórico y no de un esquema teórico. No se trata de abandonar el momento teórico si no aceptar epistemológicamente que los cambios sociales, políticos, históricos radicales, es decir, revolucionarios, nunca esperan a los teóricos para realizarse.

En efecto, ninguna de las revoluciones que podemos identificar en la historia política moderna (XVII-XX), particularmente las revoluciones burguesas, fueron realizadas a partir de una teoría política que explicitaba el tipo de cambio y el sujeto histórico que debía producirlas. Ellas fueron revoluciones triunfantes. Mientras que las “revoluciones no burguesas”, especialmente las realizadas durante el siglo XX, se desarrollaron con un guion teórico en la mano y la mayoría de ellas fracasaron o fueron derrotadas.

La teoría revolucionaria (así como la teoría democrática), por lo general, surge de la experiencia histórica. El problema central de la revolución no burguesa del siglo XX fue que sus teóricos transformaron algunas de las revoluciones de ese siglo en “modelos a seguir” y a los revolucionarios en operadores o habilitadores de la historia a construir. Este fue un problema que recientemente ha comenzado a ser superado.

En verdad todo cuanto sabemos de la “revolución” procede del estudio de las revoluciones concretas. Estas constituyen de facto el criterio para juzgar a las demás, su influencia en la reflexión teórica, política e histórica ha sido muy importante. Esta influencia se ha ejercido, de forma prospectiva, sobre los revolucionarios, los contrarrevolucionarios y los analistas sociales; y, retrospectivamente sobre los protagonistas y los historiadores. En definitiva, se han constituido en modelos analíticos.

Cabe señalar, siguiendo a E. J. Hobsbawm, que los modelos analíticos surgieron de la selección arbitraria de revoluciones que formaban parte del universo intelectual de los analistas. Por ejemplo, la tradición china del cambio revolucionario no formaba parte de los análisis occidentales, aunque Mao estaba claramente influido por ellos. La revolución mexicana fue ignorada por todos durante mucho tiempo. Ni siquiera hay una referencia a ella en el influyente análisis de la revolución realizado por Régis Debray.<sup>3</sup>

La teoría y la práctica revolucionaria, en América Latina, fueron eclipsadas por la insurrección armada de los cubanos entre 1956-1959. La experiencia cubana dio lugar a un desarrollo explosivo de reflexiones sobre la revolución, la teoría y la praxis revolucionaria. Al cabo de unos pocos años un nuevo modelo revolucionario se había constituido para desgracia de la revolución y de los procesos de cambio histórico. Durante dos décadas, entre 1959-1979, algunos revolucionarios latinoamericanos construyeron de manera desordenada e improvisada una teoría revolucionaria a partir de la experiencia cubana en una lúdica combinación con el modelo revolucionario bolchevique de 1917 y, otros, se prepararon un explosivo “cóctel revolucionario” con la revolución china.

En fin, la teoría política revolucionaria es abundante en contraste con las revoluciones efectivamente realizadas y concretizadas en la historia contemporánea de la región. En los últimos 50 años la única revolución concreta, aún en proceso histórico, ha sido la cubana.

A pesar de haber sido desterrada de la reflexión política y teórica en las últimas décadas del siglo XX, por el pensamiento

---

<sup>3</sup> Debray, Régis (1967). *Revolución dentro de la Revolución Lucha armada y lucha política en América Latina*, Maspéro, París.



político posmoderno,<sup>4</sup> la revolución como instrumento histórico y político para el cambio ha sido permanentemente invocada a comparecer en la historia de las sociedades latinoamericanas.

La historia reciente de América Latina ha reinstalado el interés por el cambio histórico político e incluso por la revolución. En efecto, la cuestión sobre cómo hacer, intervenir y construir la historia, la replantearon los chiapanecos, los zapatistas y el subcomandante Marcos, en enero de 1994 en la Selva Lacandona, en México.

En efecto, el levantamiento insurreccional del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, puso en movimiento un renovado esfuerzo por re-pensar dos cuestiones, que en esos años estaban en pleno proceso de olvido: la revolución y el socialismo. Uno de los principales méritos políticos de los zapatistas y de la fecunda y literaria pluma del subcomandante Marcos fue instalar (entre los alicaídos sectores de la izquierda latinoamericana), a partir de una experiencia histórica y política concreta, la discusión y reflexión sobre la posibilidad histórica y política de producir y provocar el cambio histórico en las sociedades latinoamericanas.

Los zapatistas no estaban solos en esta tarea de repensar el cambio político e histórico, sino también los movimientos sociales, políticos y las diversas acciones colectivas de protesta y resistencia, parafraseando a Franz Fanon, de los condenados por el neoliberalismo quienes, en la década de los noventa, abrieron nuevas rutas para la revolución política y social en diversos países de la región. Hace ya una década, si tomamos 1998 como punto de partida, con la llegada al gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, el cambio político, social e histórico con sentido revolucionario se hizo nuevamente presente en las sociedades latinoamericanas con mayor o menor intensidad.

El cambio revolucionario volvió a recorrer el continente latinoamericano de la misma forma como lo hizo hace 50 años bajo el influjo de la gesta revolucionaria cubana. El triunfo de la insurrección armada en contra de la dictadura de Fulgencio

---

<sup>4</sup> El pensamiento posmoderno niega la revolución, a través de la sentencia de que el "futuro ya estaba aquí" y que lo único posible era vivir en un "eterno presente", se negaba la utopía como la construcción colectiva del futuro. Los planteamientos del pensamiento único se hicieron hegemónicos imponiendo a la política en general y "revolucionaria", en particular, una postura pragmática, realista y presentista. Se trataba del fin de la revolución.

Batista en 1959 y la puesta en marcha del proceso revolucionario de carácter democrático y socialista en Cuba, abrió la puerta al cambio político revolucionario en todo el continente.

La “revolución” entendida como la capacidad que tienen determinados sujetos o grupos sociales y políticos de asumir la dirección del cambio histórico con objeto de construir la historia, se ha hecho presente en América Latina en cuatro “coyunturas críticas” que dieron lugar a procesos revolucionarios con distintos y desiguales resultados. Antes de referirme a ellas, voy a precisar lo que entiendo por revolución.

Así como la democracia, el socialismo y la revolución tienen un carácter polisémico, complejo y conflictivo. Debido a que, en primer lugar, soportan variadas definiciones y, en segundo lugar, hacer una revolución, instalar e impulsar un proceso revolucionario es una problemática compleja, fundamentalmente, por el carácter multidimensional de los problemas a resolver. Agreguemos a esto que toda revolución requiere de diversos “tiempos políticos” para su realización. En ese sentido, se trata de una tarea histórica de larga duración. El “tiempo revolucionario” constituye una variable central a la hora de hacer el análisis de la revolución. Una cosa es el estallido revolucionario y otra cosa es el proceso revolucionario. La revolución bolchevique, por ejemplo, triunfó en octubre de 1917 pero, 74 años de proceso revolucionario, no impidieron su derrumbe y fracaso. La clave de la complejidad de la revolución no está en el estallido sino en el proceso histórico que pone en movimiento. Y ese movimiento es fuente permanente de conflicto político e histórico. La revolución no es solo producto del conflicto social sino es productora de conflictos y, por ende, de resolución política de ellos.

En suma, una revolución es un proceso histórico impulsado por sujetos sociales que en un momento determinado y bajo ciertas condiciones políticas y sociales, deciden intervenir la historia para asumir su dirección e instalar un proceso de cambios profundos y radicales de las estructuras de poder y en la vida de los sujetos que habitan una sociedad dada. Esa intervención histórica puede tener diversos objetivos, tales como: construir una nueva sociedad; afianzar y consolidar cambios societales ya producidos, y/o barrer con los obstáculos que no permiten el despliegue total de las nuevas estructuras sociales que se han desarrollado en la sociedad.

Por lo anterior, es posible identificar distintos tipos de revoluciones. Sin profundizar en este tema, el análisis de las revoluciones o de los procesos revolucionarios permite distinguir gruesamente, por un lado, las *revoluciones políticas* y, por otro, las *revoluciones sociales*.

Las *revoluciones políticas* son las “revoluciones” más frecuentes que registra la historia de occidente desde la época moderna hasta el día de hoy. Poseen un alcance limitado, ya que sólo afectan a la estructura política de una sociedad, lo que no quiere decir que no sean importantes y significativas para la historia como para el cambio político y social. Sin lugar a duda, tienen y han tenido diversas consecuencias no sólo para las sociedades en que acontecen sino para muchas otras e inclusive para el mundo. Pero los cambios políticos que instalan este tipo de revoluciones, por más radicales que sean, no afectan en grado considerable la estructura económica y social de las sociedades. Dichas estructuras, en muchos casos, se mantienen con cambios menores.

Todo esto es distinto en el caso de una *revolución social*, cuya característica sobresaliente consiste en alterar drásticamente la estructura socioeconómica de la sociedad. Las relaciones sociales y económicas básicas, la posesión de los principales medios de producción, el status económico y político de todas las clases y grupos sociales son modificadas de manera significativa. Se trata de una transformación total. Son muy pocas las dimensiones societales que permanecen. Tal vez, las más resistentes hacia el cambio revolucionario sean las culturales y/o de las mentalidades. Otra característica es que las revoluciones sociales son acompañadas por un grado importante de violencia. Toda revolución social conduce, por lo general, a guerras civiles. Las principales fuentes del poder social son disputadas abiertamente y la consolidación del proceso revolucionario sólo será posible con la derrota militar y política de aquellos que detentaban el poder o se le oponen.

Ahora bien, este tipo revoluciones han sido acontecimientos excepcionales en la historia y, en lapso de dos siglos, el mundo sólo ha conocido cuatro, a saber: la revolución bolchevique de 1917; la revolución china de 1949, la Revolución cubana de 1959 y la revolución en la sociedad soviética en 1991.

Por tanto, las revoluciones sociales no pueden ser identificadas, como se hace con las revoluciones políticas, con determinadas transformaciones que se operan en la forma de gobierno o régimen político de una sociedad dada, sino con un cambio total y radical de las estructuras que la conforman.

La revolución constituida como un instrumento social y político ofrece a los sujetos la posibilidad de experimentar con la historia. Esto a su vez supone en los "sujetos revolucionarios" la capacidad para la novedad y la aventura. Dos rasgos característicos que según Marshall Berman posee el ser revolucionario.<sup>5</sup> La revolución es justamente una experiencia vital, libertaria, que produce:

*"un ambiente que promete aventuras, poder, alegría, desarrollo, transformación de uno mismo y del mundo y que, al mismo tiempo, amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que conocemos, todo lo que somos. Los ambientes y las experiencias revolucionarias modernas traspasan todas las fronteras de la geografía y de las etnias, de las clases y de las nacionalidades, de las religiones y las ideologías: en este sentido se puede decir que la revolución une a toda la humanidad. Pero se trata de una unidad paradójica, unidad en la desunión: nos introduce a todos en un remolino y contradicción, de ambigüedad y de angustia perpetuas. Ser revolucionario moderno es formar parte de un mundo en el que, como dijo Marx "todo lo que es sólido se evapora en el aire".*

Esta experiencia máxima de libertad ha sido vivida en América Latina en tan sólo cuatro coyunturas históricas y políticas, en las cuales los sujetos latinoamericanos encontraron la posibilidad de hacer la revolución moderna, de experimentar con la historia:

1.- *La primera experiencia revolucionaria* nos remite al proceso de emancipación colonial a comienzos del siglo XIX. En esa oportunidad, la revolución tuvo un carácter continental de liberación anticolonialista, americanista, prorrepública, libertaria y, en algunos casos, antiesclavista. Sin embargo, ese proceso no fue una experiencia verdaderamente decisiva

---

<sup>5</sup> Berman, Marshall (1999). *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. Editorial Siglo XXI. México.

para los distintos grupos sociales participantes. Debido a que los grupos estratégicos que asumieron su dirección no fueron lo suficientemente comprometidos con el cambio como para transformar profunda y radicalmente la sociedad existente. La vieja estructura de valores y el sentido ritual de la sociedad colonial no fueron seriamente conmovidos. Las ideologías y las metas de la violencia guerrera emancipadora se quedaron cortas. No hubo un impacto coherente ni masivo sobre las gentes. No fue una experiencia moderna decisiva.

Por cierto, no se puede negar que hubo trastornos sociales, económicos, culturales, políticos e ideológicos. Pero la herencia colonial se mantuvo, por largo tiempo, hasta bien entrado el siglo XIX e incluso durante el siglo XX era todavía fuerte, sobre todo en lo que concierne a las formas tradicionales de ejercer el poder y practicar la política.

El proceso histórico de emancipación colonial entre 1810-1824, no fue una experiencia vital, transformadora. No fue una revolución social sino una importante y trascendente revolución política. Su efecto político central fue sacudirse el dominio de un imperio trasatlántico, más que promover una reconstrucción drástica de la sociedad. De modo que, siendo una revolución moderna, fue una revolución trunca, puesto que dejó subsistir e incluso reforzó, en algunos casos, estructuras políticas, sociales y económicas tradicionales. Dicho proceso no desembocó en una "gran transformación".

2.- *La segunda experiencia revolucionaria* es producto la crisis de la dominación oligárquica. Estalla en México en 1910, se trata de la revolución de los campesinos y pobres del campo dirigidos por Emiliano Zapata y Francisco Villa, quienes impulsaron una revolución agraria, anti-oligárquica, democrática y libertaria. Si bien, la revolución mexicana-zapatista no tiene una dimensión continental como la primera, su influjo se hace presente en la mayoría de los procesos políticos de cambio político, social y económico que son impulsados en los diferentes países de la región en las primeras décadas del siglo XX. Dando lugar a lo que podríamos señalar como la primera experiencia reformista/revolucionaria latinoamericana.

Al igual que la anterior, se trata de un ciclo de transformaciones políticas. Son cambios políticos limitados a las estructuras institucionales del Estado, del régimen político o de las formas de gobierno, de la ciudadanía, etcétera. Además, se modifican algunas dimensiones de las estructuras económicas y sociales con el objeto de mantener y consolidar el modo de producción y la forma de acumulación capitalista.

3.- *La tercera experiencia revolucionaria* será la protagonizada por la Revolución Cubana de 1959. Este proceso revolucionario desarrolla un carácter democrático, anti-dictatorial, antiimperialista (antiestadounidense), anti-oligárquica, agrario y socialista.

La Revolución cubana tiene una proyección continental y mundial que, a diferencia de la revolución mexicana, se traduce en el surgimiento, durante dos décadas, entre 1959-1979, de distintos movimientos políticos revolucionarios que luchan por hacer posible la revolución socialista en el resto de los países de la región. Más fracasos que éxitos acompañan a este proceso revolucionario. Luego de la derrota de la revolución social sandinista, el ciclo revolucionario latinoamericano, abierto por la Revolución cubana, llegó a su fin.

Con el triunfo del capitalismo y de la democracia liberal en todo el orbe, tras la finalización del proceso revolucionario soviético entre 1989-1991, la revolución como instrumento para el cambio histórico, social y político fue abandonada y perdió toda validez política y los revolucionarios se convirtieron en sujetos extemporáneos, extraños, verdaderas piezas de museos, en relictos históricos. La revolución pasó a ser un acto histórico que pertenecía al pasado sin ninguna posibilidad de futuro. Despojada de sus contenidos sociales y utópicos, libertarios y emancipadores, democráticos y soberanos, el concepto de revolución servirá para describir o denominar los procesos de reestructuración capitalistas impulsados por los sectores dominantes nacionales y extranjeros.

Sin embargo, la resistencia social y política hacia la denominada "revolución capitalista neoliberal", que en el fondo no es otra cosa que una contrarrevolución antipopular, dio lugar a *al cuarto proceso revolucionario* que recorre actualmente

al continente latinoamericano, reactualizando y revitalizando el proyecto revolucionario de emancipación social y humana y desmintiendo de manera categórica a aquellos que teórica y políticamente habían dado por muerta o por superada la revolución.

El actual proceso revolucionario es anti-capitalista neoliberal, anti-neocolonial y prosocialista. Sin embargo, se trata de un proceso fundamentalmente político. Ello explica, por ejemplo, la tendencia a impulsar el cambio político institucional a través de un instrumento esencialmente decimonónico como es la convocatoria de Asambleas Constituyentes. Este aspecto marca la diferencia central y sustancial entre el proceso revolucionario cubano y los actuales procesos de cambio histórico en América Latina. Es decir, entre una revolución social y una política. La revolución bolivariana, por ejemplo, hasta ahora es esencialmente, política. Lo mismo ocurre con la boliviana. No afectan las principales fuentes del poder social y, especialmente, no transforman radicalmente la estructura de la propiedad privada de los medios de producción. Ese es su límite. Su principal frontera.

### **La Revolución Cubana una Revolución Social Triunfante**

La Revolución cubana constituye la única revolución social triunfante en la región latinoamericana. El proceso revolucionario cubano es holístico. Las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales que vive la sociedad cubana luego de 1959 son de tal intensidad y profundidad que modifican radical y completamente lo existente. En pocos años todo vestigio de la sociedad capitalista cubana desaparece.

Cabe señalar que la Revolución cubana o, mejor dicho, la fase insurreccional de ella tuvo un carácter eminentemente político. Diríamos que se trataba de una revolución política de carácter nacional, antidictatorial, democrática y antiimperialista. Oportuno es advertir que la Revolución cubana tiene en lo esencial tres fases: la primera de 1956 a 1959, la lucha armada e insurreccional en contra el régimen dictatorial de Fulgencio Batista; la segunda de 1959 a 1961, la fase social democrática y, la tercera, desde 1961 hasta el día de hoy, la fase socialista. Esta última constituye el proceso revolucionario propiamente

tal. La acérrima oposición de los sectores sociales opositores pro-capitalistas y proimperialistas nacionales, la obtusa actitud asumida por el departamento de Estado estadounidense, y la presión de las masas populares para la solución de los problemas sociales más urgentes, durante la segunda fase, serán los factores que hicieron que en un corto lapso se pasara a la revolución social.

Ésta se inicia cuando la dirigencia revolucionaria cubana decide dos cosas fundamentales: primero, poner en marcha un conjunto de transformaciones radicales en las estructuras sociales y económicas que modifican, por un lado, las relaciones sociales de producción y, por otro, la estructura de la propiedad, aboliendo la propiedad privada. Y, segundo, la declaración por parte de Fidel Castro que la Revolución Cubana es una revolución socialista. Como es sabido, luego de los bombardeos de la CIA sobre los aeropuertos de San Antonio de los Baños, Santiago y La Habana, el 16 de abril de 1961, Fidel Castro, señaló que los Estados Unidos no aceptaban que Cuba estuviera realizando en sus narices una revolución socialista: "Esta es una revolución socialista y democrática de los humildes, con los humildes y para los humildes".

De esta manera la dirección revolucionaria cubana confirmaba discursivamente la destrucción de la principal base constitutiva del modo de producción capitalista: la propiedad privada. Tengamos presente que a esa fecha se había abolido la iniciativa privada y la economía de mercado, el 75% de las empresas capitalistas se habían estatizado, esto incluía las industrias, la producción y el comercio del azúcar, los recursos mineros, el sistema bancario, el comercio interno y el comercio exterior, los medios de transporte y de comunicación, así como los servicios públicos. La Junta Central de Planeamiento (JUCEPLAN), creada en 1959, pasó a controlar y dirigir la economía de Cuba. Esto significaba que el "plusvalor" producido por los trabajadores cubanos ya no iba a incrementar las arcas del capital privado sino a posibilitar la puesta en marcha de distintas políticas públicas y sociales destinadas a mejorar las condiciones materiales de existencia de las y los humildes. Con ello, se iniciaba la democratización de la riqueza generada por la sociedad cubana. Si bien, las bases de sustentación material de ella seguían siendo las mismas (exportación al comercio exterior de productos primarios), pasaron a ser controladas por el Estado.



Se trataba de un cambio revolucionario, central y fundamental: modificar la estructura de la propiedad en general y de los medios de producción, en particular, es lo que permite diferenciar una revolución política de una social. Por esa razón, puedo sostener que la única revolución social que se ha registrado en la historia, hasta el momento, en América Latina y el Caribe ha sido la cubana.

El carácter socialista de la Revolución cubana se acentuó aún más cuando los Estados Unidos establecieron el bloque general de las exportaciones hacia la isla. Fue en ese momento que se decidió convertir en propiedad social todas las empresas norteamericanas. En cierta forma, la orientación socialista de la revolución se fue adoptando en la medida que se enfrentaba a la historia y sus retos, su ejecución no es producto de un plan preconcebido. Precisamente todo lo contrario: la revolución tentó su camino paso a paso, reaccionando frente a los retos y necesidades de las condiciones históricas; enseñando a sus dirigencias y a las masas los imperativos categóricos de su propio desenvolvimiento; superando los diversos obstáculos que impedían su progreso. Esta ha sido una de las cualidades políticas e históricas de la Revolución cubana que le ha permitido mantenerse hasta hoy.

No voy a detenerme en el análisis interno de dicho proceso revolucionario, que es de una riqueza enorme para la elaboración de una teoría de la revolución social y del cambio histórico. Pero quisiera destacar el hecho de que ese proceso ha sido capaz de sortear una serie de dificultades y obstáculos debido principalmente a su flexibilidad histórica, es decir, se trata de una revolución que se va construyendo cada día. Ello significa que no hay respuestas previamente elaboradas. Esta situación es muy paradójica, pues los revolucionarios latinoamericanos durante la década de los sesenta y setenta intentaron reproducir la experiencia cubana sin comprender sus peculiaridades. Otros, simplemente la rechazaron porque no se ajustaba a lo establecido por los teóricos de la revolución socialista.

La peculiaridad de la Revolución cubana se encuentra en el hecho de que se hizo sin un libreto previo. Por esa razón, es una revolución moderna, o sea, una experiencia vital que invita a la aventura libertaria. Se trata de una revolución social semejante a las

revoluciones políticas impulsadas por las burguesías occidentales que realizaron revoluciones, yo diría, bastante improvisadas, sin contar con una teoría revolucionaria previa. Estimo que esa libertad revolucionaria permitió conquistar el poder político y, de manera creativa, poner en práctica un sistema político que la mayoría de los teóricos de la política habían rechazado, la democracia.

La Revolución cubana es una “revolución social” triunfante de carácter socialista. Y este carácter está dado, fundamentalmente, por una cuestión central a saber: el desaparecimiento de la propiedad privada de los medios de producción y la creación y desarrollo de la propiedad estatal. Mientras dicha condición se mantenga al interior del proceso político cubano, la revolución socialista seguirá su marcha histórica. Sin embargo, luego de 50 años de haberse puesto en movimiento, y a la luz de sus resultados, es necesario preguntarse sobre cómo hacer posible que el socialismo alcance desarrollos económicos sustentables en el tiempo y logre dotar de mayores recursos que permitan salir de la fase de simple reproducción y pasar a una fase de reproducción ampliada. O sea, que se generen condiciones de prosperidad económica y social que imposibiliten y frustren la conformación de sectores sociales descontentos con el proceso. No obstante todos los avances sociales y económicos que se han experimentado en Cuba, siguen existiendo un cúmulo de problemas pendientes que en el futuro próximo se deberán enfrentar y solucionar para evitar que se gesten contradicciones semejantes a las sufridas en las sociedades socialistas soviéticas que, al no ser enfrentadas y solucionadas a tiempo, terminaron por arrasar a la revolución socialista por medio de otra revolución.

Esos problemas son esencialmente políticos. En efecto, el principal problema pendiente del proceso revolucionario cubano tiene que ver con la construcción de un régimen político democrático, con cómo dar efectiva realidad histórica y política a dos razones de toda revolución moderna: la libertad y la soberanía popular.

### **Consideraciones Finales**

Con todo lo dicho hasta ahora, podemos sostener que la revolución ha sido una preocupación central entre los actores sociales y políticos de Latinoamérica y un tema de reflexión

permanente durante la mayor parte del siglo XX. Como he señalado, esta preocupación decayó en la década de 1990 como consecuencia de los fracasos de los socialismos reales; de la expansión de la democracia liberal representativa y del predominio del pensamiento político posmoderno que acompaña a la reestructuración neoliberal de la región. La idea de la revolución como la del cambio histórico fue expurgada del vocabulario y del quehacer de los actores sociales y políticos estratégicos de la región. Se convirtió en un concepto censurado de la misma manera que socialismo, izquierda, lucha de clases, imperialismo, explotación, enajenación y otros tantos conceptos y palabras que fueron usadas en su momento para dar cuenta de la forma como operaba el capitalismo en las sociedades latinoamericanas. De una u otra manera, el pensamiento crítico de raíz marxista cayó en desuso y perdió toda validez explicativa de la realidad social, política y económica.

No obstante, el levantamiento zapatista, las rebeliones populares anti-neoliberales y la presencia de Cuba como único bastión del socialismo contribuyeron a erosionar la hegemonía del pensamiento único y, con base en la acción histórica y política de los condenados de tierra, la revolución y el socialismo han vuelto a ser parte de la reflexión teórica y del quehacer político de la izquierda latinoamericana.

La (re)vuelta de la revolución y del socialismo impone distintos desafíos teóricos, políticos e históricos, especialmente, si pensamos en la realización de una revolución social y no sólo en una revolución política-institucional-constitucional.

La construcción de una sociedad igualitaria, justa y democrática requiere esencialmente de la realización de una revolución social que desplace a las clases dominantes del poder y que termine con la apropiación privada de la riqueza y con la propiedad privada. El problema político que se presenta para hacer posible esta construcción es, como dice el refrán popular, "nuevo de puro viejo": cómo hacer la revolución.

En las nuevas condiciones políticas de América Latina y del capitalismo, la acción revolucionaria debiera combinar todas "las formas de lucha política y social" desde la acción política electoral-institucional a la insurreccional. Debe haber un

proceso de gestación y desarrollo de un planteo anticapitalista y prosocialista. Este proceso implica el protagonismo de los movimientos sociales populares, conquistas sociales y políticas, radicalización ideológica y, sobre todo, construcción de poder popular.

La revolución social constituiría el momento definitorio de esa acumulación de experiencias en un marco de confrontaciones sociales, que generarían las condiciones de posibilidad de la acción histórica revolucionaria. Cabe señalar que la revolución es un acontecimiento necesario, pero no único, ni excluyente de una sucesión de episodios políticos, sociales y culturales que forjan la totalidad del proceso revolucionario.

Un marco para el desarrollo de episodios revolucionarios que vayan anticipando el momento revolucionario sería la emergencia de gobiernos de izquierda, reformistas o nacionalistas radicales de clara orientación anticapitalista. En este caso, la batalla anticapitalista coexistiría con administraciones surgidas del voto popular y en conflicto con las clases dominantes. Se trata de explotar al máximo las condiciones que brinda la democracia política.

La presencia de gobiernos de este tipo constituye una eventualidad y no una etapa inexorable de preparación del socialismo. Pero es una alternativa probable en el escenario actual, ya que los mecanismos constitucionales tienden a potenciar la incidencia de las urnas, en experiencias que anticipan el desenlace revolucionario.

Una estrategia política para la izquierda latinoamericana actual con el objeto de provocar el cambio histórico-político debería direccionar o intervenir políticamente la historia tiene muchos puntos en común con la mixtura de guerra de posición y movimiento que planteó Gramsci. Con el primer curso se apunta al logro de conquistas populares dentro de las trincheras institucionales de la democracia política, y el segundo rumbo prepara la captura del poder. Sin que esa captura anule la posibilidad sugerida por los zapatistas de ir construyendo el poder popular desde abajo y fuera de esos espacios institucionales.

Una actualización de la estrategia gramsciana supone evitar tanto quedar atrapado en la institucionalidad política democrática (como ha ocurrido tradicionalmente con los partidos políticos de izquierda en Latinoamérica), como el aislamiento del sentir popular. Sostener exclusivamente la guerra de posiciones conduce a la aceptación del orden político capitalista, pero propiciar sólo la guerra de movimientos empuja a los socialistas a la marginalidad. La combinación de ambos rumbos prepara y genera las condiciones políticas e ideológicas de la revolución social anticapitalista.

Tenemos la impresión de que esta estrategia política permite ayudar a resolver una de las principales cuestiones del pensamiento revolucionario: el dilema entre reforma o revolución. Las reformas y las revoluciones no transitan por universos separados, ni pertenecen a etapas excluyentes. Ambos caminos se han verificado en distintos momentos del capitalismo. Las reformas y las revoluciones forman parte del escenario capitalista desde la maduración de este sistema y perdurarán por mucho tiempo.

Habiendo mucho más que decir, termino con la siguiente reflexión: existe actualmente la oportunidad política de volver a colocar en el horizonte de posibilidades la opción por el socialismo, de la misma manera que hace 50 años lo hizo la Revolución cubana, pero se necesita urgentemente trabajar sistemáticamente la reflexión teórica e histórica del socialismo con caracterizaciones, estrategias y alineamientos adecuados. Estoy seguro de que con entusiasmo y reflexiones críticas se construirá el nuevo proyecto que los humildes, los oprimidos, necesitan para transformar la sociedad capitalista actual.

## **Chile: una República con problemas pendientes. Re-pensar la República desde una perspectiva democrática revolucionaria.<sup>6</sup>**

### **Presentación**

Mucho antes que el intenso torbellino mercantil-consumista-enajenador-mediático instalado por los medios de comunicación, especialmente, por la televisión abierta nacional en torno a la conmemoración del “Bicentenario de la Independencia Nacional” avasallara la existencia cotidiana de las y los ciudadanos nacionales, entorpeciendo e impidiendo con ello una mínima reflexión política e histórica ciudadana, sobre el significado profundo de tal conmemoración, tuvimos la oportunidad de escribir este artículo reflexivo en relación con dicha celebración.

En octubre del año 2004, seis años antes de la conmemoración, la Secretaria General de la Universidad ARCIS organizó el Foro Panel: “Segundo Centenario: ¿Qué República?”, con el objetivo de interrogarse sobre el pasado, presente y futuro de la República, como forma o régimen político. Era una invitación a repensar políticamente la República al cabo de sus 200 años de vida independiente. En dicho Foro participamos como expositores invitados el sociólogo Felipe Portales, autor del libro *Los Mitos de la Democracia*, y quien escribe estas líneas, autor del libro *La Frontera de la Democracia*. En nuestros libros, ambos abordábamos el mismo objeto de estudio con perspectivas teóricas, metodológicas y políticas distintas: la trayectoria de la democracia en Chile. Coincidíamos en la crítica histórica-política de las formas institucionales que esta había adoptado en los siglos XIX y XX, respectivamente. Al mismo tiempo, nos planteábamos como críticos acérrimos de la democracia posautoritaria (1990-2004). Por lo tanto, el Foro nos brindaba la oportunidad de exponer

---

<sup>6</sup> El presente texto fue elaborado para el Foro Panel Segundo Centenario: ¿Qué República? Organizado por la UARCIS, octubre de 2004. Posteriormente fue publicado, Juan Carlos Gómez Leyton. *Re-Pensando la Democracia en el Bicentenario*, en Luis Carlos Parentini (compilador): *Historiadores Chilenos frente al Bicentenario, Cuadernos Bicentenario Presidencia de la República*. Universidad Finis Terrae, Universidad Católica Silva Henríquez, Universidad Andrés Bello, Santiago de Chile, 1° edición, mayo 2008, pp. 235-242. El texto que aquí reproducimos es el que se leyó en el Foro Panel, revisado y actualizado.

nuestras respectivas tesis y evaluar no sólo lo que la democracia había sido durante los doscientos años transcurridos, sino también la posibilidad de reposicionar en el debate académico y, tal vez político, la utopía democrática desde una perspectiva revolucionaria.

El propósito de que este ensayo abra el presente libro dice relación con el hecho de que luego de 209 años de vida independiente (1810-2019) y luego de 30 años de régimen democrático posautoritario (1990-2020), el Estado nacional y la sociedad chilena están atravesando por un conjunto de problemas históricos y políticos que buscan redefinir muchos de los aspectos de las dimensiones ideológicas, doctrinarias, identitarias y culturales con las que fue fundada la República desde 1810.

En la coyuntura crítica abierta por la rebelión popular y ciudadana de octubre 2019 convergen desde distintos meandros del gran río histórico los cuatro grandes problemas de larga duración que identificamos en este artículo. En nuestra opinión, esos problemas no solo han obstaculizado la instalación de una democracia capitalista o de un capitalismo democrático sino también han impedido la conformación de una democracia social y de una sociedad justa e igualitaria.

Aunque con algunas dudas, pensamos que la coyuntura constitucional establecida desde julio de 2021 podría resolver, ojalá, satisfactoriamente, algunos de los cuatro problemas aquí identificados. Todos son complejos. Pero la oportunidad es única para hacerlo.

He estructurado este ensayo en tres apartados. En el primero, expongo los cuatro mega problemas que presenta la formación social nacional desde su conformación a comienzos del siglo XIX. Aunque la "sociedad nacional" es un proceso abierto con la consecución de su emancipación colonial, sus raíces son parte, justamente, de las estructuras legadas por la fase colonial desde el siglo XVI. Estos mega problemas tienen el carácter de ser estructurales y no han sido resueltos a lo largo de estos 200 años. Aún esperan solución.

En el segundo, analizo uno de esos problemas, parafraseando a Norbert Lechner, la difícil, tortuosa y siempre

inacabada construcción de la democracia en Chile. Esta, por distintas razones, ha sido permanentemente postergada, obstaculizada, frenada, constreñida e incluso negada, fundamentalmente, por las élites de poder. A su vez, la democracia, ha sido parte central de la conflictividad política de la sociedad chilena en las últimas décadas.

Por eso, cerramos este ensayo, con una propuesta por una nueva y remozada utopía democrática.

### **Una República con problemas pendientes**

La actual República chilena, al momento de conmemorar sus 200 años de vida política independiente, arrastra un conjunto de problemas sociales, económicos, políticos y culturales no resueltos, a pesar de los distintos esfuerzos que se han realizado a lo largo del tiempo para darles algún tipo de solución. Los abordamos a continuación:

- a) **En materia social**, el principal problema que afecta a la República de Chile desde su constitución en el siglo XIX es la combinación entre desigualdad social y pobreza. Tengamos presente que para el Primer Centenario (1910) Chile era una de las sociedades latinoamericanas más desiguales y pobres de la región. Aproximadamente el 70% de los ciudadanos nacionales vivían en condiciones de pobreza o en extrema pobreza. Si bien, actualmente, las condiciones materiales no son las mismas de aquellos años, la pobreza no ha dejado de ser un problema social y político. Basta recordar las recientes estadísticas sobre este tema. De acuerdo con los últimos datos oficiales proporcionados por el gobierno, en la actualidad, la pobreza afecta a un 15,1% de la población nacional. No obstante, otros estudios no oficiales y alternativos elevan dicho porcentaje sobre el 50%. Lo cierto es que, desde una perspectiva de larga duración, la pobreza entendida como carencia de medios materiales: vivienda, alimentación, vestuario, educación, salud, salarios, para una adecuada y digna existencia humana, ha afectado a un porcentaje importante de ciudadanos nacionales. Obviamente, la pobreza es dinámica y debe ser analizada en relación con los contextos históricos en que se desarrolla: la



pobreza decimonónica no es igual que la pobreza de la modernización industrial sustitutiva, la cual tampoco es igual a la pobreza de la modernización neoliberal actual. Pero, a pesar de todo, los pobres, como dice Serrat, “siguen y siguen llegando”<sup>7</sup>

En la sociedad chilena, la pobreza ha sido acompañada a lo largo de estos 200 años de vida independiente por la desigualdad.<sup>8</sup> La violenta conquista española en el siglo XVI sobre los pueblos originarios que ocupaban el actual territorio nacional dio lugar a la conformación de una sociedad ordenada en la desigualdad política, económica, social y cultural, la cual se ha mantenido hasta el día de hoy. Por esa misma condición, la sociedad chilena ha sido una sociedad ordenada en el conflicto social y en la ejecución histórica de una praxis de violencia política y social. Por esa razón, la violencia política y social ejercida y operada tanto por los dominadores como por los dominados ha sido el mecanismo político habitual para resolver los múltiples conflictos que provoca la permanente y persistente desigualdad.<sup>9</sup>

Actualmente, la desigualdad es uno de los problemas ampliamente reconocidos por los diversos actores sociales y políticos. No obstante, poco o nada se hace

---

<sup>7</sup> Nos referimos al tema compuesto por el cantautor catalán-español Joan Manuel Serrat: *Disculpe el señor*, incluido en el disco *Utopía*, editado en 1992, y que hace alusión a la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1991, el fin de la utopía social. Y al incremento tanto de la pobreza y la desigualdad en el mundo. Cabe señalar que en el momento que editamos este texto, la pobreza y la desigualdad a nivel mundial regional como nacional se han incrementado en varios puntos como consecuencia de la Pandemia de Covid-19 que afecta, desde el año 2020, a la sociedad global. Por eso, Serrat, los pobres siguen y siguen llegando y, sobre todo, según el cantautor “estos no se han enterado de que Carlos Marx está muerto y enterrado”.

<sup>8</sup> Sobre el tema de la desigualdad histórica resulta muy útil consultar el trabajo de Javier E. Rodríguez Weber. *Desarrollo y Desigualdad en Chile (1850.2009). Historia de su economía política*. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana/DIBAM, Santiago, 2017. Este libro confirma la tesis planteada en este ensayo que la pobreza, así como la desigualdad son una problemática no resuelta por los distintos procesos de modernización (oligárquica, industrial y neoliberal) ni tampoco con los procesos de democratización.

<sup>9</sup> Hemos profundizado esta idea de la violencia como articuladora de las relaciones sociales en la formación social chilena en nuestro ensayo: *Violencia, miedo y seguridad ciudadana en una sociedad neoliberal, Chile 1975-2018*, en: Fabiola Escárzaga y otros. *Reflexiones sobre las violencias estatales y sociales en México y en América Latina*, UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. México, 2020. pp.133-156.

para hacerla desaparecer o disminuirla. Todo lo contrario, tal como lo ha demostrado el economista Hugo Fazio, en la sociedad chilena puede modificarse la estructura política jurídica, pero no el mapa de extrema riqueza. Para provocar un efecto directo en dicho mapa, habría que terminar con la fuente principal de la desigualdad que no es otra que la alta concentración patrimonial y de la riqueza en poco menos del 10% de la población nacional.

Cabe señalar que desde la época colonial la riqueza ha sido atesorada por una pequeña y poderosa élite que no supera dicho porcentaje. Actualmente, menos de 10 grupos económicos son los verdaderos dueños del país. La alta concentración de la riqueza implica una profunda desigualdad económica y social. Situación que se ha visto profundamente agravada por el modelo económico neoliberal instalado por la dictadura militar (1973-1990) y desarrollado, ampliado y profundizado por los Gobiernos de la Concertación Partidos por la Democracia (1990-2010).

La desigualdad neoliberal se expresa de múltiples formas. De acuerdo con el índice Gini, el indicador más aceptado a nivel mundial para medir dicho problema, Chile tiene un índice de Gini de 0.5649, solo comparable con algunas tristes realidades como Nigeria y Bangladesh. Para contextualizar un poco, África al sur del Sahara tiene un índice de Gini de 0.4695, América Latina y Caribe 0.4931, Asia Oriental y el Pacífico 0.3809, Asia del Sur 0.3188, Europa del Este 0.2894, Medio Oriente y África del Norte 0.3803, los países industrializados o en vías de desarrollo con altos ingresos 0.3375. Vale decir, Chile posee una de las peores distribuciones de la riqueza en el mundo. Un mega problema que no tiene actualmente atisbos de solución. Seguirá pendiente.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Para la mayoría de las y los analistas de la revuelta popular y ciudadana de octubre de 2019, conocido ampliamente por los medios de comunicación de masas como el "estallido social", uno de los principales factores que lo provocaron se encuentra en las abismales desigualdades sociales y económicas fraguadas en la sociedad neoliberal. Si bien los índices de pobreza tendían a reducirse, la brecha de la desigualdad cada vez era mayor. Hasta que las y los "desiguales" no aguantaron más y explotaron con gran violencia en octubre de 2019. Aunque muchos señalaron que era la desigualdad de los últimos 30 años (1990-2019), en realidad esta es histórica, son aproximadamente 478 años en que los pueblos del territorio nacional soportan distintas y variadas formas de discriminación, desigualdad social, económica, étnica, cultural y política.

**b) En materia económica,** la sociedad chilena no ha logrado dar con el modelo económico que le permita desarrollarse de forma sustentable y equitativa en el tiempo.<sup>11</sup> En general, tres han sido los modelos de desarrollo económico capitalista implementados en el país a lo largo de estos dos siglos, a saber:

1.- en el siglo XIX, el modelo primario exportador (crecimiento hacia fuera, como lo denominara el economista, Aníbal Pinto Santa Cruz);

2.- en el siglo XX, 1930-1975, la industrialización sustitutiva de importaciones, ISI, (crecimiento hacia adentro); y

3.- desde 1975 hasta el día de hoy, el modelo económico neoliberal (crecimiento hacia fuera, nuevamente, con base en el neoextractivismo minero).

Los tres modelos han sido concebidos con la expectativa de lograr que la sociedad chilena alcance su condición de país capitalista desarrollado. Pero, como es sabido, han fracasado en lograr el tan ansiado desarrollo. Sus éxitos han sido relativos y coyunturales. Este tema sigue siendo una problemática abierta en el país.

El debate por el “modelo de desarrollo” dominó gran parte de la polémica política durante el siglo XX, especialmente, desde la Gran Depresión hasta la instalación del modelo de acumulación neoliberal por parte de la dictadura cívico militar en la segunda mitad de la década de los años setenta de dicho siglo. Si bien, durante los años dictatoriales, diversos sectores opositores democráticos discutieron críticamente la imposición de dicho patrón de acumulación, terminaron aceptando el modelo neoliberal y proclamando su validez.

En la actualidad (2010-2019), el neoliberalismo es uno de los consensos políticos centrales que ha

---

<sup>11</sup> La literatura sobre el problema económico del país es vasta y serían múltiples textos lo que hay que sostienen este punto. Basta recomendar uno reciente que avala este punto, también editado, años más tarde de la construcción de este ensayo, me refiero a: Iván Jaksic, Andrés Estefane y Claudio Robles (Editores). *Historia Política de Chile, 1810-2010*. Tomo III. Problemas Económicos. FEC/UAI, Santiago, 1° Edición, 2018.

permitido dotar de estabilidad política a la democracia posautoritaria. De manera que, el modelo económico no se discute. A pesar de los diversos problemas que presenta el capitalismo neoliberal, especialmente en lo que se refiere a la devastación humana y de la naturaleza por medio del neoextractivismo, sea minero, agrario, marítimo y forestal, la “acumulación por desposesión”, como lo denomina David Harvey<sup>12</sup>, las élites en el poder democráticas desde 1990 aceptaron, apoyaron y facilitaron la ampliación de dicho modelo de acumulación. Este régimen económico hace 20 años (1990-2010) que no se discute seriamente. Tampoco ha enfrentado propuestas alternativas transformadoras, ya que éstas se limitan a plantear una vuelta al capitalismo industrial o a la implementación de políticas prokeynesianas, adaptadas, a los tiempos de la globalización.<sup>13</sup>

A diferencia del siglo XX (1920-1973) chileno, cuando la discusión sobre el “desarrollo” era intensa y profunda, en la actualidad, si no fuera por el aporte de economistas críticos vinculados a ciertos centros académicos alternativos como CENDA, dirigido por Hugo Fazio, o la Fundación Sol y otras voces críticas de economistas, el silencio sobre esta materia sería casi total. Si bien, estos centros construyen diagnósticos y realizan estudios críticos, quebrando, en algo, la hegemonía agobiante del pensamiento neoclásico dominante en el país, están en los márgenes del sistema político.<sup>14</sup> Plantearse la cuestión sobre que otro desarrollo es posible, en la academia oficial, no tiene cabida ni se discute, más bien, se ignora.

---

<sup>12</sup> Ver: Harvey, David. *El Nuevo Imperialismo*, AKAL, España, 2004. pp. 111- 141.

<sup>13</sup> La coyuntura crítica abierta por la rebeldía popular y ciudadana de octubre de 2019 puso en la primera línea de discusión al patrón de acumulación neoliberal instalado en Chile desde 1975 hasta la fecha. La consigna popular era que el “neoliberalismo nació en Chile, muere en Chile”. Si bien, existe un consenso ciudadano y, algo en el ámbito político, de que el neoliberalismo es, ciertamente, responsable de los niveles de abuso económico, social, cultural y político, y que debiera ser reemplazado, no existe un modelo de desarrollo alternativo claramente delineado para su reemplazo.

<sup>14</sup> Actualmente existe una pobreza analítica sobre cuál sería el mejor modelo de desarrollo posible que pueda sustituir al neoliberal reflejando la imposibilidad de las “izquierdas” o sectores críticos de levantar un proyecto alternativo a la dominación neoliberal.

Con la instalación de la “democracia protegida” y los gobiernos concertacionistas, el patrón de acumulación neoliberal se profundizó, amplió y se consolidó en la sociedad, logrando una legitimidad que no tenía durante la dictadura, y se gestó lo que algunos economistas han denominado “época de oro del neoliberalismo nacional”<sup>15</sup>. Entre 1986 y 1997, la economía nacional experimentó un crecimiento de un 7,3% anual. Cifra notable y extraordinaria, solo comparable con el crecimiento que registraban los países asiáticos, que lo hacían al 10%. De allí que se consideraba a Chile como el “jaguar” de América Latina. Si bien, luego la economía tuvo un crecimiento más estable y recibió los impactos de las recesiones internacionales como la asiática y la crisis financiera del 2008, estos hechos no tuvieron la potencia para poner en discusión el modelo económico.

Si nos atenemos a la problemática de la pobreza y la desigualdad, la mayoría de los análisis críticos del modelo neoliberal imperante nos señalan que el crecimiento económico neoliberal combinado con políticas públicas focalizadas ha permitido reducir la pobreza, pero no ha significado una disminución de la desigualdad y, en particular, la distribución del ingreso ha empeorado. Sin embargo, a pesar de este consenso, los actores económicos estratégicos, los gremios empresariales, no están disponibles para discutir el patrón de acumulación neoliberal. Por esa razón, consideramos que tema de plantearse otro desarrollo, sigue pendiente en la sociedad, pues esta sigue siendo desigual e inequitativa, con una distribución injusta de la riqueza.

- c) En materia sociocultural,** la República tiene y mantiene serios y profundos problemas. Tal vez, el más importante y relevante de todos sea la marcada tendencia entre las y los chilenos de negar su diversidad cultural y étnica, sobre la cual se constituye la sociedad nacional. La profunda internalización en la población nacional de la tradicional tesis

---

<sup>15</sup> He tomado esta idea del economista Andrés Ulloa Oliva, Académico Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Universidad Católica de la Santísima Concepción.

levantada por las élites dirigentes a cargo de la construcción de la República durante el siglo XIX de que **“Chile, es un país de blancos...y donde lo indígena es sólo reconocible al ojo del experto”**, tiende a negar la existencia cultural e incluso social-histórica de los pueblos originarios.

Si bien, en los últimos años se han realizado esfuerzos por cambiar dicha postura, la ciudadanía nacional, que se reconoce como chilena, independientemente de sus condiciones socioculturales, es reacia a aceptar la diversidad cultural asumiendo una postura racista, xenófoba, segregadora y excluyente de todas y todos aquellos que provengan de grupos humanos que no sean blancos o europeos. La segregación, la exclusión y la discriminación han sido las formas históricas practicadas en la sociedad nacional al momento de enfrentar la diversidad y la pluralidad cultural.

- d) **En materia política**, el principal problema no resuelto desde el siglo XIX, que por su carácter, importancia y duración constituye un mega-problema o una megatendencia histórica, es la errática construcción de un régimen político democrático o una plena república democrática. Hacer la historia de ella es hacer, también, la historia del autoritarismo. En efecto, en el Chile actual como en el Chile del Centenario la democracia es todavía una cuestión pendiente; parafraseando, al economista Aníbal Pinto, podríamos decir que: Chile constituye “un caso de democracia frustrada”. Por esa razón, he sostenido en diversos trabajos que la democracia, no sólo como régimen político, sino, también, como sociedad o estado democrático es, actualmente, un tema pendiente, una cuestión política no resuelta. Veamos en específico este tema.

### **La República Democrática**

Actualmente, se asume que la democracia es una determinada forma de gobierno, un tipo particular de régimen político. Norberto Bobbio<sup>16</sup> señala que “por régimen democrático se entiende, primeramente, un conjunto de reglas de procedimiento

---

<sup>16</sup> Ver: Bobbio, Norberto. *El futuro de la Democracia*. Editorial. FCE, México, 1999.

para la formación de decisiones colectivas, en el que es prevista y facilitada la más amplia participación posible de los interesados". Esta definición se acerca a lo que el politólogo estadounidense Robert Dahl denomina poliarquías.<sup>17</sup> Según este autor, son poliarquías todos aquellos "regímenes que ponen el mínimo de restricciones a la expresión, organización y representación de opciones políticas y a las oportunidades de que disponen los oponentes del gobierno". La mayoría de los individuos están efectivamente protegidos en su derecho de expresar, privada o públicamente, su oposición al gobierno, de organizar, de formar partidos y de competir en elecciones en que el voto es secreto, libre y correctamente computado y en que los resultados electorales son vinculantes en base a reglas bien establecidas. Normalmente, el uso de medios violentos está prohibido y en algunos casos se castiga el hecho de invocar el uso de la violencia para fines políticos".

En síntesis, un régimen democrático implica competencia política y existencia de oposición; sufragio universal y otras formas de participación; elecciones libres, competitivas y a intervalos de tiempo regulares; electividad de todos los cargos más relevantes; partidos en competencia; fuentes de información diversas y alternativas. De manera que, estas son las condiciones mínimas, esenciales e indispensables para etiquetar a un régimen político como democrático. A los regímenes que restringen activa e institucionalmente esos requisitos, la literatura politológica los considera como no-democráticos.

La democracia, como todo régimen político, es un acto de creación histórica. Esto quiere decir que ella es producto de un conjunto de acciones colectivas desarrolladas por distintos grupos y fuerzas sociales, actores políticos que tienen la característica, por lo general, de ser los más relevantes de la sociedad. Son actores políticos estratégicos, es decir, con capacidad de poder. Por lo general, todo régimen político es, también, el resultado de un conjunto de conflictos político-históricos que debieron ser resueltos por los actores sociales y políticos estratégicos a través de dos posibles vías: la imposición o el consenso político.

Este último punto nos remite a la cuestión del origen de un régimen político, al "momento constitutivo", diría René Zavaleta

---

<sup>17</sup> Ver: Dahl, Robert. *La Poliarquía. Participación y Oposición*. Editorial Paidós, México, 1971

Mercado.<sup>18</sup> Este no es otro que el establecimiento, por parte de aquellos que tienen el control del proceso político, de ese conjunto de normas y procedimientos que regulan las relaciones Estado y sociedad, específicamente, aquellas que norman la lucha, acceso y ejercicio del poder político, así como de los valores que animan la vida política de esas instituciones.

Lo que conocemos como democracia “plena” (suponiendo que dicho calificativo tenga alguna coherencia, lo que es harto dudoso) responde a una fase muy reciente en el desarrollo de los regímenes democráticos. Estos han sido el resultado de un prolongado proceso histórico-político de democratización, es decir, de la instalación de los diversos requisitos o elementos constitutivos de un régimen democrático. Desde esta perspectiva, conviene no olvidar que la democracia -en el sentido que aquí le hemos dado- no es un suceso, sino más bien un larguísimo fluctuante y balbuceante proceso histórico que tendría, en el caso chileno, sus orígenes a comienzos del siglo XIX, o sea, con la fundación del Estado-nacional independiente.

El proceso de construcción de la democracia ha sido un camino tortuoso, lleno de meandros, laberintos, con distintas intensidades y aceleraciones. Por eso debemos pensar y reflexionar, sobre aquellas condiciones que no han permitido establecer ese estadio histórico, a estas alturas utópico, de la democracia plena.

Cabe señalar que en Chile alcanzamos ese estadio, llegamos a la democracia plena, pero no fuimos capaces de mantenerla y/o defenderla y dejamos que fuera aplastada por las fuerzas autoritarias de nuestro país. Siendo bastante generosos, podemos postular que la democracia plena tuvo una vigencia de tan solo seis años, entre 1967 y 1973.<sup>19</sup>

En otras palabras, lo que quiero señalar es que considerando los 200 años de vida republicana (1810-2010), Chile ha tenido ciento noventa y cuatro años de algún tipo de régimen político no-democrático o insuficientemente democrático.<sup>20</sup>

Esto porque los principales actores políticos estratégicos han combinado las formas democráticas con formas autoritarias;

---

<sup>18</sup> Ver: Zavaleta Mercado, René. *El Estado en América Latina, en La autodeterminación de las masas. Antología*. Editorial CLACSO, 2009, pp. 336-341.

<sup>19</sup> Hemos sostenido esta tesis en nuestro libro *La Frontera de la Democracia*. LOM Ediciones, Santiago, 2004.

<sup>20</sup> *Ibídem*



predominando, tanto a nivel del Estado como del régimen y, por cierto, de la sociedad, las formas políticas autoritarias o semidemocráticas. Entonces, la democracia plena no ha sido el régimen político dominante en la sociedad chilena; por consiguiente, la República Democrática ha sido una rareza histórica por estas latitudes.

En efecto, si seguimos los planteamientos de Bobbio y de Dahl sobre lo que es un régimen democrático y los contrastamos con la realidad histórica tanto del siglo XIX como del XX, nuestra conclusión debiera ser la siguiente: durante el siglo XIX, los regímenes políticos, que la historiografía política ha denominado equívocamente como República Autoritaria, Liberal y Parlamentaria, no fueron de ninguna manera, ni en la forma ni el fondo, algún tipo de democracia conocida. Todo lo contrario. Para poder caracterizar a esos regímenes debiéramos utilizar la tipología desarrollada por el politólogo español Juan José Linz para estudiar los regímenes autoritarios y no-democráticos.<sup>21</sup>

Por consiguiente, el siglo XIX chileno no conoció la democracia liberal representativa. Ni tampoco lo que el discípulo de J.J. Linz, el cientista político Arturo Valenzuela, denomina democracia oligárquica. Lo predominante en la primera centuria republicana fue la estructuración de un largo régimen político autoritario con fases gubernamentales diferenciadas por las tendencias ideológicas de sus presidentes: la fase conservadora, la fase liberal y la oligárquica (una forma parlamentaria corrupta y deformada). La mayoría de los analistas tanto nacionales como extranjeros de manera equivocada buscan caracterizar a los regímenes políticos como “democráticos” por el único hecho que los presidentes del periodo eran electos por sufragio ciudadano. Pero, como la ciencia política ha demostrado, la realización de elecciones no es sinónimo, de ninguna manera, de la existencia de un régimen democrático.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ver: Linz, Juan José. *Obras escogidas 3. Sistemas totalitarios y regímenes autoritarios*. CEPC. Madrid, 2009.

<sup>22</sup> La literatura politológica sobre la democracia para el siglo XIX es más bien escasa. Lo predominante es la narrativa histórica más descriptiva que analítica. En esta línea se puede consultar el libro de Felipe Portales *Los Mitos de la Democracia chilena. Desde la Conquista hasta 1925*. Editorial Catalonia, 2004. Este trabajo carece de un marco teórico de la democracia y es una colección de citas, no hay un intento de conceptualizar ni analizar la democracia como régimen político. En cambio, el trabajo del historiador conservador-liberal Joaquín Fermandois, *La democracia en Chile. Trayectoria de Sísifo*. Ediciones UC/CEP, 2020, trabajando con una amplia definición de la democracia encerrada en aquello que nombra como “modelo occidental”, da por hecho su existencia en el siglo XIX a pesar de reconocer “ciertas limitaciones”. Ambos libros son útiles para descartar la existencia de la “democracia”.

Durante el siglo XX, la situación varió un poco. La famosa república democrática (1932-1973) fue bastante floja en cuanto a democracia se refiere. Entre 1932 y 1958, durante 26 años, el sistema político fue estructurado sobre la base de formas autoritarias y restrictivas a la práctica democrática. Lo que dio lugar a la configuración de dos regímenes políticos: entre 1932-1948, uno semi democrático, limitado, excluyente, inestable y con gobiernos divididos. Y, entre 1948 y 1958, uno autoritario electoral. Hasta 1949 no existía sufragio universal, basta con recordar que las mujeres estaban excluidas de la ciudadanía política; también estaban excluidos de la participación política y social los campesinos, cuyo voto era manipulado por los dueños de la tierra. Si bien, es cierto, que existían periódicamente las elecciones, éstas estaban dominadas por el cohecho y el fraude electoral. Por último, durante diez años se puso fuera de ley y de la participación política al Partido Comunista de Chile. Durante el gobierno de Gabriel González Videla se aprobó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, en virtud de la cual se expulsó al Partido Comunista del sistema político y se instaló un campo de concentración en la nortina localidad de Pisagua, en donde se recluía a los ciudadanos acusados de infringir la citada ley.<sup>23</sup>

Tan sólo a partir de las reformas electorales de 1958 y con la anulación de la ley antes citada se instauró un régimen político, diríamos de semi-democracia plena. Este alcanzó su plenitud cuando las fuerzas democráticas lograron impulsar la Reforma Constitucional al Derecho de Propiedad, en enero de 1967; la Ley de Sindicalización Campesina ese mismo año, y cuando el sufragio se volvió verdaderamente universal, con las reformas constitucionales de 1970 en que se otorgó el derecho a voto a los mayores de 18 años, analfabetos e incapacitados. Todo eso, se derrumbó con el golpe militar de 1973 y la instauración de la dictadura cívico-militar del General Pinochet.<sup>24</sup>

Por consiguiente, Chile no ha tenido una República democrática a lo largo de su historia independiente y cuando se logró instalar la democracia plena (1967-1973), las fuerzas políticas autoritarias rápidamente se encargaron de situarlo en el orden social y político tradicional, que no es otro, que las formas políticas

---

<sup>23</sup> Cfr. Verónica Valdivia Ortiz de Zarate. Pisagua, 1948. Anticomunismo y militarización política en Chile. LOM Ediciones, Santiago, 2021.

<sup>24</sup> Cfr. Gómez Leyton, op.cit.

democráticas restringidas o incompletas o autoritarias. Ese ha sido el estado normal del sistema político nacional.

Luego de 17 años de régimen autoritario (dictadura cívico-militar, 1973-1990) se transitó hacia la “democracia protegida”, que los propios autoritarios diseñaron y que las fuerzas democráticas no han sido, hasta el día hoy, capaces de desmontar.<sup>25</sup>

Por otro lado, con respecto a la forma como se han generado las Constituciones Políticas del Estado, basta con decir que en Chile ninguna de las tres constituciones que han normado a la República ha sido generada por una Asamblea Nacional Constituyente con la activa participación de todos los sectores políticos, sociales y ciudadanos del país. Así fueron formuladas las constituciones políticas de 1833, de 1925 y de 1980. Las tres fueron establecidas y promulgadas como un acto político autoritario del ejecutivo, o sea, del gobierno, en turno.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> El régimen político democrático autoritario electoral predominante desde 1990, institucionalizado en la Constitución Política de 1980 promulgada por el dictador A. Pinochet, aunque reformada y modificada la firma que la promulga, en el año 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), sigue rigiendo los destinos de la sociedad nacional. A pesar de las reformas que se han realizado en las instituciones políticas de la democracia protegida, ésta sigue siendo una democracia estructurada en normas y reglas políticas autoritarias. No obstante, como lo hemos comentado en otras notas, el proceso constitucional que se desarrolló desde julio de 2021 a septiembre de 2022 unido especialmente con el triunfo de Gabriel Boric, en la segunda vuelta presidencial de 2021, abrían todas las posibilidades para un cambio de régimen democrático. Dada la convergencia de ambos procesos políticos era posible transitar de un régimen democrático protegido a un régimen democrático pleno. Sin embargo, la derrota de la opción Apruebo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, que rechazó la propuesta constitucional elaborada por la Convención Constitucional, cerró toda posibilidad de transitar a un régimen político democrático. La posibilidad histórica de instalar una democracia liberal plena, tal vez semejante a la que rigió entre 1967 y 1973, ha sido nuevamente postergada. Juan Carlos Gómez Leyton. “Chile, el inicio de una nueva transición política hacia una plena democracia” en <https://www.elclarin.cl/2021/12/20/chile-el-inicio-de-una-nueva-transicion-politica-hacia-una-plena-democracia/> consultado el 03 enero 2022.

<sup>26</sup> Una de las consecuencias directas de la rebelión popular y ciudadana de octubre de 2019 está en el hecho de que los poderes políticos constituidos para frenarla tuvieron que abrir un proceso histórico y político “no deseado” o sea, obligado por las circunstancias políticas y la fuerza social desplegada por los sectores rebeldes; es decir, poner en marcha un proceso constitucional para reemplazar la Constitución Política de 1980, legada por la dictadura, aunque reformada en 2005, siempre fue considerada por la ciudadanía democrática y revolucionaria nacional como ilegítima. Desde julio del año 2021 se ha puesto en marcha la elaboración ciudadana y participativa de una nueva Constitución Política del Estado y de la República de Chile. Por primera vez en su historia, la sociedad chilena y no las élites de poder y en el poder, redactan y elaboran una constitución política en forma paritaria, con la activa participación de los pueblos originarios y la atenta vigilancia ciudadana. Aunque el actual proceso constitucional tiene y posee una serie de dificultades y limitaciones es, hasta ahora, el más democrático de los realizados desde 1810.

El anhelo permanentemente postergado, obstaculizado y negado, parte de las élites de poder como las élites en el poder, pero también de un porcentaje relativamente amplio de ciudadanía, ha sido la instalación en Chile de una Asamblea Constituyente democrática y popular.

En fin, por todas las razones expuestas, puedo sostener que en Chile la instauración democrática plena, sigue siendo un problema histórico-político no resuelto. Cabe, entonces preguntarse ¿Es posible alcanzar esa condición en la actual sociedad chilena?<sup>27</sup>

### **La Utopía democrática**

Antes de responder a esta pregunta, estimo que sería útil referirme a una cuestión que caracteriza a la historia de la sociedad chilena: la permanente dialéctica entre el mito y la utopía. Tal como algunos autores han afirmado, las y los chilenos son dados a construir mitos. Uno de ellos es, por cierto, el que sostiene que hemos tenido una democracia ejemplar, un caso político de excepción, etcétera. Por esa razón, pienso que, también, las y los chilenos hemos sido constructores permanentes de utopías. Ejemplo de ello fue la utopía democrática del socialismo. Si bien, como canta Serrat “la utopía se echó al monte perseguida por lebreles que se criaron en sus rodillas y que, al no poder seguir su paso, la traicionaron”. A pesar de ello, todavía, quedan chilenas y chilenos que pensamos que la utopía socialista y democrática es posible. En función de ello, el pensamiento crítico y revolucionario debe replantearse la utopía democrática y el socialismo en forma integral, pues considero que ésta, llevada hasta las últimas consecuencias, es sinónimo de socialismo.

Esa es la fuerza que tiene la idea democrática cuando ella es concebida no solo como un régimen político, sino como una forma de sociedad, de Estado, de economía. Una cosa que debemos tener presente es que esta es la noción de democracia que tuvimos y que desarrolló un importante segmento de la ciudadanía nacional, especialmente,

---

<sup>27</sup> Esta pregunta se vuelve mucho más relevante hoy en día, pues al momento de trabajar en la publicación de este libro, en los meses de 2023, lo constituyente ha dominado el quehacer de la sociedad chilena en los últimos tres años y el fracaso-derrota de la posibilidad de aprobar el texto constitucional propuesto por la Convención Constitucional ha cerrado toda posibilidad, por el momento, de construir un régimen político democrático pleno en su versión liberal representativa, por lo tanto, ninguna posibilidad de construir una democracia social-participativa.

los sectores populares ligados a la izquierda revolucionaria, a lo largo del siglo XX chileno. Insisto, la utopía democrática fue asociada con la construcción de una sociedad socialista.

Por eso, el socialismo era y es una forma superior de democracia. En esa asociación, pienso, radicaba la fuerza del socialismo chileno y ello explica que un sector importante de la izquierda nacional fuera muy crítico de los “socialismos reales”, especialmente, porque para construir socialismo habían abolido la democracia.

Tengo la impresión de que la noción democrática, a lo largo de estos años de vida republicana, ha sido vista a la luz de la utopía. De manera que, ser democrático es, también, ser utópico. En ese sentido, la problemática central de la República ha sido y sigue siendo la compatibilidad entre la utopía democrática y su práctica histórica concreta.

Tengamos presente que la democracia plena en Chile siempre ha sido tratada como algo “imposible”. En distintos momentos decisivos para el inicio de los cambios políticos a favor de la democracia, resultó insuficiente la ideología en su labor legitimadora; de la misma manera que un nuevo modelo utópico ya había adquirido la forma de una sólida alternativa al poder existente. Es posible, entonces, comprobar una vez más que la utopía puede ser una alternativa del poder o una forma alternativa de poder. Los proyectos democráticos al igual que todas las utopías, escritas o realizadas, han mostrado su intención de ejercer el poder de una manera diferente a la forma como desde la modernidad capitalista lo hace.

Escuchar la voz o las voces de los hombres y mujeres es trabajar en la construcción de la nueva utopía, donde debiera habitar la República de la nueva centuria.

Ahora bien, en la búsqueda del fundamento de tal construcción, el horizonte utópico se perfila como el ambiente más propicio para los movimientos sociales y políticos que pretenden lograr una democracia cada vez más profunda, o sea, socialista. Esta cuestión tendría que partir no sólo de las exigencias económico-políticas, sino también de una nueva ética política revolucionaria democrática y socialista.

Si coincidimos en que la lucha por una democracia revolucionaria representa un serio compromiso político teórico, es factible entonces, encontrar en ella una síntesis entre lo deseable y lo realmente posible. Esta perspectiva debe reabrir el debate sobre una serie de problemas decisivos y, a menudo, vitales para la construcción de la democracia social.

En primer lugar, se plantea la cuestión del estatus del proyecto democrático-socialista, su grado de convencimiento y el potencial de movilización a la luz de una frustración esparcida a causa del destino poco afortunado de los proyectos anteriores y las reducidas posibilidades de conformar un contrapoder a las actuales relaciones de poder capitalistas.

En segundo lugar, si se abandona el intento de formular el proyecto alternativo (por los obstáculos que ello significa, la resistencia y el poder de las tendencias dominantes) o, en el peor de los casos, si todo se reduce a un "hay que", todo acabaría en una pacificación total de los sujetos promotores de cambios. El único beneficiado: las fuerzas dominantes.

A mi juicio, la misma situación resultaría si la insistencia en el proyecto democrático quedara basada en una desradicalización y desdramatización de los desafíos reales. De esa manera, el proyecto se vuelve un instrumento de la falsa conciencia de los actores impotentes para los cambios.

En suma, está en cuestión una perspectiva doble de la relación democracia-realidad. La primera plantea la necesidad de afrontar los obstáculos, la segunda exige una pronta determinación de las posibilidades. Las dos aglutinan por lo menos tres dudas importantes:

- si las proporciones de los obstáculos están fielmente descritas;
- si las fuerzas democráticas pueden compararse con los grupos y tendencias antidemocráticos;
- qué tan posible es la solución de esta obvia proporción, de manera que se dé lugar para algunas sorpresas políticas y sociales.

Para responder a estas preguntas hay que tomar en cuenta: las consecuencias del acelerado proceso de descomposición de las soberanías de los estados nacionales; el aumento de las desigualdades entre y dentro de las sociedades, acompañado por la fragmentación de las fuerzas sociales, o de la ciudadanía; la constitución de los mecanismos jurídicos y constitucionales dirigidos más a aislar las nuevas instituciones económicas de control y responsabilidad pública que a legitimarlas democráticamente.

En este contexto, replantear el proyecto democrático revolucionario desde la perspectiva utópica implicaría que simultáneamente se redefina la política a la luz de las nuevas exigencias éticas y morales con la necesidad de dar sentido al futuro. En estas circunstancias, me parece que la función de la utopía reside en intensificar la confrontación entre los criterios de lo posible y la realidad misma. Se trata, desde luego, de una relación tensa.

Nos servimos aquí de esta tensión como núcleo duro de lo utópico no para señalar la vieja dualidad del ser-deber ser, es decir, de “el momento diagnóstico” y el “momento de la propuesta”, sino para postular un orden democrático mediante lo utópico operante a nivel histórico. Esto de ninguna manera significa que la República Democrática tienda a una perfección realizable, producto de un recorrido paulatino desde lo real a lo ideal. Al contrario, se trata de historiar el proyecto democrático, lo que nos obliga a determinar su grado de perfección para ver en él un modelo histórico, por lo tanto, realizable y posible y, en fin, siempre mejorable.

Para cerrar, pienso que estas son las tareas de nuestro futuro inmediato. Para que el futuro próximo sea democrático, y evitar que sea como ha sido la República en estos 200 años: un remedo de democracia, dominada por las fuerzas sociales y políticas antidemocráticas y autoritarias.

## **SEGUNDA PARTE**

### **LA SOCIEDAD NEOLIBERAL: UNA SOCIEDAD CORRUPTA**





## Elementos teóricos para el análisis de la corrupción

El estudio de la corrupción política en la sociedad chilena no ha merecido de manera constante y sistemática, la atención de los científicos sociales. Raramente ha sido analizada o tratada por la ciencia política, en particular, o por las ciencias sociales, en general. Predomina, en esta materia, más bien un cierto oscurantismo sobre lo qué es y cómo se manifiesta y/o afecta a las sociedades y, especialmente, a los sistemas políticos. Tampoco ha sido estudiada en el pasado, a pesar de que es posible detectar su presencia tempranamente en los años fundacionales del Estado nacional en el siglo XIX. De allí que podríamos sostener que el fenómeno de la corrupción política ha tenido una larga continuidad desde la conformación del Estado hasta la actualidad. Incluso, su presencia se extiende hasta los orígenes mismos de la formación social chilena.

Las formas corruptas del ejercicio del poder político imperaron de múltiple manera tanto entre las huestes conquistadoras como entre las élites de poder colonial durante los siglos de dominio español. Estas formas tampoco cambiaron mucho con la instauración de la República, fundamentalmente, porque no cambiaron del todo las élites de poder colonial, las cuales travestidas asumieron el ejercicio del poder político republicano. Así, las manipulaciones corruptas del poder político, pero también de la justicia y del poder económico tienen en Chile una larguísima historia y presencia.

Cabe señalar que la corrupción constituye, en verdad, un problema amplio y variado, que comprende, según los especialistas en esta materia, tanto las actividades públicas como privadas. No se trata tan solo del tosco saqueo de los fondos públicos por parte de los funcionarios públicos corruptos, como generalmente se asume. Si no, como señala el historiador Alfonso W. Quiroz, comprende el ofrecimiento y la recepción de sobornos; la malversación y la mala asignación de fondos y gastos

públicos; la interesada aplicación errada de programas y políticas; los escándalos financieros y políticos; el fraude electoral y otras trasgresiones administrativas (como el financiamiento ilegal de los partidos políticos en busca de extraer favores indebidos), que despiertan una reacción negativa y reactiva en la ciudadanía.

Hechos políticos corruptos, funcionarios públicos y políticos corruptos, actividades comerciales corruptas, aplicación corrupta de la ley, siempre han estado presentes en la sociedad chilena. Sin embargo, por la misma condición clandestina de la actividad (que constituye el lado oscuro de la historia republicana) permanece, justamente, invisibilizada y oculta. El mito de que Chile no ha sido un país corrupto en comparación con otros países de la región latinoamericana ha contribuido a mantener la oscuridad y el silencio historiográfico y analítico de la corrupción política en la historia nacional pasada y reciente.

Afortunadamente, en los últimos años, desde las ciencias sociales se ha comenzado a abordar de manera rigurosa el análisis de este tema y actualmente contamos con significativos estudios, los cuales, en su mayoría, se concentran en el período de la vigencia de la democracia protegida (1990-2015).<sup>28</sup> A partir de la preocupación por el develamiento público de diversos casos de corrupción política, en las últimas décadas, científicos sociales y políticos han realizado investigaciones para analizar y explicar, desde distintas perspectivas, la existencia y consecuencias de la corrupción política así como su implicancia para el régimen político democrático, la gobernabilidad y, sobre todo, para la valorización y credibilidad política de sus principales actores: los partidos y la "clase política".

Sin lugar a duda, una de las principales consecuencias de la corrupción política para las democracias es la crisis política de credibilidad y de confianza que, por lo general, genera profundas crisis de legitimidad. Si bien, ninguna democracia se ha derrumbado como resultado directo de la existencia generalizada de la corrupción política, su presencia y praxis al interior del régimen democrático constituye un importante factor político que contribuye significativamente a desencadenar su crisis y, sobre todo, provocar su transformación en un tipo de régimen

---

<sup>28</sup> Vale destacar los estudios de Alfredo Rehren, especializado en la problemática local de la corrupción y de Patricio Orellana Vargas, entre otros.

político excepcional como son las **cleptocracias**. Las cleptocracias son formas políticas, ya sea de Estado y/o de gobierno, en donde la corrupción política es el “cemento” que pega y sostiene la estructura institucional y el ejercicio del poder político.

En general, todas las sociedades actuales son afectadas por el fenómeno de la corrupción política, unas más otras menos. El tema no es su ausencia sino más bien la capacidad que han tenido ciertas sociedades para controlarla, frenarla a través de la articulación de un conjunto de normas y reglas, de la socialización de valores e incluso de una ética que impida su desarrollo. Mientras otras sociedades han sido abiertamente más permisivas con distintos actos y acciones corruptas, lo que ha dado lugar a una institucionalización de la corrupción como práctica política informal que permite que el sistema político funcione. De esa manera, la corrupción política pasa ser un mecanismo más de la actividad política, económica y social, plenamente integrada a la vida de la sociedad y escasamente cuestionada por los ciudadanos.<sup>29</sup> Por lo tanto, podemos sostener que existen sociedades con mayores grados de tolerancia a la corrupción y otras sociedades que tienen una menor tolerancia a ella.

Como ha sido ampliamente reconocido, Chile era uno de los pocos países de la región que estaba supuestamente libre de tal flagelo. En efecto, de acuerdo con diversas mediciones internacionales en esta materia, Chile aparecía como un país no corrupto. Sin embargo, hoy por hoy esa imagen está cambiando y el país ha entrado al club de países corruptos del continente latinoamericano, no necesariamente por los casos de corrupción descubiertos durante del régimen político posautoritario, la democracia protegida (1990-2015), sino, fundamentalmente por los actos de corrupción realizados durante la dictadura cívico-militar conducida por el General Augusto Pinochet Ugarte, (1973-1990). Cuyo principal responsable fue, justamente, el exdictador y su familia.

Tal vez uno de los aspectos más discutidos en torno al tema de la corrupción sea la relación entre ésta y el tipo de

---

<sup>29</sup> Para más información consultar a: Laporta, Francisco J. y Silvina Álvarez (Eds.). *La Corrupción política*. Alianza Editorial, Madrid, 1997; Carbonell, Miguel y Rodolfo Vázquez (Coord.). *Poder, Derecho y Corrupción*. IFE/ITAM, México, 2003; Ackerman, Susan Rose. *La Corrupción y los Gobiernos. Causas, consecuencias y reforma*. Ed. Siglo XXI, España, 2001.

régimen político. Aquí la interrogante de fondo es la siguiente: ¿la democracia es un régimen político más propicio que las dictaduras para el desarrollo de la corrupción política?

Esta pregunta estuvo detrás de diversas consideraciones que se hicieron en Chile, por ejemplo, al momento de darse a conocer por los medios de comunicación diferentes casos de presunta corrupción política en los cuales estaban involucradas autoridades y funcionarios públicos, ministros de estado y políticos ligados a los gobiernos de la Concertación.

Para muchos analistas y periodistas la corrupción habría llegado con la democracia. O, la corrupción era un mal propio de las democracias. En verdad, la teoría política de la corrupción señala que cualquier tipo de régimen político es propenso a ser infectado por este virus.

Según Susan Rose-Ackerman, la corrupción política sólo es denunciada o develada cuando existen niveles importantes de democracia y, sobre todo, de libertad de expresión y de información. La democracia no fomenta la corrupción política si no que gracias a su existencia es posible conocerla.<sup>30</sup> Es lo que ha sucedido en la actualidad en Chile, la corrupción política es conocida por que existe libertad de expresión y de información, no hay censura, no existe un control político sobre la información que se entrega a la opinión ciudadana. Ocurre todo lo contrario a lo que existía durante la dictadura. En consecuencia, no es que hoy el régimen político sea más corrupto que el de ayer, sino que hoy es posible fiscalizar ciudadanamente los actos y las acciones de la autoridad o de quienes ejercen el poder político.

La corrupción política es, sin duda, un tema complejo y difícil de estudiar e investigar, fundamentalmente, porque es un acto clandestino. Se trata de un acto en que no se quiere dejar huellas ni fuentes ni testimonios. Entonces, **¿cómo estudiarla, conocerla y comprenderla? ¿cómo distinguir un acto corrupto?, ¿cuáles son las causas de la corrupción? Lo que sigue son algunos elementos teóricos que nos permiten responder de forma preliminar esas preguntas.**

---

<sup>30</sup> Ver: Rose-Ackerman, Susan (2001). *La Corrupción y los Gobiernos. Causas, consecuencias y reforma*. Siglo XXI, Madrid. pp. 155-240.

## Concepto de corrupción política

Una de las tareas más complejas y difíciles de abordar en el estudio y análisis de la corrupción política se centra en la dificultad de definirla. Esta situación ha dado lugar a un vasto y extenso debate.<sup>31</sup> Se le ha definido como “el uso ilegítimo del poder público para el beneficio privado”, “todo uso ilegal o no ético de la actividad gubernamental como consecuencia de consideraciones de beneficio personal o político”, o simplemente como “el uso arbitrario del poder”.<sup>32</sup> Debido a lo anterior, algunos autores han optado por trabajar con la dualidad conceptual que posee el término, es decir, identificando su carácter negativo, señalando aquello que no es; y positivamente, estableciendo su denotación y connotación. Malen Seña resume lo que no es corrupción en los siguientes puntos:

- 1) La corrupción no debe ser confundida con medidas estatales de carácter promocional.
- 2) La corrupción tampoco puede ser confundida con un uso desviado del poder. La desviación del poder puede ser definida como una violación o infracción al ordenamiento jurídico, provocada por el ejercicio de potestades administrativas con fines distintos a los señalados por el derecho.
- 3) No debe asimilarse la corrupción con el clientelismo político, o de otro tipo. Según Mario Caciagli, el clientelismo es una relación diádica en la cual un agente, en posición de superioridad, utiliza su influencia y sus recursos para dar protección y seguridad a otro agente, que está en una posición de inferioridad, a cambio de servicios, lealtades y apoyos.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Ver: Heidenheimer, Arnold (comp.). *Political corruption: Readings in comparative analysis*. New York, Holt, Rinehart, and Winston, 1970. Heidenheimer, Arnold, Michel Jhonston y Víctor Le Vine (comps.) *Political Corruption. A Handbook*. Londres, Transaction Publ., 1993. Holloway, Harry y Frank S. Meyers: “Refining the definition of corruption: Reflections from an Oklahoma study”. Ponencia presentada a la reunión de la Southwestern Political Science Association, Houston, marzo de 1985. Espinel Vallejo, Manuel (Comp.) *Corrupción Política. Zona Abierta*, 98/99, Madrid, 2002.

<sup>32</sup> Malen Seña, Jorge F (2002). *La Corrupción. Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos*. Gedisa Editorial, España.

<sup>33</sup> Caciagli, Mario (1996). *Clientelismo, corrupción y criminalidad organizada*. Centro de Estudios Constitucionales, España,

Es reiterativo el tratamiento del clientelismo como sinónimo de corrupción política, fundamentalmente, por el hecho de que entre ambos existen rasgos comunes que permiten la confusión, por ejemplo, ambos son relaciones de intercambio basadas en “beneficios extrínsecos e instrumentales”. Ambos comparten un modelo diádico: los contactos personales, de amistad o de compadrazgo juegan un papel importante. Sin embargo, dicha relación diádica no implica de ninguna manera un acto de corrupción, puesto que la relación clientelar no viola ninguna norma o función institucional o ninguna regla posicional como sucede en la corrupción. Aunque la relación diádica de superioridad-inferioridad entre dos agentes del clientelismo no es necesaria en los casos de sobornos, por ejemplo, donde las partes intervinientes pueden situarse en una situación de igualdad. Y, por último, la corrupción siempre opera en un marco de secreto o de discreción, mientras que las relaciones clientelares suelen ser públicas y abiertas. Por todo ello, no deberían confundirse ambos conceptos.

Convendría distinguir entre los actos de corrupción y la recepción, ofrecimiento y entrega de propinas. La asimilación de la corrupción a la propina adquiere mucha fuerza si se toma en consideración que muchos sistemas jurídicos establecen que el ofrecimiento, dación o aceptación de una propina a un funcionario público con motivo de la ejecución de sus funciones constituye un delito de cohecho –impropio- ya que afecta a la imparcialidad que debe regir el desenvolvimiento de la administración pública. El problema es que, muchas veces, la propina es una determinada práctica social donde los involucrados tienen la creencia de que no es ilegítima, incorrecta o ilegal; y el beneficiario suele cumplir las funciones que le son inherentes del mismo modo aun cuando no reciba ninguna propina.

El elemento diferenciador entre la propina y el soborno, ejemplo manifiesto de corrupción, se encuentra en el hecho de que cuando se da una propina no se espera nada a cambio, pues el servicio o la atención ya se realizó, y constituye en muchas ocasiones una dación voluntaria que premia o recompensa una labor cumplida. La ausencia del sentido de intercambio, del *quid pro quo*, es la característica definitiva de las propinas. Sin embargo, a pesar de que las diferencias conceptuales entre el soborno, el regalo y las propinas son claras, en la vida social real no se tiene la

misma claridad. La percepción que tiene la ciudadanía apunta a señalar que están bajo la sospecha de ser actos corruptos.

Habiendo establecido mínimamente lo que no es corrupción, corresponde ahora, brevemente, y a título de ilustración del problema que tratamos, señalar qué sería la corrupción política.

- a) Un acto de corrupción implica la violación de un deber posicional. Quienes se corrompen transgreden o provocan la transgresión de algunas de las reglas que rigen el cargo que ostentan o la función que cumplen.
- b) Para que exista un acto de corrupción debe haber un sistema normativo que le sirva de referencia. La noción de corrupción es parasitaria de un sistema normativo. Por esa razón la corrupción puede tener una naturaleza económica, política, jurídica o ética, o participar de estos distintos niveles a la vez.
- c) Un acto de corrupción no siempre entraña una acción penalmente antijurídica. Que el acto de corrupción sea legal o ilegal, desde un punto de vista penal, dependerá, por cierto, del tratamiento que el sistema punitivo ofrezca a las reglas del sistema normativo de referencia.<sup>34</sup>
- d) Los actos de corrupción están siempre vinculados a la expectativa de obtener un beneficio extra posicional. Y no es necesario que ese beneficio constituya una ganancia de carácter económico, puede ser política, profesional, sexual, etcétera. Y tampoco es necesario que el beneficio que se pretende conseguir sea elevado. En ocasiones, es suficiente que, para que se perfeccione el acto de corrupción, una parte espere recibir algo con la convicción de que es valioso.
- e) Los actos de corrupción tienden a realizarse en secreto, al menos en un marco de discreción. La noción de secreto o de discreción se vincula aquí -siguiendo a Michael Reisman- con un cierto intento por ocultar las acciones corruptas, incluso en aquellos casos en los que "se sabe que se practican

---

<sup>34</sup> Garzón Valdés, Ernesto (2004). "La Corrupción", en *Calamidades*, Gedisa Editorial, Barcelona, pp199-227.



ampliamente y casi nunca se sancionan”.<sup>35</sup> La corrupción, al implicar una actitud de deslealtad tiene una carga negativa y, por lo tanto, tiende a ser ocultada de la ciudadanía e incluso de los círculos o grupos más inmediatos.

Que la acción corrupta se mantenga en secreto, oculta o invisible es condición de posibilidad de sí misma. Su ocultamiento permite tanto su existencia como su éxito y se liga al nivel de impunidad con que se opera o se posee. Los corruptos siempre tratarán de que sus acciones pasen lo más inadvertidas posibles.

Se puede definir los actos de corrupción política, concluye Jorge Malen Seña, como aquellos que constituyen la violación, activa o pasiva, de un deber posicional o del incumplimiento de alguna función específica, realizados en un marco de discreción con el objeto de obtener un beneficio extra-posicional, cualquiera sea su naturaleza.<sup>36</sup>

Lo que debemos tener claro es que la corrupción política es fuente de beneficios para los participantes a partir de la planeación de una determinada estrategia para obtenerlos. Stephen D. Morris, especialista en el estudio de la corrupción en México, ha señalado que la corrupción es un acto racional y, por consiguiente, promueve los intereses privados de sus participantes. Esto es válido tanto para el soborno como para la extorsión. Sin embargo, la extorsión se diferencia del soborno por el hecho de que la relación es de alguna manera más asimétrica, con mayores beneficios acumulados para el funcionario porque la sanción positiva ofrecida en un soborno representa un coste para el ciudadano mientras que la sanción negativa utilizada en el caso de la extorsión (abuso de autoridad) no constituye una pérdida para el funcionario, sino que puede ser utilizada nuevamente dentro de ciertos límites.<sup>37</sup>

El fenómeno de la corrupción política es un tema complejo en el que intervienen numerosas variables que son difíciles de identificar, describir y evaluar. En su configuración participan

---

<sup>35</sup> Reisman, Michael (1981). *¿Remedios contra la corrupción? Cohechos, cruzadas y reformas*. Fondo de Cultura Económica, México, pp 52, citado por Malen Seña, Op. cit. pp. 34.

<sup>36</sup> Malen Seña, ídem, pág. 35 y también Garzón Valdés, Op. cit.

<sup>37</sup> Morris, D., Stephen (1992). *Corrupción y Política en México Contemporáneo*. Editorial Siglo XXI, México

activamente factores sociales, económicos, políticos, históricos y, sobre todo, culturales. Por esa razón, la corrupción política y sus formas no son privativas de ninguna sociedad, país, régimen político o sistema económico.<sup>38</sup>

Según Garzón Valdés, el estudio de la corrupción política suele estar asociado a dos perspectivas que dificultan su comprensión y condicionan su precisión conceptual. Una podría ser llamada la "perspectiva de la modernización": la corrupción sería un fenómeno social propio de los regímenes políticos no evolucionados, es decir, que cuanto mayor sea el grado de desarrollo o de modernización de una sociedad política, tanto menor habrá de ser el grado de corrupción.<sup>39</sup>

Esta tesis ha tenido una alta aceptación al momento de analizar la corrupción política en América Latina. Según ésta, los regímenes políticos latinoamericanos han sido afectados históricamente por el flagelo de la corrupción política debido, fundamentalmente, a su carácter no moderno o por su condición de ser países en vía de desarrollo. Sin embargo, Colin Leys, ha relativizado esta tesis: la corrupción no sería un rasgo específico de los países en desarrollo, pero en ellos existiría una mayor probabilidad de que se produjesen actos o actividades corruptos (as). "Es claro -escribe Colin Leys- que muy probablemente los nuevos Estados serán el escenario de muchos comportamientos que pueden ser llamados corruptos (...) Es relativamente fácil encubrir la corrupción en los nuevos Estados. Esto se debe, parcialmente, al hecho de que la gente no sabe con claridad cuáles son las reglas oficiales o qué es realmente lo que constituye su violación; o si lo saben claramente, puede ser que no les importe mucho su violación y que no tengan mucho interés en prevenir la corrupción."<sup>40</sup> Además, la realidad actual de muchos países del mundo industrializado ha puesto de manifiesto la falsedad de esta tesis. La corrupción en América Latina, donde muchos burócratas

---

<sup>38</sup> Soto, Raimundo (2003). "La Corrupción desde una perspectiva económica", en *Estudios Públicos*, N° 89, verano, Centro de Estudios Públicos, pp24-62.

<sup>39</sup> Max Weber había sostenido la tesis según la cual: "El dominio universal de la absoluta inescrupulosidad en la búsqueda de intereses egoístas para hacer dinero ha sido precisamente un rasgo muy específico de aquellos países cuyo desarrollo capitalista burgués ha permanecido "rezagado" de acuerdo con las pautas del desarrollo occidental" Weber, Max (2003). *La Ética Protestante y el espíritu del capitalismo*. Madrid, Alianza, pp., 47.

<sup>40</sup> Leys, Colin. "What is the problem about corruption?", en Heidenheimer, Arnold, Michael Jonson y Víctor T. Le Vine, op. cit. pág. 59, citado por Garzón Valdés, op. cit., pp 200.

han comercializado sus poderes administrativos, no es diferente a la existente en Europa, donde algunos funcionarios públicos obtienen grandes comisiones en proyectos de obras públicas y contratos de defensa.<sup>41</sup>

La segunda perspectiva es la “perspectiva de la moralidad”. A diferencia de la primera -dice Garzón Valdés-, es parcialmente verdadera, pero tiende o bien a establecer una relación empíricamente dudosa entre coacción y corrupción o bien a considerar que todos los casos de corrupción son moralmente reprochables. Aquí la relación fundamental es con el ejercicio del poder, para Carl J. Friedrich: “es posible constatar una ‘regularidad’ o una regla general y puede decirse que el grado de corrupción varía inversamente con el grado en que el poder es consensuado (...) en aquellas situaciones en donde una apariencia de consenso oculta la realidad coercitiva, hay que contar con la corrupción. El poder del que se supone que es ejercido con el consentimiento de los gobernados pero que se ha transformado en coacción en grado considerable, conduce a la corrupción”.<sup>42</sup>

La democracia es una forma reglada de ejercicio del poder. El gobierno democrático tiene un poder inmenso sobre los ciudadanos. Y su forma representativa descansa, en último término, en la confianza de los ciudadanos. Éstos confían en que las decisiones gubernamentales estarán guiadas por la honestidad y por la persecución del bienestar general. También confían que el resto de sus conciudadanos encaucen su participación en la toma de decisiones a través de los canales determinados por las reglas del juego político. Las dictaduras son formas de gobiernos que no están necesariamente regladas ni bajo el control de los ciudadanos. Sin embargo, ello no supone *a priori* que en ellas la acción de la corrupción va a ser mayor que en los regímenes democráticos.

La corrupción política, al ser una forma de influencia política, socava el respeto hacia las reglas que regulan el ejercicio de la democracia; destroza la institucionalidad política; trastoca las formas regladas de ejercicio del poder, y provoca el quiebre

---

<sup>41</sup> Soto, Raimundo. Op. cit. pp 25.

<sup>42</sup> Friedrich, Carl J. (1973). Pathologie der Politik. Die Funktion der Misstände: Gewalt, Verrat, Korruption, Geheimhaltung. Herder & Herder, Fráncfort/New York, pp 104 s. Citado por Garzón Valdés, op. cit. pp 201.

de la credibilidad y confianza que necesariamente debe existir en la conformación democrática del poder y su ejercicio. Los ciudadanos percibirían que los gobernantes toman decisiones atendiendo a intereses espurios y que parte de sus conciudadanos logran ventajas por métodos inaceptables. La distinción básica que existe en una democracia entre lo público y lo privado se rompe. Y el Estado queda reducido a un instrumento útil tan sólo para alcanzar beneficios privados.

Ante la pregunta ¿dónde hay más corrupción en las democracias o en los regímenes dictatoriales? Francisco Laporta concluye al respecto de las relaciones entre corrupción y democracia, afirmando que “un Estado democrático de derecho es el sistema político que menos favorece la corrupción y es el sistema político que mejor lucha contra la corrupción”. Obviamente, Laporta admite que esto no quiere decir que en las democracias no haya corrupción, sino simplemente que en las democracias las condiciones para la corrupción son tendencialmente menores que en las dictaduras; que, si en un sistema democrático se producen casos de corrupción, éstos se darán en algunos intersticios del sistema a los que no haya llegado el efecto democratizador; y que en las democracias se está en disposición de descubrir con cierta facilidad los casos de corrupción.<sup>43</sup>

Por su parte, Garzón Valdés, criticando la perspectiva moralista tiende, como hemos visto, a establecer cierta correlación entre mayor democracia y menor corrupción, o lo que es lo mismo, entre dictadura y corrupción. Garzón no duda en señalar que dicha correlación no es empíricamente sostenible y añade, basándose en John Elster, que es significativo que haya habido menos corrupción bajo Stalin que bajo los regímenes soviéticos o rusos subsiguientes, y que las democracias occidentales abundan en ejemplos de corrupción gubernamental.<sup>44</sup>

Ciertamente, no es fácil establecer comparaciones fiables entre los niveles de corrupción reales existentes en las democracias y los existentes en las dictaduras. No es fácil comparar datos reales. En primer lugar, porque existe una absoluta falta de información

---

<sup>43</sup> González Amuchástegui, Jesús. Corrupción, democracia y responsabilidad política, en Carbonell, Miguel y Rodolfo Vázquez (2003). *Poder, Derecho y Corrupción*. IFE, ITAM y SIGLO XXI Editores, México, pp. 63.

<sup>44</sup> Ídem.

veraz en las dictaduras. De ahí que, en muchas ocasiones, cuando se constata que se conocen más casos de corrupción en países democráticos que en países dictatoriales, quepa preguntarse si es cierto que en las democracias hay más corrupción o es que simplemente se conoce mejor la realidad. Puede ocurrir que no haya más corrupción, sino que haya más información, aunque también podría ser que efectivamente hubiera más corrupción y además se conociera mejor. En segundo lugar, porque no hay estadísticas mínimamente fiables. Además, si se trata de comparar el nivel de corrupción existente en un país, -por ejemplo, Chile- en diferentes momentos de su historia política -la dictadura pinochetista y la democracia concertacionista-, habría que añadir una tercera dificultad, relacionada con la existencia de factores externos decisivamente influyentes en la realidad de cada país. De tal modo que, la razón última de un hipotético mayor nivel de corrupción política en el Chile concertacionista que en el Chile pinochetista habría que buscarla en determinados cambios operados en la realidad política y económica mundial, en los procesos de globalización, en el fin de la Guerra Fría, etcétera, más que en la democracia misma.

Lo que estamos planteando aquí es que consideramos que existen factores característicos de los regímenes democráticos, por lo tanto, no presentes en los regímenes dictatoriales, por definición, que pueden favorecer la corrupción política, de modo tal que pudiéramos hablar de una corrupción genuinamente democrática o, quizá, más de costes (necesarios) de la democracia.

Parafraseando a Alejandro Nieto podríamos sostener que de las consideraciones expuestas se deduce que la corrupción democrática ocurre debido a factores diferentes a los de la dictatorial. Este es un dato mucho más importante que la expresión cuantitativa de sus prácticas. Lo que de verdad interesa no es tanto conjeturar si el poder democrático extorsiona hoy más o menos que lo hacía antes el poder dictatorial, sino conocer los factores propios de la corrupción que se desarrolla en un Estado democrático. La presencia de partidos políticos y de organizaciones sociales; la celebración de elecciones; la necesidad de que los ciudadanos abandonen intermitentemente sus ocupaciones privadas para dedicarse a la gestión de la cosa pública; la profesionalización de las carreras política, sindical y social, son factores que inciden fuertemente en las prácticas

corruptas tradicionales prestándoles un calor democrático característico.<sup>45</sup>

Con todo, y en oposición de lo que sostiene Jesús González en su trabajo, estamos en condiciones de sostener que es posible hablar tanto de democracias corruptas como de dictaduras corruptas. De allí que sea necesario simplemente hablar de regímenes políticos corruptos, independientemente de su condición democrática o no.

En efecto, Susan Rose-Ackerman, para referirse a los regímenes políticos corruptos, emplea un término muy elocuente y gráfico para calificarlos como: cleptocracias,<sup>46</sup> en las que la corrupción se halla organizada en la cúpula del gobierno, para distinguirlos de los Estados en los que el soborno es el coto de un gran número de funcionarios en los escalones inferiores. Existen cuatro casos polares: cleptocracia, monopolio bilateral, estados dominados por mafias y soborno competitivo. Nos vamos a detener específicamente en la cleptocracia, pues pensamos que como tipo ideal de acción corruptiva tiene su correlato empírico en el caso Pinochet.

La cleptocracia existe cuando un poderoso jefe de gobierno organiza el sistema político o utiliza el sistema de poder para maximizar sus posibilidades de ganancias. Este "bandido inmóvil" puede actuar como un monopolista privado, que se esfuerza por la eficacia productiva, pero restringiendo el output de la economía para maximizar los beneficios. El cleptócrata favorecerá políticas que transfieran el máximo de recursos a su bolsillo, manteniendo al mismo tiempo la productividad de la economía. Se opondrá a las políticas de distribución de los beneficios generalizadas a la sociedad, dejando poca oportunidad para cobrar sobornos en el centro. Los gobernantes corruptos apoyarán políticas que produzcan beneficios personalizados, aunque tengan como consecuencia niveles muy bajos de riqueza en toda la sociedad.

<sup>45</sup> Nieto, Alejandro (1997). *La Corrupción en la España democrática*. Ariel, Madrid, 1997, pp 43.

<sup>46</sup> El término "cleptocracia" parece haberse originado en Andreski, Stanislaw: "Kleptocracy or corruption as a System of Government" en Stanislaw Andreski (1968) *The African Predicament: A Study in the pathology of Modernisation*, Atherton, New York, se refiere a un gobernante o funcionario de alto nivel cuyo objeto principal es el enriquecimiento personal y que detenta el poder de realizar este objetivo mientras está en el cargo público. Rose-Ackerman, Susan: *La Corrupción...* Ob. Cit., pp. 155 ss.

Sin embargo, sostiene Rose-Ackerman, la mayoría de los cleptócratas no son todo poderosos como el "bandido inmóvil" de Olson. Su meta es la maximización de la riqueza personal, pero las herramientas a su disposición son imperfectas. Controlan el Estado, pero no toda la economía. Pueden tener un funcionario débil y desleal, una pobre base de recursos y un marco legal vago y confuso. El gobernante debe trabajar con los niveles que tiene a mano y éstos pueden ser herramientas muy ineficaces de generación de ingresos. Apoya algunas intervenciones que no aumentan la renta nacional general, porque le proporciona beneficios personales como Jefe de Estado. Sin embargo, incluso el cleptócrata alcanza finalmente el punto en el que la ineficacia de la intervención adicional del gobierno se hace tan grande que caen los ingresos marginales del soborno. El cleptócrata débil probablemente favorecerá un Estado ineficaz e hinchado para maximizar las posibilidades de corrupción.

Ejemplos que se ajustan muy bien a este modelo fueron las largas dictaduras del presidente Alfredo Stroessner en Paraguay (1954-1989), de Mobutu Sese Seko en Zaire (1965-1997) y el gobierno de Francois y Jean Claude Duvalier en Haití (1958-1986) y (1958-1986). Y, tal vez, cuando se haga el estudio de la corrupción durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet Ugarte en Chile (1973-1990) habrá que exponerlo como un ejemplo de una fuerte cleptocracia.

Para el caso paraguayo, el investigador R. A. Nickson ha sostenido: "El sector privado se consideraba como un feudo personal de Stroessner. La administración del patrimonio del Estado ha revelado una falta de diferenciación entre la esfera "económica" y la "esfera política", así como la ausencia de una frontera claramente definida entre la propiedad pública y la privada. El resultado fue que Stroessner y su séquito de acólitos civiles y militares disponían de los recursos del sector público como si fueran suyos".<sup>47</sup> El punto clave no es solo los objetivos cleptocráticos del dictador paraguayo, sino también de su "séquito", que insistía en acumular riqueza. En lugar de gestionar un monopolio eficaz de Estado, Stroessner se aseguró el apoyo

---

<sup>47</sup> Nickson, R. Andrew. "Democratisation and Institutional Corruption in Paraguay", en Walter Little y Eduardo Posada-Carbó (eds.). *Political Corruption in Europe and Latin America*. St. Martin's Press, Nueva York, Págs. 237-266. Citado por Rose-Ackerman, op. cit. pp. 159.

militar permitiendo a los jefazos involucrarse en el contrabando, en el tráfico de drogas y en el comercio de armas. Proyectos innecesarios como una presa, una fábrica de cementos y un aeropuerto produjeron ganancias corruptas para el dictador y sus socios, pero no fueron decisiones que aumentaran la riqueza del país en su conjunto.

En los regímenes políticos cleptocráticos los gobernantes fuertes y sus bases de apoyo inmediatas pueden ser descritos como "saqueadores" del Estado.

Un gobernante corrupto influye no sólo en la dimensión del gobierno sino también en la mezcla de prioridades de impuestos y gasto público. Los impuestos, las regulaciones, los subsidios, el establecimiento de precios y las privatizaciones son ejemplos de actividades del sector público que los cleptócratas pueden manipular en su propio beneficio o de su **círculo** de apoyo más inmediato, así como a favor de su familia.

La corrupción política que afecta a los regímenes políticos democráticos tiene múltiples factores causales. En cierta forma, posee una actualidad inusual. Si la corrupción se alimenta de la opacidad: la luz sobre los asuntos públicos es un primer paso para combatirla. La libertad de expresión, la eliminación de la censura y control de la información, la acción concertada de los ciudadanos exigiendo a las autoridades transparencia y a los medios responsabilidad cívica en el tratamiento de la información son factores que ponen al descubierto las acciones y a los funcionarios corruptos. La tolerancia y la paciencia ciudadana ante la corrupción parece que se ha agotado.





## Chile, una sociedad neoliberal corrupta

*“Toda una existencia para verme  
Convertido en un buen corredor  
Toda mi paciencia día a día  
Para hacerme cada vez mejor  
Ser tercero es perder  
Ser segundo no es igual  
Que llegar en un primer lugar*

*Voy a ganar, voy a ganar  
Voy a matarme por llegar  
Voy a ganar, voy a ganar  
Voy a poderlo demostrar  
Voy a ganar, voy a ganar  
Y a ganar ...”*

Miguel Bose, 1982

La formación social chilena desde mediados de los años setenta (1975) ha estado regida social y culturalmente por un principio central y fundamental establecido e impuesto por el pensamiento económico neoclásico (neoliberal) promovido por la dictadura militar (1973-1990) y sostenido y legitimado por los gobiernos concertacionistas (1990-2010), y por el gobierno de la Alianza por el Cambio (la derecha) del Presidente Sebastián Piñera. Me refiero al principio de la maximización de las utilidades.

Según el pensamiento neoliberal, lo que impulsa racionalmente tanto a los sujetos individuales como a los actores sociales, políticos y económicos a lograr, bajo ciertas reglas y normas, el mayor beneficio posible en todas aquellas actividades que emprendan y/o desarrollen en cualquiera de las esferas o dimensiones de la sociedad es, justamente, el principio de maximización de las utilidades. Por lo tanto, no se trata solo de conseguir beneficios, logros, resultados, utilidades económicas o materiales sino también sociales, culturales y políticas.

Un elemento distintivo de este pensamiento radica en la importancia asignada a la libertad individual. La libertad se ejerce a través de la posibilidad de elegir, con ausencia de cualquier tipo de coacción, determinadas líneas de acción, capaces de maximizar el bienestar, la satisfacción o la utilidad, sobre la base de

consideraciones de beneficios o ventajas y costos y desventajas. Se debe promover y cautelar el funcionamiento libre de los mercados, no interfiriéndolos ni distorsionándolos. La competencia debe estimularse a todo nivel, impidiendo las conductas monopólicas y oligopólicas y las interferencias del Estado. La doctrina neoliberal asigna al Estado un mínimo rol subsidiario y éste debe actuar en forma impersonal, no discrecional y atendiendo solo al bien común.

La permanente vigencia de este principio a lo largo de cuatro décadas ha convertido -como lo he sostenido en diversos trabajos- a la sociedad chilena y su gente en la máxima expresión neoliberal de América Latina y, tal vez, del orbe.<sup>48</sup> Sin mayor excepción podríamos sostener que más del 80% de la población nacional se rige social, económica, política y culturalmente, por dicho principio. Todos y todas quieren ganar. Todos y todas compiten por alcanzar sus metas, tener éxito, lograr fama y, sobre todo, obtener dinero con el objeto de poder participar activamente en el paraíso, o sea, en el mercado<sup>49</sup>. La sociedad chilena ha sido y es concebida como gran espacio público abierto a la competencia. La búsqueda frenética de la maximización de las utilidades o el mayor beneficio posible ha transformado a las y los ciudadanos neoliberales en competidores despiadados e inescrupulosos, sin ningún límite ético. Están dispuestos a todo, a mentir, engañar, tergiversar la realidad, ocultar, a pisotear los derechos de los otros, a franquear sin mayores problemas las fronteras de lo lícito y de lo ilícito, todo con el objeto de alcanzar el fin deseado o el objetivo planteado.

La sociedad neoliberal es una sociedad de la insatisfacción permanente y del deseo incontenido. Hombres, mujeres, niñas y niños han sido educados, formados, socializados y disciplinados, durante 40 años, en la idea de que todo es posible lograrlo si se tiene la férrea voluntad individual de proponérselo, desearlo, anhelarlo, ambicionarlo y de codiciarlo. El neoliberalismo promueve y celebra la codicia y la ambición como las virtudes más sobresalientes y destacadas de los ciudadanos. Rechaza las virtudes republicanas.

A diferencia de lo que sostenía Thomas Hobbes, para quien los hombres en su estado natural están en una permanente

---

<sup>48</sup> Gómez Leyton, Juan Carlos (2010). *Política, Democracia y Ciudadanía en una sociedad neoliberal. Chile:1990-2010*. Editorial ARCIS/CLACSO, Santiago de Chile.

<sup>49</sup> Moulian, Tomás (1997). *El Chile actual. Anatomía de un mito*. Editorial ARCIS/LOM, Santiago de Chile.

“guerra de todos contra todos” y requieren del poder del Estado para salir de esa situación y poder conservar su vida y sus propiedades; el neoliberalismo sostiene que el poder estatal solo entorpece las oportunidades que tienen los individuos para obtener propiedades y patrimonios, que son la base material para tener una vida adecuada y plena. Para esos efectos, los hombres, mujeres, niños y niñas deben competir, luchar y disputar entre sí. Así aprender a ser ganadores. Y de esa manera obtener los patrimonios (bienes) materiales y no materiales necesarios para disfrutar de una vida plena y feliz en la sociedad neoliberal. La guerra ya no se libra en los campos de Marte, sino en los espacios públicos y privados dominados por la lógica mercantil. Por esta razón, el Estado neoliberal debe proporcionar las condiciones institucionales para que la competencia se realice con la mayor libertad posible. Pero, al mismo tiempo, debe establecer un mínimo de reglas y normas para que la “competencia” no sea caótica ni destructiva. El estado mínimo debe velar por la libertad individual de las y los ciudadanos a jugar y a competir. Las reglas y normas institucionales que se establezcan no deben ser restrictivas ni limitantes de la libertad, todo lo contrario, deben protegerla. Ellas deben posibilitar que lleguen a la meta tan solo las y los más aptos, las y los mejores, las y los que aprendieron a manejar con éxito tanto las reglas formales como las informales.

El problema de la corrupción en la sociedad neoliberal chilena ha saltado al primer plano de la actualidad nacional no solo a raíz del “caso PENTA” sino del develamiento de diversos casos acontecidos en los últimos 24 años de vigencia del régimen democrático autoritario electoral o de democracia protegida (1990-2014) establecida en la Constitución Política de 1980. Casos que involucraron, en su momento, a autoridades políticas de los gobiernos de la Concertación. Sin lugar a duda, el más recordado por su significación e importancia política ha sido el caso MOP-GATE durante el gobierno de Ricardo Lagos. No obstante, la corrupción política en el imaginario social y político de la ciudadanía nacional también está asociada con la dictadura militar de Pinochet, luego del descubrimiento de las cuentas del Banco Riggs.<sup>50</sup>

<sup>50</sup> Gómez Leyton, Juan Carlos, Insunza Bascañán, Alfonso y Jorge Benítez. Notas Teóricas para el estudio de la Corrupción Política: el caso de Pinochet, en Revista de Historia y Ciencias Sociales N°3, Escuela de Historia y Ciencias Sociales, Universidad ARCIS, Diciembre de 2005, Santiago de Chile, págs., 59-89.

El “*think tank*” de derecha Libertad y Desarrollo al dar a conocer la Encuesta de Corrupción 2014 en mayo de 2014, resaltó el hecho que durante el gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) la percepción del nivel de corrupción alcanzó un promedio de 4, mientras que en los últimos 4 años del gobierno de Ricardo Lagos fue de 5,18 y, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet de 5,16. Dejando la conclusión de que durante los gobiernos concertacionistas el nivel de corrupción fue mayor que durante el gobierno de Sebastián Piñera. Esta idea reforzaba que la corrupción sería mayor en el futuro, es decir, en los próximos años del gobierno de la Nueva Mayoría.<sup>51</sup>

Para los 246 empresarios y ejecutivos pertenecientes al Directorio Nacional de Empresas y Ejecutivos que respondieron la encuesta, los mayores niveles de corrupción en Chile se localizarían principalmente en tres instituciones estatales, a saber: en primer lugar, las Municipalidades (poder local) con 6,07; en segundo lugar, la Cámara de Diputados (poder legislativo) con 5,21 y, las Empresas Públicas (poder para estatal) con un 5,17. Un 69,11% de los controladores y administradores del capital productivo, financiero y mercantil nacional consideraron que la corrupción sería mayor o mucho mayor en el futuro. De allí que la conclusión general formulada por los redactores del informe de la encuesta, bajo la coordinación de Álvaro Bellolio, fue que “el futuro [que se viene] es bastante pesimista”. En otras palabras, la corrupción real o su percepción iría en aumento en los próximos años. Ahora bien, la percepción de los sectores pobres o populares en torno a la corrupción no es radicalmente distinta de la que tienen los sectores empresariales y directivos de las empresas.

Si bien, en el pasado reciente (1990 a la actualidad) diversos casos de “corrupción” habían sido descubiertos y denunciados a la opinión pública, se tenía la percepción de que dicho fenómeno social era un problema menor y, justamente, esos casos constituían la excepción. Esta percepción, por cierto, no era gratuita, sino que estaba avalada por el Índice de Transparencia Internacional que año tras año situaba a Chile como uno de los países menos corruptos de Latinoamérica. Sin embargo, esa percepción ha

---

<sup>51</sup> Encuesta de Corrupción 2014: Comparación por periodos de gobierno y el creciente pesimismo futuro, en TEMAS PÚBLICOS, N° 1.161, 6 de junio 2014, págs. 9 ss. En la escala, 0 es mínimo de corrupción a 10 máximo de corrupción.

cambiado radicalmente en el último tiempo a raíz de los casos de evasión fiscal y tributaria vinculados con el financiamiento ilegal de los procesos electorales por parte de los grandes grupos empresariales PENTA y SQM, y de un lucrativo negocio especulativo protagonizado por la esposa del hijo de la Presidenta Michelle Bachelet. A raíz de esto, el régimen político experimenta su segunda gran crisis política, en menos de una década. La primera gran crisis política que puso en evidencia uno de los aspectos más característicos de la sociedad neoliberal, **la desigualdad**, fue abierta por las movilizaciones sociales ciudadanas del ciclo de protestas que se desenvuelve entre los años 2006-2012. La actual crisis política (2015) deviene, justamente, por la revelación, el destape, de una de las particularidades del sistema político que se mantenía en la mayor y más absoluta oscuridad para la ciudadanía: **la corrupción política**.

Estos escándalos han sumido al régimen político en una embarazosa y delicada crisis política de credibilidad y de confianza de parte de la ciudadanía hacia a las autoridades y representantes políticos. Lo más probable sea que los niveles de desconfianza y descrédito político se hayan profundizado y que la ruptura, así como el alejamiento ciudadano de la actividad política, se hayan ampliado. Sin embargo, producto de la convergencia de ambas crisis (aquella que denuncia la desigualdad social, cultural, política y económica y la que devela la corrupción estatal, política y económica existente en sociedad neoliberal) en la actual coyuntura crítica se abre una "estructura de oportunidades políticas" que podría dar lugar a una vasta movilización social y política ciudadana en dirección a transformar radicalmente el régimen político vigente. Esta posibilidad se da a partir del hecho de que la actual crisis política compromete, fundamentalmente, tanto a las élites en el poder (gobierno y partidos políticos) como a las élites de poder (específicamente, al empresariado) y, por cierto, a las distintas ciudadanías.

En función de lo anterior, la tesis que vamos a sostener en este apartado es la siguiente: la corrupción en sus diferentes formas estatal, política, privada e incluso, no gubernamental, anclada tanto en el mercado como en la sociedad civil, ha sido uno de los pilares que ha sostenido dominación neoliberal.

Consideramos que ello ha sido posible, fundamentalmente, por el aval y apoyo político-electoral proporcionado, permitido y concedido por las ciudadanía nacionales que desde 1988 optaron por encerrarse en la “jaula de hierro” institucional, léase Constitución Política de 1980, impuesta por la dictadura de Pinochet (gobernante corrupto y criminal) y el “paraíso hedonista y consumista” que ofrecieron los gobiernos de la Concertación y de la derecha desde 1990 hasta el día de hoy.<sup>52</sup>

<sup>52</sup> Durante la primera mitad de la década de los años ochenta, la sociedad chilena (1983-1986) experimentó la primera gran crisis histórica de la instalación del modelo de acumulación neoliberal. Las devastadoras consecuencias económicas, laborales y sociales que provocó, abrieron una estructura política de oportunidades para la masiva manifestación opositora a la dictadura del General Pinochet. Entre los años 1982-1986, las “protestas nacionales” convocadas por un multifacético y heterogéneo movimiento democrático nacional exigieron la renuncia de Pinochet, el establecimiento de un gobierno provisional y la convocatoria de una Asamblea Constituyente. La radicalidad y la potencia política, especialmente de los sectores populares y medios juveniles, que optaron por usar todas las formas de lucha política posible desde la desobediencia social activa hasta la lucha armada, generaron, al decir de Javier Martínez, miedos políticos. Por un lado, el miedo al Estado dictatorial y, por otro, el miedo a la sociedad, especialmente a los sectores populares organizados y movilizados. Luego de la realización de 22 jornadas de protestas sociales en contra de la dictadura y, especialmente, el intento de magnicidio de Pinochet, en septiembre de 1986 por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), el miedo político se apoderó de las élites dirigentes, de las viejas clases medias como de las nuevas y también de no pocos sectores populares, la mayoría de ellos transfigurados en emergentes ciudadanos neoliberales. Los cuales, bajo la conducción de la dirigencia partidista del movimiento democrático nacional, especialmente de la Democracia Cristiana y de la salida jurídica-política propuesta por Patricio Aylwin, optaron por refugiarse y ampararse en la institucionalidad política autoritaria establecida en la Constitución Política de 1980. Esta opción implicaba reconocer la vigencia y, sobre todo, no discutir ni cuestionar la legitimidad tanto de su origen como de su aprobación e imposición de dicha Constitución. Y, por lo tanto, abandonar la triple demanda planteada en 1982. En el Plebiscito de 1988 se impidió la continuidad del dictador en el gobierno, en diciembre de 1989, el movimiento democrático nacional, organizado en la Concertación de Partidos por la Democracia (CPD), obtuvo el gobierno al triunfar en las elecciones presidenciales Patricio Aylwin, articulador y promotor de la salida jurídica-política de la dictadura. En marzo de 1990 se inició el proceso de consolidación del régimen político democrático protegido, de manifiesta orientación autoritaria electoral. Con el gobierno “democráticamente” elegido de Patricio Aylwin el ingreso a la “jaula de hierro” que protegía política, económica, social y culturalmente el modelo de acumulación neoliberal posibilitó poner en marcha la “pax neoliberal” y, sobre todo, afianzar y sostener en el tiempo la salida de la crisis económica de 1982-1985 que había impulsado el Ministro de Hacienda H. Buchi (1985-1989) a profundizar el proceso de acumulación neoliberal. El ajuste estructural neoliberal que propició Buchi, permitió que en los años noventa, bajo la conducción de los ministros de Hacienda concertacionista, Alejandro Foxley y Eduardo Aninat hasta 1997/1998, el crecimiento del PIB estuviera alrededor de 7%. Es decir, en poco más de una década, 13 años, la economía neoliberal creció de manera sistemática posibilitando que el “paraíso del consumidor” consolidara y completara la constitución de las y los ciudadanos neoliberales. Especialmente, a las nuevas clases medias y sectores populares neoliberalizados. Por su parte, los sectores dominantes consolidaron su hegemonía y su poder.

Durante 25 años (1990-2015), tanto la “jaula de hierro” como el “paraíso consumista”, los dos poderosos encierros neoliberales pseudo-democráticos, fueron formando y moldeando subjetivamente a la sociedad chilena y a sus gentes (hombres, mujeres, niños y niñas). Las y los ciudadanos adquirieron y asumieron los principales valores propiciados y promovidos por los ideólogos del neoliberalismo. Entre los cuales destaca la idea de que el sujeto debe competir permanentemente con los otros, para ganar. Para triunfar. Ello explica que el pegajoso tema juvenil de Miguel Bosé: “Voy a ganar” de inicios de los años ochenta, se transformara en el himno oficial de los “*winner chilensis*” Esta idea, unida al individualista slogan triunfador de “No estoy ni ahí” del tenista Marcelo “Chino” Ríos en los años noventa, marcaron a las y los chilenos de esa década y de los tres primeros lustros del siglo XXI.

Chile se constituyó en una sociedad de hombres y mujeres “ganadores” gracias a que el capitalismo neoliberal triunfaba y avanzaba “chorreando” hacia los quintiles más bajos de la escala social los escasos y relativos “beneficios” del crecimiento económico. Es una sociedad donde la cohesión social reposa en la autonomía de los individuos y la libertad de los intercambios económicos. Una sociedad donde el sistema institucional/constitucional no se hace cargo de promover la igualdad o la solidaridad, sino, exclusivamente, proteger la propiedad privada del capital, en sus diversas dimensiones y manifestaciones; fortalecer los derechos individuales y, sobre todo, fomentar la competitividad. Una sociedad centrada y operada por el mercado, dominada por la empresa privada y con una mínima y ultra vigilada participación del Estado. Con un sistema de movilidad social que no se apoya en el Estado, sino que depende del esfuerzo individual y, en algunos casos, del apoyo familiar para buscar cómo insertarse y desenvolverse en el mercado. Donde el Estado Mínimo (neoliberal) se relaciona con la ciudadanía a través de canales técnicos evitando en lo posible, todo tipo de relación política, salvo la electoral. Así, la sociedad neoliberal chilena se presenta a sí misma como una sociedad de ganadores, de triunfadores, de emprendedores, de gente de esfuerzo, laboriosa y sacrificada que ha logrado obtener todos los símbolos patrimoniales del éxito neoliberal: casa propia, auto, tarjeta de crédito, viajes al extranjero, mascotas y, en algunos casos, estudios universitarios.



A lo largo de los últimos 30 años (1985-2015), un nuevo grupo social fue emergiendo, visibilizándose en los espacios mercantiles de la sociedad neoliberal: en los grandes centros comerciales, en las universidades privadas, en los paseos públicos (paseando sus perritos), en los aeropuertos, en los casinos, en las extensas playas de La Serena o de Iquique o de Cancún, o de Santo Domingo, entre otros tantos destinos nacionales o internacionales; en cientos de estacionamientos privados, en las clínicas privadas, en los grandes supermercados, en los carretes del fin de semana en Bellavista y otros lugares similares; en los millares de bares para disfrutar los “*happy hours*”, en las tardes de “*weekend*”, en las ciclovías urbanas, en los emprendimientos mercantiles, en un ejército de asistentes no solo al Festival de Viña sino a *Lollapalooza*, en las redes sociales, y un largo etcétera; en fin, la sociedad neoliberal es una sociedad esencialmente de “capas medias”. Una “nueva clase media”, que los especialistas denominan “aspiracionista”.

Esta nueva “clase media” adora al mercado. El consumo no la consume, sino, todo lo contrario, la realiza. Sin el mercado no es nada. Esa es su tragedia actual. Por eso, apostó, mayoritariamente, por la “no política”. No le interesaba nada de lo que pasaba con la democracia. Esa es una preocupación de los políticos. Se hizo abstencionista electoral, individualista, egoísta, competitiva y excluyente. Hasta el año 2011 esa clase media aspiracionista vivía feliz en su edén consumista. La irrupción plebeya de las y los estudiantes secundarios y universitarios en protesta contra la educación de mercado, la tiene aterrada. Pues, el paraíso neoliberal ha comenzado a resquebrajarse, a agrietarse. Los mercados que conforman la sociedad neoliberal presentan fallas estructurales.

Lo grave para las ciudadanías neoliberales es que las élites dirigentes, los que conducían a la sociedad, aquellos que eran el modelo del éxito neoliberal, “los *winner*” han resultado ser unos corruptos, ladrones, delincuentes, dispuestos a todo con el objeto de ganar. Han sido los primeros en llegar a la Cárcel Capitán Yáber. Así como los asesinos y criminales de la dictadura, entre ellos Manuel Contreras, el exjefe todopoderoso de la DINA, y el exjefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán, que están condenados por sus crímenes en la Cárcel de Punta Peuco, los principales empresarios neoliberales, los jefes y controladores de PENTA, un holding construido bajo la racionalidad empresarial neoliberal, fueron

formalizados por delitos reiterados de corrupción. Por esa razón, dejados, primero, en prisión preventiva por ser considerados **“un peligro para la sociedad”**. Aunque, más tarde se les revocó la prisión preventiva por arresto domiciliario total y con arraigo nacional, por la misma consideración.

Este es el punto que consideramos central y crucial para entender la profundidad de la crisis de legitimidad del orden social neoliberal; esta es una crisis mayor incluso que la que se experimentó en el año 2011, cuando los estudiantes secundarios y universitarios cuestionaron el mercado educativo y al capital a través de su consigna “no al lucro”.

En aquella oportunidad, ningún empresario de la educación fue considerado por la “justicia” un “peligro para la sociedad”. Esta afirmación es un punto crucial. El cual debe ser meditado y analizado sociológica y políticamente. Dos de los principales constructores y representantes de la sociedad neoliberal han sido considerados un *“peligro” para ella*.

Esta condición podría ser, considerando la profundidad alcanzada por la hegemonía neoliberal en la sociedad chilena, una aberración, una incongruencia y, de cierta forma, una profunda contradicción. Dado que la figura del empresario desde la década de los años 80 hasta mediados de la primera década del nuevo siglo, es decir, a lo largo de los últimos 26 años (1980-2006), según el sociólogo Eugenio Tironi -uno de los principales publicistas de la sociedad neoliberal triunfante-, era uno de los principales protagonistas de la historia. En otras palabras, en la sociedad neoliberal en su fase democrática, es decir, en la sociedad concertacionista, los empresarios se habían convertido y transformado en “los nuevos dioses”.<sup>53</sup>

Por esa condición, los empresarios han sido los actores históricos todopoderosos y omnipresentes en la estructura social, política, económica e ideológica y cultural de la sociedad nacional. Han controlado todas las fuentes del poder social, ejerciendo casi sin contrapeso el “poder social infraestructural”. Ejercido y practicado no necesariamente desde los aparatos del Estado,

---

<sup>53</sup> Tironi, Eugenio (1999). *La irrupción de las masas y el malestar de las élites. Chile en el cambio de siglo*, Editorial Grijalbo S.A., Santiago de Chile, pp 57 ss.

como lo plantea M. Mann<sup>54</sup>, sino desde el Mercado e incluso desde específicas y determinadas organizaciones de la Sociedad Civil. Lo cual le permitió al empresariado nacional su total integración al "establishment" político, militar, religioso, judicial, comunicacional y universitario. Los empresarios tienen hasta el día de hoy el control total de la sociedad, del Mercado y el Estado.

A pesar de ello, producto de los escándalos de corrupción económica y política los "dioses han caído" en desgracia y, tal vez, comiencen a ser expulsados del "paraíso del consumidor" o a ser condenados. Los mismos que tan solo ayer eran "adorados" y vistos como un modelo social, económico y dotados de virtudes intachables, en la coyuntura abierta por el caso PENTA y SQM son vistos como seres deleznable y un peligro para la sociedad que ellos habían, supuestamente, construido: la sociedad libre.

Desde 1986 hasta 2014, o sea, durante 28 años, de los cuales tan solo 4 años fueron bajo la sombra del dictador, 20 años de gobiernos de la Concertación y 4 años del gobierno de Sebastián Piñera, los señores Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín construyeron su "imperio" empresarial con inversiones en las áreas de la previsión, seguros, finanzas, salud, inmobiliaria y educación. Es decir, en casi todos los mercados neoliberales. Según Carlos Délano, las empresas PENTA eran una "máquina para crear trabajo" y, que aproximadamente, 30.000 empleados y sus familias estaban siendo afectados por las acusaciones del Fiscal Nacional, Nicolás Chahuán. Los datos que proporciona Délano son interesantes de proyectar analíticamente.

Partamos con el siguiente supuesto sociológico: si cada empleado tiene una familia de 3 personas, estamos hablando que empresas PENTA están directamente vinculadas con aproximadamente, entre 90.000 a 100.000 personas. Muchas de las cuales han trabajado en esas empresas en un promedio de 5, 10 y 15 años, y un grupo muy reducido, tal vez, entre 15, 20 y 25 años. Muchos hicieron su vida en las empresas PENTA.

Segundo supuesto sociológico: muchos de las y los empleados que se desempeñaron o se desempeñan en el área de

---

<sup>54</sup> Mann, Michael. (1997). *Las Fuentes del poder social, II. El desarrollo de las clases y los Estados nacionales, 1760-1914*, Alianza Editorial S.A., Madrid, 1997, pp 215-131.

la previsión (AFPs), seguros, finanzas (bancos), salud (ISAPRES) y educación (universidades), es probable que fueran inspirados y enseñados en la racionalidad neoliberal.

Tercer supuesto sociológico: por su estilo corporativo neoliberal estas empresas tienen o tenían como público objetivo o específico a los “sectores medios aspiracionistas” tanto para contratarlos como trabajadores como para ofrecerles sus servicios mercantiles. Hoy esos grupos se ven amenazados en su estabilidad laboral y mercantil por la propia acción delictual de los gestores e inspiradores de la sociedad neoliberal.

Una paradoja que tendrá consecuencias políticas para la democracia neoliberal. Es sabido que las clases medias de ayer y de hoy ante los miedos y las amenazas que se desatan en una sociedad optan por el autoritarismo. Y tienden a responsabilizar a la democracia de producir esos peligros. Así lo hicieron en 1973, cuando pidieron a gritos histéricos, a las Fuerzas Armadas, el derrocamiento del gobierno popular de Salvador Allende; o en 1985-1988, cuando en tropel corrieron a refugiarse en la institucionalización pinochetista ante la supuesta amenaza que les provocaba la movilización popular. Las viejas como las nuevas clases medias han sido y, probablemente, son bastante volubles y caprichosas en su adhesión a la democracia.

### **La rebelión de las y los “hijos putativos” de la democracia protegida**

La sociedad neoliberal chilena ingresó en una prolongada coyuntura histórica crítica producto de las protestas estudiantiles del año 2006 y de la rebelión ciudadana de los años 2011 y 2013, protagonizadas, especialmente, por las y los hijos menores de los sectores medios aspiracionistas, apoyadas masiva y contundentemente por los sectores populares y, sobre todo, por las y los ciudadanos subpolíticos, o sea, todos aquellos sectores sociales y ciudadanos que desde 1990 rechazaban la espuria institucionalidad política neoliberal pinochetista.

Esta coyuntura histórica ha tenido dos momentos de inflexión política en busca de su solución, ambos de carácter electoral. Me refiero a las elecciones presidenciales de 2010 y 2013. Ambas protagonizadas activamente por las clases medias

aspiracionales y, por cierto, por un porcentaje no menor de sectores populares neoliberalizados.

En el proceso electoral del año 2010 los sectores medios aspiracionistas apoyaron abiertamente la candidatura del empresario neoliberal Sebastián Piñera. Una combinación electoral de abierto apoyo de las élites empresariales, sectores ABC1, mayoritariamente de los sectores medios ya señalados y el apoyo reducido de sectores populares (aunque fundamentales para acopiar votos) posibilitó que uno de los arquitectos de la institucionalidad económica neoliberal llegara al gobierno.

La apuesta política de las ciudadanía neoliberales consistió en que la derecha neoliberal en postura democrática pudiera remediar las fallas de mercado que habían develado las movilizaciones de las y los jóvenes estudiantes secundarios en 2006, durante la denominada “revolución pingüina”; las constantes protestas ciudadanas contra el Transantiago desde 2007; las rabias colectivas contra los abusos de las Farmacias y de la tienda La Polar, entre otras tantas indignaciones sociales, económicas, culturales y políticas protagonizadas por las ciudadanía.

Las movilizaciones ciudadanas durante el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) tuvieron una composición heterogénea. Se movilizaron ciudadanos neoliberales (el reclamo de los clientes) de clase media aspiracionistas que buscaban corregir el neoliberalismo, para que el adorado mercado funcionara bien. Mientras que otros sectores, los subpolíticos se movilizaron para impulsar el cambio integral del régimen político y social dominante y hegemónico. Entre estos sectores emergió un vasto y amplio sector juvenil tanto de clase media como de sectores populares que, hastiados del conformismo concertacionista, se plantearon en rebeldía en contra del sistema. Su opción política luego del 2006 fue construir y acumular fuerza social y política propia de manera autónoma en los márgenes del sistema. En cierta forma, estos sectores sociales habían perdido en el año 2006 una “batalla” cuando toda la clase política neoliberal (aliancista y concertacionista) unidos frenaron y derrotaron a la rebelión secundaria. Estos sectores se replegaron para dar nuevas batallas, tal vez, en escenarios políticos más favorables.

Ese escenario se abrió con la elección de Sebastián Piñera en enero de 2010. Como he explicado en otro lugar, el triunfo

electoral de la derecha neoliberal es consecuencia directa de: (a) la división interna de la Concertación, quiebre provocado por la candidatura de Marco Enríquez-Ominami y por la obtusa posición concertacionista de postular a Eduardo Frei Ruiz-Tagle; (b) por el crecimiento de la abstención electoral; y (c) el apoyo mayoritario de los sectores medios aspiracionistas a la derecha.<sup>55</sup>

Con todo, el apoyo logrado por Sebastián Piñera, de igual forma como le va a ocurrir a Michelle Bachelet en 2013, son apoyos electorales-sociales minoritarios. Si bien él será elegido con el 51.61% de los votos ciudadanos, este apoyo electoral oculta una realidad sociológica y políticamente relevante. Efectivamente, votaron por Sebastián Piñera 3.591.182 ciudadanos, pero si consideramos el universo total de electores, o sea, de ciudadanos con derecho a sufragar que en ese año eran 12.277.915, los votos obtenidos por el candidato de la derecha corresponden tan solo al 29, 2%. O sea, el 70.8% eran ya sea, opositores declarados: los concertacionistas que votaron por Frei Ruiz-Tagle, 27,4%; los sectores que apoyaron a Marco Enríquez-Ominami y a Jorge Arrate y, sobre todo, los abstencionistas subpolíticos, preferentemente jóvenes rebeldes del 2006, que rechazaron abiertamente el proceso electoral y a las alternativas levantadas en esa oportunidad. Por consiguiente, los opositores sociales y políticos ciudadanos a Sebastián Piñera y a la derecha, así como los indiferentes a la política gubernamental, eran mayoría en el país.

Uno de los aspectos y dimensiones que dan cuenta de la condición espuria de la normativa institucional del régimen electoral nacional desde 1990 hasta el día de hoy y que expresa la fortaleza de la democracia neoliberal ha sido, justamente, presentar a las minorías políticas como la expresión de las mayorías ciudadanas. Desde 1997 en adelante, cuando en la sociedad neoliberal la ciudadanía comenzó a vaciar el sistema electoral, todos las y los presidentes y las y los parlamentarios han representado a una minoría ciudadana.

Lo que los analistas y politólogos presentaron como un proceso de "transición política a la democracia", en realidad no fue más que el proceso de "oligarquización" de la política y de la

---

<sup>55</sup> Ver: Gómez Leyton, Juan Carlos (2010). *Política, Democracia y Ciudadanía en una sociedad neoliberal, Chile 1990-2010*. Santiago de Chile, pp, 431-485.

democracia. Ahora bien, este proceso de elitización de la política, implica, por cierto, el alejamiento de ella de la ciudadanía. Ello se evidenció en el año 2013, cuando el 59 % de las y los ciudadanos no participaron en los procesos electorales parlamentario y presidencial de ese año.

La oligarquización de la política y la democracia, que no es otra cosa que la ausencia de ciudadanos en los procesos electorales y políticos ha sido sostenida por el poder del dinero proporcionado por el capital en apoyo a toda la clase política con el objeto de que sus miembros pudieran ser elegidos y hacer su trabajo legislativo en la perspectiva de la reproducción ampliada del capitalismo neoliberal.

A pesar de que los partidos de derecha son la minoría, siempre obtienen representación parlamentaria, logrando con ello poder de veto que impide desde 1990 hasta hoy, la democratización del régimen político. Eso era posible fundamentalmente por dos factores, en primer lugar, por la operativa del sistema binominal y, en segundo lugar, por el financiamiento millonario que les proporcionaba el capital, por ejemplo, el grupo PENTA.

El caso de la UDI POPULAR es un ejemplo paradigmático de esta combinación. En los años noventa obtuvo el voto de los sectores populares, gracias a la compra de votos cuando las y los candidatos pagaban las cuentas de los servicios: agua, luz, teléfono, a las familias populares; o les entregaban cajas de mercaderías, en fin, todo ello financiado por el capital. Otro tanto hacían, también, los sectores vinculados a Renovación Nacional e, incluso, los partidos de la Concertación. Si en la sociedad neoliberal todo se vende y todo se compra, por qué no comprar los votos y las preferencias de las y los ciudadanos. Eso es simplemente corrupción electoral.

El fomento del clientelismo político entre los sectores populares permitió a los partidos de la derecha “conquistar” los votos necesarios para mantenerse como partidos obstruccionistas y negadores del cambio político institucional. Mientras que para los partidos concertacionistas el clientelismo les ha permitido durante las dos últimas décadas asegurar una base electoral para sostener su condición de partidos gubernamentales y darle continuidad y sustentabilidad a la forma de acumulación

neoliberal. De esa forma el sistema político o el régimen de democracia protegida ha sido sostenido por una clientela política ciudadana ávida de obtener algún tipo de beneficio en función de maximizar sus utilidades al entregar a algún candidato o partido su voto.

La búsqueda por parte de las clases medias aspiracionistas y sectores populares neoliberalizados de una salida a la coyuntura crítica abierta en el año 2006 fue volver, en el 2010, a las raíces del neoliberalismo, a sus gestores y armadores. La expectativa política electoral se puso en la idea de que el exitoso empresario neoliberal Sebastián Piñera traería de vuelta los virtuosos mecanismos e instrumentos de gestión económica que le permitirían al capitalismo neoliberal retomar la senda de crecimiento, semejante a la impulsada por H. Buchi en 1985. Sin embargo, ello no fue del todo posible. Principalmente, por dos factores. Por un lado, el terremoto de febrero de 2010, que derrumbó el programa económico del gobierno piñerista antes de empezar el gobierno. Y, sobre todo, por el terremoto ciudadano del año 2011.

La rebelión ciudadana que estalló en el año 2011 profundizó el derrumbe del programa de gobierno de la derecha. El cambio prometido, que consistía fundamentalmente en reforzar los pilares del neoliberalismo, se logró a medias. Por todos lados, Piñera y sus Ministros encontraban obstáculos para impulsar el necesario reajuste estructural que el proceso de acumulación neoliberal requería. Pues, luego de 30 años de funcionamiento, el neoliberalismo nacional comenzaba a experimentar un agotamiento interno y, sobre todo, a dar cuenta de sus contradicciones: el sistema de pensiones administrado por el capital privado era y es un fiasco y un engaño; el sistema de salud privado lo mismo; el mercado de la educación otro fraude; la naturaleza devastada por la minería extractiva; en fin, el exitoso neoliberalismo nacional, admirado y aplaudido en todo el mundo, estaba mostrando sus límites y en los tiempos del bicentenario comenzaba a mostrar sus grietas que anunciaba su crisis. Durante los dos años siguientes, 2012 y 2013, el gobierno de Sebastián Piñera se dedicó a administrar lo mejor posible el sistema. Trató de apoyar y solucionar las fallas del mercado, pero no impidió la movilización social de la ciudadanía rebelde.



La derrota de la derecha en las elecciones municipales del año 2013 fue un factor de cohesión política en la oposición concertacionista. Abrió la ambición política a muchos sectores políticos que pensaron que esta era una nueva oportunidad para llegar al gobierno. No obstante, los actores políticos no fueron capaces de leer el verdadero mensaje político enviado por la ciudadanía: el 60% de la ciudadanía se abstuvo de participar en los procesos electorales. El mensaje fue, tal vez, “no estamos ni ahí con su sistema político”, lo despreciamos y lo rechazamos o simplemente no nos interesa. Por esa razón, rechazamos a todos aquellos que se integran a él.

Para aprovechar la derrota electoral de la derecha, la exConcertación trajo de vuelta a la ex-Presidenta Michelle Bachelet. Esta operación política tenía un punto de apoyo central para que fuera exitosa. Bachelet contaba con el apoyo masivo de las y los sectores populares. Por su carisma, su calidez, su sonrisa, su afectividad, sencillez, y otros atributos personales, la expresidenta tenía el apoyo de esos esquivos sectores. Claramente, no contaba con el apoyo de los sectores medios aspiracionistas ni tampoco de los grupos empresariales y de los sectores ABC1, quienes la rechazaban, por su falta de liderazgo y de conducción.

La estrategia de la ex Concertación tenía una variante puntual para su éxito. Lograr el apoyo electoral del Partido Comunista de Chile, así como de los diversos grupos políticos que emergieron durante la rebelión ciudadana del 2011. Para lograrlo, el Partido Comunista debía transformarse, mutar, cambiar de color, abrirse a integrarse a una alianza con sectores políticos que lo habían excluido sistemáticamente durante 20 años. La razón para la inclusión del PC en un nuevo referente estaba relacionada con el temor político que le provocaba a los diversos partidos de la ex Concertación, especialmente, a la Democracia Cristiana, que el PC fuera el que obtuviera los dividendos políticos y electorales de la rebelión ciudadana del año 2011. Este temor estaba fundado en que la expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Vallejo, es militante comunista.

Cuando la exConcertación le abrió cupos parlamentarios (tres) al Partido Comunista de Chile, que había vivido en el ostracismo parlamentario desde 1990 hasta el 2009, éste

comprendió rápida y sagazmente que el momento y el escenario político eran altamente propicios para aumentar su cuota parlamentaria, y optó por incorporarse al nuevo pacto electoral que le ofrecía la Concertación. Y juntos, con otros sectores, conformaron la Nueva Mayoría. El camino hacia La Moneda para la expresidenta estaba pavimentado. Todos estaban felices y contentos.

La estrategia concertacionista tuvo éxito. Que, por cierto, la derecha y sus desatinos se encargaron de asegurar. Lo cierto es que la Nueva Mayoría logró convencer con su Programa de Reformas, a las y los ciudadanos conformes, pero disgustados con el neoliberalismo. Pero, no a la mayoría ciudadana antineoliberal, especialmente a los rebeldes del 2006 y del 2011, éstos miraron con recelo y con especial desconfianza lo ofrecido por la candidata de la Nueva Mayoría. Pero también lo que plantearon los candidatos alternativos “sociales” como M. Claude y Roxana Miranda. El fondo del recelo y de la desconfianza radicaba en que todos querían convertirse en presidente constitucional del país. Aunque algunos hablaban de la posibilidad de convocar a una constituyente, pero ninguno optaba por ejercer primero el poder destituyente. Allí estaba la clave.

Una de las demandas políticas levantadas por la rebelión ciudadana de 2011-2012 ha sido la exigencia de la convocatoria a Asamblea Constituyente democrática y ciudadana con el objeto de poner fin a la vigencia de la espuria Constitución Política de 1980, la cual a pesar de los cambios introducidos durante los gobiernos concertacionistas, conserva la obra gruesa de la institucionalidad autoritaria, antidemocrática y, sobre todo, neoliberal.

La demanda por una Asamblea Constituyente ha sido una de las demandas permanentemente postergadas por la mayoría de la clase política tanto de derecha, centro como de izquierda. Aunque ese rechazo no supone ni implica la aceptación de la necesidad del cambio político institucional. Se requiere cambiar la Constitución Política, en eso hay acuerdo entre los sectores de la centroderecha y la izquierda neoliberal. Pero, para ello no se requiere necesariamente convocar a una Asamblea Constituyente, se puede hacer por otros medios, por ejemplo, a través de la acción del poder constituyente derivado, es decir,

por el parlamento. Esta es la vía que proponen los parlamentarios mientras la ciudadanía, especialmente la subpolítica y rebelde, se plantea la Asamblea Constituyente. Este es uno de los conflictos más interesantes e importantes de la coyuntura crítica abierta en el ciclo de protestas entre 2006-2012. Este conflicto político se enmarca en la confrontación de los poderes constituyentes: el derivado y el originario.

Lograda la unidad electoral propiciada por la Concertación mutada ahora en Nueva Mayoría y con la incorporación del Partido Comunista, de los líderes del movimiento estudiantil no comunista: Giorgio Jackson, en representación del Movimiento Revolución Democrática, Gabriel Boric, de la izquierda autónoma, entre otros, al proceso electoral parlamentario y presidencial, la recuperación del gobierno era más que evidente. La mayoría de la ciudadanía nacional consideraba, de acuerdo con los sondeos de opinión, que el próximo presidente sería la exmandataria M. Bachelet.

De manera que el capital neoliberal, financiero y mercantil, las clases medias aspiracionistas y los sectores populares neoliberalizados apoyaron a la candidata de la Nueva Mayoría, pues ella era la garantía para la continuidad del neoliberalismo criollo. A pesar de las reformas “estructurales” que se prometían en el programa de gobierno, este, en realidad, no comprometía ni ponía en peligro su continuidad. Por su parte, la izquierda antineoliberal contenida (el Partido Comunista, la Izquierda Ciudadana y el MAS), Revolución Democrática y la Izquierda Autónoma, apostaron por la popular candidata y, sobre todo, por el programa de gobierno. Para ellos el programa contenía y propiciaba las “reformas estructurales” necesarias para poner fin a la hegemonía cultural y el sentido común neoliberal dominante. En otras palabras, para estos sectores la Nueva Mayoría abriría, por fin, las “grandes alamedas”.

La estrategia electoral impulsada por la Nueva Mayoría era ganar en la primera vuelta presidencial. Los factores que propiciaban el holgado triunfo eran: el creciente apoyo que recibía la expresidenta, mostrado en los sondeos; la debacle política interna de la derecha, con inesperados cambios de presidenciables; el surgimiento de candidatos sociales alternativos con escasos y visibles apoyos electorales; la pérdida de novedad y

atractivo político de la propuesta de Marco Enríquez-Ominami y el surgimiento de candidatos outsider. Sin embargo, eso no ocurrió.

Michelle Bachelet ganó la primera vuelta con el 46.7% de las preferencias ciudadanas. Fue sin duda un primer lugar holgado, pues la candidata de la derecha, Evelyn Matthei, logró tan solo el 25.03% de las preferencias. La distancia entre ambas primeras mayorías era sideral, 21.67 puntos las separaban. Bachelet había derrotado también de manera contundente al resto de los presidenciables, por ejemplo, a Marco Enríquez-Ominami, "l'enfant terrible" de la Concertación en las elecciones presidenciales del año 2009, logró tan solo 10.99% de votos ciudadanos, registrando una reducción del 50% de las preferencias con relación a la obtenida anteriormente. La derrota electoral del Partido Progresista, formación política, fundada por Marco Enríquez-Ominami, fue total y completa. La Nueva Mayoría también se impuso a los candidatos alternativos de "derecha" (Franco Parisi, 10.11%; Ricardo Israel, 0.57%, y Tomás Jocelyn-Holt, 0.19%) así como a los candidatos alternativos sociales (Marcel Claude, 2.81%; Alfredo Sfeir, 2.35% y Roxana Miranda, 1.24%).

Sin embargo, la Nueva Mayoría no logró derrotar a la abstención política y electoral ciudadana. A pesar de su holgado triunfo, las cifras señalan que en la primera vuelta la gran mayoría ciudadana nacional, por diversas razones, no participó en el proceso electoral presidencial. El 51.0% del electorado nacional no asistió a sufragar. Dejando en evidencia que el cambio de regla electoral, de pasar de la inscripción voluntaria en los registros electorales y el voto obligatorio a la inscripción automática y al voto voluntario, fue un fracaso rotundo y ratificó la tendencia al vaciamiento ciudadano de la democracia electoral que se experimentaba desde el año 1997.

El cambio de regla electoral había ampliado el universo electoral de más menos 8.200.000 electores a 13.573.088. Los candidatos alternativos tanto de derecha como sociales dirigieron sus campañas presidenciales a conquistar ese nuevo y enigmático electorado. Se trataba de conquistar las preferencias de aproximadamente 5.000.000 de ciudadanos. No lo lograron, fracasaron en el intento.

La participación electoral en la primera vuelta fue tan solo de 6.699.011, o sea, el 49,36%, con un voto efectivo de 6.585.808. Lo que significa que la “no participación” y la abstención electoral cruzó el umbral del 50%, llegando al 51,46%.

En la segunda vuelta presidencial la candidata de la Nueva Mayoría alcanzó el 62,17% de las preferencias ciudadanas, pero con un universo electoral menor al de la primera vuelta. Concurrieron al balotaje tan solo 5.697.751 electores, es decir, 1.001.260 de electores menos que en la primera vuelta. Un 15% de los electores se retiraron de la contienda presidencial. De ninguna manera fueron electores de las dos primeras mayorías, puesto que tanto Michelle Bachelet como Evelyn Matthei aumentaron su votación. Este aumento nos podría llevar a pensar que se trata de los electores que votaron por los otros candidatos. La abstención total alcanzó la cifra récord de un 58,87%.

En ese contexto, el 62,17% obtenido por Michelle Bachelet se reduce a un 25,57% de apoyo electoral ciudadano. Por consiguiente, el 74,43% de la ciudadanía nacional asumió una actitud de rechazo o de indiferencia hacia el nuevo gobierno. Por consiguiente, más allá de cualquier consideración, lo real y verdadero es que la Presidenta Michelle Bachelet Jeria no tuvo apoyo mayoritario de la ciudadanía nacional.

### **La democracia protegida: una forma de democracia corrupta**

La institucionalidad política neoliberal vigente desde los años 1990 hasta la actualidad, ha sido sostenida y defendida por la Unión Demócrata Independiente, UDI. Partido político de profunda orientación conservadora, autoritaria y antidemocrática. A pesar de estos rasgos se constituyó desde 1997 en el principal partido de la derecha y del sistema político nacional. En efecto, entre 1997 y 2013, la UDI ha sido el partido político más votado por la ciudadanía nacional. Desplazando de ese lugar a la Democracia Cristiana, el todopoderoso partido de la Concertación de Partidos por la Democracia (CPPD).

Entre los años 1997 y 2009, en el marco de un progresivo vaciamiento ciudadano de los registros electorales y un sostenido aumento de la abstención electoral, la UDI experimentó un explosivo aumento de su votación. Ambos factores potenciados

por los efectos positivos del sistema binominal le permitirán aumentar significativamente el número de representantes en ambas cámaras del poder legislativo. De manera que de 17 curules que obtuvo en 1997 pasó a tener 31 en el 2001; 33 en el 2005 y 37 en el 2009. Controlando el 30% de la Cámara de Diputados. Poderoso poder parlamentario ha ostentado y ejercido la UDI, durante 16 años impuso su poder de veto para reforzar la defensa constitucional e institucional de la “democracia protegida” (ideada e instalada por su líder y fundador, el extinto senador Jaime Guzmán E.) y del patrón de acumulación neoliberal.

No obstante, el poder de veto y el aumento de la representación parlamentaria experimentado por la UDI en el periodo señalado, no tiene una correlación directa con un aumento sostenido de votación y adhesión por parte de los ciudadanos. Esta es una paradoja política, pero, al mismo tiempo, una expresión manifiesta de cómo funciona electoralmente la democracia protegida.

Si bien, la votación obtenida por la UDI aumentó significativamente en las parlamentarias (diputados) del año 1997 y el año 2001, pasando de 837.736 votos a 1.547.209, respectivamente, esta votación se constituyó en el “pico” más alto del apoyo electoral obtenido en los 16 años que se abren en 1997 y se cierran en 2013. En ninguna de las siguientes elecciones parlamentarias posteriores a 2001 (2005, 2009 y 2013) logró rebasar esa cifra. Todo lo contrario, la tendencia electoral experimentada fue hacia la baja. Por ejemplo, en las parlamentarias de 2013 su votación cayó en 6 puntos en relación con la obtenida en el año 2001. En dicho torneo electoral la UDI obtuvo 1.174.411 votos ciudadanos, o sea, 372.798 menos. No obstante, y a pesar de la menor votación obtenida, la UDI se mantuvo como el partido político más votado de Chile. Aunque perdió 8 diputados mantuvo la primera mayoría en la Cámara. Actualmente dispone de 29 diputados, contra 19 de su aliado político Renovación Nacional y 8 más que el partido más votado de la Nueva Mayoría, el Demócrata Cristiano, quién logró con 967.003 preferencias ciudadanas elegir a 21 diputados.

La relación entre la “abstención” y “no participación electoral” con la corrupción política ha sido escasamente analizada

por la literatura politológica especializada y las ciencias sociales nacionales. Tanto la ciencia política como la sociología política nacional han prestado escasa atención al tema de la abstención electoral y menor aún al de la corrupción política. En ambas problemáticas, la falta de estudios serios y profundos es de una pobreza franciscana. Un dato para ejemplificar este punto, tal vez básico pero revelador, es que, al revisar el catálogo de la Biblioteca del Congreso Nacional y colocar en el buscador “corrupción política en Chile”, se despliegan 132 aciertos, de los cuales solo unos 25 aciertos están relacionados directa o indirectamente con la problemática de la corrupción política en Chile. La indigencia de estudios específicos para el caso de la abstención electoral es mayor aún. Solo aparecen 6 aciertos bajo el buscador “abstención electoral en Chile”. O sea, a los analistas políticos de la democracia chilena poco y nada les ha interesado estudiar estas dos problemáticas cruciales para el desenvolvimiento de la democracia.<sup>56</sup>

Sin embargo, ambas problemáticas han tenido en la historia política reciente un agudo nivel de incidencia. Ambos fenómenos se han desplegado a lo largo de los últimos cuatro lustros y al ser develados públicamente han terminado provocando a la democracia oligárquica una profunda crisis institucional, actualmente en desarrollo. Cuya única solución posible es abrir un proceso de movilización ciudadana en la perspectiva de poner en práctica tanto el poder destituyente como el constituyente originario. Volveré sobre este punto más adelante.

La abstención electoral entendida en sentido amplio, es decir, considerando tanto la no concurrencia a un torneo electoral, el voto blanco y el nulo como la no participación electoral producto de la no inscripción en los registros electorales de parte de las y los ciudadanos mayores de 18 años, hizo su irrupción política en el año 1997. Aunque la no inscripción electoral por parte de las y los jóvenes comenzó a manifestarse a mediados de la década de los noventa. Las explicaciones presentadas por las ciencias sociales

---

<sup>56</sup> Desde el año 2003 hemos venido estudiando tanto la abstención electoral en Chile como la corrupción política. Dicté cursos sobre dicha materia en diversas universidades del país y del extranjero. He presentado dos proyectos al Concurso Nacional de Investigación de Fondecyt relacionados con la temática, pero por diversas razones no han sido financiados.

provinieron, principalmente, de dos vertientes. La más obsecuente fue presentada por José Joaquín Brunner, no como un caso anómalo de la democracia sino como una manifestación de su madurez<sup>57</sup> o, como un malestar ciudadano con la modernidad neoliberal, en opinión de Norbert Lechner.<sup>58</sup> Y, como la forma habitual de comportamiento político de los ciudadanos neoliberales y de acuerdo con la teoría económica de la democracia de A. Downs, el comportamiento racional esperable.<sup>59</sup> (Gómez Leyton, 2005).

En la mayoría de los análisis politológicos de la abstención, las y los ciudadanos que no participan en los procesos electorales, no importan. Son un dato estadístico, importante y relevante, pero no significativo al momento de construir las mayorías o las minorías electorales que conviven al interior del régimen político, para ellos la legitimidad del gobierno como de las autoridades está dada por aquellos que si participan en las decisiones vinculantes como son los procesos electorales.

En la formalidad normativa y constitucional eso es así. Todo es legal y legítimo. Sin embargo, el hecho de que el 59 % de la ciudadanía “no esté ni ahí” con el sistema político debiera ser una preocupación ciudadana. Esta situación no es nueva, se viene arrastrando desde antes de 1997. O sea, durante 16 años, el régimen electoral, la democracia protegida, funciona cada año con menos ciudadanos. Se trata de una democracia electoral sin ciudadanos.

Por esa razón, esta es una democracia oligárquica, elitista, dominada por partidos políticos conformes con el sistema que han monopolizado la política, mutilando la participación política ciudadana, a la electoral. Reduciendo, de esa forma, al ciudadano a un voto o si quiere, al mero acto de sufragar, a la emisión de su opinión al marcar una papeleta. Obviamente, que este tipo de democracia electoral tiene la virtud institucional, o sea, normativa y legal de mantenerse en el tiempo, a pesar del menguado número de ciudadanos participando electoralmente en ella.

---

<sup>57</sup> Brunner, J. J. (1998). “Malestar en la sociedad chilena. ¿De qué, exactamente, estamos hablando?” *Estudios Públicos*, 72: pp. 173-198.

<sup>58</sup> Lechner, Norbert, (1998). “Carta a José Joaquín Brunner en respuesta a ‘Malestar en la sociedad chilena’”

<sup>59</sup> Gómez Leyton, J.C. (2004). “¿Votar o no Votar? ¿Esa es realmente la cuestión? o ¿Qué democracia queremos? Una argumentación política por la democracia posneoliberal”, en Gómez Leyton, J.C., *Política, Democracia y Ciudadanía en una Sociedad Neoliberal, Chile, 1990-2010. Tomo I, Escaparte/CIPPSAL*. 2023.



Puede ser una contradicción que muchos no estarían dispuestos a considerar, vamos a sostener que un factor político explicativo que sostiene y mantiene al régimen político actual, la democracia protegida, es el constante alejamiento de la actividad política electoral de la ciudadanía, es decir, el aumento creciente de la no participación política electoral de la ciudadanía. Una de las consecuencias políticas de la participación política es la oligarquización de la democracia y de la política y una de las consecuencias de ese proceso, es el aumento creciente de la corrupción política. Como veremos y expondremos en el apartado siguiente.

## **TERCERA PARTE**

### **LA DEMOCRACIA NEOLIBERAL: UNA DEMOCRACIA “SIN ELECTORES”**



## El “Partido de las y los No Electores” en la Democracia Neoliberal, Chile 1990-2018

Una de las expresiones más notorias y evidentes de la “gran ruptura” existente entre la sociedad y la política, según Manuel Antonio Garrretón, se habría registrado en las elecciones presidenciales y parlamentarias del año 2013 como, también, en las elecciones municipales de 2016.<sup>60</sup> En esas ocasiones más del 60,0 % de la ciudadanía se abstuvo de votar; un grupo menor, optó por anular el voto; y, otro, por dejar el voto en blanco; así, la abstención general rebasó el 65% del padrón electoral, o sea, más de 9 millones de ciudadanos rechazaron elegir un representante o alguna autoridad local o nacional. Instalando a Chile, según el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), en el primer lugar entre los países con mayor abstención electoral del orbe.<sup>61</sup>

Lo acontecido en las elecciones de 2013 y de 2016, ratifica la tendencia política-electoral que comenzó a gestarse en la segunda mitad de la década de los años 90 del siglo XX y que se prolonga por 20 años: la aversión, rechazo o indiferencia ciudadana a los procesos electorales de la democracia posdictadura. Esta tendencia política se expresó, primero, en la no inscripción electoral de las y los jóvenes, y, luego en la abstención electoral tanto de adultos como de jóvenes. Ambos comportamientos políticos dieron lugar producto de su convergencia con otros procesos de fines del siglo XX, a la conformación del “partido de las y los no electores”.<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Garrretón, M. A. (coord.) (2016). *La Gran Ruptura. Institucionalidad política y actores sociales en el Chile del siglo XIX*. Ediciones LOM, Santiago de Chile.

<sup>61</sup> [www.infobae.com/2015/05/1728987-los-10-paises-del-mundo-los-que-menos-gente-va-votar/](http://www.infobae.com/2015/05/1728987-los-10-paises-del-mundo-los-que-menos-gente-va-votar/). Consultado 20/08/2016. Chile (58,8), encabezaría el ranking de los 10 países con mayor abstención, seguido luego por Eslovenia (57.6%), Mali (54,2%), Serbia (53,7%), Portugal (53,5%), Lesoto (53,4%), Lituania (52,6%), Colombia (52,1%), Bulgaria (51,8%) y Suiza (50,9%). Todos estos países tienen establecido el voto voluntario.

<sup>62</sup> Gómez Leyton, J. C. (1998) “*El Surgimiento del Partido de los No Ele4ctores en la democracia neoliberal chilena*” en Gómez Leyton, J. C. (2010) *Democracia, Ciudadanía y Política en la Sociedad Neoliberal*. Chil3 1990-2010. Editorial U. ARCIS/CLACSO, Santiago de Chile.

Desde los años 1996-1997 hasta el año 2017, con ciertas fluctuaciones menores, la abstención electoral, entendida en un sentido amplio, - o sea, como aquella que incluye a los no inscriptos en los registros electorales, a los abstencionistas (no concurrentes a votar), a los que votan en blanco y a los que anulanse fue incrementando, significativamente, al interior del régimen político nacional. Para el politólogo Carlos Huneeus, la democracia posautoritaria se sostenía en un espejismo: la ilusión de ser una democracia electoral con una alta tasa de participación.<sup>63</sup> Esas fluctuaciones se pueden observar en el Cuadro #1.

Esa "ilusión" se generaba y se sostenía en las instituciones (reglas) que norman los procesos electorales nacionales. Especialmente, en las normas y reglas electorales establecidas por la dictadura cívico-militar en 1987 y que no fueron modificadas por los gobiernos concertacionistas entre 1990-2012. Recordemos que la dictadura cívico-militar había establecido, entre otras, que la ciudadanía para participar en los procesos electorales, al momento de cumplir 18 años, debía inscribirse voluntariamente en los registros electorales y asumir con ello, la obligación de votar. De manera que la fórmula normativa era simple: **inscripción voluntaria, voto obligatorio**.

Por diversas razones y motivaciones desde principios de la década de los años noventa del siglo pasado, las y los jóvenes no se inscribían en los registros electorales.<sup>64</sup> Evidenciándose un incipiente quiebre/ruptura entre la política electoral democrática y la ciudadanía posautoritaria. Esa ruptura con el tiempo se fue haciendo cada vez más amplia, permaneció, relativamente, oculta, debido al espejismo electoral. Y, sobre todo, por la condescendencia analítica tanto de la sociología como la ciencia política nacional. La mayoría de los analistas nacionales como extranjeros que analizaban los procesos electorales de la democracia protegida, escasamente, se preocupaban de estudiar o indagar los porqué de la abstención electoral juvenil o adulta. Es más, muchos politólogos ligados al nuevo orden, la consideraban como algo "normal" de las democracias consolidadas.

---

<sup>63</sup> Huneeus, Carlos (2014). *La Democracia Semisoberana. Chile Después de Pinochet*. Editorial Taurus, Santiago de Chile.

<sup>64</sup> Riquelme, Alfredo (1999). "¿Quiénes y por qué "no están ni ahí"? marginación y/o automarginación en la democracia. Chile 1988-1997", en Paul Drake-Iván Jaksic (compiladores) (1999) *El Modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa*. Ediciones LOM, Santiago de Chile.

**Cuadro # 1**  
**Evolución de la Abstención electoral 1988-2017**

<b>Año</b>	<b>Población en Edad de Votar (PEA)</b>	<b>Inscritos en los registros electorales</b>	<b>NO Inscritos</b>	<b>Votos Nulos/ blancos/ No inscritos</b>	<b>% Abstención</b>
1988	8.062	7.436	626	889	11,02
1989	8.243	7.558	685	1.344	16,30
1992	8.775	7.841	934	2.345	26,72
1993	8.951	8.085	866	1.848	20,64
1996	9.464	8.073	1.391	3.085	32,59
1997	9.627	8.078	1.549	3.746	38,90
1999	9.945	8.084	1.861	2.890	29,00
2000	10.100	8.089	2.011	3.648	36,11
2001	10.500	8.075	2.425	4.393	41,83
2004	10.700	8.013	2.687	4.577	42,77
2005	10.800	8.221	2.579	3.758	34,79
2008	12.066	8.110	3.956	5.704	47,27
2009	12.226	8.235	3.991	5.284	43,21
<b>2012</b>	<b>13.388</b>	<b>13.388</b>		<b>8.127</b>	<b>60,70</b>
<b>2013</b>	<b>13.574</b>	<b>13.574</b>		<b>7.991</b>	<b>58,86</b>
<b>2016</b>	<b>14.121</b>	<b>14.121</b>		<b>9.367</b>	<b>66,34</b>
<b>2017</b>	<b>14.347</b>	<b>14.347</b>		<b>7.315</b>	<b>51,00</b>

Elaboración JCGL con datos del SERVEL

Pero, el “espejismo electoral”, o sea, la ilusión democrática que generaban los procesos electorales registraba que las autoridades políticas electas, tanto a nivel local (elecciones municipales) como a nivel nacional (parlamentarios y presidenciales) eran elegidos con reducidos niveles de abstención y, también, con escasos votos en blanco o nulos. La existencia de un padrón electoral cerrado, donde el voto válidamente se movía entre un 70-75% de los inscritos, llevó a considerar a la democracia posautoritaria chilena como una de las tres democracias, junto a Uruguay y Costa Rica, con los mejores índices de calidad

democrática de América Latina.<sup>65</sup>

Los analistas tendieron a ignorar o consideran poco importante para la marcha de la democracia, la presencia cada vez mayor de “ciudadanos no electores y políticos”; es decir, de todos aquellos ciudadanos que renunciaban voluntariamente a ejercer su derecho político a sufragar.<sup>66</sup> Para algunos analistas políticos, la “libertad de elegir” consagrada en la Constitución Política del Estado de 1980, se manifestaba al momento en que el ciudadano decidía libremente: si se inscribía o no en los registros electorales. Esa era la primera decisión política ciudadana, “por tanto, -sostiene la politóloga Marta Lagos-, afirmar que la democracia representativa está puesta entredicho porque un porcentaje de votantes significativos elige no votar válidamente, es creer que el voto válido es lo único legítimo.”<sup>67</sup>

De manera, que “no elegir” ya sea, porque no se concurre a un torneo electoral, o porque se anula el voto o se lo deja en blanco, es tan legítimo como votar por una preferencia determinada. Por extensión, suponemos que no inscribirse en los registros electorales no solo era legal sino también legítimo. Pues, ambas son manifestaciones de la libertad de elegir de las y los ciudadanos en la sociedad neoliberal. Marta Lagos, nos advierte, que sería un error, pensar que “una democracia vaya a ser de segunda categoría porque no tenga a todos (las y los ciudadanos) inscritos y participando”.<sup>68</sup> Por lo tanto, ninguna democracia posautoritaria estaría en crisis. Aunque algunos la consideraran una democracia incompleta.<sup>69</sup>

---

<sup>65</sup> Morlino, Leonardo (2014). *La calidad de las democracias en América Latina*. IDEA Internacional, Costa Rica.

<sup>66</sup> Gómez Leyton, J. C. (2007). “Chile 1990-2007. Una sociedad neoliberal avanzada” en *Revista de Sociología* # 21. Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, U. de Chile, Santiago de Chile, pp. 53-78.

<sup>67</sup> Lagos, Marta (2007). “Participación Electoral en Chile 1952.2006” en Carlos Huneeus, Fabiola Berrios, Ricardo Gamboa (editores) (2007) *Las Elecciones chilenas en 2005*, Editorial Catalonia, Santiago de Chile.

<sup>68</sup> Ibidem

<sup>69</sup> Garretón, M. A. y Garretón, Roberto (2010). “La democracia incompleta en Chile. La realidad tras los rankings internacionales” en *Revista de Ciencia Política*, Vol.30 N°1, Universidad Católica de Chile, Chile.

PNUD (2014). *Auditoría a la Democracia. Más y mejor democracia para un Chile inclusivo*. PNUD, Chile.

PNUD (1998). *Las Paradojas de la Modernización*. PNUD, Chile.

Cuando el legislador modificó las reglas electorales con el objeto de quebrar la tendencia a la no participación estableciendo la **inscripción automática en los registros electorales y el voto voluntario** (Ley N° 20.568 del 22 de enero de 2012), mantuvo el principio central que anima a la sociedad neoliberal desde la instauración de la democracia posautoritaria en 1990: el individuo es “libre de elegir”, entre participar o no participar. Y, como quedó demostrado en las elecciones municipales de 2012 y en las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2013 y municipales de 2016, que se realizaron bajo la nueva regla electoral, las y los ciudadanos eligieron no participar. La abstención alcanzó a más del 60% de la PEV, debidamente inscrita. El “partido de las y los no electores” se volvió mayoritario. Superando ampliamente al “partido de los electores”. No obstante, dado que el votar constituía un acto político voluntario, la democracia posautoritaria, seguía siendo un régimen político legítimo, pero con una bajísima tasa de participación política electoral.

La existencia del “partido de las y los no electores” constituye una contradicción fundamental con la existencia misma de la sociedad neoliberal. Y, sobre todo, con el principio axial de su vida social: la libertad de elegir. La interrogante histórica/política que está detrás de esta decisión ciudadana de no votar, es ¿por qué el ciudadano neoliberal que se constituye como tal en los distintos mercados que conforman reticularmente la sociedad mercado-céntrica, renuncia a participar en la democracia neoliberal, o sea, **elige no elegir**?

Por cierto, el “no elegir” de la ciudadanía neoliberal no se reduce solo a no participar en los procesos electorarios, sino en una total desvinculación de la política, de sus actores e instituciones políticas y el amplio rechazo a los partidos, al parlamento, a los políticos y a la militancia política.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Zarzuri, Raúl (2016). “Las transformaciones en la participación política de los jóvenes en el Chile actual”, en Garretón, M. A. (coord.) (2016). La Gran Ruptura. Institucionalidad política y actores sociales en el Chile del siglo XXI. Ediciones LOM, Santiago de Chile. Miranda, Francisca, Hernán López y Sebastián Rivas (2016). *Descifrando el Descontento*, en Reportajes, La Tercera, 28 de agosto. Riquelme, Alfredo (1999). “¿Quiénes y por qué “no están ni ahí”? Marginación y/o automarginación en la democracia transicional. Chile. 1988-1997. En Paul Drake-Iván Jaksic (compiladores) (1999). El Modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa. Ediciones LOM, Santiago de Chile. Contreras, Tamara, Sergio Guajardo y Raúl Zarzuri (2005). “Identidad, Participación e Hitos de Resistencia Civil”, Centro de Estudios Socioculturales (CESC), Documento de Trabajo, Santiago de Chile.



Pensamos que ese rechazo ciudadano a la política es mucho más profundo que el mero descontento político con la forma de actuar de la clase política o por los abusos de los empresarios o por los supuestos malos resultados de los gobiernos democráticos posautoritarios o por la desigualdad del sistema económico o la supuesta muerte de la élite.<sup>71</sup> Una posible interpretación de ese rechazo a la política de parte de las ciudadanías en los tiempos del bicentenario podría estar relacionada con la profunda impugnación y negación a la denominada “vieja política” institucionalizada en el Estado y en el régimen democrático representativo posautoritario. Y, sería, de alguna manera una apelación o una demanda por una nueva política democrática. Esta apelación vendría de parte de una nueva ciudadanía social y política constituida en los bordes del fin del siglo XX, que, al recoger las diversas transformaciones socioculturales, políticas como económicas acontecidas a nivel nacional, regional como internacional estaría en busca de nuevas formas de hacer política. En donde las viejas formas están anquilosadas y/o superadas, por ejemplo, el eje izquierda/derecha, entre otras. De allí que se requiera reinventar la política como lo político.<sup>72</sup>

Una interpretación alternativa y contraria a la señalada sería aquella que apunta a un largo proceso de socialización negativa de la política propiciada e impulsada tanto por la dictadura cívico-militar, los gobiernos concertacionistas como por las posiciones asumidas por los sectores neoconservadores que

---

<sup>71</sup> Mayol, Alberto (2016). *Autopsia ¿De qué murió la Elite chilena?* Editorial Catalonia, Santiago de Chile.

<sup>72</sup> Sobre este tema se pueden consultar algunos textos que dan cuenta de la crisis de la política y de lo político en la última década del siglo XX como de la primera del nuevo siglo. Esta crisis se resumía, tal vez, en una pregunta ontológica a saber: la “política ¿para qué?”. Diversos analistas trataron de responder dicha pregunta, entre ellos: Zambrana, Justo (2003). *La política en el laberinto. Salidas por la izquierda*. TQE, Barcelona; Ovejero Lucas, Felix (2005). *Proceso Abierto. El socialismo después del socialismo*. TQE, Barcelona; Vallespín, Fernando (2000). *El Futuro de la Política*. Taurus, Madrid; Recalde, José Ramón (1995) *Crisis y descomposición de la política*, Alianza Editorial, Madrid; Benedicto, Jorge y Reinales, Fernando (eds) (1992). *Las transformaciones de lo Político*. Alianza Universidad, Madrid; Giddens, Anthony (1998). *La Tercera Vía. La Renovación de la socialdemocracia*. Taurus, Madrid; García de la Huerta, Marcos (2003). *Pensar la Política* Editorial Sudamericana, Santiago de Chile; Lechner, Norbert (2002). *Las Sombras del mañana. La dimensión subjetividades de la política*. Lom Ediciones, Santiago de Chile. Beck, Ulrich (1999). *La Invención de lo Político*, FCE, México; Maestre, Agapito (1994). *El Poder en Vilo. En favor de la política*. Tecnos, Madrid.

rechazaban la alta participación política ciudadana como factor de ingobernabilidad de las democracias liberales o neoliberales de las dos últimas décadas del siglo XX (1980-2000). La negación de la política como una actividad vivificante de parte de las y los ciudadanos y, sobre todo, su no participación electoral estaría directamente relacionada con la forma societal instalada en el sociedad chilena, esto es la condición neoliberal. Especialmente aquella que considera que el comportamiento político de las y los ciudadanos neoliberales es semejante a los actos, decisiones y actitudes racionales que adoptan las y los consumidores en el mercado.

Así lo plantea el cientista político Patricio Navia, siguiendo los planteamiento de A. Downs,<sup>73</sup> cuando describe el comportamiento de las y los electores: “el teorema del votante mediano sugiere que, en una elección a dos bandas, ambos candidatos buscan satisfacer las preferencias del votante más moderado para este modo maximizar la posibilidad de ganar”.<sup>74</sup> Dado el sistema binominal y la adopción de parte de la mayoría de los partidos del orden del programa neoliberal lleva a las y los ciudadanos a no elegir ninguna de las “ofertas” pues son similares sus aspectos marginales, y, por tanto, optan por abstenerse.

Desde otra perspectiva, el sociólogo alemán Ulrich Beck, señala: lo que da lugar a la formación del “partido de las y los no electores” es la ruptura entre las ciudadanías y la política institucional. Esa ruptura, él la asocia a la emergencia y constitución de la “modernización reflexiva”.<sup>75</sup>

La “modernización reflexiva”, está a su vez vinculada con el agotamiento de la modernidad industrial sustitutiva y a las distintas formas políticas de la democracia representativa articuladas a través del sistema de partidos políticos. En el caso latinoamericano con la matriz socio-política que describe M.A. Garretón<sup>76</sup> o a la matriz Estado-céntrica planteada por Marcelo

<sup>73</sup> Ver: Downs, Anthony (1957). *An Economic Theory of Democracy*. Harper & Row, New York. Downs, Anthony (2001). “Teoría económica de la acción colectiva en una democracia” en A. Batlle (ed.) Diez Textos básicos de ciencia política, Editorial Ariel, Barcelona.

<sup>74</sup> Navia, Patricio y Belén del Pozo Quevedo (2012). “Los efectos de la voluntariedad del voto y de la inscripción automática en Chile” en Estudios Públicos, 127 (invierno) CEP, Chile, pp.161-191.

<sup>75</sup> Beck, Ulrich (1999). Op. Cit.

<sup>76</sup> Garretón, M. A. (2008). *Del pospinochetismo a la sociedad democrática: globalización y política en el bicentenario* DEBATE, Santiago de Chile.

Cavarozzi.<sup>77</sup> La instalación de la matriz mercado-céntrica durante las últimas décadas del siglo XX, en los diversos países de América Latina, o sea, de la modernidad reflexiva, constituye una nueva matriz política y una nueva ciudadanía.<sup>78</sup>

En la sociedad neoliberal se supone que las y los ciudadanos son “liberados” de las formas políticas y sociales de la modernización industrial, especialmente, de su vinculación política, ya sea, con el Estado o con los partidos y las instituciones políticas de la democracia liberal representativa<sup>79</sup>.

Por ello se sostiene que el neoliberalismo implicó el regreso de los individuos a la sociedad. O, mejor dicho, al mercado. El regreso de las y los ciudadanos a la sociedad/mercado tiene, por cierto, distintas posibilidades. Algunas de ellas son: la renuncia masiva a la participación política electoral, la renuncia a la política misma y/o la búsqueda de otras formas de hacer política. Nuevas configuraciones de lo político han sido construidas por las y los ciudadanos en los márgenes del sistema político vigente, a través de la autoorganización colectiva, de movimientos y agrupaciones sociales, etcétera. Se trata de la subpolítica.

Por eso es posible identificar en las sociedades neoliberales una forma política instituida e institucionalizada en el régimen político propia de la antigua modernidad industrial y otra, que se ha venido desarrollando ya sea afuera de ese sistema o en los márgenes internos de ella, propia de la modernidad reflexiva.

Tomás Moulian, acierta cuando sostiene que la política institucionalizada desde 1990 en adelante, en la democracia protegida, se transforma en una “política estéril”.<sup>80</sup> Una política vacía, no solo por carecer de proyectos políticos con futuro, sino, también, por el escaso número de participantes que posee, entre el 40% al 50% del padrón electoral. Además, de acuerdo al

---

<sup>77</sup> Cavarozzi, Marcelo (1997). *Autoritarismo y Democracia. La transición del Estado al Mercado en Argentina*, Ed. Ariel, Buenos Aires.

<sup>78</sup> Gómez Leyton, Juan Carlos (2007). “Chile 1990-2007. Una Sociedad Neoliberal Avanzada”, en *Revista de Sociología* N° 1, Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, Santiago de Chile, pp. 53-78.

<sup>79</sup> Beck, U (1999). Ob. Cit, pp. 129.

<sup>80</sup> Moulian, Tomás (2004). *De la Política Letrada a la Política Analfabeta*. Lom Ediciones, Santiago de Chile.

estudio realizado por Cristóbal Huneeus<sup>81</sup> el activo político que participó en las elecciones presidenciales de 2013 serían electores mayoritariamente adultos y adultos mayores (45 años y más) que corresponderían a lo que nosotros hemos nombrado como los “ciudadanos políticos neoliberales tradicionales” y constituyen el electorado duro del sistema, que son la base material de la democracia posautoritaria.<sup>82</sup>

La política estéril es, también, conservadora. Por esa razón, deviene en política de “administración” de lo existente. Lo “político” con sentido es producido, justamente, por sectores o por diversos grupos de ciudadanos que conforman el “partido de las y los no electores”. Se trata de otra política que irrumpe y brota más allá de las responsabilidades formales y de las jerarquías políticas tradicionales. Todo lo cual ha sido ignorado por aquellos que equiparan la política con el Estado, con el sistema político, con las obligaciones formales (por ejemplo, inscribirse en los registros electorales o votar) y con las carreras políticas hacia cargos públicos. Lo político, no está, entonces, en la participación electoral, o sea, en votar, sino, todo lo contrario, el no votar se ha constituido en la nueva forma de “hacer política”.

En efecto, diversas iniciativas ciudadanas indican que en la sociedad neoliberal ha surgido un espacio informal de movilización y acción política en donde es practicada, en los términos de Beck, la subpolítica.<sup>83</sup> Este es, el espacio político, por excelencia, de muchos grupos, colectivos y organizaciones sociales de las y los ciudadanos no electores. Allí no se requieren los partidos políticos conformes (partidos del orden) con el sistema, no se requieren de representantes, ni de mediaciones, u otras formas políticas tradicionales. Se trata de grupos articulados por lazos comunitarios, afectivos, identitarios, los que dan lugar a los colectivos políticos que buscan refundar lo político y hacer otra política. Es el espacio que se desarrolla en los márgenes del sistema, habitado, activado y recorrido por las y los ciudadanos subpolíticos<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> Huneeus, Cristóbal, Marta Lagos, Antonio Díaz (2015). *Los dos Chiles. Controversias del voto voluntario e inscripción automática. Los que no votaron y quienes decidieron por ellos*. Ediciones Catalonia, Santiago de Chile.

<sup>82</sup> Gómez Leyton, Juan Carlos (2007). Ob. Cit.

<sup>83</sup> Beck (1999). Ob. Cit, pp.:129-148

<sup>84</sup> Gómez Leyton, J. C. (2007). Ob. Cit,

Junto con ese proceso político se va conformando otro grupo de ciudadanos neoliberales que a diferencia de los dos grupos anteriores (ciudadanos tradicionales y subpolíticos), rechazan ampliamente la política y lo político. Son los ciudadanos “no políticos”. Los cuales no solo renuncian a votar, sino a la política misma. La detestan, ya que consideran que la actividad política es perniciosa para la vida social, económica y mercantil que desarrollan en los distintos mercados que conforman la sociedad neoliberal. Este grupo posee una actitud anti-política, anti-partidos, anti-parlamento, rechazan toda actividad democrática. Prefieren a los regímenes políticos autoritarios que no hacen política. Prefieren el autoritarismo, fundamentalmente, porque este, según ellos, evita o controla los conflictos sociales y políticos, y, sobre todo, la lucha por el poder y la construcción del futuro. Son sujetos sociales presentistas, o sea, no quieren saber nada del pasado ni tampoco quieren construir el futuro. Las y los “ciudadanos no políticos” se han ido incrementando desde fines del siglo XX y en los tiempos del bicentenario se constituyen en el segundo grupo más masivo, luego de las y los “ciudadanos políticos neoliberales tradicionales”, su presencia es un enigma político e histórico. Luego del año 2012, su crecimiento fue explosivo y son el núcleo duro del “partido de las y los no electores”. Hasta ahora este grupo de ciudadanos vive feliz, como diría, Moulian, en el “paraíso del consumidor”.<sup>85</sup>

Podríamos concluir que la crisis política de la democracia posautoritaria, no puede ser solo y únicamente interpretada como una crisis de representación, de legitimidad, de desconfianza o de credibilidad como producto de la corrupción política o del mal gobierno; sino, ella expresa una crisis de mayor profundidad: la crisis de la política misma en los tiempos del bicentenario-neoliberal como también de la praxis política de la ciudadanía neoliberal.

La convergencia de esas dos situaciones, estimamos, explicaría que en las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales post 2012 se alcanzaron los mayores niveles de abstención. Inclusive, el “partido de las y los no electores”,

---

<sup>85</sup> Moulian, Tomás (1997). *El Chile Actual. Anatomía de un mito*. Lom Ediciones, Santiago de Chile.

rechazaron de manera categórica todo tipo de alternativas al orden neoliberal que se ofrecieron en esos torneos electorales. Pues, ninguna de las propuestas políticas logró atraer, seducir, entusiasmar ni representar a la ciudadanía “no política” ni a la “subpolítica”. Es más, importantes sectores de la ciudadanía neoliberal tradicional, habituales de los procesos electorales, se incorporaron al grupo de las y los no electores.

El vaciamiento de la “democracia protegida” se manifestó mucho antes de que estallaran los escándalos políticos que han afectado tanto al gobierno de Bachelet como a toda la clase política nacional. Los altos niveles de desconfianza, la falta de credibilidad y el descontento que expresan las y los ciudadanos en las encuestas de opinión pública como la decisión mayoritaria de ellos, sobre el 70%, de abstenerse en las elecciones municipales de octubre del año 2016; dan cuenta tanto del malestar con el gobierno de la Nueva Mayoría como de la profunda crisis de la política neoliberal.

Esos nuevos abstencionistas los podríamos considerar como parte del partido de las y los no electores, el cual ya tiene 20 años de formación y desarrollo. Tenemos la impresión de que los integrantes de este particular partido no son abstencionistas coyunturales, sino más bien permanentes o estructurales.<sup>86</sup>

A lo largo de estos 20 años (1997-2017) de proceso abstencionista, tenemos a lo sumo tres grupos de ciudadanos no electores, a saber:

- a) las y los abstencionistas tempranos, las y los que no se inscribieron en los registros electorales, entre 1988-1996;
- b) las y los abstencionistas intermedios o de segunda generación, los que no se inscribieron entre 1997-2012, como también los que estando inscritos no concurren

---

<sup>86</sup> Como señala acertadamente el sociólogo Manuel Antonio Garretón son expresiones sintomáticas de la crisis, pero no dan cuenta de las causas estructurales, culturales e histórico-políticas de la ruptura entre la política y la sociedad. La pregunta que hasta ahora no ha sido respondida por las ciencias sociales, especialmente, por la sociología política o por la politología como por la historia política, dice relación, justamente, con la génesis del fenómeno del abstencionismo electoral en Chile, por los factores sociales, culturales, políticos y económicos que explican la conformación del “partido de los no electores” y, sobre todo, quienes son, qué piensan, las y los ciudadanos que integran el principal “partido” del sistema político nacional.

- a votar, votaron en blanco o anularon su voto en las elecciones comprendidas en dicho periodo;
- c) las y los abstencionistas recientes, que se abstuvieron de votar en las elecciones regidas por el voto voluntario, comprendidas entre el 2012 y 2017.

Como nuestro objetivo es dar a conocer el rol político de la abstención en el sistema político actual, a continuación vamos a mostrar qué pasa en un proceso electoral como una elección municipal.

Las elecciones Municipales del 23 octubre de 2016 se han constituido en un momento de inflexión en el desenvolvimiento histórico del actual régimen político. La masiva abstención electoral registrada ha profundizado, el largo proceso de descomposición política e institucional que viene evidenciando, desde hace dos décadas (1996-2016), la democracia posautoritaria.

La alta abstención registrada es histórica, en ningún otro momento de la historia electoral de la sociedad chilena, se había alcanzado. Durante 26 años, 1990-2016, la actividad política-electoral se ha visto empobrecida. Fundamentalmente, porque a las élites dominantes y dirigentes no solo desde la dictadura sino también por la dirigencia concertacionista no les ha interesado activar y fomentar la participación política de la ciudadanía. Pues, ésta es considerada como un factor político y social generador de conflictividad e ingobernabilidad.

El sistema electoral binominal, por ejemplo, fue un poderoso mecanismo político electoral para generar gobernabilidad y estabilidad política aunque producía, a su vez, la exclusión de diversos sectores políticos no conformes con el sistema político, reduciendo o jibarizando tanto la representación política como electoral a través de un bipartidismo engañoso, pero efectivo.

La conformación tanto de la CPD como la Alianza por Chile fueron expresiones de esa reducción. El sistema binominal pudo mantenerse en el tiempo, fundamentalmente, por el apoyo que le brindaron los partidos políticos del orden tanto de la

derecha como de la centro-izquierda que conformaban los bloques aliancistas (CPD y Alianza por Chile) que eran ganadores habituales. Las reglas electorales impuestas por la dictadura cívico-militar y consensuadas por la CPD estuvieron vigentes desde 1988 hasta 2012, o sea, durante 24 años, fueron usadas para tener el control de la democracia protegida y, sobre todo, para extender el dominio y la hegemonía de las formas neoliberales al interior de la sociedad chilena. Para ambos conglomerados defensores a ultranza de las formas de acumulación capitalista neoliberal, les ha interesado permanentemente la despolitización de la ciudadanía. No les interesaba una ciudadanía empoderada ni activa ni participante. Todo lo contrario, su objetivo central a lo largo de estos 40 años (1975-2016) de dominación social y política neoliberal es que la ciudadanía se enajene cada vez más en el “paraíso del consumo”.<sup>87</sup>

Por esa razón, durante 20 años la CPD (1990-2010), rehusó resolver políticamente el sistemático y permanente crecimiento del “partido de las y los no electores”. Ni la profunda crisis de la política como de la representación que implicaba mantener la democracia protegida. El hecho de ganar constantemente elecciones no le constituía un problema. Todo lo contrario, la CPD, se consideraba a sí misma como la “coalición más exitosa” de la historia de Chile. Y, uno de los indicadores de ese éxito estaba en la estabilidad, gobernabilidad y bajo nivel de conflictividad del sistema político logrado en los 22 años de gobierno concertacionista, donde el vaciamiento del sistema político de parte de los ciudadanos era considerado normal de una democracia consolidada y un logro de la recomendaciones del Informe Trilateral de los años setenta del siglo XX.<sup>88</sup>

A pesar de que un sector del “partido de las y los no electores”, está constituido por un amplio y heterogéneo grupo de ciudadanos que rechazan la dominación neoliberal como las formas políticas y electorales de la democracia protegida. Como hemos señalado la mayoría de las y los ciudadanos que conforman este partido son “ciudadanos no políticos”.

---

<sup>87</sup> Op. Cit.

<sup>88</sup> Michael J. Crozier, Samuel P. Huntington y Joji Watanuki (1975). *The Crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies to The Trilateral Commission*, New York University Press.



La aceptación de las formas de dominación neoliberal y su “encono” contra la política, consideramos que se ha visto profundizada por las nuevas generaciones políticas nacidas en “tiempos de la democracia protegida”, especialmente, por las y los jóvenes que se constituyeron en los años del crecimiento sostenido de la economía, entre 1985-1997, pero, también de las ciudadanías políticas conformadas en el ciclo de protesta desde 2006 hasta la actualidad (2016). Por eso, el no votar, “el partido de las y los no electores” no es solo una manifestación de la apatía política o del rechazo a la política. No todos las y los ciudadanos no electores son apolíticos ni tampoco son antidemocráticos, sino ellos expresan las formas que adquiere la política en los tiempos neoliberales.

Estos “no electores” sin participar directamente en el proceso electoral han provocado una profunda grieta política institucional a la democracia protegida, han proporcionado una contundente derrota electoral a la Nueva Mayoría, o sea, al gobierno de la presidenta Bachelet, al Chile Vamos, como también a los diversos conglomerados políticos que se organizaron para participar electoralmente en un régimen político decadente. Más del 70% dijo hoy: basta queremos construir otra forma política u otro tipo de régimen político. No queremos nada de la vieja política ni tampoco de la nueva. Las opciones “políticas” de este particular “partido” son una total incógnita. Solo sabemos algo de las y los ciudadanos “subpolíticos”

La clase política enquistada en el poder hace 26 años y los partidos políticos conformes con el régimen pueden obviar la profunda crisis política que implica la existencia de 9.500.000 de ciudadanos que no expresan y ni manifiestan su interés por votar. Hoy la democracia protegida entró en su fase terminal.

Por eso, consideramos grotescos los análisis que obvian la gigantesca abstención como aquellos que celebran triunfos electorales mínimos y que en vez de enorgullecerlos les debiera preocupar. Pues, esos triunfos son la manifestación de una profunda crisis histórica del sentido de la política como de la democracia. Los ganadores no representan a la comunidad política a la que van a gobernar. Los ganadores no perciben que gobernarán a una ciudadanía fantasma.

¿Es representativo un alcalde o alcaldesa elegidos con menos del 10% de los votantes de su comunidad? Tomemos tres ejemplos para demostrar la no representación de algunos alcaldes ganadores en la elección de 2016.

### **Elección Municipal 2016: Alcaldes sin representación**

De acuerdo a los datos entregados por el SERVEL, de las y los 14.121.316 de electores convocados a participar, solo 4.931.041 emitieron un voto válido, o sea, el 34,9% del padrón electoral. En consecuencia, 9.190.265 de ciudadanos no participaron en las elecciones comunales. Mientras que otro grupo menor de electores 177.294 anulaban o dejaron su voto en blanco. De manera que la abstención general alcanzó al **66,34%**, es decir, **9.367.559** de electores no eligieron. Por lo tanto, la “no participación ciudadana”, el partido de los no electores volvió a triunfar, aumentó en 7 puntos porcentuales en relación a la Municipal de alcaldes del año 2012. Todos los partidos fueron a la baja. Esto significa que el 66,34% de la ciudadanía rehusó a elegir alguno de los cientos de candidatos a alcaldes que los diversos partidos presentaron en las diversas comunas del país. También rechazaron a elegir algún candidato a concejal, en esta elección la abstención general fue superior, alcanzando el 67,88%. En promedio entre ambas elecciones la abstención general fue de un **67,11%**.

#### **ABSTENCIÓN ELECTORAL GENERAL ALCALDES 2016**

PADRÓN ELECTORAL	14.121.316	100%
ELECTORES ASISTENTES	4.931.041	34.9%
ELECTORES NO ASISTENTES	9.190.265	65.1%
VOTOS NULOS	111.202	0.78%
VOTOS EN BLANCO	66.092	0.46%
<b>ABSTENCIÓN GENERAL</b>	<b>9.367.559</b>	<b>66.34%</b>

Elaboración JCGL con datos del SERVEL

### ABSTENCIÓN ELECTORAL GENERAL CONCEJALES 2016

PADRÓN ELECTORAL	14.121.316	100%
ELECTORES ASISTENTES	4.910.943	34.7%
ELECTORES NO ASISTENTES	9.210.373	65.3%
VOTOS NULOS	200.095	1.41%
VOTOS EN BLANCO	165.843	1.17%
<b>ABSTENCIÓN GENERAL</b>	<b>9.576.311</b>	<b>67.88%</b>

Elaboración JCGL con datos del SERVEL

Para demostrar que las elecciones comunales generan una autoridad municipal con bajos niveles de representatividad como, tal vez, de legitimidad, tomaremos tres Comunas que dan cuenta de esa situación. Cabe señalar que ellas muestran un patrón de comportamiento electoral semejante a las otras comunas del país.

#### **Comuna de Santiago:**

En esta emblemática comuna competían por el cargo de alcalde siete candidatos. Tres representantes de la vieja política concertacionista: Carolina Tohá, en representación de la Nueva Mayoría; Felipe Alessandri, por el Chile Vamos y Patricia Morales, por el Partido Progresista y por aquellos que buscaban representar a la nueva política, cuatro candidatos: el Pacto poder Ecologista y Ciudadano, Pacto Pueblo Unido, Pacto Alternativa Democrática y Pacto Justicia y Transparencia.

#### **Comuna de Maipú:**

Maipú considerada como otra de las Comunas emblemáticas de la sociedad neoliberal, constituida por amplias capas medias aspiracionistas y sectores populares neoliberalizados, presentaba un complejo escenario político, dada la situación judicial que afectaba al alcalde saliente Christian Vittori Muñoz, ex demócrata cristiano y ex miembro de la Nueva Mayoría, quien, impedido de postularse como candidato por su partido y por dicho conglomerado, decide renunciar y postularse como independiente. Pesaban sobre él acusaciones de corrupción. La cartilla electoral quedó conformada por 5 postulantes más, dos de la vieja política Freddy Campusano, por la Nueva Mayoría y Catherine Barriga, por el Chile Vamos, una "out sider", que

provenía de la farándula televisiva. Y, tres representantes de la nueva política, el Pacto Poder Ecologista y Ciudadano, Pacto Pueblo Unido y el Pacto Justicia y Transparencia.

### **Comuna de Valparaíso**

En la Comuna, donde se encuentra el edificio de la representación legislativa, el Congreso Nacional; Valparaíso también emblemática y envuelta en una larga crisis estructural, compitieron cuatro candidatos. La Nueva Mayoría, presentó como candidato a un “out sider”, al popular cantante Leopoldo Méndez Alcayaga, que no concitaba el apoyo entre los diversos partidos de la coalición oficialista. El Chile Vamos, repostuló al alcalde en ejercicio Jorge Castro, y la nueva política presentó a dos candidatos, el Pacto Justicia y Transparencia a Carlos Lemus y la candidatura Independiente de Jorge Sharp. Esta última no tenía mucha independencia pues está ligada a los grupos políticos que apoyan al diputado Gabriel Boric y se identifican con los “autonomistas”, sector escindido de la Izquierda Autónoma.

Los resultados electorales en estos ejemplos son los siguientes:

	<b>SANTIAGO</b>	<b>MAIPÚ</b>	<b>VALPARAISO</b>
PADRÓN ELECTORAL	302.535	370.091	284.198
VOTANTES	67.579	102.168	88.154
% DE VOTANTES	22.33%	27.81%	31.02%
<b>NO ELECTORES</b>	<b>235.006</b>	<b>267.168</b>	<b>196.044</b>
<b>% NO ELECTORES</b>	<b>77.67%</b>	<b>72.18%</b>	<b>68.98%</b>
VOTOS ALCALDE ELECTO	29.862	35.311	46.311
<b>% DE REPRESENTACIÓN</b>	<b>9.87%</b>	<b>9,5%</b>	<b>16.29%</b>
% DE RECHAZO	90.1%	90,5%	83.71%

Elaboración JCGL Datos SERVEL

Los tres alcaldes han sido electos con mínimas o, mejor dicho, con paupérrimas votaciones. En las tres comunas el rechazo al alcalde electo es altísimo, por ende, su representación bajísima. En Maipú como en Santiago, los electos no superan el 10% de las preferencias ciudadanas. O sea, el 90% muestra algún tipo de rechazo o indiferencia. Con algo menor de rechazo o indiferencia es el caso de Jorge Sharp en Valparaíso, quien obtiene solo el 16,29% de las preferencias ciudadanas.

Ahora bien, la democracia electoral, entrega otra forma de calcular los porcentajes de representación. Esta forma es espuria y mañosa, pues busca enturbiar y engañar a la ciudadanía. Pues, cuando se modificó la regla y se amplió el universo electoral con la inscripción automática, no se modificó la forma de calcular la representación. Mantuvo la vieja fórmula de hacerlo solo sobre el universo de concurrentes, ello permite asignarles a los ganadores como a los perdedores porcentajes inflados y no reales. Pues, no considera en el cálculo a todo el padrón electoral. De esa forma, engaña a la ciudadanía. Veamos como:

	<b>SANTIAGO</b>	<b>MAIPÚ</b>	<b>VALPARAISO</b>
% SERVEL	<b>46,76%</b>	<b>36,15%</b>	<b>53.75%</b>
% CIUDADANO	<b>9.87%</b>	<b>9,5%</b>	<b>16.29%</b>

Elaboración JCGL Datos SERVEL

Es evidente que con este cálculo induce al engaño a la ciudadanía. Engaño avalado por todos los actores políticos. A todos los participantes les conviene asumir que la votación obtenida es la señalada por el SERVEL y no la resultante del ejercicio real de tomar en consideración a todo el padrón electoral tanto comunal como también nacional.

Si este ejercicio lo lleváramos al apoyo obtenido por los partidos políticos a nivel nacional tomando la votación obtenida en la elección municipal, el panorama sería profundamente desolador. La Nueva Mayoría obtuvo según el SERVEL el 37.08% de las preferencias con 1.747.963 de votos ciudadanos. Pero la realidad, es más dramática. Pues, al considerar todo el universo electoral, la adhesión ciudadana a la Nueva Mayoría es de solo el **12,3%**. El partido de la presidenta Bachelet, el Socialista, obtuvo, según cifras del SERVEL, 377.629 votos que equivalen en la fórmula serveliana al 8,01%. Pero en realidad, el Partido Socialista de Chile, solo tiene la adhesión del **2,67%** de los electores nacionales.

En la derecha el panorama no es mejor. El pacto Chile Vamos obtuvo 1.811.925 con una asignación de un 38,44% y en que en la realidad equivale solo al **12,8%** del actual padrón electoral. El partido más corrupto del sistema político, la Unión Demócrata Independiente, UDI, obtuvo 697.641 votos con 14,8%, pero la realidad dice que la UDI, solo tiene la adhesión del **4,9%**

del electorado. Con dicho porcentaje se ubica, sin embargo, como el partido más votado del sistema partidos de la democracia protegida.

Eso es lo que pasó con los partidos del orden. Veamos cómo les fue a los nuevos partidos, por ejemplo, Revolución Democrática. Este joven partido solo obtuvo 11.820 votos, obteniendo un 0,25% de los votos. Esa votación en un universo de 14.121.316 de electores es solo el 0,08%. La nada misma.

El Partido Comunista de Chile, organización política que había representado durante 24 años la posición antineoliberal, ingresó en el año 2013 a la Nueva Mayoría y desde 2014 es el conglomerado más fiel al programa de la presidenta Bachelet, o sea, al neoliberalismo corregido. Transformándose en una nueva expresión de la izquierda neoliberal, junto con el Partido Socialista de Chile y el Partido por la Democracia. Obtuvo 76.001 votos lo que representa tan solo el **0,53%** del padrón electoral.

La derrota política y electoral del PC fue total. Una de sus principales referentes sociales y política, la alcaldesa de la Comuna Pedro Aguirre Cerda, Claudina Núñez, fue derrotada ampliamente tanto “por las y los no lectores” como por los electores. La abstención en esa popular comuna llegó al 70,5%, el candidato electo el independiente Juan Rozas Romero, obtuvo la alcaldía con solo el 9,18% de las preferencias de las y los electores. El nivel de rechazo fue de un 90,8%. No obstante, el SERVEL y su mágica fórmula le asigna nada menos que el 47,56% de las preferencias ciudadanas comunales. La exalcaldesa quien solo obtuvo 8.645 votos, o sea, el 8,9%, el SERVEL le asignó el 31,7%.

Todo lo anterior deja claramente expresada que la elección municipal 2016 carece de una sólida representación política y cada alcalde o concejal electo no representan a la comunidad política. El régimen democrático protegido o de la democracia o autoritario electorales, está en bancarota. Los partidos políticos ya no representan ni canalizan los intereses a nivel local. Un sistema político de esta naturaleza no puede mantenerse en el tiempo. De no producirse cambios sustantivos en el sistema político lo más probable es que el “partido de las y los no electores” alcance mayores porcentajes en las elecciones presidenciales de 2017.

La ciudadanía debe iniciar la construcción hoy -y, no mañana ni esperar que la actual clase política lo haga- de la nueva democracia.

Como hemos demostrado: obtener un cargo público con menos del 10% o 20 % de las preferencias electorales significa que el 90 u 80% de la ciudadanía comunal manifiesta algún tipo de rechazo a todo el proceso electoral, o sea, tanto a los ganadores como a los derrotados.

Tal vez el mensaje de las y los ciudadanos que conforman el "partido de los no electores tiene algo de ambiguo, por un lado, puede ser una contundente demanda por otra democracia o una masiva decisión no electoral y política de que la ciudadanía está conforme con el sistema, especialmente, aquellos sectores ciudadanos que hemos nombrado como "no políticos".

Son las y los ciudadanos subpolíticos los que demandan otra democracia y otros representantes. Ellos plantean la configuración no de una representación por delegación sino por mandato y participativa. Solo ese tipo de representación democrática hará posible los cambios que la ciudadanía movilizada desde el 2006 hasta la actualidad exige: el fin de la educación de mercado, el fin del mercado de la salud y de la previsión social; el fin de la devastación de la naturaleza, el término de la explotación extractivista transnacional de los bienes comunes, la suspensión de los proyectos IIRSA, la devolución de los territorios ancestrales al pueblo mapuche por parte del estado nacional; la derogación de la Ley de Pesca, entre otras tantas cosas solo sería posible con una nueva democracia, y otra forma económica y de Estado.

Para ellos, el "no votar" implica que las y los ciudadanos no electores subpolíticos han decidido tomar la responsabilidad política de manera directa y no delegarla a otros u otras que supuestamente asumen esa representación política. Por ello, el no votar es y será siempre un ejercicio político democrático. No obstante, para que sea políticamente eficaz es necesario que las y los ciudadanos no electores se organicen y movilicen activamente por la constitución de la democracia ciudadana, social y participativa. Para tal efecto, se debe exigir y demandar la destitución del poder constituido y la formación de un poderoso y democrático poder constituyente.

El no votar obliga a ponernos a trabajar social y políticamente por la transformación de la sociedad actual. Significa asumir el compromiso de actuar activamente por el cambio. Exigir, por ejemplo, la ilegitimidad del proceso electoral actual. El cual puede ser legal pero no legítimo. No podemos permitir que alcaldes asuman el cargo careciendo de legitimidad y, sobre todo, con mínimos porcentajes de representación.

Por último, que nadie se mueva a engaño, en la elección de 2016 no ganó la derecha ni perdió la Nueva Mayoría. Con esta elección, tal vez, se inició el fin de la democracia protegida. Es el comienzo de una nueva etapa de la historia política nacional. Y, esa historia la van a construir las y los ciudadanos subpolíticos y no las élites partidarias tanto de la derecha, centroderecha como de la izquierda neoliberal que han gobernado durante 26 años la sociedad neoliberal.

Para cerrar este punto, tenemos la convicción que si ello no ocurre será lamentable para las actuales como las próximas generaciones. Las y los ciudadanos tanto electores como no electores no pueden entregar la historia futura a la devastación del capital neoliberal. Eso sería una segunda irresponsabilidad política e histórica. La abstención política para que no sea solo un dato estadístico debe ser activa y revolucionaria.

La alta abstención electoral registrada en la elección municipal de 2016, o la manifestación mayoritaria del "partido de las y los no electores" ha generado una amplia polémica. Las posiciones que se asumen van desde aquellos que lo condenan a aquellos que la defienden. Las formas y los argumentos que se utilizan van desde los más académicos y políticos a los más vulgares y ofensivos. De todo hay, buenos y malos argumentos en un sentido y otro. Pero, en general, diríamos que hay mucha ignorancia política e incertidumbre sobre el tema.

Ahora bien, como analista que estudia la abstención electoral y el comportamiento de las y los ciudadanos abstencionistas desde el año 2003 hasta la actualidad, no me extraña. Puesto que, el abstencionismo, como fenómeno y problema político, fue ignorado y despreciado por las ciencias sociales, durante todos estos años. He analizado la problemática durante esta última década no solo desde una perspectiva



cuantitativa o estadística sino también cualitativa. Fuimos uno de los primeros en plantear que los no las y los electores iban a determinar los futuros procesos electorales de la democracia protegida, cuando en 1997 emergió este “partido”. Y, así ha sido desde esa fecha hasta el día de hoy. Los no electores eligen sin elegir.

Una década de estudio nos permite sostener que la manifestación del abstencionismo del 2016 tiene una estructura sociológica y política muy profunda y muy sólida.

La abstención electoral ha sido siempre el “patito feo” de los estudios de la ciencia política nacional. La politología analiza los procesos electorales sin prestarle mayor atención al fenómeno abstencionista que no es nuevo, que no es reciente, ni se forjó con el “voto voluntario”, sino que se trata de un fenómeno de larga duración, o sea, un problema estructural del régimen político nacional, de la “democracia protegida”. Y, sobre todo, una consecuencia política de la dominación neoliberal en Chile. Los analistas conformes con el sistema que no la vieron ayer y si la ven hoy lo hacen solo para denostar a las y los ciudadanos que no fueron a votar el domingo 23 de octubre.

La abstención electoral actual no puede ser comparada como lo hizo, por ejemplo, Marta Lagos con la no participación ciudadana en los procesos electorales del siglo XIX o XX, hacer eso una gran equivocación analítica. En aquellos tiempos, especialmente, durante el siglo XIX, no existía una democracia en forma en Chile, sino regímenes electorales autoritarios, donde el sufragio estaba restringido. Y, en el siglo XX, los regímenes políticos electorales limitados y excluyentes. La gran masa ciudadana estaba legal y políticamente “excluida”, o los procesos electorales dominados por el cohecho, la manipulación o el fraude. Por lo tanto, la decisión de no participar no era una decisión ciudadana sino más bien un acto político del poder constituido. En la actualidad, tal vez, esas formas de poder sobre el electorado sean distintas o más sutiles, pero, no existe un cuerpo legal, que excluya o niegue el derecho al sufragio de las o de los ciudadanos como en otros momentos de la historia política nacional. Para los grupos dominantes, el voto o el derecho al sufragio de los sectores subalternos siempre ha sido considerado un peligro. Este es un punto que merece otro análisis, pero sobre el cual habría que volver y hacerlo, por lo que implica en la actualidad “no votar”.

Pero más allá de esas situaciones históricas. La contundente decisión política de aproximadamente, 9.5 millones de ciudadanos de restarse a participar debiera ser respetada y considerada, primero, como una decisión política seria y, en segundo lugar, como un problema político trascendente que interpela a todo el sistema político nacional.

La decisión adoptada por 9,5 millones de ciudadanos debe ser respetada. Y, debe ser considerada como un problema político obscuro y profundo. Fundamentalmente, porque la ciencia política como la sociología y la historia política reciente no tienen respuestas para dilucidar el enigma abstencionista. Desconocen, por ejemplo, las insondables motivaciones que tuvieron las y los ciudadanos para no votar. Y, no aceptar como una "verdad" aquellas respuestas que entregaron a los encuestadores del PNUD que realizaron una "auditoría" de la democracia chilena. Esas respuestas son la punta del iceberg, las razones profundas no se conocen. Los métodos y formas que la ciencia política -de inspiración anglosajona dominante en Chile- no sirven para conocer y estudiar tanto a la abstención, como fenómeno político colectivo, como a las y los ciudadanos no electores. Ante esa esterilidad investigativa lo mejor es el silencio.

Por otro lado, lo absurdo de las elecciones comunales es su naturalización política que realizan tanto analistas como los actores políticos de todos los bandos como algo normal. Un aliado para producir esa normalidad han sido los medios de comunicación. Ellos son actores centrales en la producción simbólica de dicha naturalización. Esta es muy peligrosa, pues busca presentar como normal un acontecimiento político que, a todas luces, fue un acontecimiento político anormal.

No es normal, por ejemplo, que un cargo público tan relevante como una alcaldía sea asumida por un candidato con tan solo, **el 6%** de las preferencias ciudadanas. Ello significa que el 94% de la ciudadanía que votó, ya sea, por otros candidatos como aquellos que no lo hicieron, tienen una postura contraria o de total indiferencia. Asumir bajo esas condiciones es una anomalía política, aunque sea legal no es legítima.

Siendo la comuna de La Pintana, una de las 12 comunas de la Región Metropolitana donde hemos analizado -desde el año

2003 hasta la actualidad-, el comportamiento de la abstención, puedo sostener con toda seguridad que no fue "indiferencia o apatía política" lo que predominó, sino, esencialmente, un estructural "rechazo ciudadano" a la forma como se ha practicado la política en esa comunidad en los últimos 26 años. Para muchos de las y los ciudadanos no electores la democracia nunca llegó a la comuna de La Pintana, de ahí el profundo malestar con la "política" y la clase política local, pero también nacional.

El rechazo a la democracia impuesta por la dictadura y por los gobiernos concertacionistas es profundo y sea ha estructurado en largo tiempo: son diversas las generaciones ciudadanas que lo manifiestan. Para percibir y conocer ese rechazo no basta con ir y preguntar en una encuesta por qué no votó. Muchos, van a responder que perdieron el carnet o les dio flojera o cualquiera de las respuestas que los "cientistas sociales" como los del PNUD registraron y transformaron en un dato estadístico duro. Otros, los politólogos, por ejemplo, dirán que, de acuerdo a modelos analíticos de la abstención estadounidenses, los sectores populares, La Pintana, por ejemplo, no votan porque son menos educados, menos informados, o simplemente, son pobres, etcétera.

Lo cierto es que las argumentaciones políticas de las y los ciudadanos de La Pintana son mucho más sofisticadas que las estadísticas que registra la auditoría de la democracia o los supuestos de los modelitos del conductuales de la politología norteamericana. Me pregunto cómo explicar la abstención registrada en las comunas socioeconómicas altas como Providencia (63%), La Condes (64%), y Vitacura (55%), por ejemplo. Obviamente, allí las explicaciones y las argumentaciones son distintas de las que desarrollan los ciudadanos de La Pintana (79%) o Lo Espejo (76%) o Cerro Navia (69%). El problema de abstención es social y políticamente transversal.

La democracia protegida se sostiene por un activo grupo de ciudadanos electores que también por diversas razones votaron. Por cierto, la alta abstención, la vuelve mucho más elitista de lo que ha sido durante estos últimos 26 años. Pero, no puede negarse su crisis.

Negar sus crisis con el objeto de alabar o destacar determinados triunfos de grupos políticos alternativos, importantes, pero insuficientes, es tan equívoco como sostener la normalidad del régimen político actual.

Lo ocurrido no es un acontecimiento irrelevante. En una comunidad política nacional que tenga 9.5 millones de ciudadanos militando en el "partido de las y los no electores" no se puede considerar que el régimen democrático sea "normal". El 68% de abstención es un problema para toda la sociedad, incluyendo a las y los no electores.

La pregunta política relevante ¿qué hacer? Hay que buscar soluciones políticas viables, imaginativas, transformadoras. El iceberg abstencionista es poderoso, grande y no es posible eludirlo. Hace 26 años que ha venido conformándose y amenazaba con chocar y destruir el régimen político. Este es un régimen que se hunde. Hay que ayudarlo a hundirse. No hay que argumentar a su favor ni en su defensa. Hay que destruirlo. Pero no atacando a los que hicieron posible su crisis final.

Gane quien gane en las próximas elecciones presidenciales de 2017, la sociedad neoliberal, en que habitamos, seguirá su marcha histórica. Salvo que bajo ciertas circunstancias emerjan las fuerzas sociales y políticas que permitan destruir la estructura de poder construida y establecida por el Capital neoliberal. Para ello debemos practicar y ejercer el poder subversivo destituyente que no pasa por los procesos electorales.

El poder destituyente sirve para constituir, producir poder popular democrático (ejemplo, Venezuela con Chávez, en 1998, y en Bolivia con Evo y el MAS, 2000-2005). Por ahora, el poder electoral solo sirve para reproducir la forma de dominación neoliberal. Forma que tanto la Concertación como la Nueva Mayoría y ahora, tal vez, el Frente Amplio (FA), si es que ganan, va a continuar reproduciendo por cuatro años más.

El escenario de la lucha clases que se avecina no cambia si está Sebastián Piñera o Alejandro Guillier en el gobierno, pues el único camino posible que queda luego de 27 años de fracasos del reformismo neoliberal es la lucha social directa y abierta.

Cualquiera que gobierne no tendrá gobernabilidad. Ni lo tendrá el Frente Amplio. O sea, el nuevo reformismo neoliberal. Si el Frente Amplio llega al gobierno, ello implicaría un nuevo ciclo de neoliberalismo corregido ampliado que habrá que evitar. No podemos permitir un cuarto de siglo más de neoliberalismo. Las fuerzas sociales y políticas populares deberán extraer lecciones del fracasado proceso antineoliberal levantado por pseudo gobiernos progresistas latinoamericanos.

Estamos en una inflexión histórica fundamental para que el movimiento popular libre y autónomo de cualquier influencia de partidos, viejos o nuevos, que hoy avalan y se muestran conformes con el sistema, construya sus propias organizaciones sociales comunitarias y colectivos políticos para levantar el proyecto histórico y social popular, de la plebe, al decir de García Linera. Debemos recuperar para todas y todos, el proyecto socialista que permita construir una sociedad igualitaria y, sobre todo, justa.

Esa sociedad no será posible si seguimos votando y apoyando proyectos como el que representa ya sea la derecha, la Nueva Mayoría o el Frente Amplio. La ruta electoral no es la vía que nos lleva a la emancipación humana. El proceso histórico actual es complejo; pero, no oscuro, el 19 de noviembre, elecciones en primera vuelta, dejó al descubierto muchas cosas. Cosas, por cierto, que muchos analistas no ven. Pues tienen anteojos para ver lo que el sistema les deja ver, en otras palabras, son ciegos. Carecen de una mirada crítica holística. Y, leen la realidad de manera políticamente muy complaciente, ocultando, por ejemplo, la profunda crisis de legitimidad del régimen político posautoritario.

Esta crisis explica, el 54% de abstención electoral. Son más de 7 millones de ciudadanos que no participan en la institucionalidad política actual. No aceptan ni los partidos de derecha, centro o de izquierda. No quieren más partidos políticos incongruentes, como el PS o el PC. Ni tampoco a ninguno de los integrantes de la clase política actual. Están hartos de su forma de actuar y de ser. No son creíbles. No le tienen confianza. Ni tampoco los representan.

Entonces, ¿por qué ellos debieran votar en estos procesos electorales, que expresan todo lo contrario de lo que pensaron o soñaron? Un joven estudiante que en el año 2004 tenía 19 años y que hoy pisa los 32 años, nos dijo en una entrevista "los jóvenes de hoy no votamos porque estamos decepcionados de la democracia que nos prometieron". Esta decepción incluye a cualquiera de los partidos actuales. No quieren más esta democracia. Por esa razón, de manera consecuente y honesta no participan en ella. Y, nadie les puede impedir hacerlo. Ni tampoco acusarlos que trabajan por la derecha, ni menos maltratarlos discursivamente como lo hacen todos aquellos que quieren mantener la dominación neoliberal, porque no votan.

Los abstencionistas activos son honestos y responsables en su decisión. Mucho más que muchos de las y los que votan, pues ellos cambian de parecer y de opciones de acuerdo a sus intereses específicos, qué mejor ejemplo que los líderes del FA, o de la DC o de cualquier otro grupo que hoy corren a votar por Guillier, solo porque quieren conservar sus cuotas de poder.

Los millones de abstencionistas activos, lo que he llamado, en otro lugar las y los subpolíticos, no temen a la dominación, pues la confrontan cotidianamente, todos los días. Soportar la dominación neoliberal concertacionista o de la Nueva Mayoría o de la derecha es parte de su lucha diaria. Por ende, que gane Piñera o Guillier no cambia la capacidad de resistencia y de confrontación que las y los subpolíticos practican todos los días. Son anticapitalistas activos y permanentes. Esa su lucha.

Su praxis política es invisible a los ojos de los analistas conformes con el sistema. Por esa razón, no la entienden ni la comprenden. Son actos y hechos que ocurren todos los días, es un trabajo de hormiga, del topo de la historia, decía el viejo barbón de Treveris, que une lo pequeño y va sumando y sumando para luego convertirse en un torrente político popular. El tiempo de la subpolítica no es el del tiempo político electoral ni institucional. Es incomprendible para la ciencia social hegemónica por las perspectivas analíticas del sistema. Incluso, para aquellos que dicen tener una perspectiva crítica. La subpolítica la realizan las y los sectores políticos ligados y activos en el mundo popular. Aquellos que son capaces de salir en defensa de aquellos problemas que

nadie se ocupa ni discute en la política institucional. Por ejemplo, qué candidato presidencial tuvo como punto de discusión el tema IIRSA, ninguno. No les interesa. Pero, la subpolítica sí lo hace. Esa es la diferencia con aquellos que hacen política dentro del sistema. Los abstencionistas hacen política popular.

Por todo lo anterior, las y los abstencionistas no están interesados en votar. Y, estoy seguro que lo harán solo y cuando la democracia sea social, popular y revolucionaria, pues ella será el resultado de sus luchas y de su construcción histórica. Y, no de la clase política ni de los partidos como fue la democracia posautoritaria. Mientras la democracia continúe siendo un sistema ficticio y corrupto, como el actual, no votarán. O, mejor dicho, no votaremos.

Por último, la democracia social, popular y revolucionaria no será la que construyan los partidos políticos conformes con el sistema, será una construcción directa de los sectores populares, de la plebe, de los hombres y las mujeres que son explotados todos los días, de los niños y niñas que sufren la violencia del neoliberalismo en las poblaciones populares, del pueblo mapuche que lucha por recuperar lo suyo, de las y los ancianos populares que llevan años y años viviendo con pensiones miserables y muriendo por falta de atención en la salud de pobres (pública), etcétera.

La democracia social, popular y revolucionaria no la pueden construir los que han administrado hasta el día hoy eficientemente el sistema legado por la dictadura cívico militar. La sociedad neoliberal ha sido producida por los mismos que hoy desesperados llaman a votar por Guillier. Piden el voto de aquellos que han olvidado durante los últimos 25 años. No tienen, por esa razón, calidad moral ni política para hacerlo.

Desde los años 80 del siglo XX que estamos resistiendo al neoliberalismo, por lo tanto, son muchos las y los ciudadanos que no hemos avalado ni legitimado a un sistema político ideado por los autoritarios y mantenido por aquellos que traicionaron a cientos de combatientes sociales y que pensaron y soñaron otra sociedad.

### **Los resultados de la elección presencial de 2017**

Todo lo expuesto en este artículo quedó de manifiesto en la elección presidencial y parlamentaria de 2017. Obviamente, el Servicio Electoral SEERVEL, mantuvo la ficción electoral que

nos proporciona al presentar los resultados del proceso electoral presidencial de 19 de noviembre de 2017, la primera vuelta al calcular los votos obtenidos no contra el padrón electoral total, sino con las y los electores efectivamente participantes y los votos válidamente emitidos excluyendo los blancos y los nulos, se obtienen porcentajes de apoyo no reales.

Al calcular los votos obtenidos por los distintos candidatos en relación al padrón electoral, se obtiene el real apoyo que tienen los candidatos.

La conclusión que se obtiene es que ninguno de las y los candidatos lograron obtener, en primera vuelta, el 20% del apoyo de las y los ciudadanos.

En razón a ese cálculo, podemos sostener y teniendo en cuenta todo lo expuesto en este ensayo, con justa razón que los candidatos representaban a grupos muy minoritarios. Estos mismos cálculos electorales para las elecciones parlamentarias, nos señalan que hay diputados electos tan solo con el 1,5% de los votos.

Como un botón de muestra de lo sostenido entregamos las votaciones obtenidas por los candidatos tanto en la primera como en la segunda vuelta. Con ello queremos ejemplificar y demostrar que las y los candidatos como los partidos que los apoyan no tienen apoyos mayoritarios entre la ciudadanía y solo representan a un segmento de la población.



### Votación presidencial 1° vuelta 2017

CANDIDATOS	VOTOS	% SERVEL	% CIUDADANO
<b>DERECHA</b>			
J. A. KAST	520.256	7,93	<b>3,63</b>
S. PIÑERA	2.405.216	36,64	<b>16,81</b>
<b>CENTRO DERECHA NEOLIBERAL</b>			
CAROLINA GOIC	386.029	5,88	<b>2,69</b>
ALEJANDRO GUILLIER	1.489.655	22,69	<b>10,41</b>
<b>SOCIAL DEMOCRACIA NEOLIBERAL</b>			
BEATRIZ SÁNCHEZ	1.330.660	20,27	<b>9,30</b>
M. ENRÍQUEZ-OMINAMI	374.734	5,71	<b>2,61</b>
<b>IZQUIERDA ANTICAPITALISTA</b>			
EDUARDO ARTES	33.625	0,51	<b>0,23</b>
ALEJANDRO NAVARRO	23.934	0,36	<b>0,16</b>
<b>VOTOS VALIDOS</b>	6.654.099	98,42	<b>45,87</b>
TOTAL, VOTACIÓN	6.699.247	100	<b>46,61</b>
<b>NO ELECTORES</b>	7.744,054		<b>54,39</b>

### Elecciones presidenciales 2017 primera vuelta

CANDIDATOS	VOTOS	ASIGNACIÓN SERVEL	PORCENTAJE REAL CIUDADANO
Sebastián Piñera Echeñique	3.796,948	54,57%	26,46%
Alejandro Guillier Álvarez	3.160.128	45,43%	22,02%
Votos Válidos	6.957.546	98,93%	48.50%
TOTAL VOTACIÓN	7.032.878	100%	49.00%
NO ELECTORES	7.314.410		51.00%
PADRÓN ELECTORAL	14.347.288	100%	

SECTOR SOCIO ECONÓMICO	DERECHA NEOLIBERAL KAST-PIÑERA		CENTRO IZQUIERDA NEOLIBERAL GOIC- GUILLIER		CENTRO IZQUIERDA LIBERAL SANCHEZ-MEO		IZQUIERDA ANTI-CAPITALISTA NAVARRO-ARTES		% VOTOS	% ABSTENCIÓN
	% Servel	% VC	% Servel	% VC	% Servel	% VC	% Servel	% VC		
ABC1	58,40	32,15	21,00	11,57	20,00	11,11	0,54	0,29	55,05	44,05
Capas medias	36,00	18,12	27,9	<b>14,02</b>	33,44	<b>16,81</b>	0,75	0,38	50,27	49,73
Capas medias Bajas	30,89	14,24	39,69	<b>14,14</b>	27,55	<b>12,70</b>	0,87	0,40	46,00	54,00
Populares	34,67	14,56	30,20	12,69	34,21	14,37	0,89	0,37	42,00	58,00
TOTAL									48,00	52,00



## **El “no votar” es otra forma política de participar**

En 1988, se adoptó en el Partido Socialista Salvador Allende la decisión política de “NO” participar en el Plebiscito sucesorio convocado por la dictadura, pues ello conducía a institucionalizar el régimen político establecido en la Constitución Política de 1980: la “democracia protegida”. No nos equivocamos, a pesar de que muchos socialistas, entre ellos algunos allendistas, seducidos y cooptados por la democracia protegida, han contribuido desde el poder gubernamental a reproducir y esparcir el virus neoliberal por toda la sociedad. Hoy 28 años más tarde, ese régimen se pudre, carcomido por la corrupción política y la obsolescencia de una clase política al servicio del poder del capital neoliberal. La decadencia de la democracia protegida es total y completa, una expresión de ello es, el affaire del padrón electoral. La comedia de equivocaciones y errores compete y compromete a todos los actores políticos vinculados al poder local, regional y nacional.

La coyuntura política actual nos ofrece la oportunidad para hacer estallar el régimen político decadente: ¿cómo? simple, no votando en las próximas elecciones municipales.

Para que el sufragio ese noble instrumento político que permite en algún momento de la historia política, por ejemplo, septiembre de 1970, a los subalternos desplazar del poder político (gobierno) a los representantes de la clase dominante, recupere su capacidad subversiva, debe dejar de usarse para favorecer a la clase política corrompida por el neoliberalismo. Por eso, no hay que votar. La abstención, la no participación ciudadana, debe ser un NO gigante y poderoso en contra del actual régimen político y su corrupto gobierno.

Pensemos que al votar en 1988 la ciudadanía legitimó la institucionalidad política autoritaria, antidemocrática, antipopular y, sobre todo, el patrón de acumulación neoliberal impuesto violentamente por el capital, el imperialismo estadounidense

y la dictadura militar. Esa legitimación política, a través del voto ciudadano, proyectó por tres décadas toda la obra pinochetista.

Si la ciudadanía actual no quiere ser cómplice de una nueva proyección en el tiempo, es decir, de 30 años más de neoliberalismo: no debe votar. Recordemos, que la dictadura, los autoritarios, perdieron ganando. No podemos volver a permitir que el acto de votar sea una forma de “salvar” al neoliberalismo agrietado por los propios ciudadanos movilizados entre 2006 y la actualidad. La ciudadanía que rechaza el actual régimen político decadente no puede otorgarle legitimidad asistiendo a la elección municipal. Ello sería una contradicción sin ninguna lógica política. Si todas las encuestas señalan que los partidos y los políticos solo tienen un 6% de la adhesión ciudadana. No pueden ser apoyados por la ciudadanía a través del voto. No podría entenderse y comprenderse sociológica y políticamente esa contradicción que por un lado se les rechaza y por otro se les dote de legitimidad política a esos partidos.

Por otro lado, téngase presente que las elecciones municipales no contribuyen a cambiar nada de lo existente. Solo le otorgan poder y le dan continuidad a la democracia protegida y, sobre todo, poder a los partidos conformes con el sistema, o sea, a los partidos de la Nueva Mayoría como a los del Chile Vamos. Incluso, a través de la elección los nuevos partidos pierden. Pues ingresan a un sistema corrupto. Se volverán una pieza más de él. Además, esas nuevas organizaciones políticas, de ganar, van a legitimar lo existente.

Para NO ser cómplice de un nuevo error histórico y político semejante al del 5 de octubre de 1988 la ciudadanía debiera abstenerse de votar. El 5 de octubre fue el momento histórico y político en que la ciudadanía democrática nacional se “jodió”. Pues, en ese momento la sociedad chilena eligió un camino equivocado, si la historia política debe servir para algo debe evitar a volver a tropezar con la misma piedra.

NO hay que votar próximo domingo 23 de octubre de 2016. La NO PARTICIPACIÓN es un acto subversivo y democrático, que debe servir políticamente, para provocar la caída del mal gobierno. La ciudadanía debe hacer uso el domingo del poder destituyente ciudadano. La NO PARTICIPACIÓN debe ser la manifestación de ese poder.

Los ganadores deberán ser vistos como usurpadores del poder ciudadano. Que destapen sus botellas de "champagne" para celebrar su miseria política, que se emborrachen de vergüenza al saber que solo representan a sus clientes y lacayos a sueldo, a los esbirros del poder de turno. Pero nunca a la ciudadanía trabajadora, a la mujer pobladora, a los jóvenes que construyen su futuro luchando contra el mercado educacional, que de ninguna manera representan a las y los ciudadanos de la tercera edad que apenas viven o sobreviven con miserables pensiones, que reciben malas e indignas atenciones de salud; que no representan de ninguna manera a las y los ciudadanos que defienden a la naturaleza de la irracional devastación extractivista; que de ninguna manera representan al pueblo mapuche y sus luchas históricas, etcétera. Por eso, la no participación ciudadana y popular debe ser clara, los elegidos no nos representan. Así como desde 1988 hasta la actualidad a un grupo de ciudadanas y ciudadanos nunca nos ha representado la clase política concertacionista ni los partidos de la Nueva Mayoría y menos, por cierto, la derecha.

Que los que ganen el poder municipal sepan que no son bienvenidos. Pues, la inmensa mayoría de ciudadanos locales no los eligieron. El no votar el domingo 23 debe ser el principio del fin del actual régimen político.

La NO participación debe quebrar el calendario electoral de las clases dirigentes. Pues, pasadas las elecciones municipales entrarán de lleno en la competencia política presidencial. Ello no debe ocurrir. La no participación mayoritaria ciudadana debe volcarse a exigir la destitución del mal gobierno, la ciudadanía debe movilizarse para exigir la renuncia de la presidenta y sus inoperantes ministros, debe constituirse un gobierno ciudadano y popular y convocarse a una Asamblea Constituyente Ciudadana sin la participación de los partidos políticos que sostuvieron el sistema decadente durante estos 28 años. La ciudadanía democrática movilizadora debe tomar el control político de la sociedad y disponerse a cambiar todo.

Por eso insisto, las elecciones municipales no deben ser la tabla de salvación del régimen político actual y menos del gobierno ni de la oposición neoliberal. La NO PARTICIPACIÓN debe ser el punto de partida de la transformación radical de

la institucionalidad y de la sociedad actual. De no iniciarse ese proceso, el neoliberalismo y sus servidores municipales y más tarde regionales y nacionales seguirán dirigiendo la historia.

## **En Chile la Representación Política a nivel local ha desaparecido y la Democracia Electoral está en proceso de descomposición<sup>89</sup>**

**ENTREVISTA AL POLITÓLOGO CHILENO JUAN CARLOS GÓMEZ LEYTON.**

**FERNANDO ARELLANO ORTIZ**

A más de cuatro décadas de la implementación de políticas neoliberales en Chile a partir de la dictadura genocida de Augusto Pinochet (1973-1990) ha generado en la sociedad de este país austral un desencantamiento con la política cuyo impacto es: la profunda crisis en que se encuentra la denominada democracia representativa, fundamentalmente, por los altos índices de abstención electoral que se vienen registrando en las jornadas electorales tanto nacionales como locales.

Como bien lo sostiene el filósofo francés Jacques Ranciere, quien estuvo recientemente en Santiago de Chile, "El neoliberalismo no es solo un credo económico, sino también una forma de pensamiento global sustentado en la desigualdad". Y eso es, precisamente, lo que se puede palpar en una sociedad como la chilena que, si bien salió del régimen absolutista de Pinochet en los años 90 del siglo pasado, quienes los sucedieron ya en democracia, fueron incapaces de implementar un modelo económico que reemplazara el criminal esquema neoliberal que ha llevado al país a estar enfrentando una grave crisis de representatividad política.

Para analizar la coyuntura sociopolítica chilena, aprovechamos la reciente visita a Bogotá del científico social y profesor universitario Juan Carlos Gómez Leyton, quien cumplió una serie de compromisos académicos, para sostener un amplio diálogo que nos permita aproximarnos a la realidad de la patria de O'Higgins y Allende, más aún cuando en noviembre de 2017 se realizarán elecciones presidenciales para reemplazar a Michelle Bachelet en La Moneda.

---

<sup>89</sup> [www.cronicon.net](http://www.cronicon.net) Bogotá, Colombia.



## **Abstención y crisis de representación política**

**El pasado mes de octubre (2016) se realizaron en Chile unas elecciones municipales con un resultado negativo para los intereses del oficialismo, es decir para el gobierno de la presidenta Bachelet. ¿A qué responde el resultado de esos comicios?**

En primer lugar, es necesario señalar que los resultados de las elecciones del mes de octubre del 2016 son malos para la democracia posdictadura; porque, por primera vez, a lo largo de la democracia electoral post años 90 se produce la más alta abstención electoral, un 67% de la ciudadanía electoralmente activa (CEA) no participó en el proceso eleccionario. En segundo lugar, profundizó la crisis de representación política, especialmente, de los partidos políticos. La alta abstención implicó que muchos candidatos a alcaldías fueran electos con menos del 10% de la CEA comunal; por ejemplo, en la Comuna de Santiago, el alcalde electo, fue apoyado tan solo con el 9% de las preferencias de los ciudadanos; en la Comuna de La Pintana, la alcaldesa electa solo con el 6% del apoyo electoral comunal. Eso significa que, muchos de las y los Alcaldes electos, no son representativos de la ciudadanía comunal, como tampoco lo son los concejales electos. En otras palabras, la representación política a nivel comunal, prácticamente, ha desaparecido. En tercer lugar, la democracia electoral posautoritaria en Chile entra en un proceso de descomposición, especialmente, en su relación entre la ciudadanía y las instituciones políticas que participan en ese espurio régimen político. Sin embargo, y contradictoriamente, la democracia electoral mantiene su vigencia institucional, a pesar de la crisis de representación del vaciamiento político ciudadano del régimen; del crecimiento del “partido de los no electores”; y de la crisis de legitimidad del sistema político; en consecuencia, la institucionalidad política autoritaria, agrietada se mantiene - y continúa funcionando- como si en octubre (2016) pasado no hubiera ocurrido nada. Porque fundamentalmente, a pesar de la altísima “abstención”, los partidos políticos, tanto conformes con el sistema, es decir, los vinculados al **Chile Vamos** (la derecha), los de la **Nueva Mayoría** (centro-izquierda) como los nuevos partidos políticos discordantes con el sistema, consideran en un cálculo “rational choice” (o sea, muy neoliberal) que los costos de ganar

con un universo electoral pequeño son más factibles que hacerlo en un universo electoral mayor. Por lo tanto, todos - ganadores y perdedores- se preparan para competir en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias de 2017, apostando a que el universo electoral se mantenga o se reduzca aún más. Todos ven en ese escenario la posibilidad de ganar; por eso, rápidamente, los partidos políticos han “olvidado” o se han despreocupado de la existencia del “partido de los no electores”. En un régimen político con baja participación política y electoral la factibilidad de ganar se potencia, principalmente, para las nuevas agrupaciones políticas. Los que pierden son los partidos políticos desgastados por el sistema; pero, también, puede ocurrir que los nuevos pierdan. La abstención electoral es una arma peligrosa para las democracias; tal como sucedió con dos ejemplos recientes: primero, el caso Podemos en España, especialmente, en las segundas elecciones, perdieron un millón de votos; y, no lograron desplazar del poder al Partido Popular y, segundo, el caso del Plebiscito del 2 de octubre por la Paz en Colombia, el triunfo del “NO”, como la exigua votación del “SI”, tienen su correlato en la masiva no participación electoral ciudadana. De allí que considero que no prestarle atención a la “abstención” electoral es un gran error político.

### **¿En Chile el voto es obligatorio?**

No, el voto es un acto voluntario. La inscripción en los registros electorales es automática y el voto es voluntario, a partir del año 2012. La primera elección con esta regla electoral se llevó a cabo ese año y en esa oportunidad la abstención llegó al 60%. En las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2013, se mantuvo ese porcentaje, aumentando significativamente, en octubre pasado.

Habría que aclarar que la abstención electoral no es algo nuevo en la democracia posautoritaria chilena, desde mediados de la década de los noventa del siglo pasado, el “partido de las y los no electores” ha venido aumentando su presencia e injerencia en el sistema político y en la sociedad neoliberal nacional. La desvinculación de la ciudadanía con el régimen democrático electoral autoritario impuesto por la dictadura militar de Pinochet y sostenido por los gobiernos Concertacionistas se explica por diversos factores que sería largo detallar aquí. Pero, quisiera

destacar el que considero muy relevante y primordial, en una primera etapa: la constitución de la ciudadanía neoliberal, cuya principal característica es su condición apolítica; es decir, el rechazo a la política como una actividad vinculante y primordial de la comunidad; y, por ende, su activa participación en el mercado. En una segunda etapa, que se abre en el año 2006, con la denominada “rebelión de los pingüinos”, estudiantes secundarios exigiendo educación de calidad y su gratuidad, que madura en la rebelión juvenil, estudiantil y ciudadana del año 2011; así, las nuevas generaciones formadas en la democracia electoral autoritaria rechazaron las formas electorales de dicho régimen político. Esto implica que la ciudadanía electoralmente activa, aproximadamente, 14 millones de electores, se conforme, hoy, en dos grandes conglomerados, a saber, “el partido de los no electores”, integrado aproximadamente por 9 millones de ciudadanos, entre los cuales se encuentran desde los apolíticos hasta los sectores ciudadanos que rechazan radicalmente el sistema político. Y, (b) los *ciudadanos electores*, aproximadamente 5 millones, que son electores permanentes de la democracia electoral autoritaria, que votan por los partidos de la derecha, hoy agrupados en el Chile Vamos, como de la centro-izquierda, agrupados en la Nueva Mayoría. Este grupo, que fluctúa entre elección y elección, conforman *las* y *los* electores que han sostenido y han legitimado la continuidad institucional de la democracia neoliberal, en el último cuarto de siglo.

Ahora bien, en este escenario político quisiera sostener la hipótesis que, a pesar de que el gobierno de Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría pierde algunos municipios emblemáticos, o sea, algunas comunas que son políticamente importantes, no es, necesariamente, una derrota política que abra las puertas a la derecha.

### **¿Por qué?**

Aunque fueron adversos los resultados electorales para el gobierno, ello no significa que la Nueva Mayoría vaya a perder las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias ante la derecha. O, que esta tenga asegurado el triunfo. Bueno, como cualquier elección, ésta siempre puede ser incierta y producir sorpresas. Lo nuevo del escenario electoral poselectoral-municipal

es la constitución de una tercera fuerza política, con posibilidades reales de quebrar la hegemonía electoral de las alianzas políticas de la derecha como de la centro-izquierda, coaliciones dominantes en los últimos 25 años.

Se ha presentado un fenómeno político relevante e importante: ha comenzado a constituirse una tercera fuerza política alternativa, cuyo referente es la alianza política electoral que apoya al candidato independiente de izquierda, Jorge Sharp y que logra triunfar en la comuna de Valparaíso. Dicha coalición política derrota tanto al candidato de la derecha, el candidato UDI (Unión Demócrata Independiente), Jorge Castro, quien se presentaba a la reelección como también al candidato de la Nueva Mayoría.

La emergencia de la figura de Jorge Sharp en representación de las nuevas organizaciones políticas de izquierda -profundamente críticas de la dominación neoliberal- abre una estructura política de oportunidades para iniciar un proceso de convergencia política y social de todas las fuerzas y organizaciones políticas y sociales que se constituyeron luego de la rebelión juvenil, secundaria y ciudadana de 2011. Cuyo actor político y social central fue el movimiento estudiantil universitario.

Las nuevas organizaciones sociales y políticas provienen de esa rebelión, por esa razón, la extracción eminentemente estudiantil de sus integrantes destaca por sobre el resto de las y los participantes. Ellos se definen de izquierda, son la nueva izquierda; una izquierda distinta a la "izquierda neoliberal" que ha integrado a la Concertación de Partidos por la Democracia (1990-2010) como a la Nueva Mayoría (2013-¿?), me refiero al Partido Socialista de Chile, al Partido por la Democracia y al Partido Comunista de Chile, respectivamente. La nueva izquierda es producto, fundamentalmente, de las movilizaciones sociales y políticas del ciclo de protestas del periodo 2006-2012. Es decir, son generaciones nuevas, de recambio, que hoy en día se están haciendo presentes en la sociedad neoliberal chilena; que han comenzado a constituir una fuerza política y social con capacidad electoral para disputarle el poder tanto a la Nueva Mayoría y/o la vieja Concertación, como también a la vieja derecha pinochetista ya sea de la UDI o de Renovación Nacional o de la nueva derecha neoliberal, EVÓPOLI y Amplitud.

### **Correlación de fuerzas de los partidos políticos**

**Con ese preámbulo, hablemos un poco de cómo es el espectro político chileno. La derecha está constituida fundamentalmente por dos partidos políticos: la UDI y Renovación Nacional de Piñera. Con el último escándalo que salpica a Piñera con base en los negocios algo turbios con el Perú, ¿es posible que la UDI y Renovación Nacional se vuelvan a unir para impulsar una nueva candidatura de Piñera u otro nombre?**

La derecha política integrada, principalmente, por Renovación Nacional y la UDI, tienen hoy día, por decirlo así, vástagos nuevos, que han surgido desde el interior de esos dos partidos pinochetistas. En 2012 emerge **Evolución Política (Evópoli)**, grupo fundado por el exministro del gobierno de Sebastián Piñera Felipe Kast y, ciertamente, cercano a la UDI.

Amplitud que es otro sector de la nueva derecha fundado por ex militantes de Renovación Nacional que tiene como líder a la senadora Lily Pérez.

Estos cuatro partidos más el Partido Regionalista Independiente, PRI, conforman lo que se denomina Chile Vamos. La nueva alianza de la derecha, que está en proceso de designar al candidato a la presidencia, que puede ser definido en primarias internas. Para lo cual ya hay varios aspirantes, entre ellos podría estar el expresidente Sebastián Piñera, quien actualmente tendría una mayor cantidad de adhesión ciudadana: entre el 22 y 24%. Sin embargo, hechos como los que tú señalas, lo hacen perder puntos en la opinión ciudadana. No obstante, en la derecha, especialmente, en Renovación Nacional y la UDI, es un nombre que no se discute. Todo va a depender de cómo el propio Piñera salga de las complejas situaciones que lo vinculan a "turbios" negocios, en donde política y dinero no se llevan bien.

**Ahora hablemos de la Izquierda, pero no de la que hace parte de la Nueva Mayoría ni de la antigua Concertación. ¿Cuáles son los puntales, los liderazgos, los nuevos sectores?**

Como lo expresaba anteriormente, la nueva izquierda estaría compuesta por una serie de grupos que se han originado fundamentalmente en las universidades. Aquí, se puede mencionar

a la **Izquierda Autónoma** que tiene como principal referente y líder a Gabriel Boric, expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y actual diputado de la región por Magallanes. Luego, está la **Revolución Democrática** que es un partido que se constituyó a partir del movimiento del mismo nombre que dirigía el expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile, actual diputado Giorgio Jackson. Cabe señalar que la Izquierda autónoma se dividió hace algunos meses atrás. Por un lado, queda la Izquierda Autónoma bajo la dirección política del académico de la Universidad de Chile, **Carlos Ruiz**, y por otro, el **Movimiento Autonomista**, bajo el liderato de Gabriel Boric. A estos tres grupos habría que sumarle otros sectores políticos y sociales de izquierda con menos visibilidad y sin liderazgos reconocidos por la opinión pública, como es el caso de la Izquierda Libertaria, Partido Igualdad, Partido Amplio de Izquierda (PAIS), Partido Poder, Partido Ecologista Verde, el Partido Humanista, entre otros.

### **¿Y el Partido Comunista con Camila Vallejo no es izquierda?**

Por lo menos desde el punto de vista de mi clasificación, no. El PC es "relictos histórico", es un partido viejo, cabe señalar que el PC chileno es el único Partido Comunista, a nivel mundial, que no hizo y no ha hecho aun un "aggiornamento político" luego de la caída de URSS y de la desaparición de los socialismos reales. Aunque, tengo la impresión de que Camila Vallejo y otros actuales dirigentes jóvenes del PC, podría ser, tal vez, parte de una nueva forma de hacer política, pero eso está por verse. El PC, por cierto, es un partido de izquierda, pero, yo diría, de la vieja izquierda.

La nueva izquierda, es una izquierda que, yo diría, tiene una extracción eminentemente de clase media universitaria y profesional al estilo Podemos de España. Este ha sido un modelo para seguir, no a copiar, por cierto, tanto para Gabriel Boric, para Giorgio Jackson como para otros. Ahora, al momento de hacer un análisis de las influencias políticas, teóricas e ideológicas de esta nueva izquierda el panteón es amplio, variado y muy heterogéneo. Y, es complejo hacer una evaluación de ello, pues para muchos la teoría política devenida del pensamiento crítico latinoamericano es un descubrimiento muy reciente. Y, por lo general, el espesor de la reflexión teórica es muy delgado. La relativa formación y praxis política constituyen, en mi opinión, debilidades fuertes de

esa izquierda. Es un proceso en desarrollo, combinado y desigual con ritmos diferenciados al interior de cada conglomerado. Pero, sin lugar a dudas, se ha avanzado mucho; y mucho también han realizado en el poco tiempo que llevan actuando.

También hay otra izquierda que se ha ido conformando, que es social popular, que han ido constituyendo viejos militantes de la izquierda de los sesenta, setenta y ochenta y de nuevas generaciones de combatientes populares, que asumen otra forma de hacer política. Son sectores populares que se organizan, estudian, y se plantean otras problemáticas que produce el capitalismo neoliberal en la sociedad. Hacen política fuera de la institucionalidad, en la periferia. Son agrupaciones políticas que se identifican con el amplio ideario anarquista.

**¿Electoralmente hablando con posibilidades de crecer y de hacer un buen papel o, simplemente, como estamos acostumbrados en varios países de América Latina a hacer simplemente simbólicos?**

En el caso de que se presente un escenario político dominado por la alta abstención y de baja participación ciudadana en relación con los partidos políticos históricos -ya sean de derecha o de la Nueva Mayoría- los nuevos grupos políticos que buscan insertarse en la institucionalidad electoral tienen opciones políticas de ganar, como la tuvieron en Valparaíso. Jorge Sharp, el nuevo alcalde del Valparaíso, pertenece a la nueva izquierda; viene de la Izquierda Autónoma y después se volvió autonomista; por lo tanto, él postula como independiente con el apoyo de la nueva izquierda y gana las elecciones fundamentalmente por tres factores: (a) la alta abstención registrada en la comuna de Valparaíso; (b) la pésima calidad política del candidato de la Nueva Mayoría. El oficialismo presentó un "outsider" político, Leopoldo Méndez, un cantante popular, bueno, tal vez, como cantante, pero pésimo como candidato; y, por último, (c) el desprestigiado alcalde de la UDI que se presentaba a la re-elección. La combinación virtuosa de estos tres factores, sumada la atractiva propuesta del joven candidato de la Nueva Izquierda, Jorge Sharp, posibilitó su victoria.

Ahora bien, cabe señalar que en ninguna otra comuna del país esta combinación de factores se presentó y, por esa razón, la nueva izquierda, no ganó. Por cierto, otros candidatos

independientes triunfaron, pero allí operaron, fundamentalmente, otros factores que escapan a este análisis.

Otros grupos de la nueva izquierda, no clase mediera, sino popular, no tienen, en verdad, ninguna intención de participar en los procesos electorales. Ellos trabajan con otros horizontes políticos de posibilidad.

### **¿Y qué pasa con Marco Enríquez-Ominami?**

Enríquez-Ominami -en mi opinión- está “muerto”, políticamente hablando; especialmente, para los sectores sociales que en su momento pudo representar. Él está supuestamente involucrado en casos de corrupción política electoral y de haber solicitado dinero a un ex yerno del Dictador Pinochet, con el objeto de financiar su campaña presidencial. Días antes de las elecciones municipales fue formalizado y está siendo investigado por las autoridades correspondientes a los delitos que se le imputan. El hecho de que esté siendo investigado ya genera sombras, desconfianzas y dudas sobre él y su partido, el PRO, partido Progresista. Esta situación conduce inevitablemente a un magro resultado electoral en las elecciones municipales de 2016. En consecuencia, hoy en día está en una situación muy negativa; no lo veo posicionándose nuevamente para ir a una campaña electoral presidencial; el tema de la acusación es muy fuerte, pues, Julio Ponce Lerou, dueño SQM, empresa que le pasa el dinero a todos los partidos políticos, era yerno de Pinochet. Hay que recordar que Pinochet privatizó la industria salitrera y se la entregó a su yerno a muy bajo costo. La corrupción política electoral es uno de los factores que explicaría el aumento de la no participación electoral ciudadana.

**Pasemos a la Nueva Mayoría. Caracteriza a esta coalición el hecho de que la Concertación se agotó y por lo tanto le pusieron un nuevo vestido y ahora se llama de este modo, pero prácticamente con los mismos partidos. Ideológicamente hablando, ¿es tan neoliberal como la UDI, o como Renovación Nacional? ¿Qué es la Nueva Mayoría hoy en día?**

Lo que debemos tener presente es que en el año 2011 estalla la rebelión juvenil, estudiantil y ciudadana en Chile. Una rebelión social muy potente, que tiene muchas dimensiones y con una gran



potencia política, que provoca una onda sísmica que agrieta la dominación y la hegemonía neoliberal. La rebelión instala o reinstala el conflicto social y político en la sociedad neoliberal chilena. Todo lo sólidamente construido por la Concertación durante 20 años -en tres años de gobierno de la derecha neoliberal de Sebastián Piñera- se estaba, aparentemente, disolviendo en el aire. La rebelión estalla en un momento en que la Concertación había sido derrotada en el año 2010 y, por lo tanto, la coalición estaba casi inerte políticamente hablando en el 2011. No tenía ninguna posibilidad de plantearse y obtener el gobierno en el 2014, sino modificaba su actuar político y corregía la forma de enfrentar la movilización social y política y asumía el descontento ciudadano que se expresaba de diferentes formas durante el gobierno de Piñera.

Para hacerlo la Concertación debía asumir un programa político reformista, abrirse hacia los nuevos sectores emergentes, aceptar en una nueva alianza política al Partido Comunista, como también a la Izquierda Ciudadana y partido MAS. La principal dificultad para abrirse hacia la izquierda comunista se encontraba en el Partido Demócrata Cristiano, un partido esencialmente anticomunista.

### **¿La Democracia Cristiana (DC) condenó al régimen genocida de Pinochet o nunca lo ha hecho?**

Sí, la DC lo hizo. Pero nunca aceptó que se luchara con las armas contra el régimen de Pinochet. La existencia de la Concertación, entonces, era abrirse hacia el Partido Comunista. Entre tanto, los jóvenes y la ciudadanía que estalla en el 2011 plantearon cuatro cosas fundamentales: *una reforma tributaria*, para poder financiar la *reforma educativa*; *una reforma política*, que significaba la eliminación del sistema binominal electoral; y, en la nebulosa estaba el planteo de la realización de una *asamblea constituyente* para la redacción ciudadana de una nueva Constitución. Más tarde se incorpora la necesidad de *una reforma laboral*.

Estos cuatro puntos, los asumen los partidos que integran la Concertación y, más tarde, también, el Partido Comunista de Chile. Y, hacia 2013, se logra establecer un programa común que propone reformas estructurales al neoliberalismo y así logra triunfar Michelle Bachelet en las elecciones de 2013.

Si bien, gana ampliamente en segunda vuelta, cuando se calcula la adhesión efectiva que Michelle Bachelet tenía al momento de asumir el gobierno, no pasaba más del 25%. Esto significa en términos concretos que tenía en la oposición a los sectores de derecha, a todos los jóvenes que se habían movilizado en el 2011 y tenía la indiferencia de mucha de gente.

Entonces ¿qué es lo que sucede? Que cuando comienza a poner en marcha las medidas, o las supuestas reformas estructurales, estas eran simplemente correcciones a las fallas de mercado. En ese sentido, Michelle Bachelet no solo tiene a lo largo de su gobierno la oposición de derecha que tiene representación parlamentaria, sino también la oposición social de miles de personas que le dicen: usted no está haciendo lo que nosotros queríamos, por ejemplo, educación de calidad y gratuita para todos.

#### **¿Entonces, en qué quedó la reforma educativa?**

La reforma educativa todavía está en proceso. Aun no se completa.

#### **¿Qué pasó con la reforma Laboral?**

La reforma laboral se hace, pero con muchas limitaciones a los procesos de negociación colectiva, con ciertas contradicciones; incluso, esas reformas van al Tribunal Constitucional. Lo que pasa en términos concretos es que todo el programa de la Nueva Mayoría hoy día está fracturado o aprobado a medias, pero con mucha intervención de la derecha.

#### **Hablemos del sistema binominal...**

Se logró, por fin, sacarlo, ahora tenemos elecciones con sistema proporcional.

#### **¿Pero beneficia a partidos cómo, por ejemplo, al Partido Comunista?**

Es que eso es relativo, porque si hay una muy alta abstención, esta no beneficia a nadie. Beneficia, solamente a aquellos partidos que tienen voto duro y estos partidos como en Colombia u otros países de la región son los partidos de derecha. El Partido Comunista actual no constituye una fuerza electoral relevante.

### **¿Quién puede perfilarse como candidato presidencial dentro de la Nueva Mayoría? ¿La estructura de esta coalición se puede mantener o depende del resultado del gobierno de Bachelet?**

Yo tengo la impresión de que la Nueva Mayoría tiene un ciclo de vida política que todavía está por verse si fenece ahora o todavía le queda algo de vida para presentar un candidato presidencial. Las disputas internas son fuertes; pero más fuertes son al interior de los partidos que la componen. La DC quiere llevar su propio candidato; el problema de la DC continúa siendo la presencia del PC en la coalición. Este partido se ha comportado como un partido más de oposición al gobierno de la Presidenta Bachelet. Por lo tanto, los demócratas cristianos estarían felices si pudieran sacar al Partido Comunista y pudieran recomponer la vieja Concertación.

El Partido Socialista de Chile, tiene “una bolsa de gatos” en su interior como decimos en Chile. Tiene como potenciales candidatos presidenciales a Ricardo Lagos, quien posee doble militancia tanto del PS como del Partido por la Democracia PPD; al constitucionalista Fernando Atria; a José Miguel Insulsa, y se bajó, recientemente de la contienda, Isabel Allende, la hija del presidente Salvador Allende. Todos ellos están ahí y nadie sabe cómo van a definir esa situación. Las elecciones son en octubre de 2017, o sea, estamos a menos de un año. Ha irrumpido también dentro de la Nueva Mayoría la candidatura del senador Alejandro Guillier, quien fue presidente del gremio de los periodistas de Chile, muy concertacionista que logró una adhesión ciudadana muy fuerte e interesante, pero no está dentro de un partido específico, es senador independiente por Antofagasta. El viejo Partido Radical Social Demócrata (PRSD) que hace muchos años no había tenido la posibilidad de contar con un precandidato para la Presidencia con fuerza, lo ha asumido y lo ha hecho suyo. A. Guillier tiene muchas posibilidades porque tiene la adhesión de la ciudadanía. Sin embargo, aun el panorama es oscuro, para sostener con seguridad quién de la NM llegará a la papeleta. Es más, tampoco es seguro que la NM llegue a ella. O sea, todo es incertidumbre.

### **¿Y el Partido Comunista a qué va a jugar?**

El Partido Comunista en estos momentos, diría yo, está en un descenso político electoral, “cuesta abajo y en la rodada”.

Lo digo, por lo siguiente: El Partido Comunista durante todos los años fue antineoliberal y crítico de la Concertación. Durante esos años (20 años) no tuvo representantes en el parlamento, pero sí tenía el control de importantes gremios. Por ejemplo, tenía la presidencia de la Central Unitaria de Trabajadores, con Bárbara Figueroa, el Colegio de Profesores con Jaime Gajardo y tenía la presidencia de la CONFUSAM, el gremio de la salud, por lo tanto, tenía presencia en "lo social" , pero no en lo político institucional. Ahora toda esa representación gremial y sindical la ha perdido. Perdió el Colegio de Profesores, la presidente de la CUT está profundamente cuestionada, lo mismo que el Dr. Esteban Maturana de la CONFUSAM; aunque, recién acaba de obtener un triunfo electoral importante al ganar la presidencia de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, que agrupa a los trabajadores del Estado. La mala gestión y el abandono que hizo el PC de la Universidad ARCIS y su clara postura en defensa de un programa que solo corrige, pero no reforma el neoliberalismo, lo ha desprestigiado política y ciudadanamente.

### **Creciente desafección o vaciamiento de los procesos electorales**

**Con ese panorama se puede colegir que es alarmante la situación política de Chile porque como bien lo anotas, hay un desencanto ciudadano por el proceso político electoral.**

### **¿A qué atribuyes ese desencanto, a las políticas neoliberales?**

La creciente desafección o vaciamiento ciudadano de los procesos electorales de la democracia electoral autoritaria es consecuencia directa del neoliberalismo. Al neoliberalismo no le interesa que la gente participe en política y lo dicen claramente todos sus teóricos. Es decir, si a ti te está yendo bien en la sociedad neoliberal no tienes para qué molestarte yendo a votar. Entonces en ese sentido mucha gente en Chile le encanta participar en el mercado, su espacio de realización es el mercado. Cuando la gente salió a la calle en el 2011 no lo hizo porque quería modificar la estructura de mercado dominante en la educación, sino que estaba haciendo un reclamo como cliente. Pues, muchos querían que la educación costara menos y que le entregaran una

educación de buena calidad por eso estaban pagando, aunque, fuera a crédito. El movimiento estudiantil baja su intensidad y su fuerza de movilización cuando el presidente Piñera decide bajar la tasa del interés del crédito con aval del estado de 6% a 2%. En ese momento las y los jóvenes van y firman nuevos pagarés o nuevas obligaciones crediticias.

### **¿Si se bajó el interés también se reduce la calidad?**

No, no necesariamente, porque el negocio de las universidades privadas está en obtener lucro por impartir el servicio educativo.

### **¿O sea, una trampa para endeudar para toda la vida a la familia del estudiante?**

Ni siquiera a la familia, porque ella no se endeuda. Se endeuda el sujeto que obtiene el crédito. Los papás neoliberales chilenos, ¿qué es lo que hacen? Les dicen a sus hijos: "arrégleselas, yo no tengo con qué pagarte la educación universitaria", así que vaya y contrate su crédito, pues usted tendrá que pagarlo en el futuro. El CAE es un contrato que obliga al estudiante y no a su familia. Obvio, compromete a la familia futura. Entonces, a nivel de la movilización estudiantil se da la presencia de dos sectores: (a) un sector que está en contra del gobierno, en particular, y el sistema político, en general, por no dar lugar a reformas reales y anti-neoliberales; y otro que prefiere que no le toquen el mercado porque es ahí donde se realiza. Es la gran contradicción que dejó instalada en la sociedad neoliberal y la gran rebelión de 2011. Esta aún no concluye.

### **¿La tendencia es al desencanto?**

Pero es que cuando a mí me dicen desencanto, se supone que el desencantado tiene algún juicio crítico, ese es el punto. Yo tengo la impresión de que hay un grupo de desencantados, pero ni siquiera con el sistema; están tan desencantados por todo, quieren que se transforme todo; pero quienes sostienen finalmente el sistema son los neoliberales que son los encantados. Si los neoliberales mañana se sienten amenazados de que le van a tocar el mercado, van a ir a votar, como cuando lo hicieron en 2010 por Piñera.

### **¿Qué capacidad de reacción y de protesta hay en la sociedad chilena, algo similar a la Argentina?**

Las movilizaciones chilenas son de carácter sectorial, se moviliza la gente por una determinada situación, pero no se moviliza por la integralidad de todo el sistema social y económico. Hoy día se moviliza la ciudadanía por las AFP, o sea, por el fin del régimen previsional actual. Porque en esa dimensión está recibiendo las consecuencias de aquello que se dijo que iba a ocurrir hace 35 años atrás. Es decir, cuando el sistema se puso en marcha. Yo siempre digo, si nuestros análisis de hace 35, 25 o 20 años atrás hubieran sido leídos, comprendidos y atendidos por la ciudadanía esto no estaría pasando. Estoy convencido que la ciudadanía en general no creyó lo que se planteaba críticamente con respecto a lo que produciría el neoliberalismo en nuestras sociedades latinoamericanas, y aceptó acríticamente lo que ofrecía y prometía el neoliberalismo. Se hicieron neoliberales. Hoy, tampoco se atreven a salir de él, y buscan soluciones raras. Los ejemplos están allí y son elocuentes en la Argentina de Macri, el Brasil de Temer, el Perú de PPK, el México de Peña Nieto, el Chile de la Nueva Mayoría.

Bogotá, diciembre 2016.



**CUARTA PARTE**

**AGRIETANDO A LA  
DOMINACIÓN NEOLIBERAL**





## **Las “Grietas” de la Sociedad Neoliberal en los tiempos del bicentenario**

El año (2010) en que asumió el primer Presidente de la República neoliberal de derechas y representante directo del capital mercantil, financiero y especulativo, Sebastián Piñera Echeñique: el país se estremeció de norte a sur y de este a oeste.

La derecha volvía a La Moneda, o sea, a tener el control del poder ejecutivo del Estado, luego de 52 años de haber triunfado “democráticamente” en una elección presidencial, -su último triunfo electoral presidencial se había registrado en 1958, cuando fue electo el representante del capital industrial manufacturero nacional, el empresario Jorge Alessandri Rodríguez-. Lo hacía 37 años más tarde de haberse apoderado de manera ilegítima y violentamente del poder del Estado, tras el Golpe de Estado militar y derrocamiento, el 11 de septiembre de 1973, del presidente constitucional, Salvador Allende G. (1970-1973) Y, 22 años después de haber sido desplazada del gobierno al ser derrotada la continuidad del dictador A. Pinochet en el plebiscito sucesorio de 1988 y al perder las elecciones presidenciales de 1989.

La vuelta de la derecha a La Moneda en el año 2010, o sea, al gobierno, al poder ejecutivo, directo del Estado es, por cierto, un tecnicismo politológico y de las ciencias sociales. Puesto que, desde la concepción marxista del Estado, este está bajo la dirección y control de las clases dominantes de diferentes formas y modos. La derecha chilena al entregar el poder ejecutivo en marzo de 1990, al presidente electo, Patricio Aylwin, no implicó de ninguna manera, que ellas abandonaran o fueran totalmente desplazadas del control y dominio de otros aparatos del Estado, como por ejemplo el Poder Legislativo o el Judicial como también del poder militar, aparatos ideológicos o comunicacionales, u otros. La clase dominante nacional durante los 20 años (1990-2010) que el gobierno del Estado estuvo en manos de las fuerzas políticas de la centro-izquierda, la Concertación de Partidos por la Democracia, (CPD, en adelante), nunca dejó de tener poder ni

de controlar poderes fundamentales para continuar ejerciendo su dominación como de imponer su hegemonía en la sociedad chilena. Por cierto, el poder de veto que ejercía en el Parlamento, gracias a la Constitución Política del Estado de 1980, impuesta por la dictadura y legitimada por la CPD, le permitía, entre otras cosas, frenar cualquier intento de profundizar el cambio político democrático e impedir todo intento de modificar las bases materiales e institucionales de la forma de acumulación establecida por la dictadura cívico-militar. Si bien, la derecha política, como expresión directa de las clases empresariales y capitalistas tanto nacionales como internacionales, no tenía el control del poder ejecutivo, o sea, del gobierno, había construido una sólida y tupida red de poder infraestructural que le proporcionaba diversos mecanismos de control que le aseguraban su dominación. Ese era su mayor triunfo desde su derrota política y electoral en 1988/1989.

Este triunfo se vio incrementado y solidificado cuando, en los tempranos años de la década de los 90 del siglo pasado, los principales partidos de la CPD, especialmente, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Partido Socialista de Chile (PSCh) asumieron que el patrón de acumulación neoliberal, o sea, el capitalismo neoliberal, era la mejor opción de crecimiento y desarrollo para la sociedad chilena. Dicha opción y adopción teórica, ideológica y política de parte de la Concertación implicó abandonar toda crítica a los principales postulados, principios y políticas impulsadas por los neoliberales desde la segunda mitad de la década de los años setenta del siglo XX. Todo lo contrario, la Concertación, desde el gobierno de Patricio Aylwin y su ministro de Hacienda, Alejandro Foxley (1990-1994) hasta la elección de Sebastián Piñera en el 2010, aplicaron políticas neoliberales en todas las dimensiones de la sociedad nacional. Los gobiernos de la CPD consolidaron y extendieron el neoliberalismo, completando la obra iniciada por la dictadura cívico-militar. Por cierto, como hemos dicho en otros lugares, el neoliberalismo que impuso la CPD fue, tal como dice, Manuel Antonio Garretón, "corregido", pero mantuvo y profundizó sus aspectos fundamentales y centrales de la cosmovisión neoliberal.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Garretón, MA (2012). *Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los gobiernos de la Concertación en Chile, 1990-2010*, Editorial Arcis, Clacso. Santiago de Chile.

Durante los próximos 20 años de posdictadura la Concertación no tuvo el interés político ni ideológico de modificar ni alterar esa “*weltanschauung*”.<sup>91</sup> La virtud política, durante cuatro gobiernos concertacionistas, estuvo en no tocar ni alterar la combinación entre la institucionalidad económica y la política, ambas heredadas de la dictadura cuya base material era y es la Constitución Política de 1980 (CP80, en adelante). Lo que les permitió consolidar, por un lado, la economía de mercado y, por otro, institucionalizar en una supuesta transición, la democracia, que en realidad no era otra cosa que la consolidación del régimen “democrático protegido”, establecido en la CP80.

Para el año 2010, año del bicentenario, la forma de acumulación neoliberal ya tenía 35 años de desenvolvimiento. Y, era todo un éxito a nivel regional y global. Chile era un modelo, a seguir. A lo largo de esas dos décadas, una nueva sociedad, la neoliberal, había emergido y se extendía por doquier. La ciudadanía neoliberal, o sea, los sujetos sociales neoliberales, se desplegaban ampliamente por los distintos recovecos y meandros del cada vez más extenso mercado y se realizaban como ciudadanos credicard, tal como lo había, descrito T. Moulian, en los años noventa.<sup>92</sup>

Lo más relevante de la transformación neoliberal experimentada por la sociedad chilena durante los veinte años concertacionistas de Chile y, especialmente, para su historia futura, lo constituyó la casi total extinción o desaparecimiento de las alternativas políticas e históricas anti-neoliberales, en otras, palabras, de una izquierda anticapitalista y socialista.

De manera que, al iniciarse la década del bicentenario, Chile se había transformado en la principal y más paradigmática

---

<sup>91</sup> Cabe señalar que la *weltanschauung* neoliberal es una cosmovisión que a lo largo de su historia no ha sido uno sola, sino más bien, han existido diversos “neoliberalismos”. Algunos autores identifican a los menos cuatro a saber: Neoliberalismo Ortodoxo; Neoliberalismo Regulado; Neoliberalismo Emulador, Neoliberalismo Mixto. Estos cuatro tipos de neoliberalismo se han practicado en Chile. Sobre el particular ver a: Maillet, Antoine (2015). “Variedades de Neoliberalismo. Innovación conceptual para el análisis del rol del Estado en los Mercados” en Revista de Estudios Públicos (nueva época) N° 169, Madrid, pp. 109-136.

Sepúlveda, Manuel (2015). “La construcción de la hegemonía neoliberal en la sociedad chilena” Tesis de Grado, Doctorado en Procesos Políticos y Sociales en América Latina, Universidad ARCIS- Chile.

<sup>92</sup> Moulian, Tomás (1997). *Chile Actual, Anatomía de un mito*. LOM Ediciones, Santiago de Chile.

sociedad neoliberal no solo de América Latina y el Caribe sino del orbe global. Por esa razón, no fue extraño que, en las elecciones presidenciales de fines de diciembre del año 2009, ganara en primera vuelta el candidato de la derecha, Sebastián Piñera, derrotando a tres candidatos, supuestamente, del progresismo “antineoliberal”, todos ellos provenientes de la CPD.<sup>93</sup>

En efecto, dos candidatos presidenciales se disputaron la representación de la izquierda antineoliberal, por un lado, Jorge Arrate Mac-Niven, un exconcertacionista, fundador del socialismo “renovado”, exministro de Estado durante los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle, apoyado por el Partido Comunista de Chile, Y, por otro lado, el exmilitante y diputado del Partido Socialista de Chile, Marco Enríquez-Ominami Gumucio. El tercer concertacionista era el expresidente del periodo 1994-2000, Eduardo Frei Ruiz Tagle, demócratacristiano. Ellos representaban de una u otra manera la continuidad de los 20 años de neoliberalismo concertacionista. De ninguna manera sus programas de gobiernos constituían rupturas radicales con lo que habían realizado los gobiernos concertacionistas. Tanto Arrate como Enríquez-Ominami, prometían realizar “correcciones” algo más profundas al neoliberalismo de las realizadas por la CPD. Asumiendo un progresismo político más cercano a los “progresismos” del momento, es decir, similares ya sea, a Rafael Correa, en Ecuador, y su revolución ciudadana; o al proceso democrático-cultural de la Bolivia de Evo Morales o del proceso “chavista” venezolano. Por cierto, no faltaron en sus presentaciones las alusiones y menciones a los gobiernos argentinos de Néstor Kirchner o de Cristina Fernández como del líder del Partido de los Trabajadores brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva y otros líderes del progresismo latinoamericano. Ambos, exconcertacionistas, constructores de la sociedad neoliberal consolidada, buscaban retóricamente “barrer” con todo lo construido en las dos últimas décadas (1990-2010).

El territorio nacional y su gente se agitaron nerviosamente. En realidad, durante los cuatro años que duró el gobierno de

---

<sup>93</sup> Hemos analizado la elección de Sebastián Piñera en Gómez Leyton, Juan Carlos (2023). *Política, Democracia y Ciudadanía en una sociedad neoliberal, Chile 1990-2010*, Tomo I. Escaparate/CIPPSAL, Santiago de Chile, pp.463-485.

Sebastián Piñera (2010-2014) el país y su gente, no dejaron de sacudirse.

La sociedad neoliberal chilena, en el año de su bicentenario, fue sacudida por fuertes e intensos movimientos telúricos, sociales y políticos que no provocaron el derrumbe del neoliberalismo, como lo sostuvo el sociólogo Alberto Mayol en 2012.<sup>94</sup> Pero tuvieron la potencia y la suficiente energía social, política e histórica para agrietar la granítica roca que sostenía la dominación y la hegemonía neoliberal en las últimas cuatro décadas (1973-2010).

Primero, fue la tierra y la mar. En la madrugada del 27 de febrero de 2010, a escasos 12 días de que la Presidenta M. Bachelet entregara la banda presidencial al empresario y representante de la derecha y de la Coalición por el Cambio, integrada por los partidos Renovación Nacional (RN) y Unión Demócrata Independiente, Sebastián Piñera; la tierra y la mar se sacudieron violentamente en la zona centro sur del país.

Un violento terremoto de magnitud 8.8 en la escala de Richter, a las 3.34 am, con una duración de tres minutos, despertó a todos los habitantes de esa zona y del país, pues, las ondas telúricas no solo se percibieron en la zona del epicentro (Cobquecura-Concepción), sino que también en la zona norte y en el extremo sur e incluso en algunas ciudades trasandinas en el territorio argentino. Los habitantes de las zonas costeras comprendidas entre Concepción y Valparaíso debieron a pocas horas de registrado el movimiento de tierra huir despavoridos hacia las tierras o áreas altas urbanas, pues el Océano Pacífico, había dejado de serlo, se había retirado mar adentro, regresando a gran velocidad hacia la costa, convertido en un colosal tsunami, de furiosas y gigantescas olas, de varios metros de alto, que, en pocos minutos,

---

<sup>94</sup> Mayol, Alberto (2012). *El Derrumbe del Modelo*, LOM Ediciones, Santiago de Chile.

arrasaron con todo lo que encontró a su paso.<sup>95</sup>

Así, en un breve lapso, de algunas pocas horas nocturnas, no superior a las tres, la devastación y la destrucción de bienes materiales como la pérdida de numerosas vidas humanas, fue el resultado de uno de los mayores movimientos telúricos y marítimos (tsunami) registrados en lo que va el siglo XXI.<sup>96</sup> Las réplicas del terremoto del 27F, fueron múltiples con diversas intensidades a lo largo del año 2010 como en los años posteriores.

Las consecuencias de ese violento despertar de la sociedad chilena, justo en el año de su cumpleaños patrio, número 200, fueron diversas afectando el hacer y el quehacer tanto del gobierno saliente como del gobierno entrante. Nos interesa analizar brevemente los impactos políticos del movimiento telúrico. En primer lugar, lo que ocurrió con el gobierno de la presidenta Bachelet, que iba de salida. Y, luego al gobierno entrante.

---

<sup>95</sup> El epicentro se situó en la costa de la región del Maule, aproximadamente a 8 km al oeste de Curanipe y 115 km al noreste de Concepción. Según el United States Geological Survey (USGS), el evento ocurrió en la frontera de las placas tectónicas Nazca y Suramericana, debido a una solapadura en la interfaz de ambas, con la primera terminando por debajo de la segunda. El movimiento sísmico abarcó 700 kilómetros, desde Temuco a Santiago, afectando con distintas intensidades las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Bío Bío y la Araucanía. La mayor incidencia se registró en las regiones de O'Higgins (VI), el Maule (VII) y el Bío Bío (VIII). Las ciudades donde se experimentó la mayor fuerza destructiva fueron Talcahuano, Arauco, Lota, Chiguayante, Cañete y San Antonio. Este terremoto es el segundo más fuerte de la historia de Chile, y uno de los cinco más potentes registrados en el mundo. El sismo generó una alerta de tsunami en el Pacífico que se extendió a 53 países incluidos Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, la Antártida, Nueva Zelandia, la Polinesia Francesa y la costa de Hawái. Un fuerte tsunami posterior al terremoto asoló la costa chilena destruyendo o devastando varios pueblos: Constitución, Iloca, Duao, Pelluhue, Talcahuano y Dichato. El archipiélago Juan Fernández, a pesar de no haber sufrido el terremoto, fue impactado por los tsunamis que devastaron su única población, San Juan Bautista. Cfr. Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), El terremoto y tsunami del 27 de febrero en Chile. Crónica y lecciones aprendidas en el sector salud. OPS, Santiago de Chile, 2010, pp. 13 Sobre otras características del terremoto del 27F, es muy útil, ver Revista Anales, TERRE|MARE|MOTO, Ediciones de la Universidad de Chile, Séptima Serie, N°1, mayo 2011

<sup>96</sup> El evento afectó el territorio entre Valparaíso y la Araucanía, donde viven cerca de 13 millones de personas, el 80% de la población nacional. En Maule y Bío Bío, las regiones más golpeadas por el terremoto y tsunami habitan 2.769.659 personas, el 19% de la población total del país. El desastre ocasionó 512 muertos, 16 desaparecidos y 800 mil personas damnificadas. La mayor cantidad de fallecidos fue debido al tsunami, por ejemplo, en la comuna de Pelluhue se registraron 47 muertos, 6 eran pobladores de este lugar y 41 fueron turistas chilenos. OPS/OMS, Ob. Cit, pp. 14

## **El terremoto final del Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010)**

El gobierno saliente de la presidenta Michelle Bachelet pasará a la historia no solo por ser la primera mujer en ocupar el cargo de Presidenta de la República de Chile, sino, por haber experimentado en los últimos doce días de su gobierno, el segundo de terremoto más grande Chile y el quinto de mayor magnitud a nivel mundial.

La llegada al cargo de Presidente de República, cuatro años antes del terremoto, en marzo de 2006, luego de haber derrotado al candidato de las derechas Sebastián Piñera, en las elecciones presidenciales de 2005, fue, por cierto, uno de los mayores terremotos políticos acontecidos en los 200 años de vida independiente del Estado-nación y de la República.

Chile, un país dominado por una poderosa élite masculina de fuerte arraigo e impronta patriarcal y machista fue estremecido hasta sus más profundas raíces históricas y culturales con el triunfo presidencial de una mujer, médica y socialista. Fue un terremoto grado 10.

El triunfo de Michelle Bachelet, a muchos chilenos y chilenas populares y algunos sectores de las capas medias y sectores populares les hizo recodar la noche del triunfo del presidente Salvador Allende G, el 4 de septiembre de 1970, aunque este hombre, era médico y socialista, igual que la presidenta Bachelet. Sin embargo, ambos pertenecían a dos Chile muy diferentes. Con todo, en la tarde del 15 de enero de 2006, miles de mujeres terciaron sobre su pecho la banda presidencial y se pasearon por las grandes alamedas celebrando la llegada de la primera mujer a La Moneda. Fue una tarde de júbilo y alegría. Las mujeres se sentían empoderadas y protagonistas de la historia.

El gobierno de M. Bachelet, sin embargo, no sería un gobierno feminista ni tampoco la presidenta se destacó por hacer otra política que rompiera con la tradicional forma masculina de conducirla, el reconocimiento de los derechos y la igualdad de las mujeres dieron pasos gigantes, pero, obviamente, insuficientes para poner fin a siglos de patriarcalismo y machismo y desigualdad de género.



Desde la perspectiva de que M. Bachelet era la primera mujer que llegaba a la Presidencia de la República de Chile, su gobierno abrigó renovadas expectativas políticas y con ella, tal vez, la alegría llegaría por fin y que las grandes alamedas se abrirían para hombres y mujeres libres que desde hace tanto tiempo el pueblo de Chile espera. Con el balance final de sus cuatro años de gestión queda la impresión que su gobierno no fue nada excepcional ni diferente a lo que habían sido los tres anteriores gobiernos concertacionistas. Fue otro gobierno más de la izquierda neoliberal. Decepción total.

El trágico final del gobierno de Bachelet no solo estuvo marcado por la pésima gestión gubernamental para enfrentar las consecuencias inmediatas de la catástrofe del 27F, sino por entregar el gobierno a la derecha neoliberal, o sea, a los sectores sociales y políticos que habían fundado y puesto los primeros pilares, a lo largo de los 17 años de la dictadura de Pinochet, de la sociedad neoliberal.

Veinte años más tarde, justo en el año del Bicentenario de la Independencia Nacional, la Concertación de Partidos por la Democracia, que desde 1990 habían administrado, expandido, profundizado y consolidado la sociedad neoliberal, entregaba el gobierno a uno de sus genuinos representantes, el empresario Sebastián Piñera.

En ese sentido, el fracaso del gobierno de la presidenta Bachelet podría ser considerado como total. Aunque, como lo he explicado en otro lugar, el triunfo electoral de la derecha, el 17 de enero de 2010, o sea, a un mes y medio del gran terremoto, obedeció, fundamentalmente, al quiebre interno de la coalición de gobierno, al crecimiento sostenido del abstencionismo popular y, sobre todo, a la pésima calidad del candidato presidencial del oficialismo. Ese fue el primer terremoto político del bicentenario.

El movimiento telúrico del 27F fue anticipado, durante los años del gobierno de Bachelet, por varios otros que se registraron en diversos puntos del territorio nacional, aunque con magnitudes menores. Por esa razón, resulta inexplicable la pésima gestión gubernamental demostrada por los funcionarios para atender la urgencia provocada por el sismo y, sobre todo, por el tsunami.

Debido a esa inoperancia y falta de reacción para manejar la crisis, el gobierno de Bachelet debió enfrentar una serie de acusaciones, recriminaciones e interpelaciones sobre la capacidad que posee el Estado de reaccionar y gestionar las catástrofes. Funcionarios destituidos y otros insistidos y acusados judicialmente por sus responsabilidades administrativas como políticas, sobre todo, por el caos en la coordinación institucional de las distintas reparticiones públicas y gubernamentales que tuvieron para enfrentar y actuar en tiempos de catástrofe, empañaron aún más el fin del gobierno bacheletista y el ciclo de gobiernos concertacionistas.

Una profunda desconfianza de parte de la ciudadanía comprometió a los organismos técnicos, encargados, de operar y de alertar a la población costera sobre la posibilidad, por ejemplo, de producirse un tsunami. El SHOA, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, fue uno de los organismos técnicos que actuó con mayor torpeza, generando una mayor inseguridad ciudadana y desconcierto entre las autoridades gubernamentales por sus controversiales y contradictorios comunicados iniciales que descartaban un posible maremoto. La ONEMI, Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, también fue sacudida por la desconfianza ciudadana y, especialmente, por su ineptitud operativa.

El terremoto y el tsunami del 27F no solo agrietaron y destruyeron los bienes materiales tanto públicos como privados de las y los chilenos, sino que también pusieron al descubierto que la principal sociedad neoliberal de la región latinoamericana tenía una ineficiente relación entre el saber técnico-científico con la política. Donde esta no escucha ni atiende los requerimientos de los primeros.

Según narran los periodistas Ascanio Cavallo y Rocío Montes, desde el primer semestre del año 2009 circulaba entre los especialistas y científicos dedicados al tema, un estudio, elaborado por científicos franco-búlgaro-chilenos, que señalaba que entre Constitución y Concepción habían detectado un “gap sísmico” de más de ciento setenta años, es decir, desde el gran terremoto de 1835 descrito por Charles Darwin, y no descartaban la posibilidad

de un evento similar en el futuro cercano.<sup>97</sup> Por cierto, el gobierno y las autoridades encargadas de prevenir los riesgos desconocían dicho trabajo.<sup>98</sup>

Los autores citados nos ponen en conocimiento que para la fecha del terremoto del 27F no se había ejecutado la propuesta de un comité científico consultivo del Ministerio del Interior, aprobada en el año 2008, para establecer una red de 140 estaciones de observación sismológica, 65 de banda ancha y 200 de acelerógrafos, además de redes portátiles. Esos instrumentos necesarios para detectar de manera temprana un movimiento telúrico, no era, para el gobierno de M. Bachelet, algo urgente.<sup>99</sup>

### **Los terremotos sociales**

El movimiento telúrico del 27F tuvo varias réplicas, no solo telúricas, sino "sociales" que al igual que el telúrico remecieron y agrietaron las estructuras como las subjetividades de la sociedad neoliberal. Las dos principales grietas sociales abiertas, fueron provocadas por los movimientos sociales y políticos que emergieron tanto durante la administración del presidente Sebastián Piñera (2010-2014) como en la segunda administración de la presidenta Michelle Bachelet (2014-2018), por dos sectores generacionales distintos, por un lado, las y los estudiantes secundarios y universitarios en el año 2011 como de las generaciones mayores, especialmente, de la tercera edad. Estos se movilizaron masivamente demandando el fin al sistema de previsión social de capitalización individual administrado por las AFP, que al cabo de 40 años de su instalación, proporcionan pensiones de miseria. El movimiento no + AFP, remeció y puso en jaque al sistema de acumulación de capitales.

---

<sup>97</sup> Ascanio Cavallo- Rocío Montes: La historia oculta de la década socialista. UQBAR Editores, Santiago de Chile, pp.388.

<sup>98</sup> El sociólogo alemán U. Beck luego del accidente nuclear de Chernóbil en 1986, elaboró su mundialmente conocida teoría de la sociedad del riesgo, en donde hizo hincapié de manera reiterada sobre la necesidad de una adecuada y constante comunicación entre la política y los saberes científicos con la activa participación de las y los ciudadanos con el objeto de prevenir los riesgos por venir. Obviamente, en el 27F, como en otras catástrofes acontecidas en el país en los años pasados como posteriores, la política llega tarde y tiene un desempeño malo.

<sup>99</sup> Ascanio Cavallo- op. cit. pp 388.

Si bien, el conflicto por la educación ya se había hecho presente en el año 2006, durante el primer gobierno de M. Bachelet emergió con mayor fuerza durante el año 2011 y tiene, como explicaremos en el siguiente apartado, largas raíces en la sociedad neoliberal.

Las grietas sociales abiertas durante los tiempos del bicentenario en los muros de la dominación neoliberal no solo fueron presididas por el movimiento telúrico del 27F del 2010 al que ya hemos hecho referencia sino que el terremoto político se había producido en enero de 2010 cuando en la segunda vuelta presidencial, balotaje, triunfa el candidato de la derecha, del orden neoliberal, el abanderado de la Coalición por el Cambio, el empresario Sebastián Piñera Echeñique.

Luego de 20 años (1990-2010) de gobiernos concertacionistas la derecha política recuperaba la dirección del aparato del Estado neoliberal. A los doscientos años de establecida la República, en 1810, las fuerzas sociales, políticas y económicas directamente ligadas a las clases dominantes serán las que van a conducir, de la misma manera, que lo hicieron en 1910, para el primer centenario, la celebraciones y conmemoraciones del segundo centenario de la Independencia nacional.

Ni el país ni la sociedad chilena eran los mismos de 1910, ni tampoco, de 1958, cuando las derechas obtuvieron el gobierno por voto popular con Jorge Alessandri Rodríguez, representante del capital productivo, industrial-manufacturero, quien asumió el gobierno un 4 de noviembre de 1958, en el viejo y tradicional edificio del Congreso Nacional de Santiago. Mientras que el representante del capital mercantil-financiero-especulativo, Sebastián Piñera Echeñique, lo hizo el 11 de marzo de 2010, en el faraónico edificio congresal levantado por la dictadura del General Pinochet, en la ciudad de Valparaíso.

Como veremos en este apartado el primer gobierno de la derecha fue sacudido por un movimiento social que remeció y agrietó significativamente uno de los principales pilares de la dominación neoliberal: el mercado de la educación.

Una segunda sacudida social que estremeció los cimientos del neoliberalismo nacional fue la acción emprendida

ya no por las y los jóvenes como fue el movimiento estudiantil de 2011, sino por las y los ciudadanos adultos y adultos mayores en contra del sistema de previsión social neoliberal materializado en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) establecido a comienzos de los años ochenta por el dictadura cívico-militar y creado por el exministro del Trabajo y Previsión Social José Piñera, El Movimiento NO + AFP conducido por Luis Mesina puso en jaque a la principal forma de acumulación del régimen neoliberal.

Ambos terremotos sociales y políticos agrietaron la dominación neoliberal, pero no provocaron su derrumbe.

## **Las Grietas en el mercado de la Educación**

### **La Rebelión Social y Política Juvenil, Estudiantil y Ciudadana**

#### **Un breve “Racconto”**

La dominación capitalista neoliberal y el gobierno de la derecha empresarial del Presidente Sebastián Piñera y de la “Alianza por el Cambio”, debió enfrentar durante el primer semestre del año 2011, una poderosa, ancha, multifacética y masiva *revuelta y protesta social y política* de carácter juvenil, estudiantil y ciudadana que exigía poner fin a la *educación de mercado* vigente desde hace 30 años en el país.

Dadas las características políticas y la composición social de la revuelta además de las formas político-culturales que adquirió y desarrolló la movilización, esta se constituyó, tal vez, en la primera rebelión social y política que experimentó la sociedad neoliberal chilena en su fase de consolidación. En los últimos 21 años, tan solo la denominada “rebelión pingüina” de mayo de 2006 se le asemeja. Sin embargo, la movilización social del año 2011 fue mucho más recia, intensa, masiva, radical y prolongada que su predecesora. Se diferencia de ella, justamente, por la profundidad social, su sentido crítico y hondo anhelo de transformación social y política. Aunque comparten el mismo punto de arranque: el mal funcionamiento del mercado educativo nacional y, sobre todo, el hecho de que sus principales protagonistas o actores sean las y los estudiantes secundarios y universitarios, o sea, los clientes-usuarios del sistema, su más importante diferencia radica en el carácter de la demanda social y política planteada por las y los jóvenes, las y los estudiantes y las y los ciudadanos movilizados (la sociedad civil, en estado de rebeldía), la cual consistió en exigir no solo al Estado sino también a la sociedad toda *una educación pública gratuita para todas y todos las y los ciudadanos a cargo de la sociedad a través del Estado*.

Sin lugar a duda, que esta demanda social constituía una poderosa y radical demanda política al interior de una sociedad centrada en el mercado, puesto que en su máxima realización suponía, la desaparición del mercado educativo nacional. Ya no se trataba de terminar con la Ley Orgánica Constitucional de

Educación o de mejorar la calidad de la educación, como fue planteado por la protesta de las y los estudiantes secundarios en el año 2006, sino que ahora se buscaba transformar estructural e integralmente el sistema (mercado) educativo y, al mismo tiempo, a nivel general, profundizar de manera substancial el régimen político vigente, la democracia protegida, reinstalando la política en la sociedad. Aquí es donde se encuentra el punto de quiebre o la distancia política entre ambas movilizaciones sociales: consideramos que la movilización estudiantil secundaria del año 2006 fue una gran protesta social y política y la del año 2011 una rebelión social y política.<sup>100</sup>

Obviamente, y dado que, al momento de escribir este trabajo, el movimiento está en desarrollo y no conocemos cuál será su resultado final, debemos advertir que para lograr consolidar política e históricamente la condición de “rebelión social y política” el movimiento requiere, a lo menos, lograr alguno de sus objetivos centrales: cambiar radicalmente el sistema educativo neoliberal. Si esto se lograra, la rebelión podría provocar una gran grieta al interior de la principal estructura de reproducción de la dominación y, sobre todo, de la hegemonía de la sociedad neoliberal. En términos de S. Tarrow, la rebelión juvenil, estudiantil y ciudadana, como expresión de un contra poder social y político activo y triunfante, daría lugar a una determinada “estructura política de oportunidades”, que debiera ser aprovechada por los mismos y/u otros actores sociales y políticos para impulsar la transformación integral de la sociedad neoliberal. En este caso, por cierto, no estaríamos en presencia de una protesta social, ni de una rebelión social y política sino de un momento revolucionario. Todo esto, por cierto, va a depender del resultado final del proceso político en curso.

---

<sup>100</sup> La protesta social, la entendemos como un conjunto de acciones colectivas e intencionales impulsadas por actores u organizaciones o sujetos sociales, en el caso que analizamos, los estudiantes, dirigidas a obtener algún tipo de solución específica ya sea del Estado o de entidades privadas (insertas en el mercado o en la sociedad civil). Se diferencia de los movimientos sociales en que estos últimos perduran en el tiempo y no se explican exclusivamente por reivindicaciones específicas de carácter episódico o coyuntural sino por cuestiones de larga duración e identitarias. Como veremos, más adelante, la protesta o la lucha social también se diferencia de una rebelión social y política, fundamentalmente, porque la primera involucra, por lo regular, la presencia de un actor social, mientras que la segunda, se presenta en la historia como consecuencia de una específica estructura de conflicto e implica la convergencia de otros actores u organizaciones o movimientos o sujetos sociales y políticos que no buscan solucionar un aspecto o problema particular sino la reorganización integral del orden político, social y económico imperante en una sociedad dada.

Al momento de analizar la “protesta social” de las y los estudiantes secundarios de 2006, sostuve que esa masiva movilización no se inscribía en las luchas sociales y políticas estudiantiles contra la dictadura de los años ochenta, ni era parte de las movilizaciones que gatillan la memoria histórica popular en los últimos treinta y tantos años, sino que era la expresión de la nueva conflictividad política y social que atraviesa transversalmente a las sociedades neoliberales, entre la sociedad, mercado y el Estado.<sup>101</sup> Y, por esta condición, esta movilización no constituía ni un movimiento social ni una “rebelión”, menos, por cierto, una revolución, como exageradamente tanto los medios de comunicación como las ciencias sociales, la calificaron. Más bien se trató de una significativa y trascendente protesta social en disconformidad con el sistema educativo imperante.<sup>102</sup>

No obstante, también señalé que la “protesta” de los estudiantes secundarios abrió un gran boquete (una primera grieta) social, político y cultural al interior de la sociedad neoliberal y constituía un “reventón” histórico y político<sup>103</sup>, el primero del siglo XXI. Con ella, en cierta forma se había quebrado la “pax neoliberal”.

También sostuve que al interior del movimiento secundario era posible observar gruesamente dos tendencias políticas fuertes en relación con el reclamo por una mayor participación del Estado en el proceso educativo. Por un lado, estaban los estatistas, o sea, aquellos que sostenían que todo debía volver al Estado y que el mercado tenía que desaparecer o reducirse a su mínima expresión. Y, otro sector, constituido por los que aceptaban la vigencia de

---

<sup>101</sup> Cfr. Juan Carlos Gómez Leyton. La rebelión de las y los estudiantes secundarios. La protesta social y política en una sociedad neoliberal triunfante, en Revista OSAL, Observatorio Social Latinoamericano, N° 20, CLACSO, Buenos Aires y también en Ídem, *Política, Democracia y Ciudadanía en una Sociedad neoliberal (Chile; 1990-2010)*, Editorial ARCIS/CLACSO, Santiago de Chile, pp. 379-291.

<sup>102</sup> Esta cuestión ha sido analizada en la investigación realizada por los sociólogos Dafne Aroca y Rodrigo Moreno. *La Acción Colectiva de los Estudiantes Secundarios de 2006: ¿Movimiento Social o Protesta Política?*, Tesis de para optar al Título de Sociólogo, junio 2011, Escuela de Sociología, Universidad ARCIS.

<sup>103</sup> Utilizo el concepto de “reventón histórico” en el sentido señalado y construido por el historiador Gabriel Salazar, en sus diversos trabajos sobre las acciones colectivas de los sectores populares a lo largo y ancho de la historia de Chile. Ver entre otros textos: *Violencia Política Popular en la Grandes Alamedas, Santiago de Chile, 1947-1987*. Ediciones SUR, Santiago de Chile, 1990; y también, *La Historia desde abajo y desde adentro*, Colección Teoría, Facultad de Artes, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 2003.



la estructura educativa neoliberal, pero que demandaban al Estado una mayor regulación, control y fiscalización de la acción educativa, así como una mayor fiscalización de los recursos financieros que se entregan, vía subvención, a los sostenedores de colegios particulares subvencionados como a los municipios; a estos los denominamos, los “estadistas regulacionistas”<sup>104</sup>

Todos estos elementos y dimensiones políticas vuelven a presentarse, cinco años más tarde, pero de manera radicalizada en la movilización juvenil, estudiantil y ciudadana de 2011. Las problemáticas que hicieron estallar la protesta del 2006 son sustantivamente las mismas del 2011 pero, como mostraremos más adelante, agravadas por dos factores, a saber: por un lado, el fracaso de la solución política ofrecida e implementada por la Concertación a la demanda de reforma educacional de la protesta secundaria de 2006 y, por otro, a las nuevas condiciones financieras establecidas por el Estado para ingresar al mercado de la educación superior, la financiarización del sistema educativo. Ambos factores resultan centrales a la hora de explicar la movilización juvenil, estudiantil y ciudadana del 2011.

La gran protesta social y política secundaria del 2006, si bien logró conseguir que el poder constituido (gobierno de Michelle Bachelet con el apoyo de parlamentarios oficialistas, Concertación, y de oposición, la derecha, unidos) modificara la Ley Orgánica Constitucional de Educación, promulgándose en su lugar la Ley General de Educación, LGE, (Ley 20.370 de 2009) y establecer una mínima e insuficiente institucionalidad destinada a realizar controles y fiscalizaciones de la calidad de la educación, el sistema educativo en todos sus niveles siguió bajo el control del capital. Es decir, mantuvo y, en cierta forma profundizó, su carácter neoliberal.

En verdad, la promulgación de la LGE fue el triunfo político e ideológico de los sectores liberales “regulacionistas”, ligados a los “*thinks tanks*” de la derecha y de la centroderecha neoliberal (concertacionista). Es cierto que se establecieron nuevas reglas y normas, se creó una nueva institucionalización, pero todo se hizo sin tocar ni alterar las bases estructurales del sistema. De manera que podríamos sostener políticamente, que los sectores más radicales del movimiento secundario fueron derrotados.

---

<sup>104</sup> Gómez Leyton, Juan Carlos (2007) La rebelión de las y los estudiantes secundarios. La protesta social y política en una sociedad neoliberal, en OSAL N° 20, CLACSO, Buenos Aires.

En consecuencia, la promulgación de la nueva institucionalidad educacional, LGE, no evitó que las problemáticas del sistema educativo neoliberal denunciadas por los estudiantes secundarios, principalmente, y universitarios en el año 2006, continuarán manifestándose e incluso profundizándose en los años siguientes. Esto debido a que la problemática más crítica y central del sistema educativo neoliberal, referida a las formas de financiamiento y a la participación de la iniciativa privada capitalista no fueron discutidas, analizadas ni abordadas, por el poder constituido.

Todo lo contrario, en los siguientes cinco años, el sistema acumuló nuevos problemas derivados de la masiva incorporación de jóvenes a la educación superior no como consecuencia de las reformas institucionales antes señaladas, sino, paradójicamente, por las políticas de financiamiento introducidas por el gobierno de Ricardo Lagos y su Ministro de Educación, Sergio Bitar, en el año 2005. Acentuando con estas medidas, la tendencia a la “financiarización” del mercado educativo nacional.

Gracias a ese proceso, el capitalismo académico continuó expandiéndose en el curso del gobierno de Michelle Bachelet, 2006-2010, transformándose en una de las “industrias” más rentables del capitalismo neoliberal chileno. El permanente aumento de la rentabilidad y de las utilidades logradas por las empresas universitarias, tanto privadas como públicas, como también de los Centros de Formación Técnica Superior e Institutos Profesionales, fue posible, por el creciente interés (demanda) de las y los jóvenes por obtener y lograr alguna de las distintas profesiones que esas instituciones ofrecen. Así, año tras año miles de jóvenes están dispuestos a “comprar” (al precio -arancel- que fuera), en el supermercado educativo nacional una profesión que les permitiera en el corto plazo ingresar al competitivo mundo laboral, obtener un empleo rentable, para de esa forma poder disfrutar de las “bondades” que les ofrece la modernidad neoliberal.

Por tanto, comprar u obtener un “título profesional” se volvió altamente factible desde la promulgación de la Ley 20.027, del 1 de junio de 2005, que estableció el **“Crédito con aval del Estado”, CAE**, un ingenioso mecanismo financiero bancario ideado en el gobierno de Ricardo Lagos, destinado a ayudar a las y los jóvenes a **“pagar”,** o sea, **a comprar**, el ansiado título

profesional en el mercado educativo nacional. Esta forma crediticia fue accesible a miles de jóvenes de grupos socioeconómicos que no podían “costear” (pagar) los altos aranceles de alguna carrera profesional ofrecida en el mercado educacional ya sea público o privado. La adquisición del crédito desde el año 2006 en adelante hizo crecer la población estudiantil significativamente. Nuevos sujetos ingresaron al sistema y la mayoría de ellos portaban bajo el brazo, no un libro, sino un pagaré que los hacía deudores del sistema bancario nacional.<sup>105</sup>

El negocio educativo se volvió mucho más rentable de lo que había sido hasta el momento con la intervención de la banca respaldada por el Estado. El consecuente proceso de financiarización vía crédito de los estudios, o sea, del endeudamiento futuro a tasas de interés insosteniblemente altas no fue un impedimento para que miles y miles de estudiantes tomarán esa vía para lograr el título profesional.

Podríamos sostener, entonces, que todos los actores sociales y económicos como también políticos involucrados en el proceso “ganaron”. Lo sostenemos en el sentido de que todos ellos obtuvieron algún tipo de beneficio por participar en el sistema. Los jóvenes que ingresaban y se mantenían en él, al final de algunos años, obtenían un título profesional; las universidades con o sin fines de lucro aseguraban substanciales recursos humanos y financieros para mantenerse competitivas en el relativo exigente mercado educativo y, al mismo tiempo, lograban incrementar sus patrimonios corporativos; el sistema bancario nacional (que, en última instancia, financia a través de los créditos a las y los estudiantes) recupera sus inversiones y obtiene óptimos y seguros dividendos; los “dueños” directos o indirectos de las universidades privadas obtienen suculentas rentabilidades anuales; el Estado acentúa su carácter subsidiario, al imponer sus políticas ministeriales relativas a la cobertura y, un largo etcétera. Sin embargo, al cabo de cuatro a seis años, hay un perdedor: el joven profesional.

---

<sup>105</sup> La tasa de crecimiento de la población estudiantil que ingresaba al sistema de educación superior entre los años 2000 al 2005 era bastante moderada, en promedio, alcanzaba al 5.18% anual. Sin embargo, entre el 2006 y el 2009, esta saltó al doble, o sea, a un 10.45%. Durante la primera década del siglo XXI, la población estudiantil pasó de 435.884 en el año 2000 a 835.247 en el 2009.

Éste luego de obtener -“comprado”- el título profesional, se encuentra endeudado con el sistema financiero privado nacional y con serios problemas para lograr en el corto plazo un empleo rentable que le permita incorporarse “exitosamente” como profesional al mercado laboral flexible de la sociedad neoliberal.

El Crédito con Aval del Estado, CAE, solidario u otro sistema financiero, le habían permitido entrar a un lúdico, poco exigente y más bien “light” mercado educativo, pero éste no aseguraba su ingreso al mercado laboral. Por lo tanto, miles de jóvenes profesionales comenzaron a ver limitado no sólo el ingreso al mercado laboral sino a cualquier otro mercado.<sup>106</sup> Por estar endeudados prematuramente perdían la condición de ser ciudadanos credicard o ciudadanos clientes-usuarios y veían postergada su aspiración de constituirse en ciudadanos patrimoniales. Pues dada su condición de deudores de la banca y estar “presos” en el DICOM,<sup>107</sup> no eran sujetos de créditos bancarios o de cualquier otro.

De manera semejante a la crisis financiera internacional, el sistema educativo nacional entró en crisis producto de su propia expansión y, sobre todo, de la masividad del crédito. Paradojalmente, esta crisis no es del sistema educativo en sí, sino, fundamentalmente, por la forma como él se financia. Se trata de una crisis financiera de parte de los usuarios del sistema, esto es, de la incapacidad de pago presente y futuro de las deudas contraídas por parte de las y los jóvenes estudiantes o profesionales.

Son ellos los que levantaron su voz y manifestaron a gritos, con bailes, con multitudinarias marchas, tomas, piedras, barricadas, al sistema político, en particular y, a la sociedad, en general, su imposibilidad de mantener el ritmo de endeudamiento crediticio-bancario tanto presente como futuro que supone participar en el sistema educativo. El reclamo se sintetiza en algunas frases, de no más de tres palabras: “No podemos pagar” o “No podemos endeudarnos” o simplemente, “No queremos pagar por estudiar”.

---

<sup>106</sup> La sociedad neoliberal la imaginamos como un conjunto de distintos mercados interrelacionados por los cuales los sujetos transitan cotidiana y vitalmente. La trayectoria vital de los sujetos es un ir y venir entre los diversos mercados adquiriendo, como ciudadano cliente-usuario, el patrimonio necesario para convertirse en “ciudadano patrimonial”

<sup>107</sup> Las y los jóvenes estudiantes movilizados han declarado, en entrevistas realizadas por los medios de comunicación de masas, audiovisuales o escritos, que ellos por el hecho de estar endeudados, con deudas desde los 6.000 hasta los 60.000 dólares, no podrán “comprarse” en el futuro cercano una “casa”, un “auto”, etcétera.

Las y los ciudadanos clientes-usuarios jóvenes del mercado educativo se han rebelado en contra del proceso de financiarización del sistema. Como veremos más adelante ello explica la radical demanda por una educación gratuita y a cargo de la sociedad por medio del Estado y sin la participación del capital.

La causa más inmediata del actual levantamiento estudiantil universitario se relaciona con la eventual venta de la Universidad Central al conglomerado financiero Norte-SUR. La contundente resistencia y movilización de los académicos y estudiantes, es decir, de los trabajadores y de los usuarios, en oposición a la venta creó, en el mes de abril de 2011, las condiciones políticas para que estallara el masivo descontento juvenil, estudiantil y ciudadano.

Esta nueva protesta estudiantil en contra del sistema ha reunido y convocado a un heterogéneo y abigarrado conglomerado de sectores y actores sociales y políticos, provenientes de los sectores juveniles, estudiantiles y ciudadanos de la sociedad neoliberal. A los "clientes usuarios" del sistema universitario, ya sea de las universidades "públicas" o "privadas" (los primeros organizados en la Confederación Nacional de Estudiantes de Chile, CONFECh, y los segundos en diversas organizaciones) se les unieron los emblemáticos rectores del Consejo de Rectores de las universidades chilenas, **CRUCH**; algunos rectores de universidades privadas, especialmente de aquellas que se autodefinen de orientación social o sin fines de lucro; y los trabajadores universitarios académicos y funcionarios. Un segundo grupo estudiantil lo conforman los "clientes-usuarios" del sistema educativo nacional a nivel secundario, organizados en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, **ACES** y en la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, CONES. Y, por último, un tercer grupo de "clientes-usuarios" lo conforman los estudiantes de los centros de formación técnica y de los institutos profesionales.

A los jóvenes estudiantes se les suman, con distintos niveles de adhesión social y política, un nutrido y amplio sector ciudadano joven-adulto, destacándose, en primer lugar, el gremio de los profesores organizados en el Colegio de Profesores de Chile, la Asociación de Empleados Fiscales, ANEF; la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, entre otros. Al interior de este

conglomerado ciudadano joven-adulto encontramos a diversos grupos sociales provenientes de los sectores socioeconómicos medios y populares. Los cuales, a través de numerosas organizaciones sociales y políticas de las más variadas posiciones y perspectivas ideológicas, doctrinarias y políticas, no sólo apoyan las demandas de los estudiantes, sino que también añaden otras demandas políticas.

Es que la revuelta estudiantil ofreció a amplios sectores ciudadanos descontentos u opositores ya sea al gobierno de Sebastián Piñera como al sistema capitalista neoliberal, una nueva estructura de oportunidades políticas para hacer sentir su malestar. La convergencia de múltiples actores sociales transformó a la masiva revuelta estudiantil, con el correr de los días, semanas y meses, en una poderosa y radical rebelión social y política que ha abierto una profunda grieta al capitalismo neoliberal. La grieta es de tal magnitud que podría hacer “explosionar” totalmente la estructura política, social y económica dominante en la sociedad neoliberal.

### **Rebelión social y política y estructura de conflicto**

Las rebeliones sociales -de acuerdo con la definición del filósofo social boliviano Luis Tapia- son coyunturas o tiempos de aceleración y condensación del tiempo político; en este sentido, de incertidumbre y cambio social y político, y de irrupción en la historia. Se trata de momentos de fluidez de lo *social a lo político, de lo político cambiando la forma de lo social*. Las acciones colectivas de las y los sujetos operan sobre determinados soportes históricos: las estructuras de rebelión.<sup>108</sup>

Las estructuras de rebelión son articulaciones e interrelaciones entre diferentes elementos sociopolíticos e históricos que las conforman, tales como: las formas de organización; el tener y/o contar con una historia común más o menos compartida entre los sujetos en tanto experiencia de hechos y sentidos; una o varias memorias; un determinado, desigual e intermitente proceso de acumulación histórica de poder social; la construcción y deconstrucción de proyectos políticos; y la constitución de identidades y sujetos políticos. Todo lo anterior en relación con un horizonte de rupturas y quiebres sociales, políticos e institucionales que agrietan estructuralmente

---

<sup>108</sup> Tapia, Luis. (2007). “Bolivia: ciclos y estructuras de rebelión” en Svampa, Maristella y Pablo Stefanoni (Compiladores). *Bolivia, Memoria, Insurgencia y Movimientos Sociales*. Editorial El Colectivo, CLACSO Libros, Buenos Aires.

las formas políticas, sociales y económicas de la dominación y de la hegemonía cultural capitalista dominante.

Las estructuras de rebelión modifican y alteran de manera sustantiva y específica las bases materiales de la estructura de conflicto existente en una sociedad dada. Frecuentemente, las rebeliones sociales y políticas tienen la cualidad de inaugurar un nuevo orden político como, también, una nueva estructura de conflicto. Cuando estas logran quebrar, alterar o modificar y transformar integral y radicalmente las bases estructurales de una formación socioeconómica, la rebelión se ha constituido en una revolución social. En la historia latinoamericana tenemos muchas rebeliones, pero escasas revoluciones.<sup>109</sup>

La movilización social juvenil, estudiantil y ciudadana de 2011, a pesar de su radicalidad y su extensión temporal, así como de su masividad y legitimidad política, constituye una rebelión social y política en desarrollo. Y, como tal, responde a la estructura de conflicto que se estableció en la sociedad chilena como consecuencia de la reestructuración capitalista neoliberal impulsada y sostenida primero por la dictadura militar (1975-1990) y consolidada en los últimos 20 años por los gobiernos concertacionistas (1990-2010).

En efecto, como hemos venido sosteniendo en diversos trabajos dedicados a analizar la sociedad neoliberal chilena<sup>110</sup>, la estructura del conflicto predominante durante los últimos 21 años confronta a actores y sujetos colectivos que se desenvuelven, interrelacionan y conviven social, política, económica y culturalmente, ya sea en el *Estado*, en el *Mercado* y/o en la *Sociedad Civil*.

Al interior de cada una de estas dimensiones o sectores o estructuras de la formación social neoliberal es en donde se organizan las relaciones de explotación y de desigualdad, por un lado, y las relaciones de dominación y opresión, por otro, de manera complementaria.

---

<sup>109</sup> Sobre la forma como conceptualizo teórica e históricamente a la revolución invito a las y los lectores a consultar mi trabajo: Gómez Leyton, Juan Carlos (2010), "La revolución en la historia. Reflexiones sobre el cambio político en América Latina", en Rajland, Beatriz y María Celia Cotarelo (coordinadoras). *La Revolución en el Bicentenario. Reflexiones sobre la emancipación, clases y grupos subalternos*. CLACSO Libros, Colección Grupos de Trabajo, Buenos Aires, pp. 39-57. También en este mismo volumen.

<sup>110</sup> Cfr. Gómez Leyton, Juan Carlos (2010). *Política, Democracia y Ciudadanía en una sociedad neoliberal: Chile 1990-2010*. Editorial UARCIS-CLACSO, Santiago de Chile.

En las sociedades neoliberales, el sector hegemónico y dominante, o sea, quien organiza la articulación de toda la sociedad y, por ende, de la triada antes señalada, son aquellas clases, grupos o sectores sociales que se desenvuelven en el mercado. En este sentido, son sociedades mercado-céntricas. Esta es su característica central, medular, neurálgica y estratégica.

Son sociedades que se estructuran con base en la cristalización de las relaciones socioeconómicas capitalistas no sólo en el ámbito de la producción sino, esencialmente, en el ámbito del mercado autorregulado. Ello implica poner al mercado como el principal gestor y vehículo del proceso de acumulación, de crecimiento y desarrollo del capitalismo.

El mercado como dinamizador de la asignación de recursos va a reemplazar al Estado, en su anterior rol de proveedor de prestaciones sociales y de bienes públicos, considerados, como derechos ciudadanos. El Estado neoliberal reduce su participación e intervención directa en la salud, educación, jubilaciones y pensiones, seguros de cesantía, vivienda, etcétera. De esa forma la acción pública estatal deja de intervenir en la redistribución secundaria del ingreso, provocando una seria reducción de los salarios indirectos de los trabajadores. Las políticas sociales universales son sustituidas por las políticas focalizadas o dirigidas hacia los grupos más vulnerables de la sociedad. Trasladando, de esa forma, la responsabilidad de proveer dichos servicios sociales a la iniciativa capitalista privada y a las y los ciudadanos de adquirirlos, por medio de sus ingresos, en el mercado.

El Estado asume la tarea política de generar la institucionalidad adecuada y requerida para que el libre mercado pueda funcionar de manera regular y sin distorsiones. Así los agentes de mercado (proveedores y consumidores) podrán realizar de manera "óptima" las diversas transacciones que implica adquirir un determinado servicio o bien en el espacio mercantil, por ejemplo, educación o salud o cualquier otro que fuese necesario para la existencia humana o social.

Por esa razón, el Estado debe retirarse de toda actividad productiva de interés o de beneficio público. Los bienes públicos y sociales, la electricidad, los sanitarios, el transporte público (ferrocarriles, líneas áreas, buses), comunicaciones, etcétera, son privatizados, mercantilizados. Todos ellos se convierten en



mercancías que se transan en el mercado correspondiente. Cada producto posee su “nicho” de mercado: el mercado del agua potable, de la telefonía, del transporte, mercado comunicacional, en fin, todo es convertido en mercancía transable en el mercado. Parafraseando a Carlos Marx, la sociedad neoliberal se convierte en “un inmenso arsenal de mercancías y de servicios.”<sup>111</sup>

Esa condición produce la mutación del espacio público y ciudadano del viejo orden político y social benefactor a un nuevo espacio público y ciudadano de carácter híbrido. En el cual las fronteras entre lo privado (mercado) y lo público (político) se vuelven difusas. En él predominan las relaciones sociales y políticas mercantiles. Lo que implica el desarrollo de una nueva forma de hacer y constituir la ciudadanía.<sup>112</sup>

Esta transformación es sustantiva, pues hace que la política, es decir, la “cosa pública”, discutida y debatida en la “plaza pública”<sup>113</sup>, en función de los problemas de los “públicos”, esto es, de los ciudadanos, pierda todo sentido para ellos. La nueva ciudadanía no requiere, necesariamente, de los partidos políticos o de sus representantes públicos para obtener o demandar los bienes o servicios destinados a satisfacer sus necesidades vitales,

---

<sup>111</sup> Sostiene Carlos Marx, “la riqueza de las sociedades en que impera el régimen capitalista de producción se nos aparece como “un inmenso arsenal de mercancías” y la mercancía como su forma elemental.” Carlos Marx. *El Capital*. Tomo I. Fondo de Cultura Económica, México, 1946/Tercera Edición 1964, pp. 3.

<sup>112</sup> Sobre este aspecto cfr. Gómez Leyton, J. C. (2010). *Política...* Ob. Cit.

<sup>113</sup> Entiendo el concepto de “plaza pública” como el lugar de “encuentro” de las y los ciudadanos, de las organizaciones sociales, movimientos sociales y políticos, partidos políticos, dirigencias, representantes, líderes, caudillos, ya sea de manera activa o pasiva, como un lugar donde se confrontan, disputan y deliberan las cuestiones públicas, o sea, el lugar donde se hace la política estatal, donde se construyen las políticas sociales y públicas. Es también el espacio donde se manifiestan las contradicciones políticas y al mismo tiempo se sintetizan los diversos proyectos sociales, políticos e históricos que los diversos actores sociales con poder plantean. Por esa razón, es allí donde se construye, conflictivamente, el proyecto histórico-político nacional. Como toda “plaza pública”, ésta no es un espacio abierto, posee contornos relativamente precisos, que marcan el estar dentro y el estar afuera. Condición que lo hace un espacio contradictorio: abierto y cerrado, al mismo tiempo. Separa lo público y lo privado. Lo que no está adentro es lo privado. Lo público es colectivo, pertenece a todos, mientras que lo “privado” remite a la propiedad individual. Por eso, el espacio público democrático es un espacio delimitado por la propiedad privada. Lo público no puede invadir o inundar o extenderse o colonizar a lo privado. Sin embargo, en el capitalismo neoliberal, lo privado invade, inunda o se extiende y coloniza a la plaza pública, la privatiza. Todo aquello que era público se privatiza, por consiguiente, la democracia se jibariza, es reducida a un pequeño espacio destinado a administrar lo existente, es decir, el nuevo espacio público/privado esto es: el mercado.

políticas, sociales o culturales, si no de agentes de mercados que las provean de manera eficiente y en cantidades adecuadas. Para tal efecto, la ciudadanía requiere, fundamentalmente, dinero, o sea, de ingresos continuos y permanentes en el tiempo, por ende, de trabajo remunerado/asalariado. Tanto el dinero, los ingresos como el trabajo deben ser proporcionados por el mercado, sin la intervención directa o indirecta de la política. De esa forma la mercantilización de la vida social va aparejada con la des-ciudadanización de la política, la expulsión de los ciudadanos de la plaza pública democrática constituye la expulsión de la política.

La despolitización ciudadana, así como la expulsión de la política es realizada en función y en busca del óptimo funcionamiento del libre mercado. Expulsar la política del espacio público implicó retirar al Estado, o, mejor dicho, a la forma estatal social benefactor/keynesiano, predominante durante el siglo XX, de la economía y de la sociedad civil.

El retiro de las funciones sociales y económicas del Estado constituye otro proceso de jibarización de lo "público". De acuerdo al planteo dominante desde la segunda mitad de los años setenta y durante todos los ochentas, el Estado intervencionista debía ser reemplazado por una forma estatal, el "Estado mínimo", que deberá abandonar la realización de "*políticas sociales*", especialmente, aquellas destinadas a dotar de recursos materiales y simbólicos no solo a los más carenciados y desprotegidos del sistema capitalista, sino a todos los ciudadanos.<sup>114</sup> Se impone, así, el fin de la intervención del Estado en la sociedad civil. Este es un punto central en la constitución de la estructura de conflicto en las sociedades neoliberales.

---

<sup>114</sup> La posición "antiestatista" de los sectores neoliberales es ampliamente conocida; sin embargo, considero que habría que precisar que no se trata de una posición política que tenga como horizonte de posibilidad la existencia de una sociedad sin Estado, todo lo contrario. Para ellos la presencia del Estado como aparato de seguridad, de control, de supervisión, es fundamental. No abogan por la desaparición del Estado sino, los neoliberales, especialmente, F. Von Hayek y M. Friedman, son contrarios al Estado benefactor/Keynesiano. Ellos postulan un Estado liberal con funciones políticas subsidiarias, nada más, este punto es sintetizado por Nozick con su postulado de la existencia de un Estado Mínimo. El cual no debiera tener otras funciones que "las de proveer mecanismos que permitan modificar y perfeccionar reglas generales preexistentes de la convivencia social, actuar de árbitro para resolver disputas entre las personas con relación a la interpretación de tales reglas e imponer su cumplimiento a aquellos individuos que, de otro modo, no participarían en el juego. Los gobiernos son necesarios porque la libertad absoluta es imposible en un mundo de hombres imperfectos" Cfr. Friedman, Milton. *Capitalism and Freedom*. University of Chicago Press, 1962, pág. 25.

Dado que, en las sociedades capitalistas, desde el siglo XVII hasta la actualidad, prevalece la tendencia de que el salario que perciben las y los trabajadores pague por todos aquellos bienes y servicios que transformados en mercancías se ofrecen en el mercado, los salarios e ingresos percibidos por los ciudadanos se constituyen en el factor económico fundamental para participar en el libre mercado. Los ciudadanos que no poseen ningún tipo de ingreso o salario están excluidos del mercado. Los que poseen bajos salarios o escasos ingresos ven restringida su participación a determinados nichos de mercado. Mientras los que cuentan con medianos salarios e ingresos tendrán la posibilidad de participar activamente en el mercado, aunque con algunas restricciones. Mientras que los ciudadanos que disponen de altos salarios e ingresos no tendrán problemas para participar plenamente en el mercado.

También las sociedades capitalistas hasta el día de hoy, independientemente si son “industriales de consumo” o de “consumo mercantiles”, son sociedades de trabajadores asalariados.<sup>115</sup> Es decir, el salario, se obtiene trabajando.

---

<sup>115</sup> La sociedad capitalista de consumo, forma que adquiere la sociedad capitalista, a lo largo el siglo XX, surge cuando la abundante producción de mercancías comienza a ser adquirida (compradas) por sus productores directos, los trabajadores industriales, esto gracias tanto al poder social acumulado por los trabajadores sindicalizados para exigir y demandar al capital mejores salarios como también por las políticas keynesianas de pleno empleo y el fordismo norteamericano. Los trabajadores asalariados industriales (sector primario y secundario) como los trabajadores (sector servicios y transporte) en general se transforman en los principales “clientes” de las activas industrias modernas de electrodomésticos, automotriz, alimentos, vivienda, vestuario, entretención, etcétera. Las principales sociedades de consumo son la estadounidense y las europeas, con la diferencia de que en estas últimas no sólo aseguran la participación de los trabajadores en el mercado de bienes y mercancías a través de políticas de empleo y salariales, sino también les proporcionan un conjunto de prestaciones sociales en función del reconocimiento de sus derechos sociales y económicos, tales como el derecho a la salud, a la educación, de previsión, etcétera. Estas prestaciones sociales universales permiten a los ciudadanos y no sólo a los trabajadores, en las sociedades europeas, contar con ciertos servicios no mercantilizados, es decir, los obtienen sin tener que pagar por ellos, o sea, no los compran en el mercado. Entre los principales servicios no mercantilizados de estas sociedades industriales de consumo, se encuentra la salud y la educación. Con la revolución conservadora de orientación neoliberal en los años ochenta del pasado siglo, especialmente en las sociedades capitalistas periféricas, emergió otro tipo de sociedad de consumo, pero sin base industrial, como la anterior. Se trata de sociedades de consumo mercantiles que no producen internamente las mercancías que abastecen el mercado, sino que se importan. Principalmente de los países industriales asiáticos. Se trata de sociedades de consumo dependientes del mercado externo, en donde el gran capital nacional ha optado por la desindustrialización, y favorecer a la actividad extractivista, (explotación capitalista de los recursos naturales) de servicios,

En la mayoría de las sociedades capitalistas centrales o periféricas el capital renunciaba a producir una determinada mercancía u ofrecer un servicio cuando le era desventajoso o cuando los trabajadores no disponían de salarios o éstos eran muy bajos para adquirirlos. Entonces dicha tarea era delegada o asumida por el Estado.

Por esa razón, el Estado social benefactor apoyado por las políticas keynesianas antirecesivas asumió, durante el siglo pasado, la responsabilidad política y económica de proporcionar a las y los trabajadores, en particular, y a las y los ciudadanos, en general, aquellos bienes y servicios que el capital no tenía interés de producir o bien los trabajadores asalariados no podían comprar debido a sus bajos salarios.

El capital, luego de la Gran Crisis, de la Revolución rusa de 1917 y del creciente poder de los trabajadores organizados post Primera Guerra Mundial, comprendió, a través de los planteamientos teóricos y prácticos del economista Keynes y del empresario automotriz Henry Ford, que para mantener la “paz” social al interior del capitalismo debía, necesariamente, “pactar” con los trabajadores. Políticamente, esto significó dos cosas: en primer lugar, el reconocimiento de parte del capital, del poder social, político e histórico de los trabajadores asalariados no sólo en el ámbito productivo sino también al interior del régimen político democrático, lo que implicaba aceptar inclusive que pudieran llegar a gobernar a la sociedad capitalista. Y, en segundo lugar, que el Estado debía hacerse cargo del cuidado y protección general de la reproducción social de la fuerza de trabajo. Éste a través del desarrollo de políticas públicas y sociales debió atender todas aquellas necesidades que ni la producción capitalista privada ni el mercado, atendía.

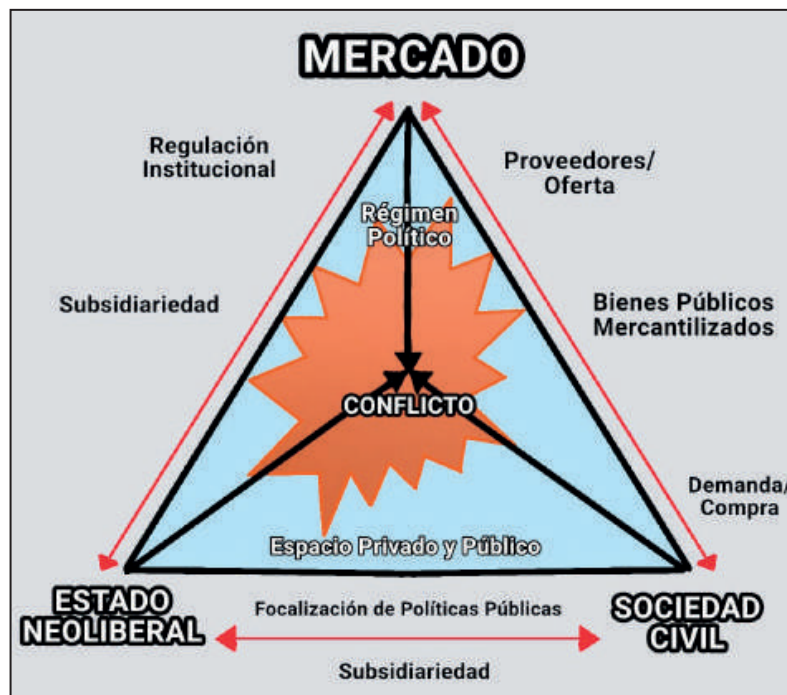
Producir “viviendas populares”, por ejemplo, no era un negocio rentable para las constructoras privadas durante el periodo capitalista nacional-desarrollista, debido, fundamentalmente,

---

especialmente, transportes, comunicaciones y financieros, el desarrollo de empresas de distribución ampliada de mercancías (grandes cadenas de supermercados, tipo Walmart, por ejemplo), pero también con fuertes inversiones en los servicios de salud, capitalismo de salubridad, de educación, capitalismo académico, y de previsión social. Al abandonar el desarrollo capitalista industrial, las sociedades capitalistas neoliberales, especialmente latinoamericanas, se transforman en sociedades de consumo mercantiles fuertemente integradas al proceso de globalización. En ellas se produce escasamente. Las mercancías como las tecnologías son importadas.

a que los ciudadanos no disponían de ingresos suficientes para adquirirlas, estos debían demandar la realización y puesta en marcha por parte del Estado de políticas de viviendas destinadas a proveer de ese bien a los ciudadanos “sin casas”.

Ante la ausencia o la insuficiencia de ellas, las y los “sin casa” ocupaban sitios urbanos, privados o públicos, para construir sus viviendas y de esa forma habitar la ciudad.<sup>116</sup> La lucha por la vivienda social impulsó el desarrollo de un poderoso y significativo movimiento social poblacional. El cual no sólo demandaba viviendas o un sitio donde vivir, sino una nueva forma social, económica y política. A lo largo de dos décadas, el movimiento de los “sin casa” demandó, por medio de acciones directas e institucionales, el derecho a una vivienda.



<sup>116</sup> En mi trabajo sobre el origen y desarrollo de las “Poblaciones Callampas”, he sostenido que uno de los factores que explican su surgimiento se encuentra en la nula o escasa producción (construcción) de viviendas para los sectores populares por parte de las empresas constructoras de aquellos años. No existía, en otras palabras, un mercado inmobiliario, o sea, construcción de casas para los sectores populares y pobres urbanos nacionales. La razón: la incapacidad de éstos para costear el valor de ellas. Cfr. Gómez Leyton, Juan Carlos. Las Poblaciones Callampas. Doc. De Trabajo, FLACSO-Chile, 1994. Ver también en una interpretación distinta a Garcés, Mario. *Tomando Sitio*. Ediciones LOM, Santiago de Chile,

Esta estructura de conflicto posee ciertas características que la distinguen de otras estructuras que se han manifestado en las sociedades capitalistas latinoamericanas, por ejemplo, en las pasadas sociedades oligárquicas exportadoras o industriales sustitutivas durante el siglo XIX y XX, respectivamente.<sup>117</sup> Uno de los rasgos distintivos de esas dos estructuras en relación con la actual era su condición de sociedades desmercantilizadas.

Lo distintivo de toda estructura de conflicto son sus protagonistas, o sea, los sectores, grupos y clases sociales que participan en él. Lo predominante en la actual estructura del conflicto es el carácter transversal de la conflictividad misma, es decir, recorre toda la estructura de clases. En ese sentido, involucra y envuelve a todos, a los actores con y sin poder. Esto se debe al complejo nivel de articulaciones potenciales que se desarrollan y a la cantidad de contradicciones y clivajes posibles que se presentan al interrelacionarse dinámicamente la triada antes señalada.

Estas articulaciones, contradicciones y clivajes son las que originan generalmente los diferentes conflictos sociales, políticos, económicos, culturales u otros que estallan habitualmente en toda sociedad capitalista, expresándose de distintas formas, tales como: manifestaciones, huelgas, paros, marchas y protestas sociales y políticas. En algunas ocasiones la contradicción que da lugar a un conflicto específico puede derivar, en función de su magnitud y profundidad, en una rebelión social y política.

En las dos últimas décadas (1990-2011) la sociedad neoliberal chilena ha experimentado múltiples conflictos y diversas acciones sociales colectivas de protesta social y política, motivadas por distintas razones económicas, políticas, sociales, culturales y étnicas. Entre las cuales encontramos: la protesta y movilización social de los mineros del carbón por el cierre de los

---

<sup>117</sup> Las formas societales que se han configurado a lo largo de la historia latinoamericana en los últimos 200 años están directamente relacionadas con los distintos procesos de modernización instalados en las diferentes sociedades de la región. De manera que es posible identificar la modernización oligárquica, durante el siglo XIX largo, 1770-1930; la modernización nacional desarrollista, desde 1930 hasta 1980; y, por último, la modernización neoliberal, 1980 hasta el día de hoy. Cada una de estas modernizaciones constituyen rutas hacia la modernidad capitalista, las cuales han dado lugar, a su vez, a determinadas estructuras del conflicto social y político. He expuesto esta cuestión en mi trabajo posdoctoral: *Procesos Sociales y Políticos en la Historia Reciente de América Latina y el Caribe, 1980-2010*. Centro de Estudios Latinoamericanos, CELA, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, México, D.F. 2010.

yacimientos carboníferos en los años noventa; las movilizaciones de los profesores o de los obreros subcontratados del cobre, por mejoras salariales, entre otras. Sin embargo, no había experimentado hasta hoy, una rebelión social. Tal vez, la más importante, trascendente y única rebelión existente durante los últimos 21 años ha sido la rebelión del pueblo mapuche. Ni siquiera la denominada “rebelión pingüina” del año 2006, ni la “rebelión de Magallanes”, en enero del presente año constituyen, de acuerdo con nuestra definición, rebeliones sociales o políticas. Ellas fueron, esencialmente, protestas y movilizaciones originadas y resueltas al interior de la estructura del conflicto antes señalada. Cabe, entonces, preguntarse por qué dichos conflictos y acciones colectivas no fueron rebeliones sociales.

No lo son, principalmente, porque tanto el conflicto como la acción social producida carecían de un propósito político medular y cardinal que impulsa y anima toda rebelión social: no buscaban ni intentaron **desestructurar la estructura misma del conflicto**. O sea, hacer “**explosionar**” la triada Estado-Mercado-Sociedad Civil. Por esta carencia, se podría sostener que la mayoría de los conflictos y sus manifestaciones pasadas tuvieron un fuerte componente sistémico-institucional. Ya que la mayoría de ellas se originan en determinadas “fallas” o “problemas” en el funcionamiento interno de la triada. Y, por esa razón, los sujetos o actores sociales que se movilizaron activamente para demandar su solución, no se propusieron modificar estructural y radicalmente la base material de la estructura del conflicto. Bastaba con lograr que esta, la triada, volviera a funcionar adecuadamente para satisfacer sus intereses colectivos o específicos del grupo social y político demandante.

Por cierto, las “fallas”<sup>118</sup> pueden tener diversas causas originarias. Por lo general, obedecen a decisiones adoptadas por

---

<sup>118</sup> Uso el concepto de “fallas” en el sentido de algo que traba el funcionamiento “normal” del mercado, del Estado o de la sociedad civil, también lo utilizo como un problema que no posee una magnitud ni es de carácter estructural; pero su solución requiere la intervención del poder político, o sea, del gobierno. Los gobiernos neoliberales concertacionistas durante los últimos 20 años consiguieron la ansiada “governabilidad” y estabilidad política, justamente, porque tuvieron la sagacidad y la capacidad de procesar y de tratar políticamente cada una de las “fallas” que fueron apareciendo durante sus gobiernos. Además, habría que consignar que muchas de ellas no generaron protestas ciudadanas de envergadura para provocar serias o consistentes crisis políticas. Debido, fundamentalmente, a que estas fallas no causaron ni originaron “grietas” estructurales al orden capitalista. Desarrollo el tema de las “grietas” más adelante.



los actores estratégicos, o sea, con poder, que actúan al interior de algunas de las tres dimensiones señaladas. Las cuales, a su vez, provocan una reacción social de parte de otros actores sociales presentes en las otras dimensiones. Dada la interrelación y la permanente articulación entre Estado, Mercado y Sociedad Civil cualquier decisión u acción adoptada o realizada en uno tiene implicancias en los otros.

Para especificar lo anterior, un ejemplo. La “protesta magallánica” de enero de 2011 tuvo su origen en una decisión estatal que afectaba tanto al mercado como a la sociedad civil regional. La reacción de la sociedad civil, organizada en la Asamblea Ciudadana, no se hizo esperar. Las y los ciudadanos se pusieron en movimiento con el objeto de discutir, analizar, luego rechazar y resistir una decisión estatal-gubernamental que buscaba dinamizar el “mercado del gas” en la región, cuestión que afectaría directamente a los ciudadanos usuarios de ese servicio, elevándoles de manera abrupta y significativa la tarifa o el precio del consumo del gas, con el consecuente perjuicio para la economía familiar. Tal medida concitó un amplio, masivo y participativo rechazo ciudadano. Todos los actores sociales y políticos, los con y los sin poder, se organizaron y al unísono exigieron y demandaron al poder gubernamental central la suspensión de la medida, generando una corta pero mediática crisis política-gubernamental, que incluyó la “caída” de un Ministro de Estado. La maciza acción ciudadana calificada por los medios de comunicación como una rebelión, si bien logró detener la aplicación de la medida para la fecha prevista, no la suspendió ni cuestionó de manera radical el sistema económico imperante. Recompuesta la “falla” provocada por la decisión adoptada por el gobierno a través de un acuerdo entre los ciudadanos movilizados y el gobierno, todo volvió a funcionar de manera regular -hasta ahora-, aparentemente, sin mayores problemas.

Estos “problemas” o “fallas” en el funcionamiento de la triada, son realidades o situaciones habituales que suelen aparecer ya sea por la forma en que se comporta el Mercado, la Sociedad Civil o el Estado ampliado<sup>119</sup>. En diversas ocasiones, el Estado aparece actuando en contra del Mercado y, a favor de la

---

<sup>119</sup> Uso el concepto de Estado Ampliado, en el sentido de que a la estructura estatal se le suma el régimen o el sistema político. Y, es este último, el que expresa políticamente a las distintas clases, sectores y grupos sociales que existen en la sociedad.



Sociedad Civil, o, el Mercado en contra del Estado o la sociedad civil, o viceversa. En realidad, las combinaciones posibles son múltiples y varían a lo largo del tiempo.

Producto de las diversas combinaciones posibles y, esencialmente, por la desigual distribución del poder social, económico y político al interior de cada uno de los sectores que conforman la estructura del conflicto, los distintos actores y sujetos se ven obligados a establecer diversas y cambiantes alianzas sociales y políticas explícitas o implícitas con el objeto de aumentar su poder social o capacidad política de negociación para conseguir sus objetivos, metas o demandas. Por eso, muchas veces, tenemos actores del Estado/gobierno actuando a favor del propio desenvolvimiento del mercado libre o a favor de las y los ciudadanos, es decir, de la sociedad civil. Ejemplo fue la acción política-jurídica impulsada por el Estado/gobierno para exigir el fin de la colusión de precios, establecida por las tres principales cadenas farmacéuticas del país. O la acción del SERNAC en el caso de "La Polar". Pero también los actores de mercado, empresarios, presionan, demandan o exigen al Estado/gobierno actuar por su "bien". Un ejemplo de esta situación fue la solicitud realizada por el presidente de los empresarios Ricardo Ariztía al gobierno de Ricardo Lagos, de "que los dejaran trabajar tranquilos".<sup>120</sup>

Ahora bien, estas "fallas", por cierto, generan conflictos y protestas ciudadanas que son relativamente normales y propias de la lógica interna del funcionamiento de la estructura del conflicto en las sociedades mercado-céntricas. Por esa razón, la protesta social y política en el Chile concertacionista careció de objetivos políticos mayores, siempre tuvo metas de corto alcance. Nunca fueron más allá de los límites de su demanda puntual, sectorial o local. Este carácter limitado o funcional del conflicto y de la protesta permitió y posibilitó la gobernabilidad y la estabilidad del régimen político posautoritario.

Por cierto, en algunas ocasiones, de manera muy excepcional, estas protestas pueden dar lugar a un proceso de

---

<sup>120</sup> "Déjenos trabajar tranquilos y generar empleos y no nos estén disparando por distintos medios y personas que lo único que hacen es desviar la atención", fue la solicitud del presidente de la SOFOFA, al gobierno de Ricardo Lagos, cuando el Ministro del trabajo Ricardo Solarí planteaba la posibilidad de revisar las normas y procedimientos que rigen el "mercado laboral". <http://www.emol.com/noticias/economia/2001/11/13/71131/>, consultado el 4/09/2011.

acumulación histórica de poder social; reforzar una identidad social y/o política preestablecida o en desarrollo en determinados grupos sociales o de sujetos específicos que habitan la sociedad neoliberal. Ello ocurre fundamentalmente cuando la decisión o las decisiones adoptadas por los actores políticos estratégicos encargados no dan solución efectiva a la demanda planteada. Es lo que ocurrió en el año 2006.

Ciertamente, al analizar con detalle el conflicto social y político acontecido a lo largo de los años concertacionistas, la principal conclusión sería que éste tuvo, en primer lugar, como actores sociales centrales y protagónicos a determinados grupos sociales con específicas y cerradas demandas, por ejemplo, los mineros del carbón, los profesores básicos y secundarios, los trabajadores de la salud, los mineros del cobre, los estudiantes, los deudores hipotecarios, los ecologistas, entre otros. Todos ellos se movilizaron exigiendo específicas demandas sectoriales. En segundo lugar, las demandas de carácter sectorial y particulares, siempre fueron acompañadas social y políticamente de manera activa y solidaria por un “abigarrado”, pero reducido, grupo social de las y los ciudadanos anti-concertacionistas, antineoliberales y, sobre todo, anticapitalistas. Se trata de los *ciudadanos subpolíticos*.<sup>121</sup>

Éste ha sido el sector ciudadano que ha mantenido a lo largo de estos años una posición consecuentemente antineoliberal y anticapitalista. Ellos han trabajado inquebrantablemente en los márgenes del sistema político institucional posautoritario

---

<sup>121</sup> En mi análisis de la nueva ciudadanía política y social que se forja al interior de las sociedades neoliberales he caracterizado a ésta como una ciudadanía fragmentada, constituida por cuatro grupos de ciudadanos amplios y diversos: los ciudadanos políticos tradicionales, los ciudadanos no políticos, los ciudadanos no electores y los *ciudadanos subpolíticos*. En nuestra definición “los ciudadanos subpolíticos son todos aquellos que pueden ser ciudadanos políticos tradicionales o no electorales o no políticos, que actúan activamente, o sea, políticamente, en los espacios subpolíticos de la democracia neoliberal. Trabajan en los espacios no institucionalizados de la política democrática. Son críticos activos de la democracia liberal representativa. No rechazan la política, todo lo contrario, son cien por ciento políticos. Por lo general, son exmilitantes, excombatientes de los setenta o de los ochenta, altamente comprometidos con el cambio social actual: son defensores del medio ambiente, críticos del mercado; en ellos la crítica es todo. Son constructores de experiencias democráticas participativas y directas en el ámbito de los espacios locales. Son la inmensa gran minoría de ciudadanos activos en la subpolítica democrática. Ellos apuestan por la democracia radical y participativa”, Cfr.: Gómez Leyton, Juan Carlos. *Política y Ciudadanía en una sociedad neoliberal avanzada, Chile 1990-2007*, en Cuadernos del CENDES 67, Año 25, Tercera Época, Enero-Abril, 2008, Caracas, Venezuela, pp. 59-83.

y han sido protagonistas permanentes de la protesta política y social antisistema. Han acompañado solidariamente todas y cada una de las protestas y conflictos sociales y políticos que se han producido en la sociedad neoliberal. *Ellos han sido los sujetos rebeldes de la sociedad neoliberal.* Su rebeldía los ha llevado a fundar y a constituir sus propios espacios sociales y políticos, libres y autónomos.

Las y los ciudadanos subpolíticos, en el transcurso de estos años, han constituido una minoría electoral, aunque socialmente hablando han sido algo más que el 6 o 7%, que marcan en los procesos electorales, pero nunca más allá del 20% de la población adulta del país. Mientras que el resto de la ciudadanía neoliberal, nada menos que aproximadamente un 80% se ha mostrado conforme, resignada o indiferente con la trayectoria política, social, económica y cultural que adoptó la sociedad neoliberal.

Si bien, de vez en cuando, esta ciudadanía neoliberal manifestaba un soterrado malestar y descontento con lo existente, que le llevaba a protestar o movilizarse de manera esporádica y episódica por cuestiones particulares y precisas, nunca, en el curso de los 20 años concertacionistas, comprometió ni la gobernabilidad, ni la estabilidad del sistema político ni mucho menos las bases mismas del patrón de acumulación neoliberal.<sup>122</sup> Se trataba de un malestar y descontento social, político, incluso, cultural, puntual. Aunque los investigadores del Programa de Desarrollo Humano, PNUD, lo calificaron como una "incomodidad indefinible", cuya principal manifestación visible y concreta fue la "no participación política electoral".<sup>123</sup> El único movimiento social

---

<sup>122</sup> Este aspecto se deduce al analizar los distintos conflictos sociales y políticos que se producen mensual y anualmente en Chile. Cfr. Gómez Leyton, Juan Carlos y Roccio Silva. *Cronologías del Conflicto Social y político en Chile, 2000-2011*. Comité de Seguimiento del Conflicto Social y Político de Chile, Observatorio Social Latinoamericano, OSAL, CLACSO. <http://www.clacso.org.ar>

<sup>123</sup> Este malestar caracterizado por el PNUD como "una incomodidad indefinible" fue detectado en 1998, cuya principal manifestación política fue el alto porcentaje de abstención electoral registrada en la elección parlamentaria de 1997. Según los datos, en aquella oportunidad un 31,5% de los ciudadanos inscritos en los registros electorales no participaron en dicha elección. Dicho porcentaje sumado a la no inscripción de las y los ciudadanos, el porcentaje de "no participantes", llegó ese año a más de 25%. Más tarde en 1999, en las elecciones presidenciales, a un 30%, y en la última elección presidencial del 2009, 10 años más tarde, los no participantes fueron el 42% del electorado nacional, o sea, 5.023.389, que no se identificaron con ninguna de las propuestas políticas presentadas, o se mostraron totalmente indiferentes. El crecimiento del "partido de los no electores".

con capacidad política de cuestionar todo el orden neoliberal ha sido, hasta el día de hoy, el movimiento mapuche.<sup>124</sup>

Si analizamos la actual movilización social de los estudiantes y ciudadanos nacionales con los criterios que identifican una rebelión social no tenemos duda en calificarla como una rebelión social y política.

No voy a analizar aquí cada una de las dimensiones que conforman la estructura de la rebelión sino destacar aquellas que me parecen más relevantes para demostrar que este movimiento se entronca con la larga trayectoria de luchas por la democracia y el socialismo en la sociedad chilena.

### **Un movimiento social cargado de memoria**

En primer lugar, quiero referirme a la memoria. El movimiento estudiantil y ciudadano actual se sostiene en largas y hondas raíces que lo vinculan con la historia política del movimiento popular tanto del siglo XIX, especialmente del periodo 1860-1920, el periodo de la autonomía social y política; como del siglo XX (1920-1973) y, también, con la historia política reciente (1973-1990 y 1990-2010). Por esa razón, tengo la impresión que es el resultado de la confluencia y yuxtaposición de elementos que provienen tanto de la **“memoria larga”** (la autonomía social y política del siglo XIX); la **“memoria mediana”** (la lucha por la democratización social y política de la sociedad civil y del poder político y la construcción social del proyecto social popular democrático y socialista durante el corto siglo XX); la **“memoria reciente”** (las luchas antidictatoriales de los años ochenta, especialmente las 18 protestas populares); y, por último, la **“memoria corta”** (las luchas y protestas sociales y políticas antineoliberales, especialmente, de las y los ciudadanos subpolíticos desde 1990 en adelante).

El cruce y amalgama de estas memorias y trayectorias históricas y políticas como también de temporalidades asumieron, en el año 2010, una nueva significación política entre la ciudadanía subpolítica, en particular, y entre las y los ciudadanos neoliberales -según Carlos Durán, se desplegaron “nuevas subjetividades” colectivas-<sup>125</sup>, producto de dos acontecimientos, que constituyen un parteaguas en la historia política reciente de Chile, a saber:

---

<sup>124</sup> Cfr. Gómez Leyton, Juan Carlos (2010): Política...Ob. Cit.,

<sup>125</sup> Afirmación verbal realizada por el Dr. Durán durante nuestra amena discusión sobre el movimiento estudiantil y sus logros políticos, en la UARCIS.

A) El regreso de la derecha neoliberal al gobierno. En efecto, en enero del año 2010 se produce el triunfo y posterior arribo al gobierno del primer presidente de la derecha neoliberal, proveniente de las filas del empresariado especulativo financiero, Sebastián Piñera. La llegada al gobierno de un empresario no era algo menor, pues ello venía a coronar el exitoso proceso político iniciado en 1973, una vez derrotado y destruido el poder social y político del movimiento popular. La reestructuración capitalista había colocado en el centro de la acción histórica a los empresarios, sindicatos como los verdaderos constructores de la historia. Con Piñera, un empresario exitoso, famoso y adinerado, la derecha política recuperaba el poder político. Llegaba, sin embargo, no la derecha dura, sino la cara blanda, flexible, amable, seductora y, para algunos, humana del capitalismo neoliberal.<sup>126</sup>

B) Por otro lado, a largo de los últimos 30 años, las y los ciudadanos nacionales fueron socializados de manera activa y pasiva en la idea de que ellos de manera individual debían convertirse en “emprendedores”, o sea, “empresarios” de su propio presente y futuro. Debían aprender a producirse y saber “venderse” para lograr sus metas, ya sea educativas, laborales y/o profesionales. Sus biografías debían dirigirse afanosamente a lograr los tres principales objetivos de toda sociedad neoliberal: fama, dinero y éxito. Las tres virtudes esenciales del ciudadano neoliberal. Para tal efecto, estos no deben escatimar esfuerzos para conseguirlos. Todos los medios son válidos y legítimos para alcanzar y lograr esas metas. La carrera por el obtener el éxito personal impulsó a las y los ciudadanos, especialmente de los nuevos sectores medios, a volverse extremadamente competitivos, arribistas, individualistas, patrimonialistas y, paradójicamente, hedonistas.

No obstante, esa posibilidad solo existe para algunos. Hombres y mujeres, niños y niñas también fueron registrando, cotidianamente, que vivían en una sociedad profundamente desigual, fragmentada, individualista, competitiva, hedonista y, sobre todo, desprotegida. Esto fue violentamente evidenciado el

---

<sup>126</sup> He analizado el triunfo electoral de la derecha neoliberal en: “La Derecha Política en la Sociedad Neoliberal chilena, 1990-2010”, en Marielle Palau (Coordinadora). *La Ofensiva de la Derecha en el Cono Sur*. Editorial BASE.IS/ Fundación Rosa Luxemburg, Asunción, Paraguay, 2010. También se puede consultar en Dossier Chile, Observatorio Latinoamericano 8, Buenos Aires, agosto 2011. en [www.iealc.sociales.uba.ar](http://www.iealc.sociales.uba.ar) y en Gómez Leyton, Juan Carlos (2010). Política. Ob. Cit.

27 de febrero del año en curso, cuando un poderoso movimiento telúrico y posterior tsunami destruyó, como he dicho, no solo con la acción colectiva impulsada y realizada por los estudiantes secundarios en su protesta política y social más inmediata, la denominada, "Rebelión Pingüina" del año 2006, sino también con la memoria histórica de larga, mediana y corta duración tanto del movimiento estudiantil como del movimiento político popular de orientación socialista y democrático en que participó activamente el Presidente Salvador Allende. Y, especialmente, con la lucha por la democratización del derecho a la propiedad y la construcción del socialismo.

El conflicto político y social por la democratización del derecho de propiedad, en otros términos, el fin de la propiedad privada como el derecho de unos pocos en la sociedad chilena y su distribución efectiva entre los no propietarios, o sea, el derecho de todos a la propiedad constituye uno de los episodios históricos más desconocidos e ignorados por las ciencias sociales críticas como por la historiografía popular democrática, a pesar de que dicho proceso explica la violenta acción de las clases propietarias en contra de la democracia y del proceso abierto por el gobierno popular de Salvador Allende entre 1970 y 1973. Poner fin a la propiedad privada y constituir la propiedad colectiva ha sido considerado como un elemento central en la transformación revolucionaria del capitalismo y de la construcción del socialismo. En Chile, el movimiento social popular durante un poco más de un lustro, entre 1967 y 1973, cuestionó abiertamente ya sea de manera institucional-legal (reforma constitucional) o en forma directa con tomas y ocupaciones, construcción de poder popular y conformación del área social de producción, la existencia del derecho de propiedad privada.<sup>127</sup>

Dado que el actual movimiento posee largas raíces históricas que se hunden en la historia política del siglo XX (1920-1973) y la historia reciente (1973-2010), se entronca con los movimientos estudiantiles universitarios de los años ochenta, especialmente, con aquellos que no solo luchaban en contra de la dictadura militar, sino también por instalar en el país la democracia social poniendo fin al capitalismo, por ello, su acción política tenía una clara perspectiva socialista.

---

<sup>127</sup> Para los interesados consultar a Gómez Leyton, J. C. (2004) *La Frontera de la Democracia. El derecho de propiedad en Chile, 1925-1973*. LOM Ediciones, Santiago de Chile..

Otra raíz histórica lo vincula soterradamente con la lucha del movimiento universitario que impulsó y realizó, entre 1967 y 1973, la Reforma Universitaria; uno de los más importantes procesos de democratización social y política impulsado en el Chile de los años sesenta. El amplio sentido democrático, plural, participativo, social e igualitario de aquel movimiento constituyó una base de apoyo decisivo en el avance del proceso de construcción política del socialismo en el país. La gesta de las y los universitarios reformistas permitió establecer, durante seis años, una universidad libre, gratuita, igualitaria y, sobre todo, democrática. Una universidad para todas y todos. En otras palabras, una universidad socialista.

La democratización social-académica, por parte los universitarios reformistas de los centros de formación ideológica de las clases dominantes, afectó directamente a una de las principales fuentes del poder social de estos grupos: la Universidad Católica de Chile.

Por esa razón, la Reforma Universitaria fue considerada por los intelectuales orgánicos de las clases dominantes como un peligro y una amenaza tanto para la continuidad de la sociedad capitalista como para los valores cristianos occidentales. Uno de ellos, Jaime Guzmán Errázuriz, fundador e ideólogo de la Unión Demócrata Independiente, UDI, escribió numerosos artículos en la revista *Fiducia*, una revista de orientación filo-fascista, en contra de la reforma universitaria, por considerarla un proceso disolvente de la propiedad privada, la tradición, la familia y un atentado a la religión católica.

Su oposición a la reforma llevó al extinto senador Jaime Guzmán a propiciar y avalar la violencia política y la acción directa, pues él mismo encabezó y dirigió la "retoma" de la Universidad Católica de Chile en agosto de 1967. Al fracasar en su intento violentista, optó por la vía política-institucional como también conspirativa.

Para tal efecto, fundó el movimiento estudiantil Gremialista, el cual años más tarde lograría arrebatárselos a los estudiantes reformistas la conducción de la Federación de Estudiantes de la UC. Transformándose ésta en un bastión de oposición en contra del proceso político de la Unidad Popular entre 1970 y 1973.

Sin embargo, la Universidad Católica reformada solo fue “recuperada” como centro de formación ideológica de las clases dominantes una vez derrocado el gobierno de Salvador Allende e intervenidas militarmente las universidades democráticas.

El derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular fue abierta y públicamente solicitado, avalado y justificado por Jaime Guzmán E. Para él, la violencia armada en contra del gobierno democrático y constitucional de Salvador Allende y la Unidad Popular, se justificaba plenamente, puesto que se usaba en defensa de los valores de la sociedad cristiana occidental. Para Jaime Guzmán, el derecho a la vida no tenía ningún valor ante la desprotección o la desaparición de la propiedad privada.

La intervención militar de las universidades nacionales desde 1973 hasta 1990 destruyó completamente el proceso reformista impulsado por las y los jóvenes universitarios de la década de los sesenta. En su reemplazo se instaló la universidad del capitalismo académico contra la cual, 44 años más tarde, una nueva generación de jóvenes se ha levantado, renovando con ello la lucha de aquellos jóvenes reformistas de los sesenta.

La demanda por el *fin del lucro*, llevada a su máxima realización política e histórica supone el fin del capitalismo académico y de los mecanismos de mercado en la educación. Expuesta de esa forma la demanda implica una medida de carácter socialista, fundamentalmente, porque debiera conducir a la expropiación o la socialización de escuelas, colegios, universidades, centros de formación técnica y profesional que actualmente lucran u obtienen utilidades por vender educación. El fin del lucro, no su regulación ni su limitación, sino su erradicación total y completa supone, en última instancia, el fin de la existencia de la propiedad privada de carácter capitalista en la educación.

Por su parte, la demanda por *gratuidad* de la educación es un planteo de carácter democrático que solo tiene sentido en una sociedad igualitaria; en otras palabras, en una sociedad socialista. Una sociedad en donde la educación esta socializada. En la cual los sujetos populares, las y los ciudadanos, asumen directamente la gestión y dirección del proceso educativo conducente a la realización de su humanidad, libre de cualquier dominación y formas de explotación. Una educación, como diría el viejo educador brasileño, Paulo Freire, para la emancipación.



La demanda por gratuidad de la educación para todas y todos no solo es una demanda democrática sino también socialista, pues implica que la sociedad, la ciudadanía socialmente organizada, en una nueva forma de Estado y a través de un gobierno social popular, asuma su financiamiento. La educación debe dejar de ser pagada. Mantener vigente esa condición es negar el Derecho Humano que la educación admite. Financiar la educación ya sea por parte del "Estado capitalista democrático" o por el "Estado Social Democrático" a objeto de hacer posible su concreción como Derecho Humano fundamental, para todas y todos los ciudadanos, independientemente de su condición de género, socioeconómica, racial, religiosa, étnica, cultural y de género, es una obligación ética y política, por ser un mandato ciudadano.

Instalar la gratuidad, en última instancia, al igual que terminar con lucro, es poner fin a la iniciativa del capital privado en la Educación. Se trata de una medida democrática y socializante.

Ahora bien, el esfuerzo económico que ello representa obliga y compromete a toda la comunidad social y política a generar los recursos financieros necesarios para promover y entregar una educación de alta calidad en todos los aspectos que actualmente son necesarios para formar integralmente a un ciudadano, esencialmente democrático y solidario, como también libre pensador.

Una de las fórmulas utilizada hasta ahora en algunas sociedades capitalistas en donde la educación es gratuita es la recaudación de impuestos por parte del Estado. Estos impuestos son pagados por la ciudadanía para financiar este derecho social y humano. Otra forma es utilizando los ingresos que percibe el Estado/Sociedad por la venta de determinados productos que explota y comercializa en el mercado exterior, por ejemplo, la producción minera de cobre. Por eso, se requiere que dicho producto no este explotado ni comercializado por la iniciativa privada.

Cuando los estudiantes plantean que para financiar la educación se requiere la renacionalización del cobre están en lo correcto. Así como la "Ley Reservada del Cobre", permite que las Fuerzas Armadas nacionales dispongan del 10% de todas las utilidades obtenidas por CODELCO para financiar sus actividades,

lo mismo podría establecerse para la educación. Algo semejante a lo establecido en Bolivia luego de la nacionalización de los hidrocarburos, que un porcentaje de ellos va para apoyar la educación pública.

Obviamente que la explotación y comercialización de este recurso minero como otros por parte del Estado/Sociedad chilena supone volver a hacer efectiva la “nacionalización de los recursos naturales” establecida por el gobierno socialista de Salvador Allende Gossens en julio de 1971. Recuperar la propiedad y el control estatal-social de los recursos mineros, especialmente del cobre, es cambiar el actual status de la propiedad y su finalidad. Ello significaría pasar de la propiedad privada a la propiedad social, y eso implica que su finalidad ya no sería la apropiación privada de sus utilidades, como hoy lo hacen todas las grandes mineras trasnacionales, sino la utilización social de esas utilidades por parte del Estado con el objetivo de ayudar a financiar los derechos sociales de las y los ciudadanos nacionales. Entre los cuales no solo encontramos el derecho a la educación, sino también el derecho a la salud y el derecho a la previsión social, entre otros.

En definitiva, las tres demandas que las y los estudiantes secundarios y universitarios han planteado a la sociedad chilena, tal vez, sin proponérselo ni buscarlo, constituye un programa político mínimo de carácter democrático y socialista. Ello explica la tensión que ha generado en las estructuras del poder y la inquietud del poder de las clases empresariales.



## **Análisis político del movimiento estudiantil desde una perspectiva marxista**

*“La Revolución  
es el acto supremo de la política.”*  
Federico Engels, 1871

*“Cada paso de movimiento real  
vale más que una decena de programas.”*  
Carlos Marx, 1875

Las dos principales condiciones que demanda la lucha política, ideológica y revolucionaria en contra del capitalismo y que deben mantenerse vigentes en el tiempo para que esa lucha tenga éxito, son, por un lado, la constante y persistente negación de su existencia, o sea, la continuidad de la crítica teórica, política, económica, ideológica y social de las formas que éste vaya adquiriendo en su desenvolvimiento histórico. Y, por otro lado, pero de manera conjunta con la anterior, se debe trabajar en la construcción y elaboración de una alternativa social, política e histórica que lo pueda sustituir. La no realización de estas dos condiciones centrales y fundamentales hace imposible que el movimiento social anticapitalista, por muy amplio, masivo y radical que sea, logre triunfar.

Actualmente, dadas las características que posee el capitalismo local y global no es posible estar en contra del neoliberalismo sin ser anticapitalista y sin tener una perspectiva socialista de futuro. Por cierto, ese proyecto socialista requiere ser levantado como programa y propósito de cualquier oposición social y política radical al capitalismo. Sin embargo, el proyecto socialista debe superar en su definición, presente como futura, todos los vicios producidos e instalados por el socialismo del siglo XX, especialmente, los de los países del Este europeo luego de la Revolución Rusa de 1917.

Lidiar por la transformación capitalista y por el socialismo exige, actualmente, un extraordinario esfuerzo de innovación teórica y política, principalmente del pensamiento crítico de raíz marxista. Pero, por sobre todo aquello, estar enfáticamente convencidos de “que un régimen [social, político y cultural] basado en una economía parcialmente colectiva y planificada (y en ese sentido socialista) reemplazará al capitalismo actual en un futuro muy cercano, independientemente de las resistencias de quienes se vean afectados por el proceso de cambio”, según el filósofo polaco marxista Adam Schaff en sus *Meditaciones sobre el socialismo*, a pocos años después del derrumbe del socialismo en su país y de la disolución del socialismo soviético. A pesar de haber experimentado vitalmente el fracaso histórico y político de la construcción del socialismo, por parte del soviétismo, Adam Schaff mantuvo su convicción filosófica y política, primero, en la fortaleza del marxismo como instrumento teórico crítico de la sociedad capitalista, en general, y del capitalismo, en específico; y, segundo, en mantener vigente su opción por el socialismo.

Conservar activas esas dos condiciones de la lucha revolucionaria, como hemos dicho, requiere de un gran esfuerzo teórico y político “imaginativo”. No obstante, ese esfuerzo no puede desmaterializarse ni desocializarse, es decir, renunciar al análisis histórico concreto del capitalismo actual ni abandonar la construcción de un proyecto socialista de carácter revolucionario.

La senda de la renuncia fue la seguida por muchos intelectuales marxistas y socialistas chilenos, luego de la derrota de 1973, en la denominada renovación socialista de fines de la década de los setenta y ochenta. Esa opción los llevó al final del proceso de revisión teórica, política e histórica del pensamiento marxista como también de la concreción histórica del proyecto socialista, a aceptar al capitalismo neoliberal y su funcionamiento, lo más contradictorio aún, a defenderlo, profundizarlo y ampliarlo. Ejemplos históricos de este proceso y su materialización en la forma de hacer política en perspectiva capitalista los encontramos en los gobiernos “socialistas” de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet como, también, en los gobiernos de la denominada Tercera vía en Europa o de la “socialdemocracia latinoamericana” como el PT de Luiz Ignacio “Lula” Da Silva y Dilma Rousseff en Brasil o del Frente Amplio de Tabaré Vázquez y José Mujica en Uruguay.

Para evitar las rutas o caminos políticos que conducen al reforzamiento del capitalismo, se requiere avanzar con urgencia en el desarrollo del conocimiento crítico de la forma como opera y funciona el sistema capitalista actual. En esa dirección considero que el materialismo histórico sigue aportando los mejores cimientos sobre los cuales levantar el socialismo, pues es en el elemento crítico del marxismo donde reside -tal como lo sostiene Ellen Meiksins Wood, en *Democracia contra Capitalismo-*, su énfasis tanto en la especificidad de su lógica sistémica como su historicidad.

En otras palabras, el materialismo histórico aborda al capitalismo en una forma radicalmente antiética a las tendencias actuales, -el posmarxismo, los estudios culturales, los análisis de discursos, de identidad, entre otras-, el marxismo centra su preocupación analítica en *la unidad sistémica del capitalismo en lugar de solo analizar fragmentos como lo hacen los analistas críticos posmodernos*. Haciéndose cargo también de su historicidad (o sea, de su pasado, su presente como también su futuro) en lugar de la naturaleza inevitable del capitalismo.

En los últimos 40 años, en Chile, el pensamiento político de un sector autoidentificado con la "izquierda" o con "el progresismo" socialista, que integra la Concertación de Partidos Políticos por la Democracia (Concertación, en adelante) pensó y sostuvo, justamente, la naturaleza inevitable del capitalismo. Y, por esa razón, renunciaron a la posibilidad histórica de su transformación radical y sustitución por un proyecto socialista. Lo hicieron, fundamentalmente, porque se había renunciado a la crítica marxista del capitalismo, así como a la construcción del proyecto alternativo de carácter socialista.

Situados en la actual coyuntura política -que caracterizamos como de crisis de la institucionalidad política del régimen político neoliberal producto de la movilización social y política de los estudiantes secundarios y universitarios, y de la ciudadanía nacional en demanda del fin de la educación de mercado- se ha constituido una estructura oportunidades políticas que nos permite plantearnos tanto la recuperación del materialismo histórico, esto es, la crítica profunda al sistema capitalista como la necesidad de un proyecto político alternativo

no sólo de carácter antineoliberal, sino, anticapitalista. En otras palabras, el movimiento social popular y ciudadano requiere de un programa político para disputar el poder del Estado neoliberal chileno.

En un sentido contrario al epígrafe de Marx que encabeza este artículo, tengo la impresión de que el actual movimiento social y político ciudadano no dispone de un programa político alternativo al capitalismo; tal vez, existen propuestas programáticas de orientación antineoliberal. Pero, como ha quedado plenamente demostrado en las experiencias históricas latinoamericanas de la última década, los distintos movimientos ciudadanos electorales que levantaron programas de orientación antineoliberal como plataforma de gobierno alternativo, han terminado, una vez en el poder, ampliando y consolidando las formas neoliberales de acumulación y alejándose de los intereses políticos, sociales y económicos populares de orientación socialista o moderando completamente su crítica anti-neoliberal. Por esa razón, el actual movimiento político y social ciudadano antineoliberal requiere de un programa político alternativo que proporcione ideas, argumentos y lineamientos para enfrentar la lucha política en el corto y mediano plazo. Pero que también proporcione insumos para construir social y participativamente un proyecto político, popular y ciudadano alternativo de gobierno y de transformaciones futuras, en la senda del socialismo. Para tal efecto, considero que es fundamental leer e interpretar de manera asertiva y propositiva la actual coyuntura política.

La teoría de las "grietas" propuesta por John Holloway recientemente en su libro *Agrietar el Capitalismo: El Hacer contra el Trabajo*, nos proporciona una pista destinada a comprender la actual oposición y lucha social y política en contra del capitalismo neoliberal, y una adecuada forma teórica de reconstruir el materialismo histórico para el pensamiento crítico latinoamericano, en general, y chileno, en particular.

Considero que el actual movimiento estudiantil y ciudadano subpolítico nacional que se moviliza en contra de la educación de mercado puede ser interpretado, adecuadamente, utilizando la teoría de las grietas, o sea, *del hacer contra el trabajo* desarrollada y propuesta por John Holloway. Fundamentalmente,

por el rechazo a la lógica del lucro y de los principales mecanismos y requisitos necesarios para que el capital financiero y mercantil opere. Además el movimiento estudiantil y ciudadano subpolítico se ha puesto en la senda de la lucha política por una sociedad más digna, justa e igualitaria, es decir, socialista.

La demanda por el reconocimiento no solo estatal-gubernamental sino también social, es decir, ciudadana, de que la educación es un derecho social de carácter universal y no un bien de consumo, supone rechazar la lógica interna y cohesiva de la racionalidad capitalista en la actividad educativa. Al plantearse "otra educación", el movimiento social estudiantil y ciudadano está optando por "otro tipo de hacer". La exigencia por la plena validez del derecho social a la educación pública gratuita se constituye en un "hacer" alternativo, de carácter subversivo y contra hegemónico.

Este planteo al ser formulado al interior de una sociedad neoliberal como la chilena, en donde los mecanismos de mercado están firmemente institucionalizados, ha abierto una gran grieta en la estructura política e institucional neoliberal. Sin embargo, se requiere de otras tantas grietas para producir un cambio radical, o sea, revolucionario, que ponga fin a la lógica y a la racionalidad capitalista dominante.

La "grieta" abierta por la acción social, política y cultural de parte de los estudiantes y ciudadanos subpolíticos implica -en la praxis histórica concreta- construir "haceres alternativos". Estos, por lo general, se desenvuelven en el borde de la imposibilidad. Ellos no debieran existir, pues atentan contra la lógica de la dominación capitalista. Históricamente han sido los sectores populares, subalternos y dominados los que construyen esos "haceres alternativos" para encontrar el camino hacia su liberación y emancipación de las ataduras que les impone el capitalismo.

Los "haceres alternativos" y "las grietas" se gestan y estallan cuando las condiciones y el nivel de contradicciones producidas por el capitalismo alcanza sus límites estructurales. Y, no pueden seguir siendo soportadas por los grupos sociales subalternos. Ante lo cual ellos se plantean otros "haceres". Frecuentemente, estos son frágiles y efímeros, a menudo se desarrollan con muchas dificultades y contradicciones y siempre se corre el peligro que desaparezcan, o peor aún, de que sean transformados en un



nuevo elemento del sistema político o social dominante. Como ocurrió, por ejemplo, con la movilización de los estudiantes secundarios y su “revolución pingüina” en el año 2006, cuando se plantearon la derogación de la LOCE (Ley Orgánica Constitucional Educacional) y el fin de la educación de mercado. Efectivamente, la LOCE fue transformada en LGE (Ley General de Educación); pero sin cambiar absolutamente nada del sistema educativo neoliberal dominante. La grieta abierta por los estudiantes secundarios fue sellada por el poder constituido. No obstante, todas las grietas, siempre dejan huellas y marcas en la estructura y, sobre todo, en la memoria de los sujetos.

A pesar de que la protesta social y política estudiantil secundaria fue la expresión del conflicto central de las sociedades neoliberales (el cual confronta actores estatales, de mercado y de la sociedad civil), la “grieta” abierta representó un significativo “empuje-en-contra” de la lógica del capital. Simultáneamente, operó como un vigoroso agente de socialización política en el espacio juvenil estudiantil. Y, unido a la inadecuada resolución política proporcionada por el sistema político a la demanda secundaria, acrecentó entre los sectores juveniles la crítica al neoliberalismo y ahondó el amplio rechazo juvenil al régimen democrático imperante.

Aunque la “grieta” abierta en aquella oportunidad no logró generar una crisis ni en el sistema político e institucional ni en las bases materiales -económicas- del capitalismo neoliberal, dejó huellas profundas en la memoria y abrió la consciencia política de los estudiantes secundarios. Especialmente, entre aquellos sectores que adoptaron y plantearon durante la protesta secundaria una postura y enfoque crítico y manifestaron una sólida actitud no solo antineoliberal si no, esencialmente, anticapitalista.

Fueron estos sectores los que construyeron el “hacer-alternativo” al interior del movimiento. En el lapso que va desde fines del año 2006 hasta la actualidad, se trabajó hacia adentro y de manera horizontal en el espacio estudiantil secundario y universitario, profundizando la crítica anticapitalista al modelo educativo reformado por la LGE y a la clase política enquistada en el poder institucionalizado que la elaboró y aprobó.

Ahora bien, la "grieta" debe ser entendida como un concepto negativo e inestable. Es una ruptura de la lógica de la dominación capitalista, un desgarre en el tejido de la hegemonía. Dado que la dominación es un proceso activo, las grietas no pueden estar quietas. Corren, se extienden, se expanden, se juntan o no con otras grietas; se llenan o son tapadas, reaparecen, se multiplican, se extienden. Al unirse entre ellas provocan daños estructurales en las fuentes del poder social de la clase dominante. Esas grietas son las que deben quebrar las resistencias y oposiciones de esos poderes. Son grietas que rompen la unidad y la cohesión interna del capital. Atraviesan las identidades. Por esa razón, la teoría de las grietas, entonces, es necesariamente crítica, anti identitaria, agitadamente negativa. Se trata de una teoría de romper-y-crear, y no una teoría de unidades autosuficientes. Ni tampoco trabaja con las fragmentaciones culturales o discursivas de las teorías posmodernas. Las grietas son materialmente concretas.

Cabe señalar que no todas las movilizaciones, protestas y resistencias que se realizan en las sociedades capitalistas pueden provocar y ser consideradas "grietas" en la dominación capitalista. Por esa razón, no es correcto caracterizar a cualquier manifestación social y política como un acto revolucionario o como una lucha anticapitalista. Evidentemente, que un problema central de las ciencias sociales, así como del pensamiento crítico se encuentra en la posibilidad metodológica de reconocer y, especialmente, distinguir entre el cúmulo de acciones sociales colectivas realizadas, cuáles son aquellas que efectivamente se dirigen en "contra de la lógica del capital".

El uso de la teoría de las "grietas" permite enfocar y obtener una imagen más nítida del mapa del conflicto social y político en una sociedad dada. Identificando y analizando de manera precisa las diversas grietas que se abren, se expanden, se juntan, se cierran, y se multiplican, se podrá conocer la intensidad, profundidad y extensión de las "grietas" producidas por la movilización social. En otras palabras, del poder histórico desplegado y acumulado por los actores sociales y políticos anticapitalistas.

El estudio y análisis de las grietas nos proporciona una constelación de saberes sobre el movimiento y la acción histórica desplegada por esos sectores sociales y políticos. Y, al mismo

tiempo, nos da la posibilidad de pensar reflexivamente: a) el cambio político y social en todas sus diversas dimensiones, b) los efectos políticos que éstas tienen sobre la dominación capitalista y, c) sobre la forma tradicional como el pensamiento crítico y marxista teorizó la revolución social, los procesos o los momentos revolucionarios. En esa dirección, sostengo que la revolución social y política, es decir, el acto histórico de alterar radicalmente el orden social existente y disputar el poder político, solo puede producirse como el resultado de la creación, la expansión y multiplicación de múltiples grietas que afecten directamente la cohesión interna de la dominación y la hegemonía capitalista.

En razón de lo anterior, la movilización ciudadana gestada y desarrollada durante estos meses por distintos grupos sociales de la sociedad neoliberal chilena: los estudiantes secundarios y los universitarios, los profesores básicos y medios, los académicos universitarios, los padres y apoderados, las militancias políticas de las más diversas agrupaciones y organizaciones, las y los trabajadores organizados, y las y los ciudadanos en general, han estado **agrietando** profundamente la “dirección política” del capitalismo neoliberal. Sin embargo, no se han agrietado las estructuras materiales de la lógica ni de la racionalidad capitalista.

## **La educación universitaria en las sociedades neoliberales: ¿bien público o bien de consumo?**

### **Apuntes para una discusión en torno a las “Universidades Privadas con Vocación Pública”**

#### **Introducción**

Una de las características centrales de las sociedades neoliberales, o sea, en aquellas donde el mercado a través de la ley de la oferta y la demanda rige el desenvolvimiento de las actividades económicas, sociales, políticas y culturales, lo constituye la empresariedad capitalista privada destinada a generar y obtener el máximo de utilidades de las inversiones realizadas. Por esa razón, en estas sociedades, el espacio para actividades que no tengan esa dirección es bastante constreñido, escaso y limitado. La racionalidad económica impuesta por la lógica capitalista domina y enmarca la vida social tanto privada como pública. Haciendo que en las sociedades de mercado las fronteras entre esas dos importantes dimensiones de las sociedades modernas estén muy mal dibujadas o trazadas. Se trata de límites difusos, fácilmente traspasables. Hombres y mujeres se mueven plásticamente entre ellas. A lo largo de su biografía profesional o laboral, cultural o social, suelen transitar entre uno y otro sin mayores problemas. Es más, ese transitar es considerado y visto como una positiva virtud. Desempeñarse bajo esa racionalidad tanto en la dimensión pública como en la privada configura un sujeto o un actor social, económico, cultural y político dúctil y flexible.

Este sujeto neoliberal tiene la cualidad de estar sin contradicciones en ambas dimensiones, fundamentalmente, porque la reestructuración capitalista desarrollada en las sociedades latinoamericanas, desde los años ochenta hasta la actualidad, ha ido disolviendo, justamente, las fronteras y las lógicas que delimitan y diferenciaban ambas dimensiones. Hoy la lógica de lo privado por sobre lo público se impone

hegemónicamente en ambas dimensiones. Ese ha sido el éxito de la dominación capitalista neoliberal.

En las sociedades capitalistas neoliberales, sociedades mercado céntricas, por cierto, lo “público” entendido como aquello que está a cargo del gobierno o del estado, se modificó radicalmente. El Estado Neoliberal es quien asume una función subsidiaria y atiende a través de políticas públicas los requerimientos de determinados grupos de la ciudadanía ya sea porque, por un lado, no pueden acceder al mercado de bienes o de servicios correspondientes o, por otro lado, la iniciativa capitalista no tiene interés en proporcionar aquellos bienes o servicios que poseen una muy baja rentabilidad económica. Por esa razón, lo “público/estatal” no ha desaparecido completamente en estas sociedades. Sin embargo, bajo la idea de la necesaria y urgente “modernización del Estado” se ha buscado reducir constantemente lo “público” creando las condiciones institucionales y materiales para la ampliación en todos los ámbitos de lo mercantil-privado. Es decir, privatizando todo lo que pueda ser atractivo para el capital. Es la lógica de la acumulación del capitalismo neoliberal.

En función de todo lo anterior, la reestructuración capitalista privatizó todos aquellos bienes o servicios considerados económicamente rentables, independientemente si estos en su momento fueron considerados un derecho social o económico o cultural o un bien común, etcétera. Tanto la salud como la educación fueron valoradas, definidas, calificadas como bienes y servicios de alto interés para el capital privado.

La máxima acción reestructuradora neoliberal fue mutar, transformar, modificar la concepción que se tenía de determinados bienes en la sociedad. Aquellos bienes que eran concebidos como públicos y afectos a derechos los transfiguró en bienes de consumo, es decir, bienes susceptibles de ser mercantilizados, o sea, regidos por la ley de la oferta y la demanda. Por ende, generadores de utilidades, de ganancia lucrativa.

¿Cómo afectó dicha transfiguración a la universidad? Es lo que expondremos en este documento de trabajo con el objetivo de dilucidar si es posible la existencia de “universidades privadas con vocación pública” en la sociedad mercado-céntrica como la actual. Para tal efecto, he organizado este artículo en dos

apartados: en el primero, analizo la Universidad durante la vigencia de la sociedad del bienestar o industrial sustitutiva o del estado nacional-desarrollista. Aquí me interesa caracterizar a través de la identificación de los elementos centrales de la educación pública universitaria qué sirve de invocación mítica para plantearse hoy la universidad privada con vocación pública. Es lo que analizo en la segunda parte, donde centro mi atención en la universidad del capitalismo académico para llegar a concluir que mientras la educación, en general, y la universitaria, en particular, siga siendo pagada, ésta nunca recuperará su condición de bien público. Para lograr aquello, es necesario no solo oponerse a una ley determinada sino es fundamental provocar un cambio radical en las actuales estructuras de poder de la sociedad capitalista neoliberal.

Concibo este texto como un documento de trabajo, con intención reflexiva y crítica que busca más que lectores pasivos, interlocutores activos, para dar lugar a una profunda discusión en torno a la Universidad y su rol en la actual sociedad. De esta manera, lo presento como notas preliminares que no tienen ninguna otra pretensión que provocar e inducir la discusión y la reflexión.

### **Las Universidades Privadas con Vocación Pública en la Sociedad del Bienestar**

Desde fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX, la educación como la salud fueron considerados en las sociedades capitalistas centrales- especialmente en aquellas que establecieron Estados de bienestar- un derecho social que debía ser atendido en todas sus dimensiones por el Estado. Lo mismo ocurrió en las sociedades latinoamericanas. Proveer educación y salud a la ciudadanía sin distinción alguna era la tarea del Estado. Por esa razón, ambas estaban dentro de la dimensión “pública” de la sociedad y eran dos de los principales pilares de la sociedad del bienestar y de los derechos inherentes a la condición de ciudadano.

Una de las condiciones materiales para la existencia de la Educación y la Salud Pública era contar con financiamiento de carácter público-ciudadano obtenido a través de la contribución

de todas y todos los ciudadanos vía impuestos u otros mecanismos de carácter solidario. Este es un punto clave. Lo “público” era financiando por la sociedad, o sea, por toda la comunidad política. Tanto la Educación como la Salud eran considerados derechos sociales, a cargo del Estado, destinados para todas y todos.

Concentrémonos en la educación pública. La escuela básica, el liceo, la universidad eran pensadas como espacios de formación política, social, laboral, cultural y económica ciudadana. Obviamente, en sus distintos niveles, la educación pública formaba, por un lado, a la fuerza de trabajo calificada, adiestrada e instruida y, por otro lado, a la ciudadanía política activa y responsable con su comunidad política. Los valores propios de la sociedad del capitalismo industrial, del bienestar social y económico y de la democracia liberal fueron transmitidos generacionalmente a través de la educación pública conducida por el Estado. Durante más de cuatro décadas los sectores subalternos o dominados fueron socializados en la *weltanschauung* demoliberal keynesiana o socialdemócrata. Dicha cosmovisión fue asociada con el capitalismo social republicano.

Uno de los principios centrales del capitalismo social republicano del siglo pasado sostenía que todo aquello que estaba a cargo del Estado, o sea, de lo “público” debía estar al servicio de toda la ciudadanía sin distinciones sociales, económicas, culturales, raciales, religiosos o ideológicos, su objetivo era producir sociedades plurales, democráticas e igualitarias, etcétera, pero manteniendo y fortaleciendo los ámbitos privados del capital. Esta condición permitió que lo “privado” no estuviera ni limitado ni impedido para desenvolverse en dicho capitalismo.

La mantención de un asimétrico y paradójico equilibrio entre lo privado y lo público viabilizó que ambas dimensiones se desarrollaran y actuaran al unísono. Así, por ejemplo, la educación pública no excluía la existencia de la educación privada. Entendiendo esta última como aquella educación que era y es impartida por instituciones privadas financiadas sin dineros fiscales. En las cuales, por lo general, los que asisten a ellas pagan aranceles por la escolaridad recibida. Se trata de escuelas, colegios y universidades particulares con financiamiento propio, o sea, privado, forjado y producido por agentes individuales y/o

de las diversas organizaciones sociales vinculadas con las élites dominantes de la sociedad civil. Son instituciones educativas destinadas para recibir, formar y educar a los hijos e hijas de las élites de poder o en el poder. Con su existencia, las sociedades del bienestar preservaban el principio de la libertad de enseñanza defendido y demandado por los sectores liberales o conservadores que rechazaban o cuestionaban el igualitarismo social.

Entre ambos sectores educativos existía un tercer sector más bien reducido, pequeño, pero con cierto nivel de importancia, especialmente para los sectores medios, para algunos grupos confesionales o doctrinarios. Se trataba de instituciones educativas particulares-privadas, es decir, que estaban vinculadas a específicos proyectos doctrinarios de carácter laico, religioso o político que tenían el reconocimiento del Estado, y recibían aportes financieros privados, pero también públicos. Allí su carácter mixto.

La actividad educativa de ninguna manera era considerada un “negocio” ni una actividad empresarial capitalista destinada a producir lucro. Los establecimientos educativos eran fundados bajo razones políticas, sociales, humanitarias, altruistas, filantrópicas, solidarias, etcétera. Tanto la educación pública como la educación privada y particular partían del supuesto de que la educación era un derecho abierto a todas y todos. Y, sobre todo, que el Estado debía garantizarlo tanto para los sectores dominantes como para los sectores subalternos. A los primeros, se les garantizaba a través de la libertad de enseñanza, que se traducía en la posibilidad de que todos aquellos interesados en instalar un proyecto educativo privado o particular podían hacerlo bajo la condición de que su mantenimiento financiero fuera igualmente privado o particular. A los segundos, el Estado les proporcionaba educación pública mantenida y costada por los ingresos fiscales. La principal diferencia entre la educación pública y la educación privada y particular estaba en que la primera era completamente gratuita, mientras que en las otras se debía pagar.

He aquí el principal elemento que identificaba lo “público” en el capitalismo social republicano, la gratuidad de los servicios que atendían los requerimientos educativos o de salud de las y los ciudadanos. Aunque éstos debían contribuir al financiamiento del



sistema educativo público o de salud a través de tasas impositivas directas o indirectas.

La educación pública a nivel básico, secundario o universitario estaba a cargo del Estado, por esa razón era gratuita. No obstante, cabe señalar que la gratuidad del sistema no implicaba que el sistema educativo público no reprodujera la desigualdad inherente a toda sociedad capitalista. Por cierto, había escuelas y liceos de primera, segunda y tercera clase. Una estructura semejante a las "clases de viajeros" existente en los medios de transportes, los carros de primera, de segunda y tercera. Todos podían llegar a la meta: la universidad. Sin embargo, al asistir a escuelas, colegios y liceos públicos social y económicamente distintos, unos lo hacían en mejores condiciones que otros. Además, en la sociedad chilena, la meta no estaba abierta para todos. A diferencia de otras sociedades latinoamericanas como, por ejemplo, la argentina, la uruguaya o la mexicana, el ingreso a la educación pública universitaria gratuita no es universal, si no que se realiza bajo un estricto sistema de selección, a la universidad entran solo "los mejores". En ese sentido, la educación pública universitaria en Chile siempre fue clasista y excluyente. En efecto, a ella ingresaban casi exclusivamente los sectores medios y altos y uno que otro "rotito" proveniente de los sectores populares.

La existencia de un sistema educativo público gratuito pero estratificado socialmente en donde, como he dicho, existían colegios de primera, de segunda y de tercera, anulaba significativa y especialmente para los sectores populares y de trabajadores urbanos y rurales, el acceso a la educación universitaria, aunque esta fuera gratuita. A ella accedían los sectores medios y altos, los cuales disponían de los recursos económicos y culturales para estar y mantenerse en el sistema universitario. Los pobres del campo y de la ciudad no accedían a la universidad. Para ellos había otros ramales tales como la educación técnico-profesional, la formación militar, entre otras.

El capitalismo nacional desarrollista chileno (industrial sustitutivo) no solo asumió la financiación de sus propios establecimientos educacionales universitarios: la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado sino también los proyectos educacionales privados y particulares como fueron

las universidades Católicas de Chile, Norte y Valparaíso y las universidades laicas Santa María, Concepción y Austral de Valdivia. Si bien, estas últimas tenían algún tipo de cobro a sus estudiantes, la existencia de becas hacía que ellas también compartieran con las estatales-públicas el principio de gratuidad, aunque en la realidad eran semi-gratuitas.

Podríamos sostener que las primeras universidades privadas-particulares con vocación pública fueron estas seis universidades nacionales. A pesar de su condición de proyectos educativos particulares vinculados a determinados sectores sociales, religiosos, culturales, políticos o empresariales, con excepción de las universidades católicas, las laicas surgieron insertas en el proyecto nacional-desarrollista de carácter industrial como es el caso de la universidad Técnica Federico Santa María. Eran universidades que, con matices, respondían a la matriz estado-céntrica dominante en Chile como en toda América Latina. Sin embargo, a pesar de que estos proyectos educativos universitarios eran sostenidos por el erario, estas instituciones conservaban su autonomía e independencia del Estado. La autonomía e independencia universitaria constituía un principio modular no solo para el desarrollo del capitalismo industrial y el desenvolvimiento de una sociedad democrática sino del propio quehacer interno y propio de la Universidad.

La sociedad chilena disponía de tres universidades católicas y cinco laicas, es decir, librepensadoras. Luego de los procesos de reformas universitarias iniciadas en el año 1967, las universidades católicas hasta 1973, si bien mantuvieron su identidad católica, se abrieron a aceptar diversas corrientes de pensamiento filosófico, científico, social y humanista. Las universidades públicas y privadas, bajo el alero financiero público-estatal lograron impulsar, sostener, profundizar y consolidar sus proyectos académicos universitarios con autonomía e independencia y mucha libertad.

En una sociedad con recursos públicos escasos y demandas sociales y educacionales vastas, la posibilidad del desarrollo ampliado de la educación universitaria pública siempre estuvo limitada, presionada, tensionada por la falta de recursos creando una conflictiva dependencia financiera de las universidades del

Estado. La demanda permanente de recursos para financiar las diversas actividades académicas y laborales de las universidades fue creciente a lo largo de los años. Estas demandas no estaban solo relacionadas con el aumento de la matrícula sino también con la conformación de poderosas élites académicas-profesionales que demandaban ingentes recursos para sostener sus investigaciones científicas de diversa índole. Pues la educación universitaria pública concebía a la Universidad como una institución compleja dedicada a la docencia, investigación y extensión.

La dependencia económica y financiera del Estado caracterizó a las universidades privadas con vocación pública. Hasta la reforma universitaria de los años sesenta, la estructura de poder y la gestión interna de éstas no eran tan distintas de las formas como se gestionaban y gobernaban las universidades estatales-públicas. Tampoco se diferenciaban en los sistemas de admisión. Todas se regían por el sistema de selección ya sea vía Bachillerato y Prueba de Aptitud Académica ordenado y organizado desde la principal universidad estatal, la U. de Chile.

Otro de los elementos distintivos de la educación universitaria: pública, privada-particular lo **constituía su finalidad. Todas tenían como objetivo el “bien público”**, en este caso, la educación. Entiendo por «bien público» a aquel cuyo uso no es mercantilizado. Por tanto, quienes lo producen no obtienen un beneficio económico con ello, pues lo producen para el disfrute de toda la sociedad sin necesidad de mercantilizarlo.

Una sociedad que establece que la **educación es un bien público**, construye agencias tanto públicas como privadas que **lo producen sin fines de lucro**. Una institución que funciona moralmente es un bien público porque contagia moralidad, aunque sea una empresa financiada o instalada con capital privado. Podríamos entonces sostener que, si la educación privada-particular se propone hacer el bien, respetar y fomentar la autonomía y hacer justicia, constituye el mejor de los bienes públicos. El «papel público» de la educación privada no consistía solo en recibir aportes de recursos públicos y fomentar el uso público de la razón, sino también en encarnar sus convicciones en la vida cotidiana generando un «bien público», es decir, educación. Las seis universidades privadas-particulares tenían ese objetivo.

Por esa razón, todo proyecto universitario privado para convertirse en Universidad debía ser avalado y aprobado por los tres poderes del Estado, o sea, la instalación de una universidad privada-particular requería de una Ley de la República y/o el otorgamiento del reconocimiento de la Personalidad Jurídica a las Fundaciones que tenían la misión de instalarla.

De manera que si nos interrogamos sobre cuál era el elemento distintivo entre una universidad pública y una universidad privada-particular en este periodo, podríamos sostener que éste se encontraba en un nivel muy específico: **la propiedad**. Dos de ellas eran propiedad del Estado de Chile y las otras seis pertenecían a instituciones particulares como la Corporación Universidad de Concepción, Fundación Isabel Caces de Brown (Universidad Católica de Valparaíso); la Fundación Federico Santa María (Universidad Técnica Federico Santa María), la Sociedad de Amigos del Arte (Universidad Austral de Valdivia) y los dos restantes a la Iglesia Católica.

Uno de los aspectos fundamentales que permiten clasificar a las universidades en Chile ha sido y es, por consiguiente, la estructura de propiedad de sus activos y patrimonio. Esta estructura condiciona su existencia económica y financiera, así como sus órganos de gobierno y fijación de políticas y estrategias institucionales. De acuerdo con lo señalado, desde finales del siglo XIX hasta 1980, la educación pública universitaria distinguía dos tipos de propiedad: la estatal y la no estatal. Esta última podía tener matices, dependiendo de la forma jurídica que adoptaba. La universidad no estatal es, por cierto, de propiedad privada organizada ya sea como una corporación o fundación constituidas por sujetos naturales o jurídicos particulares o religiosos. Como hemos visto, las universidades no estatales eran propiedad de fundaciones particulares con personalidad jurídica (dos), corporaciones (dos) y religiosas (dos).

La existencia de la propiedad universitaria no estatal, es decir, privada, no era un obstáculo para que el Estado entregara aportes financieros directos a dichas instituciones, dado que su principal compromiso estaba con el bien público que estas producían, educación sin fines de lucro. Financiamiento público que a pesar de que generaba importantes cuotas de

conflicto y disenso político, contaba con la aceptación y apoyo de los principales actores políticos y sociales estratégicos de la sociedad y de la ciudadanía misma. Aunque las disputas entre las Universidades estatales y las no estatales, por obtener mayores recursos, siempre animaron la política y tensionaron la educación pública nacional. Este es un capítulo no escrito de la historia de la educación universitaria pública en Chile.

De acuerdo con lo expuesto, podemos concluir que la educación universitaria en Chile durante la sociedad estado-céntrica del siglo pasado era esencialmente pública, bajo el control, financiamiento y supervisión del Estado a través de su principal entidad universitaria: la Universidad de Chile. Las seis universidades privadas-particulares, a pesar de su condición de privadas, se mantenían bajo la égida protección y tutela del Estado, y estaban al servicio de lo público, puesto que su principal misión y objetivo era producir un bien público, esto es educación.

**La educación pública universitaria durante el siglo XX se caracterizó por los siguientes aspectos:**

1. Financiada por el Estado en un 100% cuando se trataba de instituciones de su propiedad y con aportes variables sobre el 60% cuando se trataba de instituciones no estatales.
2. Gratuidad en las universidades estatales o semi gratuitas en las universidades no estatales.
3. A pesar de lo anterior, el acceso no era universal sino selectivo, elitista y excluyente.
4. Tanto las universidades estatales como las no estatales tenían autonomía e independencia en el quehacer universitario, a pesar de la fuerte dependencia financiera estatal.
5. Jerárquicas y centralizadas en su ordenamiento gubernamental interno.
6. Restrictivas en la participación de sus diversos estamentos en la toma de decisiones, aunque este aspecto fue fuertemente cuestionado durante los procesos de reforma en los años sesenta.

Siendo estos los seis rasgos principales de la universidad pública como también de las universidades privadas con vocación pública, nos podemos preguntar si es posible distinguir, clasificar o definir a las actuales universidades como universidades privadas con vocación pública.

### **Universidades públicas con orientación Privada en la Sociedad Neoliberal<sup>128</sup>**

Como es ampliamente conocido, la reestructuración capitalista neoliberal puso fin a la educación como un bien público y lo transformó en un bien de consumo. Para tal efecto, convirtió a las universidades estatales y no estatales en empresas capitalistas que producen y ofrecen en el mercado educativo un bien, educación, que es altamente demandado por la sociedad.

Para lograr esa transformación, el Estado neoliberal adoptó una medida radical: el retiro de manera paulatina del financiamiento estatal de las universidades estatales como no estatales obligándolas a iniciar procesos de autofinanciamiento. Lo que llevó a las universidades a terminar con la gratuidad y la semi-gratuidad e imponer el pago de matrículas y aranceles por parte de los estudiantes que eran seleccionados y admitidos en las universidades. Las universidades bajo esta nueva modalidad de financiamiento se convirtieron progresivamente en empresas educativas que debían ser administradas bajo la lógica de la rentabilidad y la eficiencia económica que les permitieran generar excedentes para mantenerse y reproducirse en el tiempo.

Otra decisión adoptada por el Estado neoliberal en función de constituir el mercado de la educación fue invitar a la iniciativa capitalista a conformar universidades privadas sin aportes financieros directos del Estado. Aunque la legislación estableció que las universidades que se fundasen no debían tener fines de lucro.

En la práctica dicho postulado legal fue letra muerta. Desde el primer momento todas las universidades-empresas

---

<sup>128</sup> He analizado la Universidad en el capitalismo académico en mi libro Política, Democracia y Ciudadanía en una sociedad neoliberal, Chile 1990-2010. Editorial UARCIS/CLACSO, Santiago de Chile, 2010.

que se constituyeron estuvieron animadas por dicho afán. Si las autoridades estatales neoliberales ya sea autoritarias (1981-1990) o democráticas (1990-2012) hubiesen tenido la voluntad política de fiscalizar el cumplimiento de dicha norma, el mercado educativo nunca habría llegado a tener 35 universidades privadas. Sin considerar las 25 universidades estatales y no estatales tradicionales que siguen igual patrón de comportamiento económico. El negocio educativo es altamente atractivo para que el capital nacional y trasnacional se limitara por una glosa legal que podía ser burlada con normas y reglas establecidas en la misma reglamentación jurídica que ha regido el capitalismo académico desde los años ochenta.

El negocio educativo se volvía cada vez más atractivo para el capital privado en la medida que el Estado establecía novedosos mecanismos financieros para que la demanda por educación universitaria fuera para todos aquellos que ansiaban obtener un título profesional universitario para participar activamente en la nueva sociedad que emergía de la reestructuración capitalista neoliberal. La creación del Crédito con Aval del Estado, CAE, hizo saltar la matrícula desde 622.127 matriculados en el año 2005 a 940.164 para el año 2010. En los dos últimos años, a pesar de la crisis provocada por las movilizaciones estudiantiles, la matrícula general del sistema de educación superior en Chile sobrepasó 1.200.000 de personas matriculadas. En menos de una década, la matrícula ha sido doblada. Estamos prontos a alcanzar el “acceso universal”.

Ello obedece a dos razones, por un lado, a que actualmente la oferta en donde estudiar una profesión universitaria es cada vez más amplia y diversificada y, por otro, a los mecanismos económicos y mercantiles destinados a financiar la demanda/ ingreso, especialmente de los sectores sociales más carenciados, a la educación superior. El mercado educativo establecido y desarrollado por el neoliberalismo, a través del capitalismo académico, ha trasladado la responsabilidad de asumir el costo de la educación a las familias en un 85% en los últimos años y un mísero 15% al Estado; y ha sido capaz de ofrecer una cobertura que paradójicamente rompe con la exclusión del sistema universitario social republicano, pero que no elimina ni mitiga la estructura de la desigualdad social y cultural, pues hay universidades ya sea públicas como privadas de primera, segunda, y tercera.

La educación del capitalismo académico, propiciado en los últimos años por los neoliberales, comparte con la educación pública el alto nivel de inequidad en el acceso a la educación superior. Aunque en el último quinquenio puede observarse un aumento sostenido de la participación de los quintiles de ingreso más bajo (I y II), hay un relativo estancamiento de los quintiles de ingreso medio (III y IV) e incluso se señala una caída relativa del quintil de mayores ingresos (I). Sin lugar a duda, que han sido las instituciones de educación superior, entre ellas las universidades privadas, las que han captado y posibilitado el ingreso de estos sectores sociales a la educación privada. Especialmente aquellas universidades que se han definido a sí mismas como universidades con vocación pública.

En realidad, esa auto calificación no pasa de ser un mal slogan publicitario y una pésima comprensión de lo que era la educación pública universitaria.

En la actualidad, el principal elemento de la educación pública ha sido erradicado, el financiamiento estatal-público de la educación universitaria; en consecuencia, no existe la gratuidad ni la semi-gratuidad, lo que se impone es el pago o el semi-pago y el endeudamiento vía sistema de créditos. Todos deben pagar por estar en la Universidad independiente de que su condición sea estatal o privada.

El acceso a las universidades estatales y no estatales tradicionales sigue siendo selectivo y restringido para los sectores sociales mejor preparados y que disponen de mayores recursos económicos, sociales y culturales. En otras palabras, estas universidades siguen siendo elitistas y excluyentes, aunque algunas de ellas, especialmente las regionales, han debido bajar sus puntajes de entrada para alcanzar los mínimos de estudiantes necesarios para su sustentación financiera. O han debido impulsar una agresiva expansión mercantil instalando sedes en otras regiones para poder estar y mantenerse en el espacio regional. La expansión de sedes universitarias en el último quinquenio fue explosiva. Como también su estancamiento y retroceso.

La competencia entre las universidades para obtener la matrícula de los nuevos estudiantes ha consagrado a la educación como un bien de consumo privado haciéndole perder su condición



de bien público. Las campañas publicitarias en los medios de comunicación de masas son abundantes y abrumadoras. Todo lo que se invierte en publicidad es traspasado al estudiante que compra el bien-educación ofrecido en el mercado educativo. La transformación de la educación de un bien público en uno de consumo privado ha sido propiciado y mantenido por las propias universidades del capitalismo académico.

Algunas universidades privadas actuales consideran que por el hecho de definirse como de inclusión social estarían manifestando su vocación pública. Esto también es una falacia histórica y no es más que otro truco publicitario. Pues como he expuesto más arriba, la universidad pública chilena nunca fue inclusiva sino más bien excluyente, elitista y clasista. Favoreció ampliamente el ingreso de los sectores medios y altos de la sociedad. Los hijos del proletariado no ingresaban a la universidad como era la aspiración del fundador de la Universidad Técnica Federico Santa María o de los masones de Concepción o de los científicos y literatos que fundaron la Universidad Austral. Por cierto, esta afirmación no es absoluta, algunos sí lo hicieron gracias al sistema de becas o la gratuidad, pero el porcentaje no superaba el 10%. Ninguna Universidad pública estatal o no estatal tenía como objetivo central la inclusión social. Ni estaba abierta a todos. Esta fue una demanda de la reforma universitaria de los años sesenta y setenta. Durante los gobiernos de Frei Montalva y Salvador Allende, entre 1967 y 1973, la cobertura universitaria nacional se abrió a los sectores populares significativamente. Durante los 17 años siguientes, es decir, hasta los años 90 estuvo cerrada para los sectores populares. La universidad se vino a abrir para esos sectores sociales (quintiles I y II) fundamentalmente desde el año 2005 en adelante. Por consiguiente, el verdadero factor de inclusión social no ha sido la política de admisión de una determinada universidad sino la política de financiamiento establecida por el gobierno de Ricardo Lagos, a través del CAE.

Una verdadera política de admisión de "inclusión social" debiera ser, por tanto, aquella en la que el estudiante ingresa becado con un 100%, es decir, que no debe pagar por recibir la educación que esa institución imparte. La problemática central que aquí se presenta es cómo se financia la institución universitaria que asume algunos de los elementos que caracterizan a la

universidad pública no estatal. Dada las formas de funcionamiento del mercado educativo, ello no es posible.

No basta que las actuales universidades privadas, que responden a distintas motivaciones al momento de constituirse, asuman y declaren que no tienen fines de lucro para ser consideradas como “privadas con vocación pública”, pues lo que definía a las universidades privadas-particulares era el servicio público y sobre todo la “gratuidad” o la “semi-gratuidad” del sistema de acceso. El obtener financiamiento público vía sistemas de créditos u otras modalidades no elimina la condición de que la educación no sea pagada. Tampoco hace “pública” a la universidad el contar con muchos estudiantes becados o con el CAE.

El problema central radica en que la educación y la formación profesional universitaria no se ajusta en absoluto al carácter mercantil. Parafraseando a Karl Polanyi podríamos decir que se trata de “mercancías ficticias”.

Para la adaptación de las universidades a la noción de que estamos ante un bien de consumo o una forma especial de mercancía que requiere ser producida bajo una determinada gestión académica-empresarial, los neoliberales establecieron un conjunto de normas conducentes a posibilitar el desarrollo de la universidad empresa, del capitalismo académico. Para tal efecto, se ha divulgado como un decálogo la llamada Declaración de Bolonia de 1999.

Aunque este decálogo para Chile llegó tarde, pues gran parte de los principales elementos que allí se exponen estaban ya instalados y promovidos -desde los años ochenta- en la sociedad neoliberal chilena. Uno de los aspectos centrales de la Declaración de Bolonia tiene que ver con el tema de la total desvinculación de la financiación estatal y el traspaso de esa financiación a los usuarios del sistema, a los estudiantes. La educación pagada se puso en marcha en Chile en los años ochenta destruyendo la universidad pública estatal y no estatal. La transformó, como hemos dicho, en empresas, abriendo paso a una Universidad corporativa gestionada de modo empresarial, competitivo y rentabilizador y provocando un radical cambio en la relación universidad-sociedad-estado, pues se le sumó la dimensión mercado. Este radical cambio tuvo consecuencias directas sobre

las figuras de profesores, académicos, investigadores y estudiantes. La labor universitaria pasó a ser regida por criterios de la eficiencia empresarial. Instalándose la flexibilidad laboral que impide el desarrollo de actividades académicas de larga duración como es la investigación y la reflexión. Las universidades se han transformado en colegios superiores de formación con académicos mutados en pedagogos. Que deben, más que entregar elementos para conocer, dotar a los estudiantes de habilidades y competencias para el hacer. La universidad que propone Bolonia es aquella que reduce el saber y acrecienta de manera patológica el hacer. Se trata de la **educación por competencias**. Todas las Universidades actuales asumen esta condición.

Por otra parte, el programa de Bolonia sugiere el acortamiento de los estudios universitarios conducente a la obtención de títulos profesionales y grados académicos. Estableciendo jornadas de trabajo semejantes a las existentes en las empresas del capitalismo industrial de 40 horas semanales. Educación para el trabajo.

La calidad se define por la relación entre docencia, investigación e innovación y su conversión en competitividad económica. La ruptura de la dependencia económica del Estado ha permitido asegurar una supuesta mayor autonomía institucional, aunque esta ha quedado atrapada en la maraña de los financiamientos otorgados a la demanda y la condición de acreditación académica de las instituciones de educación superior. La autonomía del quehacer académico en la actualidad queda bajo el control de los miembros no universitarios de los equipos de gobierno universitario, patrocinadores o socios de proyectos financiados con fondos privados o grupos interesados en proyectos de formación. Esta situación impuso la **“gestión por resultados”**.

**La educación por competencias y la gestión por resultados han significado la muerte de la Universidad tradicional.** La proclamación por parte de Bolonia de que la mejor forma de producir el bien de consumo educativo es a través de este tipo de educación, obedece a que el capitalismo académico -también señalado como capitalismo cognitivo- tiene como punto de partida los procesos constitutivos del “vivir” de

los sujetos, en otras palabras, todo aquel conjunto de actividades que el capitalismo industrial había considerado no-productivas económicamente y, que, por tanto, habían sido relegadas o bien al ámbito privado-particular o bien habían sido asumidas por el Estado a través de instituciones del estado del bienestar.

La universidad estatal-pública en el capitalismo académico sigue el modelo de la universidad privada constituida para responder los intereses del proceso de acumulación del capitalismo neoliberal. Ninguna de ellas tiene vocación pública, en el entendido de que se trata de empresas destinadas a producir un bien público no competitivo como es la educación sino un bien de consumo altamente valorado, especialmente, por su rentabilidad futura, en la sociedad.

Debemos tener presente que la sociedad cambió y, por ende, los sujetos. Éstos como el capital y el Estado, consideran a la sociedad como un gran mercado. Eso es lo que existe y que la nueva ley busca profundizar.

En efecto, la presentación de parte del gobierno de Sebastián Piñera del proyecto de ley que modifica la actual normativa que rige los procesos de acreditación de las instituciones de educación superior, está destinada a consolidar y profundizar el capitalismo académico nacional. La actual crisis del sistema de acreditación -a raíz de los distintos casos de corrupción que involucran a diversas instituciones del sistema de educación superior- creó las estructuras políticas de oportunidades para que el gobierno tomara la iniciativa para modificar la normativa institucional que rige los procesos de acreditación, por supuesto, no en el sentido ni en la dirección que reclamaban y demandaban las movilizaciones sociales y políticas impulsadas por los estudiantes y la ciudadanía durante el año 2011. En lo grueso, el proyecto de ley constituye lo que hemos denominado en otros trabajos: una solución de mercado.

Este tipo de soluciones son las que implementan los gobiernos que rigen y administran las sociedades de mercado. Fundamentalmente consisten en corregir, a través de normas y reglas institucionales, las distintas fallas que experimentan los diversos mercados que las conforman. Ello explica que la normativa institucional que rige el funcionamiento del capitalismo académico haya sufrido, en los últimos años, diversas modificaciones, sin

que ello significara en lo sustantivo su transformación. Todo lo contrario. Esos cambios lo han profundizado e institucionalizado. Es la lógica política de todo gobierno neoliberal. El actual proyecto de ley presentado por el gobierno se inserta en esa lógica.

Aquí surge la vieja pregunta leninista ¿Qué hacer? Planteamos esta pregunta luego de exponer ambos modelos de universidad porque ninguno de los dos hace justicia a la idea de que la educación es un derecho y un bien público. Pues la universidad del capitalismo de bienestar fue excluyente, elitista y clasista. Si bien, fue pluralista y algunas veces democrática, su forma de operar fue jerárquica y autoritaria, aunque librepensadora. Por cierto, el modelo actual es todo lo contrario.

Preguntémonos qué tipo de universidad posneoliberal en perspectiva socialista podemos establecer en el futuro, pues la mítica universidad republicana estuvo siempre al servicio del capital lo mismo que la universidad neoliberal. Tampoco demandar la universidad a cargo del Estado es el mejor de los modelos.

La nueva universidad debe ser desde ya pensada. Esa es nuestra tarea.

## **¿Los combates por la Historia o por las “horas de historia”?**

*A la memoria de todos los profesores  
que dieron su vida luchando por la historia.*

*“El presente es lo único que tengo  
el presente es lo único que hay”  
Julieta Venegas*

Las sociedades neoliberales son sociedades sin pasado y sin futuro, en ellas solo existe el presente. El “presente es lo único que hay” nos dice con voz dulzona la cantante mexicana Julieta Venegas. Baudrillard sentenció hace algunos años atrás el “futuro ya está aquí”. El “pasado nos divide”, escribió un representante de la centroderecha concertacionista, y uno de la derecha (nueva de puro vieja) dijo que “los jóvenes no habían nacido aún para saber cómo había sido el pasado reciente nacional”. Desde el Imperio se decretó el “fin de la historia”.

Por todo lo anterior, no nos puede extrañar la medida adoptada por el Ministro de Educación Joaquín Lavín Infante de recortar las horas de clases de historia y ciencias sociales que actualmente se les imparten a las y los estudiantes nacionales del segundo ciclo básico como de primero y segundo año secundario. La medida es coherente con su pensamiento y, sobre todo, con el pensamiento neoliberal dominante.

El postulado central del pensamiento antropológico neoliberal es la constitución de un sujeto social racional individualista desprovisto de cadenas que lo aten al pasado ni aquellas que lo comprometan con el futuro. Este individuo debe ser un sujeto que tenga las competencias, habilidades y destrezas para desenvolverse adecuadamente en el presente hedonista, consumista y vacuo que ofrece la sociedad neoliberal. Que viva para consumir, endeudado, agobiado, estresado, maniatado por

las “manos invisibles” o por las fuerzas oscuras del mercado. Este sujeto es un individuo que vive enajenado en el disfrute y en la entretención, entregado a todos los excesos posibles. Hundido en la inconsciencia de no saber nada de nada. Donde el conocimiento es un concurso de televisión y un juego para llegar a ser un millonario. El sujeto neoliberal no se forma en la escuela, ni en el liceo ni en las universidades, sino que es formado -no deformado como algunos piensan- por la caja idiota, o sea, por la televisión. La televisión es actualmente el principal medio de socialización educativa formativa de las y los niños, de las y los jóvenes como, también, de las y los adultos que habitan y existen en la sociedad neoliberal.

Este sujeto social neoliberal no va a ser formado por la reforma curricular que impulsa el actual gobierno de la derecha neoliberal, pues ya existe. Hace más de treinta años que la acción de la dictadura cívico-militar y de los gobiernos concertacionistas (la centro izquierda neoliberal) posibilitaron de diferentes formas la configuración y conformación de este sujeto social.

Por lo tanto, la reforma educativa del Ministro de Educación Joaquín Lavín vendrá tan sólo a reforzar el proceso, a profundizarlo, en la perspectiva de su consolidación definitiva. En algún sentido viene a completar la tarea que la Concertación dejó pendiente o no supo cómo concluir. Tal vez, tuvo vergüenza política de hacerlo.

El ataque y la destrucción de la formación humanista, crítica, reflexiva y cívica de parte tanto de los curriculistas neoliberales autoritarios como de los concertacionistas neoliberales alcanza su mayor expresión en los años noventa con la incorporación de la perspectiva curricular de la “formación por competencias”, del “aprender haciendo”, del “aprender para el trabajo”, “capacitarse para resolver más que saber”.

Tengo muy presente la destrucción de la “formación humanista” que se les entregaba a las y los estudiantes de la Universidad de Talca y su reemplazo por la “formación por competencias”. La primera enseñaba arte, música, poesía, literatura, historia, filosofía, política, etcétera. Y fue reemplazada por cursos de instrucción desprovistos de cualquier sentido crítico y político. Cuando se proyectó un curso de formación cívica

destinado a desarrollar las competencias para ser un ciudadano activo, reflexivo y soberano, las autoridades universitarias lo consideraron inadecuado y lo cambiaron por otro. Donde todas "esas" competencias fueron reemplazadas por inocuas tareas totalmente alejadas de la contingencia histórica y política.

Es sabido que el pensamiento neoliberal detesta a los ciudadanos activos conscientes y políticamente pensantes. Por eso tempranamente la dictadura cívico militar-neoliberal eliminó del currículo la educación cívica, luego siguió con la filosofía, con las ciencias de la naturaleza. Las transformaciones curriculares implementadas por la dictadura destruyeron entre 1973 y 1983 toda la obra realizada por el estado-docente desde los años treinta en adelante. La educación entendida como factor de movilidad social y formadora de ciudadanos democráticos fue reemplazada por una educación centrada en valores nacionalistas y/o patrioterios y por una educación para el mercado. Todo cambió, nada fue como antes. Como sostienen algunos analistas, la educación republicana-liberal-democrática llegó a su fin.

La asignatura de historia y geografía fue intervenida directamente por la dictadura. El dictador dirigió personalmente la intervención, pues se consideraba a sí mismo un profesor de historia y un historiador militar.

La acción militar actuó sobre los planes y programas de estudios de las Escuelas de Historia de las distintas universidades nacionales. La represión militar, por su parte, se dirigió hacia los historiadores, profesores de historia y geografía, así como a las y los estudiantes de historia. Muchos de ellos fueron exonerados, expulsados, perseguidos, censurados, encarcelados, torturados, exiliados, desaparecidos y muertos. Algunas carreras de historia fueron cerradas o reducidas a un número cerrado de docentes e investigadores, la mayoría de ellos serviciales lacayos de la dictadura y que hoy posan de democráticos tanto en las aulas de las distintas carreras de historia de las universidades del Consejo de Rectores como también de las privadas. Incluso hoy marchan en defensa de la asignatura de historia.

Los planes y programas de la asignatura, así como las escuelas de historia, fueron "limpiados" de todas aquellas perspectivas teóricas -especialmente, la marxista, socialista,



democrática o popular -que pudieran atentar contra el orden político que el “gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden” impulsaba.

Para tal efecto, el historiador conservador Gonzalo Vial Correa se encargó de dirigir la “limpieza ideológica” de la asignatura de historia y establecer los nuevos contenidos dirigidos a la formación “patriótica [de las y los niños y las y los jóvenes a través de las clases y el programa de Historia y Geografía de Chile”. Cabe señalar que el propio dictador se encargó de corregir el Programa de Historia y Geografía para octavo año excluyendo contenidos y reinterpretando otros.

Durante la primera fase de la dictadura militar, la Historia tenía una función política bien precisa y específica que no sólo consistió en justificar el orden autoritario sino dar coherencia a todo un engranaje social, económico y cultural que el capital, a través de la mano militar, imponía a la sociedad chilena.

Las clases de historia en las escuelas, liceos y universidades fueron vigiladas detenidamente por los esbirros de la dictadura. La sospecha política sobre las y los profesores de historia y geografía fue permanente durante este periodo. Muchos de ellos fueron expulsados de los colegios municipales, particulares subvencionados y particulares pagados acusados de ser subversivos y/o peligrosos para el orden imperante. La persecución en contra de los profesores de izquierdas o democráticos fue implacable por parte de aquellos que asumían posiciones de derecha o filo-fascistas. La disputa política por el pasado y su interpretación fue una constante en los años de la dictadura como también durante el periodo concertacionista.

A pesar de las restricciones impuestas a la labor pedagógica de los profesores de historia y geografía, la asignatura gozaba de una especial consideración por la dictadura. Ello explica que, a comienzos de los años ochenta, la dictadura tomara una trascendente decisión política que fortaleció la presencia curricular de la asignatura de historia y geografía pero que, al mismo tiempo, debilitó poderosamente la conciencia histórica de los estudiantes. Desde 1983-1984 se incorporó a la Prueba de Aptitud Académica la rendición obligatoria de la Prueba de Historia y Geografía de Chile. A partir ese momento los estudiantes de

enseñanza media que aspiraran a ingresar a la Universidad debían rendir obligatoriamente dicha prueba que tenía una ponderación de un 20% del puntaje global de la PAA.

En aquella oportunidad las y los profesores de historia y de geografía -esos eternos olvidados- ni las y los estudiantes de las carreras de historia y geografía de las distintas universidades, encabezados por sus directores, salieron a la calle a celebrar ni a condenar la medida. No tengo noticias de que se haya desatado una polémica semejante a la actual. Tal vez, la censura y la autocensura que dominaban a los medios de comunicación de la época impidieron conocer la opinión de los profesores o exponer alguna polémica sobre el particular. El silencio puede explicarse también por el hecho de que la mayoría de los directores de las escuelas de historia de las universidades nacionales eran fieles y obedientes adherentes de la dictadura. Muchos de ellos siguen hasta la actualidad en esos departamentos. Tampoco se oyeron voces de los historiadores profesionales. Lo más seguro es que las y los jóvenes interesados en ingresar a las universidades a estudiar carreras no humanistas sino científicas y relacionadas con las matemáticas se quejaron o manifestaran algún malestar por la dictatorial decisión.

Lo cierto es que la medida adoptada trajo una serie de consecuencias “positivas” para el gremio de las y los profesores de historia y geografía y constituyó un rentable negocio para los preuniversitarios. Los primeros vieron incrementar súbitamente sus “horas de clases”, por ende, sus precarios ingresos, y los segundos vieron incrementada la demanda por cursos destinados a la preparación de la Prueba de Aptitud en historia y geografía de Chile.

En efecto, miles de jóvenes demandaron una preparación técnica e instrumental para salvar el nuevo obstáculo que el Ministerio de Educación de manera inconsulta establecía para llegar a la Educación Superior. Desde Arica a Punta Arenas los colegios y liceos tanto municipales, particulares subvencionados y particulares pagados debieron implementar internamente cursos especiales para preparar a las y los estudiantes en la nueva prueba. Sin lugar a duda que los más contentos fueron los Preuniversitarios que debieron aceleradamente abrir y establecer

más cursos y contratar más profesores de historia para preparar e instruir a los estudiantes en la nueva prueba.

Por otro lado, las editoriales dedicadas a la edición de los textos escolares vieron incrementar sus ventas y pusieron a trabajar a toda máquina sus prensas para editar cientos de manuales de historia y geografía de Chile, facsímiles preparatorios y cursos redactados, preparados y elaborados por un “ejército de profesores de historia y geografía”; los cuales se multiplicaron año tras año.

Nadie se preguntó ni discutió la calidad de esos textos. Muchos de ellos se legitimaban a través del aval y rúbrica de algún historiador “consagrado”: Vial Correa, Sergio Villalobos, Silva Galdames, entre otros. Se partía del supuesto que esos manuales eran válidos y óptimos para que cualquier interesado en rendir la Prueba de Historia y Geografía pudiera prepararla adecuadamente y alcanzar un buen puntaje.

De una u otra manera la decisión de la dictadura no fue discutida sino más bien avalada por el gremio de las y los profesores de historia y geografía como también de los historiadores profesionales. Para todos, la decisión de establecer la obligatoriedad de la Prueba de Historia y Geografía (PHYG en adelante) resultó ser un rentable negocio, salvo para los estudiantes y los padres apoderados que vieron aumentar los costos y los recursos que debían destinar para ingresar a la universidad. En una sociedad profundamente desigual como la chilena, los sectores populares pobres y medios vieron disminuidas sus posibilidades para acceder a la universidad.

La obligatoriedad de la PHYG, como he dicho, no fortaleció el desarrollo pedagógico de la asignatura. La transformó en un gran negocio, al mismo tiempo que debilitaba la enseñanza de la historia nacional desde una perspectiva crítica o alternativa o democrática.

Este es un punto que hay que distinguir meridianamente para tener claridad de qué estamos hablando y de qué combates se están librando. En efecto, la asignatura pasó a ocupar el tercer lugar de importancia en el currículo de enseñanza media. Un estudiante, durante los cuatro años de enseñanza media, va a

tener tres horas de Historia y Geografía de Chile semanales más dos horas de Historia Universal. Cinco horas semanales, es decir, 150 horas pedagógicas anuales. En suma 600 horas aproximadamente a lo largo toda su enseñanza secundaria. Podemos preguntarnos, entonces, por qué con esa carga horaria los estudiantes debían recurrir a los preuniversitarios, a clases particulares, a los cursos de nivelación, a los ensayos, y otras actividades pedagógicas anexas para poder rendir satisfactoriamente la PHYG. Fundamentalmente, porque no tenían certeza ni seguridad de lo que les habían enseñado y ellos aprendido.

En razón a la fragilidad de lo aprendido en la institucionalidad formal, asistían, masivamente, a tomar los cursos preparatorios que ofrecían los cientos de preuniversitarios que se multiplicaban como “callampas” en el país. La gran mayoría de estos cursos eran y son realizados por los propios docentes que hacen clases en los colegios y liceos municipales y particulares subvencionados. Es que la obligatoriedad se transformó en un negocio redondo. Incluso un emblemático e histórico colegio de Chile implementó un preuniversitario, organizado por los propios docentes de Historia y Geografía, Lenguaje, Matemáticas y otras asignaturas, los sábados, destinado a preparar a los estudiantes para la PAA. Por cierto, debidamente remunerado por los estudiantes.

Este sistema se amplió y se incorporó en la mayoría de los liceos de Chile. Todos los actores involucrados en el proceso educativo: profesores, estudiantes, padres y apoderados participaron activamente en la mercantilización de la enseñanza o en la preparación para la PAA. Este fenómeno es una muestra del profundo y explícito reconocimiento de lo que se enseñaba durante los años de secundaria: no servía o era deficiente para rendir la prueba PAA.

Durante las dos décadas que la asignatura de Historia y Geografía de Chile gozó de un privilegiado lugar en el currículo de la enseñanza media -en compañía de las otras dos tradicionales y “temibles” asignaturas de “castellano” (hoy lenguaje y comunicación) y matemáticas- se convirtió en un “dolor de cabeza” y un “pesado lastre” para los jóvenes estudiantes.

Con todo, la conciencia histórica o, como hoy se dice, la memoria histórica de dos o tres generaciones de chilenos y chilenas no aumentó ni un ápice. Muchos de ellos detestan hasta el día de hoy, a la historia.

La enseñanza de la historia se volvió instrumental, mecánica, tradicional, aburrida, sin sentido alguno que no fuera la rendición de la PHYG. Las y los profesores de historia, es cierto, vieron aumentar sus horas de clases y, tal vez, aumentar sus ingresos. Corrían de un lugar a otro para atender la creciente demanda por cursos de historia y geografía. La mayoría de ellos abandonaron el rol de ser los agentes sociales y políticos para la formación de una ciudadanía activa y cívica. Se volvieron funcionales con el sistema: durante años transportaron el viejo manual de Historia de Chile de Frías Valenzuela, o el más moderno, pero no menos conservador y tradicional Manual de Historia de Chile de Sergio Villalobos Rivera y otros autores o, simplemente, los textos preparados por cualquier preuniversitario. Los repitieron de memoria y con ellos adormecieron las conciencias de los estudiantes. Los profesores se transformaron en la odiosa y aburrida “vieja” o “viejo” de historia.

Durante dos décadas practicaron y perfeccionaron el método de las tres “r”: repasar, repetir y reducir la historia de Chile a un esquema preciso y básico que partía con los pueblos originarios hasta los años setenta del siglo pasado. Era un saber histórico condensado, instrumental, funcional y desechable. El estudiante debía saber lo justo y necesario. Entre menos historia de Chile supiera, mejor le iba a ir en la PHYG. Porque de esa manera no iba a descubrir las contradicciones, las equivocaciones, las estupideces, las incongruencias, de muchas de las respuestas que aparecían en los facsímiles de preparación como también en la misma prueba de aptitud académica. Prueba que era elaborada por “expertos pedagogos en historia de Chile”.

Ni la obligatoriedad de la PHYG ni la mayor cantidad de cursos de historia, ni los cientos de toneladas de libros, folletos, facsímiles y textos destinados a la preparación de esa prueba, ayudaron a conformar la conciencia histórica de las y los jóvenes chilenos durante cerca de dos décadas. Los estudios que se han realizado al respecto revelan que los estudiantes que la rendían poseían un bajo dominio de los distintos contenidos que ésta

abordaba. Un estudio realizado por la Universidad de los Lagos señala: “que se observaron que los contenidos más difíciles de lograr correspondieron a la creación de una nación, Chile en el mundo y al tema de la sociedad finisecular, además alumnos presentaban un alto porcentaje de omisión”.

Otra encuesta sobre qué tan cultos son los chilenos y chilenas, realizada en el año 2008, otorgó un 3.3 como promedio en Historia de Chile. Según la Directora de la Fundación Futuro Magdalena Piñera, este resultado es “una voz de alerta bien significativa que muestra que los chilenos no conocemos nuestra historia, no la valoramos, por lo tanto, es un riesgo grande de repetir aquellos episodios que no quisiéramos que nunca se repitan”. Pero, al mismo tiempo, es demostrativa del fracaso de la enseñanza de la historia y geografía implementada no solo por la dictadura sino, también, por la Concertación.

Por esa razón, cuando en el año 2003 la Ministra de Educación Mariana Aylwin, profesora de Historia y Geografía y Educación Cívica, puso fin a la obligatoriedad de la Prueba de Historia y Geografía de Chile -como en el viejo poema de Carlos Pezoa Véliz, “tras la paletada, nadie dijo nada”-, tan sólo un gran ¡¡¡ufff...!!!!, de alivio fue exclamado por miles y miles de jóvenes que se libraban de la pesada cadena impuesta por la dictadura.

Me pregunto por qué en esa oportunidad nadie dijo nada. Dónde estaban las y los profesores de historia defendiendo la formación de la conciencia histórica y cívica de la ciudadanía como hoy en día. Tal vez porque la prueba no fue erradicada del proceso de selección universitaria, pasaba a ser electiva y muchas carreras universitarias la siguen solicitando como requisito de ingreso. Es decir, el negocio no era afectado mayormente.

Pienso que la decisión ministerial del año 2003 implicó realizar pequeños ajustes al mercado educacional, poca cosa, en realidad. En cambio, la decisión del Ministro Lavín es más radical. Pues, aunque no afecta directamente a los contenidos de la asignatura, pues estos ya estaban jibarizados y recortados, si lo hace a las “horas de clases” que realizan los profesores de historia y, tal vez, con esa medida a sus ingresos actuales como futuros. He aquí el meollo principal de los actuales combates por las “horas” de la asignatura de historia y geografía.

Este conflicto debemos ubicarlo en la conflictiva relación entre el Estado, Mercado y la Sociedad Civil, tan propio de las sociedades neoliberales. En efecto, el Estado (Ministerio de Educación) adoptó esta reforma educacional radical no por su profundidad pedagógica ni su sentido educativo sino por los efectos que ella tendría en las otras esferas sociales y económicas de la sociedad neoliberal. El mercado educacional sufrirá un ajuste importante. Lo más probable es que en el corto plazo las matrículas de las carreras de pedagogía en historia y geografía experimenten una significativa reducción. Pero, al mismo tiempo, por efecto de la demanda por profesores de matemáticas y de lenguaje, hará crecer las matrículas de ambas carreras. El mercado se va a equilibrar dirán los economistas neoliberales. Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la cuestión se activarán y movilizarán. Como lo hemos observado en estos días.

Ahora bien, si no logran comprometer a otros actores sociales como son los propios estudiantes y sus padres apoderados en un combate efectivo no por las "horas", sino por la "historia", el tiempo histórico será implacable con el movimiento. Este involucramiento debe ser pronto, pues cuando se haga ley o se institucionalice la reforma curricular todo estará perdido, ejemplos sobran en la historia reciente nacional. Tampoco se puede confiar en la centroizquierda concertacionista neoliberal y sus parlamentarios, ellos pavimentaron el camino para que Joaquín Lavín llegara al Ministerio de Educación.

Por lo tanto, el único recurso social y político que queda es la constante movilización social y política y la conformación de un gran frente social por la "historia".

Los combates por la Historia no debieran ser pensados como la exclusiva defensa de las "horas" de clases de historia y geografía de Chile que hoy se realizan ni tampoco por la defensa del pasado tal cual como se enseña hoy en las escuelas nacionales, sino, todo lo contrario, los combates deben ser por la Historia como futuro. ¿Qué significa esto?

Varias cosas. Levantar una plataforma política que, partiendo de este coyuntural problema, nos permita discutir de una vez por todas en qué sociedad queremos vivir. Segundo, proponer

un proyecto educativo para un nuevo Chile con un currículo equilibrado que proporcione una formación humanista, crítica, reflexiva, democrática, sin descuidar las competencias y habilidades necesarias para desenvolverse en el mundo actual. Un proyecto educativo que esté inserto en una nueva economía acorde con un sistema político democrático, libertario e igualitario en todos los aspectos de la vida.

No estamos por la reforma curricular de Lavín, pero tampoco estamos con todos los planteamientos que el gremio de profesores de historia y geografía han formulado en estos días.

Después de todo lo expuesto quiero plantear las siguientes interrogantes:

- a) ¿Para qué el Ministro Lavín y el Gobierno quieren más horas de lenguaje y matemáticas, si ya disponen de suficientes con la reforma educacional implementada por los gobiernos concertacionistas? Dado los malos resultados obtenidos por los estudiantes nacionales en ambas asignaturas cabe pensar que el problema no es de cantidad de horas sino de la calidad de la enseñanza que entregan los profesores de matemáticas y de lenguaje. Tengamos presente un dato muy relevante que se olvida en este conflicto: en el ranking de las asignaturas detestadas por los estudiantes de básica y secundaria el primer lugar lo ocupa la matemática, el segundo lugar, lenguaje (castellano) y, en tercer lugar, la historia. Con el aumento que se propone se pueden tener como consecuencias el incremento de la deserción, la apatía y la desafección por el proceso educativo en general.
- b) Sería muy interesante saber y conocer cuál es la opinión que tienen los profesores de estas asignaturas sobre la reforma propuesta y, especialmente, sobre la enorme responsabilidad social que van a tener que asumir de aprobarse la misma. Ellos han guardado un estratégico silencio, semejante al que tuvieron los profesores de historia cuando se estableció la obligatoriedad de la PHYG en el año 1983-84. Estarán con la calculadora en la mano, registrando y sumando las nuevas horas que les tocarán y calculando en cuánto se verán aumentados sus ingresos



con la radical medida del Ministro Lavín. Se requiere escuchar su opinión.

- c) Sería interesante saber qué están pensando los padres y apoderados sobre la cuestión en conflicto. También es necesario que opinen. No pueden guardar silencio.
- d) Sería interesante saber qué opinan los estudiantes que, desde el próximo marzo, verán menos a los profesores de historia, pero más a los de lenguaje y matemática. Queremos saber qué opinan.
- e) Por último, ¿para qué los profesores de historia y geografía quieren mantener las horas que posee la asignatura actualmente? ¿estarán dispuestos a cambiar las formas de enseñar la historia y la geografía? ¿cuál es el proyecto alternativo que ofrecen a la sociedad y sobre todo para que las chilenas y los chilenos se transformen en ciudadanos constructores de historia?

Sostengo que esta no es un batalla particular ni específica de los profesores y estudiantes de historia y geografía sino de todas y todos los que buscamos superar el actual presente histórico. Por lo tanto, la batalla que queremos librar y participar no es por las horas de historia sino por la historia misma.

## **El “Olvido” Educativo: ¿Muerte de la Historia o Revolución Social?<sup>129</sup>**

### **De la “compulsión al Olvido” a la democratización del saber histórico**

Desde mucho antes de 1990 las élites de poder autoritarias y antidemocráticas, herederas de la dictadura cívico-militar, en concordancia con las élites políticas democráticas concertacionistas y más tarde, con algunos sectores de la ex Nueva Mayoría, han procurado imponer, como señaló Tomás Moulian en 1997, el “olvido” institucionalizado,<sup>130</sup> en la sociedad neoliberal chilena.

Si bien, el olvido ha sido y es un elemento constitutivo de las sociedades posmodernas, especialmente las neoliberales, en tanto negadoras de la historia -entendida, como pasado y, sobre todo, como futuro-, en el caso específico nacional la compulsión al olvido estaba destinada a borrar lo acontecido, lo vivido, lo experimentado, ya sea en la historia reciente como pasada. Específicamente, se trataba de una censura total sobre la etapa previa al golpe de Estado de 1973; al periodo de la dictadura cívico-militar (1973-1990) e incluso, a la primera fase de la democracia neoliberal. Había que borrar o reiniciar la memoria colectiva de las ciudadanía actuales como de las futuras generaciones con el objeto de que no volvieran a “repetir la historia” o para que “nunca más” volviera a ocurrir lo que ocurrió.

A lo largo de los últimos 21 años (1998-2019) los diversos intentos por imponer el “olvido” han fracasado. Fundamentalmente por la resistencia activa al olvido, materializada en la actualidad por el movimiento social por la *preservación de la memoria* que impulsan diversos y heterogéneos grupos sociales, políticos y académicos de ciudadanos y ciudadanas.

---

<sup>129</sup> Parfraseo el título del libro de Pierre Bertrand (1977). *El Olvido, revolución o muerte de la historia*. Siglo XXI Editores, México

<sup>130</sup> Moulian, Tomás (1997). *Chile Actual. Anatomía de un mito*. LOM Ediciones/ ARCIS, Santiago de Chile.

Este movimiento social, político y cultural, que ha logrado tener algo de visibilidad política y comunicacional, fue gatillado por el denominado *"estallido de la memoria"*, provocado por la conmemoración de los 30 y 40 años del derrocamiento del gobierno popular, socialista y revolucionario de Salvador Allende y de la Unidad Popular, en los años 2003 y 2013, respectivamente. Sin embargo, el *"estallido de la memoria"* tiene su antecedente inmediato, cinco años antes, en la detención del exdictador en Londres, el 22 de octubre de 1998, para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Este hecho destrozó el consenso historiográfico establecido con ocasión del Informe Rettig.

La compulsión al *"olvido"* se levantó como una estrategia para bloquear y blanquear *"la memoria"* y la historia reciente, cuyo objetivo era contribuir al *"consenso político"* destinado a sostener al nuevo régimen político posautoritario: la democracia protegida. *"El consenso es la etapa superior del olvido"*, nos dice Moulian. Y, agrega que: *"es el acto fundador del Chile Actual"*. Pero solo del Chile de los años noventa.

El Chile actual duró menos de una década, pues un año más tarde de lo señalado por Moulian, la detención de Pinochet hizo estallar uno de los pilares centrales del consenso político. Y, sobre todo, abrió una estructura política de oportunidades para la instalación de la historia reciente y pasada en el debate público nacional y el surgimiento de las múltiples *"memorias"* ciudadanas.

Con la detención de Pinochet se dio inicio al comienzo del fin de la estrategia política de imponer el *"olvido"* en la sociedad chilena. Desde ese momento y hasta la actualidad, la ciudadanía nacional se resiste a olvidar. Así, una dimensión central del *"Chile Actual"* se licuó de la misma forma como se derritió el Iceberg del Sevilla, el icono del blanqueo y bloqueo de la memoria.

La prisión londinense del dictador quebró, al interior de la sociedad neoliberal concertacionista, el silencio oficial en torno a la historia reciente, del tiempo presente y abrió el debate político por el pasado, impulsando a la historiografía profesional académica a hacerse presente en el debate político, o sea, en público.

El aparecer en la escena pública se hizo a través del primer Manifiesto de Historiadores.<sup>131</sup> Por primera vez, un conjunto variopinto de historiadores académicos institucionalizados emitió y respaldó una opinión histórica y política relativa a discutir las premisas centrales del discurso histórico construido por el dictador y, sobre todo, de su principal defensor, el historiador conservador Gonzalo Vial Correa. Con esta acción comunicacional, las y los historiadores profesionales, quebraron el consenso histórico-político oficial-estatal establecido en el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación de 1990, conocido como Informe Rettig.

Ese consenso historiográfico constituía una dimensión política importante del pacto de dominación establecido por las élites de poder autoritarias y las élites políticas concertacionistas en 1990 con el objeto de consolidar y proyectar la institucionalización política autoritaria. El quiebre, como veremos, va a dar lugar a un amplio proceso de democratización del saber histórico. Aunque no logró poner coto a la estrategia estatal por el “olvido” o por el “control estatal” del pasado.

En los últimos tres lustros (2003-2019) la acción de las organizaciones de la sociedad civil por la “memoria” han tenido un lugar central en la lucha política contra el “olvido”. A lo largo y ancho del país han surgido los “sitios de memorias” que permiten visual y territorialmente individualizar y localizar los lugares en donde la dictadura terrorista practicó la tortura, o desde donde hizo desaparecer y asesinó a los partidarios y simpatizantes de la Unidad Popular y luego a los opositores de la dictadura, etcétera. Un sitio emblemático de memoria es, por ejemplo, las graderías del Estado Nacional, que recuerda a todas y todos los asistentes a ese campo deportivo que fue un “centro de detención, tortura y asesinato” en los primeros meses de la dictadura. Así la memoria se mantiene viva.

Pero también, paradójicamente, y al contrario de lo pensado y sostenido en los años tempranos de la transición -en los años noventa-, el Estado realizó y concretó un gesto político potente en contra de la “compulsión al olvido”. El cual podemos interpretar como una nueva estrategia política destinada a

---

<sup>131</sup> Grez, Sergio, y Gabriel Salazar (compiladores) (1999). *Manifiesto de Historiadores*. LOM Ediciones, Santiago de Chile.

obtener el control y el manejo del pasado reciente, a través de establecer monumentalmente la "historia oficial". En efecto, en el año 2010, como parte de la conmemoración del Bicentenario de la Emancipación nacional de 1810, se inauguró el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos con el objetivo de mantener "vivo" lo acontecido y vivido durante la dictadura cívico-militar.

Así las y los chilenos de las actuales y futuras generaciones podrán percibir y aquilatar pedagógicamente lo que fue el genocidio popular perpetrado por los agentes del Estado, especialmente por las Fuerzas Armadas y de Orden, que durante 17 años ocuparon militarmente el país. La memoria que allí se expone es la "oficial", la producida por el Estado. Esta tiene hoy un espacio y un lugar físico que recuerda y enseña lo acontecido.

El Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, al igual que los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1990) y de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (2010), el Informe Rettig y el Informe Valech, respectivamente, constituyen iniciativas estatales que tienen como objetivo político fundamental producir y entregar a la comunidad nacional una "verdad histórica jurídica y política de carácter oficial" de lo sucedido desde 1973 hasta el fin de la dictadura cívico-militar. Se trata de la reconstrucción de una "memoria oficial" de la historia reciente desde el "saber estatal".

Por eso, ambos informes son aproximaciones valiosas, pero insuficientes a la historia política reciente (1970-1990). La estrechan y la encierran en una narrativa específica, la cual, por lo general, opta por una determinada interpretación políticamente consensuada, específicamente del periodo previo a la intervención militar de septiembre de 1973. Por ejemplo, el Capítulo I de la Segunda Parte del Informe Rettig, dedicado a analizar el Marco Político previo a la dictadura, entrega los antecedentes histórico-políticos que preceden al derrocamiento del Gobierno de Salvador Allende y de la Unidad Popular de septiembre de 1973. En tan solo ocho páginas, los redactores del Informe, provenientes tanto de sectores políticos cercanos a la dictadura como a la oposición dictatorial, consensuaron una interpretación histórica que excluía la visión histórica y política de los sectores políticos y sociales derrotados, perseguidos, exiliados, torturados, desaparecidos y

asesinados, en otras palabras, a los partidarios del gobierno de la Unidad Popular. En cambio, la Comisión Rettig incluía al historiador y exministro de Educación de la Dictadura, Gonzalo Vial Correa, uno de los redactores del Libro Blanco del Cambio de Gobierno y del Plan Z, ambos, artefactos elaborados por la dictadura militar para justificar y avalar el genocidio popular.

Esa presencia explica por qué en esas ocho páginas no se nombra ni se identifica al acontecimiento ocurrido el 11 septiembre de 1973 como un “golpe de estado militar” o como una acción destinada a derrocar a un presidente legítimo y constitucional, sino, más bien, el Informe expone un conjunto de factores políticos y sociales que, en su perspectiva, abrieron entre 1970 a 1973 -los tres años de la Unidad Popular- una crisis política que conducía a una “guerra civil”. En función de evitar esa “guerra civil” en ciernes, la intervención de las Fuerzas Armadas y de Orden, en 1973, resulta decisiva y central. Estas aparecen como instituciones neutrales y apolíticas, no abanderadas por ninguno de los bandos en conflicto. Todos sabemos hoy que esa interpretación es falsa y no corresponde a la realidad histórica. Las Fuerzas Armadas y de Orden actuaron y accionaron en defensa del orden capitalista que el gobierno socialista de la Unidad Popular busca transformar.

Por consiguiente, tanto el Informe Rettig como el Valech y, tal vez, en menor medida, el Museo de la Memoria, siendo valiosos e importantes recursos para preservar la memoria, generar algo de justicia y establecer relativamente la verdad histórica, han sido y son parte de una operación estatal general, a cargo de los gobiernos posdictatoriales, de producir el control político de la historia reciente o instalar la historia oficial o alojar en la conciencia histórica de la ciudadanía, digamos, un “chip cargado de memoria corta y limitada”, o sea, una memoria histórica oficial.

Sin embargo, esa operación política estatal ha tenido diversas resistencias. No solo provenientes de los sectores vinculados con las víctimas de la violencia terrorista estatal, sino también de los sectores políticos ligados a la defensa de la obra política e institucional de la dictadura, así como a la derecha política nacional.<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup> Sobre la posición de la derecha intelectual sobre esta problemática es útil consultar el libro de Andrés Estefane y Gonzalo Bustamante (Compiladores). *La Agonía de la Convivencia. Violencia política, historia y memoria*. Universidad Adolfo Ibáñez/RIL Editores, Santiago de Chile, 2014.

La memoria no oficial se mantiene viva no solo gracias al movimiento social por la memoria señalado o la existencia del Museo, sino, también, a un vasto y amplio, diverso y plural movimiento historiográfico que emana tanto desde los centros universitarios de formación de profesores de historia como de las y los historiadores profesionales. O sea, del saber académico. Además, desde el “saber popular”, diversos colectivos populares, en los últimos años, han producido conocimiento social histórico con el objetivo de auto educarse.

Las y los sujetos subalternos, hoy por hoy, no se educan solo en la “escuela formal”, sino muchos de ellos se autoeducan en su propias organizaciones territoriales-poblacionales, barriales, etcétera. Ese movimiento social, invisible para la gran mayoría de los centros del poder, escribe y difunde su propia historia. Pobladores, campesinos, estudiantes, mujeres y pueblos originarios investigan, redactan, discuten y producen su propio saber histórico, en algunos casos, se vinculan con los saberes que produce el saber académico, especialmente, aquellos que trabajan en la historia social u otros; lo hacen de manera independiente y autónoma. Destaca el movimiento historiográfico del pueblo mapuche.

El despertar de los “Weupifes”, por ejemplo, ha sido fundamental para el fortalecimiento, recuperación y potenciación política de la identidad histórica y cultural de los mapuches y su lucha, en las últimas décadas.

Unos y otros han dinamizado la producción de saberes relativa a la historia tanto del siglo XIX como del XX. Este grupo heterogéneo de científicos sociales: historiadores, sociólogos, antropólogos, psicólogos sociales, entre otros, también se han internado en el pedregoso y pantanoso terreno de la “historia reciente” o del “tiempo presente”. Abriendo sendas que, hasta hace algunas décadas, la “historiografía formal” mantenía vedadas o prohibidas.

La historiografía formal-tradicional consideraba que la historia del presente o reciente no podía abordarse ni analizarse, fundamentalmente porque no había transcurrido el tiempo histórico necesario para tener una perspectiva analítica aséptica para abordar el pasado cercano o reciente o actual. Esa concepción

historiográfica, felizmente, ha sido superada y abandonada por las nuevas generaciones de historiadores.

El amplio movimiento historiográfico de los últimos años se ha traducido en una mayor producción de trabajos históricos. Y con ello, se ha incrementado significativamente el conocimiento social, político, económico y cultural de distintos y diversos problemas y procesos históricos de nuestra sociedad. Paradojalmente, ya sea por la resistencia activa o pasiva a la “compulsión al olvido” promovido por el Estado, o por la tradicional disputa política por el pasado, se ha producido una acentuada y notoria democratización de la producción social del conocimiento y del saber histórico.

La democratización del saber histórico se inició con la ruptura del consenso historiográfico establecido en el Informe Rettig. Esa ruptura tiene en el Manifiesto de los Historiadores de 1999 su punto de partida. Este fue impulsado y sostenido, fundamentalmente, por las y los historiadores y científicos sociales que trabajaron la “historia reciente” de manera autónoma e independiente durante la dictadura. Los cuales habían nucleado, en torno al “Encuentro de Historiadores Jóvenes”; al área de historia de la FLACSO-Chile; al Instituto de Estudios Contemporáneos, IEC; al Centro de Estudios Latinoamericanos, CEL; a la Academia de Humanismo Cristiano; Educación y Comunicaciones, ECO; al Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, ICAL; a Sur, Profesionales, entre otros. La mayoría de los firmantes y adherentes del Manifiesto eran académicos insertos en la academia universitaria formal pública o privada.

La publicación del Manifiesto se constituyó en la primera acción política colectiva de un gremio que se ha caracterizado tradicionalmente por su acrecentado y extremo “individualismo” y conservadurismo profesional. Más tarde vendrán no solo nuevos Manifiestos, sino algo que quiebra completamente lo “acartonado” de la tradición histórica: la rebelión de los historiadores en apoyo a las luchas del pueblo mapuche y en oposición a los recortes de horas de historia impulsados por el exministro de Educación Joaquín Lavín. Los “historiadores de los ochenta” salieron a la calle en los tiempos del bicentenario.



Tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, la producción de saber histórico era una tarea de los historiadores profesionales. La mayoría de ellos vinculados a la oligarquía y a los sectores medios altos. En el siglo XIX, los principales historiadores conservadores y liberales eran destacados intelectuales orgánicos de la clase dominante. En el siglo siguiente la producción historiográfica siguió en manos de los historiadores vinculados a los sectores dominantes. Solo la aparición de un puñado de historiadores y profesores de historia vinculados a la izquierda socialista y comunista, relativizaron la visión y el saber histórico producido e instalado, pero no lograron quebrar la hegemonía del pensar histórico dominante.

La visión de la historia producida, divulgada y enseñada en la Escuela, en el Liceo y en la Universidad fue aquella que produjeron los historiadores ligados a las élites del poder o en el poder quienes, a la vez, influían en la elaboración de los manuales y libros de historia que el Estado “docente” distribuía entre las y los niños y jóvenes que asistían al sistema educativo nacional. Y, todos ellos, formaron a cientos de profesores de historia. Los cuales transmitían y reproducían esos conocimientos, de manera acrítica, a sus estudiantes. Estos sectores sociales y políticos que apoyaron el golpe militar de 1973, a la dictadura cívico y militar, a la Constitución de 1980, a la democracia protegida y al modelo de acumulación neoliberal, y que hoy se agrupan o adhieren a los partidos políticos de la derecha y, por cierto, también a algunos partidos que conformaron la ex Concertación y la ex Nueva Mayoría, no han detenido su intento por imponer el olvido. A través de una nueva estrategia política e institucional ya no buscan “blanquear la memoria” sino reducir o jibarizar la formación histórica de las y los jóvenes estudiantes de enseñanza media.

En efecto, desde 1990 hasta la actualidad, el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación (CNE), han realizado un conjunto de iniciativas que han afectado las bases curriculares tanto de la enseñanza básica como media, pero también de la enseñanza superior, ya sea técnico-profesional o universitaria.

Estas iniciativas pedagógicas y educacionales han profundizado los aspectos centrales de la concepción neoliberal

de la educación, cuya principal tarea es la de formar un sujeto social preparado y habilitado para participar activamente en la sociedad neoliberal. Esto se sintetiza en la idea de que las y los jóvenes “aprendan a hacer” más que “saber”.

El principal publicista de la sociedad neoliberal y asesor permanente del Ministerio de Educación en los últimos años, Eugenio Tironi, planteó hace más de una década atrás, cuando el país se encaminaba al Bicentenario, que uno de los principales problemas que tenía la sociedad chilena para completar su proceso de modernización liberal-conservadora” estaba en su sistema educativo.

Según el sociólogo Eugenio Tironi, en la sociedad chilena la ciudadanía “... vive un estrés permanente por la cuestión de la educación”, fundamentalmente por la importancia que las familias otorgan al proceso educativo como vehículo de movilidad social y económica. Preocupación que también ha tenido el Estado, desde 1990, el cual ha aumentado significativamente el aporte fiscal a la educación. Sin embargo, en los últimos años, la educación se ha transformado en un “vía crucis” que atormenta aún más a la Sociedad civil, al Mercado y al Estado. Fundamentalmente, desde la “revolución pingüina de 2006” de los estudiantes secundarios y desde 2011, a partir de la movilización de los estudiantes universitarios que exigían “educación gratuita y de calidad”, pasando por las transformaciones operadas en el sistema educativo realizadas por el gobierno de M. Bachelet (2014-2018), el establecimiento de la gratuidad universitaria, fin de la selectividad en la enseñanza básica y media, de la inclusión y de la discriminación, etc.

A pesar de la relevancia de la educación básica, media y universitaria en Chile, para las familias que conforman la sociedad civil; para los empresarios privados de la educación particular subvencionada que controlan el mercado de la educación, así como para la educación pública Municipal y la universitaria pública, hay dos aspectos que la caracterizan entre los países de la OECD: su “**mala calidad** o que se está quedando atrás respecto a países que tienen niveles de desarrollo inferiores al de Chile”.<sup>133</sup> La mala calidad de la educación nacional, en todos sus niveles,

---

<sup>133</sup> Tironi, Eugenio (2005). *El Sueño Chileno*. Taurus, Santiago de Chile, pp.256.

ha sido diagnosticada por distintos expertos en la materia que provienen de la izquierda y la derecha.

Dado que gran parte de la ciudadanía neoliberal rechaza y abomina de la REVOLUCIÓN social como también lo hace la izquierda posmoderna y moderna (PSCH, FA, PCCh, entre otros) vamos irremediablemente hacia la muerte de la Historia. Por lo tanto, para impedir la muerte de la Historia como también de la Historiografía y de las clases de historia, habría que impulsar resueltamente la revolución política y social, cuyo principal objetivo sea poner fin a la actual dominación y hegemonía neoliberal.

## **Las Grietas al sistema previsional**

### **Poder del capital, propiedad privada y cambio constitucional en la sociedad neoliberal**

Si las y los ciudadanos nacionales piensan que el Cambio Constitucional propuesto a partir del proceso constituyente abierto por el gobierno de la Nueva Mayoría, va a quebrar o a poner fin al poder infraestructural que detentan los grupos socioeconómicos como los Matte, los Luksic, los Angelini, los Falabella, los Ibáñez, los Paulmann, los Yarur, los Claro, los Piñera, los Ponce y otros menores, están equivocados.

Ningún cambio constitucional ni la instalación de una nueva Constitución Política del Estado ha logrado quebrar o poner fin a la estructura del poder del capital. En Chile hay que abolir el poder de estos grupos, el cual, por cierto, no se encuentra en el CEP, ni en los Partidos Políticos a que adhieren y financian, ni en sus lacayos que están en el Parlamento o en los Municipios; su poder se genera en el control, posesión y propiedad de los medios de producción agrarios, mineros, marinos, industrial o en los medios de comunicación, televisión, prensa u otros. Su poder infraestructural se expresa en el control de todos los centros de producción de la hegemonía: escuelas, universidades, centros de formación técnica, colegios, etcétera. Se expresa en el control de organizaciones sociales, eclesiásticas, en fin, su poder influye directamente sobre el poder ejecutivo, el judicial, el parlamentario, regional y municipal; su poder controla el capital financiero y comercial. Y, por cierto, estos grupos tienen influencia en las fuerzas represivas del Estado, FF. AA y Carabineros. Controlan todas las fuentes del poder social de la sociedad neoliberal capitalista.

El cambio político constitucional es una forma, importante, por cierto, de modificar la estructura jurídica-política de la forma del Estado de la sociedad capitalista, pero jamás tendrá como objetivo modificar la estructura de las relaciones sociales de producción de la sociedad capitalista. Por esa razón, el cambio constitucional siempre fue y ha sido pensado por los

propietarios para defenderse de los no propietarios. Ninguna de las constituciones modernas de ayer y de hoy se propone modificar la estructura de poder que emerge de la propiedad privada capitalista.

Todas las diversas fórmulas constitucionales que actualmente se plantean en Chile, tienen una perspectiva y una orientación liberal. Aunque algunas se plantean antineoliberales -el cambio constitucional propuesto por el gobierno de la Nueva Mayoría, la solución constitucional de Claudio Fuentes y Alfredo Joignant; los planteos del grupo de Sergio Grez y del Foro por la Asamblea Constituyente de Chile, las propuestas del movimiento que dirige el socialista Gustavo Ruz Zañartu, entre otros, incluidos los que escriben en el reciente libro *Fumando Opio-*, tienen un horizonte limitado e insuficiente para destituir y destruir el poder del capital y de los poderosos. Dicho poder podrá ser regulado, pero nunca abolido por una reforma política institucional. Ello solo es posible con una revolución social anticapitalista.

Téngase presente, por cierto, que ninguna constitución política surgida en los últimos años en América Latina, incluso en los países más avanzados como Bolivia, Venezuela o Ecuador, logró modificar sustancialmente el poder infraestructural del capital. Solo en Venezuela se ha logrado limitarlo y debilitarlo en cierta manera, pero no abolirlo. Ni en Ecuador ni en Bolivia lo han hecho, todo lo contrario, en el primero se ha reforzado y en el segundo se mantiene casi intacto como estaba antes de la Constitución del 2009.

Por lo anterior, el actual proceso constitucional abierto por el Gobierno de Bachelet podrá modificar e incluso cambiar la actual Constitución, pero nunca modificar la estructura del poder del capital nacional, pues el proceso será controlado por los "sirvientes del poder infraestructural" ya mencionado. Solo la acción, primero, del poder social destituyente que desplace y destruya el poder constituido -no solo del poder político actual sino del capital-, podrá dar lugar, en segundo lugar, a la acción de un poder constituyente popular y revolucionario de orientación anticapitalista. La lucha social y política por abolir el poder infraestructural del poder del capital, de los principales grupos económicos que controlan y dominan a la sociedad neoliberal,

debe quebrar e imponerse por sobre la hegemonía liberal que actualmente domina la agenda tanto gubernamental como disidente del cambio constitucional. El proceso constituyente propuesto por el Gobierno de la Nueva Mayoría es limitado e insuficiente. La idea de impulsar una Asamblea Constituyente tiene limitaciones, como lo demuestran la experiencia y el análisis comparado de las experiencias latinoamericanas. Se debe avanzar hacia la conformación de un gran y masivo, así como contundente movimiento social ciudadano que impulse de manera articulada el poder destituyente y el constituyente. En otras palabras, es necesario hacer converger ambos poderes como un momento revolucionario que despliegue toda la potencia subversiva de dicho poder.

De lo contrario, en Chile habrá cambio constitucional; se modificará la estructura política-jurídica del Estado; se podrá cambiar el patrón de acumulación capitalista por un extractivista-desarrollista con cierta responsabilidad medio ambiental; se podrá regular los negocios de las grandes transnacionales, etcétera, pero la sociedad seguirá siendo capitalista y el poder infraestructural de los grandes grupos socio-económicos como el de los Matte y de los otros nombrados se mantendrán en el tiempo.

Para poner fin a los abusos y a la explotación permanente de las y los ciudadanos nacionales, por parte de estos empresarios, no solo debe cambiarse la Constitución Política de 1980 sino y, sobre todo, expropiar el poder infraestructural que tienen sobre la propiedad de los medios producción. Es decir, para que el poder constituyente sea realmente un poder revolucionario, subversivo y emancipador debe abolir el poder a los dueños de Chile. Ellos han sido los principales obstáculos para la constitución de un régimen democrático, igualitario y justo.



## **Trabajo v/s Capital: el conflicto social por el sistema de pensiones en la sociedad neoliberal**

*“La lucha [anticapitalista] no es producto de la militancia que viene del exterior, por fuera de la dominación, sino que, por el contrario, se inscribe en la relación de la dominación misma y es inherente a nuestra experiencia cotidiana”*  
John Holloway<sup>134</sup>

*“Los pies de las y los trabajadores asalariados permanecen sumergidos en el lodo de la explotación incluso cuando (su cabeza respira) en nubes ideológicas burguesas”*  
Richard Gunn<sup>135</sup>

### **Otra grieta en el muro de la dominación neoliberal**

Desde el 24 de julio de 2016 (24J), el conflicto social y la discusión política e ideológica sobre el sistema de pensiones está instalada en la sociedad neoliberal chilena. De la misma forma como en el año 2011, cuando los estudiantes secundarios y universitarios desbordaron las calles de las distintas ciudades del país, exigiendo el fin del lucro en el mercado de la educación y demandado la reposición del derecho social a una educación gratuita y de calidad, la masiva salida a la calle de las y los trabajadores expresó, en una poderosa manifestación social y política de carácter transversal, el “rechazo” al actual sistema de Previsión Social de Capitalización Individual (PSCI) administrado por el capital privado a través de las AFP. Sistema impuesto durante la dictadura cívico-militar en 1980 y mantenido, consolidado y extendido, como tantas otras cosas, por los gobiernos concertacionistas.

---

<sup>134</sup> Holloway, John (2015). *Contra el Dinero*, BUAP, Puebla, México.

<sup>135</sup> Gunn, Richard. Notas sobre clase, en John Holloway (2004). *Clase = Lucha. Antagonismo social y marxismo crítico*, Ediciones Herramientas/Universidad Autónoma de Puebla, Buenos Aires.



Según los datos proporcionados por la encuesta CADEM, un 87% de la ciudadanía considera que es necesario y urgente realizar cambios al sistema e incluso muchos solicitan su reemplazo integral. Igual porcentaje de adhesión concitó la demanda estudiantil durante el año 2011. No obstante, a cinco años de la “rebelión juvenil, estudiantil y ciudadana”, la disputa social y política por la continuidad de la estructura mercantil en la educación se mantiene activa y vigente. Fundamentalmente, porque las reformas propuestas por el gobierno de la presidenta M. Bachelet y de la Nueva Mayoría -actores políticos que se apropiaron de la demanda estudiantil- se encaminan por una senda que, en vez de modificar la estructura de mercado, solo la ajusta y corrige las fallas del mercado para que éste siga funcionando óptimamente. De esta manera, el gobierno de la Nueva Mayoría renuncia política y socialmente a reinstalar el derecho social a la educación y hace posible la continuidad de un mercado de la educación corregido, que será financiado por el erario y con la supervisión y el cuidado del Estado neoliberal. Éste, sin abandonar su rol subsidiario, está estableciendo nuevas reglas y normas -practicando un activo y remozado neo institucionalismo “rational choice”- y asumiendo nuevos roles con el objeto de asegurar la reproductividad integral, no solo del mercado de la educación, sino del capitalismo neoliberal.

La imposición política de la reforma educativa propiciada por el gobierno de la Nueva Mayoría implica que el movimiento estudiantil secundario y universitario como la ciudadanía movilizada habrán sido políticamente derrotados por el poder del capital. Obviamente que algunos “triumfos” o “logros” habrá obtenido el movimiento estudiantil y, por cierto, un número específico y reducido de ciudadanos, considerados “vulnerables”, gozarán de la focalizada gratuidad educacional, establecida por el gobierno. Mientras que el resto de la ciudadanía seguirá inmerso en la ajustada estructura mercantil educativa. La educación no dejará de ser un “bien de consumo” de libre disposición mercantil. Y el derecho a la educación solo será un “discurso vacío”, pues éste ha sido negado a la ciudadanía. En definitiva, la opción del gobierno de la Nueva Mayoría apunta a la mantención y continuidad de uno de los tres pilares del patrón de acumulación capitalista en su forma neoliberal. Con esta estrategia política, el

gobierno de la presidenta Bachelet intenta cerrar la grieta que, en el año 2011, la rebelión ciudadana abrió en la estructura de poder de la dominación y hegemonía neoliberal.<sup>136</sup>

La movilización social y política ciudadana del pasado 24J protagonizada principalmente por trabajadores activos y pasivos y sus familias, abrió una nueva grieta a la estructura de poder de la dominación y hegemonía neoliberal. Una gran grieta que pone en cuestión, tal vez, al más importante y central de todos los pilares que sostienen el patrón de acumulación capitalista neoliberal: el ahorro previsional de la clase trabajadora.

El rechazo de millones de trabajadores al funcionamiento del SPCI ha generado una nueva conflictividad política y social en la convulsionada sociedad neoliberal, activando y visibilizando el permanente conflicto entre el trabajo y capital, en otras palabras, la lucha de clases.

### **El “regreso” de la lucha de clases a la sociedad neoliberal**

En efecto, la demanda **“No + AFP”** expresa y manifiesta categóricamente un conflicto político y social entre el trabajo y el capital. Ya no se trata de ciudadanos neoliberales o clientes descontentos con el funcionamiento de un específico mercado como es el caso, por ejemplo, del mercado de la educación. El conflicto en torno a las AFP expresa la disputa por el “uso” social y económico de una fracción del salario que perciben las y los trabajadores y que estos destinan para su sobrevivencia al momento de dejar de ser fuerza de trabajo activa.

Durante tres décadas y media (35 años, 1981-2016) el capital nacional como internacional, especialmente el financiero y mercantil, ha administrado, utilizado e invertido esa fracción del salario de las y los trabajadores (10%) en función de sus intereses políticos, sociales y económicos; pero, sobre todo, para la reproducción ampliada del capitalismo neoliberal. La función social y económica de esa fracción del salario de la clase trabajadora -al igual que la plusvalía que generan- está políticamente determinada por el capital. Apropiarse coercitivamente de ella es

---

<sup>136</sup> He analizado esta “grieta” a la dominación y a la hegemonía neoliberal en Juan Carlos Gómez Leyton. *Agrietando al Capitalismo Neoliberal: la rebelión juvenil, estudiantil y ciudadana de 2011*. Santiago de Chile, 2015.

la base del patrón de acumulación del capitalismo neoliberal.

Por eso, el ahorro previsional (10% de su salario) de las y los trabajadores constituye uno de los factores claves que explica tanto el “éxito” del capitalismo neoliberal chileno, su estabilidad y su altísima rentabilidad como también su concentración y expansión externa. Sin embargo, los resultados sociales y económicos para la clase trabajadora, tanto activos como pasivos, han sido paupérrimos.

Esos resultados paupérrimos se expresan, por un lado, en bajos salarios, en empleos precarios, flexibles, y discontinuos en el tiempo, en constantes entradas y salidas del mercado laboral, en endeudamiento permanente, etcétera. Y, por otro lado, luego de 30 o 35 años de formar parte de la fuerza de trabajo activa, las y los trabajadores que pasan a “retiro” perciben, producto de las condiciones del mercado laboral señaladas anteriormente, pensiones miserables. Las cuales con dificultad les permiten sobrevivir.

Conscientes de esa situación las y los trabajadores activos y pasivos han iniciado, como quedó manifestado el 24J, un masivo proceso de movilización social y política, cuyo objetivo central es poner fin al actual SPCI y a su administración a través de las AFP. Esto implica entrar a disputarle al capital financiero y especulativo nacional e internacional, el control y uso de los fondos de pensiones, o sea, del 10% del salario que mensualmente cerca de 11 millones de trabajadores coercitivamente depositan en alguna de las seis AFP existentes.

La demanda “**NO + AFP**” que la clase trabajadora planteó y lanzó al ruedo político de la sociedad neoliberal, el 24J; ratificada consistentemente el 10 de agosto pasado con un masivo y ruidoso “caceroleo”, ha estremecido la dominación neoliberal, profundizando, como he dicho, la grieta abierta el 24J. Por primera vez, en poco más de 40 años de irrestricta dominación y hegemonía del capital neoliberal, **la clase trabajadora** se ha manifestado contundentemente en contra del capital. Si bien, en la movilización social nacional del 24J en contra del SPCI convergieron otros “malestares” que la ciudadanía posee en contra de la democracia neoliberal, de la clase política, del gobierno y de su impopular presidenta, la masiva salida a la calle de la clase trabajadora y

sus familias, confrontan política y socialmente, directamente, al capital. Por esa razón, consideramos que esa manifestación como conflictividad política y social constituida posee una envergadura, una extensión y una profundidad radicalmente distinta a la expresada y visibilizada por el conflicto juvenil y estudiantil del ciclo de protestas 2006-2011. La conflictividad abierta por la demanda de la clase trabajadora, dada sus características estructurales, compromete la existencia tanto presente como futura del capitalismo neoliberal. De allí, su trascendencia y potencia política, social e histórica.

Como toda sociedad capitalista, la neoliberal es una sociedad dividida y estructurada en clases sociales. Específicamente, en dos grandes clases, aspecto sociológico que en los últimos 43 años se ha olvidado o se ha intentado borrar teórica, política e históricamente como una forma de negar la conflictividad entre ellas, o sea, de negar la lucha de clases. No obstante, el conflicto abierto por las pensiones pone en evidencia la existencia, por un lado, de la clase trabajadora “activa y pasiva” y, por otro, de la clase burguesa, o sea, los dueños y controladores económicos, políticos y sociales del “capital”. Y, por ende, de la lucha de clases entre el capital y el trabajo. Por ello es tan equívoco tratar de presentar a la sociedad neoliberal como una sociedad dividida entre “personas activas y pasivas”, como negar que esa división existe.<sup>137</sup>

Es, justamente, la división clasista lo que explica que en los días posteriores al 24J, los distintos actores sociales, económicos y políticos nacionales, al reaccionar ante dicho acontecimiento, se fueran alineando en torno a uno u otro sector en conflicto. Unos en apoyo y defensa del capital y otros en apoyo y defensa de las posiciones asumidas por la clase trabajadora.

El capital a través de un ejército de comunicadores sociales, periodistas, publicistas, intelectuales orgánicos y miembros de la clase política tanto de los partidos del orden como algunos de la Nueva Mayoría, han iniciado toda una ofensiva comunicacional para defender, avalar y justificar el SPCI. Dentro de este grupo

---

<sup>137</sup> Hago alusión a la equivocada columna de opinión de Ignacio Moya Arriagada: Crisis de la AFP: un país dividido entre personas activas y pasivas, en [www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/08/12/](http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/08/12/) consultado el 13/08/2016.

de defensores del capital neoliberal habría que alinear y situar los planteamientos programáticos realizados por la presidenta Michelle Bachelet, el martes 9 de agosto. Los principios anunciados por la presidenta de ninguna manera buscan romper, quebrar o alterar la estructura interna del funcionamiento del SPCI. Todo lo contrario, como ha sido el sello del gobierno de la Nueva Mayoría, siguiendo la senda política establecida por los gobiernos concertacionistas (1990-2010), busca “cambiar sin transformar”. O sea, como señaló Tomás Moulian, hace dos décadas, busca el “transformismo”.<sup>138</sup>

Por su parte, las y los trabajadores, a través de un conjunto heterogéneo y plural de comunicadores, cientistas sociales, intelectuales orgánicos, representantes sociales y sindicales, organizaciones sindicales, sociales y gremiales de todo orden, periodistas y militantes y activistas políticos, han desplegado una ofensiva comunicacional con el objetivo de interiorizar a la ciudadanía sobre lo negativo que ha sido para las y los trabajadores el sistema PSCI, promoviendo así la urgente necesidad de impulsar su transformación radical. La estrategia combina lo comunicacional con la activa movilización social callejera.

### **La batalla comunicacional**

Hasta ahora, la lucha política y social ha sido esencialmente comunicacional y argumental. En donde la correlación de fuerzas tiende a favorecer al capital, dado el control que éste tiene de los principales medios de comunicación, especialmente, de la televisión y de la prensa escrita y radial. A través de esos medios, ha difundido ampliamente la defensa tanto del SPCI como el rol de las AFP, al mismo tiempo que se “demoniza” las alternativas que presentan y defienden los sectores afines a los trabajadores. Especialmente, se condena el sistema previsional solidario y de reparto.

La propia jefa de Estado, Michelle Bachelet, descartó de plano la instauración de ese sistema. En su opinión coincidente con los planteos manifestados por los defensores del SPCI y de las AFP, sostuvo: *“Lo que queda claro es que nunca más vamos*

---

<sup>138</sup> Cfr. Tomás Moulian (1997). *El Chile Actual. Anatomía de un mito*. ARCIS/LOM, Santiago de Chile-

*a poder volver a un sistema como el de reparto”, las razones o factores que lo impiden, según ella, son de carácter demográfico, fundamentalmente, dos: por un lado, la “natalidad” que va disminuyendo y, por otro, los hombres y mujeres del siglo XXI están “viviendo más años”. Por lo tanto, “el activo de trabajadores que va a ir generando los ingresos será menor que los pasivos”. En otras palabras, en el futuro cercano, la clase trabajadora pasiva será mayor que la clase trabajadora activa.*

Esas inversión demográfica-vital se ha transformado en la clave explicativa de los que defienden el actual SPCI para justificar su continuidad en el tiempo y la necesidad existente de hacer cambios que de ninguna manera toquen o alteren la lógica operacional del sistema. El mejoramiento de las pensiones pasa por aumentar el porcentaje de salario que la clase trabajadora destina al ahorro previsional o a extender la edad laboral activa, especialmente de las mujeres, entre otras decisiones que debieran ser adoptadas para mejorar las pensiones sin tocar el SPCI.

Así, la campaña comunicacional del capital ha ido instalando distintos argumentos que reconocen puntos sensibles del problema. Pero, al mismo tiempo, asume una postura crítica tanto de la propuesta realizada por el Gobierno y, sobre todo, de la clase trabajadora.

Ésta, por su parte, utilizando principalmente las redes sociales y los medios de comunicación alternativos, en un flujo constante de información, proporciona los argumentos que sostienen tanto la crítica como la demanda del movimiento **“NO + AFP”**. Por ejemplo, la Coordinadora Nacional de trabajadores No + AFP, difundió a través de las redes sociales su posición ante los anuncios de la Presidenta Bachelet. Si bien, parte reconociendo que varias de las medidas anunciadas responden a demandas formuladas por la clase trabajadora, sin embargo, la insistencia gubernamental de establecer una AFP Estatal confirma *“que no existe voluntad por avanzar hacia un sistema público de pensiones”*. Para la Coordinadora *“la demanda por un Sistema de Seguridad Social, fundado en los principios de solidaridad”*, constituye la principal demanda. Por esa razón, lamenta que la presidenta *“haya desaprovechado esta oportunidad para responder al clamor de la mayoría de los chilenos que pide acabar con las AFP”*. No resulta

coherente, en su opinión, pretender cambios estructurales de un sistema si la administración de los ahorros previsionales *"continuarán bajo la administración privada que dispone (de esos recursos) para el financiamiento de los grupos económicos en desmedro de los trabajadores y la sociedad"*.<sup>139</sup>

En términos generales, al igual que durante el conflicto estudiantil, en el año 2011, la ciudadanía apoya masivamente la demanda que cuestiona la forma como funciona y, sobre todo, los resultados que arroja el PSCI. Muchos quieren cambiar el sistema. Sin embargo, no todos los participantes de la movilización social "No + AFP" tienen clara la alternativa con la cual se quiere sustituirla. Lo más probable que, con el correr del tiempo, el movimiento "No + AFP" termine fragmentado. Y sus distintas fracciones sociales alineándose en alguna de tres posibles alternativas: ajustarlo, reformarlo o sustituirlo. Tal como ocurrió con el movimiento estudiantil de 2011, éste se fragmentó entre los que optaron por la alternativa de ajustar el mercado de la educación; los que buscaban una reforma estructural más sustantiva y los que procuraban su sustitución total. Como se sabe, se impuso la primera. Esta es una lección política que los actuales ciudadanos movilizados debieran tener presente. Si la demanda del 24J fue por el fin del sistema, esa demanda no puede ser transada por algo menor como podría ser una reforma de orientación capitalista neoliberal como es la propuesta de los actores vinculados directamente a la industria de las AFP; o de un ajuste neoliberal, como la propuesta del gobierno de Bachelet, cuyo eje central es la creación de una AFP estatal. El movimiento social "No + AFP" manifestó, en su primer acto público masivo, su total rechazo al sistema y su claro objetivo por sustituirlo por un sistema solidario y de reparto. Ese es el mandato ciudadano.

Con todo, la nueva problemática social y política ya está instalada y la vieja lucha entre el capital y el trabajo, la "vieja" y "vilipendiada" lucha de clases, que muchos teóricos posmodernos dieron por muerta y enterrada, agita y remece a toda la formación social neoliberal.

---

<sup>139</sup> Declaración Pública de Coordinadora Nacional de Trabajadores NO+AFP: Ante los anuncios de la presidenta Bachelet, en <http://g80.cl/noticias/noticiascompleta.php?varbajada=22028> consultado 15/08/2016.

## **La potencia anticapitalista de la demanda: “No + AFP”**

El gobierno de la Nueva Mayoría lo sabe y le aterra. Por esa razón, la presidenta Bachelet, en su mensaje del martes 9 de agosto, hizo un llamado a la unidad y a la generosidad de todos los actores involucrados en el conflicto con el objetivo de establecer un “gran pacto nacional”. Pues, en su opinión “este desafío nos necesita a todos, como Presidenta buscaré y promoveré con todas mis fuerzas un entendimiento. Iniciaré a la brevedad las conversaciones con trabajadores, empresarios, académicos, representantes del mundo social y del mundo político, de Gobierno y oposición, de manera de lograr una propuesta con amplio acuerdo. Espero de todos y todas, la generosidad que requiere construir el bien común. Chile es de todos, debe ser una comunidad para todos”.<sup>140</sup>

Este llamado a la unidad, a la constitución de un “gran pacto nacional” es el típico recurso político discursivo de carácter emocional que utilizan las élites en el poder y de poder cuando la conflictividad política y social al interior de la sociedad capitalista podría comprometer su dominación. Apela a las subjetividades de los sujetos y de los actores sociales involucrados directamente en el conflicto social y político con el objetivo fundamental de dominar y disminuir la potencia política que tiene el conflicto. En otras palabras, el gobierno y su discurso de “unidad nacional” busca desconocer la existencia de la lucha de clases, de la irreductibilidad del conflicto entre el capital y el trabajo. Con un discurso de siete minutos la Presidenta, el gobierno de la Nueva Mayoría busca apropiarse de la demanda de la clase trabajadora en contra del capital. Su estrategia apunta a arrebatarle el protagonismo político a los dirigentes del movimiento y situarlo en un segundo o tercer plano, pues los medios de comunicación asumen que la propuesta del Gobierno es la que interpreta al movimiento No + AFP, lo cual es equívoco.

Si bien, la propuesta gubernamental genera ciertas resistencias entre los gremios y asociaciones empresariales vinculadas a la industria de las AFP, ella no constituye una propuesta

---

<sup>140</sup> Ver: [www.elmostrador.cl/mercados/2016/08/10/bachelet-da-un-paso-historico-para-reformar-pensiones-que-romperia-por-primera-vez-lacapitalizacion-individual-del-sistema-de-AFP](http://www.elmostrador.cl/mercados/2016/08/10/bachelet-da-un-paso-historico-para-reformar-pensiones-que-romperia-por-primera-vez-lacapitalizacion-individual-del-sistema-de-AFP) consultado 13/08/2016.



de reforma estructural que pueda comprometer la estabilidad y la continuidad del capitalismo en su forma neoliberal. En cierta forma, la propuesta presidencial se levanta como un dique de contención que busca frenar y obstaculizar la demanda radical del movimiento NO + AFP y de la clase trabajadora.

El conflicto político abierto por la clase trabajadora al cuestionar el sistema de pensiones tiene una potencia política e histórica que podría generar cambios históricos insospechados por los propios organizadores y convocantes de la movilización del 24J, pues expresa el **poder del trabajo ante el poder del capital**. Allí está la clave y la potencia política de su presencia.

Durante 43 años de hegemonía neoliberal (1973-2016) se ha hecho “creer” a la ciudadanía, en general, y a la clase trabajadora, en particular, que **el trabajo es el que depende del capital** y no al revés. Es esa falsa inversión teórica, política e histórica que oculta lo que está en el centro de las relaciones sociales de producción capitalistas: la dependencia del capital al trabajo. En contra de todas las apariencias, el capital depende totalmente del trabajo para su existencia y su reproducción.<sup>141</sup> Es un hecho histórico, social y político, que el capital depende de la subordinación del trabajo. De allí la lucha política e histórica permanente del capital por someter al trabajo. El núcleo duro, durante las cuatro décadas de la dominación neoliberal en Chile, ha sido, justamente, la protección y defensa de la clase dominante -quienes tienen el control directo o indirecto del capital- ante la ingénita insubordinación del trabajo.

Cualquier manifestación de insubordinación del trabajo puede producir serias alteraciones al orden capitalista existente. La poderosa insubordinación trabajadora de los años sesenta y setenta había desembocado en la crisis orgánica de la sociedad capitalista nacional (1967-1973). La respuesta del capital fue violenta y radical. Ello explica que, en las últimas décadas, el capital, a través de la dictadura militar, disciplinara militarmente a la insubordinada clase trabajadora y popular, y contuviera y redujera su poder social con la imposición de una represiva legislación laboral.

---

<sup>141</sup> Seguimos aquí los planteos formulados por John Holloway (1994). *Marxismo, Estado y Capital*. Fichas Temáticas de Cuadernos del Sur, Buenos Aires, pp 159 y ss.

El disciplinamiento, control y sometimiento del poder del trabajo por parte del capital, continuó y se extendió a lo largo de la democracia posautoritaria (1990-2016). Ello explica, por ejemplo, que la nueva clase trabajadora, que se conformó y emergió al interior de la sociedad neoliberal, tuviera serias limitaciones para manifestar y hacer sentir su poder social. Lo cual, por cierto, no significa que las clases y la lucha de clases hayan desaparecido en la sociedad capitalista neoliberal como sostienen y afirman diferentes científicos sociales vinculados al pensamiento posmoderno, posmarxistas, posestructuralistas, etcétera. Todo lo contrario.

Obviamente, la nueva clase trabajadora en el capitalismo neoliberal es radicalmente diferente a la constituida durante el patrón de acumulación industrial. No obstante, las notorias y efectivas diferencias que podríamos identificar entre una y otra, debemos aclarar que lo que permanece es su potencia social e histórica, por ende, política, dada su condición de clase. Pues ésta, la clase, es la *propia relación* -por ejemplo, la relación capital-trabajo- y, de manera más específica una *relación de lucha*. En otras palabras, explica Richard Gunn, lo anterior no quiere decir que las clases, como entidades sociales preestablecidas, entren en lucha. Más bien, la lucha de clases es la premisa fundamental de la clase. Aún mejor: la lucha de clases es la propia clase, o sea, la lucha de clases es intrínseca a la clase.<sup>142</sup>

En consecuencia, ni la clase trabajadora, ni su lucha, han dejado de estar presentes en la sociedad neoliberal. Su negación por parte de los sectores dominantes y de sus intelectuales orgánicos es la manifestación misma de su existencia. Nuestra posición, que asume las premisas del marxismo crítico, considera que la relación de clases -digamos, la relación capital-trabajo-estructura la vida de diversos individuos (hombres y mujeres) de manera diferente. Esto significa que al interior de la sociedad capitalista las diferencias que existen entre los modos en que la relación capital-trabajo estructura la vida de los individuos son tanto cualitativas como cuantitativas. Este reconocimiento implica que es absurdo y teóricamente inútil buscar la existencia

---

<sup>142</sup> Gunn, Richard. Notas sobre clase, en John Holloway (2004). *Clase = Lucha. Antagonismo social y marxismo crítico*, Ediciones Herramientas/Universidad Autónoma de Puebla, Buenos Aires, pp. 19-31.

del trabajador puro o de la clase trabajadora pura. Cabe señalar que el propio Marx, lo descartó. La existencia del “trabajador” está dada por su condición de productor de plusvalía. Todo individuo, hombre o mujer asalariado, es decir, el que percibe un salario por realizar cierta cantidad de trabajo, vive, por lo general, una vida escindida en y en contra de sí misma. Pues la relación salarial es una forma burguesa y engañosa.

Tal como dice uno de nuestros epígrafes, aunque los pies de los individuos permanecen inmersos ya sea en la explotación o participando como “ciudadanos credicard”<sup>143</sup> en los distintos mercados que ofrece la sociedad neoliberal, sea un “ciudadano consumidor- usuario o patrimonial”<sup>144</sup> y aun cuando su cabeza y su existencia se desenvuelvan en las nubes ideológicas de la sociedad neoliberal, la línea de la lucha de clases seguirá recorriendo su existencia en cuanto productores directos de la plusvalía. Así, la ciudadanía neoliberal es antes de todo “clase” trabajadora asalariada, la cual alcanza el 74% de la población económicamente activa.<sup>145</sup>

La lucha entre el capital y el trabajo, o sea, la lucha de clases en su forma neoliberal tiene directa relación no con el proceso de producción directa sino más bien con las formas de acumulación del capital. La disputa política no es solo por la plusvalía generada por las y los trabajadores en el proceso de trabajo sino también por apropiarse y administrar un porcentaje específico del salario que perciben. En ese sentido las y los trabajadores en la forma capitalista neoliberal son doblemente expoliados y explotados.

Es esta lucha la que cobra hoy una especial visibilidad. La ofensiva actual de la clase trabajadora tanto activa como pasiva manifestándose en contra del capital financiero y mercantil que maneja de manera especulativa sus fondos previsionales, representa y expresa, sin lugar a duda, una rebeldía y una insubordinación del trabajo. Una manifiesta expresión del poder del trabajo. En esta expresión se encuentra la potencia política del

---

<sup>143</sup> Concepto acuñado por Tomás Moulian.

<sup>144</sup> Juan Carlos Gómez Leyton (2010). *Política, democracia y ciudadanía en una sociedad neoliberal (Chile:1990-2010)*. Editorial ARCIS-CLACSO, Santiago de Chile.

<sup>145</sup> Franck Gaudichaud (2015). *Las fisuras de neoliberalismo chileno. Trabajo, crisis de la “democracia tutelada” y conflicto de clases*. Quimantú/Tiempo Robado Editoras, Santiago de Chile, pp. 53 y ss.

conflicto abierto por la clase trabajadora. Esa potencia está dada por la forma cómo fue operacionalizado el sistema PSCI.

El sistema PSCI entrega y otorga, al contrario de lo que se podría pensar, un inmenso y extraordinario poder, hasta ahora inexplorado ni explotado social ni políticamente, a la clase trabajadora. A pesar de que el sistema PSCI fue ideado por los intelectuales orgánicos del capital como de la dictadura cívico militar, donde destacó el economista José Piñera entre otros, para favorecer directamente los intereses del capital nacional e internacional en contra de la clase trabajadora, al cabo de 35 años de funcionamiento, el poder lo detenta, aunque hasta ahora virtualmente, la *clase trabajadora activa*.

El poder del trabajo al cual nos estamos refiriendo no tiene la misma relación con el poder al que hace alusión el periodista de CIPER Daniel Matamala.<sup>146</sup> Éste siguiendo y asumiendo una perspectiva economicista e individualista propia de la cosmovisión neoliberal predominante señala que la base del poder es el dinero: “el dinero es poder”. Por cierto, eso es así. Pero de acuerdo con lo expuesto anteriormente, el poder de la clase trabajadora no está en la cantidad de dinero que las y los trabajadores de manera individual o colectiva poseen o pueden disponer sino en el producir y generar plusvalía.

Matamala, con un sentido retórico, busca asemejar el poder de los principales grupos económicos del país con el supuesto poder de las y los trabajadores. Para esos efectos, crea la ficción de que estos serían los dueños de los 171.089 millones de dólares que están depositados en las seis AFP. En verdad, las y los trabajadores considerados como sujetos individuales solo serían proporcionalmente dueños tan solo de unos 16.000 dólares. Considerando un dólar a 650,00 pesos, cada trabajador de manera individual sería teóricamente dueño/propietario de unos 10 millones de pesos. Frente a fortunas familiares (Luksic, Matte, Paulmann o Piñera) que superan los 2.000 millones de dólares, las y los trabajadores, este supuesto “trabajador-propietario”, carece de todo poder. Los 16.000 dólares no le sirven de ninguna manera para influir, como sí lo hacen esas grandes fortunas. Tampoco es

---

<sup>146</sup> Daniel Matamala, AFP, el poder impotente, en <http://ciperchile/2016/07/26/afp-el-poder-impotente> consultado 09/08/2016.

correcto sostener, como lo hace Matamala, que las y los chilenos (trabajadores) individualmente sean “dueños de buena parte de megaempresas como Cencosud, Colbún, Endesa, Enersis o CMPC”. Lo sostenido por Matamala no pasa de ser una ficción.

El poder de clase, o sea, colectivo y no individual, no está en la cantidad de dinero que las y los trabajadores logran capitalizar a lo largo del tiempo sino en la de ser productores directos (1) de plusvalía y (2) del ahorro previsional, el 10% de su salario mensual, que es apropiado por el capital. Éste, el capital financiero y mercantil, depende de ambos factores. La suspensión de esa producción por parte de los trabajadores desencadenaría la crisis no solo del SPCI sino de todo el sistema capitalista neoliberal. Esa es la potencia política e histórica anticapitalista de la demanda **NO + AFP**.

## **No más Administradoras de Fondos de Pensiones ni privadas ni estatales**

Una nueva gran manifestación ciudadana se hizo presente el domingo 24 de julio en diversas ciudades del país con una sola gran demanda: no más AFPs. No creo que sea necesario explicar las motivaciones que tuvieron cientos de miles de trabajadores para hacerlo. Las razones han sido expuestas de manera contundente por expertos en la materia, por economistas, por analistas del sistema de pensiones existente en Chile, tanto nacionales como internacionales. Repetir aquí sus argumentos resulta inoficioso. Baste con señalar que en la actualidad hay miles de pensionados del sistema que apenas viven, recibiendo menos de 200.000 mil pesos mensuales, luego de haber trabajado 40 años. Son pensiones de hambre, de miseria, indignas, que condenan a cientos de miles de hombres y mujeres a vivir su vejez como un tormento, aquejados por las enfermedades propias de la edad, imposibilitados de vivir. Con un sistema de salud pública precario y de pésima calidad, lo único seguro que les queda es una muerte digna, e incluso hasta eso, en la mayoría de los casos, tampoco lo es.

La sociedad neoliberal es una sociedad de los desperdicios como dice Zygmunt Bauman. Hay seres humanos que sobran, que son escorias, basuras. Por un lado, están los niños y niñas vulnerables y pobres. Así lo piensa la Ministra de Estado Javiera Blanco, estrecha colaboradora de la élite de poder y comunicacional de este país, quien califica a las y los niños vulnerables como un "stock", o sea, mercancías o desechos o basuras. El abandono de las y los niños se demuestra en el hecho de la inexistencia de una política para atender a la niñez desde hace más de 35 años por parte del Estado; el SENAME es una prueba irrefutable de ello.

Por otro lado, están los adultos mayores, los viejos y viejas, los abuelos y abuelas, las y los ancianos, éstos son, también, una carga, un fardo, que sobran, que molestan, que se enferman, que piensan y lo peor de todo, viven, pero no producen. Son inservibles

y hay que deshacerse de ellos. Entre las clases medias pobres o de los sectores populares, la situación es muy grave, pero hay otros ancianos que viven como seres humanos: los que pertenecen a las clases “pudientes” o “acomodadas”, por cierto, que son los menos. En una sociedad de clases, la vejez se vive de acuerdo con la clase a la que se perteneció como trabajador.

La marcha del 24J no solo fue una marcha contra el sistema de previsión social establecido por la dictadura militar de Pinochet sino en contra de la clase política nacional, especialmente, la vinculada a la Concertación de Partidos Políticos y la Nueva Mayoría, es decir, en repudio de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista de Chile, del Partido por la Democracia, del Partido Radical Social Demócrata, del Partido Comunista de Chile, del Partido Izquierda Ciudadana, del MAS, de todas y cada una de estas organizaciones políticas que han permitido que durante tres décadas y media, el sistema de acumulación de capital neoliberal explote y esquilme a millones de trabajadores.

Desde que el exministro del Trabajo y Previsión Social de la dictadura José Piñera Echeñique, el intelectual orgánico del capital nacional, estableciera e impusiera el sistema de pensiones de capitalización individual en los años ochenta, la mayoría de los chilenos y chilenas se plantearon en su contra. Este sistema es una aberración y solo conduciría a incrementar la pobreza de los adultos mayores del futuro, por la manera como el capital neoliberal extraía no solo el plusvalor a los trabajadores cotidianamente si no también al obligarlos a entregar el 10% de sus miserables sueldos para incrementar la acumulación capitalista del empresariado nacional e internacional. Con ello, el capital lograba reproducirse exitosamente en el tiempo, concentrándose cada vez más en menos manos. El éxito del modelo era total y completo. La solución para el esquivo proceso de acumulación de capitales que el economista estadounidense Tom Davis había señalado y advertido en 1962 como el principal obstáculo para la reproducción ampliada y sostenida del capitalismo nacional, había sido encontrado.

La acumulación destinada para la reproducción ampliada del capital no la harían los capitalistas sino los trabajadores. Pero quien administraría los recursos expropiados compulsivamente

a los trabajadores serían las empresas capitalistas nacionales o extranjeras. La ganancia la obtendrían ellos, pero las y los trabajadores disfrutarían solo del 35% o con suerte de un 40% del salario acumulado y percibido durante 40 años de trabajo. O sea, salarios y pensiones de miseria. Eso se denunció en los años ochenta. Y esa es la gran responsabilidad social y política de aquellos que consolidaron, ampliaron y profundizaron el sistema en la sociedad nacional; son los Aylwin, los Frei Ruiz Tagle, los Lagos, Bachelet y, por cierto, Sebastián Piñera, los cómplices de la miseria en que hoy viven y vivirán los adultos mayores en la sociedad neoliberal.

La marcha del 24J por multitudinaria que haya sido, no basta. De ninguna manera resuelve el problema presente y futuro. Tendrán que venir más y más marchas. Pero no hay que cometer el error del movimiento estudiantil de 2011, dejarse expropiar la demanda por el fin del lucro, por una educación gratuita y de calidad, por la clase política miserable enquistada en la Nueva Mayoría. Esa lección ciudadanas y ciudadanos no debe volver a ocurrir.

La demanda NO MÁS AFPs es nuestra y nosotros debemos, las y los ciudadanos, organizarnos social y políticamente, es decir, transformarnos en actores con poder, para encontrar la solución óptima para un problema que nos compete y nos interpela. No podemos pensar que la clase política actual corrupta y podrida nos va a dar la solución. Tampoco podemos pensar que los dueños de las AFPs van a dejar ir el negocio tranquilamente, tendremos que arrebatárselo.

Todos, las y los trabajadores de las AFPs somos sus accionistas, por lo tanto, somos dueños de los recursos que allí se depositan todos los meses. Nos pertenecen. Lo primero que debemos hacer es organizarnos por AFPs. Todos los que pertenecemos a una, debemos reunirnos y comenzar a exigir nuestros derechos de accionistas. Somos miles. Según la información que se dispone al 31 de mayo del año en curso, hay cerca de 11.000.000 de afiliados, distribuidos de la siguiente forma en 6 AFPs, que hoy dominan el mercado:



AFP	TOTAL, AFILIADOS
CAPITAL	1.737.710
CUPRUM	640.416
HABITAT	2.042.288
MODELO	1.483.860
PLANVITAL	973.900
PROVIDA	3.221.644
<b>TOTAL</b>	<b>10.099.818</b>

Tenemos la fuerza y la razón. Debemos comenzar a organizarnos para tomar el control de ellas. Para producir en el más corto plazo su expropiación. Y, comenzar a administrarlas financieramente como los trabajadores administraban las Sociedades de Fondos Mutuos, la Mutuales u otras organizaciones sociales de ese tipo. El control de las AFPs debe ser ciudadano y no estatal.

Las y los trabajadores debemos tomar consciencia que las AFPs existen porque nuestras cotizaciones mensuales las dotan e inyectan los recursos para que los dueños inviertan en rentables negocios, por lo tanto, hay que buscar un mecanismo financiero para que los trabajadores comiencen a tener el control directo de las cotizaciones. Y evitar así que los patrones abusen y usen nuestras cotizaciones en beneficio propio. Debemos tener claro que los dueños de la AFPs están coludidos con los patrones y empresarios a los cuales les trabajamos diariamente.

La próxima acción ciudadana en contra de las AFPs no debe ser una marcha sino un paro nacional de advertencia que apunte a: a) la ocupación (toma) masiva de las casas centrales de estas empresas, de sus oficinas, b) constituir una asamblea permanente de afiliados y, c) crear un directorio general de trabajadores para tomar el control popular y ciudadano de ellas.

**QUINTA PARTE**

**VIOLENCIA, MIEDO  
Y PROTESTA POLÍTICA**



## **I.- VIOLENCIA Y MIEDO POLÍTICO**

### **Un fantasma recorre la sociedad neoliberal: el miedo político**

*"A lo que más temo es al miedo"*  
Michel de Montaigne

Desde que se agrietó la "pax neoliberal" en el año 2011, producto de las movilizaciones de las y los ciudadanos descontentos con dicho orden social impuesto a punta de metralla por la dictadura cívico-militar (1975-1990) y vergonzosamente consensuado y aceptado por la Concertación (1990-2010), un espectro recorre la sociedad chilena, el miedo político.

En realidad, no es toda la sociedad chilena la que tiene miedo, sino que son las élites de poder y en el poder y, por cierto, los infaltables e infames sectores de las capas medias, los que profesan temor social y miedo político.

Los sectores populares sí pueden tener miedo, pero es de una naturaleza distinta del miedo que profesan histórica y sociológicamente los sectores antes mencionados. Éstos tienen miedo histórico a perder sus privilegios y su condición social, económica y cultural. Y, por cierto, están dispuestos a todo para conservarlos. Como lo hicieron en el pasado, desde aquel otro infausto 11 de septiembre de 1541, cuando Doña Inés de Suarez. La "mamá Inés", decapitó a siete caciques para infundir miedo a los indígenas que defendían su libertad y su cultura ante la invasión española. Desde esa violencia fundadora asentada en el miedo, las élites de poder y en el poder han usado y abusado del miedo como instrumento de control y sometimiento de aquellos que osan resistir el orden por ellos construido.

La sociedad chilena ha sido fundada y concebida una y otra vez en una cópula incesante entre el miedo social y la violencia política ha engendrado diversos vástagos, o sea, regímenes políticos autoritarios a lo largo de su historia política.

El recurso al autoritarismo y al dictador (al hombre fuerte) civil o militar ha sido una constante en Chile desde el régimen portaliano hasta la actualidad. Los diversos periodos de paz política y social que la sociedad chilena ha experimentado en su pasado reciente, por ejemplo, la paz neoliberal (1990-2011), han sido producto de la combinación del miedo político y del autoritarismo practicado por las élites de poder y en el poder.

Por miedo político entiendo el temor de la ciudadanía a que su bienestar colectivo como individual resulten perjudicados -miedo al "terrorismo", pánico ante el crimen organizado, terror a la crisis económica, ansiedad a la descomposición moral-, o bien la intimidación de hombres y mujeres por el gobierno o de parte de algunos grupos. Lo que hace políticos a ambos tipos de temor es que emanan ya sea del Estado o de la sociedad.

El miedo político surge de los conflictos sociales actuantes en la sociedad con repercusión estatal. Por eso, el miedo político tiene amplias repercusiones: genera diversas formas de represión y de control, crea institucionalidad normativa (leyes), políticas públicas y, sobre todo, violencia política y/o simbólica.

La CPD durante años gobernó a partir de la idea política de que la sociedad chilena tenía miedo. Durante dos décadas, infundió de manera permanente el temor en la sociedad. Para tal efecto, construyó el discurso de que realizar cambios sociales, políticos y económicos en el orden construido por la dictadura era peligroso.

Hoy, cuando la CPD travestida en Nueva Mayoría propone realizar una serie de reformas políticas, económicas y educacionales, reformas que en realidad son parciales y superficiales, dado que no afectan estructuralmente a la forma de acumulación capitalista neoliberal, la élite de poder tiene miedo. Los empresarios, los banqueros, los dueños de los medios de comunicación, los sostenedores de colegios particulares subvencionados, especialmente aquellos que sostienen grandes conglomerados educacionales, los dueños de las universidades privadas, los controladores de las ISAPRES y de las AFP, los dueños de las grandes cadenas de farmacias, de las grandes tiendas, es decir, aquellos que controlan el capital mercantil, financiero, comunicacional y educacional, tienen temor a que su bienestar sea afectado, aunque sea en una milésima porción.

Hace más de un año que han venido sosteniendo a través de sus distintos voceros y de la caja idiota “la televisión” y los periódicos de la cadena El Mercurio como de Copesa, que el famoso programa de la presidenta Michelle Bachelet es un peligro para la sociedad chilena, especialmente, para los sectores medios. La permanente letanía de que la reforma tributaria va a afectar a la clase media, que la reforma educativa también, que la reforma política va a colocar al país en el borde del abismo, que la desaceleración económica abre las puertas a la recesión económica, del desempleo, etcétera, es un discurso similar levantado durante los gobiernos de la CPD. Lo común es sostener que realizar cambios en la sociedad es peligroso.

Sin embargo, el análisis detallado y concienzudo del paquete de reformas (reformitas) que intenta realizar la Nueva Mayoría, no debiera generar ese miedo. El mensaje político de la élite política y de los partidos del orden (Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional como también la Democracia Cristiana bajo la conducción de Ignacio Walker Prieto) tienen un objetivo político específico: engendrar miedo político en un sector social altamente sensible a ello, las capas medias. Éste siempre ha sido un sector social psicológicamente temeroso.

Las capas medias han estado históricamente dispuestas a perder la libertad política, cuando se sienten amenazadas por los cambios sociales, económicos o culturales. Siempre están dispuestas a invocar al poder autoritario, al Leviathan, para que proteja sus vidas y, sobre todo, sus propiedades y patrimonios. Ello explica que el discurso de la derecha política y comunicacional cale profundamente entre los sectores medios aspiracionistas que hace tan solo un par de años atrás estaban protestando y exigiendo cambios radicales en el mercado de la educación. Hoy cuando se les dice que van a ser afectadas por las “reformitas” de la Nueva Mayoría huyen horrorizadas y se solidarizan con las élites de poder. Proporcionándoles a esos sectores el apoyo social que requieren para seguir infundiendo temor en la sociedad.

¿A qué le temen los sectores medios aspiracionistas de sólida cultura neoliberal?: a la supuesta igualdad social y educativa que propone la “reformita educativa”. La clase media es neoliberal, justamente, porque el neoliberalismo le ofreció

un tipo de ciudadanía radicalmente distinta a la que ofrecía el desarrollismo industrial o el Estado social benefactor. Para qué decir el socialismo allendista. La promesa neoliberal ha sido: nadie es igual.

Todos somos socialmente distintos. El Estado no puede ofrecer la diferenciación que conduce a la necesaria distinción, solo el mercado la proporciona. Entonces, no se puede tocar el mercado, ni la competencia, ni la exclusividad, ni la distinción de unos ante los otros. Esto explica que un apoderado sostuviera que era necesario mantener el copago del colegio particular subvencionado donde asisten sus hijos, pues con él se evitaba que llegaran “niños con malas notas, desordenados, yo quiero lo mejor para mis hijos”, o sea, la gratuidad hace que convivan niños de distintas condiciones socioeconómicas y eso para muchos padres, no es bueno. Ellos tienen miedo social y que se transforma, por cierto, en miedo político. En consecuencia, actualmente, un miedo recorre a la clase media neoliberal: el miedo a ser iguales.

De manera que actos como el ocurrido el día lunes 8 de septiembre, el bombazo en la Estación Escuela Militar del Metro santiaguino, no solo alarman a la ciudadanía sino, sobre todo, al gobierno, o sea, a la élite en el poder. Y ese acto condenable, por cierto, debe ser leído como una acción política destinada a infundir miedo, o sea, terror en la sociedad; y debe generar una reacción gubernamental que combine una acción punitiva y de mayor control sobre la comunidad. La “polis” será cercada y protegida.

La élite en el poder, el gobierno de la Nueva Mayoría comienza a asumir que su gestión está produciendo miedo social y político en la sociedad. La inmediata salida de la Presidenta hacia el lugar donde estalló la bomba; la visita a los heridos, sus palabras iniciales; la suspensión de la agenda gubernamental; la reunión citada públicamente para analizar el acontecimiento; sus palabras amenazadoras del día siguiente son indicadores de que la Presidenta y su gobierno, tienen miedo.

Tengamos presente que la Presidenta durante la semana pasada estuvo activamente comunicativa, fue entrevistada por el Canal Nacional, por diversos medios radiales, y dio una larga entrevista a la prensa controlada por la derecha. Qué explica esa

explosividad comunicativa presidencial. Mi hipótesis se relaciona con el discurso de Ricardo Lagos ante los empresarios, en ICARE; miedo a la palabra de Lagos. Palabra que infunde temor. Hasta Pinochet, le temió. Por lo tanto, no es cualquier palabra, ni dichos cualesquiera. Ello explica la pronta reunión de la Presidenta con el jefe de los empresarios, horas antes del bombazo. Una conclusión posible de todo lo dicho hasta ahora, podría ser, que el gobierno está aterrado.

Ahora bien, si el gobierno está aterrado puede implicar la paralización de su capacidad gubernamental para promocionar los cambios planteados en su programa, o sea, que el conjunto de "reformitas" queden en nada. Por tanto, el miedo infundido por la derecha política, económica, comunicacional y educacional habrá sido efectivo. Y los únicos que perderán serán los de siempre, o sea, las y los condenados por el neoliberalismo. Ese es el temor que hoy tienen los sectores populares. De manera que su miedo político es distinto del que tienen las élites de poder y en el poder y las clases medias.

Sin lugar a duda el espectro fantasmal del miedo recorre la sociedad neoliberal y aterrará a sus actores.





## **Violencia y Miedo Político en la Sociedad Neoliberal**

Partamos con una afirmación categórica de inmediato: la sociedad chilena ha sido conformada en la violencia social y política que han ejercido y desplegado las élites dominantes desde el siglo XVI hasta el día de hoy. En ese sentido, en Chile, todo conflicto social y político se resuelve por la fuerza, pocas veces, por la razón.

La violencia social, como se sabe, es la expresión más severa y directa del poder físico. Como fenómeno colectivo, hace referencia a las acciones -cometidas por el Estado o por diferentes sectores sociales que conforman la sociedad- orientadas a provocar destrucción, daño o sufrimiento de manera deliberada en contra de otras personas, abusando de ellas. Actualmente, entre las y los ciudadanos existe una relativa consciencia de que la violencia debe ser rechazada y condenada en todas sus formas. Por lo tanto, existe de manera generalizada y amplia una reprobación moral y ética hacia ella. Sin embargo, la violencia se manifiesta de múltiples formas en nuestra sociedad. La sociedad chilena pasada como la actual de ninguna manera puede ser considerada una sociedad libre de violencia.

En un sentido amplio del término, la violencia puede ser práctica (física) o simbólica, visible o invisible. Puede ser producto de la capacidad de un perpetrador individual (violencia privada) o de grupos al interior de la sociedad, incluido el Estado y sus agentes (violencia colectiva). Para los fines de este artículo, el término de violencia lo usaré para designar su expresión práctica, visible o invisible y que implica el uso o la amenaza de la fuerza física para resolver un conflicto (conseguir objetivos sociopolíticos) en las diferentes etapas del devenir histórico de la sociedad chilena.

La violencia política (colectiva), objeto de esta reflexión, constituye una acción social y un comportamiento político que busca conseguir determinados fines provocando una destrucción material de bienes o de la vida humana de grupos o personas

involucradas en un conflicto político. Además, la violencia puede tener objetivos políticos difusos y sin elaboración teórica previa, o puede estar enmarcada en un plan de acción consistente y sólidamente elaborado con base en una perspectiva teórica-política que le da sentido y la justifica. En Chile, la violencia y la guerra han sido señaladas como aquellas acciones que han configurado su identidad histórica.

La violencia en la historia nos lleva necesariamente a analizar otro aspecto que, por lo general, se encuentra asociado a ella y podría ser señalado como un factor que la provoca. Me refiero al miedo o a los miedos. Los seres humanos, hombres y mujeres, desde siempre han sentido temor, angustia, miedo, es parte de su naturaleza. Sin embargo, el miedo que buscamos historizar es aquel que tiene la cualidad de ser social, política y culturalmente producido, o sea, el miedo o mejor dicho los miedos históricamente producidos.

Por eso, es más pertinente hablar -como nos señala la historiadora mexicana Pilar Gonzalbo Aizpuru- de los miedos en plural, porque no tratamos de la respuesta espontánea ante peligros inmediatos, como mecanismo de defensa propio de la naturaleza humana, sino de las muy variadas formas de manifestación de temores, casi siempre mantenidos en periodos prolongados y como consecuencia de particulares circunstancias políticas, sociales, culturales, mentales y económicas.

En efecto, la sociedad chilena no solo se conformó en la violencia sino también en el miedo político y social producido históricamente. Durante largos periodos de la historia de Chile, la dialéctica violencia-miedo, miedo-violencia, ha estructurado la dinámica interna de la sociedad influyendo decisivamente en la constitución de su institucionalidad política así como en las relaciones sociales entre los sujetos que la integran. Considero que dicha dialéctica explica la histórica tendencia de las y los chilenos por las formas autoritarias del ejercicio del poder social, económico, político, de género y cultural. Tendencia que ha sido un poderoso obstáculo para la constitución de una sociedad igualitaria y democrática. Todos y todas temen a la democracia, especialmente por su promesa implícita de igualdad cultural, de género, social, económica y política. Producto de ello es la

constante invocación de las y los chilenos, pero también de otros sujetos latinoamericanos, del "lord protector" o de las "madres protectoras", encarnadas en las Vírgenes celestiales: desde la "Lupe" mexicana a la "Carmencha" chilena. Pero también de las "madres civiles". Las poblaciones latinoamericanas, especialmente, aquellas que emergieron históricamente del proceso colonial, han reclamado y demandado protección. Es, justamente, en la violencia de la conquista y en el miedo de los vencidos a los vencedores como en el miedo de los vencedores a la violencia de los vencidos, donde se constituyó esa dialéctica.

Por cierto, la violencia y el miedo fueron a lo largo de la dominación colonial una dialéctica permanente que fue produciendo una sociedad altamente temerosa de todo y todos. La actitud persistente de los grupos sociales dominantes como también subalternos de la sociedad fue vivir en el encierro de sus espacios, especialmente, de la hacienda y de la Iglesia, cobijados por la espada, para proteger sus vidas y sus propiedades. Por su parte, los grupos sociales dominados temían a la acción arbitraria de los poderosos, vivían en la incertidumbre, temerosos de perder la vida o de ser expulsados de los espacios que ocupaban por la gracia de los dominadores. Frente a esa situación, los españoles pobres y los mestizos blancos u otros grupos socio-raciales optaron por la sumisión y la obediencia, se volvieron inquilinos sumisos al poder hacendal. Otros, los mestizos que no reconocían ni padres ni madres, los huachos, se volvieron bandidos, forajidos, cuatreros, peones, gañanes, "hombres de mala cabeza, pendencieros, violentos", así los describen las fuentes de la autoridad colonial, que asolaron los campos y los villorrios y aldeas durante el siglo XVII- XVIII. Viviendo día y noche arriba del caballo, el bandido chileno, encapuchado o a rostro descubierto, amenazó con su presencia y su fiera violencia armada de manera habitual a los habitantes de las haciendas y de las ciudades patricias. Patrones e inquilinos vivían con miedo. Desde los tiempos coloniales unos y otros aprendieron a instrumentalizar el miedo como controlador de las conductas sociales y políticas. Pero también aprendieron que, ante el miedo, la violencia constituye un adecuado mecanismo de protección. Por esa razón, unos y otros se armaban para defenderse, para protegerse de los "otros". "Otros" que muchas veces eran los mismos, otros que siempre estaban allí

como una sombra espectral amenazando la existencia. A veces, el otro era el bandolero, el vagabundo, que iba de un lado a otro, recorriendo la tierra. Su vagar no estaba exento de miedo, presto a defenderse. Igual que los "otros" vivía con miedo. Y la repuesta al miedo siempre es la violencia.

El miedo tiene muchas dimensiones tanto pasadas, presentes y actuales, pero me interesa resaltar aquí los miedos actuales, especialmente, aquellos que hoy estructuran la sociedad neoliberal.

Preciso dos ideas fuerza: la sociedad latinoamericana, desde la conquista, se estructuró en la violencia y en el miedo de los vencedores y de los vencidos. No obstante, los pueblos originarios, especialmente aquellos que vivían en los espacios imperiales aztecas e incas también vivían bajo la violencia y el miedo protector de sus gobernantes. En consecuencia, debemos tener presente que los "miedos" sociales, religiosos, culturales, económicos, han sido siempre un buen aliado del poder político. Todas las dominaciones y formas políticas se han apoyado y servido de específicos y determinados miedos para asegurar su poder.

Tengo la convicción de que el miedo como estructurador de relaciones sociales y políticas; la justificación de la violencia motivada por el miedo; la percepción del miedo a las amenazas reales, históricas o imaginarias han sido precariamente tratados por las ciencias sociales chilenas. Por ello, aquí buscamos plantear algunas ideas para iniciar ya sea el debate o un programa de investigación de largo alcance que analice la dialéctica histórica antes mencionada.

### **Chile, un país de guerra**

En el caso nacional, el miedo y la violencia política han tenido históricamente como finalidad central instalar, preservar, conservar, fortalecer o recuperar el poder político de las élites o grupos o clases dominantes. Ha sido, por tanto, una forma de ejercer y desplegar el poder en el marco de relaciones sociales y políticas diferenciadas y un recurso del Estado para mantener la dominación. De manera que ha sido el Estado, en su forma monárquica-imperial hispánica (XVI-XIX), como en su forma

nacional (XIX-XXI), el principal promotor de la violencia, convertida en una estrategia política para mantener el poder de una reducida élite social ante la mayoría de la sociedad.

Dada la promoción histórica y permanente de la violencia política por parte del Estado, tanto física como simbólica, en momentos específicos ésta ha sido respondida por determinados grupos subalternos de la sociedad. Uno de esos grupos ha sido los mapuches. Los cuales han resistido, desde el siglo XVI hasta el día de hoy, la violencia que los grupos dominantes han empleado para someterlos, reducirlos e integrarlos violentamente a la "sociedad chilena".

Por esa razón, el historiador Álvaro Jara planteó tempranamente en su libro *Guerre et société au Chili* (1961) que Chile es una sociedad/país/nación estructurada en la violencia y en la guerra; tesis que posteriormente difundirá Mario Góngora en su *Ensayo Histórico sobre la Noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX* (1984). Ambos autores coinciden en el rol de la violencia política en la conformación de la sociedad chilena. El primer autor señala que la guerra en contra del pueblo mapuche posibilitó que éste fuera sometido a la esclavitud, y el segundo, que la violencia política del Estado durante los siglos XIX y XX permitió configurar la nación y a la sociedad chilena.

La historiografía democrática y popular producida, ya sea por los historiadores marxistas nacionales como por los historiadores de la "nueva historia social", ha demostrado que la violencia y la guerra han sido usadas, esencialmente, en contra de los sectores populares, trabajadores, campesinos y pueblos originarios a lo largo y ancho del territorio nacional. Desmintiendo o corrigiendo la visión histórica construida por las clases dominantes de que la sociedad chilena ha tenido una evolución institucional y política pacífica.

Por consiguiente, la sociedad chilena se ha construido en el conflicto y en la violencia política tanto estatal como popular. Esta distinción introducida por el historiador Gabriel Salazar en su libro *Violencia política popular en las grandes alamedas: Santiago de Chile 1947-1987 (una perspectiva histórico popular)* (1990), que permite diferenciar la violencia política entre aquella que ejerce y desarrolla el Estado (VPE) y la violencia política que impulsan los

sectores populares (VPP), es útil para observar lo que actualmente ocurre en la sociedad neoliberal chilena.

### **La violencia política en la sociedad neoliberal**

Como hemos sostenido en otros trabajos, la sociedad chilena desde 1973 hasta el día de hoy, se ha transformado en la principal sociedad neoliberal triunfante en la región latinoamericana. Su construcción arranca de un acto fundacional profundamente violento y destructivo como fue el Golpe de Estado de las Fuerzas Armadas de septiembre de 1973. La acción militar no sólo implicó el derrocamiento del gobierno socialista de la Unidad Popular conducido por el Presidente Salvador Allende, sino también, una de las más violentas reacciones de las clases dominantes en contra del movimiento político y social popular a lo largo del siglo XX. Las clases dominantes con el apoyo político y social de las capas medias utilizaron la violencia política para recuperar el poder político del Estado, o sea, el gobierno en manos de los sectores populares.

Durante 17 años el Estado utilizó la violencia y el terror político para imponer a la sociedad chilena una nueva forma de dominación y de hegemonía: el neoliberalismo. A pesar de la resistencia de los sectores subalternos populares, a través de múltiples formas posibles, desde las pacíficas hasta las violentas, éstos no pudieron impedir su imposición. Es decir, durante esos 17 años, la violencia política estatal de la dictadura militar fue respondida con violencia política popular. Sin embargo, la VPP desplegada no tuvo ni la radicalidad ni la masividad ni la fuerza necesaria para lograr vencer a la violencia que emanaba desde el Estado neoliberal.

Esta forma estatal se verá fortalecida política y jurídicamente desde 1990 hasta el día de hoy gracias a la gestión de los gobiernos de la Concertación de Partidos Políticos por la Democracia. Los cuales para “huir” de la VPP, -especialmente después del atentado en contra del dictador, realizado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en septiembre de 1986-, se refugiaron en la institucionalidad dictatorial.

Al refugiarse los Concertacionistas bajo el manto protector que les ofrecía la Constitución Política de 1980, no dudaron en

utilizar los instrumentos políticos establecidos en ella en contra de aquellos grupos sociales que mantuvieron ejerciendo la VPP en contra de la dominación neoliberal en los primeros años de los gobiernos concertacionistas.

La VPE neoliberal, conducida por los Concertacionistas será utilizada entre 1990 y 2010 en contra de cualquier manifestación social o política de la ciudadanía nacional. Recuérdese las violentas represiones en contra los mineros del carbón, de los estudiantes universitarios, secundarios y ciudadanía en general a lo largo de estos últimos 20 años, para constatar como la VPE neoliberal fue uno de los principales instrumentos de respuesta política de los gobiernos concertacionistas ante la demanda y acción social y política ciudadana.

La violencia política abierta durante el régimen militar se transformó en una violencia política encubierta o invisible de carácter simbólico durante los gobiernos de la Concertación. No obstante, ante la manifestación social y política de las y los ciudadanos, la VPE neoliberal fue abierta y ampliamente visible a través de los medios de comunicación de masas.

Uno de los aspectos relevantes de la sociedad neoliberal es la estrecha alianza que se observa entre el Estado y los medios de comunicación de masas. El desarrollo de las nuevas tecnologías de las comunicaciones ha permitido a los medios ampliar su cobertura informativa, a una mayor masa receptora. Posibilitando a los poderes gubernamentales, como fácticos, tener un mayor control político de la población vía la manipulación comunicacional. Los medios de comunicación, especialmente la televisión, controlada por los sectores ligados a la derecha neoliberal, producen aquello que los especialistas denominan el "atiborramiento de cráneos". De allí que la mayoría de la ciudadanía nacional opina como "opinan los medios".

Durante los gobiernos concertacionistas como en el actual gobierno de la derechista Coalición por el Cambio, los medios de comunicación han optado por:

- a) omitir a una serie de sectores sociales ya sea por razones políticas o ideológicas, raciales o bien sexistas y/o machistas;



- b) tergiversar interesadamente la representación de la realidad para no informar adecuadamente y de manera plural y transparente a la ciudadanía;
- c) establecer e imponer una determinada agenda informativa coherente con la agenda política de la oposición derechista durante los gobiernos concertacionistas, o con la del gobierno en la actualidad;
- d) restringir la información logrando con ello negar las proposiciones de quienes actualmente accionan o se plantean en contra de la dominación y hegemonía neoliberal;
- e) saturar con sobreinformación a la ciudadanía en determinados momentos, para generar una manipulación psicológica. Un ejemplo ha sido la situación de los mineros en la Mina San José o de los damnificados por el terremoto del pasado 27 de febrero, ambos acontecimientos transformados en "reality show";
- f) amplificar exageradamente los hechos sangrientos, asesinatos, asaltos, muertes en accidentes, etcétera.

En fin, en la televisión neoliberal todo se presenta como un espectáculo, la realidad se presenta como un show y se dramatiza. Cada uno de estos aspectos de la televisión neoliberal constituyen una manifestación de la violencia política comunicacional de carácter simbólico, con la que se trata diariamente a la ciudadanía en Chile. Con ellos, además, se impone un tipo de representación de la realidad social y cultural que se convierte en hegemónica.

Durante estos 22 años de régimen electoral autoritario, los canales de televisión -Chilevisión, Megavisión, Canal 13 y Televisión Nacional, principalmente- y los medios de comunicación de masas, especialmente los periódicos que pertenecen a las cadenas empresariales de El Mercurio o de COPESA -el llamado duopolio informativo nacional- se han encargado de transmitir y construir en la opinión pública la idea fuerza de que toda acción social colectiva como paros, manifestaciones, marchas, concentraciones, etcétera, realizadas por la ciudadanía, son actos políticos violentos o están en el umbral de la violencia política e inclusive del terrorismo. Fundamentalmente porque atentan

en contra de la propiedad pública y privada; alteran el orden público, interrumpen las actividades comerciales, laborales o educacionales normales, etcétera. De esa forma la prensa y la televisión han criminalizado todo movimiento de protesta.

En relación con lo anterior, los medios de comunicación se han referido exclusivamente a los desbordes de violencia, han minimizado el número de participantes en los desfiles pacíficos y no han proporcionado el contenido de fondo sobre las causas de la movilización. Esa fue y es la forma habitual de tratar la acción política del movimiento social mapuche. Sobresale el trabajo mediático del diario El Mercurio, el que en sus editoriales y reportajes informativos sobre la “cuestión mapuche” sistemáticamente ha calificado a toda acción social y política reivindicativa del movimiento mapuche como una acción de vándalos, violentistas o de terroristas.

En realidad, la cadena periodística El Mercurio como reacción al asesinato del senador y fundador de la Unión Demócrata Independiente, UDI, Jaime Guzmán Errázuriz, en 1991, puso en marcha una estrategia comunicacional destinada a identificar o señalar o calificar como “terrorismo político” cualquier manifestación social o acción política que cuestionara el orden político, económico, social y cultural establecido por la Dictadura militar o a la principal obra política-institucional de Guzmán Errázuriz, la Constitución Política de 1980. En otras palabras, para El Mercurio, toda oposición social o política que pusiera o ponga en riesgo la continuidad del orden neoliberal constituye un “acto terrorista”. Esta postura mercurial refleja y da cuenta del miedo histórico de las clases dominantes.

### **El miedo histórico político**

Efectivamente, podríamos sostener que en este miedo como también en otros y en no pocos actores políticos ya sea concertacionistas o de derecha, se ha desarrollado una suerte de **“paranoia antiterrorista”**. Ésta se ha extendido ampliamente entre la ciudadanía nacional, fundamentalmente por la capacidad de penetración que tiene tanto el discurso mercurial como el televisivo actualmente en la sociedad neoliberal chilena. Su influencia en el comportamiento social, político y cultural es notable. Pues esta paranoia genera el discurso del miedo, temor,

donde todo es peligroso. De allí que podamos sostener que la sociedad chilena sea una sociedad temerosa, aterrada, miedosa. Por ende, conservadora.

Producto del “discurso antiterrorista” de los medios de comunicación que apoya, a su vez, la acción represora del Estado, en la sociedad chilena las y los ciudadanos tienen miedo político colectivo. Dominar por “el terror” fue lo habitual en el Chile pinochetista (1973-1990), en el Chile concertacionista (1990-2010) y lo es, hoy, en el Chile de Piñera.

Gobernar a través del miedo constituye una manifestación de la violencia histórica y de la “amenaza” permanente que las élites dominantes y grupos dirigentes han ejercido y transmitido a lo largo de la historia de Chile. El terror ha sido el instrumento político utilizado por ellos para conjurar el profundo miedo histórico que han tenido siempre a la acción histórica de los sectores subalternos. Por esa razón, el violento terror político de carácter práctico o simbólico, objetivo o subjetivo ha estado dirigido a controlar, someter, desmovilizar y criminalizar toda manifestación social y política ya sea pacífica o violenta de los sectores subalternos en contra del orden político dominante.

El “miedo histórico” de las élites y grupos dominantes, quienes lo han transmitido a los sectores medios, es parte de su “ser y estar” en estas tierras usurpadas violentamente a los pueblos originarios, lo cargan en su memoria e identidad histórica. Ese temor es el que los lleva a reaccionar violentamente ante cualquier amenaza real o simbólica a su condición. Ese miedo está directamente relacionado con la contundente defensa que, los pueblos originarios, específicamente los mapuches, realizaron de su tierra, territorio y autonomía ante la invasión de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Frente a la violenta ocupación de sus tierras, destrucción de sus formas culturales y de vida, sometimiento a formas laborales compulsivas y obligatorias, etcétera, los mapuches se alzaron violentamente, o sea, desarrollaron VPP, en contra del invasor. La VPP mapuche del siglo XVI fue exitosa. Pues obligó a los españoles, luego de la muerte de dos de sus jefes políticos y militares -Pedro de Valdivia y Martín García Óñez de Loyola, el primero muerto tras la batalla de Tucapel en 1553 y el segundo, tras la batalla de Curalaba en 1598-

a renunciar a ocupar la Araucanía y a reconocer la territorialidad y autonomía política de la nación mapuche.

La pequeña élite española-chilena que dominaba al norte del río Bio Bío aterrada recurrió al Estado imperial, a la Corona, para mitigar su miedo, conservar sus propiedades y sus vidas. El Imperio español reconoció la derrota militar y estableció un Ejército permanente en una frontera ribereña. Aunque la paz entre la nación mapuche y la nación española-chilena fue relativa a lo largo de los 285 años siguientes, el miedo político de las élites dominantes a una rebelión mapuche fue permanente. Los dones y las doñas no pudieron dormir tranquilos porque sobre ellos pendía históricamente la lanza o la maza del guerrero mapuche. Ni siquiera pudieron hacerlo cuando el Ejército victorioso de la Guerra del Pacífico, en 1883, logró ocupar militarmente el territorio de la nación mapuche.

Tal como dijo Violeta Parra, ya no eran los españoles que ocupaban sus tierras, sino que ahora “son los propios chilenos”. Desde 1883 hasta el día de hoy el Estado chileno ha intentado bajo todas las formas y recursos posibles someter al pueblo mapuche, reducirlo, destruir su identidad cultural y hacerlos desaparecer a través de la integración, asimilación, transculturación, pero hasta ahora ha sido imposible. Por esa razón, los “dones y las “doñas” siguen teniendo miedo.

### **La violencia y el miedo “gore” en la sociedad neoliberal**

Para finalizar estas notas sobre la violencia y el miedo como agentes históricos de la conformación y la estructuración de la sociedad capitalista actual y del comportamiento político y social de las y los ciudadanos no sólo en Chile sino también en América Latina y el Caribe, me quiero referir a las nuevas formas de violencia y miedo político que han sido engendrados por el capitalismo neoliberal. El que lentamente se va configurando en la sociedad actual. Se trata del “capitalismo neoliberal gore”.

El “capitalismo neoliberal gore” se constituye en los años 80 del siglo pasado en América Latina y el Caribe como consecuencia directa de tres procesos históricos, a saber: a) la crisis de la deuda de 1983-1985, que dio lugar a la “década perdida” en el continente; b) la instalación del patrón de acumulación neoliberal en la región

en respuesta a la crisis de la deuda y al agotamiento del patrón de acumulación industrial sustitutivo; c) el aumento de la pobreza y la marginalidad en la mayoría de las sociedades latinoamericanas. A estos tres procesos históricos latinoamericanos y caribeños habría que sumarle la crisis de la sociedad capitalista fordista a nivel central. Cuyas dos mayores expresiones son la crisis energética de los setenta y la pérdida de la centralidad del trabajo productivo tal como se había desarrollado en el periodo anterior. Todo lo cual da como resultado la configuración de una sociedad hiperconsumista.

La sociedad chilena es, sin lugar a duda, una sociedad del hiperconsumo, por eso la describimos como una sociedad mercado-céntrica. Esto significa que actualmente ya no estamos en el Estado-Nación sino en el Mercado-Nación. Este es un desplazamiento fundamental que lleva asociados grados importantes de violencia simbólica y ha producido y generado poderosos miedos sociales y culturales. Uno de los principales es estar fuera del Mercado-nación. El miedo a dejar de consumir para existir, el temor a dejar de habitar la ciudad mercantil. Obsérvese cómo la publicidad y el discurso asociado a ella ha ido fortaleciendo la consolidación del Mercado como la nueva Nación que *nos une*.

En esta nueva Mercado-Nación se reproducen cotidianamente las prácticas del consumo "gore". Este particular tipo de consumo tiene como principal característica su práctica violenta. Se trata de la actividad mercantil vinculada con las actuales formas delincuenciales. Se trata del consumo asociado al narcotráfico.

## **II. - LA PROTESTA POLITICA Y SOCIAL**

### **La cuestión mapuche: el “salvavidas” político de la oposición piñerista**

El escenario político que se ha instalado en la sociedad chilena a raíz de la “huelga de hambre de los comuneros mapuches”, ha permitido a los actores políticos y sociales reordenar sus estrategias de confrontación y oposición al gobierno personalista de Sebastián Piñera. Por un lado, la Concertación, que dejó pendientes tantas cosas, hizo tan mal otras, especialmente desde la perspectiva de la democratización profunda que requería la sociedad chilena luego de 17 años de dictadura, permitiendo con ello que la dominación y la hegemonía neoliberal se impusiera por doquier. La Concertación, al privilegiar la estabilidad política, evitó y postergó -como ha sido habitual en la acción gubernamental de los gobiernos de centroizquierda- la democratización y la transformación social y económica en beneficio de los sectores sociales más desprotegidos de la sociedad. Su interés fue la consolidación del capitalismo neoliberal. Con ello abrió la estructura de oportunidades políticas no sólo para que la derecha política volviera al gobierno, sino que “reconstruyó” al “enemigo político” que muchos necesitaban para recomponer sus fuerzas políticas y sociales tanto al interior de la Concertación como fuera de ella. Por otro lado, el autoritarismo represivo de la derecha se manifiesta de manera integral y coherente como ha sido tradicional en Chile: su total desprecio por la democracia y la manifestación política de los ciudadanos. Se trata de un autoritarismo político selectivo, planificado y certero. Así ha quedado demostrado en la forma como han sido reprimidas las últimas movilizaciones políticas ciudadanas. Y, por cierto, en la manera como el gobierno está abordando la cuestión mapuche.

La Concertación es responsable política directa del mal manejo de la “cuestión indígena”. Ahora asume una postura políticamente hipócrita e instrumental. Tengo la percepción que la

Concertación busca reproducir artificialmente, atemporalmente y de manera ahistórica el “ambiente político” opositor que durante la dictadura de Pinochet le permitió obtener el gobierno en 1990, con el objetivo de recuperarlo en 2014. El problema que enfrenta está en que el “populismo” de la nueva forma de gobernar de la derecha se ha demostrado eficiente en lo comunicacional, hasta el momento, pero no necesariamente eficaz en la resolución de los problemas que enfrenta, aunque se anota algunos puntos. Por esa razón, considero que la oposición concertacionista, totalmente desconcertada, ha encontrado un salvavidas, paradójicamente, en la cuestión mapuche.

La “cuestión mapuche” era hasta ayer indiferente para todos, pero ahora “todos” somos parte de ella. Se transformado en la mejor excusa que sirve a “moros y cristianos” para converger en contra del gobierno de la derecha, pero sin asumir el problema de fondo que se traduce en restitución de **tierra, territorio y autonomía al pueblo-nación mapuche**, tal como ha sido sostenido por la movilización mapuche que no se inició hace 80 días, sino hace 20 años.

El problema político de fondo se encuentra en que la sociedad chilena debe decidir si asume o no la “cuestión indígena” en toda su dimensionalidad y profundidad política e histórica. Por lo tanto, el que se termine la “huelga de hambre”, el que se cambie la legislación o que no se apliquen las leyes antiterroristas, no elimina el problema político e histórico sustantivo: otorgar tierra, territorio y autonomía a la nación mapuche, o sea, en otras palabras, total soberanía. Frente a este problema los partidos de derecha como los concertacionistas no se pronuncian o prefieren desviar la atención hacia otros temas como el de la educación, de la pobreza, de la exclusión social, etcétera; que siempre terminan siendo “salvavidas” políticos transitorios, coyunturales, para salir del paso, pero nunca para comprometerse con el fondo del problema.

Por eso sostengo que la denominada “cuestión mapuche” le hace bien a la Concertación, a la oposición comunista y a la izquierda extraparlamentaria, fundamentalmente, porque les sirve para confrontar al gobierno de Piñera. Pero le hace mal, pésimo, al movimiento mapuche, ya que los encuadra en la institucionalidad política estatal nacional. Ya que bastará que los

comuneros en huelga de hambre la suspendan para que todas y todos se olviden de ellos, y todo vuelva a la normalidad política. Por esa razón, pienso que el movimiento mapuche no debe aceptar la intromisión de aquellos que lo miraban con desdén no hace mucho.

Este es un movimiento social que los comuneros, los militantes y mártires de la causa mapuche han mantenido activo desde hace mucho tiempo. La huelga debe ser levantada y/o negociada siempre y cuando las y los chilenos estén dispuestos a restituirles lo que les corresponde, que no es otra cosa que: tierra, territorio y autonomía con dignidad, respeto y, sobre todo, soberanía.

Para que lo anterior sea posible se requiere que la "cuestión mapuche" sea asumida por toda la ciudadanía nacional como una problemática central y fundamental para la constitución y conformación de una nueva realidad social, económica, cultural y política. Ello implica avanzar en la constitución de un vasto movimiento social y político destinado a modificar las actuales estructuras jurídicas-políticas que sostienen al arcaico y superado Estado-Nación.





## El Estado y el neoextractivismo marítimo neoliberal destruyen la naturaleza y la vida humana en Chiloé<sup>147</sup>

*“Uno empieza a pensar,  
que somos un país que tiene una inmensa costa,  
más de cuatro mil kilómetros de costa  
y no hay una entidad seria que pueda llevar eso,  
que pueda hacer estudios,  
ver todo el tema marítimo,  
que no se haga daño.  
Si acá ustedes ven, ves tú que no hay nada,  
que acá cualquiera llega y saca 900 mil toneladas,  
o arrasa con maquinaria pesada un banco natural de almejas  
del que vive un pueblo chico  
para botar residuos industriales.  
Esto yo lo denuncié le hicieron reportaje  
y salió en la tele, de nada sirvió.”  
Fabián Teca.<sup>148</sup>*

Pescador Artesanal y Procesador temporero en la  
Planta de Procesos Pacific Star en Quellón

La protesta social y política protagonizada por los pescadores artesanales y ampliamente respaldada por la ciudadanía de Chiloé, más allá de los factores coyunturales que la explican, tiene raíces en la historia reciente de la zona y del país. Específicamente en la forma como el Estado de Chile impulsó el cultivo del salmón desde 1974 y cómo lo entregó a un proceso de industrialización acelerada en 1980. En dicho año se negoció la deuda externa de Chile y un mecanismo de esa negociación

<sup>147</sup> Este artículo fue escrito en colaboración con la Dra. Virginia Ramos y se construye con base en la información de su tesis doctoral: La responsabilidad social de megaempresas y Estado en el uso y administración de bienes comunes. El caso de la intervención de la mega-industria del Salmón en los bordes costeros del archipiélago de Chiloé, Chile 1983-2013. Leída y presentada en el Programa de Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina, Universidad ARCIS, 2013.

<sup>148</sup> Testimonio entregado a Virginia Ramos.

fue la entrega de la explotación industrial del salmón al capital transnacional. En aquellos años se declaró que “el mar era la promesa alimentaria para Chile” y al mismo tiempo se materializó la total liberalización de la economía nacional. Entregando, vía licitaciones, sus recursos naturales marítimos al mercado global. Con ello, se dio inicio a una nueva fase expansiva de su larga historia social y económica extractivista.

El nuevo extractivismo marítimo opera bajo el principio “*laissez faire, laissez paseer*” exacerbado, tan propio de la forma de acumulación neoliberal. Esto implica que el Estado dejara de actuar en los espacios marítimos concesionados, de establecer las trabas legales adecuadas y de ejercer las fiscalizaciones y controles necesarios que evitaran la devastación medio ambiental, territorial y humana, o sea, sobre la vida, lo que generó la explotación indiscriminada e irracional del salmón. En otras palabras, el Estado dejó, en los hechos, de gobernar en los territorios enajenados al capital transinternacional. Fue reemplazado por el poder de las grandes empresas transnacionales. Las que han ejercido en la región una absoluta “soberanía productiva” tanto sobre las áreas de explotación marítima como sobre los hombres y mujeres que laboran en esas empresas.

El impacto de la industria salmonera ha sido integral en la sociedad chilota. Transformando completamente la vida y la cultura de los habitantes originarios e históricos de Chiloé. Los chilotes construyeron desde antiguo, es decir, ancestralmente, una activa cultura terrestre-marítima. El Estado, al momento de entregar el mar al capital extranjero, lo hizo como si esos espacios hubieran estado deshabitados. No fueron considerados como un espacio geohumano y cultural. Es decir, donde la naturaleza y el ser humano constituían una unidad vital inseparable. La explotación y la intervención industrial masiva e intensiva del mar quebró dicha relación provocando una alteración permanente del ecosistema y de la vida de la Isla. La destrucción de la vida en Chiloé no solo tiene relación con el cambio climático, con la marea roja, o con la contaminación del mar producto de haber vertido toneladas de salmones descompuestos, sino con la constante sobreexplotación “racional” de la naturaleza por parte de la moderna industria salmonera.

Con este artículo, queremos dar cuenta cómo la enajenación por parte del Estado de Chile del mar chilote y la industria salmonera han provocado la devastación de la vida tanto humana como marítima del borde costero del archipiélago de Chiloé. Y, sobre todo, queremos destacar y revelar la responsabilidad política e histórica del Estado como de los diversos gobiernos que lo han administrado desde 1974 a la fecha, en la destrucción de la vida en la zona. Pero también aspiramos a llamar la atención de que no solo el Estado es responsable de esa devastación sino también la indolencia, indiferencia y apatía de la gran mayoría de las y los ciudadanos nacionales, quienes a lo largo de estos años han avalado y respaldado ya sea de manera activa o pasiva la explotación irracional de la naturaleza.

Los actores de la sociedad civil como del Estado y, sobre todo, del mercado, han desoído la voz de muchos chilotes que durante años habían venido denunciando la devastación de la vida marítima y humana por la acción de la industria salmonera. Hoy que gritan su rabia al país, su voz se escucha. Sin embargo, durante décadas, nadie escuchó ni prestó la atención a lo que allí ocurría. Salvo algunos documentalistas nacionales y extranjeros, unos pocos analistas económicos y sociales y, sobre todo, los defensores del medio ambiente mostraron y divulgaron por los intersticios y desde los márgenes de la sociedad neoliberal, el desastre que allí se estaba padeciendo. Las voces que hoy se escuchan con fuerza son también esas voces que llegan del pasado reciente. Han transcurrido 40 años desde que comenzó la devastación que hoy todos atienden y muestran preocupación. Nos podemos preguntar, con justa desazón ¿no será ya un poco tarde para Chiloé y su gente?

Lo más atrayente de Chiloé para el capital internacional, en la segunda mitad de los años setenta, no eran sus leyendas ni sus mitos, ni la amabilidad de su gente, sino sus aguas marítimas: ideales en temperatura, PH, oxígeno y pureza ambiental para el cultivo industrial del salmón. Unido al hecho de que la Isla y sus alrededores contaban con un excedente de población desocupada o semi-ocupada que prometía a las empresas contar con una mano de obra barata, además de una oferta permanente de harina de pescado (alimento del salmón) a muy bajo costo, producida en el mismo lugar, hacían que el interés por instalarse en la zona fuera altamente codiciado y esperado por los inversionistas extranjeros.

El Estado y los gobernantes de la época, respondiendo a ese interés del capital extranjero, concesionó a \$22 el m2 de mar adyacente a la Isla. Según un dirigente sindical de la época: “de 3 pesos, la empresa aportaba 1 y el Estado de Chile 2, por tanto, era un negocio demasiado bueno para ser verdad”. El gobierno que necesitaba urgentemente dinero aceleró el proceso de concesiones, por lo tanto, sin mediar estudios de ninguna naturaleza, ni de impacto ambiental ni de capacidad de carga, de nada, entregó el mar a la codicia de las empresas internacionales. Y el mar chilote fue enajenado a las empresas transnacionales. Nadie dijo nada.

El Estado, además, respaldó financiera y logísticamente de diversos modos el desarrollo de la industria salmonera, de manera directa o indirecta, a través de CORFO, FONDEF, universidades públicas, subsidios y estableciendo nuevas oficinas de la administración pública para atender sus requerimientos logísticos y operativos; realizó inversiones en carreteras, infraestructura, proyectos hidroeléctricos, concesiones hipotecadas, etcétera. Al mismo tiempo que promulgaba leyes laxas y reducía al mínimo la fiscalización sobre las actividades extractivas de la industria salmonera. Todo contribuyó a la ampliación, consolidación y desarrollo en el tiempo de la industria salmonera sobre las bucólicas aguas chilotas.

La estrecha alianza entre lo público-estatal -representado por la Subsecretaría de Pesca, órgano estatal encargado de la jurisdicción de concesiones para el cultivo de salmón y el departamento de Defensa de Bienes Nacionales, quien debía supervisar la gestión del borde costero-, con el capital privado transnacional, posibilitó que la industria del salmón se transformara en una actividad altamente rentable, y un ejemplo de la iniciativa privada. Especialmente cuando el Estado deja operar libremente y, sin ninguna intervención, al mercado.

No obstante, en 1985 el Ministerio del Medio Ambiente observó oficialmente que las jaulas de cultivo del salmón estaban afectando el mar privándolo de oxígeno. Fue una voz que no se escuchó o se relativizó la falta de oxígeno. En el entorno de las jaulas existía ya el “copépodo caligus” por el uso irresponsable del pesticida “benzoato de emamectina”, así como algas tóxicas causantes de marea roja.

En el año 2003 Noruega lideró el mercado del salmón y trucha, Chile le siguió en el segundo lugar a nivel mundial. Produjo 600 mil toneladas al año, US\$ 2.000 millones. Para competir en el mercado global, en Chile, se sobrexplotaron las jaulas, así en el año 2007 los salmones estresados estaban debilitados y contrajeron el virus ISA. El crecimiento promedio anual de las salmoneras de 22% cayó en un 50%.

Los peces entonces fueron afectados por "caligidosis", "compépedo" o "piojo de mar", por virus ISA y por SRS o "Piscirickettsiosis", considerado en prioridad antes del ISA como la principal causa de pérdidas en la engorda y que puede llegar a producir el 90% de la mortandad en algunos centros de cultivo. La lista y cantidad de antibióticos aplicadas en las jaulas es larga y diversa, entre ellos se encuentra el Cristal Violeta prohibido en el mundo entero por ser cancerígeno; las Quínolas, restringidas a nivel mundial; la Cipermetrina, prohibido en la acuicultura de Canadá por sus negativos efectos ambientales y sobre los recursos bentónicos silvestres, especialmente, los langostinos. Otro pesticida es Deltametrina, también piretroide bio-acumulable. Los que impiden la producción de mitílidos o choritos. De manera que, para evitar las enfermedades de los salmones, las empresas enfermaban la vida marítima.

Por otro lado, la producción de harina de pescado además de extinguir el jurel y la anchoveta contribuye al sedimento que desde las jaulas de engorda se esparce hacia el mar mezclado con enormes cantidades de antibióticos. En Noruega, en el año 2007, ocupaban apenas 0.02 gramos de antibióticos por tonelada de salmón, en Chile se usaron 732 gramos por cada tonelada producida, 36 mil veces más. Antibióticos que se pierden en el agua marina, son consumidos por otros peces y por los que consumen a esos peces.

De acuerdo con cálculos estándar de contaminación generada por salmoneras, estimada según los suministros de alimentos artificiales que recibe la sobrecarga de salmones cautivos en balsas-jaulas, una tonelada de salmones requiere la inversión de 1,2 toneladas de alimentos artificiales (pellets de harina/aceite de pescado) y de esta alimentación se generan 800 kilogramos de materia orgánica (DBO7) y 78 kilogramos de

Nitrógeno (N total) los excesos de materia orgánica, por sobre las capacidades de carga de los sistemas intervenidos, han producido condiciones “anaeróbicas” en 400 puntos del Mar de la Patagonia, desde Puerto Montt a Capitán Aracena, en la Región de Magallanes, con una concentración de centros anaeróbicos en las Regiones de Los Lagos y de Aysén.

**La sobreexplotación de jaulas**, el alimento mezclado con sobredosis de antibióticos provoca **sedimento, centros marinos anaeróbicos** y exceso de materia orgánica rica en **Nitrógeno**, alimento esencial de una especie del Reino de los Protistas, intermedio entre el Reino Animal y el Vegetal, **la Alexandrium Catenella** que no es un alga, sino el dinoflagelado más eficiente para capturar nitrógeno disuelto en la columna de agua marina, que tiene la facultad de hacer fotosíntesis para alimentarse **provocando o facilitando la emergencia de MAREA ROJA**. Causa de las muertes actuales de diferentes especies marinas. Durante su ciclo de vida libera cistos o quistes de resistencia, **“SEMILLAS” que se depositan en el sedimento** marino a la espera de condiciones ambientales y nutricionales favorables que le permitan volver a proliferar. En esta ocasión este **florecimiento de A. Centella proviene de quistes de resistencia depositados, en el año 2009, en el sedimento marino de esas localidades**. La marea roja que se extiende ahora por dentro y por fuera de la Isla Grande de Chiloé y hasta Valdivia, es una marea roja activa en la columna de agua y “latente”, en el sedimento marino.

La versión difundida de que las 9.000 toneladas de salmones pudriéndose en las costas de Chiloé son detonantes de la crisis de la pesca artesanal, o la que acusa al cambio climático de causar las pérdidas en las empresas salmoneras y, por tanto, el despido de sus trabajadores no corresponde a la verdad del proceso continuo de devastación marítima y territorial llevado a cabo por el conocido cluster del salmón. Esta es una forma de organización sinérgica del proceso productivo local que el Estado eligió con miras al crecimiento económico local orientado a la exportación de materias primas puesto en práctica desde 1980 al 2011, año en que el entonces Intendente de Los Lagos declaró que “los clúster no rindieron los frutos esperados sin generar la actividad público-privada esperada”. Se aceleró la acumulación

del capital financiero y las fusiones de empresas salmoneras con deudas a los bancos, respaldadas por el Estado de Chile. El mar se agota, pero no así el afán de lucro de las salmoneras, que hoy muestran al mundo su crisis en el mar del sur de Chile.

Por las amenazas de depredación marítima y faltas a códigos éticos mundiales de trato a sus trabajadores, la transnacional Marine Harvest, especialmente, recibió la visita de la OCDE y de otras organizaciones que investigaron tales delitos. Se firmaron acuerdos de buenas prácticas, el Ministerio del Trabajo cursó multas, ni cumplidas ni pagadas. Casi todos los años Chile recibe acusaciones de dumping por abusos en el proceso productivo de las salmoneras en Chile y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile dispone de equipos de abogados especializados en defenderlas.

Importantes contravenciones fueron denunciadas ante el Senado ya en el 2012. En el 2013 se llevó a cabo en Chile la mayor Feria internacional de acuicultura, con gobiernos del G15, empresas multinacionales del cultivo del salmón, con noruegos que tienen el 70% de la producción mundial. Las multinacionales salmoneras en Chile pidieron ser sede probablemente como blindaje ante instituciones del Consenso de Washington (FMI, Banco Mundial, Departamento del Tesoro de USA) por probable crisis. La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ha impulsado y sigue apoyando el cultivo del salmón por considerarlo “una proteína para el futuro de la humanidad” reconociéndolo como un “bien común de Chile”. En su rol de coordinadora de la Feria Acuícola Internacional del año 2013, la FAO pareció no tener conocimiento de la situación de sobreexplotación del mar chileno por los cultivos de salmones.

Las empresas pidieron más concesiones y no han bajado la densidad de ocupación en jaulas. De 417 centros de engorda activos al año 2011 que declara la Subsecretaría de Pesca, 322 (75%) estaban afectados por Caligidosis, piojo de mar, o copépodo. Singularmente, la empresa salmonera declaró producir 450 mil toneladas en un cuarto de los centros que tenía activos. Las jaulas han sido trasladadas en nuevas concesiones en Aysén y Magallanes, llevando consigo a los peces y sus infecciones, sus malas prácticas ambientales, sus malos manejos sanitarios, su explotación laboral. La Subsecretaría de Pesca profetiza una producción de 1,2 millones



de toneladas en los próximos años, independientemente de los tamaños y profundidades de los mares, de las corrientes marinas y de la existencia de otras actividades diferentes a las de la salmonicultura en las aguas interiores. El Estado sigue destruyendo el mar.

Para reducir sus costos de producción, las salmoneras mantienen a los trabajadores en condiciones precarias, sin protección social, a bajos salarios; hacen despidos masivos para debilitar la organización de los trabajadores; no se llevan registros de accidentes en las jaulas; no se reconoce públicamente la labor de buzo, está externalizada y mueren más de 15 buzos al mes. A pesar de la ley Lafkenche que prohíbe instalar jaulas en las costas en lugares considerados sagrados, las empresas las instalan sin permiso impidiendo el cultivo de mitílidos o choritos y otra pesca. Williches y pescadores, en general, quedan sin su acostumbrada forma de subsistencia. Por distintas actividades secan el terreno para ganado. Matan especies mamíferas costeras. Los trabajadores son impedidos de salir de faena, varios han muerto en el mismo lugar de trabajo. Los ejecutivos de tales empresas condenados por tribunales no cumplen sentencias. Multados por Inspección del Trabajo no pagan. La total impunidad.

Desde el año 2003 comenzó el regreso migratorio de la ciudad al borde costero. Desde el año 2007 en que se declara la crisis, se despide a más de 50.000 trabajadores, el Estado les subvenciona \$111.000 pesos chilenos por obrero contratado, sigue la cesantía, pagan a subcontratistas con temporeros para terminar su cuota de cosecha en 5 días de 18 horas, al final de ello el trabajador queda cesante.

Por tanto, la muerte del mar de Chiloé viene arrastrándose por años y junto a su mar su gente pierde sus bienes comunes, salud, educación, vivienda, subsistencia, se disgrega su tejido social y cultural. El daño causado por las salmoneras es evidente y los gobiernos insisten que "El mar es (la) promesa alimentaria para Chile", pero respaldándolas política y financieramente. No solo el Estado ha respaldado a la industria salmonera sino también la banca nacional. En el año 2008, la deuda de las salmoneras con la banca ascendía a 4.000 millones de dólares.

La entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, entregó vía CORFO, 450 millones de dólares. Y anunció, en el **discurso presidencial del 21 de mayo de 2008**, la entrega de 600 millones de dólares en auxilio de dicha industria. Con el objetivo de que se recontratara trabajadores cesantes otros 500 millones de dólares. Además, propuso abrir una línea de crédito bancaria de 450 millones de dólares. Para lo cual los bancos exigieron que las salmoneras hipotecaran sus concesiones pesqueras. Así en el párrafo clave de las modificaciones a la Ley de pesca de 2009 -previo fuerte lobby de los banqueros-, se **permite que las concesiones acuícolas sean hipotecadas** y con fórmulas para que la caducidad de estos permisos no se haga efectiva y puedan ser intercambiadas como cualquier producto transable entre acuicultores y entre éstos y los bancos. Las salmoneras podrán usar las concesiones otorgadas por el Estado como respaldo bancario a los créditos. Hipotecar bienes nacionales de uso público es: inconstitucional, porque no son inmuebles.

Hoy el capital está concentrado en 7 megaempresas. Los bancos negocian la deuda una por una. Cuando los bancos se quedan con la propiedad de las Concesiones hipotecadas dejan libres a las empresas para que vendan al precio de la deuda restante y paguen. En el año 2010 **los bancos remataron las concesiones** a megaempresas extranjeras del salmón porque Chile es el país que pone menos problemas a la expansión y facilita la concentración de capitales.

Empresas noruegas, canadienses, japonesas están en un proceso acelerado de concentración del capital. Especulan con el 40% de concesiones dejando el resto pasivas para venderlas cuando aumente su valor. No quieren las concesiones para otro rubro. Hacen figuras para mantenerlas, declaran al seguro infecciones en concesiones inexistentes, alteran cifras de producción en Sernapesca central. Así, en el año 2008 se avisó que en el año 2014 se produciría un proceso de reordenamiento total del mapa financiero de las megaempresas del salmón y en todos los aspectos.

La mayoría de las salmoneras están con deudas registradas entre 500 millones de dólares y 1.000 millones de dólares. Los bancos siguen reticentes a prestar más. El Banco Central (BC) en

su Informe de Percepciones de Negocios de mayo de 2016 dice que: "Varios bancos están realizando esfuerzos importantes para evitar el deterioro de los pagos, tiene que responder por el dinero de los ahorrantes".

Como mera información, con el derramamiento de salmones muertos en alta mar chilota, el precio del salmón aumentó de US\$3,50 a US\$5,40 en el mercado global. O sea, las nueve mil toneladas de salmones infectados vertidas en el mar no fueron en vano.

En Chiloé, Aysén, Magallanes y últimamente en aguas dulces de la IX y X región, las salmoneras han mantenido sus prácticas habituales de evitar las regulaciones ambientales y sanitarias, así como la sobreexplotación de los sistemas marinos para sustentar su especulación financiera. Por esa razón, son un peligro para la vida humana.

Por último, es importante señalar que la marea roja no es causada en Chile solo y exclusivamente por el cambio climático, ni por los salmones muertos en las costas de Chiloé, factores coadyuvantes de la actual crisis, pero no determinantes. La crisis actual es el resultado de cuatro décadas de malas prácticas de las salmoneras, las cuales desde su llegada a las costas de Chiloé han ido dando muerte al mar. Si no se detiene "la producción del salmón", esta será apocalíptica para la costa de Chiloé.

El Estado de Chile debe dejar de respaldar las deudas de las salmoneras, de permitir más su irresponsabilidad con el medio ambiente, con el territorio chileno y con sus habitantes. Las salmoneras se apropian de bienes nacionales de la República, imposibilitan la vida humana y marítima en Chiloé y amenazan al resto del mar del sur de Chile.

Pero también la sociedad civil, las y los ciudadanos, los medios de comunicación, las universidades públicas, los científicos sociales, deben abandonar la indolencia e indiferencia que ha permitido la destrucción de la vida en Chiloé como en otros lugares del país. Tomar consciencia de que el extractivismo, el uso indiscriminado de los bienes comunes que nos ofrece la naturaleza no es el mejor camino para la sustentabilidad de la vida en el territorio nacional. Debemos avanzar como sociedad

en la discusión de un nuevo modelo productivo que respete la naturaleza. En otras palabras, se debe exigir el fin de la soberanía mercantil del capital transnacional como nacional.

La actual rabia ciudadana chilota no puede quedar como otra manifestación coyuntural del conflicto entre el Estado, Mercado y la Sociedad. Como lo han demostrado otros conflictos similares en la demanda parcial y particular exigiendo al gobierno de turno la solución momentánea de una situación crítica. Las cuales son, por lo general, soluciones de mercado. Para que, una vez dominada la rabia, todo vuelva a lo mismo. NO, la devastación de la naturaleza, por acción humana, es irreversible. Si no se corrige hoy, el mañana será, no será.



## **El movimiento social y político popular en una encrucijada**

La muerte accidental del trabajador municipal, Eduardo Lara, durante las manifestaciones sociales y políticas contrarias al gobierno, el día 21 de mayo en la ciudad de Valparaíso, es una muerte pueril, estúpida, políticamente inútil. Una muerte que nunca debió haber ocurrido. No obstante, a pesar de que la muerte del trabajador municipal constituye un hecho fortuito es, al mismo tiempo, un infortunio político para el movimiento social popular y ciudadano. Tanto para la vertiente que lucha y resiste la dominación capitalista neoliberal como para aquella que rechaza la administración gubernamental de la Nueva Mayoría.

La desgraciada muerte del trabajador es, como hemos dicho, un infortunio, para el movimiento social popular y ciudadano que legítimamente ha optado por impulsar y seguir un determinado derrotero político, ideológico, así como la implementación de formas de lucha política y acciones sociales que no se enmarcan ni se encierran en los estrechos límites institucionales de la "democracia protegida" vigente. Lo es, fundamentalmente, porque todos los sectores políticos hoy los condenan y responsabilizan de lo ocurrido en Valparaíso. Todos, incluyendo aquellos sectores que hoy disienten del gobierno y exigen que "caiga sobre ellos, todo el peso de la ley", en otras palabras, que el Estado los reprima con todo.

Por esa razón, considero que la desgracia que hoy enluta a la familia de Eduardo Lara, no puede servir ni ser utilizada políticamente y de manera oportunista tanto por los partidos políticos del orden, conformes y defensores de un sistema político putrefacto y de un régimen social que diaria y cotidianamente arranca la vida de muchos, como por los sectores políticos que hoy disienten del actual gobierno, que con una crítica política fácil, rápida, escasamente reflexiva, asimilan la acción política de los sectores presuntamente responsables con la acción represiva

de las Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile. Estos sectores, que legítimamente han optado por asumir una oposición crítica al gobierno de turno al interior del régimen político existente no se oponen de manera categórica y radical al orden social, político y económico que explota y devasta tanto a la vida humana como la naturaleza, es decir, al régimen capitalista.

La infortunada muerte del trabajador municipal no puede dar lugar a una utilización descarada y abusiva de parte de los medios de comunicación adscritos al poder del capital, especialmente de los canales de la televisión abierta, para que la exploten comunicacionalmente y de manera sensacionalista con el objeto de condenar y criminalizar las manifestaciones políticas y sociales; y aprovechar de encubrir o desviar la atención sobre las motivaciones y razones que tiene el movimiento popular y ciudadano para protestar en contra del gobierno, la clase política, los partidos del orden y, sobre todo, contra la dominación capitalista neoliberal.

Ahora bien, como todos sabemos, las luchas sociales, las manifestaciones políticas, las protestas sociales populares y ciudadanas no están libres de violencia política. La memoria popular y los anales de la historia política ciudadana registran innumerables hechos violentos protagonizados tanto por la violencia política estatal como por la violencia política popular. Tengamos presente que la violencia política estatal hace exactamente un año casi mató a un estudiante, Rodrigo Avilés, cuando el carro lanza agua de Carabineros de Chile, con toda la intención y, por lo tanto, de ninguna manera fortuita, dirigió el potente chorro de agua contra el estudiante. Allí la violencia no fue accidental, no fue casual, todo lo contrario, el objeto era violentar los cuerpos, por ende, la vida de los manifestantes. Días antes en la misma ciudad caían fulminados por un balazo dos jóvenes estudiantes que protestaban por el derecho a la educación. El disparo fue realizado por un ciudadano que consideró que los manifestantes atentaban contra su propiedad. Por su parte, los manifestantes, al levantar barricadas, atacar y saquear locales comerciales representativos del capital transnacional comunicacional, financieros u otros, también, por cierto, ejercen violencia política. Incluso cuando marchan por las calles de la ciudad, con o sin permiso de la autoridad, muchos ciudadanos

consideran que los violentan, que interrumpen la normalidad, que alteran el orden público, etcétera. Todo eso, en realidad, es efectivo, pues no hay acto de rebeldía, de insurgencia, de oposición, de rabia, de descontento, que no sea violento. Y, que, a la vez, no tenga una respuesta violenta por parte de la autoridad política o policial.

La violencia política no ha sido erradicada de la sociedad neoliberal chilena. Esta forma societal se fundó en la violencia desatada de manera racional e instrumental que siguió al 11 de septiembre de 1973 hasta la actualidad. La “democracia protegida” o la “democracia autoritaria” sostenida tanto por la Concertación como por la Nueva Mayoría es, básicamente, la continuidad de esa violencia institucionalizada en la Constitución Política del Estado de 1980, la constitución de Pinochet-Lagos.

La violencia implícita de la sociedad neoliberal se manifiesta permanentemente, como lo hemos sostenido, en la vida cotidiana que deben desarrollar hombres, mujeres, niños y niñas, a diario en las diversas actividades que realizan. Así como la vida cotidiana, durante la dictadura, estuvo dominada por el binomio violencia-miedo, en la pos-dictadura, está dominada por la violencia-explotación y el abuso que diariamente tanto el poder del capital como el poder político ejerce sobre las y los ciudadanos. La violencia inunda todo. La vida pública como la privada. Podría citar múltiples ejemplos, pero estoy seguro de que las y los ciudadanos que lean este artículo podrán reconocer en su propia biografía hechos violentos protagonizados por ellos o por otros. Y cuando me refiero a la violencia cotidiana no estoy solo pensando en los hechos delincuenciales. No, me estoy refiriendo a una actitud característica del ciudadano neoliberal: su constante agresividad, que lo convierte en un sujeto socialmente violento. Somos una sociedad violenta y violentada.

Ha sido esa violencia permanente de la dominación neoliberal la que -desde los años ochenta del siglo pasado- ha tenido una respuesta, también violenta, por parte de ciertos sectores populares y ciudadanos. No, por nada, durante casi una década, la política opositora asumió que la lucha contra la dictadura debía ser a través de los instrumentos de la violencia política armada.



La respuesta política, por parte de otros sectores políticos opositores a la dictadura, fue refugiarse, por el miedo político que les producía la violencia social popular, en el orden político que había institucionalizado la violencia política neoliberal o autoritaria desde 1980 en adelante. Por esa razón, esos sectores no procuraron modificar ni cambiar el orden político producido por la violencia política dictatorial.

Que hoy emerjan y se organicen grupos políticos que, con el objeto de luchar en contra de la democracia protegida y el capitalismo neoliberal, consideren a la violencia política como el mejor y más adecuado instrumento de lucha, no tiene nada de extraño ni excepcional, es la consecuencia política e histórica de una cultura política donde la violencia ocupa un lugar predominante.

Esos grupos políticos y sociales no son la escoria humana, ni son lumpen, ni son delincuentes, ni vándalos, ni imbéciles, ni desquiciados. Son, por cierto, ciudadanas y ciudadanos que, en su libre albedrío, han decidido asumir esas formas de luchas. Son condenados porque se “encapuchan”, porque lanzan piedras, porque lanzan molotov, porque atacan y destruyen locales comerciales, centros de atención financieros, todos espacios simbólicos del capital. Es su respuesta a los abusos del capital financiero-mercantil dominante. Es su rabia, son las expresiones de ira en contra de la explotación.

Estoy cierto y sería ingenuo suponer que, por quemar una farmacia, destruir una sucursal bancaria, un local comercial de una transnacional de las comunicaciones u otros establecimientos de ese tipo, se esté destruyendo el capitalismo. Por cierto que no. Pero nadie podrá negar que bajo ciertas circunstancias ello ayuda, ayuda.

Esas acciones nos remiten a otras cuestiones. A la inutilidad de la política tal como hoy se practica; a la crisis de las organizaciones políticas tradicionales, los partidos políticos, tanto de los actuales como de los que hoy se organizan y se preparan para actuar en los espacios del poder constituido; al fracaso de la democracia parlamentaria y representativa; a la cuestión de la corrupción generalizada de aquellos que hoy detentan el poder político, social, económico, comunicacional, policial y militar. La sociedad neoliberal hoy se pudre, por arriba. Y los mecanismos

institucionales existentes solo sirven para mover la podredumbre de un lado para otro, para que todo siga igual.

Lo recientemente acontecido en Chiloé es un ejemplo claro de la podredumbre de cómo funciona el sistema. Luego de 17 días de movilización social, el Ministro de Economía Céspedes, logró terminar, antes del 21 de mayo, día de la cuenta presidencial al país, con el movimiento de los pescadores artesanales. Cuando se estudian los acuerdos establecidos entre el gobierno y los pescadores se visualiza que son una “solución de mercado”. Pero la devastación que el extractivismo marítimo realiza de la vida humana y marítima sale incólume. En los próximos días todo volverá a ser lo mismo. Como ocurrió en Aysén o en Magallanes, o en otras localidades del país donde han estallado rebeliones ciudadanas regionales o territoriales. No obstante, en esos lugares a muchos ciudadanos les nació la consciencia social y política de percibir que el cambio institucional no sirve y que es necesario abrir otros caminos con otros métodos e instrumentos para frenar la devastación de la vida humana y de la naturaleza.

Estas constantes frustraciones políticas y sociales son factores que impulsan a la ciudadanía, a un sector de ella, a conformar organizaciones que asumen la acción social directa para expresar su rabia en contra de la actual dominación. Estos distintos grupos y colectivos hoy emergen en los cuatro puntos cardinales del país.

Son una opción política tan legítima como aquellos que hoy se reúnen en las plazas públicas o malls comerciales a juntar firmas para constituirse en partidos políticos. Podemos discrepar con sus formas, pero de ninguna manera asimilarlos a los defensores del orden público y del sistema opresor. Eso es un error político de proporciones. Pero también hay errores profundos en estos grupos que deberán revisar y reflexionar si es que quieren contar con apoyos sociales y políticos ciudadanos.

Lo ocurrido en Valparaíso era de una u otra manera: “una crónica política anunciada”. No la lamentable muerte de Eduardo Lara, pero sí el enfrentamiento entre los manifestantes y las Fuerzas Especiales de Carabineros, como parte del repertorio de acciones que se realizan en este tipo de marchas.

Tengo la impresión de que estas marchas y movilizaciones sociales y ciudadanas convocadas por diversas organizaciones políticas y sociales han entrado en un proceso de rutinización, perdiendo eficacia e impacto político. Durante años se ha realizado la marcha del 21 de mayo, y podemos preguntarnos cuál ha sido su impacto político ciudadano. Desafortunadamente, la respuesta es: ninguno.

Estas marchas son limitadas y vacías políticamente hablando pues son convocadas para manifestar el malestar ciudadano en contra de los gobiernos de turno. La intención de los organizadores es llegar al Congreso Nacional en donde la autoridad presidencial está rindiendo cuentas al país de lo realizado durante el último año de ejercicio gubernamental. Y, por cierto, nunca se llega a ese punto, pues cuerdas antes las barreras de las Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, lo impiden. Allí estalla el enfrentamiento. Dicha rutina es la misma, año tras año. No tiene ninguna productividad política. Es estéril. Por ende, inútil.

Pienso, por ejemplo, que en vez de una marcha, debiera realizarse una concentración ciudadana que contemplara la participación y la presencia de oradores, quienes expusieran una **contra cuenta ciudadana** y se diera a conocer el proyecto alternativo que se quiere ofrecer a la ciudadanía allí reunida, y que este acto fuera transmitido por los canales informales de comunicación a todo el resto de la comunidad nacional. Nada de eso hay, falta creatividad e imaginación, pero también sentido de unidad política. Todos quieren estar presentes desde su individualidad colectiva. Son fragmentos políticos compitiendo entre sí para ganar un espacio, mostrar sus pancartas, su fuerza numérica. Por eso, ya no basta con marchar portando lienzos, banderas, lanzando gritos y consignas, bailando, **se requieren ideas fuerzas y proposiciones concretas, posibles y utópicas**. La marcha del 21 de mayo está agotada. Es un acto inútil, que provocó una muerte estúpida.

Quisiera concluir con la siguiente reflexión. Pienso que el movimiento social y político popular anticapitalista y antineoliberal -luego del fracaso de la marcha del 21 de mayo-, debe evitar que la élite política decadente genere un cierre falso de la crisis política de la democracia protegida.

Hay que evitar que la crisis política se prolongue por más tiempo. Tengamos presente que el ciclo crítico se inició en el año 2006, o sea, llevamos 10 años en ella. Hay que evitar la continuidad de un sistema político y social que “funciona” en base de soluciones de mercado y con la profundización de la doctrina de la seguridad ciudadana, o sea, del control, coerción, vigilancia y represión de la ciudadanía. Esto obliga a expandir el campo de lo posible, ofreciendo nuevos escenarios de movilización social y política. Es en este terreno, en que los **“procesos enmarcadores”**, o sea, “esfuerzos estratégicos conscientes realizados por grupos de ciudadanos en orden a forjar formas compartidas de considerar la sociedad presente como futura y a sí mismas que legitimen y muevan nuevas formas de acción colectiva”, donde las redes sociales y ciudadanas críticas se deberían esforzar en hacer creíble un proyecto histórico-político alternativo capaz de motivar el paso a la protesta, creando conciencia de fuerza colectiva entre los y las de abajo.

Por cierto, se trata de una tarea nada fácil, que debe saber combinar medidas urgentes y alternativas de “alcance medio” que vayan a la raíz de la crisis. Porque en la actual coyuntura histórica, los movimientos sociales y políticos que aspiren a ser “catalizadores” de un nuevo ciclo de luchas no pueden limitarse a ofrecer una terapia “cortoplacista” frente a la crisis de la democracia protegida y de descomposición putrefacta de su élite dominante. Han de ir más allá, plantearse la transformación radical de la estructura del poder neoliberal. Hacer frente a la devastación de la vida humana y la naturaleza con propuestas viables, concretas y, por cierto, utópicas.

Para hacer frente a la crisis son necesarias alternativas anticapitalistas, antirracistas, antiimperialistas, feministas, ecologistas y socialistas. Es un esfuerzo por demostrar que hay alternativas, que el capitalismo no es el último horizonte posible de la humanidad, que es necesario romper con su lógica irracional y depredadora si queremos garantizar la vida.

Todo lo anterior implica desarrollar políticas de unidad y, sobre todo, evitar **“los cierres falsos”** a la crisis. Como los dos que ya la sociedad neoliberal chilena ha producido: el primero en el año 2010, con la elección de Sebastián Piñera y el regreso de la derecha al gobierno; y el segundo, en el año 2013, con la

elección de Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría. Hoy los partidos conformes con el sistema (la Nueva Mayoría), así como los nuevos que emergen, están trabajando en un nuevo cierre "falso de la crisis", ofrecido por el Gobierno a través del proceso constituyente, que le dará continuidad por cuatro a cinco años al decadente sistema político actual.

Para evitar esto, el movimiento social y político popular y ciudadano está obligado a superar el fracaso experimentado hoy. Esa es la tarea que nos deja la lamentable muerte accidental del trabajador municipal, consecuencia del incendio provocado, según se dice, por los vándalos y encapuchados de siempre. No dejo de pensar en las palabras del SubMarcos: "cubrimos el rostro para que nos vean". Pero también recuerdo que otros se cubrían el rostro para asesinar impunemente, para no ser vistos.

## **El “paro nacional”: una expresión del poder subversivo ciudadano**

La movilización social estudiantil ha sido vasta en creatividad e ingenio. Así lo han demostrado las ocho coloridas, pintorescas y masivas marchas estudiantiles que recuerdan más a las antiguas fiestas primaverales organizadas por los universitarios de ayer que a las manifestaciones sociales y políticas realizadas por la ciudadanía nacional en los últimos 30 años. Efectivamente, la actual protesta estudiantil, en tanto su repertorio de acciones como sus consignas, no nos recuerda, salvo quizás por el “caceroleo”, a las protestas nacionales en contra de la dictadura militar en los años ochenta. Si bien la masividad de la protesta juvenil ciudadana es innegable, ella se ha concentrado en un sector social bien concreto de la sociedad neoliberal: la clase media, aquella que los analistas sociales actuales denominan aspiracional. Estos son los actores protagónicos y centrales de la actual movilización y protesta social y política. Todos los demás sectores sociales, especialmente las y los jóvenes populares y pobres que asisten, por cierto, en una menor cantidad, son los actores secundarios o de reparto.

Este reparto social de los protagonistas de la protesta le ha dado un tinte de clase como también una forma y un determinado discurso cultural e ideológico a la movilización estudiantil distinguiéndola de otras acciones colectivas acontecidas en el Chile neoliberal, ya sea el dictatorial o el democrático. En el primero, la protesta política en contra de la dictadura pinochetista, en los años ochenta, tuvo un componente social y ciudadano amplio y plural. En ella participaban activamente desde los sectores medios altos hasta los sectores populares, de ahí su carácter nacional. Mientras que la protesta política en el Chile democrático neoliberal (1990-2011) siempre ha sido activada y realizada por algún sector social determinado: los mineros del carbón de Lota, los trabajadores del cobre, los trabajadores forestales, sectores de la nación mapuche, las y los deudores habitacionales, las y los

usuarios del Transantiago, las y los profesores, las y los estudiantes universitarios antes del 2006, entre otros. Sus movilizaciones han tenido demandas sociales, económicas, salariales y laborales específicas, parciales y fragmentarias.

Por esa razón, ninguna de esas movilizaciones tuvo la capacidad y la potencia política para constituir una plataforma social y política amplia e inclusiva de carácter nacional que pusiera en jaque al orden neoliberal. Tan solo la "Revolución Pingüina" de los estudiantes secundarios del año 2006 y la actual movilización de las y los estudiantes universitarios, han logrado instalar algunos pilares para la conformación de una plataforma que aglutine las distintas demandas y descontentos antineoliberales existentes. Aunque, la verdad sea dicha, la protesta estudiantil universitaria, en proceso de constituirse en movimiento social, no ha logrado romper con la lógica de la acción colectiva sectorial ni ha logrado constituirse ni transformarse en un vasto movimiento ciudadano nacional similar en su composición social, amplitud y potencia política al que desarrolló el movimiento democrático nacional para derrotar al dictador en el plebiscito sucesorio de 1988. A pesar de todo lo realizado, la movilización juvenil universitaria ciudadana sigue siendo, hasta ahora, una gigantesca y lúdica protesta social y política de carácter sectorial con una relevante y auto centrada demanda. Allí radica su fortaleza, pero también su debilidad.

Dado que actualmente el conflicto por la educación se encuentra en tabla, o sea, en un virtual empate. El cual, por cierto, sin ser catastrófico, no encuentra resolución con base en las estrategias seguidas hasta el momento. Parece ser que la convocatoria de un tercer actor social y político estratégico resulta crucial para destrabarlo.

Así lo entendió el gobierno y la clase política cuando buscó "parlamentarizar" el conflicto, es decir, resolverlo a través de la acción política y negociadora del poder legislativo. Propuesta que fue categóricamente rechazada por los estudiantes. Los cuales, a su vez, replicaron con una exhortación: demandaron no solo al ejecutivo sino también al legislativo, la realización de un plebiscito con el objetivo de que sea la ciudadanía nacional, el pueblo soberano, quien decida democráticamente sobre la

cuestión en conflicto. De parte del gobierno de Piñera, la negativa fue rotunda. Mientras que los parlamentarios oficialistas como de oposición han tenido posiciones divididas: unos lo rechazan categóricamente, otros lo apoyan resueltamente. Volvieron a empatar.

El único actor político que hasta ahora no ha emitido opinión alguna sobre el conflicto educativo o en torno a la idea de realizar un plebiscito es, paradójicamente, la ciudadanía nacional. Si bien, a través de algunas encuestas de opinión ha expresado su parecer sobre aspectos específicos de las demandas del movimiento estudiantil y del conflicto educativo, estas opiniones carecen de validez e incidencia política. Por tanto, la ciudadanía nacional, el pueblo, los soberanos no han sido consultados ni han podido o no han querido emitir su opinión sobre un conflicto que ha convulsionado la sociedad neoliberal durante los tres últimos meses. Esto se debe, fundamentalmente, a que el actual sistema político no ofrece ni dispone de ningún instrumento político institucional para ello.

Debido a lo anterior, considero que el Paro Nacional ciudadano convocado por la Central Unitaria de Trabajadores para los días 24 y 25 de agosto (de 2011) constituye, en mi opinión, una excelente oportunidad política y social para que la ciudadanía nacional se manifieste y exprese su opinión ante el conflicto en curso.

El Paro Nacional debe constituirse en el instrumento de expresión política de la ciudadanía. Una activa y masiva paralización ciudadana deberá ser interpretada no solo como la adhesión al movimiento estudiantil y sus justas demandas sino, también, de apoyo irrestricto a la convocatoria de un **plebiscito nacional**. Esa debe ser la razón política del Paro ciudadano.

Cabe señalar que un Paro Nacional es un acontecimiento social y político mayor. Se trata de un trascendente y poderoso instrumento político de presión que las y los trabajadores, en particular, y las y los ciudadanos, en general, utilizan de manera muy excepcional, en su lucha -especialmente, pero no únicamente- contra los poderes constituidos en las sociedades capitalistas.



No se trata de una marcha callejera autorizada para transitar por las calles de las ciudades del país. Se trata de una acción social y política que se realiza sin la autorización del poder establecido. Por eso, un Paro Nacional es un acto ciudadano subversivo. En esa condición radica su poder social y político constituyente. Principalmente, esta acción ciudadana supone la paralización total y general de todas las actividades “normales” que diaria y cotidianamente realiza la ciudadanía. El día del paro nacional todo debe detenerse.

Las ciudades y las calles del país deben quedar desiertas de autobuses, de automóviles y de gentes. Nadie debe comprar ni vender. Ninguna tienda debe abrir, los supermercados deben permanecer cerrados. Los trenes del Metro no deberán circular y sus estaciones deberán estar cerradas. Los niños y niñas no asistirán a clases, en aquellos colegios, que aun funcionan. Los bancos y financieras deberán dejar de ofrecer sus odiosos créditos. Ojalá que las televisoras dejaran de funcionar y las radios de transmitir. Ojalá que todo quedara en profundo silencio. Para que en esos días se escuche y se sienta en toda la sociedad, tal vez, toda la rabia social acumulada durante 35 años.

Por consiguiente, el Paro Nacional deberá ser el punto de partida de la transformación del movimiento estudiantil y ciudadano, centrado en la cuestión educativa, en un poderoso movimiento social y político subversivo anticapitalista de carácter nacional.

## **Sin destituir al “mal gobierno”, no habrá cambio político**

*¡Fuerza Rodrigo, la historia te espera!*

Es más que evidente que el gobierno de la Nueva Mayoría, al cabo de 4 años, ha perdido justamente aquello que dice tener: es un mal gobierno de la minoría. Un gobierno que perdió la dirección que se había trazado al momento de iniciar su gestión: impulsar y realizar reformas estructurales. Estas apenas son “reformitas”. Un gobierno que está comprometido e inmerso en la mayor crisis de desconfianza y credibilidad política en Chile desde el supuesto “regreso” de la democracia en 1990. Un gobierno que no logra, a pesar de su giro hacia la derecha con el cambio de gabinete, salir de la crisis política que lo afecta. Ese giro ha profundizado su desorientación gubernamental. En definitiva, la palabra que resume y sintetiza todo es, simplemente, fracaso. Un total y completo fracaso gubernamental.

Si en Chile existiera, por ejemplo, la “revocación del mandato” de las autoridades electas, las y los ciudadanos debieran estar -aparte de movilizándose como lo han hecho los estudiantes secundarios y universitarios en los últimos días- exigiendo la salida de la presidenta en ejercicio, por incompetente. Y, sobre todo, por la generalizada desconfianza que la ciudadanía tiene de su conducción gubernamental. Pero todos sabemos que lo anterior no será posible, fundamentalmente, porque la institución de la “revocación del mandato” no existe. Y, la ciudadanía descontenta, hastiada y desconfiada deberá esperar largos 34 meses para que el actual gobierno abandone La Moneda, en marzo de 2018. ¿No será mucho tiempo?

Lamentablemente, esos son los tiempos de la democracia electoral. Nos podemos preguntar: ¿esos tiempos se pueden modificar o alterar? Sí, se puede, es nuestra respuesta. Una de las formas para acelerar el tiempo político-institucional, en un régimen democrático, es y ha sido, la masiva movilización social y política de la ciudadanía activa y responsable, dirigida a destituir al mal gobierno y de esa manera acortar los tiempos de espera.

Se destituye al gobierno y se modifica el cronograma político-electoral, convocando, por ejemplo, a elecciones presidenciales y parlamentarias en más corto plazo.

La historia reciente de la democracia en América Latina y el Caribe registra varias destituciones de “malos gobiernos” por la presión política y social de la ciudadanía movilizada, sin esperar los tiempos electorales. Ejemplos son los casos de Fernando de La Rúa (2001) en Argentina; Sánchez de Lozada (2003) y Carlos Mesa (2005) en Bolivia; Jamil Mahuad (2000), Lucio Gutiérrez (2005) en Ecuador, y Alberto Fujimori (2000) en Perú.

La destitución de esos “malos gobiernos” abrió procesos de cambios políticos democráticos que posibilitaron modificar aspectos centrales tanto del régimen político como de las formas sociales, económicas y culturales vigentes. No todos los cambios, por cierto, apuntaron a cuestionar el capitalismo neoliberal. En el caso de Perú, la salida de A. Fujimori no implicó un cambio del rumbo económico que el mismo presidente destituido había implementado durante su gestión. Sin embargo, en Bolivia y Ecuador se iniciaron procesos de cambios políticos. Aunque en ninguno de los dos países se ha verificado una revolución social, pero sí una revolución política democrática de vastas dimensiones estructurales.

En ambas sociedades se cambió la Constitución Política del Estado, modificando estructuralmente la relación institucional entre el Estado, la Sociedad civil y el Mercado (economía). Por esa razón, los analistas consideran que dichas sociedades han entrado en una fase posneoliberal de desarrollo, pero no anticapitalista. Lo fundamental es que esos cambios constitucionales desmercantizaron y desprivatizaron los derechos ciudadanos. Hubo una total resignificación social y política de ellos. Sumándose a la batería de derechos, de manera muy revolucionaria, por las implicaciones que tiene para la relación entre Estado, Sociedad Civil y Mercado, los derechos de la naturaleza.

Todo eso fue posible por la destitución del mal gobierno. Como dice el dicho popular, no se puede “hacer tortillas sin quebrar huevos”. La ciudadanía nacional descontenta con el actual gobierno, la ciudadanía opositora no solo al gobierno, sino también al capitalismo neoliberal y las y los ciudadanos anticapitalistas, no

pueden seguir esperando que institucionalmente el mal gobierno impulse el cambio político institucional o constitucional ni tampoco esperar 34 meses para cambiar a las actuales autoridades, todas ellas deslegitimadas por su activa complicidad con los diversos casos de corrupción política. La ciudadanía debe movilizarse para destituir al mal gobierno, o sea, quebrar la institucionalidad, para construir la nueva institucionalidad política o la nueva sociedad.

Una de las dos alternativas deberá ser la elegida por la ciudadanía. Elegir esperar constituiría una mala elección. Y lo más seguro que las muertes de Exequiel y Diego como la lucha que hoy libra Rodrigo, serán en vano. Tampoco sería justo con los miles y miles de jóvenes estudiantes secundarios y universitarios que se han movilizado por hacer realidad no solo sus derechos, sino tal vez algo más importante: sus sueños y anhelos de construir una sociedad libre, justa, igualitaria y solidaria. Anhelos que hace más de 35 años ha sido postergado.



## ¿Cómo ser políticamente consecuente en la sociedad neoliberal y no venderse en el intento?<sup>149</sup>

Revisando, escarbando, trajinando la historia política reciente de la sociedad chilena neoliberal, encontré una vieja foto de 1989, la cual da cuenta de un acto político efectuado en el viejo Teatro Cariola, en calle San Diego. Acto organizado por todas las fuerzas políticas y sociales que rechazaban el camino político-institucional elegido por las fuerzas opositoras democráticas que habían derrotado a la dictadura militar en el plebiscito sucesorio de 1988.



La derrota política de la dictadura cívico-militar-establecida en Chile en 1973 por el capital nacional e internacional-, había abierto, por cierto, un nuevo escenario político nacional. Sin embargo, no tan distinto de aquel que el Área de Estudios Políticos del Instituto de Estudios Contemporáneos (IEC) -hoy diríamos un "think tank" del Partido Socialista Salvador Allende- había previsto en diciembre de 1987, o sea, dos años antes.

<sup>149</sup> Publicado en <https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2015/06/08/como-ser-politicamente-consecuente-en-la-sociedad-neoliberal-y-no-venderse-en-el-intento.html>

En el informe político de ese año, en el IEC, considerábamos que una futura derrota de la dictadura militar, propiciada por la Concertación de Partidos por el “NO”, no constituía una salida o una ruptura con el proyecto autoritario, sino más bien, la consolidación del proyecto histórico y político del capitalismo neoliberal. Se derrotaba la continuidad de Pinochet, pero no las bases materiales ni institucionales de ese proyecto. Pensábamos que para destruir “el diseño estratégico del autoritarismo [y de la oposición democrática pro-capitalista, liderada por la Democracia Cristiana y del socialismo renovado], era necesario **el levantamiento de un movimiento de rechazo a la institucionalidad oficial** (léase Constitución Política de 1980), acudiendo a una táctica de rechazo-boicot al plebiscito (proyectado para 1989), modalidad de acción política que sentaría las bases para el reencuentro y rearticulación del conjunto de las fuerzas populares, como asimismo para la elaboración de un PROYECTO de SOCIEDAD, de un Programa y una Estrategia”, con el objeto de superar todo lo construido por la dictadura del capital.<sup>150</sup>

No obstante, la derrota y revés político sufrido, en octubre de 1988, por las fuerzas sociales y políticas populares que apoyaban dicha estrategia -cuando mayoritariamente la ciudadanía optó por apoyar la salida ofrecida por la Concertación de partidos por el “NO”- la idea que predominó fue que había que ser consecuentes con los argumentos políticos planteados, especialmente con la idea de que la participación de la oposición en el Plebiscito de octubre de 1988, ganara o perdiera, iba a tener el mismo resultado: **la perpetuación de la institucionalidad del autoritarismo neoliberal**. En el citado informe el IEC había dicho: “El autoritarismo trabaja con plazos de larga duración. El tiempo político está dispuesto para enfrentar el siglo venidero. Es lo que se denomina “la proyección” del régimen. Por lo tanto, el plebiscito de 1989 (o antes) constituye una coyuntura estratégica, lo que,

---

<sup>150</sup> Para quienes quieran consultar la fuente de lo citado, especialmente, para los historiadores del presente y, también del futuro, pueden consultar: 1987: conflicto político en Chile. Balance y perspectivas, en Revista **ANDES**, Año IV, N°6, pp. 9-53. Informe elaborado por los integrantes del Instituto de Estudios Contemporáneos (IEC), integrado por los historiadores Patricio Quiroga Z. (director) Jorge Núñez Rius y Juan Carlos Gómez Leyton, el sociólogo José Pablo Lagos (QEPD), el cientista político Robinson Pérez V, y el miembro de la comisión política del Partido Socialista Salvador Allende, Jaime Durán Oportus (QEPD).

paradójicamente, para el grueso de la oposición se ha transformado en un objetivo máximo...[pero] los militares planifican el futuro.”

Con mucha modestia, por cierto, dicha previsión realizada en diciembre de 1987 resultó acertada y correcta: la institucionalidad autoritaria, expresada en la Constitución Política de 1980, tiene nada menos que tres décadas y media (35 años). Y todavía se discute qué hacer con ella.

Por esa razón, independientemente de la derrota del 5 de octubre de 1988, todas las fuerzas políticas opositoras al nuevo bloque dirigente que, se anunciaba para los años venideros, la Concertación, se reunieron en aquel acto del Teatro Cariola en 1989, para reafirmar nuestra convicción de que la lucha por transformar la sociedad capitalista constituía y seguía siendo un objetivo central en nuestra lucha por la democracia y el socialismo.

En lo personal, cabe señalar que ese acto constituyó mi última participación partidaria como militante, dirigente e “intelectual orgánico” del Partido Socialista Salvador Allende. Tiempo después la dirigencia del Partido decidió iniciar un acercamiento político en conjunto con otras fracciones o sectores del fraccionado socialismo nacional, con el Partido Socialista de Chile, integrante y fundador de la Concertación, para incorporarse al proceso de reunificación socialista, que luego de 10 años de lacerante fragmentación partidista, había terminado en diciembre de 1989.

Con el objeto de mantener mi “consecuencia política”, de no ser parte de la consolidación y expansión de la institucionalidad del capitalismo neoliberal en Chile, abandoné las filas del socialismo. Renuncié a la militancia, aunque no al socialismo ni a la idea de hacer la revolución social, a pesar de las “jugosas” invitaciones a integrarme a dicho partido. Han pasado 26 años, un cuarto de siglo de aquel acto. Y pienso que todo lo que se dijo y planteó en él tiene vigencia política e histórica hoy en día.

Hoy más que nunca, el objetivo de “hacer e impulsar la revolución política” no solo es una obligación y un compromiso político, sino un imperativo ético para todos los y las socialistas de ayer, de hoy y de mañana. Pero habría que exigirles cumplir con un solo requisito ser: **CONSECUENTES, HONESTOS Y ÉTICOS**. Para que



nadie se venda al gobierno de turno, pues la lista de socialistas allendistas que desde 1990 lo hicieron es muy larga y nos avergüenza. Sobre todo, porque han mal utilizado el nombre de un hombre probo, honesto y consecuente con su pueblo como fue el presidente mártir Salvador Allende Gossens.

Al contemplar la foto que acompaña estas reflexiones y recorrer los cientos de rostros de las y los compañeros que allí están, veo que muchos de ellos y ellas continúan en la lucha política y social anticapitalista. La mayoría forman parte de ese conglomerado ciudadano que he denominado ciudadanos subpolíticos, o sea, aquellos que consecuentemente se han mantenido, a lo largo de este tiempo, en la oposición radical al capitalismo neoliberal, independientemente de si este se ha administrado por la Concertación (1990-2010), por la derecha piñerista (2010-2014) y actualmente por la Nueva Mayoría. También sé de muchos de esos compañeros que han dejado este mundo con la tristeza de saber que las formas de explotación capitalista continúan vigentes bajo una supuesta forma democrática. Pero hay muchos rostros que allí están que me avergüenzan, pues han apoyado desde distintas formas y responsabilidades políticas, sociales y culturales la continuidad del capitalismo neoliberal. Militando, por ejemplo, en el Partido Socialista de Chile o en el Partido Por la Democracia. Ambos partidos neoliberales u otros me dirán, ¡socialdemócrata, compañero! Sí, yo diría, pero ¡socialdemócrata neoliberal!

En la sociedad neoliberal ser consecuente es muy difícil, pues las tentaciones de las tres principales condiciones de la ciudadanía neoliberal son muy atractivas y seductoras: fama, éxito y dinero. Algunos son claro ejemplo de lo difícil que es ser políticamente consecuente en la sociedad neoliberal, como Sebastián Dávalos y Sra., socialistas, y todos aquellos jóvenes y no tan jóvenes que integran la G90 con el exministro Rodrigo Peñailillo.

Los tres valores del neoliberalismo que hemos nombrado han sido las tentaciones que no solo hacen que las y los individuos que ayer abrazaron la causa social y popular sean inconsecuentes en la política y en otros ámbitos de la vida cotidiana y profesional, por ejemplo, en la academia, en el fútbol, en los negocios, etcétera.

Muchas y muchos están dispuestos a despojarse de sus principios para venderse al neoliberalismo con el objeto de obtener/mantener dinero, fama y éxito. Como dice el dicho popular, el dinero no hace la felicidad y, según Andy Warhol, la fama y el éxito solo duran unos quince minutos. Ejemplo, es el exministro Jorge Insunza.

Ante las formas neoliberales que se imponen con ropajes democráticos, lo único que queda es ser consecuente y seguir luchando.



## **El derecho a la vida, un derecho subordinado al derecho de la propiedad privada:**

### **A propósito del asesinato de dos estudiantes en Valparaíso**

En una sociedad que permanentemente “criminaliza” y condena, por los medios de comunicación de masas, la acción de las y los jóvenes; en donde las autoridades universitarias, rectores, decanos, directores, y gubernamentales son incapaces de entender el fondo de sus demandas y optan por “judicializarlas”, siempre habrán desquiciados dispuestos a matar. En la sociedad neoliberal chilena, nacida de la más repugnante violencia militar y civil en 1973, cuando los sectores dominantes se alzaron en armas para defender el “sacro santo” derecho de propiedad privada, éste se situó por encima de todos los demás derechos humanos, incluso el derecho a la Vida.

El alevoso asesinato de dos jóvenes estudiantes en Valparaíso es la más clara manifestación de la socialización de la concepción neoliberal, con su individualismo y egoísmo perverso, en la cual se han formado miles y miles de hombres y mujeres en estos últimos 40 años. El centro de esa socialización ha girado en torno a la importancia que tiene el derecho a la propiedad privada. En su nombre, todos se defienden, se encierran, se protegen, se arman y están dispuestos a violar el derecho humano, esencial y fundamental, como es el derecho a la vida.

Thomas Hobbes enseñó, hace ya varios siglos, que los hombres están dispuestos en función de proteger sus propiedades y su vida a levantar y construir un poder despótico. Eso es lo que hicieron los sectores propietarios en 1973, cuando avalaron la dictadura militar de Pinochet. Éste protegió sus propiedades asesinando a miles de ciudadanos. Luego avalados por la Concertación de partidos políticos, construyeron e impusieron la “Democracia Protegida”. Hoy, las y los chilenos no estamos dispuestos a seguir soportando esa forma dictatorial ni el poder despótico que ejercen sobre ella, los propietarios, los empresarios.

El poder despótico y antidemocrático de los empresarios nacionales se expresa en distintas dimensiones de la estructura productiva y de servicios de la sociedad neoliberal. Desde aquellos que devastan la naturaleza hasta los que imponen la hegemonía cultural neoliberal a través de “vender” una supuesta “educación” en sus empresas educativas: colegios, liceos, centros de formación técnica, institutos profesionales y, sobre todo, universidades. La actual educación que se ofrece en las supuestas universidades privadas como también públicas, espacios de reproducción ideológica, se alinea a los perversos valores antihumanos del neoliberalismo.

Por eso, la lucha que desde el año 2006 ha desarrollado el movimiento estudiantil no debiera ser solo por gratuidad o mejor calidad de la educación, sino por el fin del predominio de la educación neoliberal. La cual hoy, de manera muy paradójica, las autoridades académicas imponen en las universidades del capitalismo académico. La lucha de las y los estudiantes por la democracia al interior de esas casas de estudios no debería reducirse a la demanda por tri-estamentalidad sino, fundamentalmente, por volver a instalar la verdadera pluralidad académica en sus carreras y programas de estudio. Esta consiste en que el estudiante pueda tener la opción de elegir entre académicos y profesores de distintas posturas ideológicas y políticas. Actualmente, la uniformidad y homogeneidad es agobiante. Todos los docentes universitarios son formateados con los mismos objetivos, descriptores y bibliografías y además supervigilados y controlados en el cumplimiento del “programa” de los diferentes cursos. La lucha estudiantil debe abandonar sus demandas economicistas y avanzar en la lucha política, social y académica por construir una nueva universidad.

Hay que superar los actuales discursos y los repertorios utilizados por las y los estudiantes en los últimos años. El movimiento estudiantil debe dar un salto cualitativo en lo argumental y en lo político. Debe comenzar a profundizar la discusión sobre qué universidad se quiere y qué tipo de sociedad. Para ello, también sería fundamental y central que, en esta nueva fase, las y los estudiantes sean acompañados -no dirigidos- por los académicos, que han sido y son los grandes ausentes de la actual lucha por la educación y por la Universidad.

Lamentablemente, la muerte de los dos estudiantes de la Universidad Santo Tomás nos debiera ayudar a entender qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. Su asesinato no es producto del desquiciamiento de un sujeto, no puede quedar encerrado en esa explicación psiquiátrica o psicoanalítica, sino que debiera hacernos meditar y reflexionar profundamente el tipo de sociedad en que vivimos. Y no olvidar que ella es producto de la impunidad ante la violación permanente de los derechos humanos y de la naturaleza y, especialmente, del derecho a la vida por parte del neoliberalismo.



## Los encapuchados, actores anticapitalistas de la posmodernidad neoliberal

*“Y, miren lo que son las cosas porque,  
para que nos vieran, nos tapamos el rostro”*  
Subcomandante Marcos, 1994.

Hace dos décadas los “encapuchados” recorren la historia de las sociedades latinoamericanas. Son el nuevo fantasma que aterriza a las clases dominantes, a las capas medias y a los todos los sectores políticos y sociales que buscan mantener, remozar o retocar la sociedad neoliberal actual, sin perder ninguno de sus privilegios. Lloran y rasgan vestiduras por símbolos destruidos, pero callan ante la devastación y la explotación de la vida humana y de la naturaleza.

Los “encapuchados”, como los zapatistas en México, son actores políticos que deben ser parte del análisis de las formas de resistencia y de lucha que actualmente se despliegan en la sociedad chilena. Ellos están presentes y han sido parte de la lucha en contra del capital neoliberal mucho más que otros sectores políticos que hoy los critican y descalifican desde cómodos sillones parlamentarios, alcaldías o cualquier otro sillón del poder.

Los “encapuchados” han estado presentes en las rebeliones sociales y políticas de las y los de abajo en la mayoría de las sociedades latinoamericanas. Ellos han abierto y corrido los cercos del cambio político y social.

Tratarlos de delincuentes, de lumpen, de antisociales como lo hace el habla del poder y de los medios de comunicación es un equívoco y una forma de avalar la represión policial del Estado hacia ellos. Sin duda, sus formas de lucha son discutibles, tanto como las de los chilenos y chilenas que se forman para inscribirse en las elecciones municipales.

Lo que debe reconocerse es que, desde el golpe de estado de 1973, el movimiento social y político popular debió, por razones de seguridad vital, encapucharse para luchar contra la dictadura. Hoy en la “democracia protegida” el rostro al descubierto es un



privilegio de algunos, de tan solo aquellos que aceptaron desde 1990 dicho orden. Pero no de aquellos que lo han combatido desde antes de 1990. Hoy las banderas de la lucha anti-capitalista las asumen jóvenes combatientes que legítimamente ocultan sus rostros no por cobardía sino por seguridad. Para no ser perseguidos, castigados, sancionados y reprimidos, como los estudiantes de la Universidad Andrés Bello.

La capucha es un símbolo. Es la expresión de una resistencia y de una lucha política e histórica que va más allá de las luchas parciales que hoy se levantan en la sociedad neoliberal chilena.

Los encapuchados, por lo general, son jóvenes que pertenecen a diversos grupos y colectivos políticos. Muchos de ellos insertos en distintas instituciones como espacios territoriales de la ciudad. Allí es donde muchos estudian y trabajan, y se forman políticamente. En distintas actividades discuten y analizan la realidad social, política, económica y cultural actual. En esos espacios urbanos periféricos, en las orillas del sistema, los encapuchados, que solo se encapuchan en las manifestaciones públicas y abiertas, discuten entre ellos y con otros los problemas de la sociedad en que habitan y soportan. En esos espacios solidarizan con las luchas de los condenados por el neoliberalismo no solo de Chile sino de toda Latinoamérica. Conforman redes de apoyo político e ideológico.

Más allá de la odiosa caricatura que hacen de ellos los medios de comunicación y los actores políticos y sociales que defienden un sistema corrupto, los encapuchados no son lumpen ni delincuentes sino combatientes políticos esforzados y comprometidos con la emancipación social.

Por esa razón, no podemos estar de acuerdo con la constante criminalización y discurso estigmatizador que las voces del poder realizan de estos jóvenes luchadores. Menos podemos estar de acuerdo con aquellos que se transforman en delatores y colaboradores de los aparatos represivos, quienes solo traicionan la lucha popular.

A los encapuchados se les condena por su violencia. Violencia que usan para destrozarse y destruir los símbolos de la

dominación capitalista. En América Latina y el Caribe, la violencia es parte de la cotidianidad histórica, según los teólogos de la liberación o los cristianos por el socialismo, la violencia es estructural en el continente. El neoliberalismo en Chile se instaló violentamente destruyendo los símbolos de la democracia y dando muerte a un presidente que había asumido la lucha contra el capital. Ante la violencia de la explotación y de la devastación de la vida humana cotidiana y de la naturaleza, las y los encapuchados responden con una violencia simbólica, que destruye una vidriera de una cadena farmacéutica, de una sucursal de un banco, de una tienda comercial. Pero nunca una vida humana. Actos violentos que no se comparan con la violencia del capitalismo que, amparada en el "estado de derecho", destruye y condena a miles y miles de personas a una vida miserable y paupérrima.

Desde 1492 la cultura cristiana occidental ha destruido violentamente cientos de centros ceremoniales de los pueblos originarios de América. Ha dado muerte a sus sacerdotes y destruido sus estatuas religiosas. En México, al no poder destruir una pirámide ceremonial de Cholula, Tlachihualtépetl, construyeron encima de ella el Santuario de la Virgen de los Remedios.

Hoy, a nombre de la tolerancia religiosa, condenan a los encapuchados que destrozaron un Cristo. La hipocresía de los obispos, curas y monaguillos es total. La Iglesia Católica chilena, se dice, jugó un rol fundamental en la recuperación de la democracia y en la lucha por los derechos humanos durante la dictadura. Por eso, merece respeto. De acuerdo, pero aclaremos que no fue toda la Iglesia Católica, sino algunos miembros de ella. Así, como fray Bartolomé de Las Casas, fue una excepción, también lo fue el Cardenal Raúl Silva Henríquez, entre miles de hombres de Iglesia que cooperaron abiertamente con la dictadura militar, y muchos que celebraron la gesta de las Fuerzas Armadas, el 11 de septiembre, porque los libraban del "comunismo ateo". ¿Acaso debemos agradecer, por ejemplo, al cura Raúl Hasbún, a Fernando Karadima, o al obispo Orozimbo Fuenzalida, entre otros tantos que hoy permanecen en su total anonimato e incluso impunidad de haber sido cómplices pasivos y activos de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura? No, no lo podemos olvidar, es parte de la memoria histórica que se debe recuperar:

no todos los miembros de la Iglesia Católica ni sus feligreses condenaron activamente la violación de los derechos humanos en Chile. Muchos de ellos la avalaron por acto o por omisión.

La sociedad neoliberal es una sociedad violenta, violentada y, permanentemente, violentista. La televisión, por ejemplo, en manos del capital, violenta todos los días de múltiples maneras a la ciudadanía. Los rostros televisivos tienen otras máscaras. Lucen las máscaras de la hipocresía, del cinismo y de la desvergüenza, de la mentira. Los medios ocultan y engañan a los públicos que los ven y los siguen. Son el rostro de la censura, como Karen Doggenweiler y su brutal censura a la pobladora de Chiloé, o el periodista que sacó del aire a una estudiante, cuando ésta cuestionó la forma de operar del Canal 13. Ambos ejemplos son demostrativos de la violencia comunicativa de los medios nacionales.

Ante toda esta violencia cotidiana actual, las y los encapuchados se levantan con rabia, con ira y con profundo desprecio político y cultural. Los "encapuchados" son actores políticos y sociales de la actual lucha política anticapitalista, de la misma forma como ayer lo fueron los "barbudos", los "rebeldes", los "guerrilleros", entre otros. Como actores de la posmodernidad neoliberal, no tienen la estructura ni las formas de organización de aquéllos. Pero que están en lucha, lo están.

## **Chile: la rebelión social en su laberinto**

### **Entrevista a Juan Carlos Gómez Leyton**

ANDRÉS MORA RAMÍREZ / AUNA-COSTA RICA

Chile es el epicentro de uno de los movimientos sociales más importantes de la segunda década del siglo XXI que, con expresiones juveniles, estudiantiles y ciudadanas, expresa distintas formas de rebeldía frente al orden impuesto por la dictadura militar y el neoliberalismo desde 1973: un orden que, en sus raíces profundas, no fue alterado durante la transición a la democracia representativa. Sin embargo, después de varios años de luchas que trascendieron las fronteras del país, el movimiento que surgió a partir de una importante acumulación de descontentos y de rebeldía social, se enfrenta a importantes desafíos que deberá resolver para definir su futuro.

Para comprender los alcances y limitaciones de este amplio y diverso movimiento en la actual coyuntura política de la “sociedad neoliberal” en que se convirtió Chile, *Con Nuestra América* conversó con el Dr. Juan Carlos Gómez Leyton, historiador, politólogo y director académico del Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina, de la Universidad ARCIS. El diálogo tuvo lugar en Mendoza, Argentina, y el texto de la entrevista se transcribió en Santiago de Chile, comprobando aquí el clima cultural que el neoliberalismo impregnó en esta, su *sociedad modelo*.

#### **Neoliberalismo, democracia limitada y juventud neoliberal**

**Dr. Gómez Leyton, ¿qué representa este movimiento social diverso -juvenil, estudiantil y ciudadano- que hemos visto crecer recientemente, en relación con el desarrollo neoliberal chileno de los últimos 40 años?**

“La interpretación que yo realizo de las movilizaciones sociales que se han desarrollado en Chile, no solo tiene relación con el movimiento estudiantil que cobró una visibilidad comunicativa muy fuerte, tanto a nivel nacional e internacional, y que causó un impacto fuerte en el sentido de que Chile era la sociedad

más ordenada del cono Sur, con una ‘transición ejemplar’ a la democracia durante la década de los noventa. La pregunta que tenemos que formularnos es qué implica ese orden, esa situación aparente sin los conflictos ni los desórdenes que se observaban en otras sociedades latinoamericanas en la década de 1990, y frente a las cuales Chile aparecía o era presentada como una *taza de leche*, como una sociedad sin sobresaltos.

La respuesta que tengo frente a esa situación es que nosotros transitamos de un régimen político autoritario a un tipo de democracia protegida, diseñada y elaborada por los autoritarios del régimen del general Augusto Pinochet, y la estructura institucional que se plasmó en la Constitución de 1980 es la de una democracia limitada, que no permite la cabal representación de toda la gente. Se establecieron candados y mecanismos para que no participara la población, en el sentido de que no creaba incentivos para hacerlo”.

#### **¿Cómo se colocaron esos *candados* a la ciudadanía?**

“Por ejemplo, se estableció que el sujeto, el ciudadano, era libre de elegir si quería inscribirse en los registros electorales. Es decir, la primera decisión política de una persona que llegaba a los 18 años era inscribirse o no inscribirse, participar o no participar, ¿voto o no voto, hago un acto de vinculación con los intereses de mi sociedad a partir de la elección de representantes o no? Y la mayoría de los jóvenes, a partir de 1990, empezaron a tomar la decisión de no participar.

Eso me llevó a reflexionar por qué los jóvenes no se inscribían. Y la respuesta fue que no se trataba de que ellos estuvieran molestos con el régimen democrático, o que les disgustaban los gobiernos de la Concertación, sino que fundamentalmente eran lo que yo llamo *jóvenes neoliberales*. Se habían acostumbrado a ser individualistas, competitivos entre sí, tenían una lógica de la fama, el éxito y el dinero: tres elementos que conforman la ética neoliberal.

Los jóvenes buscaban, en una experiencia biográfica corta, la plena realización de todo: ser profesionales exitosos, tener dinero para consumir y participar en el mercado de la diversión, de la vivienda, de los autos, de las tarjetas de crédito, para acceder

a una serie de bienes que, en esa visión, les permitirían un *buen vivir*.

Entonces, muchos jóvenes tomaron la decisión de no participar; otros, mucho más conscientes, decidieron que no les gustaba la democracia protegida. Sin embargo, este joven desaprensivo era también un joven apolítico. En todos los estudios y entrevistas que realicé, los jóvenes decían que no les interesaba la política, pero carecen de una posición ideológica específica que avale o justifique su no participación.

Esto era así y fue creciendo hasta estallar. En el año 1997 tuvimos una primera señal con el elevado abstencionismo, quedó demostrado que la gente no votaba y la explicación que dio un sector de la ciencia social fue la siguiente: somos una democracia madura, y en las democracias maduras la gente no vota; somos una democracia al estilo europeo o norteamericano. Otros interpretaron que se trataba de la manifestación de un malestar contra la forma como se había gestado el proceso de modernización neoliberal y la forma en que este proceso no integraba a todos. Asumían que existía un malestar con la modernidad..."

**Pero esa tendencia al abstencionismo ha venido en aumento, lo que descartaría la tesis de que se trataba de un simple malestar con la modernización neoliberal...**

"Exactamente, esa tendencia al abstencionismo creció a lo largo del tiempo. Como las dos interpretaciones que dio la ciencia social no me eran satisfactorias, empecé a proponer una tercera interpretación, que gira en torno a la idea de la configuración de un *sujeto neoliberal*, que se va formando a lo largo de los veinte años de gobiernos de la Concertación: es un sujeto que hoy tiene 20 o 30 años y sigue siendo displicente con la política y no se compromete.

Los cuatro millones de personas no votantes [abstencionistas] no existieron desde la vuelta de la democracia, sino que ese sector de la población se fue acumulando durante los 13 años que siguieron a 1997. Eso implicó que la política se hiciera mucho más elitista en torno a los partidos que tenían representación, y que contaban con un electorado cerrado -el

que estaba inscrito- y que se movía, en cada elección, entre 7,3 millones y 8,2 millones de personas inscritas. Pero había cerca de un millón de electores que no votaban.

Por lo tanto, los partidos focalizaron sus estrategias, sus discursos, sus programas; ya no les hablaban a los jóvenes, porque no eran votantes. Así, los jóvenes comenzaron a sentir que nadie los tomaba en cuenta, sin embargo, ellos tenían su cuota de responsabilidad. Usaban una frase muy popular en ese tiempo, de un tenista chileno, Marcelo Ríos, que decía: *'no estoy ni ahí'*, es decir, no estaban en nada ni con nadie, solo con ellos mismos. Esta era la máxima expresión del individualismo, del desinterés por lo que les pasa a los otros”.

**Esto es lo que Atilio Boron llama el “sentido común” neoliberal, interiorizado plenamente en esos jóvenes...**

“Totalmente cierto. Es el neoliberalismo haciéndose parte de una mentalidad. Ya no es solo un modo o patrón de acumulación, sino una forma de vida, un estilo de vivir, y una manera cultural de expresarse y enfrentarse a la sociedad”.

**Los medios de comunicación, la cultura y la memoria de 1973**

**Con una sociedad conformada en buena medida por esos sujetos neoliberales, ¿en qué momento se dan las condiciones que hicieron posible el actual período de movilizaciones en Chile?**

“Pasó el año 1997, el 2000 y llegó un año clave en nuestra historia: el 2003. ¿Qué ocurrió entonces? Quizás nada visiblemente significativo, o noticioso, pero se conmemoraron los 30 años del golpe de Estado. A partir de esto, hubo lo que durante la transición a la democracia en España se llamó un ‘destape comunicacional’, y por primera vez los canales de televisión comenzaron a transmitir en horas de alto rating reportajes en profundidad acerca de lo que había ocurrido el 11 de setiembre de 1973 y del porqué de la muerte de Salvador Allende. Incluso los canales competían entre sí por estos temas.

Algunos medios recuperaron la memoria de los años sesenta, de la Revolución Cubana, de la revolución en libertad de la Democracia Cristiana de Chile en 1964, hasta llegar al gobierno

de la Unidad Popular: mostraron las realizaciones concretas y las conflictividades que tuvo este proceso, y destacaron la figura de Salvador Allende.

A partir de esto, hubo un aprendizaje y un despertar político en un grupo de la sociedad: los jóvenes que tenían entre 12 y 15 años en ese momento, que son los que hoy, 10 años después, llevan adelante las acciones de movilización. Si revisas tu biografía personal, hay un momento en que descubres la política y esto nos hace sentir y percibir diferente la realidad. Y tengo la impresión de que septiembre de 2003, gracias a la capacidad de penetración y difusión que tiene la televisión en los hogares, marcó a esta generación”.

**¿Podríamos estar en presencia de un efecto no previsto o no pronosticado en la lógica de las relaciones de esa sociedad neoliberal, en términos de la cultura y sus transformaciones?**

“Exacto. Tengo la impresión de que los canales de televisión nunca fueron capaces de dimensionar el impacto social y político-cultural que esa vuelta a los hechos de 1973 iba a tener, porque los medios pusieron en evidencia, por ejemplo, por qué había muerto Allende, cuáles eran las coordenadas de la política en esos años, cómo eran los políticos, el compromiso de la juventud.

Es decir, cuando tú ves a jóvenes de tu misma edad participando y vibrando en el proceso de construcción de la alternativa socialista que se daba en aquel momento, fácilmente aparece la pregunta: ¿y nosotros qué hacemos?

Algunos canales fueron un poco más lejos y llegaron hasta los años ochenta y noventa, y sus producciones mostraron el compromiso, las luchas y las movilizaciones de una juventud que resistió a la dictadura y se jugó la vida por recuperar la democracia.

Mi tesis es que los jóvenes de este siglo XXI hicieron un ejercicio de introspección y empezaron a articular sus propias respuestas, al punto de que tres años después, en el 2006, estalla la *revolución pingüina* [estudiantes de secundaria]; y en el 2009 la rebelión social de los estudiantes universitarios. Insisto: hay un aprendizaje político y por eso ves en las marchas de los universitarios a un joven que se disfraza de Salvador Allende y es aclamado.



Sin embargo, junto a este sector de la juventud, existe otro sector también muy importante que sigue siendo neoliberal, profundamente individualista, consumidor, que quiere seguir participando en el mercado y que se plantea la *rebeldía del cliente*”.

### **¿En qué consiste esta *rebeldía del cliente*?**

“Las sociedades neoliberales también desarrollan protestas sociales y políticas propias del neoliberalismo, y cuando un grupo de personas se levanta contra el mal funcionamiento del mercado en varios aspectos puntuales, no es que quieran cambiarlo... ¡quieren que el mercado funcione bien! Ese es el mensaje que envían.

Entonces, cuando una parte de los estudiantes salen a la calle y exigen buena educación, en el fondo, lo que dicen es: *yo soy un estudiante que paga y me están dando una pésima educación, ¡mejoren mi educación!* Pero no están planteando lo esencial: dejar de pagar lo que el mercado ordena. En este sentido, el movimiento estudiantil es sumamente heterogéneo, y en él convergen desde las rebeldías por la memoria hasta rebeldías de consumidores”.

**Pero en cierto sentido sí existe allí, en ese reclamo y en las protestas, una interpelación de la juventud al orden neoliberal, al mercado y al Estado...**

“Sí hay una interpelación, pero no está orientada a la transformación. Se interpela al mercado y al Estado para que funcionen bien, pero no debe perderse de vista que hay algunos sectores de la juventud a los que no les disgusta vivir en una sociedad neoliberal.

Muchas veces las ciencias sociales y la gente, en general, quieren escuchar que todos están en contra de algo, y no es así, las sociedades no funcionan de esa manera: algunas sociedades pueden ser muy fuertes para protestar y enojarse, pero eso no quiere decir, necesariamente, que quieran cambiar las cosas, voltear el orden imperante. Reclaman mejoras materiales, pero no pretenden cambiar el sistema.

El detalle no está en comprender cómo piensa el 20% de la población que está dispuesta a cambiar y transformar la sociedad, sino el 80% que no tiene interés en hacerlo”.

## **El movimiento social: encrucijada y desafíos**

**Camila Vallejo afirmó en una entrevista que tuvo amplia difusión, sobre todo en medios alternativos, que el movimiento estudiantil logró tocar el corazón profundo del neoliberalismo en Chile. ¿Tuvo ese alcance la rebelión de los estudiantes?**

“Si la movilización hubiese tenido ese alcance, hoy estaríamos asistiendo a una transformación radical de la situación y de la sociedad. Ahora, si Camila quería decir con ese planteamiento que se había tocado la cuestión del lucro en la educación, uno tendría que considerar que en una sociedad neoliberal todo está montando sobre el lucro y la ganancia, que es la lógica del neoliberalismo: maximizar las utilidades y buscar la satisfacción individual. Pero esto no está en transformación.

En Chile, el próximo gobierno quizás sea de signo distinto al de la derecha actual; podría ser un nuevo gobierno de la Concertación, acaso un poco más reformista de lo que fue antes, pero no va a cambiar la estructura, porque en Chile no hay condiciones para una revolución en tanto transformación radical de los sistemas. Lo que vamos a tener es un reformismo acentuado, pero sin salirse del marco estructural y mucho menos del patrón neoliberal de acumulación”.

### **Esa es una visión pesimista de la situación en Chile...**

“Siempre he sido un poco pesimista...”

### **¿Y son esos los límites concretos del movimiento de rebeldía estudiantil y ciudadana?**

“Claro. Esto que describo es para entender cuáles son los límites al mantener una movilización en los marcos del sistema político, del Estado, del mercado y de la sociedad neoliberal. Mi propuesta es que debemos desbordar esos marcos, ir más allá de lo que estamos planteando actualmente como reivindicación.

La máxima potencia que tenía el movimiento radicaba en la crítica al lucro, en la demanda de educación gratuita y la devolución de los colegios de secundaria al sistema estatal. Esto suponía terminar con la estructura educativa del mercado e implicaba que la sociedad chilena se hiciera cargo del problema

de la educación, financiando la formación y preparación de sus generaciones futuras.

El tema central es que los chilenos y chilenas, la sociedad como un todo, no parecen estar dispuestos a poner un peso para financiar la educación. Si tú les dices que, para tener una educación de calidad, pública y gratuita, es necesario establecer un impuesto a la renta de todos, del 2% por ejemplo, eso te lo va a rechazar todo el mundo”.

**Sin embargo, Chile tiene una riqueza enorme en el cobre, y por una decisión de la dictadura de Pinochet, buena parte de los ingresos que genera su explotación se destinan al financiamiento de las fuerzas armadas y no al financiamiento de la educación...**

“Sí, pero esa decisión entraña un sentido estratégico y geopolítico: Pinochet sabía perfectamente que para que las Fuerzas Armadas tuvieran autonomía y no dependieran del poder civil de turno, debía darles ciertas garantías de financiamiento propio. Por eso estableció la ley que reserva al ejército el 10% del monto de los ingresos de la venta del cobre por parte de la empresa CODELCO.

Se podría hacer exactamente lo mismo con la educación pública, y dar el 10% de CODELCO para el financiamiento de la educación que pertenece al Estado. ¿Pero qué pasaría con todas esas personas que no logran ingresar a la universidad pública y, por diferentes razones, deben hacerlo en la universidad privada?

Es algo que casi nunca se dice ni analiza en estas discusiones. Te explico: a manera de ejemplo, supongamos que la Universidad de Chile, que es pública y estatal, tiene por política el ingreso anual de 5000 estudiantes, y para esta población aplica un sistema de selección o prueba: solo los que obtienen los puntajes superiores a 750 ingresan a la universidad. ¿Qué pasa con los que obtienen de 700 a 749? ¡Mala suerte, porque las autoridades de la universidad son las que deciden cuál es el puntaje de ingreso!

Entonces, esa persona del segundo grupo, que no es para nada un mal estudiante, pero no alcanzó la calificación requerida, aunque sea por un punto, prácticamente es enviado por la universidad pública a estudiar en la universidad privada.

¿Quién forma y constituye, entonces, el mercado para las universidades privadas? ¡Justamente, las propias políticas educativas y de selección de las universidades públicas! Esa es la clave del modelo neoliberal. Cambiar eso significaba decir: desde ahora, la Universidad de Santiago, la Universidad de Chile y sus sedes regionales derivadas, van a tener ingreso universal, no habrá más selección de estudiantes ni limitaciones para su ingreso”.

**Y ese tema no fue planteado por el movimiento estudiantil y ciudadano...**

“No, porque a una parte del movimiento solo le interesaba solucionar el problema específico del financiamiento de sus estudios, pero no se preocuparon por la situación de los estudiantes de universidades privadas. Aunque la gente salió a las calles en forma masiva, este tema no se propuso públicamente. Y lo cierto es que los estudiantes de las universidades públicas discriminan a los estudiantes de las universidades privadas por considerar que estos pagan por su educación... ¡pero los de las públicas también lo están haciendo!

Para cambiar la educación de mercado en Chile no basta con pedir que se termine el lucro; hay que exigir lo que actualmente están exigiendo los estudiantes de la Universidad Pedro de Valdivia y la Universidad del Mar: la expropiación por parte del Estado -la estatización- de estas dos universidades.

Eso sí sería una forma de afectar a un modelo que no quiere universidades públicas y de poner en cuestionamiento al capitalismo académico. No solo hay que pedir el fin del lucro, sino el fin del modelo mismo”.

**¿Cómo entender, entonces, que figuras tan representativas del movimiento, como Camila Vallejo, militante comunista, no expresen con mayor fuerza este tipo de reivindicaciones? ¿Será un síntoma de la realidad de unos partidos políticos que tampoco miran más allá del horizonte de la sociedad neoliberal?**

“Creo que el problema sustantivo de la Camila es que ella es una líder llevada por una ola, y fue situada en la cresta de esa ola por un movimiento en el que ella no era el referente, porque los estudiantes de la CONFech [Confederación de Estudiantes de

Chile] se organizaron a través de vocerías públicas, y la Universidad de Chile y la Universidad Católica, las más antiguas del país (creadas en el siglo XIX), constituyeron un “grado” de autoridad, y sus representantes aparecían públicamente como los principales voceros. Pero esto no significaba que Camila o Giorgio Jackson fueran los líderes del movimiento.

Además, tengo la impresión de que la Camila fue ‘explotada’ por los medios de comunicación por su condición de mujer y su belleza, y por eso le dieron un tratamiento especial. Aquí hubo un manejo comunicacional de su imagen por parte de los grandes medios, que la fueron colocando ante la opinión pública, y ella se ha resistido a eso, pero el Partido Comunista entiende que en Camila tiene capital político y un cuadro que le permitiría ganar el día de mañana una diputación.

El Partido Comunista, como viejo partido institucionalizado, también institucionalizó el movimiento estudiantil, con el objetivo e interés de hacer un pacto con la Concertación para tener, en el futuro cercano, mayor representación parlamentaria”.

**En ese sentido, y con miras a las elecciones presidenciales del 2013, ¿cómo podría influir el juego de promesas, ofertas de campaña, prebendas e intereses propios de las democracias representativas, en el futuro del movimiento social chileno?**

“Hay dos situaciones que considerar: una es que la Asociación Coordinadora de los Estudiantes Secundarios planteó, a través de sus voceros, la tesis de la abstención para las elecciones del 28 de octubre de este año, pero no le dieron contenido ni sustento a la propuesta; ¿qué pasó? Se registró la mayor abstención de la historia de Chile, de aproximadamente el 60% de la población. Pero, contrario a lo que podría pensarse, ahí una vez más el sistema neoliberal funcionó, porque lo primero que hizo el gobierno de la derecha de Sebastián Piñera, cuando asumió el poder, fue aprobar la ley del voto voluntario. Es decir, los tipos tienen muy claro cómo es y cómo piensa ese sujeto neoliberal libre de hacer lo que le venga en gana, y como saben que entre menos participe la gente menos problemas van a tener, le ‘conceden’ a los ciudadanos la libertad de decidir si van a votar o no.

Es cierto que la gente no votó, pero el sistema siguió funcionando porque no se deslegitimó. La ley, en términos teóricos, permite, faculta o prohíbe. Entonces, si la ley le dice al ciudadano que puede votar o no votar, y que en cualquiera de los dos casos no le va a pasar nada, ni tampoco al sistema, todo va a seguir funcionando igual. Así, el llamado al abstencionismo, que pudo ser muy importante en términos estratégicos, perdió efectividad política.

La otra cuestión es lo que tenemos que hacer ahora: si sabemos que la abstención no golpea al sistema político, lo antes posible debemos levantar una fuerza que sea capaz de constituirse en alternativa real tanto a la derecha neoliberal como a la centroderecha neoliberal de la Concertación, ahora en amistad con el Partido Comunista. Se requiere de una alternativa antineoliberal concreta, que recoja todo esto que han venido planteando las rebeliones estudiantiles, la de Aysén, la de Magallanes, y hacer un proyecto de carácter social y nacional que proponga una alternativa más allá de lo existente. De lo contrario, seguiremos por el camino de la sociedad neoliberal”.

**En ese escenario, ¿existen las condiciones políticas y los sujetos capaces de avanzar en esa ruta de construcción de una alternativa antineoliberal en Chile?**

“Tengo la impresión de que ese proyecto alternativo todavía no está; no se logra elaborar y precisar. Cuando llegan al poder Hugo Chávez, en Venezuela; Evo Morales, en Bolivia; o Rafael Correa, en Ecuador, ya existía ese proyecto, elaborado incluso a lo largo de varios años, y se plasma en las asambleas constituyentes. Pero en Chile este proyecto no existe y en eso consiste el drama de nuestra sociedad.

En cambio, los actores institucionales de la política chilena ya están posicionados: la derecha tiene a sus dos candidatos compitiendo por las primarias: el exministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, y el exministro de Defensa Andrés Allamand, un viejo político de los sectores de Renovación Nacional. Estos dos van a disputarse la candidatura de la derecha y del continuismo.

Del otro lado, ya está prácticamente decidido que la expresidenta Michelle Bachelet sea la candidata de la

Concertación, en conjunto con el apoyo político electoral del Partido Comunista. Uno y otro se necesitan. Y vamos a tener otra fuerza, la del Partido Progresista, encabezada por Marco Enríquez-Ominami. Si estas fuerzas recuperan el gobierno llevarán adelante un programa reformista, que quizás corrija algunos aspectos del modelo de mercado, pero que no necesariamente pretenden una transformación.

Sin embargo, quiero creer que en la historia y la política nada está escrito, y a veces las tendencias pueden ser quebradas por un sector de la sociedad que dice: 'queremos otra cosa'. Ese es el escenario que conviene dejar abierto en Chile ahora".

**SEXTA PARTE**

**LA MEMORIA-HISTÓRICA  
EN LA SOCIEDAD NEOLIBERAL**





## **La democratización del derecho de propiedad en Chile, 1967-1973**

*“Es el propio desarrollo de la democracia el que cuestiona la propiedad privada de los medios de producción como obstáculo para una consolidación de la democracia, para una consolidación tal que no sea, para las masas populares, tan sólo de carácter formal”.*

Vladimir I. Lenin. Obras Escogidas. Editorial Progreso, Moscú 1975, t. III, p. 13.

A 100 años de la Revolución Rusa

### **Democratizar el derecho propiedad: la reforma constitucional de 1967**

Cuando en enero de 1967, hace 50 años, el presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970) firmó el decreto promulgatorio de la Ley N° 16.615 que introdujo en la Constitución Política del Estado de 1925 un nuevo estatuto para el Derecho de Propiedad; y siete meses más tarde, el 16 de julio, promulgó la Ley N° 16.640 que dio cauce legal a la Reforma Agraria, abrió una intensa coyuntura crítica y creó la estructura política de oportunidades para democratizar no solo la propiedad agraria, sino la totalidad de la propiedad privada de los medios de producción (PPdMP). Si bien, ese no era su objetivo político, el proceso de democratización abierto por Frei y continuado y profundizado por Salvador Allende (1970-1973), provocaron la mayor crisis orgánica experimentada por el capitalismo nacional.

Modificar el derecho de propiedad privada implicó afectar a la principal fuente de poder de las clases dominantes. Durante 427 años la PPdMP fue protegida por el Estado Imperial y más tarde por el Estado Nacional. Éste velaba por que la propiedad no fuera vulnerada, alterada, amenazada, ni transgredida. De

acuerdo con la normativa constitucional de 1833 como de 1925, era inviolable. Nadie, ni siquiera el propio Estado podía intervenirla. Se consideraba que la PPdMP antecedió al Estado. Constituyéndose en la principal frontera de la democracia.<sup>151</sup>

La osadía política de Eduardo Frei con el apoyo de la izquierda socialista y comunista fue poner fin a esa condición. Pasando de una concepción jurídica-política excluyente y centrada en el “**derecho de propiedad**” a otra centrada en el “**derecho a la propiedad**”. Imponiéndose la doctrina de la función social de la propiedad.

Así, entre 1967 y 1973, la PPdMP en manos de las oligarquías terratenientes, burguesías industriales, financieras y mercantiles nacionales y extranjeras, fue expropiada, nacionalizada, estatizada y socializada por el Estado de Chile. La reforma constitucional hizo posible que todos los bienes y recursos naturales pasaran a ser propiedad de la sociedad chilena, o sea, se volvieran bienes comunes. En otras palabras, fueran de todas y todos los chilenos.

Los íconos históricos y políticos de ese proceso fueron: (a) la Reforma Agraria, que permitió la expropiación de los grandes latifundios con el objetivo de distribuirlos entre los campesinos sin la tierra; (b) la Nacionalización de la gran minería del Cobre, en junio de 1971, que recuperó los recursos naturales mineros para uso y disfrute de la sociedad chilena; (c) la estatización de la banca nacional y extranjera, anunciada el 30 de diciembre de 1970; (d) la expropiación de la emblemática industria textil: Yarur, en Santiago, el 28 de abril de 1971, iniciándose con ella el traspaso de la industria manufacturera nacional al poder de los trabajadores y, (e) la estatización de las empresas de telecomunicaciones transnacionales.

Si bien estos íconos fueron actos de poder realizados por el Estado, la democratización de la propiedad no fue solo un acto gubernamental, sino también fue la expresión del poder de los sectores dominados: trabajadores, pobladores, mineros, campesinos, indígenas, de hombres y mujeres pobres del campo y de la ciudad.

---

<sup>151</sup> Gómez Leyton, Juan Carlos (2004). *La Frontera de la democracia*. LOM Ediciones, Santiago de Chile.

Estos sectores no tenían derecho ni acceso a la PPdMP ni tampoco a un lugar donde habitar. Por esa razón, desde fines de 1950, se había iniciado la ocupación de la propiedad urbana tanto fiscal como privada para “encontrar un sitio” donde habitar la ciudad.<sup>152</sup> A través de “tomas de terreno”, el movimiento social de pobladores ocupaba terrenos presionando al Estado a expropiarlos en su beneficio. La “toma” como un acto de apropiación colectiva de la propiedad privada se transformó, entre 1957 y 1973, en la principal forma de acceso de los sectores populares y trabajadores a la propiedad.<sup>153</sup>

La democratización de la propiedad impulsada tanto por arriba -gobierno- como por abajo, por el poder popular, conducía a la transformación radical del régimen capitalista<sup>154</sup>, dado que la democratización de la propiedad consistía en despojar, arrebatar y expropiar el poder infraestructural que la propiedad de los medios de producción confería a la clase capitalista nacional como extranjera. Por tanto, no solo se democratizaba a la propiedad sino también al Estado y hacía extensiva la democracia a todos y todas. La PPdMP dejó de ser un patrimonio individual o familiar, volviéndose colectivo-público-estatal-común. Los “no propietarios”, por ejemplo, los campesinos que accedieron a la tierra de manera colectiva adquirieron poder social, económico y político. Y, sobre todo, dignidad.

La expansión democrática asumió una clara orientación subversiva pues desafió y discutió frontalmente la dominación, la hegemonía y la violencia del capitalismo -desde la explotación de la fuerza de trabajo al uso opresivo del Estado-. La democratización del Estado implicó la expulsión relativa de las clases propietarias de él y su ocupación parcial, conquista del poder ejecutivo, por parte de los sectores sociales no propietarios. Esta situación explica la crisis política abierta por la profundización de la democratización de la PPdMP, durante el gobierno de la Unidad Popular.

---

<sup>152</sup> Garcés, Mario (2001). *Tomando sitio*. LOM Ediciones, Santiago de Chile.

<sup>153</sup> Salazar, Gabriel (1991). *La violencia política popular en las grandes alamedas*. SUR Profesionales, Santiago de Chile.

<sup>154</sup> Gaudichaud, Frank (2016). *Chile 1970-1973. Mil días que estremecieron al mundo*. LOM Ediciones, Santiago de Chile.

## **La defensa del derecho de propiedad privada**

Esta democratización encontró fuertes resistencias políticas. Los sectores propietarios nacionales y extranjeros, la derecha política y sus intelectuales orgánicos se opusieron y se movilizaron utilizando todos los medios legales y no legales para impedir que ella se expandiera y al consolidarse en el tiempo transformara radicalmente al capitalismo.

El conflicto fue intenso y violento. Tuvo dos momentos álgidos. El primero, durante el gobierno de Frei, se concentra en el parlamento. Los principales actores políticos y sociales opositores en este momento fueron: la Sociedad Nacional de Agricultura, el diario El Mercurio y Agustín Edwards E., los partidos Liberal, Conservador y Radical y un joven abogado de la Universidad Católica de Chile, vinculado, entre 1965-1966, a la organización filo-fascista FIDUCIA, Jaime Guzmán Errázuriz, quien durante el gobierno popular va a pronunciarse abiertamente por la intervención de las Fuerzas Armadas para restituir el derecho de propiedad.

En el segundo momento, durante el gobierno socialista de la Unidad Popular, se sumaron a la defensa no solo de la propiedad sino del capitalismo, la mayoría de los gremios empresariales y patronales, entre ellos: la Sociedad de Fomento Fabril, dirigida por Orlando Sáenz; la Sociedad Nacional de Minería; la Cámara Central de Comercio; la Confederación de la Producción y del Comercio; la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones; los principales grupos económicos: el grupo Alessandri-Matte, por ejemplo; el Partido Demócrata Cristiano; el Partido Nacional; las empresas transnacionales y, por cierto, el gobierno y el departamento de Estado estadounidense. Pero también el poder judicial y sectores de la mediana y pequeña burguesía. Una de las mayores expresiones de esta oposición la constituye el paro patronal de 1972.

La oposición se concentró en evitar la reforma constitucional al Art. 10 de la CP25 y frenar la Reforma Agraria, fue derrotada. Sin embargo, el bloque opositor adquirió mayor poder político y social durante la Unidad Popular, al aliarse los sectores de la derecha con los sectores demócratacristianos en contra de la iniciativa popular de la formación del Área de la Propiedad Social.

Y solo apelando a la intervención de las Fuerzas Armadas lograron en 1973 derrotar y frenar el proceso de democratización de la propiedad.

### **La restauración del derecho propiedad 1973-2017**

La dictadura militar (1973-1990) al restaurar el derecho de propiedad expropió, en favor del capital nacional e internacional, la propiedad común de los bienes y recursos naturales que la sociedad chilena había recuperado entre 1967 y 1973. Los gobiernos concertacionistas y electos por votación popular (1990-2017) continuaron lo obrado por la dictadura, o sea, proteger y extender la PPdMP entre el capital. De allí que la tierra, los recursos mineros, los recursos marítimos, el agua, los bosques, etcétera, como la vida de hombres, mujeres, niños y niñas pertenecen a determinados grupos económicos nacionales o grandes corporaciones transnacionales.

El control de los bienes que debieran ser comunes, o sea, de todos las y los ciudadanos nacionales, hoy está concentrado y apropiado en 9 grupos económicos de carácter familiar, a saber: Matte, Angelini, Luksic, Solari, Paulmann, Said, Saieh, Yarur, y Cueto. Esto es así gracias a la restauración del derecho de propiedad y su protección en la Constitución Política de 1980 que, a través de diversos candados institucionales, volvió a la propiedad privada inviolable.<sup>155</sup>

Estos grupos son los dueños del país y de su gente. Por eso, si la sociedad chilena quiere volver a tener una democracia extensa, profunda, sustantiva como la vivida entre 1967 y 1973, deberá, ante cualquier cosa, volver a discutir la validez política, económica y ética de la propiedad privada de los medios de producción, de lo contrario, la democracia seguirá siendo una promesa incumplida.

Tengamos presente, para cerrar este artículo, que la transición a la democracia en Chile (1990) asumió el postulado de la teoría de la transición que indica que la única forma de tener una democracia estable era manteniendo intocables los derechos de propiedad privada de la burguesía.<sup>156</sup>

<sup>155</sup> Ver Ranking de Grupos Económicos RGE, Facultad de Economía y Negocios, UDD, Julio 2016.

<sup>156</sup> Gómez Leyton, Juan Carlos (2010). *Política, democracia y ciudadanía en una sociedad neoliberal (Chile, 1990-2010)*. ARCIS/CLACSO, Santiago de Chile.

Los gobiernos concertacionistas no solo practicaron dicho postulado, sino que para seguir manteniendo el régimen político democrático autoritario extendieron y enajenaron todos los bienes y recursos al capital. Volver a la democracia social supone poner fin a la PPdMP, tal como se hizo hace 50 años.<sup>157</sup>

---

<sup>157</sup> Publicado en *Le Monde Diplomatique*, Año XVII, N°185, junio 2017. Edición chilena.

## Memoria, Historia y Conflicto Político

### El "Once" en la conciencia histórica nacional

*"Compañero...  
En septiembre poco puedo contarte  
que no tenga que ver con esta  
herida que supura: ¿DÓNDE ESTÁN?"*  
Carmen Andrea Mantilla, septiembre, 2014

Este martes 11 de septiembre de 2018 se cumplirán los 45 años del derrocamiento del gobierno popular, revolucionario y socialista del presidente Salvador Allende y de la Unidad Popular (1970-1973); de la destrucción del régimen democrático; de la ocupación militar y del genocidio del pueblo chileno por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden nacionales.

Aunque el paso del tiempo es inexorable, la gran herida infringida a la historia de la sociedad chilena permanece viva. Las ardientes llamas que quemaron La Moneda, aún arden y queman en la memoria de cientos de miles de chilenas y chilenos. El pasado reciente sigue vivo. El acontecimiento, el 11 septiembre de 1973, sigue tronando, explotando y el espeso humo negro de su acontecer no se disipa. Pues, nadie olvida.

La presencia del acontecimiento, "el Once", como se le nombra popularmente, el suceso mismo y las cosas acontecidas producto de su onda expansiva no son imágenes difusas, sino que, gracias a las diversas memorias activas y vivas, constituyen hechos vivísimos. El "once" permanece entre nosotros. Y, seguramente, permanecerá, por mucho tiempo más, aunque se apaguen o se extingan las últimas memorias vivas. Lo cual ocurrirá en aproximadamente cuatro décadas, cuando ninguno de las y los chilenos que tenían, por ejemplo, entre 8-10 años para "el Once", estén en este mundo. También será un hecho irremediable que entre 5 o en 10 años más, los protagonistas directos del



acontecimiento ya no estarán. Sin embargo, “el Once” seguirá existiendo. Fundamentalmente porque desde hace solo unos 15 años, el acontecimiento, “el Once”, es parte de la consciencia histórica y política de la ciudadanía nacional.

Es más que evidente que desde la conmemoración de los 30 años, en 2003, cuando se produce la explosión de la memoria, “el Once” tiene ya un lugar en la consciencia histórica nacional, especialmente de todas y todos aquellos que no lo vivieron directamente. Desde ese momento, “el Once” dejó de ser el recuerdo de la izquierda, de sus militantes, de los simpatizantes y adherentes de Salvador Allende y de la Unidad Popular, de los familiares de las víctimas, de los exiliados, de los torturados. Ingresó en la consciencia política e histórica de la ciudadanía nacional, independientemente del momento de su nacimiento. Ahora todas y todos tienen una opinión sobre lo acontecido. La tesis de la derecha que sostenía que solo podían opinar sobre lo acontecido los que habían vivido el periodo de la Unidad Popular o los años dictatoriales, se derrumbó. Con ello, la memoria dio lugar al relato histórico.

No obstante, el relato histórico no desplaza a la memoria viva, todo lo contrario, se entrelazan activamente. Dicha conjugación permite, entre otras cosas, la emergencia de la política. En otras palabras, “el Once” se politiza. La figura del presidente mártir Salvador Allende se vuelve un referente en las luchas políticas actuales, especialmente de los sectores sociales y políticos que protagonizan las rebeliones ciudadanas de 2006 y 2011. En efecto, Salvador Allende Gossens será reivindicado políticamente por los nuevos y diversos grupos políticos que emergieron luego del 2003. Se trata de jóvenes nacidos durante la democracia posautoritaria, que recuperan la historia reciente acontecida entre 1970-1990. Tomemos dos ejemplos para describir lo que estoy señalando. El joven alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, nacido en 1985, o sea, 15 años después del triunfo allendista y 12 años después del “Once”, es un profundo admirador de Salvador Allende. Segundo, la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica Federico Santa María, programa una Semana de la Memoria, que, en realidad, por las actividades a desarrollar, es una semana dedicada a revisar y conocer la historia reciente de Chile, o sea, del periodo 1970-1990. En esta actividad como en otras que se

realizarán en distintos lugares del país, se conjugan virtuosamente memoria e historia. Se trata de procesos de politización y toma de conciencia histórica de lo acontecido en los últimos 48 años. Las nuevas generaciones se auto educan en la historia reciente.

Pero lo que debemos tener presente es que no existe “la Memoria”, como dice el cartel de la actividad señalada, sino que en realidad existen múltiples y variadas memorias en conflicto.

Este es el punto que deseo hacer relevante en esta reflexión. La historia reciente de Chile contiene tres lapsos históricos que remiten a distintas memorias individuales como colectivas. Las cuales, a su vez, poseen y reclaman para sí, distintas significaciones políticas como históricas. Y, por esa razón, la disputa por la memoria se vuelve un conflicto político álgido.

El conflicto abierto por el ex Ministro de las Culturas, Mauricio Rojas, sobre el Museo de la Memoria, tiene como trasfondo político e ideológico, el control tanto de la historia como de la memoria. El objetivo político último de ese conflicto es instalar -corrigiendo lo que, según el canciller Roberto Ampuero, es una “mala memoria”- otra memoria e historia acorde con quienes actualmente tienen el poder gubernamental.

La existencia del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, instituido recién en el año 2010 como parte de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional, constituye un acto político gubernamental que alteró o quebró el orden político cultural establecido desde 1973. Puesto que es, sin ninguna duda, la cosificación, en un Museo, de la **Memoria de los Vencidos**.

Su existencia constituye una grieta, una gran grieta en la hegemonía cultural, política e histórica de los vencedores. De allí el interés por transformarlo, criticarlo, impugnarlo, denostarlo. La existencia material de la memoria de los vencidos implica, en cierta forma, un triunfo sobre la memoria de los vencedores. Por eso su exigencia de instalar en el museo el “contexto histórico”.

En su total desesperación política ante la derrota histórico-cultural del pasado o en la imposibilidad de controlar la historia, los vencedores van a construir el museo de la democracia o, en otras palabras, la cosificación de la **Memoria de los vencedores**.

Todos recuerdan, nadie olvida. La lucha política por el pasado está abierta. Todos mantienen vivo "el Once". Desde hace 45 años, parafraseando al poema de Antonio Machado, diríamos que a cada ***"chilenito que viene al mundo... uno de los dos Chile, ha de helarte el corazón"***.

Como decíamos, la historia reciente de Chile está conformada por tres procesos históricos, a saber: 1) el gobierno del presidente Allende y de la Unidad Popular 1970-1973; 2) la dictadura cívico-militar, 1973-1990, y 3) la democracia posautoritaria, desde 1990 hasta la actualidad. Se trata de medio siglo de intensa y conflictiva historia. Cada uno de estos procesos históricos están marcados por acontecimientos políticos fundantes que poseen distintos registros en la memoria de los ciudadanos nacionales. Son acontecimientos disímiles, complejos y conflictivos. El primero, es el triunfo de Salvador Allende en las elecciones presidenciales el 4 septiembre de 1970; el segundo, el derrocamiento de su gobierno por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden, el 11 de septiembre de 1973; y el tercero, el triunfo del Movimiento Democrático Nacional en el plebiscito sucesorio del 5 de octubre de 1988. Son tres momentos de la historia de Chile que configuran tres Chile: el popular, el de la dictadura y el de la democracia posautoritaria. Tres Chile, tres memorias y tres historias. Tres conflictos.

Ahora bien, la memoria del Chile popular, la memoria del Once-dictadura y la memoria de la democracia posautoritaria, aunque están indisolublemente entrelazadas, son memorias diferentes. E incluso las y los sujetos individuales o colectivos son también distintos. Y no solo eso, sino que poseen activaciones, o sea, recuerdos disímiles. Dándose el caso que en un mismo sujeto las tres memorias están presentes.

La memoria políticamente menos activa es la referida al Chile Popular. Pocos son los que recuerdan vivamente dicho periodo. La memoria del Chile popular como su historia permanece en silencio y en la oscuridad historiográfica.

Hasta ahora la historia como la memoria más activa es la relacionada con la dictadura y, tal vez, la menos recuperada de las tres, sea la memoria relativa al triunfo del 5 de octubre de 1988. Arriesgo aventurar la hipótesis que ello se debe a que dicho triunfo

es muy ambiguo, engañoso y tramposo. Dado que la derrota del dictador en el plebiscito de 1988 fue a medias: se ganó perdiendo. Por ello, la democracia posautoritaria es un régimen político híbrido, una mezcla de formas autoritarias y democráticas. En otras palabras, una democracia a medias. Tal como lo planteó el primer presidente electo de dicho régimen Patricio Aylwin Azócar, una democracia **“a la medida de lo posible”**.

La memoria de la dictadura, a diferencia de la memoria posautoritaria, se estructura en diversos acontecimientos políticos constitutivos de sujetos y actores políticos que la confrontan. Son hechos, sucesos acontecidos, que son parte de las ondas producidas por el hecho fundante de la misma, o sea, de “el Once”. Por ejemplo, muchos de las y los ciudadanos post Once tomaron conciencia política e histórica de la existencia de la dictadura cívico-militar terrorista cuando ésta convocó a la Consulta Nacional de 1978, para solicitar el apoyo político de la ciudadanía en contra de las reiteradas condenas de parte la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la violación de los derechos humanos, que sufría el régimen militar. A cinco años del “Once”, la dictadura, a través de un burdo subterfugio electoral, buscó obtener la legitimidad política que carecía. Este acontecimiento, escasamente conocido históricamente, debió ser el acontecimiento político fundante de muchos jóvenes, que para “el Once”, solo tenían 13 años.

La sociedad chilena, que ya venía dividida, experimentó un nuevo clivaje político, ahora entre los partidarios de la dictadura y sus opositores. Superando, en 1978, el poderoso clivaje que había dado origen al “Once”, entre los anticapitalistas y prosocialistas y los defensores del capitalismo y anticomunistas.

La siguiente confrontación entre estos dos sectores se produjo en el Plebiscito de 1980. La derrota en el plebiscito llevó al Partido Comunista de Chile a asumir la estrategia de todas las formas de luchas para combatir a la dictadura. Cientos de jóvenes se unieron a la rebelión popular. Otro hecho fundante de este nuevo clivaje que constituirá nuevos sujetos políticos acontece en enero de 1982, cuando fallece el expresidente Eduardo Frei Montalva, y se realiza la primera multitudinaria manifestación política en dictadura.

A pesar de que Frei Montalva, un acérrimo opositor a la Unidad Popular, quien propició, justificó y apoyó "el Once", o sea, el derrocamiento del Presidente Allende, desde 1977 había adoptado una posición disidente hacia la dictadura. En 1980 se volvió abiertamente opositor cuando lideró las fuerzas políticas contrarias a la aprobación de la Constitución Política de 1980. Otro hecho fundante del sujeto político anti-dictatorial será, por cierto, las convocatorias a las Jornadas de Protesta Nacional, iniciadas en mayo de 1983 por la Confederación de Trabajadores del Cobre; el intento de magnicidio del dictador, en septiembre de 1986, será decisivo para la estrategia que el Movimiento Democrático Nacional desarrollará para confrontar el plebiscito sucesorio de octubre de 1988.

Debiéramos agregar a esa lista de acontecimientos fundamentales del sujeto político que emerge en la dictadura, la crisis económica post Once; el proceso de desindustrialización; la política de shock de 1975; la gran depresión económica de inicios de los años ochenta; la quiebra de la banca nacional, etcétera. Como también los hechos represivos y la violación de los derechos humanos perpetrados por la dictadura como, por ejemplo, el descubrimiento de los Hornos de Lonquén donde fueron lanzados un grupo de campesinos; el degollamiento de tres profesionales comunistas en marzo de 1985, entre otros hechos. Sucesos que estremecieron la consciencia de miles de ciudadanos nacionales.

En todos estos diversos acontecimientos nombrados, las y los chilenos debieron involucrarse, pronunciarse. Debieron tomar una posición política. Los partidarios de la dictadura, tanto los actores gubernamentales como los adherentes ciudadanos, asumieron el negacionismo como una posición política activa de defensa de la dictadura. Otros, optaron por la resistencia y la oposición activa a la dictadura. Este clivaje se mantiene hasta el día de hoy.

A pesar del fin de la dictadura militar del General Augusto Pinochet en 1990, los gobiernos de la democracia posautoritaria no lograron, aunque lo intentaron, imponer el olvido. E, incluso, eliminaron el feriado nacional del 11 de septiembre de 1973, instituido por la dictadura en 1981, con el objetivo de buscar la reconciliación nacional. Sin embargo, era imposible el olvido

de un acontecimiento fundado en el conflicto y, sobre todo, con memorias vivas. Tanto unos como otros no olvidan. Ni los vencedores quieren olvidar ni, menos, los vencidos. Por ello, “el Once” perdura. Año tras año vuelve a estremecer la vida de las y los chilenos. Pues la división gestada desde el Once permanece viva y activa. Se activó en 1998, cuando el dictador fue detenido en Londres para ser enjuiciado por crímenes de lesa humanidad; su regreso un año más tarde generó protestas y manifestaciones populares. El 10 de diciembre de 2006 estalló el júbilo y la alegría popular al conocerse su muerte.

Si bien la figura de Pinochet, el dictador, ya no está, lamentablemente su espectro sigue presente en la sociedad chilena. Su obra política está presente en la institucionalidad constitucional de la Constitución de 1980, que él aprobó y respaldó luego de su salida del poder gubernamental como Comandante en Jefe del Ejército. Además, su presencia permanece en la memoria de cientos de partidarios que hasta tan solo hace algunos años permanecían en silencio. Hoy el avance de las derechas y las ultraderechas conservadoras, ultranacionalistas, anticomunistas, etcétera, ha creado el clima y el escenario político para que los “pinochetistas” reivindiquen su figura. Como es el caso del excandidato presidencial José Antonio Kast, quien obtuvo en la primera vuelta presidencial de las elecciones de 2017, el 7,5% de los votos. Ese guarismo nos habla de la existencia, tal vez, de un pinochetismo duro.

La dictadura cívico-militar, a pesar del Chile democrático posautoritario, se ha prolongado en la sociedad neoliberal establecida entre 1973 y 1990. Sin embargo, a pesar de la aceptación de las formas socioeconómicas neoliberales, la dictadura sigue dividiendo a la ciudadanía nacional. La sociedad pinochetista no ha sido desmantelada. Los gobiernos democráticos de la centroizquierda han fracasado rotundamente en ello. Por eso, el conflicto político no es solo por el pasado, también es por el presente y, en especial, por el futuro.

Por último, si queremos que las décadas próximas del siglo XXI no continúen trazadas o dibujadas por “el Once”, por la dictadura o por la democracia posautoritaria, deberemos construir otro Chile. En consecuencia, relegar al “Once” a literatura histórica.

Las batallas por la memoria son batallas políticas, pero no deben ser batallas solo por el "pasado", sino, fundamentalmente, por el futuro.

No debemos olvidar el "Once", pero de ninguna manera ese recuerdo debe frenar la construcción del futuro. Ese futuro debe abrirse, entre otras cosas, para hacer justicia a todos aquellos que dieron su vida por defender el proyecto de una sociedad más justa e igualitaria.

## Revolucionando a la democracia: el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973)<sup>158</sup>

*A la memoria  
de las y los cientos  
de detenidos desaparecidos.  
A todas y todos  
aquellos que entregaron  
su vida por la noble causa socialista  
que viven en la memoria del pueblo.*

*“Chile es hoy la primera nación de la tierra  
llamada a conformar el segundo modelo  
de transición a la sociedad socialista...  
edificada según un modelo  
democrático, pluralista y libertario”.*  
Salvador Allende, mayo de 1971.

### Presentación

Al cumplirse los 48 años del triunfo electoral de la Unidad Popular, que permitió por primera vez en la historia de Chile, latinoamericana y mundial, el acceso al gobierno de un mandatario marxista y socialista, Salvador Allende Gossens, volverá a estar en la palestra pública la discusión histórica y política sobre el carácter y proyección teórica y política de la inédita vía democrática (pacífica) hacia el socialismo inaugurada por la izquierda chilena. Por cierto, también se instalará la disputa por el pasado reciente y las responsabilidades y culpabilidades políticas de lo ocurrido desde el 11 de septiembre de 1973 en adelante.

---

<sup>158</sup> El presente artículo se escribe con base en dos libros que son complementarios. Aunque tienen distintos “objetos de análisis” coinciden en mostrar la potencialidad revolucionaria del proceso político abierto por el gobierno de la Unidad Popular. Al mismo tiempo dan cuenta de la limitación intrínseca del gobierno popular o de la vía política institucional al socialismo: una vez abierto el conflicto por la propiedad privada, o sea, por el poder real, no puede ser resuelto por los mecanismos e instrumentos ofrecidos por la democracia. En otras palabras, poner fin al capitalismo sin requerir de la violencia revolucionaria es un camino político inviable.



Tal como ha ocurrido en los últimos años, con menor fuerza, se discutirá sobre lo acontecido en esos “mil días que estremecieron al mundo”, al decir del historiador F. Gaudichaud.<sup>159</sup> Sin lugar a duda, que la polémica de esta cuestión estará, en esta ocasión, enmarcada en la coyuntura política abierta por la discusión sobre el carácter histórico-político del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos y, en menor medida, por los odiosos dichos del presidente Sebastián Piñera sobre que el presidente Allende “validaba la violencia y los mecanismos no democráticos”, así como por la particular y exótica idea del gobierno de construir un museo histórico de la democracia.

Este ensayo de reflexión histórico-política tiene como objetivo exponer algunos aspectos de lo que fue la experiencia del gobierno de la Unidad Popular y de Salvador Allende (1970-1973) para la sociedad chilena, especialmente para sus sectores populares y trabajadores, es decir, para el pueblo. Como también exponer cuál fue -desde mi parecer- el principal conflicto político y social librado durante los tres años de gobierno popular, cuya resolución abrió la puerta a la barbarie y al actual presente histórico.

Este ensayo se organiza en dos partes. En la primera, planteo la relevancia política de la experiencia popular, su relación con la democracia y brevemente sus realizaciones. Y, en la segunda, expongo el conflicto político central de la UP: la democratización de la propiedad privada de los medios de producción. Todo esto, como señalo al cierre de este opúsculo, con el objetivo de elaborar una explicación histórico-política plausible del porqué de la “masacre del pueblo” perpetrada por las Fuerzas Armadas y de Orden, desde el 11 de septiembre de 1973 hasta 1990.

### **Democracia y Socialismo en la Unidad Popular**

La experiencia revolucionaria de la UP tuvo la capacidad y la audacia histórica y política de plantearse la transformación radical de la sociedad capitalista nacional utilizando, para ello, la institucionalidad democrática, sin plantearse la posibilidad de suspender el ejercicio de ésta, con el objetivo de construir

---

<sup>159</sup> Franck Gaudichaud (2016). *Chile 1970-1973. Mil días que estremecieron al mundo. Poder Popular, cordones industriales y socialismo durante el gobierno de Salvador Allende*. LOM Ediciones, Santiago de Chile.

un camino democrático al socialismo. Por esa razón, descarto de manera categórica la idea de que esta experiencia haya sido una experiencia reformista o populista como la han calificado algunos analistas nacionales e internacionales. Fue un genuino proceso revolucionario. O sea, una revolución social, un intento de transformar el modo de producción existente.

Para conseguir dicho fin, el gobierno popular implementó en los tres años de su gestión un conjunto de medidas y acciones que afectaron directamente la estructura y las fuentes del poder de las clases dominantes, tanto de la burguesía nacional como internacional. Las transformaciones estructurales que realizó la UP fueron acompañadas, como veremos, por un conjunto de medidas que favorecieron ampliamente a los sectores sociales populares que habían sido permanente postergados y olvidados por la mayoría de los gobiernos burgueses que le precedieron. El gobierno popular revolucionó, alteró y modificó radicalmente a la sociedad chilena y sus instituciones y, al mismo tiempo, potenció el carácter revolucionario de la democracia.

El triunfo político electoral en las elecciones presidenciales el 4 septiembre de 1970 del candidato de la izquierda Salvador Allende Gossens constituye uno de los acontecimientos más relevantes de la historia política chilena, latinoamericana y mundial del siglo XX. De acuerdo con el historiador británico, Eric Hobsbawm, “un caso único” que carecía “de precedentes” históricos concretos<sup>160</sup>. Sin embargo, esta experiencia política había sido anticipada por el principal teórico de la revolución social, Carlos Marx allá por 1872: la probabilidad teórica que era posible transitar pacíficamente al socialismo, utilizando o empleando los mecanismos e instrumentos que instalaron los regímenes políticos democráticos modernos.

Esto último suponía que la democracia en cuanto régimen tenía un conjunto de requisitos mínimos tales como: la existencia de elecciones libres, imparciales, transparentes y frecuentes; sufragio universal; libertad de reunión y de asociación; libertad de expresión y de opinión; información plural y alternativa y derecho ciudadano a competir sin ninguna restricción por cargos públicos; un sistema político de partidos en competencia y sometimiento de

<sup>160</sup> Hobsbawm, Eric (2008). *¡Viva la Revolución!* Editorial Crítica, Buenos Aires, pp. 390-421.

las Fuerzas Armadas al poder civil y político. Todos estos requisitos o condiciones procedimentales e institucionales necesarias que configuran un régimen político democrático se habían logrado en Chile, tan solo tres años antes de la elección de Salvador Allende.<sup>161</sup>

En efecto, la democracia plena ha tenido en Chile solo una vigencia de seis años, entre 1967 y 1973. Antes de ese periodo el régimen democrático tenía una serie de defectos que limitaban su existencia. Entre otros, por ejemplo, la exclusión y manipulación del sufragio popular; la prohibición de la participación política de las mujeres; la exclusión de los campesinos de los procesos de toma de decisión política y de la organización sindical; exclusión, censura política, persecución y reclusión política durante 10 años, etcétera. La lista de las imperfecciones de la democracia chilena, entre 1932 y 1967, es bastante larga y son muchas para que se siga sosteniendo que Chile contaba con una tradición democrática de larga duración, una democracia estable y pacífica previa a la ruptura democrática de 1973. Ese tipo de democracia no existió en Chile, es parte de la mitología histórica y política nacional.

Cabe señalar que la izquierda chilena denunció, a lo largo del siglo XX, de manera permanente las limitaciones y los vicios de esa mala democracia. Por ello, uno de sus objetivos políticos era reemplazarla o ampliarla sustantivamente. Más que un régimen democrático estable durante el siglo XX, en Chile se verificó un largo proceso de democratización política con avances, quiebres y retrocesos. Es, justamente, ese conflictivo proceso político lo que permitió la instalación de la democracia plena entre 1967 y 1973. Con posterioridad a la elección presidencial de 1970, durante el gobierno popular, la democracia política se amplió significativamente, pues el proceso de democratización popular se extendió hacia el ámbito económico, social y cultural.

Ahora bien, la democratización de la mala democracia fue posible por la existencia y la activa participación de un conjunto de hombres y mujeres que lucharon de manera constante por establecer e imponer algunos de los requisitos necesarios para nombrar o calificar al régimen político como democracia. Y, sobre todo, fue necesaria la existencia de un ancho, diverso y plural movimiento

---

<sup>161</sup> Cfr. Gómez Leyton, Juan Carlos (2004). *La frontera de la Democracia: el derecho de propiedad en Chile, 1925-1973*. LOM Ediciones, Santiago de Chile, pp.15-25.

social y político ciudadano por la democracia. Fueron estos factores los que permitieron que hacia el final de la década de 1960 el régimen político lograra superar los principales obstáculos que los sectores antidemocráticos levantaron permanentemente con el objeto de impedir la instalación de un régimen democrático pleno.

Salvador Allende Gossens era uno de los principales líderes políticos y sociales de la izquierda socialista y marxista nacional, que durante 43 años (1930-1973) -como lo han demostrado la mayoría de los historiadores y analistas tanto nacionales como extranjeros, que han estudiado su trayectoria política- luchó por instalar la democracia en Chile. Allende, desde el inicio de su carrera política, situó a las formas y mecanismos democráticos como principios fundamentales y primordiales de su praxis política y revolucionaria.

Por esa razón, defendió categóricamente las instituciones democráticas, especialmente aquellas que permitían acceder al gobierno por medios institucionales y por la expresión directa de la voluntad ciudadana popular. Teniendo claros esos principios, construyó y elaboró una específica estrategia política destinada a obtener la presidencia y el gobierno al interior de un Estado capitalista: la vía política institucional.

Esta vía, que se definía esencialmente como democrática, estaba destinada a ganar electoralmente la presidencia y acceder al gobierno en representación de las fuerzas sociales populares y de izquierda. Desde su formulación, a comienzos de los años 50 del siglo XX, buscó potenciar el carácter revolucionario de la democracia. Ella constituye el principal aporte práctico, teórico e histórico concreto legado por Salvador Allende a la izquierda no solo nacional sino latinoamericana y mundial.

Salvador Allende, liderando a la izquierda chilena en el FRAP (Frente de Acción Popular), primero se presentó como candidato presidencial en 1958 y 1964. Luego en 1970, liderando a la UP. Sin embargo, su afán presidencial se había iniciado en 1952 cuando lideró el Frente del Pueblo, coalición política que construyó como protesta política en contra de la decisión del Partido Socialista Popular, su partido, de apoyar al exdictador Carlos Ibáñez del Campo. Su consecuencia política democrática impedía por principios y valores éticos apoyar a un exdictador.

Ahora, su afán de ganar una elección presidencial y convertirse en presidente de la República no tenía una ambición personal, tampoco tenía el objeto de administrar políticamente el Estado y la sociedad capitalista, sino que su objetivo político fundamental y trascendental era revolucionar y transformar la sociedad para iniciar el camino hacia el socialismo. Durante 21 años, de 1952 a 1973, Allende luchó y defendió ese proyecto político-histórico. Murió el 11 de septiembre de 1973, defendiendo no solo el gobierno popular que dirigía sino, esencialmente, a la democracia.

Si bien tomó las armas en ese momento definitivo fue para defender la democracia de aquellos que a través de la violencia política, buscaban destruirla. Régimen político que él se había comprometido a respetar y respaldar por voluntad popular. Además, era el régimen que había permitido poner en marcha la experiencia socialista, revolucionaria, popular allendista y de la Unidad Popular.

La experiencia allendista de la Unidad Popular (1970-1973) fue considerada un proyecto político extremadamente peligroso para la dominación y hegemonía capitalista, pues, como he dicho, le devolvía a la democracia, bajo su forma liberal representativa, la potencia revolucionaria con la cual ésta, había irrumpido en la política moderna durante el siglo XVIII, especialmente con la revolución francesa de 1789. Además, la experiencia popular allendista no solo potenciaba ese carácter, sino que también sumaba la potencia revolucionaria del proyecto socialista, triunfante en la revolución bolchevique de 1917. O sea, la revolución chilena, conducida por Salvador Allende y la Unidad Popular, a diferencia de las revoluciones burguesas (XVIII y XIX) no tenía como objetivo hacer viable la dominación capitalista derribando las formas de gobierno obsoletas como la monarquía, sino que buscaba cambiar y destruir a la sociedad capitalista. Construyendo, en su reemplazo, la sociedad socialista democrática. Para esos fines, había que subvertir, modificar, transformar, o sea, revolucionar la democracia. Y eso fue lo que hizo el gobierno popular.

El triunfo popular en septiembre de 1970 encendió todas las alarmas y puso en alerta al capital tanto nacional como

internacional. Éste se agitó nerviosamente en sus centros de poder. Richard Nixon, presidente estadounidense, históricamente ordenó, al entonces director de la Central de Inteligencia Americana (CIA), Richard Helms “hacer un esfuerzo a fondo para evitar que Salvador Allende tomara posesión” de su cargo. Y autorizó 10 millones de dólares para que el “marxista chileno no se sienta en la silla presidencial”. De manera que, desde el mismo día del triunfo popular, el imperialismo yanqui coludido con la derecha chilena puso en marcha una estrategia política destinada a enfrentar el triunfo popular con todos los recursos humanos, logísticos y financieros posibles.

El miedo imperial lo expresaba Henry Kissinger, el canciller del gobierno de Nixon, a pocos días del triunfo allendista, en cuatro puntos:

1.- “si Allende era ratificado por el Congreso surgiría en Chile un régimen comunista y que Argentina, Bolivia y Perú podrían seguir este ejemplo”;

2.- “la toma del poder por parte de Allende...nos planteará graves problemas a nosotros mismos (USA) y a nuestras fuerzas en América Latina, y, desde luego, al conjunto del hemisferio occidental”;

3.- “la evolución política de Chile es muy grave para los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos de Norteamérica por razón de sus efectos en Francia e Italia” y

4.- “El gobierno de Allende puede estar en el origen de los problemas en el funcionamiento del Comité de Defensa Interamericano y en el de la OEA”.

La preocupación del Canciller era comprensible. El fracaso de la apuesta reformista que había representado el gobierno demócratacristiano de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), que constituía la solución política al avance de los movimientos populares y revolucionarios en América Latina, dejaba abierta la solución militar, es decir, el uso de la violencia armada.

Desde el principio, el gobierno popular estuvo bajo la amenaza del imperio. La estrategia imperial que tuvo como objetivo inicial obstaculizar o impedir el ascenso de Salvador

Allende y de la Unidad Popular al gobierno, fracasó. Debió, entonces, desplegar, desarrollar e implementar un conjunto de acciones destinadas a derrocar al gobierno popular. Esta estrategia nunca descartó la violencia política terrorista. Todo lo contrario. Ella fue el principal instrumento utilizado para desestabilizar al gobierno popular. La invocación a la violencia política no era una apelación retórica como ocurría en ciertos sectores de la izquierda chilena de la época. La derecha la puso en práctica de manera concreta. No tenía problema para ello, pues tenía toda una experiencia histórica acumulada en su utilización. La había usado en reiteradas veces en el pasado en contra del pueblo.

El asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, General René Schneider, el 25 de octubre de 1970, por parte de un torpe comando armado de derecha, constituye el hito histórico-político que inaugura la violencia política reaccionaria en el país. La cual tendrá una vigencia de 20 años (1970-1990). Como hemos dicho, la violencia terrorista será la principal herramienta utilizada por la dictadura cívico-militar, instalada por las clases dominantes, en contra del pueblo chileno.

El uso de la violencia política por parte del capital, o sea, por la derecha nacional, con la finalidad de frenar la democratización de la sociedad chilena, no era una novedad en la historia del país. En esta oportunidad, el uso de la violencia tenía un fin último de más largo alcance: impedir el éxito de la vía democrática al socialismo por todos los medios posibles. Sin embargo, los logros y éxitos del gobierno de Salvador Allende no pudieron ser frenados durante los mil días de gobierno popular.

El avance social, económico, político y cultural experimentado por los sectores populares, producto de las acciones del gobierno de la Unidad Popular, afectó directamente los intereses internos y externos de los grupos dominantes. Durante tres años, esas acciones agudizaron la conflictividad social y política, en otras palabras, la lucha de clases se hizo manifiesta en toda la formación social chilena. Todo estaba en disputa.

Una vez instalado en el gobierno, el 4 de noviembre de 1970, Allende y la Unidad Popular iniciaron un ingente proceso de democratización política, social, económica y cultural dirigido a mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores, las y

los campesinos, las y los pobladores, de las y los estudiantes, y los pueblos originarios, de los hombres, mujeres, niños y niñas populares. Por primera vez, en 160 años de vida independiente, el gobierno del Estado de Chile gobernaba para el pueblo y con el pueblo.

El gobierno popular realizó una serie de transformaciones revolucionarias de carácter estructural que fueron acompañadas de un conjunto de medidas aparentemente menos importantes, pero profundamente significativas para la vida social de los sectores populares. Por ejemplo, el plan de medio litro de leche diario para todos los niños, niñas y madres sin distinción social o de clase. Las y los niños fueron prioridad uno del gobierno de la Unidad Popular. Esta medida significó, entre otras cosas, la disminución de la mortalidad infantil. Y, sobre todo, la felicidad de los niños y niñas populares.

La organización popular impulsó nuevas formas democráticas de participación política y fomentó el desarrollo del poder popular. Los trabajadores iniciaron un conjunto de experiencias de autogestión de sus centros productivos, en los diversos cordones industriales, ya sea de la ciudad capital como de otras ciudades del país. Los pobladores se organizaron para hacer frente a la ofensiva patronal y de los sectores pequeño burgueses mercantiles, especialmente de los comerciantes minoristas. Se crearon las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP) para implantar un sistema de distribución de alimentos y artículos esenciales “democrático y equitativo”.

Si bien la educación fue uno de los ámbitos en donde la lucha clases y la conflictividad social y cultural entre los dos proyectos de sociedad en pugna, el capitalista y el socialista, se hizo sentir con inusitada virulencia y odiosidad de parte de los defensores del orden capitalista, recibió una atención preferencial de parte del gobierno popular. Las escuelas y liceos se transformaron en espacios de libertad, participación y compromiso social y político. Las universidades se abrieron para los sectores populares. El derecho a la educación fue una realidad para todas y todos. La inclusión social abrió los colegios y liceos, reservados solo para los sectores medios y altos, a las y los jóvenes populares.



La cultura dejó sus estrechos marcos elitistas durante los tres años del gobierno popular. El teatro, el ballet y la música "cultas", especialmente aquella que estaba encerrada en el Teatro Municipal, espacio oligárquico por excelencia, recorrió con sus acordes los espacios populares, las industrias y poblaciones. Roberto Matta, pintó su mural: El Primer Gol del Pueblo de Chile, en una pared popular de la población San Gregorio, de la comuna de La Granja, en la zona sur de Santiago. Pablo Neruda obtenía el premio Nobel de Literatura en 1971 y la editorial Quimantú distribuyó millones de ejemplares del libro conmemorativo en honor al vate. La poesía nerudiana llegó a millones de niñas, niños y jóvenes de Chile.

De manera que bajo el gobierno de la Unidad Popular surgieron nuevas formas de organización popular tales como los cordones industriales, comandos comunales, regionales, que constituían el germen de un nuevo orden social impulsado por el poder social popular y por los trabajadores para reemplazar el Estado burgués y acelerar el tránsito del capitalismo al socialismo.

Durante los mil días que estremecieron a la sociedad chilena la frontera que cercaba a la democracia capitalista fue presionada y tensionada al máximo. En efecto, la acción más revolucionaria que emprendió la Unidad Popular fue, justamente, poner fin a la frontera de la democracia capitalista, que no es otra, que el derecho de propiedad privada de los medios de producción.<sup>162</sup> Las realizaciones estructurales del gobierno popular tienen relación directa con la principal fuente poder social del capital y, sobre la cual, se levanta la sociedad capitalista. Veamos de manera específica este punto.

### **La democratización de la propiedad privada de los medios de producción**

La historia del siglo XX en la formación social chilena está marcada por el conflicto político, social y económico entre el capital y el trabajo. Y, es al interior de este conflicto donde hay que situar no solo la crisis del capitalismo nacional durante la década de los sesenta y setenta, sino también al gobierno de la Unidad Popular. Lamentablemente, ese conflicto tuvo una resolución a

---

<sup>162</sup> Gómez Leyton J. C. (2004). *La Frontera de la Democracia. El derecho de propiedad en Chile 1925-1973*. LOM Ediciones, Santiago de Chile.

favor del capital, a través del Golpe de Estado de septiembre de 1973, hace cuatro décadas y media. La instalación de la dictadura cívico-militar de carácter terrorista, la reestructuración neoliberal del capitalismo nacional y la emergencia de la sociedad neoliberal son parte constitutiva de esa resolución. Pero ello no significa, de ninguna manera, la superación ni su desaparición; todo lo contrario, durante estos 45 años, el poder del capital ha impuesto su total y más completa hegemonía y dominación sobre el trabajo. La conflictividad entre el capital y el trabajo, actualmente, se manifiesta de manera distinta de la forma como se exteriorizó durante el periodo del capitalismo industrial. Pero, insisto sobre este punto, no ha dejado de existir ni ha desaparecido. La lucha clases sigue siendo el motor de la historia, tal como lo fue durante el gobierno de la Unidad Popular.

El triunfo de la Unidad Popular en 1970 es parte de la lucha política de clases, o sea, la manifestación política del conflicto entre el capital y el trabajo. Ese triunfo dice relación directa con la capacidad que tuvo el trabajo de desarrollar un efectivo contrapoder contrahegemónico. Se trata del poder de las y los trabajadores y de los sectores populares que, durante el siglo XX, se conformó como un poder subversivo y transformador de las fuentes directas del poder social del capital, o sea, de las relaciones sociales de producción.

Este contrapoder social, político e histórico se había venido fortaleciendo tanto social como políticamente desde las últimas décadas del siglo XIX. Hacia 1970, tenía casi un siglo de experiencia política acumulada. Este contrapoder de los trabajadores, en particular, y de los sectores populares, en general, se identificó histórica y políticamente con la lucha por la democracia social, política y económica, o sea, en otras palabras, con el socialismo desde los inicios del siglo XX.

Por eso, democracia y socialismo en el proyecto histórico popular eran sinónimos y se potenciaban recíprocamente. Esa era la fuerza del proyecto democrático y socialista de la Unidad Popular y del Gobierno de Salvador Allende. Este tenía como núcleo central de sus propósitos políticos e históricos poner fin a la explotación del "hombre por el hombre" y la abolición de la propiedad privada de los medios de producción.

El proyecto político, social e histórico de los trabajadores y de los sectores populares se caracterizó desde siempre por su vocación anticapitalista. Y lo anticapitalista se expresaba de forma muy concreta: poner fin a la fuente principal de la explotación y de la desigualdad social y económica: la propiedad privada de los medios de producción. La mayoría de los programas sociales, económicos y políticos de las primeras organizaciones proletarias y populares nacionales, a inicios del siglo XX, se plantearon como objetivo primordial y central de su lucha política la socialización de la propiedad y la creación de la propiedad social. Por esa razón, la socialización y/o la estatización de la propiedad privada, especialmente de los medios de producción ya sea industriales, mineros y agrarios, siempre estuvo presente en el imaginario político de los trabajadores y los sectores populares. La base material del socialismo lo constituía la propiedad social de los medios de producción.

La vocación revolucionaria y anticapitalista del movimiento social popular la expresa de manera ejemplar el principal líder de los trabajadores chilenos Luis Emilio Recabarren quien, en su proyecto de constitución política de 1921, en el artículo 7° establecía que:

*“En la República Federal Socialista de Chile, sólo hay “propiedad social” administrada por la “Asamblea Industrial”, por la “Municipalidad” y por la “Asamblea Nacional”; y en artículo 9 señalaba que:*

*“Es propiedad social la tierra y sus productos, la manufactura, la habitación, medios de producción, elementos de servicios públicos, transportes y cuanto no sea de inmediata utilidad o uso individual”.*

Cincuenta años más tarde, en 1970, el Programa de la Unidad Popular establecía, como objetivo central del gobierno popular, la constitución del Área Social de la Producción. El programa justificaba la creación de esta área en los siguientes términos:

*“Las fuerzas populares únicas buscan como objetivo central de su política reemplazar la actual estructura económica, terminando con el poder del capital monopolista nacional*

*y extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo”.*

Para tal efecto,

*“El proceso de transformación de nuestra economía se inicia con la política destinada a constituir un área estatal dominante, formada por empresas que actualmente posee el Estado más las empresas que se expropien. Como primera medida se nacionalizarán aquellas riquezas básicas, como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras que están en el poder de capitalistas extranjeros y de los monopolios internos”.*

Entre el proyecto socialista de Recabarren y el programa de gobierno de la Unidad Popular hay una continuidad ideológica y política que permite sostener que la izquierda chilena y el movimiento popular tenían una profunda convicción de que la única forma de superar la desigualdad y la explotación era poniendo fin al capitalismo.

La principal diferencia entre lo que postulaba Recabarren y lo postulado por la Unidad Popular estaba en quién debía administrar la propiedad social. Para el primero, era el Municipio, es decir, el poder local, mientras que, para los segundos, el Estado, o sea, el poder central. No obstante, esa diferencia muy relevante, la abolición de la propiedad privada era para la izquierda una condición necesaria y fundamental en la construcción de la sociedad socialista.

Durante el gobierno popular la lucha social y política que marca el periodo está signada por la democratización/ socialización/ estatización popular de la propiedad privada de los medios de producción. El impulso y desarrollo del poder popular, que se expresó en la ocupación y dirección por los trabajadores de cientos de centros productivos, evidenciaba la pérdida del poder social que experimentaban los sectores capitalistas.

La acción social y política de los trabajadores y sectores populares -pobladores, campesinos, indígenas- de expropiar la base material del poder del capital implicaba la creación y desarrollo de su propio poder. La base material del poder popular estaba, justamente, en la conformación de la propiedad social. Este

proceso fue dual. Tanto por arriba, es decir, a través de la acción gubernamental como por abajo a través de la acción directa de los trabajadores. Los íconos históricos y políticos de este proceso fueron:

- (a) la Reforma Agraria, que permitió la expropiación de los grandes latifundios con el objetivo de distribuirlos entre los campesinos sin la tierra;
- (b) la Nacionalización de la gran minería del Cobre, en junio de 1971, que recuperó para uso y disfrute de la sociedad chilena los recursos naturales mineros;
- (c) la estatización de la banca nacional y extranjera, anunciada el 30 de diciembre de 1970;
- (d) la expropiación de la emblemática industria textil: Yarur Santiago, el 28 de abril de 1971; iniciándose con ella el traspaso de la industria manufacturera nacional al poder de los trabajadores;
- (e) la estatización de las empresas de telecomunicaciones transnacionales, y
- (f) la toma directa de tierras, industrias y empresas por parte de los trabajadores para incorporarlas al Área Social de la Producción.

La democratización de la propiedad no fue solo un acto gubernamental, también fue la expresión del poder los sectores dominados: trabajadores, pobladores, mineros, campesinos, indígenas; de hombres y mujeres pobres del campo y de la ciudad.

Estos sectores sociales no tienen derecho ni acceso a la propiedad privada de los medios de producción en las sociedades capitalistas. Pero tampoco el derecho a disponer de un espacio donde poder habitar, por ejemplo, en la ciudad. Por esa razón, desde fines de los años 50 del siglo pasado, se había iniciado la ocupación de los espacios urbanos tanto fiscales como privados para "encontrar un sitio" donde habitar y vivir. A través de las "tomas de terreno", el movimiento social popular de trabajadores sin vivienda, comenzaron a ocupar terrenos para construir sus casas. Primero fueron las "poblaciones callampas" y luego, los campamentos y las poblaciones populares.

La “toma”, acto de apropiación colectiva de la propiedad privada, se transformó entre 1970 y 1973 en la principal forma de acceso de los sectores populares y trabajadores a la propiedad. Este proceso fue otra modalidad de democratización de la propiedad por el poder popular, que conducía a la transformación radical de la sociedad capitalista.

Dado que la democratización de la propiedad consistía en despojar, arrebatar y expropiar el poder social, económico y político que la propiedad de los medios de producción confería a la clase capitalista nacional y extranjera, las clases dominantes tomaron conciencia de que el centro neurálgico del conflicto se encontraba situado fuera del campo institucional de la democracia. Puesto que, en dicho proceso, no solo se democratizaba a la propiedad sino también al Estado y hacía extensiva la democracia a todos y todas. La propiedad privada de los medios de producción dejaba de ser un patrimonio individual o familiar de un pequeño y selecto sector de la sociedad y se volvía una propiedad social colectiva-pública-estatal-común. Los “no propietarios”, por ejemplo, los campesinos que accedieron a la tierra de manera colectiva gracias a la reforma agraria, durante el gobierno de la Unidad Popular, adquirieron no solo un poder social, económico y político, sino, sobre todo, dignidad.

La expansión democrática social asumió una clara orientación subversiva, pues desafió y discutió frontalmente la dominación, la hegemonía y la violencia del capitalismo -desde la explotación de la fuerza de trabajo hasta el uso represivo del Estado-. La democratización del Estado implicó la expulsión relativa de las clases propietarias de él y su ocupación parcial por parte de los sectores sociales no propietarios. Esta situación profundizó la crisis política de la dominación capitalista, abierta por la acción del gobierno de la Unidad Popular.

Las clases propietarias nacionales y extranjeras comprendieron que debían defender la propiedad de los medios de producción a cualquier precio. Para tal fin, estos grupos propietarios nacionales buscaron el apoyo de los sectores medios, a través de una alianza política y social en defensa del capitalismo.

Agrupados y organizados en el Frente Nacional del Área Privada (FNAP), que reunía a los dueños del capital y de los

grandes, medianos y pequeños empresarios y propietarios de la industria y el comercio, lograron el apoyo de las organizaciones gremiales de profesionales autónomos y técnicos, tales como los Colegios Profesionales, orientándolos en una intensa campaña contra el gobierno popular y el socialismo. El FNAP logró conseguir el apoyo y solidaridad de los sectores medios procapitalistas. Potenciando su oposición política y social al socialismo con la progresiva alineación del Partido Nacional con la Democracia Cristiana que concluyó en 1973, al conformarse la Confederación Democrática (CODE). La unidad de las fuerzas antisocialistas acentuó, intensificó e incrementó la lucha clases en el país.

Conformándose dos grandes bloques políticos sociales, por un lado, los defensores de la vía chilena al socialismo y el gobierno popular, la UP; y, por otro, los defensores del capitalismo, la CODE. Ambos conglomerados, a pesar de la aguda conflictividad, buscaron resolver el conflicto por la vía institucional. Concurrieron con dicha intención a las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. Los primeros con el objetivo de lograr amplios apoyos electorales para el gobierno y los segundos, buscaron alcanzar la mayoría parlamentaria requerida y necesaria para destituir constitucionalmente, o sea, políticamente, al presidente Allende y así poner fin al gobierno popular. El resultado fue inesperado para la oposición anticapitalista. El 44,23% obtenido por la UP marcaba un significativo aumento del apoyo ciudadano popular a la gestión del gobierno de Salvador Allende. Mientras que el 55,49% obtenido por la oposición antisocialista implicó dos cosas: a) los sectores antiUP experimentaron en tres años una reducción porcentual de 8 puntos. En 1970, la candidatura de R. Tomic, demócrata cristiano, obtuvo un 28,08% de las preferencias ciudadanas y el candidato de la derecha Jorge Alessandri, el 35,29%. Los sectores antisocialistas en 1970 sumaban el 63,37% y tres años después tan solo el 55,49%. En términos generales, a pesar de que estos sectores eran mayoría en la sociedad chilena, el proceso democrático del presidente Allende amplió su apoyo electoral pasando de un 36,63% a un 44,23%. Cabe señalar que Allende fue el primer presidente que vio crecer el apoyo electoral inicial de todos los presidentes de la República, que lo precedieron en el periodo de 1932 a 1973. Esa era la fuerza electoral de la vía democrática al socialismo.

La fortaleza institucional adquirida por la democracia política bajo el gobierno allendista, a pesar de su proceso de trasmutación hacia una democracia social y económica, robustecía y potenciaba el proyecto popular al aumentar su fuerza electoral. Sin embargo, al mismo tiempo, endurecía, enfurecía y desesperaba a la oposición antisocialista tanto nacional como imperialista. Fundamentalmente, porque el análisis de la proyección futura de los resultados electorales de marzo de 1973 apuntaba a señalar que la UP, dado el crecimiento electoral experimentado entre 1970 y 1973, podía volver a ganar la elección presidencial de 1976. De manera que las parlamentarias notificaron a las fuerzas antisocialistas dos cosas: por un lado, la vigencia e importancia de las instituciones democráticas para el proceso político impulsado por la UP y, por otro, la imposibilidad de frenarlo o derrotarlo a través de los mecanismos democráticos.

El gobierno de la UP desde su inicio fue, técnicamente, lo que se conoce en el lenguaje politológico, un "gobierno dividido". Nunca tuvo mayoría en el parlamento. Por esa razón, debió buscar instrumentos disponibles en la institucionalidad para hacer avanzar su programa de gobierno y llevar a cabo las realizaciones estructurales propuestas. Uno de esos instrumentos fueron los "resquicios legales".

Estos eran disposiciones legales olvidadas dictadas por gobiernos precedentes con distintos fines. Uno de esos instrumentos era el Decreto-Ley 520 dictado durante el gobierno de la República Socialista de 1932. Este texto legal y constitucional había sido utilizado por diferentes gobiernos posteriores a esa fecha, incluso de la derecha empresarial de Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964).

Del DL-520 permanecían vigentes cinco artículos referidos a la propiedad privada de los medios de producción, que declaraban la utilidad pública de las empresas agrícolas, industriales y de comercio y de los establecimientos dedicados a la producción y distribución de artículos de primera necesidad. Por lo tanto, todos eran susceptibles de ser expropiados.

Armado con esta legalidad, el gobierno popular inició la emblemática construcción del Área Social de Producción el 1 de diciembre de 1970 con la expropiación de la no menos



emblemática industria textil Bellavista-Tomé. A partir de esa fecha, todas las expropiaciones de empresas e industrias, ya sea impulsadas por el ejecutivo como por la acción directa de los trabajadores, estuvieron amparadas legalmente en el DL-520. Tal como lo expresó el lienzo que colocaron las obreras y los obreros en la industria textil Yarur-Sumar, requisada en abril de 1971, desde ese momento los espacios productivos de Chile constituían **“territorios libres de explotación”**.

Ese había sido el compromiso del “compañero presidente” a las y los trabajadores. Allende en su visita a la industria Yarur-Sumar, había dicho, dirigiéndose y respondiendo el discurso de recibimiento que había pronunciado el dueño de la empresa Amador Yarur, y ante medio millar de trabajadores: **“...si soy elegido, Amador... aunque seamos amigos, te quitaré esta industria. Pertenecerá a los trabajadores y al pueblo de Chile”**. Con el profundo miedo a la reacción del patrón, solo cuatro obreros se atrevieron a aplaudir las palabras de Salvador Allende. Sus dichos no eran palabras lanzadas al aire o una buena promesa de campaña electoral. Era un compromiso ético y político con los trabajadores de todo el país y con el pueblo de Chile. Los trabajadores exigieron y demandaron tempranamente al presidente Allende su compromiso. Y, el día 28 de abril de 1971, el gobierno popular requisó la industria Yarur. Cumpliendo con la promesa presidencial. Ese día los trabajadores lo recordarán hasta el día de hoy, a pesar de que la industria ya no existe, como **“el día de la liberación”**.

La forma como se logró la expropiación de la industria Yarur-Sumar no solo inauguró la transición efectiva del capitalismo al socialismo, sino también otra forma, otra praxis política y social, la de las y los trabajadores, diferente y contradictoria con la vía institucional propiciada por el presidente Allende, la acción revolucionaria directa y el socialismo participativo, un socialismo desde abajo. Era otra forma de buscar el mismo fin y al mismo tiempo superar y sobrepasar los obstáculos que le imponía al proceso la institucionalidad existente.

Desde el primer momento la lucha por la democratización del derecho de propiedad privada y el fin de la explotación se libró en dos niveles, como fue la norma a lo largo de todo el gobierno popular. Por un lado, en la dimensión jurídico-política, o

sea, al interior del régimen político que confrontaba al Ejecutivo y al Parlamento. Y, por otro lado, con la acción directa de las y los trabajadores. Los cuales a través de la "toma" y la ocupación de las industrias, exigían al Ejecutivo su incorporación al Área Social de la Producción. Mientras la discusión jurídico-política se estancaba por arriba, por abajo, cientos de empresas e industrias, pequeñas, medianas y grandes, pasaron a estar bajo el control obrero. Muchas de ellas fueron ocupadas por el poder popular y obrero en reacción al intento de golpe de estado del 29 de junio de 1973, impulsado por el Partido Nacional, la agrupación nacionalista Patria y Libertad y un sector del Ejército.

La apelación coyuntural a las Fuerzas Armadas, por parte de la derecha extrema, fue la reacción desesperada a la promulgación de la normativa que institucionalizaba y constitucionalizaba el Área Social de la Producción por parte del gobierno popular.

Las Fuerzas Armadas van a intervenir, finalmente, no solo para dar "solución" al conflicto por la propiedad privada de los medios de producción, sino para defender al sistema capitalista nacional, en general. Instalando en el poder la dictadura cívico militar del General Augusto Pinochet (1973-1990). La dictadura del capital puso en marcha un violento proceso de restauración de su dominación y hegemonía. Para tal efecto, destruyó íntegramente el contrapoder de los trabajadores y de los sectores populares. Poniendo en marcha una maquinaria de guerra y destrucción con el objeto de masacrar al pueblo.

Junto con el genocidio popular, la dictadura militar destruyó la democracia. Reestructuró completamente el modo de producción capitalista, restaurando el derecho de propiedad privada de los medios de producción y el poder social de las clases dominantes. Para tal efecto, devolvió las industrias, empresas y campos a sus "propietarios". Y estos echaron a las y los trabajadores, en palabras de Jorge González, líder de Los Prisioneros: *"les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron se escondieron. Merodean por nuestra ciudad"*

El asesinato no solo de Salvador Allende sino del pueblo de Chile, fue posible fundamentalmente porque la experiencia revolucionaria del gobierno de la Unidad Popular y del presidente Allende fue **una revolución democrática desarmada.**

Tal como señalamos en nuestra tesis doctoral hace ya 18 años, hoy ante las burdas declaraciones del abominable e innombrable exministro de Culturas (sic), de las declaraciones destempladas de la derecha y del canciller, tenía la obligación ética de escribir y construir una explicación que les haga justicia a todas y todos los ciudadanos populares asesinados, muertos, desaparecidos, torturados, humillados, vejados y violentados durante los 17 años de dictadura. Cuyo único delito fue haberse tomado en serio aquello de que la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo.

Debía y debo seguir escribiendo y difundiendo esta explicación que expone de manera sucinta, la masacre popular perpetrada por las Fuerzas Armadas y de Orden. Pues seguimos sosteniendo que no escribir una explicación que haga justicia a la lucha social de miles de compañeras y compañeros por una sociedad más justa e igualitaria, no puede ser política e intelectualmente aceptable. Sobre todo, se hace necesario develar y poner en conocimiento de todas y todos que la masacre perpetrada por las clases dominantes-propietarias, con el apoyo del gobierno estadounidense en alianza con los sectores medios, se hizo, fundamentalmente, aunque no solo por esa razón, en defensa del derecho de propiedad privada.

En razón de esa defensa, violaron sistemáticamente los derechos humanos, asesinando a miles de hombres, mujeres, niños y niñas. O sea, para proteger sus propiedades, mataron. Y estoy seguro de que lo volverían a hacer, pues el irrespeto por la vida humana de parte de los sectores propietarios, cuando se trata de defender sus intereses, ha sido una actitud históricamente fundada desde el siglo XVI.

## **Carlos Godoy Echegoyen: la lucha revolucionaria anticapitalista una sola e indivisible**

*In Memoriam de las y los socialistas  
"puros y sinceros"  
caídos en la lucha  
contra el capitalismo*

La memoria de aquellos que cayeron un día luchando contra la dictadura militar chilena, por una sociedad justa e igualitaria, sigue viva entre nosotros. El sábado 4 de mayo de 2019, estuvimos recordando la figura de un joven combatiente revolucionario Carlos Godoy Echegoyen, asesinado por Carabineros de Chile, luego de ser detenido, junto con otros compañeros, que participaban en una escuela de formación política revolucionaria en un balneario de Quintero, en febrero de 1985. Transformándose en el primer mártir de la naciente juventud socialista allendista. Han transcurrido 34 años de aquel luctuoso acontecimiento. Actualmente, la juventud socialista ya no es la misma en la que militó Carlos Godoy, y el Partido Socialista de Chile, tampoco lo es. Éste se ha transformado en una colectividad política conforme y obsecuente con el sistema capitalista neoliberal y ha depuesto todas las banderas de lucha instituidas en su fundación hace 86 años.

El entreguismo ignominioso del socialismo actual habría sido repudiado y condenado por Carlos Godoy, como lo han hecho cientos de socialistas a lo largo y ancho del país. También por los militantes allendistas desde la disolución del Partido Socialista Salvador Allende, a comienzos de los años noventa, hasta la actualidad. El PSSA al integrarse al Partido Socialista de Chile (PSCh), traicionó todo por lo que había luchado desde 1985-1986, y por lo cual Carlos Godoy entregó su vida. La traición y olvido del socialismo chileno actual son patéticos y vergonzosos no solo con la figura de Carlos Godoy sino de todas y todos los socialistas caídos desde el 11 de septiembre de 1973 hasta la actualidad.

La memoria socialista está plagada de olvidos. Ese olvido ha implicado un marcado y notorio silencio político e historiográfico sobre la historia reciente del Partido Socialista de Chile en particular, y del socialismo chileno, en general, especialmente de los periodos de la Unidad Popular (1970-1973); del periodo de la dictadura (1973-1990) y, por cierto, del actual, la democracia neoliberal (1990-2019).

Si bien, hay diversos y distintos estudios sobre el socialismo post 1973-1990, se observa en relación con las otras colectividades de la izquierda chilena, un desbalance muy evidente. Abundan las historias críticas y apologéticas del Partido Comunista de Chile, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR; del MAPU, etcétera. Sin embargo, la pobreza franciscana, si consideramos la importancia y rol del Partido Socialista de Chile (PSCh) en la formación y constitución de la Unidad Popular como de la participación centralísima que le cupo en el gobierno del presidente Salvador Allende (1970-1973), es sorprendente e inaudita. La ausencia de análisis historiográfico del rol político de los socialistas en los últimos 50 años requiere de un ensayo psicológico explicativo que interroge sobre el porqué de ese largo silencio.

Siendo el partido del Presidente Allende fue, sin lugar a duda, la colectividad política que sufrió las mayores tensiones políticas internas como externas durante el gobierno de la UP. Producto de la histórica tendencia de las y los socialistas a conformar internamente diferentes y contrapuestas corrientes ideológicas y posiciones políticas, la colectividad desarrolló distintos conflictos tanto horizontales como verticales de carácter político estratégico, ya sea, con el Ejecutivo (Presidente de la República), con su Secretariado General y el Comité Central, con sus militancias de bases obreras, campesinas, pobladoras y estudiantiles y, sobre todo, con sus aliados, principalmente con el Partido Comunista de Chile.

Las marcadas e históricas diferencias y rivalidades políticas e ideológicas entre socialistas y comunistas tensionaron y conflictuaron las relaciones internas del conglomerado gubernamental. Sus tesis políticas sobre el proceso político e histórico abierto con el triunfo popular se expresaron en dos

consignas fuertes: “avanzar sin transar” de los socialistas y “avanzar consolidando” de los comunistas, las cuales tradujeron, en aquella época, lo “revolucionario” y lo “reformista”, respectivamente. Y, al mismo tiempo, ordenaron al resto de los actores políticos del conglomerado gubernamental. Conformándose dos polos, el polo revolucionario y el reformista.

La competencia y rivalidad política permanente entre estos dos sectores, durante los tres años del gobierno popular, le restó potencia y cohesión ideológica y política a la “vía chilena al socialismo” planteada por el Presidente Salvador Allende, y quebró y agrietó la fuerza revolucionaria del proyecto allendista.

Trazó, a su vez, otra gran división política. El proceso de transición al socialismo tuvo dos sendas por donde transitar al interior del Estado capitalista en descomposición. Por un lado, la vía política institucional, propia de los espacios de la democracia representativa: el poder legislativo; y, por otro, la vía del poder popular, que se expresaba en la toma de fábricas, empresas, campos, o sea, en la expropiación directa de la propiedad capitalista, en otras palabras, la desestructuración del poder del capital.

Ambas vías se confrontaron en la historia concreta de los mil días de la Unidad Popular. Y los socialistas estuvieron presentes en todas esas conflictividades estratégicas. Lamentablemente, esas cuestiones permanecen hasta el día de hoy en la más plena y total oscuridad. La historiografía socialista, si es que existe, permanece silente o indiferente a su estudio.

Como consecuencia del derrocamiento del gobierno popular, el Partido Socialista de Chile sufrió una persecución implacable por parte de la dictadura. Sus dirigencias y militantes obreros, campesinos, pobladores y estudiantes fueron brutalmente asesinados, encarcelados, torturados y exiliados. Miles de ellos expulsados de sus centros de trabajos y de estudios. La ira y el odio de clase, de la burguesía nacional, golpeó con inusitada violencia a las y los socialistas. No obstante, ellos fueron los principales actores de la defensa del gobierno popular y de resistencia armada al golpe. Los primeros combates del 11 de septiembre de 1973 no solo en La Moneda, sino en diversos lugares del Gran Santiago como en otras ciudades del país, los protagonizaron militantes socialistas. A pesar de las diferencias

políticas y estratégicas con la vía propuesta por el Compañero Presidente, muchos entregaron su vida en defensa de esa propuesta que en su momento calificaron e impugnaron como "reformista". La lealtad y el compromiso revolucionario socialista era a toda prueba. Legado que entregaron a las generaciones posteriores del socialismo del cual, por cierto, era heredero Carlos Godoy Echegoyen como también Daniel Medel y tantos otros jóvenes revolucionarios de los años ochenta.

A la represión le siguió la diáspora, la fragmentación y la división interna del PSCh. La cohesión interna del partido estalló en 1979 cuando se produjo la más lacerante división. Los socialistas post 1979 se organizaron en diversas orgánicas partidistas. Se ha llegado a contabilizar cerca de 18 o 20 organizaciones socialistas entre 1979 y 1989, las cuales, a su vez, establecieron su punto de origen en distintos hitos fundacionales del socialismo nacional: unos, en la declaración de principios de 1933; otros, en la declaración de 1947, redactada por el rector de la U. de Chile, Eugenio González; y, algunos, en el veto político del XXII Congreso de Partido Socialista de 1967, más conocido como el Congreso de Chillán. Emergieron socialistas históricos, reformistas, anarco-socialistas, socialistas humanistas, socialdemócratas y revolucionarios.

Los socialistas allendistas se localizaron entre los sectores revolucionarios. Reconociendo en los principios políticos e ideológicos que fundamentaron el Voto Político del Congreso de 1967 sus fundamentos teóricos, políticos e ideológicos fundantes. Dicho voto político reforzó el carácter revolucionario y marxista-leninista del Partido. Estableciendo, irreductiblemente, el carácter armado de la lucha revolucionaria destinada a superar y destruir la dominación capitalista como única posibilidad real y efectiva para avanzar hacia el socialismo.

El Voto Político de 1967 fue el producto político de una corta e intensa radicalización y rebeldía política de las y los socialistas de mediados de los años sesenta. Los cuales imbuidos en los principios, preceptos y enseñanzas de la triunfante Revolución cubana de 1959 y, de la gesta revolucionaria del Comandante Ernesto "Che" Guevara, buscaron desde ese año hacer realidad la revolución socialista en Chile.

El camino seguido por el PSCh desde su unificación en 1957 y la construcción de la "vía política institucional" al socialismo formulada por Salvador Allende en la elección presidencial de 1952, dinamizada en la presidencial de 1958, y ampliada y profundizada pero derrotada en las elecciones presidenciales de 1964, era, en opinión de los rebeldes socialistas, una ruta fracasada y sin mayores destinos. Por esa razón, había que construir y organizar un auténtico y verdadero partido marxista-leninista y revolucionario, en donde la opción, por la insurrección armada, o sea, el uso de la violencia política revolucionaria no estuviera descartada ni subordinada a la vía política institucional, sino todo lo contrario. El partido debía estar preparado para enfrentar y responder a las exigencias de la revolución política y social anticapitalista.

La historia demostró, en septiembre de 1973, que los diagnósticos políticos realizados por los rebeldes socialistas en 1967 (Chillán) como también en 1971 (XXIII Congreso de La Serena), no estuvieron errados. La lucha por el poder del Estado, en la sociedad chilena, se resolvió violentamente. Pero no por la violencia política revolucionaria sino por la violencia reaccionaria.

La violencia política revolucionaria no tuvo la potencia ni la capacidad ni la fuerza para hacer posible la revolución social en Chile. Tampoco alcanzó para defender la democracia profundizada y ampliada que había logrado establecer el gobierno de la Unidad Popular. Todo fue arrasado y devastado por la acción de la violencia reaccionaria de las fuerzas del capital tanto internacional como nacional. Las Fuerzas Armadas ocuparon el país e iniciaron el genocidio popular. Durante 17 años controlaron e impusieron a sangre y fuego la voluntad del capital.

Las y los socialistas desde los primeros instantes de la acción reaccionaria se opusieron y resistieron. Sin embargo, sin mucha preparación, con escasas armas y sin contingentes populares amplios y masivos, esa resistencia heroica, por cierto, estaba destinada al fracaso y, rápidamente, la derrota política-militar se hizo presente. Hacia 1979 el PSCh estaba completamente diezmado.

Carlos Godoy Echegoyen había salido al exilio con su familia. Su nueva patria fue la Cuba revolucionaria. Allí el joven



socialista, hijo de Sergio Godoy, militante socialista de las décadas de los sesenta y setenta, o sea, de los rebeldes de esos años, no solo se formó ideológica y políticamente, sino que también militarmente, alcanzando el grado de Teniente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Al poco tiempo de graduarse, regresó a Chile y se puso al servicio de la lucha socialista contra la dictadura militar.

Es interesante observar y tener presente que, en la corta historia del joven combatiente, 23 años, al momento de su vil y cobarde asesinato, Carlos Godoy Echegoyen sintetizaba la historia política de toda una generación de socialistas. La generación de los rebeldes de los años sesenta y setenta.

Si bien, Carlos Godoy tenía cinco años para el Congreso de 1967, nueve años en 1971, Congreso de La Serena, y 11 años para el Golpe de Estado de 1973, al exiliarse en Cuba se formó valórica, ideológica y políticamente en los principios y en la estrategia política-militar que había permitido hacer triunfar a la Revolución cubana -gesta insurreccional profundamente admirada por la generación de sus padres-; y, sobre todo, adquirió una concepción política fundamental que, de una u otra manera, buscaron hacer realidad los sectores socialistas que organizaron en 1985 el Partido Socialista Salvador Allende (PSSA): la lucha contra la dictadura y la lucha contra el capitalismo era una sola, o sea, una lucha política indivisible.

Tanto la Revolución cubana de 1959 como la Revolución sandinista en Nicaragua en 1979, el derrocamiento de los dictadores Batista y Somoza, respectivamente, abrieron la ruta para la revolución social anticapitalista. Dicho modelo estratégico también era posible de ser impulsado en la sociedad chilena de los años ochenta. A principios de los años ochenta, la activa movilización social popular en contra de la dictadura pinochetista había abierto una nueva estructura política de oportunidades para las oposiciones prodemocráticas como también revolucionarias.

El PSSA, en diversos documentos entre 1985 y 1989, planteó que la liberación y emancipación del pueblo chileno no pasaba solo por la derrota política del régimen dictatorial y de su institucionalización autoritaria de largo plazo establecida en la Constitución del Estado de 1980, sino que debía procurar

que la caída del dictador fuera el momento político propicio para la insurrección social destinada a iniciar la revolución social anticapitalista. O sea, derrotar y vencer a la dictadura era convergente con el estallido de la revolución social anticapitalista. Por esa razón, el PSSA, se opuso activamente al plebiscito sucesorio de 1988, y dispuso la preparación política de nuestra militancia para impulsar la insurrección popular en contra de la dictadura de producirse el autogolpe de Pinochet en caso de desconocer los resultados del plebiscito. La estrategia era impedir la perpetuación de la institucionalización política pinochetista como la continuidad del capitalismo.

Durante cuatro años, el Socialismo Allendista trabajó decididamente en poner en marcha dicha estrategia política y militar. Los esfuerzos fueron muchos y los resultados pocos. Pues, sin lugar a duda, que la escuela de formación política en que iba a participar activamente como profesor e instructor Carlos Godoy Echevoyen era el punto de partida de esa estrategia política. La detención de la mayoría de los compañeros socialistas participantes y, sobre todo, la muerte de Carlos Godoy frenó y obstruyó de manera total dicha estrategia. En otras palabras, el PSSA, para desgracia de todas y todos los socialistas allendistas, no logró constituirse en la organización política revolucionaria que pudiera hacer realidad la conjugación de la derrota política y militar de la dictadura con el inicio de la revolución socialista en Chile.

A 34 años del asesinato de Carlos Godoy Echevoyen, a 31 de la derrota política del dictador en el plebiscito sucesorio de 1988; a 29 años de la instalación de la democracia protegida autoritaria administrada por la Concertación de Partidos por la Democracia y la derecha política; a 28 años, de la disolución del Partido Socialista Salvador Allende, la necesidad política e histórica de impulsar la lucha insurreccional revolucionaria anticapitalista es más urgente que nunca.

La única forma de honrar la memoria no solo de Carlos Godoy Echevoyen, un militante socialista “puro y sincero”, sino también de decenas de compañeras y compañeros caídos, es asumiendo que la revolución social es y sigue siendo el único instrumento eficaz para que los pueblos puedan liberarse de la opresión capitalista.

Lograr hacer la revolución social requiere que los sectores populares se doten de instrumentos políticos adecuados, unificados y cohesionados, pero también de hombres y mujeres comprometidos cabalmente con el proceso de cambio radical que se busca impulsar y que recoja y articule en una plataforma común las diversas y plurales demandas sociales, políticas y culturales que emerjan desde la sociedad en perspectiva revolucionaria y, sobre todo, anticapitalista.

Para ello se hace necesario tener presente aquello de que la lucha revolucionaria anticapitalista es una sola, o sea, indivisible. Toda fragmentación o división de ella solo conduce a la odiosa continuidad del capitalismo. La historia reciente en América Latina y el Caribe es recurrente en ejemplos para seguir ignorándola.

## **El Poder Judicial y los Derechos Humanos en la “democracia protegida” 1990-2018**

*“La muerte no va conmigo  
la vida va en fuego entero,  
me plazco en sangrar la sombra  
del carnicero.  
La muerte no va conmigo  
la extravié de mi escarcela,  
no corta rabo ni oreja,  
ni duerme en vela.  
La muerte no va conmigo  
y a quien haga el desacato  
lo mato con estas manos,  
mato y remato”  
Patricio Manns*

Luego de leer “No me lo pidan” de P. Veloso (La Tercera, 05 agosto 2018), tengo el mismo convencimiento político de hace 30 años: solo la lucha social y política por la democratización integral y total de las instituciones políticas y de los poderes del Estado haría justicia a los caídos durante la dictadura militar (1973-1990).

Nuestros muertos no merecían una justicia en “la medida de lo posible” ni tampoco la miserable democracia política que instituyeron aquellos que violaron sistemáticamente los derechos humanos. Esta no es nuestra democracia, es la de ellos, de aquellos que hoy protegen a sus esbirros, asesinos y serviles lacayos.

Los responsables políticos de la impunidad y libertad de muchos violadores de los derechos humanos y de que nuestros desaparecidos sigan desaparecidos, son aquellos que durante 28 años fueron y han sido complacientes con las instituciones y políticas establecidas por los que avalaron y justificaron el “terrorismo de Estado” como una acción de defensa de los sagrados valores de la Patria, de Dios y de la propiedad privada.

Hoy, a tres décadas de la derrota política del dictador, que las instituciones políticas autoritarias sigan vigentes no es responsabilidad de ellos, sino de aquellos que asumieron la conducción política desde 1990 hasta la fecha, especialmente, de

los gobiernos de la Concertación (1990-2010). Ellos cancelaron la lucha social y encerraron a los movimientos sociales populares en la jaula autoritaria de la Constitución Política de 1980.

Los partidos políticos antidictatoriales se volvieron partidos conformes con la institucionalidad pinochetista. Los ejemplos sobran y la ciudadanía los tiene muy presentes. Los partidos políticos, supuestamente democráticos, fueron financiados con dineros de un empresario pinochetista. La corrupción ética durante 28 años ha sido total entre aquellos que tenían la obligación de luchar por la verdad, la justicia y la reparación, no lo hicieron. Y si hicieron algo, todo fue en la medida de lo posible y, sobre todo, haciendo enormes concesiones a las instituciones responsables de implementar el terrorismo de Estado durante 17 años. Los gobernantes democráticos fallaron y fracasaron en producir una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos. Su democratización fue como la justicia a la "medida de lo posible". Una democratización a medias.

En efecto, la democratización que se propusieron se redujo casi exclusivamente a las formas y prácticas del sistema político. Nunca se propusieron la democratización del Poder Judicial, el principal cómplice activo del terrorismo de Estado practicado por la dictadura. Nunca se propusieron la democratización de las Fuerzas Armadas y de Orden. Nunca se propusieron la democratización de las Universidades públicas, muchas de ellas siguen rigiéndose por decretos promulgados por la dictadura. Los gobernantes elegidos democráticamente entre 1990 y 2010 y luego entre 2014 y 2018, son políticamente responsables de lo que hoy nos ocurre como sociedad, pues ellos dejaron que lo establecido por la dictadura cívico-militar siga vigente, 38 años más tarde.

Si hoy vemos cómo los jueces de la Corte Suprema, del Poder Judicial, les dan la libertad a los condenados por la violación de los Derechos Humanos, no nos puede llamar la atención ni sorprender, pues ellos son parte de ese poder que negó, en su momento, recursos de amparo y protección y justicia a muchos de nuestros muertos y desaparecidos.

El Poder Judicial desde el 11 de septiembre de 1973 estuvo al servicio de la dictadura. Ésta encontró entre los jueces

de la República de la época el mejor apoyo para su política de exterminio político de los hombres, mujeres, niños y niñas que adherían y apoyaban al gobierno de la Unidad Popular del Presidente Salvador Allende (1970-1973).

El Poder Judicial no se democratizó. Solo gracias a la presencia de algunos jueces, digamos democráticos, fue posible hacer “algo” de justicia. Sin embargo, la estructura y la doctrina que sostiene la justicia chilena ha sido, desde la instalación de la República, profundamente conservadora, autoritaria, clasista, racista y patriarcal. Su historia está plagada de episodios jurídicos y políticos que lo prueban. El Poder Judicial chileno no solo ha sido ciego sino también, silente, ante la violación de los derechos humanos perpetrada por el Estado nacional a lo largo de los 208 años de vida independiente.

Políticamente, el Poder Judicial chileno ha sido antipopular, por excelencia defensor acérrimo de los sectores dominantes. Durante el gobierno popular y revolucionario de Salvador Allende, bajo la presidencia de Enrique Urrutia Manzano (1972-1975), hicieron de la Corte Suprema un opositor tenaz de las medidas impulsadas por el gobierno popular. Ello explica, obviamente, que su actitud fue apoyar a la dictadura militar. La misma actitud política pro-dictadura y antipopular la mantuvo José María Eyzaguirre (1975-1978) y, sobre todo, Israel Bórquez Montero (1978-1983).

Muchos de los actuales jueces son herederos de las doctrinas jurídicas y políticas que esos ministros de la Corte Suprema desarrollaron e impulsaron durante los 17 años de la dictadura. Los jueces del Poder Judicial durante la dictadura fueron consecuentes con sus posiciones políticas: eran genéricamente antiizquierdas, o sea, anti-partidos políticos que conformaban la Unidad Popular, sus militantes, adherentes y simpatizantes eran el “enemigo interno” que había que exterminar. Y ellos no los iban a proteger. Todo lo contrario, los dejaron morir, desaparecer, torturar y exiliar.

Por tanto, que hoy los jueces de la Corte Suprema, que no fue democratizada, sino que sigue siendo antipopular y antidemocrática, otorguen la libertad condicional a los condenados por la violación de los Derechos Humanos, y que el

gobierno del presidente Sebastián Piñera y su ministro de justicia Hernán Larraín vayan a propiciar un “proyecto humanitario” destinado a favorecer a todos los condenados por crímenes de lesa humanidad, no nos puede sorprender. Todo lo contrario, unos y otros agradecen con estos actos jurídicos la labor prestada por aquellos hombres que hicieron posible que Chile, como dijo la diputada de Renovación Nacional, fuera “salvado” del comunismo.

Por último, si hoy el Poder Judicial y el Gobierno del Estado de Chile están en manos de los mismos que apoyaron a la dictadura, es responsabilidad histórica y política de aquellos que transaron, acataron y se sometieron a la institucionalidad política establecida por la dictadura.

La sociedad chilena actual no es solo producto de la acción de la dictadura sino también de los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría.

La libertad condicional de los cinco asesinos debe ser una bofetada en la cara a todas y todos aquellos que han administrado el orden pinochetista desde 1990 hasta la actualidad y debe ser también la oportunidad política para que los actores políticos estratégicos democráticos puedan impulsar, junto con la ciudadanía, la democratización del Poder Judicial, para lograr la verdad, la justicia y la reparación para todos nuestros muertos y detenidos desaparecidos.

Ni perdón ni olvido, solo Verdad, Justicia y Reparación.

## **Andrés Aylwin Azócar (1925-2018)**

### **Su lucha por los Derechos Humanos y la Justicia**

*A los que fueron víctimas de la represión,  
de cuyo dolor nace el derecho a vivir  
en un país más justo y solidario...  
y que fueron defendidos por  
Andrés Aylwin Azócar.*

La muerte de don Andrés Aylwin ocurre en un momento altamente sensible para el país. La ciudadanía había sido golpeada por dos hechos: 1) la libertad condicional otorgada por la Corte Suprema a condenados por crímenes de lesa humanidad y 2) por las insolentes e indolentes declaraciones del ahora exministro de las Culturas, Mauricio Rojas, sobre el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos. Ambas situaciones abrieron y agitaron la controversia sobre la existencia de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, sus culpables, las responsabilidades políticas, de los contextos históricos presentes o ausentes, etcétera. Declaraciones destempladas, por parte de los sectores oficialistas, se multiplicaron y fueron rematadas por la paradójica idea del presidente Piñera de levantar y construir un Museo de la Democracia como una forma de zanjar aparentemente el sesgo político e histórico del Museo de la Memoria.

En dicho contexto un “hombre bueno” nos abandona. Tal vez, consciente de que su lucha de más de 40 años por los derechos humanos había sido como “arar en el mar”, nos deja aún con tareas por hacer en dicha materia. De manera que, lamentablemente, la lucha por los derechos humanos, la justicia, la verdad y la reparación ha perdido a uno de sus más genuinos representantes. No obstante, la presencia de Don Andrés Aylwin seguirá viva y, sobre todo, su quijotesca figura seguirá guiando la lucha por la justicia y los derechos humanos.

La lucha por los derechos humanos, la justicia, la verdad y la reparación de parte de Andrés Aylwin constituye un conjunto



de principios que ordenaron su vida privada, profesional y política. Desde aquel día 13 de septiembre de 1973 que estampó su firma en la "Carta de los 13" militantes demócratacristianos que condenaron el derrocamiento del gobierno constitucional de Salvador Allende y rindieron el primer homenaje público al extinto presidente: "Nos inclinamos respetuosos ante el sacrificio que él hizo de su vida en defensa de la Autoridad Constitucional". Don Andrés firmó su compromiso por la defensa de todas y todos aquellos que desde dos días antes habían comenzado a ser perseguidos y asesinados solo por el hecho de haber pensado y luchado por un futuro más justo.

Muchos de esos hombres, mujeres, niños y niñas castigados y dañados violentamente por los opresores, que bajo traición habían ocupado militarmente el país, militaban y participan en partidos políticos de la Unidad Popular y apoyaban el proyecto de construcción de una sociedad socialista. A pesar de que don Andrés había militado en un partido opositor, el cual incluso había justificado y avalado el derrocamiento del gobierno popular y la acción de las Fuerzas Armadas, se puso al frente de un conjunto de defensores de los derechos de los seres humanos que durante 17 años fueron despojados violentamente de ellos y condenados a una condición de "humanoides".

Los partidarios y simpatizantes de la Unidad Popular (1970-1973), aproximadamente un tercio de la población de Chile desde el mismo 11 de septiembre de 1973, comenzaron a ser considerados por los usurpadores del poder como "no humanos" y bajo esa condición carecían de cualquier derecho asignado a los seres humanos. Por esa razón, podían ser vejados, humillados, torturados, asesinados, exilados y desaparecidos. Cientos de hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y de Orden fueron instruidos y adiestrados en dicha doctrina.

El país fue ocupado durante 17 años por los militares con la complicidad del Poder Judicial, de los gremios empresariales, de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica entre otras; de los medios de comunicación: de la prensa escrita El Mercurio, Revista Qué Pasa, La Tercera de la Hora, Ercilla, entre otros; de los canales de televisión como el Canal 13 de la Universidad Católica

de Chile, y de radioemisoras tales como Radio Agricultura y Minería, etcétera; como también de cientos de miles de civiles provenientes de los Colegios Profesionales, de las Universidades, empresas o de organizaciones de la sociedad civil opositoras al gobierno de la Unidad Popular, etcétera. Todos ellos se pusieron a disposición de las nuevas autoridades. Éstas implementaron una política e instalaron toda una maquinaria y tecnologías de terror con el objeto de aplastar y exterminar a los partidarios y simpatizantes de la Unidad Popular. Una política estatal fundada en el encarcelamiento, allanamientos, torturas, asesinatos, exilios y desaparecimiento sistemático de sus principales dirigentes políticos, sindicales y sociales.

Durante años, esta maquinaria de terror y muerte debió ser enfrentada por hombres y mujeres, los cuales arriesgando su propia vida se organizaron para defender a las y los que no se podían defender. El poder Judicial alineado con la dictadura militar no los defendía y les negaba sus derechos como también los cientos de recursos de amparos que le eran solicitados.

Don Andrés Aylwin presentó cientos de recursos de amparos. La mayoría de ellos fueron una y otra vez rechazados por los jueces de la dictadura. La complicidad del Poder Judicial y de los jueces es una vergonzosa y tétrica historia que aún permanece oculta o en relativo silencio. Es la hora de las y los historiadores de comenzar a develarla. Por eso, uno de los más valiosos legados que nos deja don Andrés Aylwin es, justamente, su libro *Simplemente lo que vi (1973-1990). Los imperativos que surgen del dolor*<sup>163</sup>. En este libro testimonio se encuentra narrada y expuesta la burda y execrable complicidad de los jueces con la violación de los derechos humanos y su contubernio con la dictadura. Los jueces no eran cómplices pasivos sino activos. Y, sobre todo, un engranaje fundamental de la maquinaria estatal destinada a exterminar a los opositores de la dictadura.

Tempranamente, en octubre de 1973, don Andrés Aylwin conoció la postura del poder judicial y de sus jueces. En el citado libro lo relata y voy a transcribirlo en extenso porque se trata de un

---

<sup>163</sup> Aylwin, Andrés (2003). *Simplemente lo que vi (1973-1990). Los imperativos que surgen del dolor*. LOM Ediciones, Santiago de Chile.

testimonio que no merece ninguna duda y que a su vez ratifica la postura que la justicia tuvo a lo largo de los 17 años de dictadura como también durante los 28 años de supuesta democracia (1990-2018). Dice Don Andrés:

*“Golpe, de gratitud con las Fuerzas Armadas por haber hecho el “pronunciamiento” y, por lo mismo, de total compromiso con todo lo negativo, aun delictual, que pudiera estar aconteciendo después del 11 de septiembre, lo cual debía juzgarse dentro de un esquema de “guerra” donde si los otros (los de la Unidad Popular) hubieran triunfado, nosotros (los “demócratas”) seríamos las víctimas”<sup>164</sup>*

Está claro que en la maquinaria de terror y exterminio de la dictadura cívico-militar los tribunales constituían tan solo una “División” o un “Batallón”, dentro de un movimiento revolucionario liberador y triunfante. Es decir, configuraban simplemente el “frente” judicial, para seguir la terminología del dictador. Ante lo cual era imposible esperar de los exjueces de la República, nada. De allí que la frustración y desilusión de Don Andrés Aylwin con la “familia judicial” de la cual su padre como él mismo habían sido parte, fue total. Así lo expresa:

*“La percepción de lo que era realmente el Poder Judicial en esos tiempos se fue ratificando... vivencia tras vivencia, frustración tras frustración, en medio de una angustiada realidad en que fuera de las murallas de los tribunales miles de hombres y mujeres necesitaban más que nunca de la acción y protección de los jueces y, sin embargo, también más que nunca dichos jueces permanecían dramáticamente silenciosos y ausentes”<sup>165</sup>*

El libro de Don Andrés Aylwin es el testimonio vivo de la complicidad de los jueces con la violación de los derechos humanos. Ojalá que las y los chilenos lo puedan leer y conocer, pues constituye una pieza valiosa de la lucha por la justicia emprendida por un hombre bueno y justo.

---

<sup>164</sup> Ídem, pp. 94.

<sup>165</sup> Ídem

Conocí la acción de Don Andrés como muchos de las y los ciudadanos chilenos opositores a la dictadura en los años ochenta. Supe de su valer. Y, al mismo tiempo, de su consecuencia política. Más tarde lo traté directamente a comienzos de los años noventa en una singular experiencia humana y política. Nos encontramos en la ex Cárcel Pública de Santiago, hoy desaparecida. Él defendía o representaba o visitaba a distintos prisioneros políticos, la mayoría de ellos presos por haber luchado contra la dictadura. Algunos de ellos eran mis estudiantes de un curso de Historia de Chile del siglo XIX y XX, que impartía en la Cárcel. Un día en la puerta de ingreso a la Cárcel, nos topamos. Recuerdo que me pregunto qué hacía yo ahí, si era abogado de los derechos humanos, no, le dije, hago clases de historia de Chile a los presos políticos. Me miro con sorpresa y me dijo y “aprenden los chiquillos”. Por cierto, que sí. Están muy interesados, respondí. “Que bien”, me dijo y agregó, “son personas muy valiosas”. Sí, lo son y merecen su libertad, contesté. “En eso estamos”, me respondió. Y entramos a la Cárcel, él se dirigió a la sala de los abogados y yo me dirigí a la sala del segundo piso del primer pabellón interno. Donde dos veces a la semana me reunía con una veintena de presos políticos a discutir y analizar la historia de Chile. Era un grupo multicolor. Concurrían a mi clase combatientes de todas raleas, viejos y jóvenes. Muchos de ellos gracias al concurso de Don Andrés Aylwin obtuvieron su libertad en Chile, otros fueron condenados a la pena de extrañamiento. Mientras que Marco Ariel Antonioletti, fue asesinado por agentes del Estado, luego de su violento rescate protagonizado por un comando del Frente Juvenil Lautaro en noviembre de 1990.

Don Andrés como un hombre de ley, como lo fue toda su vida, había elegido un camino distinto al asumido por esos luchadores sociales y políticos. Pero, entre ellos, había una conexión política que los unía al mismo propósito, pero con distintos medios, la lucha por la justicia.

Justicia que en una sociedad de clases es imposible de lograr con plenitud. Así lo entendía don Andrés, sin ser un marxista, tenía dicha claridad histórica y política que muchos carecen. Esa claridad que le permite identificar a la dictadura “como una dictadura esencialmente clasista”. Una dictadura cuyo principal enemigo eran los pobres. “Nunca vi sufrir tanto a los pobres.

Una pobreza sin respeto, sin esperanzas. Junto con ello, jamás percibí (escribe en las páginas finales de su libro) tanta soberbia y prepotencia por parte de los que tenían el poder político. Y también -hay que decirlo- de los que tenían el poder económico”<sup>166</sup>

Esa prepotencia no ha desaparecido, pues aquellos que hoy tienen el poder económico, el empresariado nacional, como aquellos que controlan el poder político siguen agrediendo a las y los pobres. Pero también agrediendo su memoria y su historia. Está claro en qué lugar estaría don Andrés.

Hace algunos años atrás escribimos otra columna dedicada a otro Aylwin Azócar, a Patricio, hermano de Don Andrés. A diferencia de él, Patricio Aylwin fue un gestor político y defensor del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende. Lo justificó ante la opinión pública nacional e internacional. Las primeras reacciones de Patricio Aylwin ante el golpe de Estado, que expone en su libro *El reencuentro de los Demócratas. Del Golpe al triunfo del No*<sup>167</sup>, son muy decisivas para comprender política e históricamente a ambos hermanos. Mientras que para don Andrés su principal preocupación desde el 11 de septiembre fue “salvar la vida” de aquellos que eran perseguidos, para el expresidente Aylwin, su preocupación central era “salvar al partido”. Así lo plantea: “Cualquiera que fueran nuestros desacuerdos sobre lo ocurrido y sobre la actitud que debíamos adoptar ante el régimen militar; casi todos coincidíamos en que nuestra responsabilidad fundamental eran mantener viva la Democracia Cristiana. Casi todos pensábamos que, fuera breve o larga la duración de la dictadura, a su término la Democracia Cristiana debería estar viva como alternativa”.

Como sabemos, todos los partidos políticos los integran hombres y mujeres de carne y hueso, por lo tanto, lo primero que había que salvar ante el ataque artero de los militares, era a los seres humanos. Así lo entendió desde el 13 de septiembre don Andrés, mientras que a su hermano mayor y presidente del principal partido opositor al gobierno de Salvador Allende, le preocupaba

---

<sup>166</sup> Ibidem, pp. 453.

<sup>167</sup> Aylwin, Patricio (1998). *El reencuentro de los Demócratas. Del Golpe al triunfo del No*. Ediciones B, Chile S.A.

tenerlo presto para tomar la posta o mejor dicho el poder del Estado cuando lo dejaran los usurpadores; independientemente del tipo de régimen político que instituyera la dictadura militar. Es relevante señalar este aspecto, pues a Patricio Aylwin le interesaba que la Democracia Cristiana accediera al poder, mientras que a los hombres que firmaron la Carta de los 13, como Bernardo Leighton, por ejemplo, más que hacer sobrevivir al partido, le interesaba “luchar por la democracia, a secas”. Lo mismo pensaba don Andrés.

Patricio Aylwin tal vez logró salvar a su partido. Sin embargo, no logró instalar la democracia, pues la que existe es la que instituyeron los autoritarios y aquellos que combatió con todas sus fuerzas don Andrés. Por ello, nos advierte en el 2003, que ha estimado escribir el libro que hacemos mención más arriba “porque es moralmente aberrante la recuperación del poder por quienes impusieron por medio del terror un modelo de sociedad profundamente injusto e inhumano, que lógicamente no van a modificar si vuelven al gobierno”.<sup>168</sup>

La principal preocupación de Don Andrés, en sus últimos años, estaba en que Chile seguía viviendo bajo las “instituciones y estructuras aberrantes diseñadas” por la dictadura. La necesidad de “reiterar permanentemente la voluntad de modificar lo perverso constituye un imperativo ético insoslayable. No hacerlo (decía Don Andrés) implica una forma de tolerancia tanto frente a los grandes crímenes como ante la posibilidad de que en base a ellos se diseñe una sociedad permanentemente inhumana”.<sup>169</sup>

La tolerancia de parte de los gobiernos democráticos que han gobernado desde 1990-2010 y 2014-2018, con la institucionalidad establecida y por la sociedad inhumana construida por la dictadura, ha sido total.

Lamentablemente, don Andrés nos deja cuando aquellos responsables de haber construido la sociedad neoliberal, o sea, una sociedad inhumana por excelencia, están de nuevo en el poder, fundamentalmente, porque su partido y otros han sido complacientes con el orden social construido sobre los restos de

---

<sup>168</sup> Aylwin, Andrés. *Simplemente lo que vi (1973-1990). Los imperativos que surgen del dolor*. LOM Ediciones, 2003, pp. 456.

<sup>169</sup> Ídem, pp. 456.

miles de detenidos, torturados, encarcelados, exilados, asesinados y desaparecidos. Y durante 28 años han obviado la posibilidad de poner fin al orden social y político construido por la dictadura.

Por eso es urgente, tal como lo dijo don Andrés, que “en Chile existe la obligación de recordar lo que sucedió durante la dictadura como una forma de sanción moral a los que la sustentaron sino, además, como un llamado a la conciencia de los dirigentes políticos que lucharon contra ella en cuanto a no olvidar jamás ni la magnitud de los crímenes, ni la arbitrariedad del sistema construido bajo el terror, de todo lo cual surge el imperativo histórico ineludible de construir una sociedad justa, tolerante, participativa y solidaria”.<sup>170</sup>

Hoy a pocas semanas de conmemorar un nuevo año del golpe de Estado de septiembre de 1973, que no solo fue el derrocamiento del gobierno popular, socialista y revolucionario de Salvador Allende, la destrucción de la democracia, sino también el intento de parte de la clase dominante de exterminar al pueblo, a los trabajadores y a los pobres, solo por el hecho de pensar que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Debemos despedir y agradecer a un hombre que arriesgó su vida para defender al pueblo.

---

<sup>170</sup> Ídem, p.p 457.

## **Patricio Aylwin Azócar (1918-2016)**

### **Un demócrata en la medida de lo posible**

En este país en que todos se transfiguran no se puede olvidar que **Patricio Aylwin Azócar**, al cual hoy se le presenta como un demócrata, fue uno de los gestores intelectuales y políticos centrales de la destrucción de la democracia que había posibilitado la elección popular del Presidente Salvador Allende. Aylwin asumió, como presidente del Partido Demócrata Cristiano (DC), durante el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973) la defensa de la propiedad privada. La base material del poder de las clases dominantes. Se opuso tenazmente a la creación del Área Social de la Producción, utilizando para ello el derecho constitucional, que nunca puso al servicio de los sectores subalternos, sino siempre a favor de los sectores dominantes. Desde la presidencia de la DC, fomentó, apoyó y agitó la oposición callejera contra el gobierno de Salvador Allende siguiendo los consejos de la CIA; aplaudió, celebró y justificó en 1973 el golpe de Estado y los crímenes de lesa humanidad de Pinochet. En 1984, una vez que la DC rompe y retira su apoyo inicial a la dictadura, Aylwin pidió y demandó a toda la oposición anti-dictatorial olvidarse de la ilegitimidad y reconocer la existencia de la Constitución Política de 1980 impuesta por Pinochet, con la cual gobernó y se mantiene vigente hasta el día de hoy. Aylwin traicionó su propio pensamiento, pues como presidente del Grupo Constitucional 24, había planteado la necesidad de realizar una Asamblea Constituyente para cambiar la espuria Constitución dictatorial.

Aylwin fue un político pragmático y muy racional que buscó salir de la dictadura de manera institucional en el momento mismo que se impulsaba la desobediencia civil y la rebeldía popular, que no solo buscaban destituir al dictador sino también poner fin al capitalismo neoliberal.

Él, al gestar y promover la salida jurídico-constitucional posibilitó, por cierto, la derrota electoral al dictador, pero con



ello logró darle continuidad y proyección a la institucionalidad autoritaria en el tiempo y, sobre todo, la reproducción del capitalismo neoliberal. Gracias a ello, la dominación y la hegemonía neoliberal tiene cuatro décadas de vigencia en Chile.

Aylwin, de aparente bondad, fue un intelectual orgánico, frío y calculador del capitalismo y al servicio de las clases dominantes. En 1973, al apoyar el golpe, permitió la refundación del capitalismo nacional y en 1988-1990 como líder de la Concertación dirigió una transición conservadora y limitada no a una democracia plena sino a la proyectada e ideada por Jaime Guzmán, la democracia protegida. De esa manera, Aylwin puso dique y contenciones jurídicas y políticas para preservar al capitalismo. Aylwin fue un genuino demócrata burgués, es decir, un defensor permanente del orden capitalista y de la sociedad cristiana occidental.

Aylwin, durante los años ochenta y noventa, tuvo clara consciencia de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura militar. Por esa razón, durante su gobierno, procuró reparar el daño social y humano producido por la dictadura. Pero dada la institucionalidad pinochetista y por la propia estrategia política por él ideada, no podía tocar el poder infraestructural del capital y menos aún el poder de los militares, y como una forma de resarcirse con los sectores de izquierda, propuso la "justicia en la medida de lo posible".

En los hechos, ello significó la impunidad de la mayoría de los principales violadores de los derechos humanos y, especialmente, de los cuatro generales integrantes de la Junta de Gobierno: A. Pinochet, J. Merino, G. Leigh y Mendoza. Ejecutores directos del derrocamiento y de la muerte del Presidente Salvador Allende y de miles de chilenas y chilenos. Estos generales traidores, todos murieron, como el mismo Aylwin, tranquilamente en su cama, sin ser juzgados por sus crímenes.

La "justicia en la medida de lo posible" se transformó en la no justicia. Y, al mismo tiempo, permitió la consolidación de la democracia protegida. Una democracia ejemplar sostenida por sobre las espaldas de miles de detenidos desaparecidos, asesinados, torturados por la dictadura militar, que Aylwin justificó y apoyó en su fase más criminal, 1973-1980.

Aylwin fue el arquitecto que terminó de moldear la sociedad neoliberal, cuyos cimientos y obra gruesa las puso la dictadura de A. Pinochet entre 1973 y 1990. Si bien tuvo críticas contra el modelo neoliberal, éstas no pasaron de ser retóricas y vacías, pues sus ministros de Estado, como el Ministro de Hacienda, Alejandro Foxley, de Economía, Carlos Ominami; de Educación, Ricardo Lagos, y muchos más, continuaron la obra iniciada por los ministros de la dictadura, especialmente, de Hernán Büchi.

Para Aylwin todo era "en la medida de lo posible", la democracia, los derechos humanos, los derechos de los trabajadores. A él no le tembló la mano para reprimirlos cuando éstos exigían y demandaban sus derechos durante su gobierno. Fue un hombre al servicio del Estado neoliberal.

Aylwin fue un político y un gobernante que tuvo muy claro quiénes eran los enemigos de la clase a quien servía como intelectual orgánico: los trabajadores y los sectores populares que asumían posturas ideológicas, políticas y sociales revolucionarias. Por esa razón, creó el Consejo de Seguridad Pública e Informaciones, más conocido como la "Oficina", encargada de perseguir a las organizaciones revolucionarias existentes en la década de 1990, que podrían poner en peligro la "consolidación" de la democracia protegida y desestabilizar el proceso de acumulación neoliberal.

Patricio Aylwin, sin lugar a duda, jugó un rol central en la historia política reciente de Chile. Pero no es ni será el demócrata ejemplar que hoy se quiere presentar. Fue un demócrata "en la medida de lo posible". Pero que nunca se olvide que fue uno de los gestores políticos e intelectuales del golpe de Estado de 1973, por lo tanto, de la dictadura militar de Pinochet. Y también el gestor intelectual del régimen político actual, la democracia protegida, sostenida en la Constitución Política de 1980.



## **Carlos Altamirano Orrego (1922-2019)**

### **Un gran y controvertido socialista revolucionario del siglo XX chileno**

*“La crítica y la autocrítica imponen la obligación  
ineludible a la vez un derecho irrecusable”*  
Carlos Altamirano Orrego, 1977.

En Carlos Altamirano Orrego se sintetizan muchos de los aspectos y características del socialismo chileno y en especial del Partido Socialista de Chile (PS), que emergió en la década de los años treinta del siglo pasado. Un socialismo estructurado por un conjunto diverso de colectividades políticas que se identificaban con el ideario socialista desde los ilustrados masones a los revolucionarios trotskistas y con una composición social que reunía tanto algunos rancios terratenientes sureños como a simples sujetos populares. La organización socialista, heredera de esa particular y única experiencia que fue la República Socialista de 1932, convocaba a los trabajadores intelectuales y manuales a fundar la República Democrática de Trabajadores, o sea, hacer de Chile, un país socialista.

Diverso y plural era el Partido Socialista de Chile al cual Carlos Altamirano ofreció sus mejores oficios como profesional (abogado) militante, dirigente y parlamentario. Durante décadas de militancia, Altamirano fue un socialista íntegro que abrazó en la década de los sesenta los principios y postulados de la Revolución cubana y latinoamericana.

Desde esas posiciones compartidas con otros y otras socialistas, durante los años sesenta, impulsó al interior del PS una rebelión generacional y acentuó la crítica política a la democracia burguesa existente en Chile. Su crítica demoledora del parlamento y de la figura de la institución presidencial lo llevó a la cárcel. En efecto, el gobierno demócratacristiano de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) lo encarceló por apología a la violencia política revolucionaria. Fue uno de los promotores de la radicalización del PS en el Congreso de Chillán en 1967 y de su controvertido voto político, en el cual se planteaba que la resolución del conflicto

político en Chile pasaba por “la lucha armada”. Altamirano, como otros dirigentes socialistas de la época, pensaba “que la institucionalidad [democrática] era legítimamente aprovechable por el movimiento revolucionario. Pero no en la perspectiva de completar el ciclo histórico hasta la construcción del socialismo”. Por eso, “intentar transitar el camino político institucional sin tropiezos hasta alcanzar el objetivo final, era sólo una ilusión, una frágil ilusión”. Qué certeros y oportunos son estos planteamientos cuando hoy, en la democracia neoliberal, las y los socialistas insisten en fortalecer una democracia espuria y corrupta.

Teniendo esa claridad política, al momento del triunfo popular de Salvador Allende en 1970, Altamirano se planteó defender en 1971 -al asumir la Secretaría General del PS (Congreso de la Serena)- el programa de la Unidad Popular como la plataforma política para “avanzar sin transar” al socialismo. Durante el gobierno del presidente Allende asumió posturas radicales y críticas con la vía chilena al socialismo y luchó abiertamente en transformar al Partido Socialista en un partido marxista-leninista, entrenado y preparado para actuar ante “el enfrentamiento decisivo”. Así lo ratificó en el Pleno del Comité Central del PS de Algarrobo, en 1972, luego del paro patronal de octubre de ese año: “El enfrentamiento es el problema central y básico de todo este periodo... desde el 4 de septiembre de 1970 la lucha de clases ha desembocado en un enfrentamiento permanente de clases”.

Los asertivos planteamientos del PS y de Carlos Altamirano se hicieron realidad en septiembre de 1973. El Partido Socialista que condujo Altamirano, fracasó en hacer posible la revolución y, sobre todo, en la defensa armada del proceso abierto por la Unidad Popular en 1970. Altamirano fue uno de los primeros dirigentes socialistas en reconocer ese fracaso y, por consiguiente, la derrota: “Sin embargo, preciso reconocer -escribe en su libro *Dialéctica de una Derrota, Siglo XXI, 1977*- [el Partido] no estuvo en condiciones de desarrollar una política consecuente con aquellas posiciones. Su tradicional debilidad orgánica y la falta de formación de sus cuadros, no superadas al calor de la experiencia revolucionaria, le impedía implementar por sí solo una estrategia armada. No era, por cierto, el partido de Lenin. Estaba muy lejos de constituir una organización acerada, monolítica y disciplinada”.

Luego de 1973, asumió tareas duras y de gran responsabilidad histórica y política. Como he dicho, realizó -en su ya nombrado libro *Dialéctica de una Derrota*- una de las más inclementes y rigurosas reflexiones críticas del accionar del socialismo y de su partido, que también es una dura crítica a su propia gestión de dirigente central del principal partido del gobierno popular. Esa crítica llevó a Carlos Altamirano a dar un giro en sus posiciones políticas, iniciando en 1979 un desgarrador proceso revisionista teórico y político que condujo a un explosivo fraccionamiento del socialismo chileno.

Carlos Altamirano, desde los años noventa hasta hoy, durante tres décadas, salió de la política activa partidaria y entró en la historia. Esa historia de los socialistas que tiene hasta el día de hoy mucha oscuridad y silencios para dar un juicio político e histórico sobre su accionar antes y post 1973.

Lo cierto, que Altamirano fue muy consciente de su lugar y rol en la historia del siglo XX y del socialismo chileno, dejó numerosos testimonios escritos y hablados que serán muy útiles para reconstruir la historia de un socialista controvertido y complejo, pero ni tanto ni más que otras y otros grandes socialistas, tales como: Marmaduke Grove, Eugenio Matte, Eugenio González, Raúl Ampuero, Aniceto Rodríguez, Adonis Sepúlveda, Belarmino Elgueta, José Tohá, Julio César Jobet, Oscar Waiss, Alejandro Chelén Rojas, Arnoldo Camú, Ricardo Lagos, Carlos Lorca, Exequiel Ponce, María Elena Carrera, Carmen Laso, Julieta Kirkwood, Fidelma Allende, Beatriz "Tati" Allende, e incluso, del propio Salvador Allende Gossens.

Carlos Altamirano fue, al igual que las y los nombrados, un socialista-revolucionario de toda una vida, pero circunscrito al siglo XX chileno. Siglo que concluyó violentamente en septiembre de 1973. Fecha que también puso fin a la heroica y revolucionaria historia del Partido Socialista de Chile.



## **De equivocaciones y responsabilidades políticas en torno al Golpe de Estado de 1973**

La discusión, con ocasión del fallecimiento del exsecretario general del Partido Socialista de Chile (1971-1979) Carlos Altamirano, no es saber quién o quiénes tenían política o estratégicamente la razón durante la Unidad Popular (UP) o si él es uno de los actores responsables de “apurar el golpe de Estado”, como lo han expuesto los medios de comunicación e incluso sectores de la izquierda nacional. Se requiere exponer ciertos antecedentes para delimitar el curso histórico de los acontecimientos que condujeron al derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular y de Salvador Allende.

El punto de partida a considerar es el hecho de que Salvador Allende y la UP y el movimiento obrero y popular en 1970, al ganar las elecciones presidenciales de ese año, abrieron y dieron curso a un proceso político e histórico que, desde cualquier perspectiva marxista de análisis, era revolucionario, puesto que este alteraba las bases materiales del capitalismo dependiente nacional afectando, especialmente, a quienes detentaban el control de los medios de producción. La UP, desde el inicio del gobierno, comenzó a expropiar el poder social, político y económico del capital: la nacionalización de las riquezas básicas, los bienes privados se volvían comunes; la estatización de la banca extranjera; la reforma agraria, la expropiación de las empresas de comunicación y de las industrias, etcétera. Todo esto significaba que el poder tanto extranjero como nacional de los capitalistas comenzaba a extinguirse en la sociedad chilena y emergía el poder popular y de los trabajadores.

Este proceso requería ser defendido con todo el poder dispuesto por los trabajadores y sectores populares. Y la única forma de hacerlo no era con consignas en los muros como “No a Yakarta” o con multitudinarias marchas portando “coligues”, sino con armas, o sea, con la preparación para practicar la “violencia



política revolucionaria". Para ello, era necesaria la conformación de una estructura político-militar-popular masiva. Eso no se hizo. Ninguno de los partidos populares: el PSCh, PCCh, el MAPU, la IC o el MIR estuvieron preparados para ello. Todos fracasaron. Incluso aquellos que resistieron y combatieron el 11 de septiembre de 1973.

Sin embargo, no fracasó el gobierno de Salvador Allende y la UP. La derrota de la UP estuvo en la no preparación militar para defender no la democracia liberal ni de sus instituciones, un "sistema de mierda", como lo calificó Gabriel García Márquez, sino la Revolución Socialista Chilena impulsada desde 1970 por el gobierno popular. Había que defender todas las conquistas logradas para el pueblo y la clase trabajadora chilena.

Si bien, "la vía chilena al socialismo" era inédita, no prevista por los clásicos, tal como lo dijo Allende el 4 de noviembre de 1970 al asumir el gobierno, Marx y Engels sí habían previsto que la clase dominante no iba entregar el poder ni menos ser despojada del control del capital de manera tranquila y pacífica, aceptando y acatando los resultados producidos por la democracia liberal, no lo iban permitir. Por esa razón, el enfrentamiento de clases era inevitable, así lo habían demostrado la Revolución francesa, la Revolución rusa, china y cubana. Y ¿por qué iba ser diferente en el caso chileno?, y menos aún en el contexto de la "Guerra Fría" y la posición geopolítica y militar estadounidense en la región. Todo hacía indicar que el "golpe de estado" era posible. Así lo tenía previsto el gobierno estadounidense desde fines de los años cincuenta. Allí están los testimonios históricos que lo confirman.

Sin embargo, ciertos sectores de la Unidad Popular e incluso el propio Allende, confiaron y depositaron una "fe", yo diría irracional y para nada marxista-leninista, en creer que la burguesía nacional e internacional iban a respetar un proceso político e histórico que modificaba toda la estructura de poder de la sociedad chilena. Eso no lo aceptaron, se movilizaron con todos sus recursos para derrocar al gobierno y dar inicio al peor genocidio popular que ha experimentado la sociedad chilena desde su constitución como Estado independiente.

Allende tenía una visión equivocada de las Fuerzas Armadas. Lamentablemente, la izquierda chilena de la época

tuvo un gran miedo, un gran temor que la paralizó y le impidió actuar racionalmente para ganar y capturar el poder total. Para ello, era necesario defender el proceso político con la violencia revolucionaria. Aunque ello suponía desatar la “guerra civil”, dividir a la FF. AA, quebrar el orden constitucional, etcétera.

El miedo a la “confrontación armada” ha sido el límite de la izquierda chilena. La clase dominante, en cambio, nunca ha temido desencadenar una “guerra civil” para detener cambios políticos e históricos: lo hicieron en repetidas veces en el siglo XIX. Nunca les tembló la mano para reprimir a la clase trabajadora, exterminar a los pueblos originarios, mapuches, onas, entre otros; ni tampoco para bombardear a La Moneda para defender sus privilegios y granjerías, tal como lo dijo Salvador Allende, el 11 de septiembre; y perpetrar, como he dicho, el peor de los genocidios de nuestra historia. Mientras que la izquierda se paraliza ante la posibilidad de usar la violencia política revolucionaria.

El derrocamiento por la fuerza del gobierno popular no se iba a detener ante la institucionalidad democrática. Más aún si el proceso seguía avanzando por los cursos legales y democráticos. El “golpe” fue el recurso final de la burguesía nacional, al comprobar que las vías institucionales se les cerraban y potenciaban a la UP.

Por lo tanto, los equivocados fueron los partidos y los dirigentes de la UP como también Salvador Allende cuando se rehusó a armar al pueblo y cerrar el Congreso Nacional y El Mercurio, el 29 de junio de 1973. Las revoluciones se pelean y defienden. Y, para desgracia de nuestro pueblo, en septiembre de 1973, no hubo condiciones para ello.

Sostengo que muchos o todos no estuvieron preparados para aquello que el Partido Socialista de Chile había planteado en 1967: la resolución del conflicto en la sociedad chilena se iba a definir por la vía armada. Y eso fue el Golpe de Estado de 1973. Y tal como dijeron los socialistas en el documento de marzo de 1974, y más tarde, en 1977, Carlos Altamirano, en su Dialéctica de una Derrota, su partido había fracasado en estar preparados para defender el proceso revolucionario de la UP.

Por último, Salvador Allende se equivocó al pensar que las clases capitalistas como sus organizaciones políticas iban

a respetar la democracia. Si bien, la democracia funcionaba, todos los opositores conspiraban contra el gobierno popular, lo hacían en el parlamento, en el Poder Judicial, en las Fuerzas Armadas, en los medios de comunicación, en las universidades, etcétera. Se equivocó al pensar que la Democracia Cristiana, partido que representaba a los sectores medios, estaba dispuesta a defender al Gobierno. Aylwin, Frei, Hamilton, y otros estaban dispuestos a sacrificar la “democracia liberal” con el objeto de defender el régimen capitalista. Y así lo hicieron. Que más tarde se arrepintieran de apoyar a la dictadura es otra cosa. Pero nunca se han arrepentido de su obtusa oposición al gobierno de Allende. Los grandes responsables de la tragedia de Chile en 1973 son las burguesías nacionales, internacionales, las clases medias, las Fuerzas Armadas, entre otros. Culpar o responsabilizar a dirigentes de la UP o del MIR es un gran equívoco político e histórico. Hubo errores y equivocaciones en todos los actores de la UP, pero el golpe de Estado y el genocidio popular es responsabilidad de los actores ya señalados.

Apuntar, en consecuencia, a que Carlos Altamirano, como Secretario General del PSCh, sea responsable del golpe de Estado, no pasa de ser una estupidez o torpeza política que solo sirve para ocultar a los verdaderos responsables del derrocamiento del gobierno popular.

**SÉPTIMA PARTE**

**LA ACADEMIA EN LOS  
TIEMPOS NEOLIBERALES**



## **CONICYT: el capitalismo académico y corrupción**

Las decisiones que se han adoptado en los últimos días en el Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) son complejas y altamente discutibles. Pero mi reflexión quiere plantear la relación entre CONICYT y la “corrupción académica” presente en los distintos procesos de selección o concursos abiertos por esta institución.

Con relación a Becas Chile plantear el siguiente punto: la situación que afecta a muchos de los investigadores sociales que obtuvieron sus posgrados (Maestrías, Doctorados y Posdoctorados) cuando regresan al país.

Éstos no tienen ni la inserción ni el reconocimiento académico que merecen en los espacios académicos universitarios, especialmente cuando éstos ofrecen vía concursos públicos, algún puesto académico. Dado que los requisitos establecidos, específicamente, en los concursos patrocinados por MECESUP son restrictivos y, claramente, discriminatorios. Y, lo peor de todo, es que muchos burócratas de la educación superior del capitalismo académico, que ingresaron sin concursos y no cumplen con los requisitos que ellos mismos hoy imponen a los demás, no consideran que los estudios de posgrado, por ejemplo, posdoctorados sean relevantes, ni la publicación de las tesis doctorales o los trabajos posdoctorales en libros. Partamos del hecho de que muchos de los investigadores han debido estar entre cuatro a cinco años realizando estudios de posgrado y sus tesis, y las bases de esos concursos exigen la presentación de artículos publicados en revistas indexadas previos a la tesis. Ésta no tiene ningún valor, pues lo único válido para avalar la pertinencia académica o los méritos intelectuales o profesionales, no son los grados académicos obtenidos o los desempeños académicos realizados, sino tener publicaciones en revistas indexadas: SciELO, Scopus o ISIS. Existe, en la actualidad un extendido y peligroso fundamentalismo por ese tipo de publicaciones, las cuales son

consideradas lo “máximo”, lo que lleva a sostener a un expresidente de CONICYT, que **“ese (tipo de publicaciones) son el único espacio de producción válido del conocimiento científico nacional”**, concluyendo, por consecuencia, que todo lo demás no existe. Y quienes publican en esas revistas son investigadores de primer orden y los demás no existen como investigadores y su producción académica y científica no tiene ninguna validez o importancia científica; pues este tipo de producción tampoco permite incrementar los estándares de calidad de la universidad o facultad o instituto, etcétera. En otras palabras, es considerado trabajo inútil e inservible para aquellos que hoy gobiernan las universidades del capitalismo académico con criterios mercantiles, sean públicas o privadas.

Ahora bien, todos sabemos que publicar en dichas revistas es ingresar en circuitos o redes que son verdaderas “mafias” académicas. En muchas de las revistas indexadas (ISIS, SCOPUS y ScIELO) se ejercen todo tipo de discriminaciones y exclusiones. Ellas representan, por lo general, las formas hegemónicas y culturales que hoy predominan en las Ciencias Sociales y en la academia nacional.

Cuando mi generación concluyó -en los años 80- sus estudios de grado o posgrado, el gran problema que teníamos era cómo reducir nuestras tesis de 200 o más páginas, a 30 páginas para publicar alguno de sus capítulos como artículo. Hoy por hoy, las y los estudiantes deben escribir un artículo de 25 a 30 páginas para recibir sus licenciaturas con temáticas debidamente certificadas en las “corrientes o tendencias en uso” cuya verificación tanto teórica como metodológica se encuentran relacionadas con los criterios establecidos por las revistas indexadas. Lo lamentable es que con ello se están graduando los futuros científicos sociales, aquellos que más que sostener el pensamiento crítico, el saber académico, se dedican a producir conocimientos consultoriales que se venden en el mercado del conocimiento. Por esa razón, esos artículos son “investigaciones librescas” o textos elaborados a través de la técnica del parafraseo de una lista de variados y diversos autores “consagrados” o de “moda”. Esos artículos no tienen ninguna pretensión teórica, metodológica o epistemológica. Y cuando las tienen, las evaluaciones son bajísimas o procedimentales o son acusados de tendenciosos, ideológicos, o los señalan con la

sentencia preferida: “carece de objetividad científica”. Por lo tanto, se trata de artículos que no serán publicados en ninguna revista indexada de las anteriormente señaladas. Sus autores no producen conocimiento válido y serán discriminados y excluidos de ellas si no cambian su manera de concebir el saber. Hoy, entre las normas que CONICYT exige para que un estudiante logre obtener una beca para la realización de posgrado (magíster o doctorado), está tener artículos indexados. Por esa razón, vemos que el número de becas cada año se reducen, basta ver lo que ha ocurrido este año para entender la política excluyente de CONICYT en esta materia.

En fin, todos sabemos que la calidad de la producción científica-académica no pasa por publicar en revistas indexadas ni tampoco por la cantidad de páginas, sino más bien por la solidez de los procesos investigativos; la rigurosidad de las metodologías aplicadas; la consistencia teórica; la relevancia epistemológica de la reflexión implícita en el trabajo, en el conocimiento de la producción científica actualizada y, sobre todo, en la originalidad del planteamiento que realizan las/ los autores. En eso CONICYT no puede dictar cátedra. A lo largo de tres décadas tiene mucho tejado de vidrio.

Otro tanto ocurre con los concursos de FONDECYT. Este pienso que es un tema que alguna vez las y los académicos nacionales deberemos enfrentar y discutir abiertamente. Pues en estos concursos la corrupción académica está instalada de manera permanente y ha sido sostenida por un conjunto de investigadores-clientes de FONDECYT, la mayoría de ellos pertenecientes a las universidades del CRUCH. Un ejemplo es el Concurso Nacional de Proyectos FONDECYT. En él la corrupción académica se presenta de manera agobiante. Partamos señalando que muchos de los “evaluadores” son “juez y parte” del proceso de selección de los proyectos que se presentan. Este defecto ha existido desde el momento mismo que se estableció el concurso allá por los años ochenta del siglo pasado. Son tres décadas de lo mismo y nunca ha sido modificado. Nunca que se ha creado, por ejemplo, un referato ciego, así como se hace para otros concursos. Todos los y las integrantes de los grupos de estudios saben perfectamente quiénes son los “evaluadores” y los evaluadores saben perfectamente quién es o quiénes son los investigadores que evalúan. Esto ha dado lugar al surgimiento de “mafias



académicas" que dominan las disciplinas científicas. Se trata de la colusión de las/los investigadores y académicos que se concertan para favorecer tal o cual línea de investigación o a determinados académicos. Son estas mafias las que "objetivamente" seleccionan a los "elegidos" para desarrollar la investigación principal en Chile.

A este nivel, el tráfico de influencia, el manejo de información privilegiada, el intercambio de regalos, etcétera; es una práctica permanente entre los investigadores que postulan y los posibles evaluadores. O sea, en otras palabras, la corrupción académica aquí es muy extendida. Una forma de corrupción académica es, por ejemplo, mandar un proyecto de investigación elaborado por un académico, que no tiene los "antecedentes académicos" de acuerdo con el grupo de trabajo de FONDECYT, con el nombre de uno que sí los tiene y de una universidad "principal". La lista es larga. Ello evidencia la corrupción académica que el capitalismo académico exige a los investigadores en la actualidad, todo por cumplir con los indicadores que le exigen para mantener el puesto de trabajo como docente y escasamente como investigador.

Otro lado oscuro de FONDECYT son las formas cómo los diversos comités de estudios cambian o modifican los estándares para la evaluación de los proyectos en cada concurso. Este aspecto es muy recurrente y los estándares dependen de los criterios del grupo de estudio que se conforma. La composición de esos grupos de estudio son también un misterio. Nunca se ha sabido como son elegidos los integrantes. La falta de pluralidad interna de ellos es muy evidente. Cómo y de qué forma son asignados los evaluadores de los proyectos presentados es otro gran misterio.

Ese misterio es, por cierto, expedito para fomentar el tráfico de influencia o, sobre todo, el manejo de información privilegiada. Las arbitrariedades son permanentes. Las discrepancias teóricas, políticas e ideológicas en la evaluación de un proyecto de investigación son un problema para todos aquellos investigadores que presentan proyectos que quiebran la norma hegemónica al interior de una disciplina o son políticamente inapropiados. Por ejemplo, es imposible hacer entender a los "historiadores tradicionales" la existencia de la historia política reciente o la historia del tiempo presente. O peor es cuando se presentan

proyectos que buscan innovar teórica o metodológicamente el análisis de algunos de los saberes establecidos como únicos y verdaderos o los cánones tradicionales de las Ciencias Sociales.

Por la existencia de las mafias académicas, de la corrupción académica, por la falta de transparencia de la forma como son fallados los concursos, y por otras tantas cosas que ocurren y muchos investigadores han denunciado a lo largo de estos años, CONICYT debiera entrar en un proceso de democratización sustantiva.

Pero ello solo va a ser posible si logramos cambiar la lógica interna que durante más de 30 años predomina en CONICYT, me refiero a la hegemonía del capitalismo académico, científico y tecnológico neoliberal. Y, sobre todo, si se pone fin a las formas corruptas que hoy dominan su quehacer.

Todos los que han dirigido CONICYT, nombrados por los gobiernos de la Concertación hasta el día de hoy, no han modificado ni alterado esa lógica. Tengamos presente quién es su actual Director Ejecutivo y sabremos cómo va a dirigir el CONICYT. Cabe señalar que al revisar sus antecedentes académicos no tiene ningún artículo en revista indexada.



## **Una reflexión política sobre las formas de contratación en las universidades del capitalismo académico neoliberal**

*En marzo de 1980,  
el historiador Julio Pinto Vallejos  
se presentó ante la directora  
del Departamento de Historia, Olga Ortúzar.  
Le entregó su CV, documento que la autoridad  
leyó con interés y parsimonia.  
Miró de frente al aspirante y le dijo:  
"Me interesa. Comienza usted el lunes con docencia  
parcial en el área de Historia de América".<sup>171</sup>*

Por el relato que se consiga en el epígrafe, da la impresión de que en dictadura (1980) ingresar como académico a la Universidad era, tal vez, mucho más "fácil" que ingresar hoy, en la supuesta recuperada democracia, como profesional a las universidades del capitalismo académico.

En realidad, ni ayer ni hoy ha sido fácil ingresar a la universidad pública. Actualmente, se ingresa a estas universidades a través de concursos académicos públicos, tal como lo ha impuesto la Comisión Nacional de Acreditación, sin embargo, la mayoría de ellos son "truchos", es decir, arreglados previamente para que sea seleccionado el/la candidato/a escogido con antelación. En esos concursos se establecen exigencias académicas y profesionales que ningún académico contratado antes de 1990, especialmente entre 1973 y 1990, habría podido cumplir mínimamente. Estos rayan en el absurdo, en lo insensato y, expresan herméticas discriminaciones. Por ello, podríamos sostener que la mayoría de esos concursos tienen vicios anticonstitucionales. Ellos se confeccionan con la clara intención de excluir y marginar. Y se convocan tan solo con el objetivo de legitimar y, sobre todo, proteger el ingreso al ganador del concurso, o sea, al "elegido".

---

<sup>171</sup> Ver: <http://www.udesantiagooaldia.usach.cl>

Con los concursos públicos instaurados una vez terminada la dictadura en 1990 se buscaba la democratización de las formas y los procedimientos al interior de las universidades públicas, pero esto no implicó la eliminación de las normas que regían a las universidades desde 1980, momento del establecimiento de la universidad del capitalismo académico neoliberal.

Con los concursos públicos se quiso, así fue planteado por lo menos en el discurso: democratizar y dar transparencia a la selección de los académicos y, al mismo tiempo, desarrollar un mecanismo que evitara la forma arbitraria y unipersonal de contratar a los académicos en las universidades nacionales, especialmente, las del CRUCH, que había regido en el periodo 1973-1990. Se crearon normas, se institucionalizaron reglas, pero el mecanismo resultó espurio, de la misma forma como aquel que buscaba corregir. Los concursos públicos actuales son un procedimiento, como he dicho, para darle legitimidad a la "corrupción" académica institucionalizada que hoy domina a la contratación en las universidades nacionales tanto públicas como privadas.

Por eso es pertinente preguntarse si hoy las actuales autoridades académicas de la USACH y de otras instituciones del CRUCH, estarían dispuestas a recibir y a contratar a un profesional y académico de las Ciencias Sociales u otra profesión de la forma que la Sra. Olga Ortúzar lo hizo, en 1980, cuando contrató al profesor Pinto, en el departamento de Historia de la USACH.

Habría que advertir que en esa época la USACH, ex Universidad Técnica del Estado, era una universidad intervenida militarmente y la mayoría de sus directivos designados con el beneplácito de la dictadura militar. En el departamento de Historia, la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía tenía clausurado el ingreso desde 1973. Y, en los años siguientes, simplemente dejó de existir, como consecuencia de la nueva institucionalidad universitaria establecida en los años 80 del siglo pasado, por la dictadura. Con base en esa normativa, en 1985 los docentes "relictos" organizaron el programa de Magíster en Historia como una forma de darle continuidad al Departamento de Historia. El Magíster de Historia funcionó durante años con "académicos taxis" provenientes de otras universidades tanto públicas como privadas, pues la planta

docente del Departamento de Historia no alcanzaba los 10 docentes e investigadores.

Cabe señalar que ninguno de esos “viejos” docentes e investigadores ingresó por concurso público al Departamento de Historia de la USACH: ni Carmen Norambuena, ni Luis Ortega (1985), ni Juan Guillermo Muñoz (1977), ni René Salinas (1986), ni Julio Pinto (1980), entre otros, Todos ellos fueron cooptados o reclutados en virtud del poder que ejercía la directora.

Ahora bien, la verdad sea dicha, la profesora Ortúzar tuvo buen “ojo” en elegir a algunos de esos profesionales. Algunos de ellos años más tarde destacarían en la ciencia histórica. Ella les brindó la oportunidad y también el tiempo y los recursos para que pudieran desarrollar y ampliar sus formaciones académicas y profesionales.

Los concursos públicos y de oposición, bajo la inspiración democrática inicial, comenzaron en el primer lustro de los años 90. Hay varios de ellos que son recordados hasta el día de hoy. La historia oral brinda sabrosas y entretenidas anécdotas de lo ocurrido con algunos de ellos. Desgraciada y tempranamente esos concursos académicos mostraron la tendencia predominante hasta la actualidad, no solo en el Departamento de Historia de la USACH, sino en todas las instituciones universitarias públicas y privadas nacionales. Para decirlo de manera simple y breve, adoptaron la vieja fórmula mexicana del “retrato hablado”, o sea, definir el ganador de antemano.

Con todo, ninguna autoridad académica actualmente estaría en condiciones de hacer lo que hizo la profesora Ortúzar en 1980. Quienes hoy se encargan de “reclutar” a los académicos son los burócratas y tecnócratas de los departamentos de Recursos Humanos de las universidades, en concordancia con los académicos de las Facultades o Departamentos que ofrecen alguna vacante. Son ellos los encargados de elaborar las bases de los Concursos Públicos, ajustadas a los criterios sugeridos por el Ministerio de Educación, a través del programa MECESUP (Programa de Mejoramiento de Educación Superior), los cuales, a su vez, están estrechamente ligados a los criterios de selección que impone el Banco Mundial. Y éstos siguen los lineamientos establecidos, *urbe et orbi*, en los acuerdos de Bolonia, el consenso neoliberal mundial en materia de Educación Superior. Estas bases están también

alineadas con los criterios con cuales se construyen los *rankings* de clasificación de las Universidades. De manera que las burocracias solo entienden de indicadores y de puntajes. No de percepciones subjetivas.

La construcción de esos indicadores aritméticos, así como las bases de los concursos públicos son cada vez más discriminadores y excluyentes. Pues con el objeto, supuestamente, de evitar decisiones arbitrarias unipersonales, han terminado por institucionalizar lo que he llamado, en otro lugar, la corrupción académica institucionalizada al servicio del capitalismo académico. Dado que la mayoría de los seleccionados son elegidos en función de la productividad futura, en dos planos, simbólica y académica. Estos deben producir conocimientos no necesariamente para el saber académico, sino más bien producir una "mercancía" o un artefacto, tales como: proyectos de investigación vendibles y "artículos/paper" que circulen en el espacio académico y, supuestamente, científico. Pero que, en lo fundamental, tengan un valor simbólico: otorguen prestigio y status. Y que éste se traduzca en puntos para sumar y subir en el *ranking* universitario.

Esta forma de producir académico es -y así debe ser entendido- un mecanismo de acumulación de capital simbólico que se traduce en capital financiero. El estar en los primeros lugares del *ranking* provee los recursos financieros para las universidades nacionales. Desde que se impuso en los años ochenta el autofinanciamiento de las universidades públicas, éstas deben administrar a las universidades como "empresas" productoras de conocimientos y formadoras de profesionales para el mercado, por lo tanto, deben procurar vender todo lo que producen, o sea, vender conocimientos. En las universidades privadas, este mecanismo se utiliza como una forma de evitar invertir en investigación en forma directa y, sobre todo, para no afectar la tasa de ganancia, o sea, el lucro.

Por cierto, estas son formas de explotación académica y el modo como el capitalismo académico extrae la plusvalía a los trabajadores intelectuales de las universidades. En función de este mecanismo de acumulación, los criterios que informan los concursos públicos están dirigidos a seleccionar a los

profesionales que demuestren haber sido altamente productivos, independientemente de los saberes producidos. Lo que interesa al capitalismo académico es que ese profesional genere capital tanto simbólico como financiero a lo largo del tiempo.

Hoy no interesa mucho el saber acumulado ni los conocimientos obtenidos ni la formación profesional, ni la experiencia académica y profesional de los postulantes. A la tecnocracia universitaria actual solo les interesa "evaluar": cuánto ha producido, produce y lo que podría producir en el corto plazo. Pero no toda la producción académica es válida y pertinente. Solo aquella que haya circulado principalmente en formato de artículos en "revistas indexadas", especialmente Scielo, ISIS y Scopus. La producción de libros es considerada válida solo y cuando la editorial sea de "prestigio" y que el libro haya sido arbitrado por pares. Se descartan así diversas editoriales que no tienen ese mecanismo para seleccionar lo que se edita. Por otro lado, tener un proyecto FONDECYT de investigación se ha transformado en una condición *sine qua non* para competir. Quien no haya obtenido un FONDECYT mejor debe abstenerse de postular.

Estos son los indicadores de productividad altamente valorados por las universidades nacionales. Evidentemente, se requiere tener doctorado. Lo absurdo, por ejemplo, de la mentalidad burocrática tecnocrática neoliberal de los seleccionadores, es que muchos de los integrantes de las Comisiones carecen del grado académico que solicitan. Esto ocurre, especialmente, en las universidades regionales del CRUCH.

En el año 2009 se estableció el programa de formación de capital avanzado por parte de CONICYT, se han otorgado 276 becas para realizar estancias de doctorado en el extranjero. Ello significa que el postulante aprobó un proyecto de investigación para realizar durante su estadía en una prestigiosa universidad rankeada y bajo la coordinación o tutela de un destacado académico de esa institución. El Estado ha invertido miles de dólares en ello. Sin embargo, lo más absurdo es que en las bases de cuatro concursos públicos convocados, por igual número de universidades del CRUCH, no consideran al posdoctorado como válido.



Volvamos al caso de la contratación del profesor Pinto. Él fue contratado en 1980. En aquella época estamos seguros de que el Currículum Vitae (CV) del profesor Pinto no registraba ningún artículo ni libro publicado. El primer artículo en su CV es de 1982; tampoco contaba con proyectos de investigación FONDECYT, el primero lo obtuvo en 1988, y no era doctor, pues dicho grado lo obtuvo 11 años más tarde, en 1991.

En esos años bastaba con el grado académico o título profesional y, sobre todo, con el trabajo de tesis de grado. Pero también con los padrinos y madrinas que se tenían, dónde se había estudiado y con quién, y un largo etcétera. Entonces los prejuicios sociales, culturales, políticos e ideológicos se imponían, igual que hoy, pero hoy se encubren con las bases de los Concursos Públicos.

Dejo este comentario para reflexionar, con el objeto de llamar la atención sobre que muchas de las reglas y normas que se imponen en los concursos públicos, tanto para ingresar a la universidad como para ser académico, son profundamente discriminatorias, arbitrarias y cuyo fin es, fundamentalmente, seguir manteniendo el capitalismo académico en las universidades nacionales. Estas reglas y normas han sido construidas por los mismos que ayer ingresaron a la universidad sin cumplir con los requisitos que hoy exigen. Paradojas de la historia o las miserias de la academia en la sociedad neoliberal, a pesar de lo que opine Ernesto Ottone.

**Tomás Moulian:  
El último “rebelde con causa” de los años  
sesenta.  
Premio Nacional de Ciencias Sociales y  
Humanidades 2015.<sup>172</sup>**

Tomás Moulian ha sido testigo, protagonista y analista privilegiado de la historia reciente chilena, especialmente del periodo que va desde mediados de la década de los sesenta hasta hoy en día. Ha vivido en los últimos cuatro “Chiles” posibles en ese periodo: el Chile de los rebeldes con causa (1960-1970), el Chile Popular (1970-1973), Chile Dictatorial (1973-1990) y el Chile Actual (1990-2015).

El Chile de los “rebeldes con causa”, constituye el periodo formativo de este intelectual que se compromete tempranamente con el pensamiento crítico y con la idea del cambio social y político que adquiere, sin duda, estudiando sociología en la Universidad Católica de Chile cuya escuela, en aquellos años, estaba bajo el cuidado y el influjo del sacerdote jesuita y promotor de las “reformas revolucionarias” para América Latina, Roger Vekemans. En esa escuela de sociología, la segunda fundada en Chile -la primera se había establecido en la Universidad de Chile en 1957- van a formarse los principales intelectuales “rebeldes” de la década de

---

<sup>172</sup> Este artículo escrito en reconocimiento al trabajo intelectual y académico-político de Tomás Moulian, al momento de recibir el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades. Se basa en otro redactado como Introducción para la versión escrita de la entrevista realizada a Tomás Moulian para *Crítica y Emancipación* Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales del Consejo de Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, en el año 2008. El texto que aquí presentamos es una versión ampliada, corregida y revisada de esa Introducción. La entrevista puede ser consultada en: Emir Sader, Juan Carlos Gómez Leyton, Horacio Tarcus (2008). *Tomás Moulian: Itinerario de un intelectual chileno*. *Crítica y Emancipación*, año 1, N°1, Buenos Aires, pp. 129-174. Hay una versión de esta entrevista en formato audiovisual que puede ser vista en el canal de YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=hPHx1Z8Jp20&t=3s>

los sesenta, como Manuel Antonio Garretón, José Joaquín Brunner, Rodrigo Ambrosio, y el propio Moulian, entre muchos otros.<sup>173</sup> Con ellos Moulian comparte amistad, formación intelectual y militancia política. Todos van a militar más tarde en el MAPU.

Luego de tres años de estar estudiando en Lovaina, Moulian, regresa a Chile y se incorpora como profesor en la Escuela de Sociología de la Universidad Católica y dicta entre 1967 y 1968 los primeros cursos y seminarios sistemáticos de marxismo. La “reforma universitaria”, la gran hazaña política de las y los jóvenes “rebeldes con causa” chilenos de los años sesenta, había abierto las puertas al pensamiento crítico en dicha casa de estudios. Y el pensamiento marxista comenzó a ser enseñado y estudiado, siendo Moulian uno de sus principales promotores, analistas y divulgadores. En los programas de los cursos y seminarios que el joven profesor preparó para sus estudiantes quedaron plasmadas sus principales lecturas y, sobre todo, su principal influencia intelectual y teórica del momento: Luis Althusser.<sup>174</sup>

En efecto, Moulian se hace marxista a través del pensamiento althusseriano. Pero durante el Chile Popular, Moulian tiene una obsesión intelectual, como él mismo lo señala, con el pensamiento de Vladimir Ilich Lenin. Su objetivo no es rescatar a Lenin como un teórico de la revolución socialista sino, fundamentalmente, como un analista de la política, que tiene la cualidad de identificar las coyunturas políticas claves al interior del proceso político como de la lucha de clases, con el objeto de transformarlas en posibilidades políticas reales para “hacer la revolución”. Por esa razón, ya como profesor e investigador del Centro de Estudios de la Realidad Nacional, Moulian escribe lo que hoy podríamos nombrar como la “justificación teórica” de un programa de investigación en torno al pensamiento de Lenin. Investigación que quedará inconclusa en cuanto a su transformación en texto escrito, pero no en el desarrollo del pensamiento teórico y analítico de Moulian, pues muchos de los

---

<sup>173</sup> Cfr. Brunner, José Joaquín (1988). *El caso de la sociología en Chile. Formación de una disciplina*. Ed. FLACSO-Chile.

<sup>174</sup> Hemos tenido la oportunidad de revisar los distintos programas de cursos y seminarios preparados por T. Moulian en la Escuela de Sociología de la Universidad Católica entre 1967-1970; con el objetivo de seguir la pista a la recepción del pensamiento althusseriano en Chile.

elementos planteados en el artículo de 1972 serán retomados en sus trabajos posteriores como, por ejemplo, en "Conflicto Político durante la Unidad Popular", en donde aplica el concepto central de sus lecturas leninistas: el de coyuntura política.<sup>175</sup>

Pero el Chile Popular exigía e imponía tareas al intelectual militante. Moulian ingresa al Movimiento de Acción Popular (MAPU) partido político que fundan los jóvenes rebeldes de la Democracia Cristiana encabezados por Rodrigo Ambrosio, en 1969.

Hastados del reformismo y, sobre todo, del aparente fracaso de la "revolución en libertad" propiciada por el gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva, los sectores más críticos y rebeldes del partido lo abandonan y se transforman en "revolucionarios". Para, tal efecto, fundan un nuevo partido político que no sólo fuera revolucionario sino, esencialmente, leninista, o sea, una verdadera vanguardia del proletariado, cuya principal tarea sería hacer la revolución socialista. La nueva organización política se incorpora a la Unidad Popular y en diciembre de 1969, su precandidato presidencial Jacques Chonchol, retira su candidatura para posibilitar que Salvador Allende Gossens, precandidato del Partido Socialista, pueda presentarse por cuarta vez como candidato a la presidencia de la República en representación de las fuerzas sociales y populares.

En aquellos tiempos, los partidos políticos sean estos de izquierda, derecha o centro tenían un rol protagónico en la vida política de cualquier sociedad y sistema político. En otras palabras, los partidos dominaban, mandaban y eran obedecidos. Al decir de Gramsci eran los "príncipes", y como todos los "príncipes" requerían consejeros, y los intelectuales muchas veces se convirtieron en los principales consejeros de los líderes o de los principales conductores de los partidos. Moulian se constituye en uno de los principales intelectuales del MAPU. Traduce y piensa lo que el partido ordena o pide.

Pero a pesar de este dominio sobre el trabajo de los intelectuales militantes, estos lo asumían sin la rebeldía que muchos de ellos sí van a experimentar y practicar años más tarde.

---

<sup>175</sup> Cfr. Moulian, Tomás (1972). "Acerca de la lectura de los Textos de Lenin: una investigación introductoria", en Cuadernos de la Realidad Nacional, N° 13, julio de 1972, pp.187-204.

Ante el fracaso de la gesta construida por los partidos políticos, se rebelaron e impulsaron la autonomía crítica frente a sus organizaciones partidistas. Muchos renunciaron a los partidos e inclusive plantearon su transformación radical o, simplemente, su desaparición o disolución, especialmente de las llamadas vanguardias. Moulian, a pesar de renunciar al MAPU, en los años ochenta, en los años de la renovación socialista chilena, y de su crítica a la izquierda, continuará pensando y sosteniendo que los partidos políticos son organizaciones, especialmente, en el caso chileno, centrales para cualquier proceso de cambio y de transformación social y política. Aunque reconoce la importancia de los movimientos sociales, sigue siendo “un intelectual de partido”. Es la impronta que le dejó el Chile Popular.

Moulian vive el Chile popular con júbilo, alegría y también, como muchos, con “susto”. El júbilo se explica por el triunfo logrado por las fuerzas populares de la Unidad Popular y por Salvador Allende, quien triunfa y accede al gobierno después de largos 18 años de sostener que la vía política institucional, o sea, la vía electoral, era un camino posible para la conquista de un gobierno popular, socialista y revolucionario que abriera las “puertas a la historia”, es decir, para iniciar la construcción del socialismo de manera pacífica y democrática.

El “susto” que, muchos militantes de los partidos populares y adherentes de la Unidad Popular, así como los allendistas de siempre, experimentaron el día después de la victoria tiene relación con las escasas expectativas de ganar la elección presidencial de septiembre de 1970. En el ambiente político partidista de la izquierda, tanto de la vieja izquierda, o sea, entre socialistas y comunistas, como entre los militantes de la nueva izquierda: mapucistas y miristas, entre otros, no existía convicción de que

Salvador Allende fuera a ganar las elecciones.<sup>176</sup> Demasiados analistas se sorprendieron cuando esto ocurrió, entre los cuales estaba el propio Moulian. De manera que su “susto” era comprensible.

Ese “susto” o “temor”, por cierto, no tiene la magnitud ni la intensidad ni el carácter del “miedo” o el “terror” que experimentaron los sectores dominantes ante el triunfo popular. Se trata del “susto” a la responsabilidad política de poner en marcha un proceso político para el cual demasiados dirigentes de la Unidad Popular no estaban, al parecer, preparados ni contaban con las capacidades para realizarlo. Hacer la “revolución” es, por cierto, una tarea histórica y política que exige audacia, decisión, acción directa y concreta, además de ciertos personajes históricos con una determinada madurez y sapiencia, capaces de ir más allá de las situaciones y circunstancias históricas en que se desenvuelve el proceso político. Tengo la impresión de que la generación de los “rebeldes con causa” no estuvo a la altura de las exigencias y tareas que ellos mismos promovieron con sus actos y, sobre todo, con sus dichos, discursos y escritos.

Este punto lo confirma el propio Moulian al analizar a la Unidad Popular como un momento de fiesta y de drama cuando nos describe el 4 de septiembre de 1973, o sea, el día que se están celebrando los tres años del triunfo popular de 1970:

*“en la gran marcha del 4 de septiembre de 1973 los manifestantes gritaban con un nudo en la garganta, sobrecogidos por la sensación de peligro, por la convicción de que, a esa altura del proceso de polarización, solamente gestos muy audaces podían salvar la situación...Sin embargo, -agrega confirmando nuestra tesis- a esa altura*

---

<sup>176</sup> Incluso el politólogo Miles Wolpin había señalado tempranamente a dos años de las elecciones, en 1968, que existían una serie de factores estructurales en la sociedad chilena que impedían u obstaculizaban el triunfo de la izquierda en las elecciones presidenciales de 1970. Cfr. Wolpin, Miles (1968). “La izquierda chilena: factores estructurales que dificultan su victoria electoral en 1970” en Foro Internacional, IX, México. Para un análisis politológico de las elecciones presidenciales de 1970 en el cual sostenemos la tesis de que el triunfo de la izquierda en 1970 no fue de ninguna manera inesperado sino todo contrario y, por lo tanto, no debió haber producido la “sorpresa” que produjo. Cfr. Gómez Leyton, Juan Carlos (1999). “La elección presidencial de 1970 en Chile. Una mirada desde la teoría económica de la democracia de Anthony Downs”, en ESTUDIOS, pp. 57-57. Primavera-verano, Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, México.

*Allende y los partidos estaban paralizados. Habían perdido la energía, la fuerza, la capacidad de reacción y la perspectiva nacional, esterilizados por los conflictos internos*<sup>177</sup>.

Diversas coyunturas políticas críticas se presentaron durante el gobierno popular que habrían evitado terminar en lo que acabó, en la tragedia de la derrota. Pero en esas coyunturas las dirigencias de los partidos no tuvieron la audacia ni la capacidad para transformarlas, tal vez, en momentos decisivos a favor del movimiento popular.<sup>178</sup> Al no hacerlo, los propios partidos que habían permitido la fiesta la fueron convirtiendo en tragedia. La Unidad Popular no era una tragedia griega, con un fin predeterminado, la historia pudo trazarse de otra manera. No se pudo, fundamentalmente, porque en la izquierda chilena no sólo estaban los sectores realistas y los soñadores, como dice Moulian, sino porque también existían demasiados Esquilos.

En el Chile Dictatorial, entre 1973 y 1990, el susto y el júbilo se transformaron en terror, en pavoroso miedo, que invade todo. Moulian enfrenta el terror que la dictadura impone en la sociedad chilena con reflexión política y una prolífica actividad intelectual. Utilizando la periodización establecida por Régis Debray, el exrebelde francés, en la historia de las ideas de Moulian, la dictadura militar correspondería a la etapa de la grafosfera, o sea, la etapa de la razón y, sobre todo, del libro.<sup>179</sup>

Moulian escribe libros con poder o los libros de Moulian tienen poder. Que no significa que los libros le permitan a Moulian tener o alcanzar el poder, según lo señalado por Zaid.<sup>180</sup> Todo lo contrario, son libros que critican el poder establecido y que lo

---

<sup>177</sup> Moulian, Tomás (1993). "La Unidad Popular: *Fiesta, Drama y Derrota*", en T. Moulian: *La Forja de Ilusiones: el sistema de partidos, 1932-1973*. ARCIS-FLACSO, Santiago de Chile.

<sup>178</sup> Una de las principales y, tal vez, más significativas coyunturas críticas o claves experimentadas durante el proceso político de la Unidad Popular es la que se vive el 29 de junio de 1973. Luego de ser sofocado por el Gobierno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército, el levantamiento militar protagonizado por las tropas del Regimiento Blindado N°2, sectores sociales populares pidieron a "viva voz" al Presidente Allende que se abrieran los "arsenales de guerra" para que el pueblo pudiera defenderse, que se cerrara el Congreso Nacional y El Mercurio, los principales espacios opositores al gobierno popular. El presidente Allende, rechazó vehementemente la petición popular. El camino al Golpe estaba abierto.

<sup>179</sup> Debray, Régis (2007). "*El Socialismo y la Imprenta: un ciclo vital*", en *New Left Review*, 40 sep./oct 2007. Madrid, pp. 7-26.

<sup>180</sup> Zaid, Gabriel (1988). *De los Libros al Poder*. Ed. Enlace-Grijalbo, México, 1988, pp. 15-34.

desafían. Pero no sólo al poder dictatorial sino también al poder de los partidos políticos, de la clase política y de los intelectuales.

Su preocupación central durante el Chile dictatorial es “*escribir para el futuro*”, reflexionando el presente, analizando el pasado. Bajo la influencia de B. Croce, el sociólogo se hace historiador político.<sup>181</sup>

El análisis de la historia reciente chilena, específicamente del periodo de la Unidad Popular (1970-1973), lo llevan a plantear que la única forma de entender tanto su génesis como su derrota es analizarla en el largo plazo. Para tal efecto, Moulian considera que es necesario comprender y sobre todo conocer la historia del siglo XX en Chile, especialmente el periodo que va entre 1932 y 1973.<sup>182</sup>

La interpretación que ha elaborado constituye una poderosa argumentación que muy pocos han osado, hasta hoy, discutir o contradecir, a pesar de los numerosos flancos débiles y vacíos que contiene.<sup>183</sup> De allí que sus libros y escritos de este periodo: *La Unidad Popular y el Conflicto Político en Chile y Democracia y Socialismo*, constituyen libros hoy clásicos y referencia obligada para cualquiera que intente o busque analizar la historia política de Chile desde 1932 hasta 1973, esos libros, son libros con poder.

Como un cabal representante de la época grafosfera, Moulian es un intelectual que piensa el socialismo como futuro posible. Recuperando para el socialismo chileno la idea de la democracia. Sin las reflexiones políticas sobre el desarrollo

---

<sup>181</sup> Moulian, Tomás (1993). “*La forja...*”; pp. 267

<sup>182</sup> Sostiene Moulian que la “hipótesis principal que se elabora es que la crisis estatal que estalla en 1973 tuvo una incubación durante el periodo de profundización democrática, cuyas condiciones institucionales fueron creadas por las reformas políticas de mediados de 1958... Esto no significa que la crisis estatal del año 1973 tuviera un carácter ineludible o fuera la consecuencia fatal del todo proceso de profundización democrática... todo lo contrario. La perspectiva teórica de este trabajo es que los factores de largo plazo de la crisis política chilena no hay que buscarlos en el nivel de las determinaciones en última instancia, sino en la forma histórica, específica y particular, de la constitución de los principales sujetos políticos”. Cfr. Moulian, Tomás (1993). *Democracia y Socialismo*, FLACSO-Chile, Santiago de Chile, 1983.

<sup>183</sup> Algunos planteamientos críticos a las argumentaciones de Moulian sobre la evolución política de Chile en el periodo señalado se encuentran en Gabriel Salazar y Julio Pinto (1999). *Historia Contemporánea de Chile*, Tomo I, LOM Ediciones. Santiago de Chile y más directamente en Gómez Leyton, Juan Carlos (2004). *La Frontera de Democracia*. LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2004



histórico de la democracia y de la izquierda en Chile no habría sido posible el proceso de renovación socialista que tiene en Moulian uno de sus principales gestores y promotores.

La coyuntura del plebiscito en 1988 y la posterior transición a la democracia, a partir de 1990, son procesos políticos ácidamente criticados por Moulian. Su crítica apunta especialmente a la negación, por parte de las fuerzas políticas democráticas opositoras a la dictadura militar, de transformar la coyuntura plebiscitaria en un momento “revolucionario” que avanzara en la democratización profunda de la sociedad chilena. Según su particular lectura, el triunfo en el plebiscito constituyó una victoria táctica, pero una derrota estratégica. El fantasma del “viejo Lenin”, recompuesto por Moulian, volvía por sus fueros.

En 1993 en la Corporación de Estudios para América Latina, CIEPLAN, Moulian, con una imagen que recordaba más a Marx que a Lenin, dejó en silencio a los asistentes al Seminario “¿Hacia dónde va la sociedad chilena?” con una provocadora tesis. De entrada, desenvainó la espada con el objeto de confrontar los mitos que las y los chilenos habían construido de su pasado. Especialmente, del gran relato mítico sobre su acontecer político. Sus reflexiones iban dirigidas de manera descarnada y despiadada en contra del laudatorio y celebrado “éxito de la transición y de la reinstalación democrática” chilena.<sup>184</sup>

En aquella oportunidad, Moulian comenzaba a utilizar un recurso explicativo que cobraría un éxito inusitado cuatro años más tarde en su libro *Chile Actual: anatomía de un mito*, el recurso de las metáforas. El uso de nociones metafóricas está dirigido, según expuso, a

---

<sup>184</sup> Moulian, Tomás (1993) *¿Democracia de consensos o democracia de conflictos?* en Colección de Estudios CIEPLAN, # 38, Santiago de Chile, pp. 106-113. La tesis central sostenía que a) el Gobierno Militar logró imponer una transición sin negociación que -por tanto- éste no fue un proceso pactado, b) que el Gobierno Militar, aun siendo derrotado en 1988, consiguió acotar la negociación plebiscitaria de 1989, c) que impuso un marco institucional que ha limitado al extremo las posibilidades que el primer gobierno posautoritario pudiera realizar una política de profundización democrática, tanto en el campo económico-social como en el campo propiamente político y d) que consiguió además otra victoria decisiva en el terreno simbólico: que los actores centrales en este primer gobierno se vieran empujados a consagrar el tipo de transición como ejemplar y se vieran forzados, por lógicas de reproducción del modelo económico, a impulsar una estrategia de cambios mínimos y legitimadores y a olvidar casi completamente el bajaje crítico del movimiento democrático del ochenta.

*“hacer resaltar el peso de una serie de hechos que favorecen la conexión a tierra, que permiten contemplar el rostro verdadero de la democracia realmente existente que hemos idealizado como una casi perfecta democracia de consensos”.*<sup>185</sup>

***El Chile Actual: anatomía de un mito***, el más importante libro de Moulian hasta ahora, está construido sobre metáforas que van describiendo la nueva sociedad chilena que es producto de una fértil *“ménage a trois”*, o sea, de la *“materialización de una cópula entre militares, intelectuales neoliberales y empresarios nacionales o transnacionales”*, realizada en un revolucionario coito de larga duración, 17 años, destinado a producir al Chile Actual.<sup>186</sup> El libro está poblado de metáforas: páramo del consumidor, paraíso del ciudadano, transformismo, gatopardismo, compulsión al olvido, etcétera. No pretendo hacer aquí un análisis minucioso de este poderoso libro, sino simplemente consignar su importancia para las Ciencias Sociales en Chile. Podríamos sostener que el análisis de la historia política reciente de la sociedad chilena se divide en un antes y un después del libro de Moulian. El pensamiento crítico, especialmente, se ha nutrido de las diversas hipótesis que se exponen en el libro. Pero también es el punto de partida para construir la crítica a la crítica del texto de Moulian.<sup>187</sup>

Cuando en la sociedad chilena comenzaba a desplegarse el dominio irrestricto de la videosfera, Moulian produce un libro que tiene actualmente más de 17 ediciones, convirtiéndose en el texto más influyente del siglo XX, según una encuesta elaborada por el *“prestigioso”* diario El Mercurio de Santiago, a través de su Revista de Libros. Otro libro con poder.

---

<sup>185</sup> Idem, pp, 109.

<sup>186</sup> Moulian, Tomás (1997). *Chile Actual. Anatomía de un mito*. Ediciones LOM/U.ARCIS. Santiago, p.18.

<sup>187</sup> Hace una década (1998) escribí una larga reseña crítica al libro de Moulian. En ella discuto y rechazo diversas afirmaciones que contiene el texto que considero desafortunadas o derechamente equivocadas y, sobre todo, crítico las omisiones de Moulian, especialmente de algunos grupos políticos e intelectuales de izquierda que rechazaron tempranamente el camino adoptado por el movimiento democrático de los ochenta y denunciaron la institucionalización y perpetuación en el tiempo de la dictadura militar. Dicha reseña saldrá de su ostracismo en un libro que actualmente preparo bajo el título de: Palabras con espinas. Lecturas críticas en los tiempos de la videosfera.

Convertido en el “aguafiesta” de la transición y en la representación misma de la crítica y del pensamiento de la izquierda no concertacionista, desde la trinchera académica Moulian pasa a la política contingente y se convierte en generalísimo de la candidata a la presidencia de la República del Partido Comunista de Chile, Gladys Marín y más tarde precandidato a la Presidencia de la República por el mismo partido.

“Rojo es el edificio donde vive Tomás Moulian. Rojas las baldosas, rojas las paredes y rojas hasta las rosas que crecen en el pequeño y asoleado patio interior...Rojo se le divisa también el destino”, de esa forma el periodista Patricio Corvalán presentaba al flamante candidato a la presidencia.<sup>188</sup>

La aventura presidencial de “Moulian Rouge” fue efímera, de tan sólo ocho meses, que en realidad se reducen a cuatro meses si le restamos los meses de diciembre -mes en que el país se paraliza porque el consumo navideño lo consume todo-, los dos meses de vacaciones estivales, y el mes de marzo, cuando se inicia el año de manera frenética para las y los ciudadanos credicards chilenos.<sup>189</sup> En mayo del año 2005 abandonó la nave presidencial y volvió a concentrarse en las arduas, difíciles y contradictorias tareas que le imponía la Rectoría de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales, ARCIS.

Durante ese tiempo, la pluma o mejor dicho el ordenador de Moulian no descansaba. A fines del año 2004 aparecía un

---

<sup>188</sup> Corvalán, Patricio (2004). “Moulian Rouge”, <http://www.tercera.cl/medio/articulo/21/11/04> consultado en marzo 2008.

<sup>189</sup> Parafraseo aquí el título de otro de los libros de mayor circulación o de consumo de Moulian (1998). *El Consumo me Consume*. Ediciones LOM, Santiago de Chile. Este libro que constituye, en mi opinión, un texto complementario del Chile Actual. Anatomía de un mito, Moulian establece que una de las funciones del consumo es la de crear identidad. Dice Moulian: “La que puede surgir del consumo, de la posesión de objetos, es una identidad que reposa en el tener. Se trata de una constitución de la identidad por la apariencia. Aquí los objetos aparecen como constituyentes del yo. El predominio de tener sobre el ser se materializa cuando se siente forzada a tener ciertos bienes en función de los otros, del que dirán.” (pág. 62) Esta función del consumo, según Moulian, da lugar al ciudadano credicard, pero diez años más tarde esa misma función dará lugar a otra forma de ciudadanía y de ciudadanos entre ellos: al ciudadano patrimonial. Es decir, al ciudadano que se constituye a partir de la posesión y propiedad privada de bienes. Hemos estudiado la ciudadanía patrimonial en mi trabajo: “Gobernabilidad social en los tiempos de Bachelet. Política, sociedad civil y ciudadanía”, en C. Moreira, D. Raus y J.C. Gómez Leyton (coordinadores) (2008) *La Nueva Política en América Latina. Rupturas y continuidades*. Ediciones TRILCE, Montevideo.

pequeño libro en la cual el recurso a la metáfora utilizado una década antes volvía a hacerse presente con el objeto de analizar la crisis de la política actual en Chile.<sup>190</sup>

En este opúsculo, Moulian revisa la crisis de la política, de los partidos políticos, del lavinismo y de la conciencia de clase en el Chile actual.<sup>191</sup> Partiendo de la base que toda crisis contiene un aspecto negativo y otro positivo y de la distinción entre la política (praxis) y lo político (estructura institucional) Moulian reflexiona sobre “el peligro de que la política esté en proceso de ser reemplazada por la pseudopolítica”. Él trabaja con una concepción moderna de la política: como una actividad articulada y pensada para construir futuro. La política entra en crisis -“agoniza”, dice Moulian- cuando pierde ese carácter. Y en el Chile actual, la política se ha transformado en pseudopolítica, o sea, en una política incapaz de concebir futuro. Para Moulian la política moderna es, también, letrada. Posee tres aspectos centrales: está dotada de una teoría, de un diagnóstico y de una promesa. Mientras que la política neoliberal o posmoderna es analfabeta, su base es solo y exclusivamente el carisma (la imagen).

Cabe preguntarse si ¿hay margen para la política en el Chile actual? Escaso, pero hay. El objetivo último de este trabajo de Moulian es la recuperación de la política. Pero para eso es necesario refundar el principal instrumento de la política moderna: el partido político. El partido político, según Moulian, es quien expresa de manera más completa y acabada la política moderna. La importancia del partido se demuestra en el hecho de que incluso la pseudopolítica o la política analfabeta requieren del partido.

Moulian es un intelectual que piensa la política desde la sociología crítica moderna. Pero su esfera analítica ha sido siempre el sistema político institucional. En ese contexto, el análisis de la política como práctica queda encerrado en los espacios institucionales del sistema político. Al posicionarse

<sup>190</sup> Moulian, Tomás (2004). *De la Política letrada a la política analfabeta. La crisis de la política en el Chile actual y “lavinismo”*. Ediciones LOM, Santiago de Chile.

<sup>191</sup> Tuvimos la oportunidad de presentar y comentar este libro de Moulian en un caluroso día de verano en el mes de enero en Parque Forestal de Santiago en una Feria del Libro. Gómez Leyton (2005). “Vacua Política” en Revista Rocinante, Año VIII, N° 75, pp. 17.

en ese espacio, Moulian no observa que la crisis de la política pasa por un desplazamiento distinto al que él propone. La política en las sociedades neoliberales avanzadas como la chilena ha perdido su contenido moderno y las instituciones representativas de la democracia neoliberal se han vaciado de contenido. Pero esta vacuidad en la acción política explica el renacimiento no institucional de la política. Como diría, Ulrich Beck<sup>192</sup>, un segmento importante de la ciudadanía “regresa a la sociedad”, o sea, a los espacios no institucionales de la política.<sup>193</sup>

Este regreso implica que la política no se encuentra en el parlamento ni en los partidos políticos ni en los gobiernos, sino en la praxis cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas. Es otra forma de hacer política, es la subpolítica. Se trata de una política que ha emigrado desde lo institucional a la calle, a la esquina, a la radio poblacional, al canal de televisión barrial, al colectivo cultural poblacional, al foro poblacional. La práctica subpolítica no tiene nada de iletrada o de simulación; allí la política tiene sentido de futuro, tiene potencia constructiva.

La subpolítica constituye una respuesta a la pseudopolítica, es la acción colectiva ciudadana para enfrentar la despolitización que ofrece y fomenta la democracia neoliberal. La subpolítica es concreta y no imagen. Allí en esos espacios, preferentemente locales, se constituye el sujeto popular y comienza a desplegarse la conciencia política.

En este libro Moulian no abandona sus concepciones iniciales de hace ya 40 años. La centralidad de los partidos políticos y la preocupación por el futuro también lo encontramos en dos textos anteriores: *El socialismo del siglo XXI. La quinta vía* (2002) y “El deseo de otro Chile”, incluido en libro colectivo coordinado por él: *Construir el futuro. Vol. 1, aproximaciones a proyectos de país*.

---

<sup>192</sup> Beck, Ulrich. (1999). *La Invención de lo Político*. Editorial FCE, México.

<sup>193</sup> Para un análisis de la ciudadanía y sus formas de acción políticas en el Chile actual es útil consultar a: Gómez Leyton, Juan Carlos (2006). “La ciudadanía en los tiempos del libre mercado” en Javier León, Areli Escobar y Lorena Cea (editores), *Discursos y Prácticas de Ciudadanía*. Ediciones Universidad del BíoBío, Santiago de Chile, pp. 167-175.

En “Construir el futuro”, Moulian reúne a tres intelectuales y académicos chilenos que han sido colegas y amigos, pero también sus principales adversarios académicos e intelectuales, por ende, políticos, con quien ha tenido históricas polémicas que han sacado “chispas” y deberán considerarse como hitos importantes de la historia intelectual chilena de las últimas décadas. Pues los tres representan distintas visiones de futuro de la sociedad chilena. En él escriben J. J. Brunner, Manuel Antonio Garretón y Gabriel Salazar.<sup>194</sup>

Tanto con Gabriel Salazar como con J. J. Brunner y, en menor medida, con Manuel Antonio Garretón, Moulian ha mantenido profundas y significativas polémicas. En efecto, con el primero desacralizó las presentaciones de los libros al intervenir en la presentación del libro de Salazar sobre la violencia política en Chile del siglo XX, al realizar un comentario crítico que se escapó completamente a las formas que hasta ese momento la academia nos tenía acostumbrados.<sup>195</sup>

En aquella ocasión Moulian frente a la propuesta salazariana sostuvo que estudiar la historia de Chile desde la

---

<sup>194</sup> Los textos incluidos en este volumen son: J. J. Brunner: “Hacia una estrategia de desarrollo basada en capacidades tecnológicas”; Manuel Antonio Garretón M.: “Reconstrucción de la Política y proyecto de país”; Gabriel Salazar: “Proyectando país globalizado tras 200 años de vida “independiente” (o la revolución del hijo pródigo) y Guadalupe Santa Cruz: “Chile, lenguas transversales”. Tomás Moulian (2002) (coordinador), *Construir el futuro. Vol. 1, Aproximaciones a proyectos de país*. LOM Ediciones, Santiago de Chile,

<sup>195</sup> “Entiendo que este encuentro no es una ceremonia mundana, sino una actividad intelectual. Sería faltarle el respeto al esfuerzo intelectual que hay tras este libro, si yo me limitara a proferir algunos elogios convencionalistas. Vengo, como quiere el autor del libro, a participar en una polémica suscitada por ideas, con el mismo espíritu crítico del cual Salazar hace gala a lo largo de su libro”. Tomás Moulian “¿Historicismo o esencialismo?”, Debate en torno a Violencia política popular en las “grandes alamedas”, de Gabriel Salazar (1991) en PROPOSICIONES 20, 1991, Ediciones SUR, Santiago de Chile, pp. 287-299.

perspectiva del bajo pueblo “constituye la síntesis y la esencia”.<sup>196</sup> Y expuso, de manera categóricamente provocadora, que en el “razonamiento teórico de Salazar, seductor, pero finalmente esencialista, no hay espacio para una democracia plural y para una cultura diferenciada y tolerante. El otro no es reconocido, más que como el enemigo”.<sup>197</sup> Las reacciones a los dichos de Moulian se extendieron por los meandros de la pusilánime academia chilensis, nada acostumbrada a estos desaguisados. Como reguero de pólvora se conformaron los bandos de seguidores, por un lado, los salazarianos y, los mouliananos, por otro. Los cuales se confrontaron académica y retóricamente en los cafés, en los pasillos, en los patios y en las aulas de las distintas universidades en donde tanto Salazar como Moulian son leídos con avidez e interés. Animando el tedioso y temeroso ambiente académico-político de los primeros años de la transición democrática donde toda discusión, disidencia o planteamiento que cuestionara la estrategia asumida por los sectores concertacionistas era vista como peligrosa para la “governabilidad política” y una amenaza para la joven democracia. A pesar de la fuerza de la crítica política

---

<sup>196</sup> Nueve años más tarde Gabriel Salazar relataría a Luis Moulian (historiador y hermano de Tomás) su versión de lo acontecido aquel día, narra Salazar: “cuando se terminó la investigación histórica de las conductas y se escribe el volumen II por otros maestros, que es la mitad del de “Violencia...” se realiza un lanzamiento a “todo trapo”, con un gran cóctel y propaganda con periodistas. Asiste Carlos Vergara, director de SUR que hoy está en el gobierno y se le pide a Eduardo Valenzuela que lo organizara. A mí, en primer lugar, no se me dejó invitar a la gente que yo quería ni tampoco dejaron que yo eligiera a la persona que presentara el libro. Por su parte, ellos invitaron una cantidad de gente que estaba a favor de la Concertación. Yo a Tomás no lo propuse, pero le tengo gran respeto. Tomás no hace más que mandarse una andanada de una violencia –tú sabes cómo es Tomás cuando se enoja- desproporcionada a lo que era el lanzamiento”. Concluye Salazar “sospecho que fue una encerrona. (que) vino a completar la línea de Seminarios destinados a destruir la otra alternativa.... yo di una respuesta indirecta, digo indirecta, porque yo estaba hablando desde los pobres mismos”. Hasta aquí el testimonio de Gabriel Salazar. Ver a Luis Moulian E.: 6 Asedios a la Historia. La Historia desde Abajo (conversaciones con Gabriel Salazar) Factum Instituto, Santiago de Chile, 1999, pp. 97-98.

Salazar se ha referido a la crítica de Moulian de manera mucho más explícita con un carácter teórico y político de mayor profundidad en el Prefacio a la segunda edición de La Violencia Política popular en las “Grandes Alamedas”. Salazar, aunque mantiene la idea de la conspiración y “decisión institucional (de parte de SUR, Profesionales o mejor dicho de los sectores concertacionistas) de destruir el libro...cuya tarea habría sido encomendada a Tomás Moulian”. Ver Gabriel Salazar: La Violencia política popular en las “Grandes Alamedas”. La violencia política en Chile 1947-1987 (Una perspectiva histórico-popular). LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2006, pp. 17-19. Lamentablemente no tenemos espacio para exponer los argumentos críticos aquí esgrimidos por Salazar.

<sup>197</sup> Moulian: “¿Historicismo...? Op. Cit.

de Moulian a la interpretación histórica elaborada por Salazar como de la crítica de éste a la evolución política de Chile, la polémica no tuvo mayores repercusiones en lo inmediato sino más bien su influencia ha sido silenciosa y ha trabajado en distintas direcciones al interior del pensamiento crítico nacional.<sup>198</sup>

En verdad quien calentó el ambiente político-académico nacional fue el propio Moulian cuando en 1993 criticó el éxito de la transición, en una perspectiva política muy cercana a la expuesta por Salazar en su libro. Pasarían cuatro años más para que el ambiente intelectual y político volviera a agitarse nerviosamente como consecuencia de la aparición en 1997 de *Chile Actual. Anatomía de un mito*, de Moulian. En este libro la presencia teórica salazariana es muy potente -con cierta dificultad Moulian lo ha reconocido-, aunque mantiene su distancia con algunos planteamientos salazarianos, especialmente los referidos a la Unidad Popular y el rol de los partidos políticos en la historia política de Chile.

Así como hay en desarrollo una “batalla por la memoria” en Chile, referida a la historia reciente<sup>199</sup>, ha habido una “batalla por la historia”, referida a la historia del siglo XX chileno. Moulian ha sido el principal historiador político de dicho periodo, por esa razón, los y las sociólogos, las y los científicos políticos y, principalmente, las y los historiadores -ya sea de derecha, centro o izquierda- que trabajan dicho lapso temporal deben o están obligados de

---

<sup>198</sup> Dos años más tarde cuando los ecos de la feroz crítica a Salazar, realizada por Moulian, aún seguían retumbando por doquier y, sobre todo, los asistentes al seminario de Sur Profesionales crecían en un número inusitado y desproporcionado al espacio donde se realizó el evento; Moulian presentó su libro *La Forja de Ilusiones. El sistema de partidos, 1932-1973*, un día de noviembre de 1993, en el “hall” central de la sede principal de la Universidad ARCIS, uno de los comentaristas invitados era, justamente, Gabriel Salazar. La asistencia a dicha presentación fue “multitudinaria”, académicos de diferentes universidades, discípulos, alumnos, admiradores y curiosos llegaron “en masa” a presenciar el segundo “round” de la polémica abierta por Moulian dos años antes. Al final, el público se retiró cabizbajo, desilusionado, mascullando frustración intelectual, académica y política. Los contendientes no cruzaron espadas, en verdad, ni siquiera las desenvainaron. El propio Salazar ha reconocido que en dicha oportunidad no quiso tomarse “desquite” de las destempladas críticas de Moulian, pues éste ya estaba cambiando sus posiciones sobre el libro y, sobre todo, ante el proyecto teórico-histórico y político salazariano.

<sup>199</sup> Sobre esta particular batalla es útil consultar el trabajo de: Peter Winn: “El pasado está presente. Historia y memoria en el Chile contemporáneo” en Anne Pérotin-Dumon (Dir.) *Historizar el pasado vivo en América Latina*. [http://etica.uahurtado.cl/historizarelpasadovivo/es\\_contenido.php](http://etica.uahurtado.cl/historizarelpasadovivo/es_contenido.php).



una u otra forma a discutir, aceptar o rechazar las hipótesis y/o las interpretaciones planteadas y sostenidas por Moulian en sus diversos trabajos.<sup>200</sup>

Otra de las encendidas polémicas que ha sostenido Moulian ha sido la sostenida con su ex camarada de partido y colega en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Chile, el influyente y destacado sociólogo José Joaquín Brunner, a través de las columnas que ambos escribían para el diario electrónico El Mostrador. A diferencia de la polémica anterior, esta es una batalla política, teórica e ideológica por el futuro de la sociedad. Pero, sobre todo, por los rumbos que debiera seguir la izquierda en el mundo actual.

Esta polémica mantenida a través de 14 rounds, entre junio del año 2001 y enero del 2002, confrontó a dos de los más destacados sociólogos de la renovación socialista chilena, ha sido la última gran discusión entre dos rebeldes de la década de los sesenta. Uno convertido en liberal progresista, Brunner y, Moulian, en representación de una generación que desaparece, la generación de los “rebeldes con causa”. Por esa razón, el núcleo central de esa polémica estuvo en la controvertida definición de la izquierda hoy.<sup>201</sup>

Moulian cerró la discusión definiendo lo que, para él, es ser de izquierda hoy. Lo que planteó en aquella oportunidad y lo que nos dice en la entrevista realizada este año, en el mes de enero, que aquí presentamos e introducimos, o sea, seis años

---

<sup>200</sup> Por cierto, son muchos los analistas políticos que han trabajado el periodo histórico de 1930 a 1973 discutiendo permanentemente con Moulian. Como botón de muestra, cito a la historiadora Sofía Correa, ligada al pensamiento demócrata cristiano, quien en su libro sobre la derecha chilena sostiene que lleva “décadas discrepando de Moulian, sobre el carácter de la derecha”. Véase a Sofía Correa Sutil. *Con las Rendas del Poder. La derecha chilena en el siglo XX*. Editorial Sudamericana, Santiago de Chile, 2004. Entre los sociólogos críticos de los planteos de Moulian encontramos a Steve Jerome Vieux; *Democratization by revolt: the foundations of mid-century chilean democracy, 1920-1932*. Dissertation the degree of D. Ph in Sociology. State University of New York at Binghamton. New York, 1994. Para una crítica proveniente de la ciencia política a la interpretación del desarrollo político nacional y especialmente a la crisis del año 1973 se encuentra en J.C. Gómez Leyton. *La Frontera de la Democracia*. LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2004. Entre los seguidores de las tesis de Moulian se encuentran, entre otros, la historiadora Verónica Valdivia, Luis Corvalán Marquéz, Enrique Cañas, e inclusive el historiador conservador Gonzalo Vial Correa.

<sup>201</sup> El Mostrador (2002). Brunner v/s Moulian. Izquierda y capitalismo en 14 rounds. Editorial El Mostrador, Santiago de Chile.

más tarde, no es muy distinto. Ahora, si leemos con clave histórica y a la luz de su trayectoria intelectual podemos percibir que el influjo sociológico del cambio social y político para América Latina propuesto por el cura jesuita y sociólogo Roger Vekemans sigue presente en su exdiscípulo. En efecto, la idea de que ese cambio no es producto de un acto revolucionario sino de un largo proceso de “reformas revolucionarias”, que en la concepción de Moulian abren los senderos y caminos para la construcción de una sociedad socialista o del socialismo, está aún presente en el último rebelde con causa de los años sesenta.

Dejemos entonces hablar a Tomás Moulian:

*“Es necesario hacer política nueva para condiciones nuevas, uno de cuyos elementos centrales es la desaparición de la referencia clasista, la fascinación por el consumo y por el confort...”*

*Todo ello requiere de parte de la izquierda un replanteamiento de la política socialista que debe significar una ruptura radical con la política revolucionaria clásica, sin por ello hacer suya la ilusión reformista de la humanización del capitalismo. En dos palabras: ni revolución ni reformismo.*

*La política de la izquierda debe ser ella una política de reformas, pero tendiente a una democratización radical de la sociedad, en la política, la economía y la cultura. Una política de izquierda de este tipo deberá convivir con el capitalismo, pero no porque crea que sea el sistema que mejor crea riqueza para satisfacer las necesidades sino como una marcha sin término para mejorar el mundo que existe.*

*Es un trabajo tan pesado, lento e intergeneracional como abrir un hueco en la Cordillera de Los Andes. Pero también es un trabajo de ahora y de mañana. Replantear el socialismo como una política no de revolución, sino de transformación, debe ser una exigencia de la izquierda actual”<sup>202</sup>*

Santiago de Chile, marzo 2008/agosto 2015.

---

<sup>202</sup> Tomás Moulian (2002), “Ser de Izquierda”, en El Mostrador, Op. Cit., pp. 101-103



## **A MODO DE CONCLUSIÓN**



## **Estado, hegemonía y crisis política en la sociedad neoliberal en tiempos del Bicentenario, 2010-2018**

### **Introducción**

La formación social chilena fue transformada radicalmente en los últimos 45 años (1973-2018), tanto el Golpe de Estado como la instalación de la forma de acumulación neoliberal dieron lugar a la conformación de una nueva sociedad en un proceso histórico de amplias dimensiones. Las fuentes, las estructuras del poder social como los sujetos cambiaron, instalándose una nueva forma de dominación y de hegemonía en la sociedad nacional. Como consecuencia de la conducción histórica y política de parte de la fracción más dinámica del capital, la mercantil-financiera, la formación socioeconómica chilena se transformó y se constituyó en la sociedad neoliberal más paradigmática y relevante no solo de América Latina y el Caribe, sino del orbe capitalista.

Dicha transformación fue, como hemos dicho, el resultado de la acción social, política e histórica tanto de la clase capitalista nacional como internacional (especialmente, estadounidense), quienes tuvieron la capacidad de construir e implementar, a través del uso del poder estatal infraestructural, una nueva forma de dominación y establecer una nueva hegemonía. Esta tarea fue posible, fundamentalmente, porque la clase capitalista logró recuperar, controlar y mantener para sí, las principales fuentes del poder social, a saber: el militar, el político, el económico, el ideológico y el comunicacional.

El despliegue de ese poder por parte de la clase capitalista dominante, a lo largo de los 17 años de la dictadura cívico-militar del General Augusto Pinochet Ugarte (1973-1990), no fue interrumpido por los 20 años (1990-2010) de gobiernos concertacionistas, como por el gobierno de la derecha (2010-2014), como de la Nueva Mayoría (2014-2018). Todo lo contrario, como hemos señalado en este trabajo como en otros, estos gobiernos lo ampliaron y lo consolidaron.<sup>203</sup>

---

<sup>203</sup> Gómez Leyton, J.C. (2010). *Política, Democracia y Ciudadanía en una sociedad neoliberal (Chile: 1990. 2010)*, Editorial ARCIS/CLACSO, Santiago de Chile

La imbricación entre el poder político, económico e ideológico-cultural ha sido central para la configuración tanto de la dominación como de la hegemonía. No obstante, consideramos que la fortaleza de la actual dominación se encuentra, entre otras cosas, en el hecho de que la ciudadanía nacional post dictadura hizo suya la *“weltanschauung”* neoliberal propiciada e instalada violentamente por parte de la clase capitalista nacional. Sostenemos que será dicha aceptación ya sea de forma activa y/o pasiva la que posibilitó la reproducción de manera ampliada y sin ningún contrapoder político, social y cultural de la dominación hegemónica neoliberal en los últimos 45 años.

La historia política de la sociedad chilena a lo largo del siglo XX, especialmente, desde fines del siglo XIX hasta el año 1973, da cuenta de una abierta lucha social y política entre diferentes sectores, grupos y movimientos sociales por el control político no solo de los aparatos del Estado o del gobierno sino, fundamentalmente, por el control de las principales fuentes del poder social: el ideológico, el económico, el militar, el político, el cultural y, por cierto, el comunicacional. Esa lucha social, política e histórica estaba destinada, entre otras cosas, a establecer, ya sea por medios coercitivos o persuasivos, una determinada y particular *weltanschauung*, es decir, una específica “concepción de mundo”, en la sociedad nacional. Gruesamente, las tres concepciones en pugna eran: la liberal, la social cristiana y la socialista. Obviamente, cada cual con sus diversas variantes doctrinarias e ideológicas.

Estas *weltanschauung* dieron lugar a la conformación de distintas y diversas organizaciones civiles y sociales, partidos políticos y movimientos sociales, políticos y culturales, las cuales, a su vez, estaban ligadas a las distintas fracciones de las clases dominantes como a los distintos sectores sociales de las clases subalternas. La política estaba dinamizada por la conflictividad ideológica entre estas diferentes concepciones que se disputaban el poder y el control de la sociedad nacional.

Por lo anterior podríamos sostener que el rasgo característico de la historia del siglo XX en Chile (1920-1973) fue la existencia de una dominación capitalista sin una hegemonía dominante sino más bien formas hegemónicas híbridas, o sea, mezclas de elementos; liberales, social cristianos y, no pocos, socialistas.

La clase dominante nacional (especialmente, las denominadas oligarquías tradicionales) había comenzado a perder, desde finales del siglo XIX y, a lo largo de todo el siglo pasado, la capacidad de imponer su hegemonía,<sup>204</sup> sin perder, por ello, su facultad de ser dominante. Era una clase dirigente que tenía, en cierta forma, limitada su potencia de producir e imponer su propia *weltanschauung*, al resto de la sociedad. Esa limitación redujo significativamente, en las clases dominantes tradicionales y modernas, la capacidad de mantener, controlar y, sobre todo, reproducir y ampliar el ejercicio del poder infraestructural. A raíz de ello, no solo fueron siendo paulatinamente desplazadas de los centros neurálgicos del poder social, sino también perdieron el control y el dominio de las bases materiales que sostenían su condición de clase dominante.

En efecto, durante los años sesenta y los tempranos años setenta del siglo XX, la base material de la clase dominante fue abiertamente disputada y arrebatada por los sectores sociales subalternos, especialmente, por parte del movimiento social popular, en general, y de trabajadores y campesino, en particular.

Entre 1967 y 1973, las clases dominantes nacionales como internacionales perdieron el control de la propiedad privada de los principales medios de producción. Estos fueron nacionalizados y/o estatizados por la acción política de los sectores sociales no propietarios. La democratización del derecho de propiedad provocó la gran crisis orgánica de la sociedad capitalista nacional entre 1970-1973. Esta crisis fue resuelta en septiembre 1973, en favor de los sectores capitalistas nacionales e internacionales.<sup>205</sup>

En este ensayo una de las tesis que vamos a exponer es la siguiente: el golpe de Estado de 1973 de las Fuerzas Armadas nacionales que derrocó al gobierno popular de Salvador Allende y la Unidad Popular, que contó con el respaldo social y político de la clase dominante y de importantes sectores de las capas medias, no solo puso fin al proceso histórico de pérdida de poder de la clase dominante nacional sino, también, al largo conflicto por la hegemonía en la sociedad chilena. El derrocamiento del gobierno

---

<sup>204</sup> Vial Correa, Gonzalo (1982). *Historia de Chile (1891-1973). La sociedad chilena en el cambio de siglo (1891-1920)*. Vol. I Tomo I, Editorial Zig-Zag, Santiago de Chile.

<sup>205</sup> Gómez Leyton, J. C. (2004). *La Frontera de la Democracia*. Ediciones LOM, Santiago de Chile.



revolucionario de la Unidad Popular constituye, por cierto, la derrota política y militar del socialismo chileno. O sea, una de las tres "*weltanschauung*" en disputa.

La derrota del socialismo dará lugar a una reestructuración integral del capitalismo nacional que no solo les permitió a los sectores capitalistas locales e internacionales recuperar su dominio social y político en la formación social chilena sino también imponer una nueva "concepción de mundo" en la sociedad chilena. Con lo cual recobraron de manera ampliada el control directo de las principales fuentes del poder social y su capacidad de producir y reproducir hegemonía cultural e ideológica. Reestableciendo con ello su condición de clase hegemónica y una muy estable y duradera dominación.

A lo largo de las últimas cuatro y media décadas (1973-2018) la sociedad neoliberal ha experimentado tan solo dos coyunturas críticas que han amenazado y desafiado abiertamente la continuidad histórica de la dominación hegemónica neoliberal.

Tengamos presente que una coyuntura crítica, la podemos definir, como una particular encrucijada política e histórica que pone en tensión la dominación política y discute abiertamente la hegemonía. Por esa razón, ellas tienen la capacidad política de cerrar y abrir ciclos históricos. Esa capacidad va a depender de las contradicciones, antagonismos, polarizaciones sociales, económicas y políticas, de las fuerzas como de los actores sociales y políticas intervinientes y, sobre todo, de sus estrategias políticas e históricas, pero también de las alternativas políticas que se confrontan conflictivamente en un determinado y específico contexto histórico. De la forma como se zanje el o los conflictos que dio lugar a la coyuntura crítica éstas pueden impulsar, estimular, inspirar rebeliones e incluso revoluciones políticas que pueden provocar quiebres, readecuaciones, fracturas, grietas en las estructuras políticas, en el gobierno; recambios de las élites en el poder, en otras palabras, toda coyuntura crítica origina algún tipo de cambio histórico en la sociedad. Por último, la profundidad, amplitud, intensidad y la direccionalidad del cambio político provocado por la coyuntura crítica resultan centrales para la continuidad de la estructura de poder, de la dominación y de la hegemonía que se expresa en una sociedad dada.

Como hemos dicho, consideramos que a lo largo de los últimos 45 años de la dominación del capital neoliberal se han producido dos grandes “coyunturas críticas” que, si bien, abrieron nuevos ciclos políticos e históricos no lograron quebrar ni alterar ni modificar sustantivamente la “estructura del poder” establecida por el capital ni lograron modificar las fuentes sociales del poder infraestructural del mismo.

Los diversos grupos sociales y políticos que impulsaron las acciones colectivas y abrieron con sus manifestaciones y movilizaciones no tuvieron la potencia ni la capacidad ni los recursos políticos e ideológicos que les permitieran tomar el control de las fuentes del poder social para instalar una nueva “*weltanschauung*” alternativa a la dominante. En virtud de esa carencia -como veremos- las coyunturas críticas resultaron fallidas en el intento de superar y transformar la sociedad neoliberal. Ello explica su larga duración y presencia histórica, a pesar de las resistencias que diversos grupos sociales han construido y desarrollado para resistirlo, confrontarlo y derrotarlo. Y, esta es una segunda tesis política que expondremos, a saber, las resistencias y luchas antineoliberales han fracasado políticamente.

Las dos coyunturas críticas que se abrieron en Chile fueron:

A.- La primera se experimentó entre los años 1982/83 y 1988. Se abrió con la recesión económica de 1982/83 y se cierra con la derrota del General Augusto Pinochet, el dictador, en el plebiscito sucesorio, el 5 de octubre de 1988. Esta larga coyuntura crítica puso fin a la fase autoritaria de la dominación neoliberal, abriendo una nueva: la democrática. Esta última será conducida por los partidos opositores a la dictadura cívico-militar, quienes organizados en la Concertación de Partidos por la Democracia (CPD) gobernarán durante 20 años (1990-2010) a la sociedad chilena. La aceptación por parte de la CPD de la *weltanschauung* neoliberal durante la primera década de gobiernos posautoritarios (1990-2000) resultará decisiva y fundamental para la continuidad de la dominación neoliberal en la sociedad chilena.

B.- La dominación hegemónica neoliberal, en su fase democrática, experimenta, una segunda coyuntura crítica durante el año 2011. La cual está presidida por una serie de episodios previos de manifestaciones sociales y políticas,

fundamentalmente, desde el año 2006, año de la rebelión estudiantil secundaria, que cuestionaban aspectos específicos del accionar del mercado, en este caso, el educativo, conflictos medios ambientales, laborales, entre otros.

La coyuntura crítica del año 2011 fue abierta por una masiva protesta social protagonizada por estudiantes secundarios y universitarios que se movilizaron en contra del funcionamiento del mercado de la educación. Ésta a diferencia de la movilización de los estudiantes secundarios del año 2006 que se realiza bajo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet (2006-2010), se desarrolla durante el primer gobierno de la derecha neoliberal, electo por votación popular en la democracia protegida, del presidente Sebastián Piñera (2010-2014).

No obstante, y a pesar de la masividad, potencia política, social y cultural desplegada por la movilización juvenil, estudiantil y ciudadana, consideramos que logró solo provocar algunas grietas a la estructura de la hegemonía sin dañar la dominación neoliberal. Pero, al final de la coyuntura crítica (2014), no registró ningún cambio sustantivo en la institucionalidad política como económica y social de la forma de acumulación neoliberal. Ni tampoco se alteró ni se modificó el accionar del mercado educacional. Todo lo contrario, se introdujeron correcciones para que este mercado funcionara de mejor forma.

Las soluciones propuestas e implementadas tanto por el gobierno del presidente Sebastián Piñera (2010-2014) como por la presidenta Michelle Bachelet (2014-2018) fueron soluciones de mercado, es decir, medidas dirigidas a mejorar y/o corregir el funcionamiento del mercado a objeto de hacerlo más expedito y eficiente.

Dado que las soluciones gubernamentales construidas fueron en una dirección totalmente contraria a lo demandado por la ciudadanía movilizada, la coyuntura crítica se cerró con la llegada al gobierno en el año 2014, por segunda vez, de la presidenta Michelle Bachelet candidata de la coalición Nueva Mayoría, quien continuó con las soluciones de mercado implementadas por el gobierno de Piñera en materia educacional, pero, sin tocar ni modificar la estructura interna del mercado de la educación. Tal vez, con la única diferencia que implementó parcialmente y

focalizada la “gratuidad” para beneficiar a solo aquellos estudiantes calificados como “vulnerables” o, simplemente, pobres que buscan ingresar a las universidades públicas como privadas. Generando con ello un nuevo ciclo económico en el funcionamiento del mercado educacional, potenciando el capitalismo académico. O sea, fortaleciendo la forma neoliberal. Reconponiendo, al cabo del tiempo, el control del capital sobre otra fuente social del poder infraestructural: el ideológico-educativo. Donde año tras año se forman varios miles de profesionales e intelectuales formateados en la cosmovisión neoliberal. Asegurando de esa manera la continuidad de la hegemonía instalada desde 1973-75 por el capital. Una dominación hegemónica sin contrapesos duros o con resistencias relativas o marginales. Sin embargo, ello no niega ni desmiente que el régimen político vigente desde 1990 hasta la actualidad (2018), la democracia protegida, atreviese por una profunda crisis política.

El presente ensayo se organiza en tres partes. En el primero, exponemos el conflicto político en torno al Estado, al poder y, sobre todo, a la hegemonía en las sociedades capitalistas centrales como periféricas durante el siglo XX. Teniendo como eje central el caso chileno. En la segunda parte, nos interesa analizar la conversión al neoliberalismo por parte de la Concertación de Partidos por la Democracia como de importantes sectores de las clases medias y populares, lo cual resultó decisivo para la consolidación de la *weltanschauung* neoliberal como cosmovisión hegemónica y única en la sociedad nacional. En la tercera parte, analizaremos brevemente lo que hemos denominado la rebelión social y política juvenil, estudiantil y ciudadana de 2011 que abrió la segunda coyuntura crítica en la dominación hegemónica neoliberal.

### **Estado, poder y hegemonía en disputa**

El Golpe de Estado de 1973 creó las “estructuras de oportunidades políticas” para la expansión sin precedente y, sobre todo, sin contrapeso, lo que el sociólogo británico M. Mann denomina: el “poder infraestructural” del Estado.<sup>206</sup>

---

<sup>206</sup> Mann, M. (1997). *Las Fuentes del poder Social II*. Alianza Universidad, Madrid.

La forma estatal establecida por el nuevo bloque dominante, el Estado Neoliberal, generó y desplegó un poder político, comparativamente mayor, más amplio y profundo que el implementado por el Estado nacional-desarrollista.

Esta forma estatal no fue la expresión directa de la dominación de la clase capitalista sino más bien la expresión del “compromiso interclasista” que lo constituye. Mientras que la nueva forma estatal -que se inaugura entre 1973-1975- será la expresión manifiesta de la dominación de la clase capitalista nacional. Quienes, a través, de la instauración de la dictadura militar del general Pinochet inician la construcción de una nueva estructura de dominación y el desarrollo de una nueva *weltanschauung*, con el objeto de transformarse en una clase hegemónicamente dominante. Para tal efecto, debieron hacerse del poder infraestructural.

El poder infraestructural, siguiendo a M. Mann, es la capacidad institucional ya sea del Estado, autoritario o democrático, para penetrar en sus dominios territoriales y en las poblaciones, como en las actividades económicas, sociales e incluso, culturales de la sociedad y llevar a cabo un conjunto diverso de decisiones en el plano logístico institucional, por ejemplo, el jurídico-constitucional, que le permiten tener un amplio control de la sociedad. Se trata de un poder colectivo, de un “poder a través de” la sociedad, que coordina la vida social por medio de los aparatos o instituciones estatales. Es un poder “de Estado” conformado como un conjunto de instituciones centrales y radiales que penetran en la formación social capitalista, coordinando y controlando la vida de los hombres, mujeres y los niños y niñas.

De acuerdo a M. Mann, el Estado capitalista en su forma liberal expresó, desde el siglo XVIII en adelante, la dominación no solo en el plano económico sino también político, ideológico y militar que la burguesía desplegó en Europa. Tal dominación permitió a dicha clase convertir a la *weltanschauung* liberal en una cosmovisión hegemónica, dando lugar a la conformación de una determinada sociedad capitalista, la sociedad liberal; la cual alcanzó su mayor expresión durante el siglo XIX europeo y norteamericano. En América Latina y el Caribe, la sociedad liberal

tuvo un desarrollo escaso y parcial durante el siglo XIX. Aunque fracciones importantes de las élites dominantes como también de grupos medios emergentes vinculados a los sectores artesanales y trabajadores urbanos, asumieron importantes elementos del liberalismo político, especialmente.

La crisis de la sociedad liberal europea, por ende, de la *weltanschauung* que la constituye, se experimenta a través de diversas coyunturas críticas que se abren en las primeras décadas del siglo XX, especialmente, una vez finalizada la Gran Guerra Europea (1914-1918) y de sus cuatro mayores consecuencias: la revolución bolchevique, en 1917; la gran depresión económica mundial de 1929; el ascenso del fascismo, entre 1921 y 1935, en Italia y Alemania, respectivamente; y se cierra con la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se podría sostener que la *weltanschauung* liberal en el espacio cultural europeo, si bien no había sido totalmente desplazada por otra nueva, había perdido su carácter hegemónico y su directa vinculación con la dominación capitalista. Por cierto, el capital, es decir, la burguesía mantuvo el control del poder económico, pero había perdido el control de las otras fuentes del poder infraestructural, estos estaban bajo el control de otros grupos sociales tales como las capas medias y la clase trabajadora.

En efecto, desde 1945 hasta 1980 en los países capitalistas europeos centrales y nórdicos, pero, también en algunos países del capitalismo periférico latinoamericano, había emergido y constituido una nueva hegemonía capitalista, cuya principal característica era su condición híbrida, o sea, una específica combinación de la *weltanschauung* liberal con la socialista.<sup>207</sup>

### **De la dominación hegemónica liberal a la hegemonía capitalista híbrida**

El poder infraestructural ejercido por la clase capitalista desde el Estado liberal hasta la revolución bolchevique de 1917

---

<sup>207</sup> Antecedentes para la elaboración de esta categoría los encontramos en el libro de Gregory Luebbert (1997) *Liberalismo, fascismo o socialdemocracia. Clases sociales y orígenes políticos de los regímenes políticos de la Europa de entreguerras*, Prensas Universitarias de Zaragoza, España.

era incontestable. Sin embargo, durante la Gran Guerra europea el poder de los y las trabajadoras había tomado bajo diversas modalidades el control, directa o indirectamente, de importantes procesos internos de la producción y del transporte, o sea, de la distribución de la producción capitalista. Frente a esta situación, al interior de las sociedades capitalistas centrales se conformaron tres posiciones: una, la de aquellos que argumentaban que el desarrollo del capitalismo hacía necesario que el Estado tuviera un papel más activo e intervencionista en la economía. El argumento tomó diferentes formas y se justificaba de distintas maneras, desde el reconocido temor a la revolución, o la preocupación caritativa por los pobres, hasta la simple búsqueda de la eficiencia económica.

Otros sectores argumentaban que se debía volver a la situación existente antes del estallido de la Gran Guerra, es decir, debía producirse la retirada del Estado de la actividad económica. Este sector propiciaba la devolución a los empresarios capitalistas de todas las empresas y secciones tanto de la producción como de la distribución, en que el Estado o los trabajadores, habían asumido su dirección y control.

Los sectores más radicales sostenían que de ninguna manera se debía devolver al capital privado aquello que estaba bajo el control de los trabajadores o del Estado. Pues éste debía controlar ciertas industrias y empresas como procesos de producción o de distribución, en función no de la utilidad privada sino de los intereses generales de la ciudadanía, pues constituían bienes de utilidad pública.

Si bien este último punto se perdió, pues la mayoría de las industrias expropiadas o bajo relativo control productivo de los trabajadores durante la Gran Guerra fueron devueltas en su totalidad a manos privadas, por primera vez en la historia del capitalismo, sectores ligados directamente al capital como también sectores ligados al trabajo, se plantearon la posibilidad de la constitución de una nueva forma de propiedad de los medios de producción: la propiedad capitalista estatal.

Será solo al final de la Segunda Guerra Mundial que se abrieron las estructuras políticas de oportunidades para la constitución de un nuevo tipo de propiedad productiva

capitalista, lo que simultáneamente implicaba una transformación en las formas de dominación capitalista establecida y desarrollada durante la vigencia del Estado liberal. Esto suponía, primero, la estructuración de una nueva forma estatal: el estado intervencionista o empresarial o keynesiano o social-bienestar; y segundo, la conformación de lo que Robert Castel denomina la propiedad social.<sup>208</sup> Estas dos condiciones hicieron que la clase capitalista dominante viera drásticamente limitado su poder. Acrecentándose, en cambio, el contrapoder de las y los ciudadanos trabajadores y político estatal. Aunque este contrapoder, al no poder ser plenamente dominante -al igual que el poder de la clase capitalista- tuvo frenada y contenida la potencia de producir una hegemonía propia, o sea, de instalar una *weltanschauung* alternativa que reemplazara a la liberal capitalista.

En razón de ello la hegemonía dominante desde los años treinta y cuarenta del siglo XX en América Latina y el Caribe y desde fines de la II Guerra Mundial en Europa hasta los años ochenta del siglo pasado, tuvo un carácter eminentemente híbrido, es decir, combinaba elementos de la *weltanschauung* liberal, socialista e, inclusive, social cristiana, en un contexto histórico político de capitalismo avanzado, en Europa, o atrasado-dependiente, en América Latina y el Caribe.

Lo más evidente en esas sociedades capitalistas fue la existencia de dos formas de poder político y social. Por un lado, estaba el poder del capital, el cual tenía el control de poder económico y, por esa razón, se asumía como dominante y el otro, a pesar de los controles políticos y sociales que imponía al capital, se asumía como un contrapoder. En términos concretos, esto significaba que ninguna de las dos principales clases del capitalismo tenía la capacidad de imponerse a la otra. Situación que las obligaba a establecer y mantener un *pacto de dominación social y político* a objeto de viabilizar al capitalismo y sus propias existencias como clases.

La clase dominante para mantener dicha posición tuvo que aceptar cuatro condiciones, a saber:

---

<sup>208</sup> Castel, Robert y Claudine Haroche (2003). *Propiedad privada, propiedad social y propiedad de sí mismo. Conversaciones sobre la construcción de individuo moderno*. Editorial Homo Sapiens, Rosario.



1.- la existencia de la propiedad estatal de los medios de producción, lo cual supone la apropiación estatal del plusvalor producido por estas, generando, de esa forma, una competencia directa con la empresa capitalista privada, y una plusvalía social en beneficio de las clases subordinadas;

2.- la existencia de la propiedad social de los sectores sociales no-propietarios, especialmente, estatal;

3.- la regulación social, económica y política del conflicto capital-trabajo, y, por último,

4.- el contrapoder del trabajo organizado en el sindicato o en partidos políticos socialistas social demócratas incorporados en el sistema político democrático.

Los pactos de dominación establecidos siempre tuvieron en su núcleo central las cuatro condiciones señaladas y dieron lugar a la conformación de una nueva forma estatal: los estados sociales del bienestar, los estados keynesianos, los estados socialdemócratas, en Europa, mientras que en América Latina y el Caribe, emergieron los estados populistas, nacional-desarrollistas o capitalistas de compromiso. La particularidad principal en todos ellos fue: la hegemonía híbrida.

En la sociedad chilena, el poder infraestructural de la clase dominante –tradicional y moderna-, fue considerablemente limitado por la acción política de las capas medias como de los trabajadores y sectores populares organizados y representados por partidos políticos de izquierda desde la tercera década del siglo XX hasta 1973. Por esa razón, el denominado Estado Capitalista de Compromiso (1938-1967) fue, por un lado, la expresión política-institucional del pacto social de dominación establecido a finales de la década del treinta; y, por otro, la instalación de una híbrida hegemonía social, política, económica y cultural en la cual los componentes tradicionales proporcionados por conservadores, liberales, social-cristianos, y socialistas se instalaron conflictivamente hasta el año 1967, cuando dicha forma estatal entra en crisis.

El pacto de dominación social constituye la derrota política de la "*weltanschauung*" liberal y, sobre todo, conservadora y tradicional predominante durante el siglo XIX. El triunfo político

y social de las *weltanschauung* rivales, principalmente, la socialista –que fue asumida por importantes sectores medios vinculados al partido radical como por los trabajadores y sectores populares vinculados a los partidos socialista y comunista- y, la socialcristiana (expresada en la doctrina social de la Iglesia) -asumida por significativos sectores de la moderna clase dominante, sectores medios y populares ligados políticamente al Partido Demócrata Cristiano desde 1958- lograron imponerse en diversos espacios sociales, formativos, comunicativos, culturales e institucionales de la formación social chilena desplazando de ellos a importantes sectores de la clase dominante. La lucha hegemónica entre estas *weltanschauung* se expresaba en los medios de comunicación, en las universidades, en las escuelas, en los espacios culturales y artísticos, entre otros, o sea, las diversas fuentes sociales del poder infraestructural fueron compartidas entre los diversos actores con poder y de diferentes cosmovisiones.

Hacia 1970, el avance histórico de la *weltanschauung* socialista tuvo su mayor éxito político al lograr que el movimiento popular y de trabajadores instalaran en la presidencia de la República, al primer socialista y marxista elegido por procedimientos electorales. El ascenso al gobierno de Salvador Allende y de la Unidad Popular constituye la derrota social, cultural y política tanto de la *weltanschauung* liberal como social cristiana, representadas, por el candidato de la derecha empresarial Jorge Alessandri Rodríguez y, el candidato demócrata cristiano, Radomiro Tomic, respectivamente.

El proceso de revolución democrática y socialista iniciado por el gobierno popular de Salvador Allende puso en marcha la deconstrucción total del poder de la clase capitalista, no solo nacional sino también internacional. Para tal efecto, la Unidad Popular aceleró al máximo y expandió a todos los sectores de la economía nacional, la expropiación de la base material de ese poder. En otras palabras, la construcción del socialismo propiciado por el presidente Allende requería poner fin a la existencia de la propiedad privada de los medios de producción, estos debían ser traspasados al Área Social de la Producción, ya sea, bajo el control directo de los productores, es decir, por medio de la gestión obrera y/o su estatización. Ambas formas fueron ampliamente practicadas durante el gobierno de la Unidad Popular.

La democratización del derecho de propiedad tuvo entre otras consecuencias políticas provocar e inducir la alianza política y social entre los sectores capitalistas de derecha liberal y los sectores capitalistas vinculados a las capas medias y, especialmente, al partido demócrata cristiano. Estos sectores que asumieron la defensa del orden capitalista liberal, especialmente, de la propiedad privada de los medios de producción como base material y constitutiva de la sociedad capitalista, imposibilitados de derrotar a través de los procedimientos democráticos electorales a la Unidad Popular en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, auspiciaron, incentivaron y apoyaron política y socialmente el Golpe de Estado militar que derroca al gobierno socialista, popular y revolucionario de Salvador Allende, en septiembre de 1973.

El derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular expresó la violenta reacción de parte de las clases propietarias y de importantes sectores sociales medios ante el avance de las transformaciones políticas, económicas, ideológicas y culturales en dirección a la conformación de una sociedad animada por la *weltanschauung* socialista. Durante tres años (noviembre de 1970-sept.1973), tanto desde los aparatos institucionales del Estado y del régimen político como desde la sociedad civil, los sectores sociales y políticos vinculados a la Unidad Popular construían de múltiples y variadas formas, en un movimiento político y social de arriba-abajo y de abajo-arriba, la *weltanschauung* socialista.

Este proceso de construcción y desarrollo de la hegemonía socialista se realizaba en el marco de una extrema polarización social y movilización política. Para los actores políticos y sociales, la lucha por el control de las fuentes del poder social era fundamental. Todo espacio tanto estatal como de la sociedad civil fue disputado enérgicamente. Finalmente, el conflicto fue resuelto mediante el uso de la violencia política. En efecto, el recurso a la violencia reaccionaria por parte de las clases propietarias y defensoras de la *weltanschauung* capitalista liberal y social cristiana se impuso en septiembre de 1973.

El golpe de Estado permitió a las clases capitalistas nacionales e internacionales recuperar el control de los aparatos políticos del Estado e iniciar un amplio proceso de

disciplinamiento-represivo de la sociedad, especialmente, de los sectores sociales populares, trabajadores, campesinos, poblacionales, estudiantiles, indígenas, etcétera, vinculados a la "weltanschauung socialista". Junto con este proceso se puso en marcha el desmontaje de la cosmovisión socialista, centrada en la cultura popular y en el imaginario político y social proletario.

Este desmontaje no solo se radicó en el ámbito cultural e ideológico, sino que también se dirigió al espacio económico, laboral y social. El nuevo bloque en el poder que expresa la alianza política entre las clases capitalistas propietarias y los sectores medios impulsa, especialmente, a los primeros, a desmontar todo lo construido por el poder social popular en los tres años de gobierno socialista. Esto le permitió tanto la recuperación como la recomposición de un nuevo y remozado poder infraestructural que al cabo de una década y media (1975-1990) les permitirá a las clases propietarias constituirse en dominantes e instalar su nueva *weltanschauung* como hegemónica en el país: la neoliberal.

### **El poder infraestructural y la hegemonía neoliberal**

Antes de exponer esta cuestión, quiero aclarar lo siguiente: el poder estatal infraestructural, tanto en su versión liberal como neoliberal, expresa tanto la dominación y el control, como la hegemonía, la persuasión, sobre las y los ciudadanos. Esta situación, podría inducir, siguiendo a Max Weber, a sostener el aumento del poder despótico del Estado sobre la sociedad civil. En realidad, el análisis de la estructura social y de la configuración de las clases en la sociedad neoliberal, especialmente, en la sociedad civil, nos indica que ello no es del todo así. Pues, al ser la sociedad neoliberal una condición de posibilidad de la existencia de la clase dominante, el poder infraestructural tiene la cualidad de ser una vía de doble dirección, o sea, se ejerce tanto desde la sociedad civil hacia el Estado como desde el Estado hacia la sociedad civil.

Esta doble dirección permite a las asociaciones económicas, instituciones culturales, organizaciones civiles, sociales, políticas de la clase dominante controlar y hegemonizar no solo a la sociedad civil y al Estado, como fue la característica central de las sociedades capitalistas liberales del siglo XIX, o las

sociedades capitalistas del bienestar durante el siglo XX, sino, en las sociedades capitalistas neoliberales, también, tienen el control y el dominio del mercado.

Lo característico y central de las formas estatales capitalistas neoliberales es el poder infraestructural que detentan las clases capitalistas no solo en el Estado o en la sociedad civil si no, fundamentalmente, en el mercado. Por esa razón, las sociedades neoliberales son sociedades mercado-céntricas. Aunque, la instalación y ampliación del mercado en las sociedades latinoamericanas, en general, y en Chile, en particular, requirió de la activa acción política del Estado.

Los autoritarismos de la década del setenta al impulsar una “revolución” política en las lógicas del poder colectivo aumentaron la penetración del poder infraestructural del Estado en todas las actividades tanto de la sociedad como de la economía (léase mercado). La consecuencia de esto fue el surgimiento de las sociedades neoliberales actuales con Estados autoritarios o democráticos de partidos controlados directa o indirectamente por la clase dominante desde sus organizaciones económicas, gremiales, culturales y sociales instaladas en la sociedad civil como en el mercado.

En consecuencia, el Estado neoliberal no es el lugar central de la “élite de poder”, sino que esta tiene múltiples instituciones y tentáculos que se extienden en distintas direcciones de la formación social tanto nacionales como también hacia el espacio transnacional. Las organizaciones de la clase dominante en la sociedad civil están profundamente politizadas. Condición que les permite organizar distintos partidos políticos y grupos de presión que controlan distintos aparatos del Estado tanto a nivel nacional, regional como local.

Esta condición es central y fundamental para el ejercicio del poder infraestructural estatal, especialmente, a objeto de mantener la cohesión entre el estado, la sociedad civil y el mercado. La cohesión social neoliberal se logra cuando una amplia mayoría de la población acepta activa o pasivamente la cosmovisión neoliberal, o sea, cuando ésta se vuelve hegemónica. De tal manera que el “poder” del Estado neoliberal no es el poder que ejercen las “élites políticas estatales” (las élites en el poder) sobre la sociedad,

sino, aquel que la clase dominante (las élites de y con poder) logran establecer y desarrollar tanto en la sociedad civil, en el mercado y, por cierto, en el Estado. Esta tríada neoliberal transforma las relaciones sociales capitalistas, especialmente, la relación capital-trabajo. Ésta aparentemente muta hacia una nueva relación social capitalista donde la explotación y la producción del valor presente en la relación capital-trabajo, tendería a desaparecer.

En las sociedades neoliberales actuales todos sus integrantes son capitalistas. Las y los trabajadores, asalariados o profesionales, por ejemplo, ya no venden su "fuerza de trabajo" en el mercado laboral, sino, ofrecen, su "capital" humano y social. Esta operación eminentemente ideológica resulta central en la configuración de la nueva hegemonía instalada por la clase capitalista dominante, pues induce hacer desaparecer no solo la relación capital-trabajo sino la condición "de clase" de los grupos asalariados como la explotación real, convirtiéndolos en una difusa, contradictoria y heterogénea nueva "clase", por lo general, signada con el adjetivo "de media". Clase que mayoritariamente, por lo menos en el caso chileno, se apropia y hace suya la cosmovisión ofrecida por los grupos dominantes: la cosmovisión neoliberal.

La aceptación de esta cosmovisión por parte de estas nuevas clases medias capitalistas neoliberales, es, a su vez, transmitida por diferentes vías y canales de socialización a los grupos sociales populares. Aquí juegan un rol fundamental los medios de comunicación, de manera central la televisión, las redes sociales, pero también, las escuelas y las familias. De esa forma, la clase dominante logra imponer y estructurar una sólida y exitosa hegemonía cultural de larga duración.

Las clases dominantes, para conseguirlo, debieron entre otras cosas, superar tanto al Estado liberal como al Estado social-benefactor, al tiempo que destruían el poder social de los trabajadores, en particular y, de los sectores subalternos, en general. Un aspecto central de esa destrucción estuvo en la reposición de un principio constitutivo de la sociedad capitalista: el derecho de propiedad.

Este es un punto clave para entender uno de los aspectos más oscuros de la dominación y hegemonía neoliberal. Joseph

Ramos, economista y ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, resumiendo y sintetizando la pertinencia de ese principio constitutivo de la sociedad neoliberal señala que: *“un sistema económico de mercado, con propiedad privada ampliamente difundida, es la estructura más congruente con una democracia pluralista”* (o sea, con la democracia liberal representativa)<sup>209</sup>

De acuerdo con los datos obtenidos en el Censo de Población y de Viviendas, la propiedad, especialmente de viviendas, se ha ampliado en forma importante en la sociedad chilena, cerca del 78% de la población, declaró ser propietaria. Sin embargo, con una interpretación más asertiva de los datos y de la realidad, encontramos que todas esas propiedades pertenecen al capital financiero, o sea, están bajo el control de la banca nacional. Así, muchos ciudadanos neoliberales son propietarios imaginarios.

Por ende, estamos ante una sociedad donde la mayoría de las y los ciudadanos neoliberales son “propietarios” relativamente imaginarios de larga o de mediana duración.<sup>210</sup> Es decir, se encuentran en una condición material bastante frágil y volátil, la cual puede cambiar, en cualquier momento. Puesto que depende de las condiciones de desenvolvimiento del capitalismo y, especialmente, de un factor, el financiero. Esto marca un cambio muy relevante en la relación con las condiciones materiales y políticas de los sujetos en la sociedad capitalista industrial.

En efecto, la sociedad del capitalismo industrial tenía como centro al ciudadano productor, al trabajador, propietario, fundamentalmente, de bienes intangibles, o sea, de derechos, tales como educación, salud, protección social. Aunque, también, de bienes materiales como vivienda, trabajo, etcétera. Con todo, su condición de propietario de derechos era lo central.

En la sociedad neoliberal, los sujetos no son propietarios de derechos sino de bienes, o sea, de patrimonios concretos: casas, autos, electrodomésticos, dinero, joyas, un cartón profesional

---

<sup>209</sup> Ramos, Joseph (1991). *Más allá de la Economía, más acá de la Utopía*. CIEPLAN, Santiago de Chile.

<sup>210</sup> La condición de propietario de un bien raíz, por ejemplo, de una casa o de un departamento, se logra con la obtención de un crédito hipotecario bancario cuyo plazo máximo llega a los 30 años. O sea, una persona para transformarse en propietario efectivo del bien lo alcanza a los 60 años. Es decir, toda una vida.

(educación), todos ellos, constituyen mercancías que se obtienen y son provistas por el mercado. Por esta situación las ciudadanías neoliberales son, esencialmente, consumidoras. Se trata de las y los ciudadanos patrimoniales y/o el ciudadano consumidor-usuario.<sup>211</sup> La transformación de la base material e inmaterial de los ciudadanos será central en la configuración de la nueva forma de dominación. La nueva hegemonía solo será posible por la desintegración de cualquier otra cosmovisión rival presente en la sociedad. O sea, requirió la transformación ideológica de los diversos sectores sociales y políticos, ligados tanto a las *weltanschauung* social cristiana como socialista.

La derrota política y electoral del dictador en el plebiscito sucesorio de octubre de 1988 abrió un largo y angustiante periodo de incertidumbre para los sectores dominantes. Las clases capitalistas neoliberales estaban en vilo. Aferradas a la Constitución Política de 1980, promulgada y aprobada en oscuras circunstancias, buscaban mantener el poder infraestructural construido a lo largo del periodo dictatorial. La tranquilidad para estos sectores se reestableció cuando las dirigencias de la CPD se convirtieron al neoliberalismo.<sup>212</sup> Con la aceptación de la economía de mercado, los cambios o propuestas de cambio a las leyes laborales, previsionales, de salud, etc., durante los gobiernos concertacionistas fueron leves, pero en lo más mínimo comprometieron la estructura de poder establecida por el patrón neoliberal de acumulación. Hasta el año 2010, nadie salvo los sectores antineoliberales más consecuentes, plantearon, desde los márgenes del sistema político la realización de cambios sustantivos y radicales. Durante 20 años nadie quiso cambiar nada. La pregunta es por qué no se quiso cambiar o modificar lo realizado por la dictadura militar. Esta interrogante la respondo en lo que sigue.

---

<sup>211</sup> Gómez Leyton (2010). Ob. Cit.

<sup>212</sup> Portales, Felipe (2000). *Chile: una democracia tutelada*, Editorial Sudamericana, Santiago de Chile.



## **La Concertación de Partidos por la Democracia asume la hegemonía neoliberal**

A diferencia de lo que ha sostenido la crítica antineoliberal a los gobiernos concertacionistas del periodo (1990-2010) por su cambio de orientación política, doctrinaria e ideológica hacia el neoliberalismo; sostengo que ese cambio no solo lo podemos pensar como un simple cambio de perspectivas de políticos profesionales interesados en mantenerse en el poder o en el gobierno. Tenemos la impresión, que ese cambio obedece a un proceso histórico y social más profundo. En otras palabras, la CPD cambió, fundamentalmente, porque la sociedad chilena y su gente se habían transformado. Es decir, la estructura de clases, así como la composición interna de las clases, experimentaron importantes transformaciones a lo largo de los 35 años (1975-2010) transcurridos desde la imposición de la forma de acumulación neoliberal. Ni la clase dominante, ni las capas medias ni las clases trabajadoras y populares eran las mismas al momento del Bicentenario nacional.

Las clases, las fracciones de clases, las capas medias, así como las clases trabajadoras y populares de la sociedad chilena, sus intereses, alianzas y objetivos, como las relaciones y las luchas sociales y políticas y de fuerza establecidas, entre ellas se vieron alteradas y reconfiguradas y resignificadas. Todo había cambiado radicalmente en los últimos 35 años. Las estructuras y los hombres y las mujeres, o sea, los sujetos sociales son otros. Esa es la clave de lo ocurrido en la historia reciente nacional (1975-2018).

Las transformaciones operadas en la estructura económica y social y en las relaciones políticas e ideológicas de clases generaron importantes reacomodos tanto en el sistema político y partidista nacional como en las formas y en las estrategias gubernamentales desarrolladas por los gobiernos electos democráticamente, que tomaron el control y la administración del Estado, luego de la derrota política de los sectores neoliberales autoritarios. Esa fue una derrota política-electoral, pero no ideológica ni cultural.

Las cúpulas dirigenciales de los partidos concertacionistas debieron modificar significativamente sus posturas críticas

planteadas a lo largo de los años dictatoriales, para ser aceptados y no ser vistos como una amenaza para los sectores capitalistas nacionales e internacionales dominantes. El viraje concertacionista desde posiciones centro-izquierdistas y anti-neoliberales hacia una clara postura neoliberal de centro-derecha se explica por la aceptación de la *weltanschauung* neoliberal.

Este proceso de transformación concertacionista a nivel político ideológico y gubernamental fue posible, también, porque importantes sectores populares y trabajadores fueron atraídos e influidos, por medio de diferentes y complejas vías comunicacionales, educacionales y culturales, al neoliberalismo. El control de parte de los sectores neoliberales de los principales centros de producción y reproducción ideológica resultaron fundamentales para que dichos sectores fueran cooptados por la *weltanschauung* dominante. De ese modo, en los 20 años concertacionistas, el neoliberalismo se esparció por todos los recovecos de la estructura social. A través del poder infraestructural concertacionista fue posible que la sociedad aceptara el neoliberalismo como la única cosmovisión posible.

Por cierto, el beneficiario directo de esta transformación fue el gran capital, la alta burguesía transnacionalizada vinculada a los sectores bancarios, financieros, mineros, mercantiles, entre otros. Pero también toda una nueva facción de medianos y pequeños empresarios dependientes de los grandes grupos económicos nacionales transnacionalizados. Este grupo que, si bien puede o no tener el control directo de los principales medios de producción o tan solo administrarlos, se constituye como un sujeto altamente interesado tanto en mantener el desenvolvimiento como la profundización y consolidación ampliada del patrón de acumulación neoliberal. No obstante, la continuidad de la dominación depende principalmente del apoyo político, económico, cultural y social que le puedan brindar los sectores medios e inclusive segmentos importantes de los nuevos sectores laborales y populares conformados a lo largo de estos últimos años.

En efecto, consideramos que la principal fuente de apoyo socio-cultural al neoliberalismo y donde se localizan los agentes reproductores de la hegemonía dominante, lo constituye

la fracción superior de las (nuevas) capas medias. Estrechos aliados de la burguesía neoliberal. Este sector social fue quien le dio el triunfo electoral a la derecha autoritaria en las elecciones presidenciales del año 2010.

Para comprender esta transformación de las capas medias, es necesario tener a la vista las contradictorias relaciones de la “clase media” con la ampliación de los derechos sociales y económicos durante el Estado social protector. Especialmente, con el principio con que este intentó configurar la sociedad, **el igualitario**.

Tenemos la impresión de que esa posición explica la continuidad tanto de la dominación como de la hegemonía neoliberal en la sociedad chilena. Este es un aspecto muy poco investigado y conocido. Por esa razón, vamos a sostener hipotéticamente que tanto los principios centrales y fundamentales como la operatoria del Estado social benefactor no han sido ni son del interés de las capas medias. Por lo tanto, lo rechazan o lo resisten social y políticamente.

Como lo ha demostrado el cientista social Armando Boito Jr. para el caso brasilero;<sup>213</sup> cuanto más generalizados e igualitarios son los derechos sociales y económicos como el usufructo de los servicios públicos por parte de los sectores obreros, campesinos y populares más amplio, mayor es el rechazo de los sectores medios al Estado social. Las capas medias siempre consideraron que sufrían una “expropiación” en sus rentas (ingresos) al momento de pagar los impuestos establecidos por el fisco, con el objeto de sostener la acción benefactora del Estado. A esa “expropiación” se unía la subjetiva percepción de descenso social que experimentaban (léase, pérdida de su estatus social y de distinción al interior de la estructura social) debido a la reducción de la desigualdad social económica y cultural-educativa provocada por la acción del Estado social. Entre más se reducía la brecha social en la sociedad, más alto era el rechazo político a las políticas igualitarias impulsadas por los gobiernos progresistas de orientación socialista o popular de la región. Esto explica que la crítica neoliberal a los principios igualitaristas fuera altamente atractiva para la clase media alta y media vinculada a las clases propietarias nacionales.

---

<sup>213</sup> Boito Jr., Armando (2007). *Estado, política e clases sociais. Ensaios Teóricos e Históricos*. Editora UNESP, Sao Paulo.

El neoliberalismo es, justamente, una cosmovisión que instala la diferencia social como una condición necesaria para estar y ser distinto en la sociedad. Ofrece a los sectores medios una potente ideología para distinguirse y diferenciarse de otros grupos sociales, tales como los sectores populares, trabajadores, campesinos, indígenas, pobres, etcétera, considerados, como los “no iguales”.

Será el histórico, profundo y persistente rechazo de las élites de poder y de las capas medias al igualitarismo social, económico y cultural lo que posibilitó la exitosa instalación de una propuesta ideológica que profundiza la diferencia, el individualismo, la competencia y, sobre todo, la desigualdad social. Encantados con la posibilidad de no ser iguales, estos sectores apoyaron abiertamente el autoritarismo y la democracia protegida que les ofreció, primero, la dictadura militar y más tarde, la Concertación.

El capitalismo autoritario neoliberal (1975-1990) dio lugar al neoliberalismo democrático (1990-2018) y, especialmente, al surgimiento de un nuevo sujeto social y, por cierto, a una nueva ciudadanía, el ciudadano neoliberal. Sospechamos que la dominación económica o si se quiere, para decirlo en la vieja pero asertiva lengua antigua: el control o posesión de los medios de producción material o inmaterial no es suficiente para implementar y desplegar la hegemonía de la clase dominante, se requiere la existencia de sujetos o grupos sociales, las capas medias, para extenderla, profundizarla y reproducirla.

En Chile, el igualitarismo impulsado durante el siglo XX había mantenido bajo control tanto los arrebatos discriminatorios como el individualismo de las élites de poder y de las capas medias. Sin embargo, la instalación del neoliberalismo provocó su retroceso y la emergencia de un sujeto social individualista, capaz de pensar solo su presente y sus circunstancias. Se trata del individualismo narcisista.

Según Sergio Marras (2001), este narciso se pasea por Chile. Amenazando con su billetera (cargada de tarjetas de crédito), su cuerpo perfecto, su prepotencia, venga de donde venga. El narcisismo es, por cierto, el último estadio del individualismo. Esto implica una nueva manera de relacionarse del sujeto consigo

mismo y con los demás, incluido el cuerpo propio, el mundo y el tiempo. Un rasgo central de este sujeto es el abandono de lo colectivo y, sobre todo, de la política.<sup>214</sup>

Esto último, es otro punto clave para entender las formas de dominación hegemónica neoliberal. El pensamiento político neoliberal siempre ha rechazado la activa participación política de las y los ciudadanos; la considera dañina para la normal marcha de la sociedad y del mercado y, sobre todo, para la vida privada. La despolitización ha sido, paradójicamente, un poderoso factor político para mantener la dominación.

La despolitización masiva de la ciudadanía en los tiempos del bicentenario neoliberal y, especialmente, durante los 28 años de gobiernos electos, obedece al hecho que se dejó que el sistema cultural neoliberal, con su visión exitista y presentista, se extendiera sin ningún contrapeso por toda la sociedad. Esta despolitización elitizó la representación política y la política partidista, la confinó a los recintos del poder ejecutivo y legislativo. Pero al mismo tiempo que la política se des-ciudadanizaba, fue atrapada por los medios de comunicación masiva como un objeto noticioso de carácter negativo, de entretenimiento y de espectáculo. El alejamiento de las y los ciudadanos de la política ha hecho que estos se interesen cada vez menos por lo público, por los partidos, etc. Situación que ha llevado a la desvitalización general del interés ciudadano por la democracia, provocando, con ello, una gran crisis de confianza, credibilidad y de legitimidad.

Lo cual lleva a las ciudadanías neoliberales a refugiarse en lo suyo, en lo personal, abandonando los intereses sociales colectivos. Su principal preocupación radica en cómo mantener la juventud, la salud física y material y por la búsqueda frenética por la diversión y el hedonismo; abandonan toda continuidad histórica, renuncian tanto al pasado como al futuro: uno y otro son de corta duración. A lo más, persiste la temporalidad biográfica.

La existencia de este sujeto neoliberal es vivida como una tragedia. Debido a que se encuentra inserto en una sociedad cargada de contradicciones, de desigualdades, fragmentaciones

---

<sup>214</sup> Marras, Sergio (2001). *Chile, ese invisible malestar*. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.

e incluso de malestares e inseguridades culturales, económicas, sociales y políticas. Donde los “unos” y los “otros” son vistos y asumidos como una permanente amenaza. Desarrollándose poderosos miedos sociales, los cuales engendran inseguridades y la permanente exigencia de seguridad ya sea pública o privada. La exigencia proviene de todos los grupos sociales, especialmente, de los medios altos quienes consideran a los “recién llegados” como unos “igualados” como dicen en México. Por eso un aspecto central de la cosmovisión neoliberal es su apelación antiigualitaria y sobre todo, la exigencia de seguridad.

El neoliberalismo al plantear como fundamento de la sociedad: la libertad y las libertades individuales, combate de manera directa a la igualdad social. Este aspecto es otro elemento clave para entender la forma como se construyó la hegemonía cultural.

Para los intelectuales orgánicos de la “derecha democrática neoliberal” agrupados en el Centro de Estudios Públicos (CEP) o en la Universidad Diego Portales, u otros “*think thanks*”, ésta se define esencialmente por la defensa de las libertades liberales (*the liberal freedoms*). Mientras que lo que define a la “izquierda democrática” sería la defensa a ultranza de la igualdad social.<sup>215</sup>

Por eso, el liberalismo clásico en su momento originario defendía tanto la libertad como la igualdad. Prueba de ello lo tenemos en el pensamiento político elaborado por J. Locke y por E. Kant quienes ponían de manifiesto su rechazo a las jerarquías feudales y la idea de la desigualdad como un dato natural y no social. En cambio, el pensamiento político de Ludwig von Mises y de F. Hayek se oponen abiertamente a la idea de que la igualdad social sea posible en la sociedad y respaldada por el Estado.

Durante su visita a Chile, Hayek, en una entrevista concedida a Jaime Guzmán E., admite que la desigualdad es el motor indispensable de la producción capitalista: “como he sostenido otras veces, si la redistribución fuera igualitaria habría menos que redistribuir, ya que es precisamente la desigualdad de

---

<sup>215</sup> Sobre las actuales diferencias entre Izquierda y Derecha ver a Dávila, Mireya y Claudio Fuentes (2003). *Promesas de Cambio. Izquierda y Derecha en el Chile Contemporáneo*. Editorial Universitaria/FLACSO-Chile. Santiago de Chile.

ingresos la que permite el actual nivel de producción.”<sup>216</sup> Por su parte, un destacado intelectual y político de la derecha mexicana, Juan Molinar, en diversos momentos integrante de los gobiernos del conservador Partido Acción Nacional, PAN, entre 2000-2012; sostenía: “en los dos lados (derecha e izquierda) hay ideas distintas; pero en el corazón, en el núcleo de las ideas de la izquierda está el amor por la igualdad. Y en la derecha el amor a la libertad. Yo no soy enemigo –agrega– de la igualdad, pero puestos a elegir entre igualdad o libertad... me inclino por la libertad.”<sup>217</sup>

Molinar al igual que el extinto fundador de la Unión Demócrata Independiente, Jaime Guzmán E., adoptaron el credo neoliberal y, por esa razón, impugnan cualquier manifestación posible de igualitarismo social. Según Jaime Guzmán, el principal éxito del neoliberalismo fue revitalizar la propiedad privada, la libre empresa y reducir al Estado, el cual ahora “disminuye su tamaño y orienta su función redistributiva a superar la pobreza –y no una utópica igualdad– como instrumento de efectiva justicia social”. Enfatiza el impulso privatizador en “ámbitos como la educación, el mercado laboral, el sindicalismo, la seguridad social, la salud”, puntos clave y neurálgicos del neoliberalismo chileno.<sup>218</sup>

La idea hayekiana de la desigualdad como motor del capitalismo determina también el argumento de ¿Que no haya ricos o que no haya pobres? Jaime Guzmán, inspirado por José Piñera, postula que la necesaria desigualdad entre ricos y pobres, pues, es el motor del crecimiento económico y la única solución realista para eliminar la pobreza.<sup>219</sup> La alternativa, el socialismo igualitario solo conduce al empobrecimiento de la sociedad entera. Soluciones intermedias (“terceras vías”) son una ilusión

---

<sup>216</sup> Realidad, mayo de 1981, citado por Renato Cristi (2000) *El pensamiento de Jaime Guzmán* Ediciones LOM, Santiago de Chile, pp. 23-58

<sup>217</sup> Molinar, Juan (2009). “*La defensa de las libertades liberales*” en Roger Bartra (Compilador) (2009): *Gobierno, Derecha Moderna y Democracia en México*. Herder, México, pp. 91.

<sup>218</sup> Moncada Derruti, Belén (2006). *Jaime Guzmán. Una democracia contrarrevolucionaria. El político de 1964 a 1990*. RIL Editores, Santiago de Chile.

<sup>219</sup> Ministro del Trabajo y Previsión Social (1978-1980) y Ministro de Minería (1980-1981) durante la dictadura militar. Articulador de las cuatro principales modernizaciones del sistema capitalista nacional, bajo la inspiración neoliberal: la administración privada de los fondos de pensiones de los trabajadores (AFP), del sistema de salud privada (ISAPRES); Código Laboral (que estableció nuevas formas de relaciones entre el capital y el trabajo, flexibilidad laboral, el fin de la huelga y de la negociación colectiva, entre otras) y la ley de concesiones mineras, que desnacionalizó los recursos mineros y posibilitó el incremento de la inversión transnacional en el país.

y utopía. Concluye con una afirmación de temple aristocrático: “siempre el progreso se ha logrado por el fruto con que la obra de pocas eminencias cumbres se ha derramado sobre el resto del cuerpo social”. Ello implica, reconoce, “aceptar la desigualdad como dato de la Creación”. Las objeciones del liberalismo clásico a las jerarquías feudales y a la desigualdad han sido erradicadas.

El pensamiento político de Jaime Guzmán se plasma en la Declaración de Principios de la UDI. Reconoce su acápite 4 que es función indelegable del Estado “la promoción de la mayor igualdad posible de oportunidades básicas”. Pero, lo que otorga en este párrafo lo quita el acápite 6, que desconoce y cercena la función del Estado en aras de la libertad preferencial en la educación, la salud, la seguridad social y la actividad gremial. Prueba de que estamos lejos del liberalismo clásico es el acápite 27 de la Declaración, en que se lee: “frente a quienes hacen de la política una mera reivindicación de derechos, silenciando las obligaciones que le son anexas... [la] UDI se propone... respetar las jerarquías naturales en los diversos ámbitos del quehacer nacional, combatiendo la tendencia al igualitarismo rasante de las sociedades masificadas”.

En función de lo anterior, los intelectuales de la derecha neoliberal han sostenido y han transmitido, a través de los medios de comunicación, que la igualdad planteada por la izquierda neoliberal e inclusive, más aún por la izquierda social radical, es esencialmente un elemento utópico, más romántico que el de la derecha, pues el que plantea la derecha se basa en la premisa de la libertad y, por lo tanto, es más pragmático.

Para los neoliberales, los individuos solo pueden ser libres, pero necesariamente no iguales. Recordemos que para ellos la sociedad no existe. La negación de la derecha política a discutir la cuestión de la educación desde la propuesta de la igualdad a través de la gratuidad, responde a esta concepción. De allí que sea normal, políticamente hablando, que un gobierno de derecha prefiera el mérito, la responsabilidad individual y la libertad de enseñanza, ante cualquier reclamo de igualdad social. No obstante, no pueden dejar de reconocer que uno de los principales problemas provocados por el neoliberalismo ha sido la creciente desigualdad social.



Esta cosmovisión que enfatiza la libertad individual, la propiedad privada y el emprendimiento empresarial hizo mucho sentido a las nuevas capas medias que emergieron en los años del ajuste estructural como en el periodo de ampliación y crecimiento económico experimentado entre 1985 y 1998. Fundamentalmente, porque el neoliberalismo ofreció una nueva ciudadanía a las capas medias. En cuanto propone, especialmente, a la fracción más alta de ese sector, sus intereses serán mejor atendidos por un estado subsidiario y un extenso mercado y por una amplia expansión de los servicios y de los derechos sociales solventados por los ingresos y rentas obtenidos por esos sectores sociales.

De manera, entonces, que los sectores medios tuvieron razones y motivos económicos y culturales para ver con buenos ojos esa propuesta de ciudadanía. El neoliberal propone una dualidad en áreas sociales muy sensibles tales como la salud, la educación y la previsión, entre, de un lado, el espacio público, en decadencia y dirigido esencialmente a los sectores medios bajos, trabajadores y populares de bajos ingresos y, de otro lado, un sector de servicios privados en expansión, volcado a atender la demanda de la nueva clase media en ascenso. Esta dualidad reproduce las posiciones sociales privilegiadas ocupadas por las clases medias altas, asegurando de esa forma, por ejemplo, una mejor formación educacional y profesional y, sobre todo, un cierto control de la reserva de mercado de los puestos de trabajo mejor remunerados.

Lo anterior explica porqué hasta el año del bicentenario (2010) en Chile no se manifestaban movimientos sociales o acciones políticas de protestas de estos sectores sociales en contra, por ejemplo, de los precios, cada vez más altos de la educación privada o de las empresas de salud, a pesar de que los aranceles de ambos servicios pesan fuertemente en sus ingresos mensuales. No obstante, estos sectores continúan apoyando el proyecto neoliberal, fundamentalmente, a fin de mantener su posición económica y social.

Hay otro punto que se debe considerar. Además de ganar a la fracción superior de las nuevas capas medias, el neoliberalismo tuvo también un significativo impacto entre los

sectores populares. Estos fueron atraídos por el discurso y los resultados económicos y sociales del neoliberalismo. Este proceso que se da a través de mecanismos ideológicos y educativos y, a pesar de que muchos de los intereses de los sectores populares (a diferencia de lo que ocurre con las capas medias) no son atendidos por las políticas públicas neoliberales.

Ahora bien, debemos destacar otra idea central que recorre todo este trabajo: en Chile la reconstrucción tanto de la dominación como de la hegemonía tuvo dos momentos políticos: la dictadura militar (1975-1990) quien recuperó el dominio del poder e inició la instalación de la hegemonía neoliberal, pero esta se hizo dominante bajo la administración de la Concertación, que corresponde, al segundo momento (1990-2010). Las estrategias de dominación fueron desplegadas por los gobiernos concertacionistas, los que ayudaron a la instalación de una nueva hegemonía burguesa en el país, sostenida en un discurso y en una práctica relativamente exitosa del neoliberalismo.

Establecido de esta forma el problema, la conversión de la Concertación al credo neoliberal es, sin duda, un acontecimiento mayor en el proceso de instalación y consolidación de la nueva hegemonía dominante. Trasciende, por cierto, el nivel de los partidos, ya que opera sobre las propias clases sociales. La conversión de la Concertación, como también de otros grupos políticos nacionales, no fue superficial ni repentina, sino una consecuencia de la transformación ideológica y cultural de los distintos grupos sociales que se habían opuesto al gobierno popular de la Unidad Popular (1970-1973), apoyaron el Golpe de Estado de septiembre de 1973 y respaldaron la dictadura militar y a Pinochet. Tengamos presente que el dictador obtuvo, el 43% de los sufragios ciudadanos en el plebiscito sucesorio de 1988. Y, son estos sectores los que apoyaron la elección de Sebastián Piñera en enero del año 2010.

En cierta forma, la izquierda marxista o los intelectuales críticos nacionales rechazaban la idea de la existencia de la hegemonía neoliberal. Lo hacen asumiendo una perspectiva económica, pues se señala que el neoliberalismo no genera el crecimiento adecuado, concentra la riqueza, aumenta el desempleo, reduce el salario, reduce los derechos sociales y

económicos, aumenta la dependencia de la economía, impone el modelo primario exportador, etcétera. Por todas esas situaciones, el modelo supuestamente no debiera tener ningún impacto en el “mundo popular” y, sin embargo, lo tiene.

La idea no es presentar la adhesión popular al neoliberalismo como positiva y activa sino más bien distinguiendo a qué sectores sociales populares nos referimos y señalándola como una adhesión negativa, una ilusión ideológica o una determinada forma de neutralización ideológica. Esto implica pensar en un tipo de hegemonía regresiva, inestable, cuyas relaciones diferenciadas con distintos sectores populares convergen, a pesar de su heterogeneidad, en generar algún tipo de sustentación política del neoliberalismo en el medio popular.

Luego de años de dominación y de hegemonía neoliberal, la primera, como la segunda elección presidencial de Sebastián Piñera en representación de las clases dominantes neoliberales, sumado a la emergencia de un sinnúmero de contradicciones internas del proceso de acumulación neoliberal, se crearon las estructuras políticas de oportunidades para la manifestación social y política de los sectores antineoliberales, como de los distintos descontentos sociales y económicos con las formas que operan los diversos mercados nacionales, especialmente, el educativo, el de la salud y, en los últimos años, el provisional. Dando lugar a la segunda coyuntura crítica de la dominación y de la hegemonía neoliberal en la sociedad chilena.

### **Agrietando la hegemonía neoliberal**

La movilización social y política de las y los estudiantes universitarios chilenos se inscribe en una larga lucha en contra de la mercantilización de uno de los derechos humanos y sociales fundamentales, el derecho a la educación. Esta lucha se inició en los años ochenta del siglo pasado, cuando la dictadura militar entregó dicho derecho a las fuerzas del mercado, es decir, a la iniciativa privada del capital, e impuso a las y los ciudadanos nacionales la “obligación” de comprar educación, en el naciente mercado de la educación. En aquellos años, la vasta protesta estudiantil en contra de esas imposiciones se entrelazó con las masivas movilizaciones sociales y políticas por la democracia y el fin de la dictadura. La demanda estudiantil sectorial, como tantas otras, ingresó a la

gran “bolsa de demandas ciudadanas” que la dirigencia política conceptualizó como la “deuda social” legada por la dictadura a la democracia. El movimiento estudiantil ochentero reclamaba el fin de la mercantilización de la educación nacional universitaria y secundaria, la democratización efectiva de las universidades y su gratuidad. Todo lo cual implicaba la reposición del derecho a la educación en la sociedad chilena y el reconocimiento efectivo por el Estado. Al interior de las reivindicaciones del movimiento estudiantil se consideraba la demanda de la condonación o el fin de las deudas contraídas por los estudiantes a través del sistema de crédito fiscal o universitario establecido por la dictadura y administrado por las Universidades. Este sistema crediticio había transformado las “becas de estudio” tanto las “académicas” como las socioeconómicas, desde 1981/2 en créditos, que los estudiantes debían devolver una vez egresados de la Universidad. Muchos de los y las estudiantes de la década de los ochenta siguen siendo hasta el día de hoy deudores del sistema.

Los gobiernos concertacionistas (1990-2010), democráticos y, supuestamente antineoliberales, a través de un pacto político con los neoliberales autoritarios, hicieron viable la transición desde la dictadura al régimen autoritario electoral actual, mantuvieron y profundizaron la mercantilización de la educación nacional, completando de esa manera la destrucción del derecho a la educación iniciado por la dictadura militar. A lo largo de estos años el movimiento estudiantil se movilizó tanto para restaurar ese derecho como para mejorar su condición de estudiantes clientes.<sup>220</sup> La respuesta gubernamental fue, por un lado, represión policial, la cual costó la vida de un estudiante universitario en los años noventa. Y, por otro, la ampliación de un precarizado sistema de becas y diversas modalidades de sistemas de créditos para “ayudar” a los estudiantes a pagar por su educación.

Bajo el amparo institucional de los gobiernos concertacionistas, el capitalismo académico se desplegó a todo

---

<sup>220</sup> Diversas movilizaciones estudiantiles universitarias fueron realizadas durante el gobierno concertacionista del demócrata cristiano Eduardo Frei Ruiz Tagle. En una de ellas fue muerto por un disparo de las fuerzas especiales de Carabineros, el joven estudiante de la Universidad Tarapacá, Daniel Menco Prieto, el 19 de mayo de 1999. Los estudiantes protestaban por el déficit del Fondo Solidario establecido por el Estado Neoliberal, destinado a financiar los estudios superiores a estudiantes de menos recursos.

su ancho por la República instalando cerca de 40 universidades privadas y varias decenas de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica. Transformando a las universidades estatales (Universidad de Chile, Universidad de Santiago y las universidades regionales) en empresas capitalistas académicas: directamente financiadas por los estudiantes y sus familias con escasos aportes del Estado. La lógica empresarial capitalista (autosustentable) como la mercantil (vender formación académica y profesional como también servicios) transformó a la educación superior en una de las "industrias emergentes" más lucrativas y rentables de la sociedad neoliberal chilena.<sup>221</sup>

La expansión de esta particular y específica empresa capitalista ha sido vertiginosa, amplia y arrolladora. Se ha extendido por todo el país involucrando a cientos de miles de estudiantes, profesores, académicos, profesionales, trabajadores, etcétera. La cobertura, por ejemplo, o sea, el número de clientes atendidos aumentó entre el año 2006 y 2010 en un 100%. Actualmente, el sistema educativo superior concentra cerca de un millón de estudiantes-clientes. Las utilidades obtenidas por la mayoría de las empresas-universitarias han sido millonarias. En un cálculo muy simple y básico, tan solo como botón de muestra, si cada uno de los estudiantes en el sistema paga por adquirir un título profesional, en promedio, aproximadamente 300 dólares mensuales, estamos diciendo que el sistema reporta más o menos 300 millones de dólares mensuales y, por ende, 3 mil millones de dólares anuales<sup>222</sup>, tan solo por concepto de aranceles. El capitalismo académico es, sin mucha discusión, altamente rentable para todos los que participan en el sistema. De acuerdo con una información periodística, según datos proporcionados por el Ministerio de Educación, la mayoría de las universidades públicas, así como las privadas obtuvieron utilidades durante el año 2009.<sup>223</sup>

---

<sup>221</sup> Cfr. María Olivia Mönckeberg. (2007). *El Negocio de las Universidades en Chile*. Debate, Santiago de Chile..

<sup>222</sup> El año académico en Chile contempla 10 meses.

<sup>223</sup> El ranking lo encabeza la Universidad Tecnológica de Chile, cuyos "dueños" son los empresarios agrupados en la Confederación de la Producción y el Comercio, que obtuvo 17.329 millones de pesos, es decir, 34 millones de dólares. Entre las Universidades del Consejo de Rectores de Chile, públicas y privadas tradicionales, quien obtiene mayores utilidades es la Pontificia Universidad Católica de Chile, con 20 millones de dólares. Mientras que la Universidad de Chile, 7,8 millones de dólares.

Son estas cifras lo que explica la acérrima defensa de este lucrativo mercado por parte del emergente “empresariado académico” nacional. Éste está conformado por una extensa red social y política, en la que participan distintos grupos económicos empresariales y sociales tanto nacionales como internacionales. A los cuales se han incorporado de manera activa la “clase política y dirigente”, vinculada a los partidos políticos con o sin representación parlamentaria. Por ello, es habitual encontrar en los directorios de estas instituciones a exsenadores, exdiputados, a exministros y exsubsecretarios de Estado, dirigentes políticos y diversos integrantes de las dirigencias centrales de los partidos políticos activos o en retiro. La participación en este especial y relevante grupo se hace en la calidad de dueños directos como directores en las diversas corporaciones universitarias, institutos profesionales, centros de formación técnica públicos o privados.

Podríamos sostener que en el manejo y gestión de la educación superior como también secundaria y básica, están presentes transversalmente los integrantes de la élite empresarial y política, así como de la élite social y cultural de la sociedad civil chilena. Los cuales expresan allí sus diversos intereses económicos, políticos, ideológicos y académicos en torno a la educación. Al hacer una radiografía sobre quiénes son los que controlan el mercado educativo nacional se observaría que todos los principales actores sociales e instituciones, desde las iglesias, instituciones armadas, corporaciones gremiales hasta los partidos políticos, tienen una o más universidades, diversos institutos profesionales y centros de formación técnica o escuelas básicas, medias. Todos ellos venden educación, más allá de si sus instituciones educacionales tienen fines de lucro o no.

Por esta razón, se podría perfectamente afirmar que las y los estudiantes universitarios como las y los ciudadanos que los acompañan no solo se han rebelado ante el funcionamiento del mercado educativo superior sino también en contra las actuales estructuras de poder político, social y económico predominante en la sociedad neoliberal chilena.<sup>224</sup>

---

<sup>224</sup> Hemos desarrollado la hipótesis de que nos encontramos asistiendo a una efectiva rebelión política y social en la sociedad neoliberal chilena, en nuestro trabajo *Agrietando al capitalismo neoliberal. La rebelión social y política juvenil, estudiantil y ciudadana*, Chile 2011.

El análisis de la estructura económica y financiera del mercado educativo superior nos indica que su composición interna sufrió una significativa modificación en el año 2005 cuando el gobierno concertacionista del socialista neoliberal Ricardo Lagos y su Ministro de Educación Sergio Bitar promulgaron la Ley 20.027 que estableció el Crédito con Aval del Estado (CAE). Con dicha medida, eminentemente financiera y por ende desligada de todo sentido social, abrieron las puertas de la educación, por un lado, al sistema bancario nacional y, por otro, a miles y miles de jóvenes, quienes, por medio del endeudamiento bancario, podrían cumplir su “sueño” de alcanzar una profesión universitaria.

En consecuencia, gracias a la “financiarización”<sup>225</sup> del mercado educativo la masa de ciudadanos-estudiantes en calidad de clientes-usuarios, creció de manera explosiva. Además, con el ingreso del sistema financiero bancario nacional con respaldo estatal se hizo posible la “educación para todos”. Ciertamente, para todos aquellos que podían o querían o se veían en la obligación de endeudarse para adquirir un título profesional técnico o universitario, en otras palabras, comprar a crédito educación, como se hace con cualquier otra mercancía que se vende en la sociedad chilena. La educación pasó a ser -como bien lo señaló el presidente Sebastián Piñera-, “un bien de consumo”<sup>226</sup> y no un

---

<sup>225</sup> Utilizamos el concepto de financiarización en el sentido que le otorga el economista Claudio Lara Cortés, Auge de la Financiarización y Estancamiento de la Economía chilena, en *Economía Crítica & Desarrollo*, Año 1, N°2, Semestre II, 2002. Se entiende por tal la tendencia de las grandes empresas (o grupos económicos) a colocar cada vez más recursos en activos financieros en lugar de invertir en el sector productivo, en el caso que nos ocupa, en colocar activos financieros en el ámbito de los servicios educacionales, vía la banca.

<sup>226</sup> El 19 de julio, el presidente Sebastián Piñera, declaró que la “educación es un bien de consumo” como también de “inversión”. Expresando abiertamente la idea fuerza que posee el gobierno con relación a la educación. Como es sabido, para el neoliberalismo, la educación es un gasto, un consumo, una inversión. Por lo tanto, se debe pagar por ella, sobre todo porque se trata de un producto que beneficia al individuo. Si el individuo no puede pagar inmediatamente, debe acceder a un crédito. Si no puede acceder a un crédito, se le debe ayudar a conseguirlo, y posteriormente apoyar, para que lo pague. Pero se debe pagar, pues en principio es un bien de consumo. En ese sentido, la educación es un capital, el conocimiento es un capital, el saber es un capital. La educación representa hoy un gasto que producirá mañana un suplemento de riqueza y de bienestar. Queda entonces claro que para el pensamiento neoliberal la educación nunca podría ser un bien de consumo gratuito. Para muchos, como por ejemplo el director de la Escuela de Educación General Básica de la Universidad de Santiago de Chile, Jaime Retamal Salazar, “la educación de calidad en Chile es un bien de consumo caro, y que sólo puede ser adquirida mediante una fuerte inversión. Eso no se discute”, en [http://blog.latercera.com/blog/jretamal/entry/la\\_educaci%C3%B3n\\_es\\_un\\_bien](http://blog.latercera.com/blog/jretamal/entry/la_educaci%C3%B3n_es_un_bien), visitado el 20 de octubre.

derecho ni un bien público, sino una particular mercancía.<sup>227</sup>

Al cabo de un lustro de haberse establecido la “financiarización” en el mercado educativo los “clientes-estudiantes usuarios” percibieron que tanto el servicio como la calidad de este no tenían relación con los altos niveles de endeudamiento, por un lado, ni con los valores cobrados por las instituciones, por otro. Y, tal vez, lo más grave desde el punto de vista académico-laboral, era que los títulos profesionales adquiridos no los habilitaban para incorporarse al mercado laboral ni a ningún otro mercado existente en la sociedad neoliberal. El problema era que miles de jóvenes adquirían títulos profesionales y grados académicos profundamente devaluados. Aquellos que lograban terminar la educación superior se encontraban al cabo de dos, tres o cuatro años de estudios, endeudados con la banca nacional y, lo peor de todo, en la calidad de cesantes semi-ilustrados (la tasa de cesantía a nivel juvenil en Chile es la más alta de la fuerza de trabajo nacional, según las estadísticas gubernamentales, ésta alcanzaría alrededor del 19%). Ante este escenario profundamente adverso y desconcertante las y los jóvenes estudiantes, especialmente los universitarios, salieron a las calles a manifestar su malestar e indignación contra el mercado educativo superior. Desatándose una nueva batalla por la educación.

En las calles de las principales ciudades del país, los estudiantes universitarios principalmente de las universidades públicas se encontraron en los primeros meses con los estudiantes de las universidades privadas y de otras instituciones de la educación superior, pero también con la masiva y bullanguera presencia de las y los estudiantes secundarios. El movimiento estudiantil universitario se transformó en una multitudinaria y colectiva acción social y política de la juventud chilena en contra del mercado educativo y contra del sistema político neoliberal. La protesta de los jóvenes al correr de los meses adquirió tintes de rebelión social y política.

---

<sup>227</sup> Una interesante y oportuna discusión en torno a la condición de “mercancía” de la educación es el artículo del economista Yemil Harcha Raffachelo (2011), *Reflexiones sobre el lucro en la Educación*, Magíster en Economía, Escuela Latinoamericana de Posgrado, EIAP-Universidad ARCIS, septiembre 2011.



La potencia política y social de esta rebelión juvenil y estudiantil con sus masivas marchas, ocupaciones de establecimiento y, sobre todo, con su radical crítica al sistema educativo nacional abrió la estructura oportunidades políticas para que se incorporaran a la rebelión activamente miles y miles de ciudadanos antineoliberales.

En efecto, los ciudadanos “subpolíticos” antineoliberales que desde la instalación del sistema político democrático autoritario han estado trabajando y haciendo política social en sus márgenes institucionales, irrumpieron y se sumaron con sus históricas demandas a la movilización estudiantil, ampliando la base social y política de la rebelión juvenil. De esa forma, la movilización estudiantil en un lapso corto de tiempo se transformó en un masivo movimiento social y político ciudadano de orientación antineoliberal.<sup>228</sup>

Lo que convoca transversalmente a este movimiento ciudadano antineoliberal es, fundamentalmente, la reposición en la sociedad chilena, en primer lugar y, tal vez, ante todo, del derecho a la educación y, en segundo lugar, la refundación de la política democrática. Ambas cuestiones constituyen demandas radicales que prometen alterar completamente la forma como se ha organizado la sociedad chilena en los últimos 30 años. Es esta condición la que nos permite sostener el carácter de rebelión de la actual movilización ciudadana.

Para el movimiento, la reposición política y ciudadana del derecho a la educación es primordial. Por esa razón, considera que dicho derecho debe estar en el centro de las preocupaciones políticas y sociales no solo del Estado, como fue durante el siglo pasado, sino esencialmente de la sociedad civil, o sea, de las y los ciudadanos. *No se trata de estatizarlo sino de ciudadanizarlo.* La ciudadanización

---

<sup>228</sup> He sostenido en diversos trabajos en donde analizo la fragmentación de la ciudadanía en las sociedades neoliberales avanzadas, la existencia de diferentes tipos o formas de ciudadanía. Una de ella es la ciudadanía de las y los subpolíticos, los cuales se caracterizan por ser profundamente críticos con la forma institucional que adquirió la democracia pos-dictadura, se plantean alternativos y antineoliberales, defensores del medio ambiente, pro-democracia social participativa, por lo general, aunque no es una condición necesaria para asumir este tipo de ciudadanía son abstencionistas electorales. Para más información sobre este tema consúltese mi libro: *Política, Ciudadanía y Democracia en una sociedad neoliberal, Chile 1990-2010*. Editorial UARCIS-CLACSO, Santiago de Chile, 2010.

de este derecho implica que quienes se hacen cargo de él son los propios ciudadanos, los cuales de manera colectiva “mandatan” al Estado, a través de un régimen político democrático participativo, a hacerse cargo de la operativa que implica su implementación. En esta dimensión, el movimiento ciudadano en su vertiente popular se plantea asumir la responsabilidad de la educación en sus propias manos. Este es un punto profundamente innovador de algunos sectores políticos que integran y participan en el movimiento, ante la tradicional y desgastada apelación estatista.

Ahora bien, la demanda por una educación gratuita y social y estatalmente garantizada evidentemente debe ser asumida por una nueva forma estatal. Tanto la actual forma estatal neoliberal como el régimen de democracia protegida existente no pueden hacerlo. Como lo han expresado los defensores del neoliberalismo, es políticamente imposible implementar una educación pública gratuita desde la preescolar hasta la superior, pues sería contrario a todos sus planteamientos políticos y, sobre todo, económicos.<sup>229</sup> La única forma que queda al movimiento es lograr la reestructuración integral del sistema educativo nacional. Ello implica, en otras palabras, el fin del mercado de la educación en Chile.

La demanda por gratuidad está siendo ampliamente discutida y analizada por los distintos actores políticos y sociales del país. Diversas argumentaciones han sido construidas tanto por aquellos que se le oponen como por los que están a su favor. Sin embargo, la discusión política entorno a este punto tiene inmovilizado tanto al gobierno del Presidente Sebastián Piñera como al movimiento juvenil, estudiantil y ciudadano. Podríamos sostener que el conflicto se encuentra en empate. La posición del gobierno y de los actores políticos y sociales ligados al empresariado del capitalismo académico sostiene que establecer la gratuidad del derecho a la educación es imposible en Chile. El propio presidente Sebastián Piñera ha cerrado completamente esa posibilidad al señalar que Chile no puede ofrecer ese sistema. Pues el gobierno, *“no ha asumido la causa de educación gratuita por dos razones. Primero, porque Chile no está posibilitado de*

---

<sup>229</sup> Así lo ha expresado, por ejemplo, el exministro de Estado del gobierno de Sebastián Piñera, Felipe Morandé, quien, en sus Reflexiones neoliberales sobre el debate educacional, sostiene que la mejor fórmula para superar la crisis del sistema educativo actual es más y más neoliberalismo. Cfr. La Tercera, Sábado 22 de octubre de 2011, pág. 74.

*alcanzar esa meta. Pero, en segundo lugar, porque no es justo que con los impuestos que pagan los más pobres de nuestro país estemos financiando la educación de los más ricos”.*

El camino para enfrentar la demanda estudiantil y ciudadana por parte del gobierno de derecha ha sido similar al seguido por los cuatro gobiernos concertacionistas en el pasado reciente: reforzar la entrega de becas. Y, en ese sentido, el anuncio de la generación de un sistema de becas que buscará financiar al 40 por ciento de los hogares más pobres del país continuará la misma política pública construida por la dictadura y la concertación. No hay novedad en el ofrecimiento. Lo mismo ocurre con el otorgamiento de créditos para los otros grupos socioeconómicos. El fundamento de esta política se encuentra en las declaraciones del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien también planteó que sería injusto entregar educación gratuita para todos los estudiantes y que, además, el país no está en condiciones de cubrir esa demanda. Esta fundamentación ha sido asumida y respaldada por otros sectores políticos ligados a la Concertación de Partidos Políticos por Democracia como también por algunos sectores de la izquierda nacional. Con la idea de rechazar la gratuidad para todos, incluso para los sectores con mayores ingresos, todos están aceptando que la educación siga siendo “vendida” en el mercado educacional y siga siendo comprada por las y los ciudadanos interesados en obtenerla. Bajo el equivocado principio de que no se debe financiar la educación de aquellos que pueden pagarla, se busca mantener un sistema altamente lucrativo para el capital privado, pero profundamente injusto e incluso inhumano para el resto de los ciudadanos que deben realizar enormes esfuerzos materiales para comprar un título profesional.

Establecer la gratuidad de la educación supone terminar con el capitalismo académico, implica en lo sustantivo no la desaparición del sistema privado educativo, pero sí su reducción significativa. A nivel de la educación superior universitaria, implicaría el fortalecimiento de las universidades públicas, específicamente, las estatales. Estas debieran abrir sus puertas a todos los jóvenes que egresen de la Enseñanza Media. Por tanto, abolir los odiosos sistemas de selección y discriminación actualmente existentes. La Universidad de Chile y la Universidad de Santiago de Chile debieran volverse universidades nacionales

dispuestas a recibir jóvenes provenientes de todos los estratos socioeconómicos. Debiera fundarse el Instituto Nacional de Formación Superior Técnica y Profesional, que atendiera a todos aquellos jóvenes interesados en obtener una profesión técnica profesional no universitaria.

Todo este sistema de educación pública-ciudadana debiera ser sostenido por la sociedad civil, o sea, en otras palabras, por la ciudadanía, a través de un sistema no competitivo y lucrativo como el actual, si no de carácter fraternal y solidario. Para tal efecto, los que tienen más deben ayudar a los que tienen menos y para que ello ocurra se requiere de una reforma tributaria profunda que permita obtener los recursos necesarios para financiar un derecho humano que es considerado por todos como fundamental. Por esa razón, ética y política, debe ser rescatado de las manos (in)visibles del mercado capitalista neoliberal. Por otro lado, debiera también establecerse constitucionalmente que ninguna institución universitaria, media o básica debiera cobrar por ofrecer educación.

La batalla por la educación sigue su curso, las posiciones de los principales actores sociales y políticos involucrados se mantienen tal como se plantearon hace cinco meses atrás. Sin embargo, la dominación y la hegemonía capitalista neoliberal en Chile ha comenzado a agrietarse.

Evidentemente que para superar y transformar la sociedad neoliberal se requieren muchas más grietas. Se necesitan de más y más ciudadanas y ciudadanos en las calles que estén dispuestos a cambiar total y radicalmente las actuales estructuras del poder político, económico y social. En otras palabras, hay que abrir las grandes alamedas no solo para que pasen las masivas y lúdicas marchas juveniles sino para darle paso a todos los hombres y mujeres dispuestos a hacer posible el cambio revolucionario ciudadano.

De no producirse esa acción histórica, la batalla por la educación quedará encerrada en los estrechos espacios del conflicto tan propio de las sociedades neoliberales, o sea, entre el Estado, el Mercado y la Sociedad Civil. Como ya sabemos, cuando esto ocurre, los únicos ganadores son el Mercado y el Estado. La Sociedad Civil ha sido permanentemente derrotada.







El Centro de Investigación en Procesos Políticos y Sociales de América Latina (CIPPSAL) y la Editorial Escaparate presentan el Tomo II de la trilogía destinada a estudiar, analizar y describir la sociedad neoliberal chilena.

En efecto, *La Sociedad Neoliberal en los Tiempos del Bicentenario, Chile 2010-2018*, mantiene la estructura y la fisonomía del Tomo I tanto los objetivos centrales del programa de investigación como la perspectiva analítica, los cuales inscriben en el pensamiento crítico que interrelaciona la politología con la historia y la sociología en un análisis sincrónico y diacrónico que dilucida y esclarece la historia reciente del país.

El texto es una invitación para todas y todos aquellos ciudadanos que hoy a meses de cerrada la coyuntura crítica de octubre 2019 en diciembre 2023, se preguntan por qué la dominación neoliberal sigue vigente. En él no van a encontrar repuestas categóricas sino diversas pistas, hipótesis y antecedentes históricos, políticos y sociológicos que explican esa interrogante y, al mismo tiempo, proporcionan herramientas y materiales necesarios para comenzar a construir el proyecto político e histórico que nos permita salir de este agobiante y miserable presente político para construir futuro.

**JUAN CARLOS GÓMEZ LEYTON**  
**DIRECTOR ACADÉMICO CIPPSAL**

